

Distr. general
7 de marzo de 2023

Original: español

Consejo de Derechos Humanos

52° período de sesiones

27 de febrero al 31 de marzo de 2023

Tema 2 de la agenda

Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del
Alto Comisionado y del Secretario General

**Conclusiones detalladas del Grupo de Expertos en Derechos
Humanos sobre Nicaragua**

Índice

Página

Parte I: Introducción y marco contextual.....	5
I. Marco de referencia	5
A. Introducción	5
B. Mandato	6
1. Orígenes del mandato	6
2. Interpretación del mandato.....	7
C. Cooperación	9
1. Falta de cooperación del Estado de Nicaragua	9
2. Cooperación con otras partes interesadas	11
D. Metodología de trabajo y estándar de prueba	12
1. Enfoque centrado en las víctimas	12
2. Integración de la perspectiva de género en el trabajo del GHREN	13
3. Estándar de prueba.....	13
4. Metodología de investigación.....	15
E. Marco jurídico.....	17
1. Derecho Internacional de los Derechos Humanos	17
2. Derecho Internacional Penal	19
II. Antecedentes y contexto	22
A. El desmantelamiento del Estado democrático y de Derecho	22
1. El pacto Alemán–Ortega.....	22
2. Segundo gobierno de Daniel Ortega: 2007–2012.....	24
3. Tercer Gobierno de Daniel Ortega: 2012–2017.....	27
4. Confusión entre el Estado y el partido, lo estatal y lo paraestatal.....	30
B. Marco institucional	31
1. Los poderes del Estado.....	31
2. Otras instituciones relevantes	39
3. La independencia de jueces y fiscales.....	41
C. Marco de seguridad.....	43
1. Antecedentes y evolución de las fuerzas de seguridad del Estado... ..	43
2. Instituciones de seguridad del Estado... ..	46
3. Grupos armados pro-gobierno y otros mecanismos de control.....	51
D. La situación de los derechos humanos previa a 2018	57
1. Ejecuciones extrajudiciales	57
2. Detenciones arbitrarias.....	58
3. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes... ..	59
4. Condiciones de detención.....	61
5. Derecho a la protesta pacífica.....	62

6.	La situación de las personas defensoras de derechos humanos	62
E.	Cronología de los principales eventos (abril de 2022–18 de febrero de 2023).....	64
1.	Abril a septiembre de 2018: estallido de la protesta social y de la represión.....	64
2.	Junio a septiembre de 2018: la “Operación Limpieza”	65
3.	Agosto a diciembre de 2018: persecución de la sociedad civil.....	66
4.	Febrero de 2019 a febrero de 2020: nueva fase de diálogo y primeras excarcelaciones .	67
5.	Marzo de 2020 a abril de 2021: estallido del COVID–19 y aprobación de leyes represivas	67
6.	Mayo a diciembre de 2021: elecciones presidenciales y criminalización de la oposición política	68
7.	Enero 2022 a la fecha de redacción de este informe: cierre total del espacio cívico y democrático... ..	68
Parte II:	Hallazgos	71
III.	Violaciones de derechos humanos	71
A.	Ejecuciones extrajudiciales	71
1.	Marco normativo	71
2.	Contexto de las privaciones arbitrarias de la vida.....	73
3.	Perfiles de las víctimas.....	76
4.	Patrones.....	80
B.	Violaciones sistemáticas de otros derechos civiles y políticos	114
1.	Marco jurídico.....	116
2.	Perfiles de las víctimas.....	125
3.	Patrones.....	127
4.	Impactos sobre el espacio cívico y democrático.....	190
C.	Dimensiones de género	209
1.	Elementos de contexto	210
2.	Ejecuciones extrajudiciales	213
3.	Detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes	215
4.	Cierre del espacio cívico y democrático.....	217
5.	El impacto de la represión sobre las mujeres y su entorno.....	221
IV.	Crímenes de lesa humanidad	224
A.	Naturaleza de la norma	224
B.	Tipo internacional penal.....	226
C.	Ataque generalizado o sistemático contra una población civil	228
1.	Colectividad victimizada (“población civil”).....	228
2.	“Ataque”	231
3.	“Sistemático o generalizado”	236
D.	Actos prohibidos.....	241
1.	Asesinato	242
2.	Deportación.....	244
3.	Encarcelación	251

4.	Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes	254
5.	Persecución	259
E.	Participación y conocimiento del ataque.....	270
V.	Responsabilidad y acceso a la justicia.....	273
A.	Presidente, Vicepresidenta y principales instituciones del Estado.....	273
1.	Daniel Ortega y Rosario Murillo	274
2.	Poderes del Estado.....	277
3.	Otras autoridades públicas	279
4.	Grupos armados pro-gobierno.....	284
B.	Responsabilidad del Estado.....	285
C.	Responsabilidad penal individual	287
D.	Acceso a la justicia en terceros países.....	288
VI.	Recomendaciones	289
Anexo	291
	Anexo 1: Línea legislativa en materia de seguridad y defensa	291
	Anexo 2: Organigrama del Ejército de Nicaragua	301
	Anexo 3: Organigrama de la Policía Nacional de Nicaragua	302

Parte I: Introducción y marco contextual

I. Marco de referencia

A. Introducción

1. El 31 de marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 49/3 sobre la “promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”, estableciendo el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (en adelante “el Grupo” o “el GHREN”, por sus siglas en inglés) por un periodo inicial de un año.
2. El 24 de mayo de 2022, el Presidente del Consejo de Derechos Humanos nombró a Jan-Michael Simon de Alemania, Ángela María Buitrago de Colombia y Alexandro Álvarez de Chile como miembros independientes del GHREN. El Señor Simon fue designado como presidente del Grupo. El 31 de enero de 2023, el Señor Álvarez renunció a su rol como experto del Grupo. En consecuencia, el Presente informe se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos por el Señor Simon y la Señora Buitrago.
3. Los miembros del Grupo actuaron en calidad de expertos independientes, no remunerados, con el apoyo de un secretariado conformado por funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en la Ciudad de Panamá. El secretariado estuvo integrado por una coordinadora, un oficial de protección de víctimas, tres investigadoras de derechos humanos, un asesor legal, una asesora de género, una funcionaria de presentación de informes y una funcionaria administrativa.¹
4. Mediante el párrafo 15 de la resolución 49/3, el Consejo de Derechos Humanos solicitó al Grupo que presente un informe escrito al Consejo en su 52º período de sesiones durante un diálogo interactivo. En este primer periodo, el GHREN elaboró dos informes, el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/52/63) y el presente documento de sesión ampliado, en el que se desarrollan de manera más detallada la investigación de los hechos, el análisis y las conclusiones que figuran en el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos.
5. El GHREN enfrentó varios obstáculos durante la investigación, entre ellas la falta de cooperación de las autoridades de Nicaragua, la falta de acceso a documentación y datos oficiales, la imposibilidad de acceder al país, y la preocupación por la protección de las víctimas, las y los testigos y otras fuentes que cooperaron con el GHREN. En particular, el Grupo expresa su preocupación ante la reciente escalada de la persecución contra las personas opositoras o percibidas como tales, y las alegaciones recibidas sobre ataques y hostigamiento por parte de individuos presuntamente ligados al Gobierno de Nicaragua a víctimas, familiares de víctimas, activistas y personas defensoras de derechos humanos nicaragüenses residentes en Nicaragua y en el extranjero.
6. A pesar de los retos mencionados, el GHREN pudo recabar la información necesaria para establecer los hechos y las circunstancias, y reunir, consolidar, preservar y analizar información y pruebas de conformidad con su mandato. A través de su investigación, el GHREN ha identificado incidentes específicos y patrones de conducta que proporcionan motivos razonables para creer que en Nicaragua se han cometido violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y delitos conforme al Derecho Internacional Penal.²

¹ La coordinadora del secretariado se incorporó en julio de 2022, mientras que el equipo quedó constituido y operativo a mediados de septiembre de 2022. También se contó con el apoyo de un oficial de información pública durante los últimos tres meses del mandato.

² La terminología en español adoptada aquí es de “Derecho Internacional Penal” (DIP) y no de “Derecho Penal Internacional”, debido a que los crímenes de derecho internacional son conductas tipificadas como delitos según el derecho internacional, en el sentido de que el derecho internacional define sus

B. Mandato

Orígenes del mandato

7. A partir de su 40º período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una serie de resoluciones respecto a la situación de derechos humanos en la República de Nicaragua bajo el tema 2 de su agenda. En estas resoluciones, el Consejo expresó su gran preocupación por las continuas denuncias de graves violaciones de los derechos humanos³ e instó al Gobierno de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de combate a la impunidad y rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos.⁴

8. También desde su 40º período de sesiones, el Consejo solicitó a ACNUDH presentar informes y actualizaciones periódicas sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Los informes presentados por ACNUDH señalaron, entre otras, la falla en investigar, identificar, procesar y sancionar adecuadamente a los presuntos responsables de las muertes de personas en el contexto de las protestas,⁵ la falta de voluntad de garantizar la rendición de cuentas, la consolidación de la impunidad para los perpetradores de violaciones de los derechos humanos,⁶ y afirmaron que dicha impunidad ha dado lugar a la reiteración de violaciones de derechos humanos en Nicaragua.⁷ En su informe para el 49º período de sesiones del Consejo, ACNUDH recomendó al mismo considerar medidas adicionales para reforzar la rendición de cuentas por graves violaciones de los derechos humanos.⁸ Ya en su primer informe de 2018, ACNUDH había recomendado al Consejo y a la comunidad internacional la creación de una Comisión Internacional de Investigación o una Comisión de la Verdad híbrida (nacional–internacional).⁹ Varias organizaciones nicaragüenses e internacionales de la sociedad civil, entre ellas organizaciones de víctimas, también solicitaron al Consejo la creación de un mecanismo de investigación.¹⁰

9. La creación del GHREN también debe considerarse teniendo en cuenta el continuo incumplimiento por Nicaragua de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, la negativa a cooperar con los mecanismos especiales del Consejo y los órganos de tratados, la decisión de interrumpir su colaboración con los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, y la denuncia de los instrumentos regionales.¹¹

elementos y prohíbe directamente su perpetración independientemente de que dichas conductas hayan sido tipificadas como delitos en el derecho nacional (véase Comentarios núm. 18–19 al párrafo 1 del artículo 7 de la Comisión de Derecho Internacional (CDI), Proyecto de artículos sobre inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado, 73er período de sesiones (18 de abril a 3 de junio y 4 de julio a 5 de agosto de 2022), A/77/10, Suplemento No. 10, párr. 69). Representan actos universalmente reconocidos como criminales que son considerados un asunto grave de interés internacional el cual, por cierta razón válida, no puede dejarse dentro de la jurisdicción exclusiva del Estado que tendría el control sobre ella en circunstancias ordinarias (US v. Wilhelm List et al., caso núm. 7, Judgment, 19 de febrero de 1948, en United Nations War Crimes Commission, Law Reports of Trials of War Criminals, vol. VIII, caso núm. 47, H.M.S.O., London 1949, 34–76, p. 54), y cuyos elementos deben ser considerados cuidadosamente a la luz de la jurisdicción que un Tribunal o una Corte internacional esté ejerciendo, y de la definición contenida en su base jurídica (véase Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), *Prosecutor v. Milomir Stakić*, causa núm. IT-97-24-T, Judgment, 31 de julio de 2003 (*Stakić*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 413, señalando que las normas establecidas en los artículos 2 a 5 de su Estatuto deben ser interpretadas en función de sus propios antecedentes históricos y contextuales).

³ A/HRC/RES/40/2, párr. 1; A/HRC/RES/43/2, párr. 1; A/HRC/RES/46/2, párr. 1.

⁴ A/HRC/RES/40/2, párr. 7; A/HRC/RES/43/2, párr. 7; A/HRC/RES/46/2, párr. 14.

⁵ ACNUDH, Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua: 18 de abril–18 de agosto de 2018 (2018) (en adelante “Informe 2018”), disponible en: https://www.ACNUDH.org/wp-content/uploads/2021/12/Nicaragua-Report-FINAL_SP.pdf, párr. 114.

⁶ A/HRC/42/18, párr. 60.

⁷ A/HRC/46/21, párr. 65.

⁸ A/HRC/49/23, párr. 68(b).

⁹ ACNUDH, Informe 2018, párr. 119(15).

¹⁰ Véase <https://www.mecanismoparanicaragua.org/qui%3%A9nes-somos>.

¹¹ A/HRC/RES/49/3, preámbulo, párrs. 6–8.

Interpretación del mandato

10. Según el párrafo 14 de la resolución 49/3, el GHREN debe:

a) Empezar investigaciones exhaustivas e independientes de todos los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, en particular las posibles dimensiones de género de esos abusos y violaciones, y sus causas estructurales profundas;

b) Establecer los hechos y las circunstancias relativos a los presuntos abusos y violaciones, reunir, consolidar, preservar y analizar información y pruebas y, de ser posible, identificar a los responsables, y hacer que esa información sea accesible y pueda utilizarse en apoyo de las iniciativas actuales y futuras de rendición de cuentas;

c) Formular recomendaciones con vistas a mejorar la situación de los derechos humanos, prestar asesoramiento sobre el acceso a la justicia y la rendición de cuentas, según proceda, y asegurar un enfoque centrado en las víctimas, incluso abordando los efectos de las formas múltiples e interseccionales de discriminación;

d) Colaborar con todas las partes interesadas pertinentes, incluidos el Gobierno de Nicaragua, la Oficina del Alto Comisionado, las organizaciones internacionales de derechos humanos, los organismos pertinentes de las Naciones Unidas y la sociedad civil, con objeto de intercambiar información, según proceda, y prestar apoyo a las iniciativas nacionales, regionales e internacionales para promover la rendición de cuentas por los abusos y violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.¹²

a) *Alcance material (ratione materiae)*

11. De acuerdo con la resolución 49/3, el GHREN debe “[e]mpezar investigaciones exhaustivas e independientes de todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos”. Así, el GHREN investigó tanto las vulneraciones gubernamentales de derechos garantizados por normas nacionales, regionales o internacionales sobre los derechos humanos, como los actos u omisiones imputables al Estado que suponen el incumplimiento de obligaciones derivadas de normas de derechos humanos.¹³ El GHREN también investigó las transgresiones de derechos que se consideran vinculantes respecto de algunos agentes no estatales, o que, como mínimo, determinan la responsabilidad del Estado de prevenir la comisión de abusos por particulares.¹⁴

12. En atención a su mandato y en consonancia con las mejores prácticas sobre la integración de la perspectiva de género en las investigaciones de derechos humanos,¹⁵ el GHREN ha dedicado una atención específica a las cuestiones de género y al impacto de las violaciones y abusos. En sus investigaciones, centró su atención en la violencia contra mujeres e incluyó en su informe la dimensión de género en todas las violaciones y abusos analizados.¹⁶ La violencia contra mujeres, en particular la violencia sexual, resultó ser difícil de documentar debido al estigma que aún pesa sobre las víctimas. El GHREN considera que su investigación puede haber captado sólo parcialmente el alcance de las violaciones y abusos correspondientes.

13. El GHREN consideró que el objeto y la finalidad del mandato recibido del Consejo de Derechos Humanos es uno de “rendición de cuentas” y que el objetivo último de sus investigaciones es la determinación de la existencia o no de violaciones graves al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, particularmente, de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. Conforme a la práctica de

¹² HRC/RES/49/3, párr. 14(a)–(d).

¹³ Véase ACNUDH, Manual de capacitación para la fiscalización de los derechos humanos, HR/P/PT/7 (2001), párr. 31.

¹⁴ *Ibid.*, párr. 27.

¹⁵ Integración de la Perspectiva de Género en las Investigaciones en Derechos Humanos, Guía y práctica, HR/PUB/18/4 (2018).

¹⁶ Véase infra Capítulo III.C.

otras investigaciones internacionales mandatadas por el Consejo de Derechos Humanos, el GHREN entendió su mandato de rendición de cuentas en el sentido de contribuir a hacer efectivas las posibles responsabilidades legales derivadas de graves violaciones del derecho internacional. Esto incluye tanto las responsabilidades del Estado como las posibles responsabilidades penales a título individual.¹⁷

14. En vista de la amplitud del mandato y de los escasos recursos para cumplir con el plazo de que se dispone para ejecutarlo, el presente informe no puede ofrecer un registro exhaustivo de todos los eventos ocurridos y presuntas violaciones y abusos a los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018. El GHREN decidió centrarse en las violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los abusos más graves, en particular, los que pueden constituir crímenes de derecho internacional, en caso de la presencia de un elemento subjetivo y un modo de responsabilidad individual bajo el derecho internacional.¹⁸ El GHREN se ha centrado en destacar algunos casos y acontecimientos emblemáticos, además del contexto que los convierte en objeto de preocupación internacional para la rendición de cuentas. Se priorizó así la investigación de las violaciones al derecho a la vida, a la libertad y al debido proceso, a la integridad física y moral, al derecho a participar en los asuntos públicos y a las libertades de opinión y expresión, de asociación, de reunión pacífica, y de pensamiento, conciencia y religión. También se documentaron los graves impactos de las violaciones y abusos priorizados sobre otros derechos, incluyendo el derecho a la libre circulación, a salir de cualquier país y a regresar a su país, el derecho a la nacionalidad y el derecho a la vida familiar, entre otros.

b) *Alcance personal (ratione personae)*

15. Los párrafos 14(b) y 14(d) de la resolución 49/3 establecen que el GHREN deberá investigar “y, de ser posible, identificar a las personas responsables, y hacer que esa información sea accesible y pueda utilizarse en las iniciativas actuales y futuras de rendición de cuentas; [...] y prestar apoyo a las iniciativas nacionales, regionales e internacionales para promover la rendición de cuentas por las violaciones y abusos de derechos humanos”.

16. Conforme a la dualidad de la responsabilidad, el GHREN distingue entre la responsabilidad en materia de derechos humanos y en materia de crímenes de derecho internacional penal. En cuanto a la última, el GHREN ha tratado, en la medida de lo posible, identificar a las personas presuntamente responsables y las cadenas de mando, para que esa información sea accesible y pueda utilizarse en la rendición de cuentas.

17. Al aplicar un enfoque de rendición de cuentas por crímenes de derecho internacional a su mandato, el GHREN está en consonancia con anteriores investigaciones internacionales por mandato del Consejo de Derechos Humanos. Esto comprende tanto investigaciones sin un mandato explícito respecto de rendición de cuentas,¹⁹ como aquellas con un mandato explícito, aun cuando no haya referencia explícita en el texto de la resolución a crímenes de derecho internacional.²⁰ Lo último, incluso, sin que expresamente se refiera a la clarificación

¹⁷ ACNUDH, Who’s responsible? Attributing individual responsibility for violations of international human rights and humanitarian law in United Nations commissions of inquiry, fact-finding missions and other investigations, HR/PUB/18/3 (2018) (en adelante “Who’s responsible”), p. 16, señalando que la identificación de individuos será siempre adicional a la identificación del Estado, entidad estatal o agente no estatal responsable, ya que la responsabilidad del Estado es la primordial en el derecho internacional de los derechos humanos.

¹⁸ Véase Capítulo III.A y Capítulo III.B.

¹⁹ Informe de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto en Gaza, A/HRC/12/48, párrs. 286–293; Informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación de las repercusiones de los asentamientos israelíes en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino en todo el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, A/HRC/22/63, párr. 17.

²⁰ Véase Investigación realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Libia, A/HRC/31/47, párr. 6; Informe de la investigación independiente sobre Burundi realizada en virtud de la resolución S-24/1 del Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/33/37, párr. 12; Informe de la Comisión sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur, A/HRC/34/63, párr. 84; Informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Myanmar, A/HRC/39/64,

de responsabilidades o posible identificación de individuos responsables,²¹ lo que ha sido acogido por el Consejo.²²

18. Dada la amplitud, el carácter sistemático y generalizado, y la gravedad de las violaciones y abusos, además de responsabilidades individuales y del Estado, el GHREN también ha considerado la responsabilidad de la comunidad internacional de prevenir y no dejar impunes la comisión de estos delitos internacionales, formulando recomendaciones en este respecto.

c) *Alcance geográfico (ratione loci)*

19. El párrafo 14(a) de la resolución 49/3 establece que el GHREN deberá emprender las investigaciones de violaciones y abusos de derechos humanos “cometidos en Nicaragua”, en consonancia con el derecho internacional.²³ El GHREN interpreta el ámbito geográfico de su mandato investigativo en el sentido de que al menos una parte de la comisión de las violaciones y abusos deben tener lugar en el territorio de la República de Nicaragua.

20. El párrafo 14(d) de la resolución 49/3 establece que el GHREN deberá “[...] colaborar con todas las partes interesadas, [...] con objeto de intercambiar información, según proceda, y prestar apoyo a las iniciativas nacionales, regionales e internacionales para promover la rendición de cuentas por las violaciones y abusos de derechos humanos en Nicaragua”. El GHREN interpreta el ámbito geográfico de su mandato de colaboración como universal.

d) *Alcance temporal (ratione temporis)*

21. El párrafo 14(a) de la resolución 49/3 establece que el GHREN deberá emprender las investigaciones de violaciones y abusos de derechos humanos “cometidos [...] desde abril de 2018 [...] incluidas [...] sus causas estructurales profundas”.

22. Hechos como los que constituyen el ámbito material del mandato del GHREN no suelen ser sucesos únicos ni aleatorios, sino, por el contrario, tienden a surgir de un proceso dinámico. En vista de lo anterior, y en consideración del mandato de investigar las causas estructurales profundas de las violaciones y abusos, el GHREN considera que también están dentro de su mandato hechos antes de abril de 2018 que continúan y/o tienen graves repercusiones en la actualidad. Dentro de las limitaciones de tiempo, recursos e información disponible, el GHREN ha analizado estos hechos cuando son cruciales para comprender las violaciones y abusos cometidos a partir del abril de 2018 y sus causas políticas, culturales y económicas profundas.

C. Cooperación

1. Falta de cooperación del Estado de Nicaragua

23. De acuerdo con lo establecido por el Consejo de Derechos Humanos en la resolución 49/3, el GHREN buscó la colaboración “con todas las partes interesadas, incluidos el Gobierno de Nicaragua, la Oficina [del Alto Comisionado], las organizaciones internacionales de derechos humanos, los organismos pertinentes de las Naciones Unidas y

párr. 10; Informe del Grupo de Eminentes Expertos Internacionales y Regionales sobre el Yemen, A/HRC/45/6, párr. 13; Informe de la Misión de Investigación Independiente sobre Libia, A/HRC/50/63, párr. 14; Comisión Internacional de Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía (en adelante “ICHRE” por sus siglas en inglés), Terms of Reference (s.f.), núm. 4, disponible en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-06/TermsReferencia_CHRE_Ethiopia.docx.

²¹ Véase Informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “FFM Venezuela”, por las siglas en inglés del término “Fact-Finding Mission”), A/HRC/45/33, párr. 11.

²² A/HRC/RES/45/20, párr. 2.

²³ Véase Corte Penal Internacional (CPI), Sala de Cuestiones Preliminares III, Situation in the People’s Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar, registro núm. ICC-01/19: CC-01/19-27, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the People’s Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar, 14 de noviembre de 2019 (“Bangladesh/Myanmar, Decision conforme al Artículo 15”), párrs. 42–62.

la sociedad civil”.²⁴ En la misma resolución, el Consejo exhortó a las autoridades de Nicaragua a que cooperen plenamente con los mecanismos de derechos humanos, incluyendo el GHREN, a que le permitan el acceso sin trabas, absoluto y transparente a todo el país, y a que le faciliten las visitas, incluso a los centros de detención.²⁵

24. El GHREN lamenta la falta de cooperación por parte de las autoridades del Gobierno de Nicaragua y, en especial, la falta de acceso al país e imposibilidad de realizar su investigación *in situ*. A pesar de reiteradas solicitudes por parte del GHREN, no ha sido posible establecer un diálogo con las autoridades de Nicaragua para examinar cuestiones de interés para el mandato del Grupo. En tales circunstancias, las manifestaciones públicas del Gobierno de Nicaragua afirmando su respeto a las normas de derechos humanos, no han podido ser corroboradas.

25. El 10 de junio de 2022, los Miembros del GHREN solicitaron oficialmente sostener una reunión y establecer una vía de comunicación con la Representante Permanente de la República de Nicaragua ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con Sede en Ginebra. No habiendo recibido respuesta, el 21 de noviembre de 2022 los Expertos enviaron una segunda carta a la Misión Permanente de Nicaragua ante las Naciones Unidas, dirigida al Presidente Daniel Ortega, reiterando su interés en establecer un diálogo con el Gobierno de Nicaragua, pidiendo acceso a información específica, y solicitando realizar una visita al país. El GHREN no recibió ninguna respuesta a su correspondencia. El GHREN dio seguimiento a estas comunicaciones con cartas enviadas al Presidente Daniel Ortega el 8 y el 28 de diciembre de 2022.

26. El 28 de diciembre de 2022, el GHREN también envió cartas a la Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, a la Directora Nacional de la Defensoría Pública, a la Fiscal General de la República de Nicaragua, al Director del Instituto de Medicina Legal, a la Ministra de Gobernación, al Director General del Sistema Penitenciario Nacional, y a la Presidenta Ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, solicitando información sobre aspectos de relevancia para la implementación de su mandato. De nuevo, el GHREN no recibió respuesta ni información alguna.²⁶

27. Cabe señalar que la falta de cooperación por parte del Gobierno de Nicaragua con los mecanismos de derechos humanos no se limita tan sólo al Grupo de Expertos. El 29 de agosto de 2018, la ACNUDH publicó un informe sobre las violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Nicaragua del 18 de abril al 18 de agosto de 2018. Al día siguiente, el Gobierno de Nicaragua rescindió la invitación a la agencia de derechos humanos para trabajar en el país. En diciembre del mismo año, el Gobierno suspendió la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), y anunció la expiración del plazo otorgado al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Nicaragua) para trabajar en el país, anunciando la salida de los dos mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentes en Nicaragua.

28. En los últimos años, el Gobierno de Nicaragua se ha negado repetidamente a cooperar con, e incluso ha cuestionado la legitimidad de, los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos y del sistema de órganos de tratados de la ONU en su conjunto. En noviembre de 2022, el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) y el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) emitieron un comunicado conjunto condenando enérgicamente la falta de cooperación de Nicaragua con ambos organismos para abordar y prevenir la tortura en el país.²⁷ Por su parte, el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la

²⁴ HRC/RES/49/3, párrafo 14(d).

²⁵ *Ibid.*, párr. 19.

²⁶ Véase correspondencia completa del GHREN con el Gobierno de Nicaragua, disponible en: <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ghre-nicaragua/correspondence-group-human-rights-experts-nicaragua-2022-2023>.

²⁷ Decisión adoptada por el CAT, sobre las solicitudes presentado por el SPT en virtud del artículo 16(4) del Protocolo Facultativo a la Convención relativa a Nicaragua, CAT/C/75/2. Véase también la declaración “Nicaragua: Dos órganos de tratados de derechos de la ONU lamentan la negativa a cooperar y la falta de información por parte de Nicaragua”, disponible en: <https://www.ohchr.org/en/statements/2022/11/nicaragua-two-un-rights-committees-deplore-refusal-cooperate-and-lack>.

Discriminación Racial, y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también han señalado la negativa de las autoridades nicaragüenses a responder a las listas de cuestiones y a participar en los respectivos diálogos constructivos con estos comités.²⁸ Las autoridades de Nicaragua tampoco han respondido a ninguna de las cartas enviadas por los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos desde noviembre de 2018.

29. Además, el 18 de noviembre de 2021, el Gobierno de Nicaragua denunció la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), dando inicio al retiro de Nicaragua de esta Organización. El 24 de abril de 2022, y quebrantando los compromisos adoptados por Nicaragua en la Carta,²⁹ las autoridades anunciaron la expulsión de la OEA del país y el retiro de su representación diplomática ante este organismo. El mismo día, la Policía Nacional ocupó las instalaciones de la OEA en Managua, incautando bienes y vulnerando la inviolabilidad de los archivos de la Organización.³⁰ Cabe notar que las obligaciones voluntariamente asumidas por el Estado de Nicaragua en los tratados interamericanos que ha suscrito permanecen vigentes, incluso después de la denuncia efectiva de la Carta. Sin embargo, y a pesar de haber reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de la CIDH, Nicaragua ha ignorado repetidamente sus obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana) y otros instrumentos regionales de derechos humanos. En noviembre de 2022, la Corte IDH declaró a Nicaragua en desacato ante la negativa de las autoridades a cumplir con las medidas provisionales establecidas por la Corte IDH para la protección de los derechos de 46 personas privadas de su libertad en 8 centros de detención.³¹

2. Cooperación con otras partes interesadas

30. Desde la fecha de nombramiento de los miembros del Grupo en mayo de 2022, hasta el 15 de febrero de 2023, el GHREN se reunió con una amplia gama de actores interesados en mejorar la situación de los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, entidades del sistema de la ONU y del sistema interamericano, y miembros de la comunidad internacional. Los Expertos agradecen a los individuos y organizaciones que participaron en estos intercambios, por su tiempo y su interés en cooperar con su mandato.

31. El GHREN destaca la participación dinámica y activa, y las valiosas contribuciones a su mandato, de las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil nicaragüenses e internacionales. El Grupo agradece especialmente a las víctimas, sobrevivientes, y familiares de víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos que confiaron sus historias, sus vivencias y sus deseos de justicia al Grupo de Expertos durante el proceso de elaboración de este informe.

32. El GHREN valora especialmente la cooperación de los Estados que recibieron visitas tanto del Grupo como de miembros de su secretariado. Dichas visitas fueron cruciales para la implementación del mandato del GHREN, permitiendo al Grupo sostener reuniones con víctimas y testigos, recabar información y evidencia, y dialogar con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones del Estado que trabajan en la protección de los derechos de las personas nicaragüenses.

33. En cumplimiento de la obligación adquirida de colaborar con todas las partes interesadas pertinentes con el objeto de intercambiar información que ayude al Grupo de

²⁸ Véase CCPR/C/NIC/CO/4, CERD/C/NIC/CO/15-21, E/C.12/NIC/CO/5.

²⁹ La Carta de la Organización de los Estados Americanos, 30 de abril de 1948, 119 UNTS 3 (entró en vigor el 13 de diciembre de 1951), establece en su artículo 143 un plazo de dos años desde la notificación de la denuncia de la Carta, para que la misma cese de tener efecto, sujeto al cumplimiento por el Estado denunciante de las obligaciones emanadas de la Carta.

³⁰ La Toma de las Oficinas de la Organización de Estados Americanos, Resolución aprobada por el Consejo Permanente en la sesión extraordinaria celebrada el 13 de mayo de 2022, OEA/Ser. G CP/RES. 1196 (2377/22).

³¹ Corte IDH, Juan Sebastián Chamorro y Otros y 45 Personas Privadas de su Libertad en 8 Centros de Detención Respecto de Nicaragua, Medidas Provisionales, Resolución del 22 de noviembre de 2022 (en adelante “Caso *Juan Sebastián Chamorro y otros*, Resolución Medidas Provisionales”), disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/45personas_se_02.pdf.

Expertos a cumplir con su mandato, el GHREN sostuvo reuniones con la CIDH y la OEA, y solicitó el acceso a información contenida en las bases de datos del GIEI Nicaragua y del MESANI. El GHREN aprecia la apertura y la información compartida por la CIDH.

34. El GHREN expresa su gratitud a la Oficina del ACNUDH, que proporcionó un secretariado especializado, así como a ONU Mujeres por su contribución a la investigación a través de la asesoría de una experta en género. El apoyo de ACNUDH y de ONU Mujeres se prestó con el debido respeto a la independencia del Grupo de Expertos. Una vez seleccionadas como funcionarios del secretariado, las personas integrantes del equipo trabajaron con independencia de estos organismos.

D. Metodología de trabajo y estándar de prueba

35. Los miembros del Grupo de Expertos acordaron y adoptaron sus propios términos de referencia,³² reglamento interno, principios rectores, estándar de prueba aplicable a los hallazgos, estrategia de investigación, y metodología de trabajo; todo ello conforme a las metodologías establecidas y las mejores prácticas desarrolladas por la ONU para la determinación de hechos en investigaciones concernientes a los derechos humanos.³³

36. En el desempeño de sus funciones, el Grupo estuvo guiado en todo momento por los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia, integridad y el principio de “no ocasionar daño”. El GHREN buscó también la complementariedad y eficiencia, así como evitar la duplicidad del trabajo con respecto a otras iniciativas de promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo el mandato de ACNUDH.

1. Enfoque centrado en las víctimas

37. El GHREN adoptó una metodología de trabajo centrada en las víctimas, incluyendo el respeto estricto del principio de “no ocasionar daños”, la priorización del “mejor interés” de la víctima, adopción de medidas de mitigación para prevenir la revictimización y asegurar la protección de las víctimas, y la garantía del consentimiento informado y empoderado. El GHREN también desarrolló protocolos de actuación y derivación para garantizar la protección de las víctimas, testigos y otras fuentes de información durante todas las etapas de la investigación.

38. Además de realizar entrevistas con víctimas y testigos, el GHREN sostuvo reuniones con grupos de la sociedad civil, asociaciones de víctimas y familiares, y grupos e individuos vulnerables, para discutir sus expectativas, escuchar sus preocupaciones y recabar sus puntos de vista sobre cuestiones metodológicas, con miras a asegurar la protección efectiva y la participación de las víctimas en el proceso.

39. El GHREN evaluó los riesgos y amenazas para los testigos y las víctimas que colaboran con el GHREN, y adoptó, en la medida de lo posible y dentro de sus posibilidades y atribuciones, medidas para mitigar cualquier riesgo físico, de seguridad, psicosocial o de otro tipo para las víctimas, testigos, sus familiares, intermediarios y colegas. El GHREN identificó las medidas de mitigación de riesgos adecuadas, en coordinación con organizaciones nacionales e internacionales y otras entidades pertinentes. La confidencialidad y seguridad de la información y la protección de la privacidad de las personas fueron consideraciones centrales en el trabajo del GHREN.

40. El GHREN se aseguró de contar con el consentimiento informado de cada una de las fuentes de información, incluyendo tanto las personas a las que el equipo entrevistó, como las personas y organizaciones que compartieron datos y documentación con el Grupo. El

³² Véase GHREN, Preguntas Frecuentes, disponible en : <https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ghren-nicaragua/index>.

³³ Véase ACNUDH, Commissions of Inquiry and Fact-Finding Missions on International Human Rights and Humanitarian Law: Guidance and Practice, HR/PUB/14/7 (February 2015) (en adelante “Guidance and Practice”).

GHREN respetó en todo momento la voluntad de las fuentes, antes de utilizar cualquier información proporcionada.

41. Debido a la fuerte escalada de la persecución en contra de personas opositoras o percibidas como tales por el Gobierno en febrero de 2023, a pocos días de la publicación de este informe, el GHREN tuvo que tomar medidas urgentes adicionales para proteger a las víctimas, los testigos y otras fuentes que colaboraron para la realización del mismo. En este sentido, el GHREN decidió anonimizar el informe, ocultando nombres e identidades de las víctimas, y omitiendo la mayoría de los casos ejemplificativos que se habían desarrollado como estudios de caso.

42. El mandato del Grupo y la metodología del Secretariado de OHCHR tienen en el centro de la investigación la protección de las víctimas y testigos y el deber de no exponerlos a riesgos de represalias. Por esta razón, el presente informe se presentará sin parte del material investigado. Toda la información recabada por el GHREN permanecerá resguardada en su archivo, y podrá ser utilizado en futuras investigaciones y esfuerzos de rendición de cuentas.

2. Integración de la perspectiva de género en el trabajo del GHREN

43. En cumplimiento de su mandato, el GHREN integró de manera sistemática la perspectiva de género en sus metodologías y herramientas de trabajo incluyendo en: la planeación de sus labores; la definición e implementación de estrategias investigación sensibles al género; la realización de las entrevistas y la selección de los casos emblemáticos; las medidas de protección de las víctimas y testigos; así como los análisis llevados a cabo para la elaboración del presente informe.

44. El GHREN examinó las dimensiones de género de las dinámicas y los hechos de violencia, y cómo han marcado las experiencias de las mujeres, los hombres y las personas con diversas identidades de género. Identificó las violaciones motivadas por el género, incluyendo la violencia sexual, y las que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas. Examinó y analizó el impacto diferenciado de los actos violatorios sobre la población, y en particular sobre las mujeres y niñas y las personas de diferentes géneros, orientación sexual, expresión de género y características sexuales (en adelante “LGBTI”).

3. Estándar de prueba

45. En consonancia con la práctica general de los órganos de investigación establecidos por el Consejo de Derechos Humanos, el GHREN aplicó el estándar de prueba de “motivos razonables para creer”. El estándar de los motivos razonables se cumple cuando en base al conjunto de información fáctica verificada, un observador objetivo y ordinariamente prudente tendría motivos razonables para concluir que los hechos tuvieron lugar tal y como se describen y, cuando se extraigan conclusiones jurídicas, que estos hechos reúnen todos los elementos de una violación o abuso.³⁴

46. Las determinaciones de los hechos constituyen la base para calificarlos jurídicamente, y, en su caso, definir las posibles responsabilidades correspondientes. Al definir su estándar de prueba, la presente investigación indica el nivel de confianza en sus conclusiones, haciéndolas verificables, tanto en cuanto a los hechos, como en cuanto a sus calificaciones jurídicas. El estándar de prueba aplica a cada uno de los elementos que califiquen jurídicamente los hechos determinados.³⁵ En los casos que no alcanzan el umbral, la presente investigación puede recomendar que se realicen investigaciones adicionales.

³⁴ Véase de manera similar, Informe de la Comisión de Investigación sobre los Derechos Humanos en la República Popular Democrática de Corea, A/HRC/25/63, párr. 22; ICHRE, Terms of Reference (s./f.), núm. 5; Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, Frequently Asked Questions (s./f.), p. 3, disponible en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/coiukraine/2022-06-30/FAQs-on-the-IICIU-29-June-2022_EN.doc; Detailed findings on the situation in Tarhuna, Conference room paper of the Independent Fact-Finding Mission on Libya, A/HRC/50/CRP.3, párr. 10.

³⁵ *Ibid.*, en cuanto a la responsabilidad individual.

47. El estándar de prueba se aplica para determinar: a) que se produjo una violación, abuso o delito y b) que la persona y/o entidad identificada fue responsable. El umbral de motivos razonables para creer es inferior al umbral necesario que se requiere en los procedimientos penales para sostener una acusación, pero es suficientemente alto para indicar que se justifica la realización de ulteriores investigaciones, incluyendo la apertura de una investigación penal.

48. El hecho que el umbral de motivos razonables para creer sea inferior al umbral necesario para sostener una condena, no impide que la presente investigación internacional identifique posibles responsabilidades individuales.³⁶ El umbral de motivos razonables para creer constituye una causa *prima facie* para iniciar una investigación penal³⁷ o justifica la realización de ulteriores investigaciones.³⁸

49. En el marco del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, motivos razonables para creer corresponde al umbral de información necesaria a efectos de decidir de si una situación justifica una investigación,³⁹ esto es, si un conjunto de presuntos delitos que parecen ser representativos de un patrón más amplio de victimización justifica una investigación.⁴⁰ Para cumplir el umbral de información necesario para justificar la apertura de una investigación, no es necesario que ésta sea exhaustiva ni definitiva, comparado con las exigencias probatorias en una investigación penal.⁴¹ Si bien el umbral motivos razonables para creer necesario para decidir sobre una orden de detención, es superior al umbral motivos razonables para creer para abrir una investigación, ambos son los estándares más cercanos⁴² en la escala de los cuatro umbrales establecidos en el Estatuto.⁴³

50. Para la emisión de una orden de detención, en el marco del Estatuto de Roma, es necesario que el umbral de motivos razonables para creer alcance “motivos razonables para sospechar”,⁴⁴ lo cual es más que una mera sospecha, y respalda la conclusión de un observador promedio objetivo de la posibilidad de que hechos específicos hayan tenido lugar como se describen, incluyendo a los individuos identificados como posiblemente involucrados. En el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos,⁴⁵ y en

³⁶ Véase ACNUDH, Who’s responsible?, p. 16, nota 15.

³⁷ En un sentido similar, Report of the Commission on Human Rights in South Sudan, A/HRC/37/CRP.2, párr. 13; A/HRC/40/CRP.1, párr. 14.

³⁸ FFM Venezuela, Conclusiones detalladas de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, A/HRC/48/CRP.5, párr. 15 y A/HRC/45/CRP.11, párr. 11.

³⁹ Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 17 de julio de 1998, 2187 UNTS 90 (entró en vigor el 1 de julio de 2002) (en adelante “Estatuto de Roma”), arts. 15(4), 53(1)(a) y 53(1)(b).

⁴⁰ Véase OTP, Report on Preliminary Examination Activities 2020 (14 de diciembre de 2020), párr. 213.

⁴¹ CPI, *Kenya*, Decision Pursuant to Article 15, párr. 29.

⁴² CPI, *Kenya*, Decision Pursuant to Article 15, párrs. 28 y 29.

⁴³ Véase CPI, Sala de Cuestiones Preliminares II, *Prosecutor v. William Samoei Ruto et al.*, causa núm. ICC-01/09-01/11-373, Decision on the Confirmation of Charges Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, 23 de enero de 2012, párr. 40.

⁴⁴ Véase en cuanto al Estatuto de Roma, art. 58(1)(a); CPI, Sala de Apelaciones, *Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir*, causa núm. ICC-02/05-01/09-73, Judgment on the appeal of the Prosecutor against the “Decision on the Prosecution’s Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir”, 3 de febrero de 2010, párr. 31.

⁴⁵ Informe del WGAD, Presidente-Relator: El Hadji Malick Sow, A/HRC/22/44, párr. 62.

consonancia con el ámbito Europeo⁴⁶ y en las Américas,⁴⁷ motivos razonables para sospechar es el umbral necesario para cumplir el requisito de que una detención no sea arbitraria.

51. En algunos ordenes jurídicos⁴⁸ motivos razonables para creer está por debajo del umbral necesario para una acusación penal⁴⁹ y de una decisión de enviar un caso a juicio,⁵⁰ como resultado de una evaluación preliminar del contenido del expediente que hace probable una condena. Este umbral es similar al estándar del “caso *prima facie*” para la confirmación de cargos⁵¹ en la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia.⁵² En el marco del Estatuto de Roma,⁵³ motivos razonables para creer claramente está por debajo del umbral de “motivos fundados para creer”, necesario para fundamentar una decisión de confirmación de cargos.

4. Metodología de investigación

52. Los hallazgos reflejados en el presente informe han sido documentados y corroborados conforme a la metodología y las mejores prácticas desarrolladas por la ONU para la determinación de hechos en investigaciones relacionadas con los derechos humanos.⁵⁴ El GHREN ejerció la debida diligencia en la evaluación de la fiabilidad de las fuentes, cotejó y verificó la información para determinar su validez, y llevó a cabo un análisis independiente e imparcial de las pruebas recabadas.

53. El GHREN investigó 149 casos. Los criterios de selección de los casos incluyeron consideraciones sustantivas y de seguridad, así como relativas a la calidad y cantidad de evidencia disponible y a la representatividad de los distintos patrones identificados.

54. Los incidentes principales descritos en el presente informe se basan en múltiples testimonios de víctimas y testigos oculares, así como en el análisis de información de fuente abierta, documentación y material audiovisual. Los casos o incidentes individuales fueron corroborados por al menos dos fuentes de información primarias, independientes, y creíbles.

⁴⁶ Véase Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (ETS núm. 5), 4 de noviembre de 1950, 213 UNTS 222 (entró en vigor el 3 de septiembre de 1953), art. 5(1)(c), respecto al umbral necesario para poder detener una persona sospechosa de haber cometido un delito, a fin de hacerla comparecer ante una autoridad judicial competente; en los términos de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos (CtEDH) en las causas *Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom*, aplicación núm. 12244/86, 12245/86, 12383/86, Judgement, 30 de agosto de 1990, Serie A núm. 182, párr. 32; *Gusinskiy v. Russia*, aplicación no. 70276/01, Judgement, 19 de mayo de 2004, párr. 53; *Ilgar Mammadov v. Azerbaijan*, aplicación núm. 15172/13, Judgement, 22 de mayo 2014, párr. 88.

⁴⁷ Véase la jurisprudencia en los países de la región, citada por la Corte IDH, *Fernández Prieto y Tumbeiro v. Argentina*, Sentencia (Fondo y Reparaciones), 1 de septiembre de 2020, Serie C núm. 411, párrs. 92–95.

⁴⁸ Véase, la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia de Alemania, BGH, NJW 1960, 2346, 2347, respecto a la “razón suficiente para optar por presentar cargos públicos” en términos de “motivos suficientes para sospechar” de la fiscalía, según el Código Procesal Penal Alemán, art. 170 (1).

⁴⁹ Véase también FFM Venezuela, A/HRC/48/CRP.5, párr. 15 y A/HRC/45/CRP.11, párr. 11, aunque categóricamente excluyendo motivos razonables para creer del umbral requerido “en los procedimientos penales para sostener una acusación”.

⁵⁰ Véase, p.ej., la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia de Alemania, BGH, NJW 1970, 1543, 1544; 2000, 2672, 2673 respecto a “motivos suficientes para sospechar” para abrir el juicio oral, según el Código Procesal Penal Alemán, art. 203.

⁵¹ Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, Informe Presentado por el Secretario General en Cumplimiento del Párrafo 2 de la Resolución 808 (1993) del Consejo de Seguridad, S/25704/Add. 1, Adición; S/25704, Anexo (aprobado por el Consejo de Seguridad, S/RES/827 (1993), párr. 1, última modificación el 6 de septiembre de 2016 por S/RES/2306 (2016)) (Estatuto del TPIY), art. 19(1).

⁵² Véase a la jurisprudencia del TPIY, *Prosecutor v. Dario Kordić et al.*, causa núm. IT-95-14-1, Decision on the Review of Indictment, 10 de noviembre de 1995, pp. 2–3; *Prosecutor v. Slobodan Milošević*, causa núm. IT-02-54, Decision on Review of Indictment, párr. 14, con relación al “caso *prima facie*” (*prima facie case*) de la fiscalía para la confirmación de cargos, en los términos de las pruebas del caso que, de ser aceptadas por el juez, constituirían la base suficiente para una condena.

⁵³ Véase en cuanto al Estatuto de Roma, art. 61(7).

⁵⁴ Véase ACNUDH, Guidance and Practice.

Los patrones recogidos en el informe fueron identificados con base en el análisis de la totalidad de casos investigados por el GHREN, así como la evaluación de información creíble complementaria.

55. El presente informe se basa en la información y las pruebas recopiladas y analizadas por el GHREN. El GHREN reunió información mediante los siguientes métodos principales:

a) Entrevistas confidenciales. En el curso de sus investigaciones, que se iniciaron efectivamente en octubre de 2022 por las razones descritas, el GHREN realizó 292 entrevistas confidenciales con víctimas y testigos de presuntas violaciones y abusos de derechos humanos, familiares, antiguos funcionarios del Estado, abogados/as, periodistas, personas defensoras de los derechos humanos, académicos, y analistas, entre otros. Estas entrevistas se realizaron presencialmente durante misiones de trabajo en terceros países, así como de manera remota utilizando conexiones seguras telefónicas y de vídeo.

b) Documentos confidenciales. El GHREN recibió y revisó documentos confidenciales aportados por individuos y organizaciones, incluyendo bases de datos, informes forenses y expedientes de casos.

c) Convocatoria pública de información. En septiembre de 2022, el Grupo de Expertos publicó una convocatoria en su página web invitando a todas las personas, grupos, organizaciones e instituciones interesadas a presentar información y/o documentación relevante para su mandato.⁵⁵ Al 31 de enero de 2023, el GHREN había recibido un total de 169 contribuciones. Cuando se precisó información adicional, el secretariado del GHREN se puso en contacto con la fuente de la información.

d) Otros documentos escritos. El Grupo de Expertos más de 1,500 documentos. Éstos incluyeron numerosos documentos oficiales del Gobierno de Nicaragua, incluyendo: leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, iniciativas legislativas, directivas, políticas, certificados, constancias, boletines, y otro tipo de comunicaciones. El GHREN también recolectó y analizó numerosos informes y material informativo sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, incluyendo documentos e información oficial publicada por el Gobierno de Nicaragua, informes elaborados por mecanismos de monitoreo e investigación (GIEI Nicaragua, MESENI y ACNUDH), e informes elaborados por entidades de la ONU, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación y académicos, entre otros.

e) Análisis de información de dominio público. El GHREN utilizó toda la información de fuente abierta relevante en sus investigaciones, incluyendo el material disponible en redes sociales (Twitter, Youtube, Facebook, Instagram, TikTok), páginas web, blogs, artículos periodísticos, comunicados de prensa, etc. El GHREN pudo extraer, verificar y analizar datos y material audiovisual de dominio público, que utilizó para contextualizar y corroborar detalles e información obtenida a través de entrevistas confidenciales y análisis documental. El GHREN analizó también las declaraciones públicas de representantes e instituciones del Gobierno de Nicaragua, incluyendo en televisión, radio y redes sociales. El GHREN utilizó técnicas de geolocalización, crono-localización, así como la evaluación del contenido y su coherencia con el conjunto de pruebas disponibles, a fin de establecer la fiabilidad de la información de dominio público.

f) Imágenes satelitales. El GHREN también hizo uso de los servicios del Programa de Aplicaciones Operacionales por Satélite del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (UNOSAT) para obtener imágenes satelitales de varios lugares que fueron escenario de incidentes de relevancia para el mandato, así como de lugares de detención identificados en el curso de sus investigaciones.

56. El Grupo consideró como fuentes primarias: las entrevistas con víctimas, familiares, abogados y testigos con conocimiento directo e información específica y creíble sobre casos

⁵⁵ Véase <https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ghre-nicaragua/index>.

e incidentes individuales; los testimonios de oficiales del ejército y funcionarios gubernamentales (antiguos o en servicio), así como de otras personas con conocimiento directo de casos o incidentes concretos (*insiders*); las declaraciones, documentos o información pública emitida por las instituciones y autoridades nicaragüenses; los documentos de sentencia y expedientes judiciales; documentos oficiales expedidos por órganos del Gobierno de Nicaragua, incluyendo leyes, políticas, reglamentos y directivas; y el material audiovisual e información digital verificada (incluyendo el contenido de redes sociales) que contenga información directa sobre un caso o incidente.

57. El Grupo consideró fuentes secundarias, entre otras: informes elaborados por mecanismos de monitoreo e investigación tanto regionales como del Sistema de Naciones Unidas; informes elaborados por entidades de la ONU, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación y académicos; publicaciones; presentaciones y artículos académicos; y artículos de prensa. En su evaluación de fuentes secundarias, el GHREN, en la medida de lo posible, hizo esfuerzos por entrevistar al investigador, investigadora, autor o autora del texto, informe, presentación o publicación correspondiente, con el fin de evaluar la metodología utilizada y la credibilidad de la información de ahí derivada.

58. La información recopilada por el GHREN fue almacenada de forma segura según los protocolos de archivo de la ONU.⁵⁶ A fin de cumplir con su mandato de “preservar y analizar información y pruebas” y “hacer que esa información sea accesible y pueda utilizarse en apoyo de las iniciativas actuales y futuras de rendición de cuentas”, el GHREN registró cada prueba y pieza de información recopilada en un sistema informático especializado, diseñado para resguardar, organizar, preservar y almacenar de forma sistemática y segura toda la información. Este sistema integrado está acreditado, y ofrece todas las garantías debidas de seguridad de la información, confidencialidad y respeto de las prerrogativas e inmunidades de la ONU.

E. Marco jurídico

59. El Grupo de Expertos investigó y documentó los hechos acaecidos en la República de Nicaragua desde abril de 2018, a tenor del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Penal. Al hacerlo, aplicó el derecho de los tratados y el Derecho Internacional Consuetudinario,⁵⁷ según corresponda. El GHREN también examinó las garantías de derechos humanos en el derecho interno nicaragüense, así como aspectos de la legislación nacional, cuando procede.

1. Derecho Internacional de los Derechos Humanos

60. Nicaragua tiene la responsabilidad primordial de respetar y hacer respetar todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, y de cumplir y hacer cumplir las obligaciones derivadas de los tratados y otros acuerdos de derechos humanos suscritos por Nicaragua. Esto incluye el derecho a la justicia y a un remedio efectivo para las víctimas de violaciones de derechos humanos, y el derecho a reparaciones y garantías de no repetición.

61. El GHREN evaluó la situación de los derechos humanos sobre la base de las obligaciones internacionales voluntariamente asumidas por Nicaragua. La República de Nicaragua está obligada por la Carta de la ONU y se ha comprometido a respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Nicaragua es Estado Parte de todos los principales

⁵⁶ Véase ST/SGB/2007/5; ST/SGB/2007/6, ST/SGB/2004/15, y los estándares y lineamientos de la ONU disponibles en: <<https://archives.un.org/content/policy>>.

⁵⁷ El Derecho Internacional Consuetudinario es la fuente no escrita del Derecho Internacional, y es vinculante para todos los Estados, excepto cuando el Estado ha objetado de manera recurrente a una obligación consuetudinaria específica; véase CDI, Proyecto de conclusiones sobre la identificación del Derecho Internacional Consuetudinario, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 70o período de sesiones (30 de abril a 1 de junio y 2 de julio a 10 de agosto de 2018), A/73/10, Suplemento núm. 10, párr. 65 (párr. 1, conclusión núm. 15) y párr. 66 (comentario general núm. 3).

tratados internacionales sobre derechos humanos de la ONU,⁵⁸ a excepción de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (ICED).⁵⁹ Nicaragua también está obligada por las normas pertinentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que forman parte del Derecho Internacional Consuetudinario. Desde 2018, Nicaragua no ha ratificado ni se ha adherido a ningún protocolo o tratado de derechos humanos, a pesar de que así se le haya recomendado.⁶⁰

62 A nivel regional, Nicaragua está obligada por los diversos tratados interamericanos suscritos por el Estado,⁶¹ que continúan vigentes incluso después de la denuncia de la Carta de la OEA por parte de Nicaragua.⁶² Además, en febrero de 1991, Nicaragua reconoció como obligatoria de pleno derecho la competencia de la Corte IDH, sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación a la Convención Americana.

63. En su artículo 46, la Constitución Política de Nicaragua dispone que “en el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos”.⁶³

⁵⁸ Nicaragua es parte de los siguientes instrumentos universales en materia de derechos humanos: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial desde 1978; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Primer Protocolo Facultativo desde 1980; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde 1980; Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer desde 1981; Convención sobre los Derechos del Niño desde 1990; Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía desde 2004; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes desde 2005; Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados desde 2005; Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares desde 2005; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde 2007; Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes desde 2009; Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a la Abolición de la Pena de Muerte desde 2009 y Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde 2010.

⁵⁹ Nicaragua tampoco es Estado Parte del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones; del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; ni del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

⁶⁰ E/C.12/NIC/CO/5, párr. 54; A/HRC/42/16, párr. 125.1–125.7.

⁶¹ Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, desde 1956; Convención Interamericana sobre la Concesión de Derechos Civiles a la Mujer, desde 1956; Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), desde 1979; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, desde 1985; Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para Abolir la Pena de Muerte, desde 1990; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), desde 1995; Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, desde 1995; Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, desde 2002; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), desde 2009; y Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), desde 2021.

⁶² Corte IDH, Caso *Juan Sebastián Chamorro y otros*, Resolución Medidas Provisionales, párrs. 28–30.

⁶³ Texto Consolidado de la Constitución Política de la República de Nicaragua de 1987, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Núm. 5 del 9 de enero de 1987 con reformas incorporadas (en adelante “Constitución Política de Nicaragua”), art. 46.

2. Derecho Internacional Penal

64. Conforme al mandato conferido al GHREN de identificar, de ser posible, a las personas responsables de las violaciones y abusos de derechos humanos en Nicaragua, y hacer que los resultados de la investigación sean accesibles y puedan utilizarse en las iniciativas actuales y futuras de rendición de cuentas, así como de prestar apoyo a las iniciativas nacionales, regionales e internacionales para promover la rendición de cuentas por las violaciones y abusos, la presente investigación ha considerado investigar los hechos a la luz del Derecho Internacional Penal.

65. El Derecho Internacional Penal aplica a situaciones en las que una persona se puede considerar responsable penalmente, a título individual, de graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El Derecho Internacional Penal establece la responsabilidad penal individual por categorías jurídicas de conducta que constituyen crímenes de derecho internacional. Es posible identificar a individuos que perpetran violaciones de derechos humanos sin recurrir al Derecho Internacional Penal, en particular, sin establecer un elemento subjetivo y un modo de responsabilidad. En este caso, no se trata de una conclusión en materia de Derecho Internacional Penal, sino en materia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

66. Como marco jurídico para evaluar si las violaciones cometidas en Nicaragua pueden constituir crímenes de derecho internacional, se ha utilizado el Derecho Internacional Consuetudinario en materia Penal. Sin perjuicio de que decisiones judiciales internacionales no son fuentes de derecho internacional en sí mismas,⁶⁴ y de que solo en algunos casos la práctica de las organizaciones internacionales contribuye a la formación o la expresión del Derecho Internacional Consuetudinario⁶⁵ el GHREN se basó en su trabajo en los Estatutos y en la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales Penales creados *ad hoc* por la ONU para la ex-Yugoslavia (TPIY) y para Ruanda (TPIR) y su sucesora, el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales (MRITP).⁶⁶ Asimismo, se basó en la legislación y jurisprudencia de los Estados para investigar, enjuiciar y condenar a los responsables de crímenes de derecho internacional, tomando en cuenta la doble función de las decisiones de cortes y tribunales nacionales en la identificación de Derecho Internacional Consuetudinario.⁶⁷

67. El GHREN también consideró aspectos del Estatuto de Roma y de la jurisprudencia de la CPI, en la medida que el Estatuto recoge Derecho Internacional Consuetudinario en materia penal y principios que están reconocidos en instrumentos internacionales de los cuales la República de Nicaragua es parte, y cuya violación es considerada como un delito internacional.

68. Lo anterior, sin perjuicio de que Nicaragua no es un Estado Parte del Estatuto de Roma.⁶⁸ El principio de responsabilidad penal individual por crímenes de derecho internacional está bien establecido en el Derecho Internacional Consuetudinario.⁶⁹ En

⁶⁴ Véase Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), 26 de junio de 1945, 33 UNTS 993 (entró en vigor el 24 de octubre de 1945), artículo 38(1)(d); CDI, Proyecto de conclusiones sobre la identificación del Derecho Internacional Consuetudinario, párr. 66 (comentario núm. 2 a la conclusión núm. 13).

⁶⁵ CDI, Proyecto de conclusiones sobre la identificación del Derecho Internacional Consuetudinario, párr. 65 (párr. 2 de la conclusión núm. 4).

⁶⁶ En la medida que reflejan Derecho Internacional Consuetudinario en materia Penal, también los Estatutos y la jurisprudencia de otras Entidades de Justicia Penal creadas por/encabezadas por/bajo los auspicios de/con apoyo de la ONU, como son el Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL) y su sucesora, el Tribunal Especial Residual para Sierra Leona (TERSL), el Tribunal Especial para el Líbano (TEL), las Salas penales de la Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental (Salas UNTAET), y las Salas Extraordinarias de las Cortes de Camboya (SECC).

⁶⁷ CDI, Proyecto de conclusiones sobre la identificación del Derecho Internacional Consuetudinario, párr. 66 (comentario núm. 1 a la conclusión núm. 13).

⁶⁸ De conformidad con el artículo 122, párrafo 1, del Estatuto de Roma, los Estados que no son partes en el Estatuto, pero han firmado el Estatuto o el Acta Final de la Conferencia de Roma, pueden ser observadores en la Asamblea. Entre los Estados signatarios del Observatorio se encuentra Nicaragua.

⁶⁹ Comisión de Expertos Independientes sobre Ruanda, Informe definitivo de la Comisión de Expertos establecida de conformidad con la resolución 935 (1994) del Consejo de Seguridad, S/1994/1405,

consecuencia, para la imposición de responsabilidades penales en el Derecho Internacional Penal, es necesario contar con una base positiva y sólida de un principio del Derecho Internacional Consuetudinario,⁷⁰ esto es, que el principio responde a una práctica general que es aceptada como jurídicamente vinculante,⁷¹ y por consiguiente ha de seguirse con el convencimiento de la existencia de una obligación jurídica o un derecho (*opinio iuris*).⁷²

69. Además, la falta de la ratificación del Estatuto de Roma no excluye la posibilidad de que el Gobierno de la República de Nicaragua remita en el futuro la situación en el país a la CPI,⁷³ también *ex post facto*, después de la comisión del presunto delito.⁷⁴ Igualmente, terceros países pueden ejercer su jurisdicción penal.⁷⁵ Lo anterior incluye el ejercicio de la jurisdicción penal respecto a conductas de nacionales cuyos países no han ratificado el Estatuto de Roma, como es el caso de la República de Nicaragua, sin que se pueda refutarlo basado en *nulla poena sine lege*, por falta de aplicabilidad, accesibilidad y previsibilidad del tipo penal de Derecho Internacional Penal.⁷⁶

70. Respecto al estatus de las normas del Estatuto de Roma en el derecho internacional, la presente investigación es consciente que, si bien el Estatuto puede ser considerado en muchas áreas como fuente indicativa de la *opinio juris* de un número grande de Estados,⁷⁷ deducir pruebas de Derecho Internacional Consuetudinario a partir de un tratado internacional no es sencillo, ya que la existencia de un tratado también puede apoyar la inferencia contraria; es decir, que sin la norma convencional no existe la norma consuetudinaria.⁷⁸

Anexo, párrs. 169–172; TPIY, *Prosecutor v. Dusko Tadić*, causa núm. IT-94-1-T, Opinion and Judgement, 7 de mayo de 1997 (*Tadić*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 623; *Prosecutor v. Zejnib Delalić et al.*, causa núm. IT-96-21-T, Judgement, 16 de noviembre de 1998 (*Celebići*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 321; TPIR, *Prosecutor v. Tharcisse Muvunyi*, causa núm. ICTR-00-55-T, Judgement, 12 de septiembre de 2006, párr. 459; TESL, *Prosecutor v. Moinina Fofana and Allieu Kondewa*, causa núm. SCSL-04-14-T, Judgement, 2 de agosto 2007, párr. 103; *Prosecutor v. Iassa Hassan Sesay et al.*, causa núm. SCSL-04-15-T, Judgement, 2 de marzo de 2009, párr. 58.

⁷⁰ TPIY, *Prosecutor v. Enver Hadžihasanović et al.*, causa núm. IT-01-47-AR72, Decision on Interlocutory Appeal Challenging Jurisdiction in Relation to Command Responsibility, 16 de julio de 2003, párr. 52.

⁷¹ *Ibid.*, párr. 12.

⁷² CDI, Proyecto de conclusiones sobre la identificación del Derecho Internacional Consuetudinario, párr. 65 (conclusión núm. 2 y párrafo 1 de la conclusión núm. 9).

⁷³ Estatuto de Roma, arts. 12(3), 13(a), 14.

⁷⁴ Véase en cuanto a la situación en Cote D'Ivoire, CPI, Sala de Apelaciones, *Prosecutor v. Laurent Koudou Gbagbo*, causa núm. ICC-02/11-01/11 OA 2, Judgment on the appeal of Mr Laurent Koudou Gbagbo against the decision of Pre-Trial Chamber I on jurisdiction and stay of the proceedings, 12 de diciembre de 2012, párrs. 72–90; al menos, teóricamente, tampoco está excluida la posibilidad que el Consejo de Seguridad de la ONU remita al Fiscal de la CPI la situación de la República de Nicaragua, según el propio Estatuto de Roma. Estatuto de Roma, art. 13(b).

⁷⁵ Si bien el Estatuto de Roma no establece ninguna obligación de implementar el derecho penal sustantivo del Estatuto, muchos de los 123 Estados parte (estado de ratificación en diciembre de 2022) han adaptado su derecho penal sustantivo al Estatuto. Aunque las normas de Derecho Internacional Penal adoptadas en la legislación nacional son formalmente parte del derecho interno, al interpretarlas, los tribunales nacionales de los Estados parte quedan obligados a tener en cuenta el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional Consuetudinario, según Gerhard Werle, Florian Jessberger, *Principles of International Criminal Law*, 4ª edición, Oxford University Press, Oxford 2020, p. 186, núm. 482.

⁷⁶ Véase TPIY, *Prosecutor v. Milan Milutinović et al.*, causa núm. IT-99-37-AR72, Decision on Dragoljub Ojdanić's Motion Challenging Jurisdiction – Joint Criminal Enterprise, 21 de mayo de 2003, párr. 42.

⁷⁷ TPIY, *Prosecutor v. Anto Furundžija*, causa núm. IT-95-17/1-T, Judgement, 10 de diciembre de 1998 (*Furundžija*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 227.

⁷⁸ CIJ, Causa Referente a Ahmadou Sadio Diallo (República de Guinea c. la República Democrática del Congo), Objeciones Preliminares, CIJ Informes 2007, 582–618, p. 615, párr. 90. Véase también, de manera similar, CDI, Proyecto de conclusiones sobre la identificación del Derecho Internacional Consuetudinario, párr. 66 (comentario núm. 7 a la conclusión núm. 11), señalando “que el comportamiento concordante de las partes en el tratado entre ellas podría atribuirse presumiblemente a la obligación convencional en lugar de a la aceptación de esa norma como vinculante en virtud del derecho internacional consuetudinario”. Si bien varios Estados sostuvieron la posición de que el

71. El punto de partida de tomar los Estatutos y la jurisprudencia del TPIY y del TPIR como medio para concretizar el marco jurídico de la presente investigación es que los Tribunales Penales de la ONU no han sido un ejercicio de creación legislativa del derecho internacional, sino que, para cumplir con el principio *nullum crimen sine lege*, según el Secretario General de la ONU, debían aplicar las normas que, sin lugar a duda, forman parte de Derecho Internacional Consuetudinario.⁷⁹ Conscientes de que el Derecho Internacional Penal sustantivo había evolucionado desde principios de los 90s,⁸⁰ los Tribunales han interpretado las disposiciones que definen los crímenes bajo su jurisdicción en este sentido, a menos que una intención de apartarse del Derecho Internacional Consuetudinario se expresara claramente en las definiciones de los crímenes bajo su jurisdicción o en otras fuentes autorizadas,⁸¹ o que la conducta fuera evidentemente criminal, según los principios generales del derecho reconocidos por todos los sistemas jurídicos.⁸²

72. Al realizar este trabajo, los Tribunales Penales de la ONU se basaron en los trabajos de codificación de Derecho Internacional Consuetudinario realizados por organismos internacionales, la jurisprudencia internacional, fuentes particularmente relevantes para la interpretación, y la legislación y la práctica de los Estados.⁸³ A pesar de algunas críticas de comentaristas contra la práctica de los Tribunales Penales de la ONU,⁸⁴ esta base para identificar e interpretar los elementos de los crímenes de derecho internacional se adecúa a las conclusiones sobre los medios de identificación de Derecho Internacional Consuetudinario de la Comisión de Derecho Internacional,⁸⁵ y responde a las particularidades del Derecho Internacional Penal.

73. La presente investigación también es consciente que la definición de crímenes de derecho internacional en la jurisprudencia de los Tribunales Penales de la ONU o la CPI debe ser considerada cuidadosamente a la luz de la jurisdicción que éstos estén ejerciendo y de la definición contenida en su base jurídica.⁸⁶ La CPI es una institución creada por un tratado multilateral que ya cuenta con una serie de salvaguardias que protegen a los Estados de una aplicación expansiva de la jurisdicción, y, por tanto, muy diferente a los Tribunales Penales de la ONU o a los tribunales de los Estados que ejercen la jurisdicción universal.⁸⁷

Estatuto debía codificar el Derecho Internacional Consuetudinario Penal y no extenderse al desarrollo progresivo del Derecho Internacional, la presente investigación es consciente que es debatible cuales son las normas que, previo a su inclusión en el Estatuto de Roma reflejaban Derecho Internacional Consuetudinario Penal, o se hayan convertido en Derecho Internacional Consuetudinario Penal tras su inclusión al Estatuto, o cuales son las normas que tenían este estatus al momento de su inclusión y continúan teniéndolo, o las que no lo tenían y pasaron a tenerlo posteriormente. Informe del Comité Preparatorio sobre el establecimiento de una corte penal internacional, Vol. I (Actuaciones del Comité Preparatorio en los períodos de sesiones de marzo y abril y de agosto de 1996), A/51/22, Suplemento núm. 22, párr. 54. Véase *Furundžija*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 227.

⁷⁹ Véase el memorándum explicativo del Secretario General, Informe presentado por el Secretario General de conformidad con el párrafo 2 de la resolución 808 (1993) del Consejo de Seguridad, S/25704, párr. 34.

⁸⁰ *Stakić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 412.

⁸¹ TPIY, *Prosecutor v. Dusko Tadić*, causa núm. IT-94-1-A, Judgement, 15 de julio de 1999 (*Tadić*, Sentencia de Apelación), párr. 296.

⁸² TPIY, *Prosecutor v. Zejnil Delalić et al.*, causa núm. IT-96-21-A, Judgement, 20 de febrero 2001, párrs. 179–180.

⁸³ TPIY, *Prosecutor v. Radislav Krstić*, causa núm. IT-98-33-T, Judgement, 2 de agosto de 2001 (*Krstić*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 541.

⁸⁴ Por ejemplo, Göran Sluiter, “Chapeau Elements” of Crimes Against Humanity in the Jurisprudence of the UN Ad Hoc Tribunals, en L. N. Sadat (ed.), *Forging a Convention for Crimes Against Humanity*, Cambridge University Press, Cambridge et al. 2011, 102–141, pp. 109 y ss.

⁸⁵ CDI, Proyecto de conclusiones sobre la identificación del Derecho Internacional Consuetudinario, párr. 65 (conclusiones núms. 11–14).

⁸⁶ Véase *Stakić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 413.

⁸⁷ Robert Dubler & Matthew Kalyk, *Crimes against Humanity in the 21st Century, Law, Practice and Threats to International Peace and Security*, Brill Nijhoff, Leiden & Boston 2018, p. 616.

74. Finalmente, el GHREN nota que la República de Nicaragua reafirma la importancia de la jurisprudencia comparada en materia de Justicia Constitucional,⁸⁸ Esto incluye la jurisprudencia internacional penal, para garantizar la plena e irrestricta vigencia de los derechos humanos, la investigación de sus violaciones, y el enjuiciamiento y castigo eficaz de los responsables de dichos crímenes en el territorio de la República, sin discriminar y de conformidad con las garantías judiciales y derechos humanos tutelados por los principios del derecho internacional.

II. Antecedentes y contexto

A. El desmantelamiento del Estado democrático y de Derecho

75. Durante la década de los 90 se llevaron a cabo importantes avances hacia la consolidación de un Estado democrático de Derecho en Nicaragua, con el fortalecimiento de la separación de poderes, esfuerzos para el desarrollo de un sistema electoral legítimo e independiente, y la despolitización de las fuerzas de seguridad.

76. En 1995, bajo el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, se llevaron a cabo reformas constitucionales con el objetivo de reducir algunas atribuciones de la Presidencia y fortalecer el rol de la Asamblea Nacional.⁸⁹ Entre otros aspectos, se limitó la reelección presidencial a dos mandatos no consecutivos, se acortó el mandato presidencial de seis a cinco años y se prohibió que las y los familiares del Presidente o Presidenta ocuparan cargos electos en el Poder Ejecutivo.⁹⁰ También se modificaron las reglas para la elección de la Presidenta o Presidente de la República, que pasó de elegirse por mayoría simple a un sistema en el que si ningún candidato o candidata obtenía el 45 por ciento de los votos, se celebraría una segunda vuelta de elecciones.⁹¹

77. Desde el año 2000, Nicaragua ha vivido un proceso inverso de regresión democrática, en el que se han dado una sucesión de reformas constitucionales, legales e institucionales que han desmantelado progresivamente la división de poderes y consolidado el control total del Estado por el Ejecutivo.

1. El pacto Alemán–Ortega

78. En enero del año 2000, el entonces Presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, y Daniel Ortega, en su carácter de líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), suscribieron un pacto llamado oficialmente “acuerdo de gobernabilidad”, que popularmente se conoció como el “Pacto”. A través de este Pacto, Alemán y Ortega llevaron a cabo una serie de reformas institucionales, legales y constitucionales orientadas a mantener y expandir las cuotas de poder de los dos partidos que lideraban respectivamente, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el FSLN, y que en aquél momento representaban las dos principales fuerzas políticas del país. Dichas reformas instauraron un sistema político bipartidista, y permitieron la partidización y subordinación de los Poderes Electoral y Judicial, así como de otras instituciones de control, al Poder Ejecutivo.

⁸⁸ Véase Ley No. 983, Ley de Justicia Constitucional, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 247, 20 de diciembre de 2018, art. 3, párr. 8 (“Otros métodos de interpretación: La interpretación de las normas jurídicas, se realizará atendiendo la legislación, la jurisprudencia, los principios generales del derecho la igualdad y la equidad, doctrina y la jurisprudencia comparada”). Véase también Constitución Política de Nicaragua, art. 46.

⁸⁹ Ley No. 192, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, aprobada el 1 de febrero de 1995, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 124 de 4 de julio de 1995 (en adelante “Ley No. 192”); Ley No. 199, Ley Marco de Implementación de las Reformas Constitucionales, aprobada el 3 de julio de 1995, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 125 del 5 de julio de 1995.

⁹⁰ Ley No. 192, art. 13 que reforma los arts. 147 y 148 de la Constitución Política de Nicaragua.

⁹¹ *Ibid.*

a) *La reforma constitucional del 2000*

79. La reforma constitucional del año 2000 reforzó el blindaje del titular del Poder Ejecutivo, elevando el quórum para retirar la inmunidad del Presidente de la República, de la mayoría absoluta de los diputados a dos tercios de los mismos.⁹² La reforma también estableció que, al concluir su periodo presidencial, el Presidente o Presidenta y el Vicepresidente o Vicepresidenta de la República, pasarían automáticamente a ocupar un escaño como diputada o diputado titular y suplente, respectivamente, en la Asamblea Nacional.⁹³ Del mismo modo, se asignaría un escaño a las candidatas o candidatos a la presidencia y vicepresidencia que hubieran logrado el segundo lugar en las elecciones generales. De este modo, según algunos comentaristas, los autores del Pacto se garantizaron la inmunidad parlamentaria durante la siguiente legislatura.⁹⁴

80. Un elemento crucial de la reforma fue la modificación de las reglas para la elección presidencial. El porcentaje de votos requeridos para obtener la presidencia o vicepresidencia en la primera vuelta pasó del 45 por ciento al 40 por ciento, o al 35 por ciento en caso de contar con una ventaja del cinco por ciento sobre la siguiente candidata o candidato.⁹⁵ Esta disminución del umbral electoral permitiría a Daniel Ortega regresar a la presidencia en 2007.

81. La Constitución Política de Nicaragua originaria de 1987 establecía una Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 7 magistradas y/o magistrados, que la reforma de 1995 había elevado a 12.⁹⁶ La reforma constitucional incrementó el número de integrantes de la Corte a 16 magistradas y/o magistrados y 16 conjuces,⁹⁷ y redujo su periodo de servicio de siete a cinco años.⁹⁸ De manera similar, se modificó la composición del Consejo Supremo Electoral (CSE), que pasó de integrarse por cinco magistradas y/o magistrados propietarios y cinco suplentes, a estar conformado por siete magistradas y/o magistrados propietarios y tres suplentes, que servirían durante un periodo de cinco años.⁹⁹ La Ley No. 330 sustituyó también la figura del Contralor o Contralora General de la República por un órgano colegiado –el Consejo Superior de la Contraloría General de la República– integrado por cinco contraloras o contralores propietarios y tres suplentes, que servirían por un periodo de cinco años.¹⁰⁰

82. La modificación del mandato de los magistrados y/o magistradas del Poder Judicial y del Poder Electoral, y del Consejo Superior de la Contraloría General, estableciendo periodos de cinco años, hizo que el vencimiento del plazo en sus funciones coincidiese con la toma de posesión de un nuevo Presidente o Presidenta de la República, permitiendo así que la presidencia determinara la renovación de las y los integrantes de estos órganos. En la práctica, esta reforma significó la repartición entre el FSLN y el PLC de los más altos cargos del Poder Judicial y del Poder Electoral: en 2001 el CSE se integró con cuatro personas vinculadas al FSLN y tres personas cercanas al PLC; y la CSJ se integró con ocho miembros afines al FSLN y otro por parte del PLC.¹⁰¹

⁹² Ley No. 330, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, aprobada el 18 de enero de 2000, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 13 del 19 de enero del 2000 (en adelante “Ley No. 330”), art. 3 que reforma el art. 130 de la Constitución Política de Nicaragua.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Manuel Ruiz Guerrero, *La Institucionalización del Sistema Político Nicaragüense: El Laberinto de las Reformas Constitucionales*, 2016, pp. 162–163, 165–166. Cabe señalar que dicho Pacto se forjó en un momento sensible para ambos líderes, en el que enfrentaban riesgos de ser sometidos a procesos de responsabilidad penal. En el caso de Arnoldo Alemán, el líder del PLC enfrentaba graves acusaciones de corrupción y malversación de fondos durante su gestión como alcalde de Managua y como Presidente de la República; mientras que Ortega enfrentaba una acusación por violación por parte de su hijastra, Zoilamérica Narváez Murillo.

⁹⁵ Ley No. 330, art. 4 que reforma el artículo 147 de la Constitución Política de Nicaragua.

⁹⁶ Ley No. 192.

⁹⁷ La figura de conjuce sustituyó a la de magistrada o magistrado suplente. Ley No. 330, art. 3 que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de Nicaragua.

⁹⁸ *Ibid.*, art. 6 que reforma el artículo 162 de la Constitución Política de Nicaragua.

⁹⁹ *Ibid.*, art. 7 que reforma el art. 170 de la Constitución Política de Nicaragua.

¹⁰⁰ *Ibid.*, art. 5 que reforma los arts. 154 y 156 de la Constitución Política de Nicaragua.

¹⁰¹ CIDH, *Nicaragua: Concentración del Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho*, 2021, p. 40; CEJIL, *Nicaragua ¿Cómo se reformó la institucionalidad para concentrar el poder?*, 2017, p. 5,

b. *Ley Electoral del 2000*

83. El pacto Alemán–Ortega permitió también reformar la legislación en materia electoral con la publicación de la Ley Electoral en enero del 2000.¹⁰² Dicha ley limitó la competencia electoral y restringió el ejercicio del derecho de participación política, al circunscribir la participación en los procesos electorales a los partidos políticos, excluyendo a las asociaciones de suscripción popular. La nueva Ley Electoral no reconocía las formas de organización tradicionales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, lo que imposibilitó que las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica participaran en las elecciones municipales de ese año.¹⁰³

84. La Ley Electoral también limitó la conformación de partidos políticos, la forma de afiliación y la obtención de la personalidad jurídica.¹⁰⁴ Determinó que, para poder obtener personalidad jurídica, las nuevas formaciones políticas deberían presentar un número de firmas igual o superior al tres por ciento del sufragio nacional, y constituir Directivas Municipales con al menos cinco integrantes, en todos los municipios del país.¹⁰⁵ Por otro lado, La ley amplió las causales para la cancelación de los partidos, para incluir, entre otras: la autodisolución o fusión del partido con otro; la no participación en todas las elecciones que se convoquen; la no obtención de al menos un cuatro por ciento de los votos válidos en las elecciones nacionales; o, en el caso de las alianzas electorales, la no obtención de un cuatro por ciento de los votos multiplicado por el número de partidos que integran la alianza.¹⁰⁶ Estas y otras disposiciones limitaron, de manera desproporcionada la participación política de los partidos minoritarios y de expresiones distintas a los partidos mayoritarios.¹⁰⁷

85. Entre otros temas, la ley determinó que las presidentas o presidentes de los Consejos Electorales Departamentales y Regionales de las Juntas Receptoras de Votos serían “designados alternativamente de entre los partidos políticos que hubiesen obtenido el primero y segundo lugar, en las últimas elecciones generales que se hayan celebrado”.¹⁰⁸ De esta manera, aseguraron que la presidencia de los Consejos Electorales de las Juntas Receptoras de Votos en los Departamentos y Regiones Autónomas sería ejercida en las siguientes elecciones por miembros de los dos partidos pactantes, el PLC y el FSLN.

2. Segundo gobierno de Daniel Ortega: 2007–2012

86. En las elecciones generales de 2006, fruto del nuevo sistema electoral que rebajaba el umbral para obtener la Presidencia, Daniel Ortega accedió al poder con el 38 por ciento de los votos válidos a nivel nacional. El FSLN obtuvo la presidencia y una mayoría simple de escaños en la Asamblea Nacional. Si bien no contaban con mayoría absoluta en la Asamblea, a su llegada al poder, como se ha expuesto, el FSLN encontró un sistema judicial y electoral partidizado a su favor.¹⁰⁹

87. A partir del 2007 se profundizaron las reformas y la adopción de leyes y políticas orientadas a la concentración del poder en la figura del Presidente y a garantizar el control continuado del Estado por el partido de Gobierno.¹¹⁰

disponible en: https://cejil.org/wp-content/uploads/pdfs/informe_cejil_sobre_nicaragua_-_derechos_politicos.pdf.

¹⁰² Ley No. 331, Ley Electoral, aprobada el 19 de enero del año 2000, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 16 del 24 de enero de 2000 (en adelante “Ley Electoral”).

¹⁰³ La organización indígena YATAMA interpuso una denuncia ante la CIDH. La CIDH remitió el caso ante la Corte IDH, la cual en 2005 declaró responsable internacionalmente a Nicaragua por la violación del derecho político a ser elegido, de las candidatas y candidatos de YATAMA. Corte IDH, Caso *Yatama vs. Nicaragua*, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia, 23 de junio de 2005, Serie C. No. 127, párrs. 209–221.

¹⁰⁴ CIDH, Nicaragua: Concentración del Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho, 2021, pp. 10 y 29.

¹⁰⁵ Ley Electoral, art. 65, núm. 8 y 9.

¹⁰⁶ Ley Electoral, art. 74.

¹⁰⁷ CEJIL, Nicaragua ¿Cómo se reformó la institucionalidad para concentrar el poder?, 2017, p. 6.

¹⁰⁸ Ley Electoral, art. 16.

¹⁰⁹ CEJIL, Nicaragua ¿Cómo se reformó la institucionalidad para concentrar el poder?, 2017, pp. 5–6.

¹¹⁰ CIDH, Nicaragua: Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho, 2021, p. 24.

a) *El debilitamiento de la autoridad municipal*

88. En noviembre de 2007, el Gobierno creó los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y Gabinetes del Poder Ciudadano (GPC) por Decreto Presidencial,¹¹¹ tras fracasar en sus intentos de hacerlo por la vía legislativa en la Asamblea Nacional.

89. Los CPC y GPC fueron concebidos como estructuras territoriales de participación ciudadana, con implantación en todo el país. Aunque *a priori* dichos mecanismos podrían contribuir al desarrollo democrático del país, éstos han sido objeto de duras críticas y denuncias debido a la proliferación de prácticas clientelares y el control partidista de ambas estructuras.¹¹² Las investigaciones del GHREN han recabado información sobre la participación de los CPC y GPC en la represión de la protesta social y las voces críticas al Gobierno (véase la sección B.3.b)

90. Además, este sistema socavó la autonomía municipal, al prever un rol limitado de las alcaldías y centralizar la coordinación de las estructuras de participación ciudadana en el Gabinete Nacional del Poder Ciudadano, presidido por el Presidente de la República y coordinado por Rosario Murillo.¹¹³ Así, se delegaron importantes tareas en los CPC y GPC, incluyendo relativas al manejo y distribución de ayudas y beneficios sociales, que operaban paralelamente a la autoridad municipal y coordinados directamente desde la presidencia.

b) *Las elecciones municipales de 2008*

91. Las acciones del CSE durante las elecciones municipales de 2008 minaron la credibilidad de la institución electoral y de los procesos electorales en el país. El CSE inició la campaña de las elecciones municipales de 2008 privando de su personería jurídica al partido de oposición Movimiento de Renovación Sandinista (MRS)¹¹⁴ y al Partido Conservador (PC),¹¹⁵ argumentando que habían incurrido en las causales de cancelación por “reincidencia” y “autodisolución” de la Ley Electoral.¹¹⁶ El CSE también resolvió en contra de Eduardo Montealegre en un conflicto interno por el control del partido de centroderecha Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), dando la razón a un sector próximo al FSLN, y favoreciendo el control del partido por una persona supuestamente cercana al Presidente Ortega, Eliseo Núñez Hernández.¹¹⁷

¹¹¹ Decreto Ejecutivo No. 112-2007, Creación de los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano, aprobado el 29 de noviembre de 2007, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 230 del 29 de noviembre del 2007 (en adelante “Decreto Ejecutivo No. 112”). El modelo de CPC y GPC debió ser introducido por Decreto Ejecutivo, tras fracasar la iniciativa de Ley en la Asamblea Nacional, lo que desencadenó una crisis política que se prolongó por varios meses.

¹¹² En 2010, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, en su informe sobre su visita a Nicaragua, expresó su preocupación sobre el rol de los CPC en la implementación de programas para lograr la seguridad alimentaria, y alertó sobre los riesgos de clientelismo político asociados. Ver A/HRC/13/33/Add.5, párrs. 56–58.

¹¹³ Decreto Ejecutivo No. 112, arts. 3–5.

¹¹⁴ CSE, Resolución de fecha 11 de junio de 2008 que cancela la personalidad jurídica del MRS. La resolución hace alusión a los arts. 173.12 de la Constitución Política de Nicaragua, a los arts. 63.2, 72, 74.3 y 75 de la Ley Electoral y a disposiciones internas del MRS. La sentencia sustenta la cancelación de la personalidad jurídica del MRS en los arts. 63.2 (reincidencia) y 74.3 (autodisolución) de la Ley Electoral. Véase, CIDH, *Movimiento Renovador Sandinista y otros* (Admisibilidad), Informe No. 18/19, Petición 1261-08, párrs. 5–7.

¹¹⁵ *Ibid.*, párrs. 8–10. Al Partido Conservador le fue restituida la personería jurídica en mayo de 2010.

¹¹⁶ La sentencia del CSE es poco clara en su fundamentación de la cancelación del partido. De acuerdo con el CSE, su decisión estaría vinculada con el proceso de reorganización interna que había llevado a cabo el MRS en 2007, y que implicó el cese en sus funciones de las Juntas Directivas Departamentales y Municipales del partido, y la designación de Juntas Directivas Provisionales. Según el CSE, el MRS habría incumplido la obligación contenida en el art. 63.2 de la Ley Electoral, de garantizar la mayor participación democrática en la elección de sus autoridades y candidatos. Sin embargo, la sentencia no especifica cómo se produjo, o qué hechos determinaron, la violación del art. 63. Además, el CSE consideró que la decisión de la Convención Nacional del MRS de cesar en sus cargos a varias autoridades partidarias, implicaría la autodisolución del partido (art. 74.3 de la Ley Electoral).

¹¹⁷ Anderson y Dodd, “Progreso en Medio de Retroceso?” *Journal of Democracy en Español* 2 (julio de 2010), 168–184; José Antonio Peraza, “Colapso del sistema electoral,” en Edmundo Jarquín, ed., *El régimen de Ortega ¿Una nueva dictadura familiar en el continente?*, 2016, p. 124.

92. Con carácter previo a las elecciones municipales, el CSE denegó la acreditación de observadores de la OEA y otros observadores internacionales y prohibió realizar encuestas a pie de urna.¹¹⁸ El CSE también fue señalado de manipular los padrones electorales y el proceso de cedulação.¹¹⁹ La oposición política denunció irregularidades durante la jornada electoral, en especial respecto de las alcaldías de Managua y León, y convocó manifestaciones para protestar por los resultados que consideraron fraudulentos.¹²⁰ Dichas manifestaciones fueron atacadas violentamente por grupos de choque, siendo éste uno de los primeros incidentes reportados de ataques contra manifestantes por grupos armados pro-gobierno.¹²¹

c) *La anulación de la interdicción de la reelección presidencial*

93. En octubre de 2009, el Gobierno junto con un grupo de alcaldes y vicealcaldes, una solicitud ante el CSE de inaplicación de la interdicción constitucional de reelección por dos períodos sucesivos del presidente o presidenta,¹²² vicepresidente o vicepresidenta, y de los alcaldes y vicealcaldes,¹²³ argumentando que dicha prohibición violaba el principio de igualdad consagrado en la Constitución. Luego de que el CSE rechazara dicha solicitud, los solicitantes interpusieron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ, la cual declaró “inaplicables” los artículos que prohibían la reelección presidencial.¹²⁴ En su sentencia, la Corte argumentó que dichos preceptos contravenían el principio de igualdad incondicional de todas y todos los nicaragüenses en el goce de los derechos políticos, y que generaban discriminación, ya que solo eran aplicables a quienes ocupaban los cargos de presidenta o presidente, vicepresidenta o vicepresidente, alcalde y vicealcalde.¹²⁵

94. En 2010, la CSJ anuló una disposición constitucional que prohibía los mandatos presidenciales consecutivos.¹²⁶ Dicha decisión permitió a Daniel Ortega, quien en aquel momento estaba ejerciendo la presidencia por segunda vez, presentarse de nuevo como candidato en las elecciones de 2011.

95. Tal y como se detalla más adelante, en 2014 la Asamblea Nacional, contando ya con mayoría absoluta del partido de Gobierno, reformaría la Constitución para eliminar toda restricción a la reelección presidencial y habilitar la reelección presidencial indefinida.¹²⁷

¹¹⁸ Jorge Salaverry, “Unas elecciones municipales cruciales en Nicaragua”, Real Instituto Elcano ARI No. 137/2008.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ El País, “El fraude electoral divide a Nicaragua”, 13 de noviembre de 2008, disponible en: https://elpais.com/diario/2008/11/14/internacional/1226617201_850215.html.

¹²¹ El País, “La oposición de Nicaragua marcha contra el fraude,” 16 de noviembre de 2008, disponible en: https://elpais.com/internacional/2008/11/17/actualidad/1226876402_850215.html.

¹²² La Constitución Política de Nicaragua vigente en 2009 prohibía la reelección por períodos sucesivos del presidente y vicepresidente del Gobierno, y de alcaldes y vicealcaldes en su art. 147, en virtud del cual “no podrán ser candidatos a la presidencia de la República el que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiere ejercido por dos períodos presidenciales”.

¹²³ Constitución Política de Nicaragua de 1987, con reformas de 1995, arts. 147 y 178.

¹²⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, Sentencia No. 504, 19 de octubre de 2009 (en adelante “Sentencia No. 504”), disponible en: <https://www.legal-tools.org/doc/47dd99/pdf/>.

¹²⁵ En los términos de la Sentencia, “la igualdad en la participación efectiva en la vida política de la nación; el derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos políticos y en la gestión estatal y elegir y ser elegidos por lo que esta Corte considera que los arts. 147 y 178 de la Constitución, generan desigualdad y discriminación, ya que es aplicable únicamente a quienes ocupan los cargos de presidente-vicepresidente; alcalde-vicealcalde. No obstante, es inaplicable para los demás cargos de elección popular directa —diputados ante la Asamblea Nacional, diputados ante el Parlamento Centroamericano, miembros de los Consejos de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica—, o de elección indirecta —magistrados de la Corte de Justicia, del Consejo Electoral, fiscal de la república, miembros de la contraloría de la república, procurador para la defensa de los derechos humanos, intendente y superintendente, entre otros”. Sentencia No. 504, p. 15.

¹²⁶ Corte Suprema de Justicia, Sentencia No. 6 de 30 de septiembre de 2010.

¹²⁷ Ley No. 854, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, aprobada el 29 de enero de 2014, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 26 del 10 de febrero de 2014 (en adelante “Ley No. 854”).

d) *El vencimiento de los mandatos de magistradas y magistrados de la CSJ y CSE*

96. En 2010, el Presidente Ortega emitió un decreto para prorrogar el mandato de las y los integrantes del CSE, la CSJ, la Contraloría General, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Fiscalía de la República.¹²⁸ Sin embargo, según estipula la Constitución Política de Nicaragua, los mencionados altos cargos solo pueden ser nombrados por la Asamblea Nacional. Se trata además de órganos cuyas acciones, independencia y autonomía habían sido ampliamente cuestionadas. Como resultado de este decreto, las funcionarias y los funcionarios concernidos continuaron desempeñando sus funciones durante más de tres años, a pesar del vencimiento de los plazos de su mandato.¹²⁹

e) *Las elecciones legislativas y presidenciales de 2011*

97. El CSE declaró al Presidente Daniel Ortega vencedor en las elecciones generales del 6 de noviembre de 2011, con el 62.5 por ciento del voto válido, y asignó 63 escaños al partido de Gobierno. Los observadores internacionales de la OEA y de la Unión Europea señalaron que el proceso electoral adoleció de numerosas irregularidades y de graves problemas estructurales, incluyendo falta de neutralidad y transparencia por parte del CSE.¹³⁰ Además, durante la jornada electoral se impidió el acceso de observadores nacionales e internacionales a varios centros de votación.¹³¹

98. La oposición política volvió a denunciar fraude y el candidato presidencial de la oposición, Fabio Gadea, rechazó los resultados. Por su parte, los observadores internacionales anunciaron que fue imposible verificar independientemente los resultados, ya que el CSE no proporcionó datos desagregados al nivel de los centros de votación, tal y como se establece en la Ley Electoral.¹³²

99. Las elecciones del 2011 estuvieron marcadas por las medidas adoptadas en el marco del Pacto Alemán-Ortega –incluyendo las reformas electorales y constitucionales–, las actuaciones del CSE y de la CSJ, y las divisiones internas de la oposición política. Los comicios legislativos del 2011 otorgaron el control absoluto de la Asamblea Nacional al Presidente Ortega.

3. Tercer Gobierno de Daniel Ortega: 2012–2017

100. Con 63 curules en la Asamblea Nacional, desde 2012 el FSLN ha contado con la mayoría necesaria para adoptar leyes, nombrar a altos funcionarios del Estado, e incluso reformar la Constitución Política de Nicaragua, sin necesidad de lograr acuerdos con otros grupos políticos en el órgano legislativo. La ausencia de contrapesos en el Poder Legislativo ha acelerado la erosión de la división de poderes y la partidización del Estado, exacerbando la influencia del partido de Gobierno sobre el sistema electoral y judicial.¹³³

101. En mayo de 2012, la Asamblea Nacional reformó la Ley Electoral, otorgando al CSE la facultad de revisar de manera continua el padrón electoral y de eliminar a las personas que no hubieran votado desde 2006, con el objetivo de depurar de padrón a los ausentes y

¹²⁸ Decreto Ejecutivo No. 3-2010, aprobado el 9 de enero de 2010, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 6 del 11 de enero de 2010.

¹²⁹ Informe de la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, A/HRC/23/43/Add.4, 2 de abril de 2013, párr. 68.

¹³⁰ OEA, Informe verbal de la Misión de Acompañamiento Electoral en Nicaragua, 15 de noviembre de 2011, disponible en: https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=S-41; Unión Europea - Delegación de observación de las elecciones, Elecciones presidenciales, legislativas y al PARLACEN en Nicaragua, 4-8 de noviembre de 2011, disponible en: https://eulafnetwork.org/wp-content/uploads/2016/01/proyecto_informe_nicaragua_es.pdf

¹³¹ *Ibid.*

¹³² The Carter Center, Las Elecciones de 2011 en Nicaragua Informe de una misión de estudio, 2011, pp. 8–9.

¹³³ En noviembre de 2012, durante una consulta regional sobre la independencia del Poder Judicial en América Central organizada por la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, los participantes subrayaron que los nombramientos de los magistrados de la CSJ estaban fuertemente influenciados por la política, especialmente teniendo en cuenta que el partido de Gobierno contaba con mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Véase A/HRC/23/43/Add.4, párr. 66.

fallecidos.¹³⁴ Cabe señalar que esta medida podría resultar en un sesgo del padrón, al expulsar del mismo a aquellas personas que hubieran optado por no participar en las elecciones, ya sea por falta de confianza en los procesos electorales, como acto de oposición, por encontrarse fuera del país, o por cualquier otro motivo.

a) *Las elecciones municipales de 2012*

102. Seis partidos o alianzas de partidos participaron en las elecciones municipales del 4 de noviembre de 2012.¹³⁵ Los candidatos y las candidatas a alcaldes del FSLN ganaron 134 de las 153 alcaldías existentes en el país, en un voto marcado por las acusaciones de fraude y de alta abstención. El FSLN logró controlar todas capitales departamentales menos Bilwi, de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) en manos de Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (YATAMA).¹³⁶

103. La Misión de Acompañamiento Electoral de la OEA, que monitoreó las elecciones, reconoció esfuerzos por parte de las autoridades electorales encaminados a una mejor organización de los procesos electorales y unas elecciones más equitativas. Sin embargo, afirmó también que las reformas a la Ley Electoral de 2012 no habían tomado en consideración elementos que permitirían al Estado de Nicaragua avanzar hacia un sistema electoral más transparente y confiable, notando en particular la utilización de un criterio partidista para la conformación de los diversos órganos electorales.¹³⁷

b) *La controversia en torno al proyecto del Gran Canal Interoceánico*

104. Entre 2012 y 2013, la Asamblea Nacional adoptó varias leyes para la construcción de un canal interoceánico que conectaría el mar Caribe con el océano Pacífico. Dichas iniciativas legislativas fueron promovidas por la representación del FSLN en la Asamblea por la vía de urgencia y prácticamente sin debate, y sin que se hubieran realizado estudios previos de impacto.¹³⁸

105. A través de la Ley No. 840, introducida por el Presidente Ortega y aprobada por la Asamblea Nacional en junio de 2013,¹³⁹ la empresa concesionaria del proyecto, una empresa China conocida como HKND, recibiría control sobre la infraestructura y derechos de propiedad sobre el canal durante 50 años, con la opción de extender dichos privilegios por otros 50 años. Al mismo tiempo, la Ley concedió al Gobierno amplias potestades para expropiar tanto propiedad privada como tierras ancestrales indígenas protegidas constitucionalmente.

106. El anuncio del proyecto del canal interoceánico, y de las correspondientes expropiaciones, provocó manifestaciones principalmente por grupos indígenas y campesinos, que se sucedieron desde 2013 hasta la crisis de abril de 2018. Las protestas fueron reprimidas por la policía y grupos de choque en varias ocasiones.¹⁴⁰

107. Días después de la votación de la Ley No. 840, la diputada Xochilt Ocampo del FSLN fue privada de su escaño por el CSE, supuestamente, tras abstenerse de votar a favor de la

¹³⁴ Ley No. 790, Ley de Reforma a la Ley No. 331, Ley Electoral, aprobada el 26 de mayo de 2012, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 95 del 23 de mayo de 2012.

¹³⁵ El partido YATAMA formó parte de la alianza del FSLN a nivel nacional, pero compitió individualmente como una séptima opción en tres municipios de la RAAN. OEA, Informe de la Misión de Acompañamiento Electoral, Elecciones Municipales del 4 de noviembre de 2012 en la República de Nicaragua, p. 9, disponible en: https://www.oas.org/es/sap/deco/moe_informe/info_final_moe_nicaragu%202012.pdf.

¹³⁶ *Ibid.*, p. 27.

¹³⁷ *Ibid.*, p. 29.

¹³⁸ CEJIL, Nicaragua: ¿Cómo se reformó la institucionalidad para concentrar el poder?, 2017, párr.43; CERD/C/NIC/CO/15-21, párr. 22.

¹³⁹ Ley No. 840, Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a El Canal, aprobada el 13 de junio de 2013, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 110 del 14 de junio de 2013.

¹⁴⁰ El País, “Nicaragua reprime las protestas contra el Canal”, 30 de noviembre de 2016, disponible en: https://elpais.com/internacional/2016/12/01/america/1480549730_004865.html.

Ley No. 840.¹⁴¹ En julio del mismo año, el CSE destituyó al diputado Agustín Jarquín, que mantenía una alianza con el FSLN desde el 2001, tras retirarse de la misma y unirse a la bancada del opositor Partido Liberal Independiente (PLI) como diputado independiente.¹⁴²

c) *La reforma constitucional de 2014*

108. En 2014, la Asamblea Nacional adoptó la Ley No. 854, reformando de nuevo la Constitución Política de Nicaragua. La reforma reforzó las atribuciones del Presidente o Presidenta de la República e introdujo cambios a las reglas para su elección.

109. Tal y como se adelantó más arriba, con la reforma del 2014, la Asamblea eliminó formalmente la interdicción de reelección presidencial de la Constitución, estableciendo la posibilidad de reelección indefinida.¹⁴³ Asimismo estableció un nuevo sistema de elección presidencial por mayoría relativa, eliminando la segunda vuelta.¹⁴⁴ Adicionalmente, la reforma expandió las facultades del Presidente o Presidenta para gobernar por la vía del Decreto,¹⁴⁵ estableció la ratificación con mayoría simple de la Asamblea Nacional de los altos cargos nombrados por la Presidencia,¹⁴⁶ y eliminó la obligación del Presidente o Presidenta de rendir cuentas a la Asamblea Nacional mediante la presentación de un informe anual.¹⁴⁷ En la misma línea, se estableció la subordinación directa de la Policía Nacional y del Ejército al Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo de la Policía Nacional¹⁴⁸ y Jefe Supremo del Ejército,¹⁴⁹ y se ampliaron las funciones del Ejército, facultándolo para ejercer tareas de seguridad ciudadana.

110. La reforma introdujo también consecuencias en caso de transfuguismo, determinando que las personas electas mediante sufragio universal a partir de listas cerradas propuestas por partidos políticos, que cambien de opción electoral durante el ejercicio de su cargo, perderán su condición de representantes y su suplente asumirá el escaño.¹⁵⁰ Dicho precepto sería utilizado en 2016 para expulsar de la Asamblea a 28 diputados del PLI.

111. Finalmente, la reforma de 2014 constitucionalizó las formas de participación directa implantadas por el Gobierno desde 2007, incluyendo los polémicos CPC y GPC.

d) *Las fuerzas de seguridad del Estado*

112. A lo ya descrito, deben sumársele los importantes cambios a la cadena de mando, funciones y funcionamiento de la Policía Nacional y del Ejército que se realizaron desde 2014.¹⁵¹ En su conjunto, éstos han permitido el incremento de la influencia partidista en el seno de ambas instituciones, y han asegurado el control por la figura del Presidente de la República de las fuerzas de seguridad del Estado.

¹⁴¹ La Prensa Panamá, “Destituyen a diputada sandinista que no votó por concesión de Gran Canal”, 25 de junio de 2013, disponible en: https://www.prensa.com/mundo/Destituyen-sandinista-concesion-Gran-Canal_0_3692630722.html; Cnn en español, “Protestas contra el Canal Interoceánico en Nicaragua dejan varios heridos”, 1 de diciembre de 2016, disponible en: <https://cnnespanol.cnn.com/2016/12/01/protestas-contra-el-canal-interoceanico-en-nicaragua-dejan-varios-heridos/>.

¹⁴² CENIDH, Informe alternativo sobre el estado de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (30 de agosto de 2019). El Faro, “Consejo Electoral de Nicaragua destituye a diputado oficialista por cambiar de bando”, 29 de julio de 2013, disponible en: <https://elfaro.net/es/201307/internacionales/12799/Consejo-Electoral-de-Nicaragua-destituye-a-diputado-oficialista-por-cambiar-de-bando.htm>.

¹⁴³ Ley No. 854, art. 29 que reforma el art. 147 de la Constitución Política de Nicaragua (del que se eliminó la prohibición de reelección).

¹⁴⁴ *Ibid.*, art. 28 que reforma el art. 146 de la Constitución Política de Nicaragua.

¹⁴⁵ *Ibid.*, art. 30 que reforma el art. 150 de la Constitución Política de Nicaragua.

¹⁴⁶ *Ibid.*, art. 27 que reforma el art. 138 de la Constitución Política de Nicaragua.

¹⁴⁷ *Ibid.*, el art. 30 que reforma el art. 150 de la Constitución Política de Nicaragua, transformando la presentación del informe anual en una atribución o facultad del Presidente.

¹⁴⁸ *Ibid.*, el art. 17 que reforma el art. 92 de la Constitución Política de Nicaragua.

¹⁴⁹ *Ibid.*, el art. 16 que reforma el art. 95 de la Constitución Política de Nicaragua.

¹⁵⁰ Constitución Política de Nicaragua, art. 131.

¹⁵¹ Cambios introducidos por la reforma constitucional de 2014, la reforma del Código Militar (Ley No. 855) y la nueva Ley de la Policía Nacional (Ley No. 872).

113. Las modificaciones han incluido la subordinación directa de la Policía Nacional y el Ejército al Presidente, la expansión de las potestades del Ejército y su involucramiento en tareas de seguridad ciudadana, la creación de la Policía Voluntaria, y el otorgamiento al Presidente de la facultad de prolongar en el cargo a los altos mandos de la Policía y el Ejército, entre otras.

114. En 2015, la adopción de la Ley de Seguridad Soberana¹⁵² desdibujó los límites entre la seguridad nacional y la seguridad interna, dejando al Presidente, como Jefe Supremo de las fuerzas de seguridad, un amplio margen de discrecionalidad para interpretar qué persona o qué conductas constituyen un riesgo a la seguridad soberana de Nicaragua.

e) *Las elecciones legislativas y presidenciales de 2016*

115. En junio de 2016, pocos meses antes de las elecciones presidenciales, la CSJ ordenó la destitución de Eduardo Montealegre como líder del PLI, que representaba la principal coalición opositora, y nombró a Pedro Reyes como nuevo líder del partido.¹⁵³ En julio, el CSE expulsó de la Asamblea Nacional a 28 diputadas y diputados (16 electos y 12 suplentes) del PLI,¹⁵⁴ elegidos por voto popular, por negarse a aceptar la autoridad del nuevo líder.¹⁵⁵ Como consecuencia del cambio de liderazgo del PLI, resultaron impedidos de participar como candidatos en las elecciones Luis Callejas y Violeta Granera, los candidatos para Presidente y Vicepresidenta, propuestos por la Coalición encabezada por el PLI.

116. En las elecciones generales, celebradas el 6 de noviembre de 2016, el FSLN obtuvo el 77 por ciento de los escaños (72 curules), según datos oficiales. Daniel Ortega logró un tercer mandato presidencial consecutivo con el 72.5 por ciento de los votos, mientras que su esposa, Rosario Murillo, resultó electa Vicepresidenta de la República. La oposición anunció un elevado abstencionismo, mientras que el CSE informó que la participación superó el 65 por ciento.¹⁵⁶

117. Las prácticas y tendencias descritas en el presente acápite se han exacerbado desde abril de 2018, con el creciente cierre del espacio cívico y democrático y numerosas y graves violaciones y abusos a los derechos humanos, y en particular a los derechos civiles y políticos (ver capítulo III).

4. Confusión entre el Estado y el partido, lo estatal y lo paraestatal

118. El desmantelamiento de la institucionalidad democrática en Nicaragua difuminó la línea divisoria entre lo institucional y lo paraestatal. En muchas ocasiones, los funcionarios y las funcionarias del Estado ejercen cargos públicos y simultáneamente forman parte de estructuras políticas o gremiales del FSLN, generando un solapamiento de los roles en el que se torna difícil diferenciar cuándo una persona actúa como autoridad pública y cuándo actúa como liderazgo político o miembro del partido. En algunas alcaldías, por ejemplo, el alcalde es también el secretario político del FSLN en el departamento, y por tanto la más alta autoridad del partido en la región. El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado Marvin Aguilar, es también secretario político nacional del Comité de Liderazgo Sandinista en la institución. El presidente de la Asamblea Nacional es Gustavo Porras

¹⁵² Ley No. 919, Ley de Seguridad Soberana de la República de Nicaragua, aprobada el 2 de diciembre de 2015, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 241 del 18 de diciembre de 2015 (en adelante “Ley de Seguridad Soberana”).

¹⁵³ El CSE aplicó la figura de transfuguismo (art. 131 de la Constitución) y dictaminó que su elección había sido invalidada por haberse desviado de la “línea del partido”. Ver Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, Sentencia Número 299, 8 de junio de 2016.

¹⁵⁴ Cinco de las diputadas y diputados expulsados, se habían presentado a las elecciones a través del PLI, pero pertenecían al cancelado MRS.

¹⁵⁵ CNN; Tormenta Política en Nicaragua tras Destitución de 28 Diputados Opositores, 29 de julio de 2016, disponible en: <https://cnnespanol.cnn.com/2016/07/29/tormenta-politica-en-nicaragua-tras-destitucion-de-28-diputados-opositores/>; NY Times, El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua Destituye a 28 Diputados Opositores, 29 de julio de 2016, disponible en: <https://www.nytimes.com/es/2016/07/29/espanol/america-latina/el-consejo-supremo-electoral-de-nicaragua-destituye-a-28-diputados-opositores.html>.

¹⁵⁶ El País. “Daniel Ortega gana las elecciones presidenciales en Nicaragua”, 7 de noviembre de 2016, disponible en: https://elpais.com/internacional/2016/11/07/america/1478498299_310594.html.

(FSLN), quien es también secretario general del Sindicato de Salud y Coordinador del Frente Nacional de Trabajadores, y que fue el encargado de coordinar el sistema de CPCs hasta 2014.

119. La situación descrita resultaría también en prácticas clientelares, y en la confusión por parte de la población acerca de programas y actividades llevadas a cabo con recursos del Estado con beneficios partidarios. Un ejemplo ilustrativo es el de las entregas de alimentos a hogares vulnerables bajo el programa “hambre cero”, o de láminas de zinc bajo el “plan techo”. De acuerdo con la información recopilada por el GHREN, la selección de los beneficiarios de estos programas se haría en función de la recomendación o sugerencia por parte de los Gabinetes de Familia (o CPC), en función de la lealtad al partido. Las entregas serían llevadas a cabo por miembros de las Juventudes Sandinistas.¹⁵⁷

120. Esta dinámica también se extiende a las actividades de represión a todos los niveles: desde la jerarquía nacional hasta las estructuras locales. Por ejemplo, se ha reportado la participación de funcionarios y funcionarias del Estado en grupos de choque que atacaron a personas manifestantes, que habrían sido reclutados para participar en estos grupos por los respectivos CLS o jefes sindicales en la institución pública a la que pertenecen. A nivel comunitario, los CPC coordinan estrechamente con las alcaldías, pero también con la policía voluntaria y con estructuras locales del FLSN. Así, numerosos testigos vinculan los hechos de hostigamiento a personas consideradas opositoras, incluyendo presas y presos excarcelados y sus familias, con los CPC, la policía y los “parapoliciales”.¹⁵⁸

121. Las prácticas y tendencias descritas en el presente acápite se han exacerbado desde abril de 2018, con el creciente cierre del espacio cívico y democrático y numerosas y graves violaciones y abusos a los derechos humanos, y en particular a los derechos civiles y políticos (véase el capítulo III).

B. Marco institucional

1. Los poderes del Estado

122. La Constitución de 1987 establece que Nicaragua es una república democrática, participativa y representativa, y que el poder público está dividido en cuatro poderes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Electoral.¹⁵⁹ Sin embargo, desde el año 2000 se ha venido dando una erosión gradual de la división de poderes, y la cooptación por parte del Gobierno, de todos los poderes del Estado. Asimismo, el Grupo ha recibido información que indica que desde 2007, se ha venido produciendo una partidización del Estado, con el uso de recursos públicos y del aparato institucional del Estado para promover y defender los intereses de las élites del partido de Gobierno.

123. El GHREN recibió múltiples alegaciones referentes a actos de corrupción y a la presencia de estructuras criminales en el seno de las instituciones públicas. Conforme a los análisis de organismos internacionales y de expertas y expertos entrevistados por el Grupo, la corrupción y la captura económica del Estado por las élites de Gobierno supuso para muchos individuos un fuerte incentivo para asegurar su participación de individuos en la comisión de violaciones de derechos humanos, al tiempo que promovió y facilitó la ejecución de dichas violaciones.¹⁶⁰

¹⁵⁷ Entrevistas del GHRENGGIV001, GGIV003.

¹⁵⁸ Véase capítulos III.A y III.B.

¹⁵⁹ Constitución Política de Nicaragua, art. 7.

¹⁶⁰ CIDH, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 288, párr. 113; entrevistas del GHREN GGIV001, GGIV002. El Índice de Percepciones de Corrupción (CPI), elaborado por la organización Transparency International, otorgaba un puntaje a Nicaragua (de 0 a 100, siendo 0 el más corrupto y 100 el menos corrupto), una puntuación de 20 en 2021, 22 en 2020 y 2019, 25 en 2018, 26 en 2017, 26 en 2016, 27 en 2015 y 9 en 2012; véase también BTI, “BTI 2022 Country Report”, pp. 8, 12–13, disponible en: https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2022_NIC.pdf.

a) *El Poder Ejecutivo*

124. El GHREN ha recibido información que indica que desde abril de 2018, una variedad de entes públicos e instituciones de Gobierno coordinaron acciones que han facilitado o contribuido a la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.¹⁶¹ Entre éstas se cuentan numerosas alcaldías, así como el Ministerio de Salud, Ministerio de Gobernación,¹⁶² el Ministerio de Transporte,¹⁶³ el Ministerio de Hacienda y Crédito Público¹⁶⁴, el Instituto Nacional de la Seguridad Social¹⁶⁵, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR)¹⁶⁶, y el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES).¹⁶⁷

125. El Poder Ejecutivo está integrado por el presidente o presidenta de la República, el vicepresidente o vicepresidenta de la República, los ministerios, entes gubernamentales, y los bancos y empresas estatales.¹⁶⁸ La Ley del Poder Ejecutivo¹⁶⁹ establece que habrá 16 ministerios, y determina sus respectivas áreas de competencia.¹⁷⁰

126. Nicaragua es un Estado centralizado. El país se divide administrativamente se divide en 15 Departamentos y dos regiones autónomas, y en 153 municipios.¹⁷¹ El nivel local del Gobierno se organiza en los municipios, gobernados y administrados con el Concejo

¹⁶¹ Véanse los capítulos III y V.

¹⁶² Sus competencias incluyen, entre otras: coordinar las actividades necesarias para garantizar el orden público y la prevención y persecución del delito; coordinar, dirigir y administrar el Sistema Penitenciario Nacional; coordinar la Dirección General de Migración y Extranjería; inscribir los Estatutos de las Personas Jurídicas sin fines de lucro, administrar su registro y supervisar su funcionamiento; y realizar las coordinaciones pertinentes con el Ministerio de Defensa para el desarrollo de acciones conjuntas por la Policía y el Ejército según las instrucciones del Presidente. En 2014 la reforma a la Ley de la Policía Nacional suprimió el rol del Ministerio de Gobernación como entidad de supervisión y control intermedia entre el Presidente y la jefatura de la institución policial. El puesto de Ministra de Gobernación lo ocupa desde enero de 2017 María Amelia Coronel Kinloch, Nombramiento publicado en la Gaceta Oficial No. 10 del 16 de enero de 2017. Luis Cañas Novoa se desempeña como Viceministro de Gobernación, nombrado en la Gaceta Oficial No. 103 del 4 junio 2015. Roger Ramírez Guzmán como Viceministro para Asuntos Específicos; nombrado por acuerdo presidencial No. 16-2016, aprobado el 21 de enero de 2016, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 17 del 26 de enero de 2016. Carla Eugenia Salinas se desempeña como Viceministra para Funciones Específicas; nombrada por acuerdo presidencial No. 107-2020, aprobado el 4 de septiembre de 2020, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 168 del 8 de septiembre de 2020.

¹⁶³ Óscar Mojica Obregón, exmilitar retirado del Ejército y Ministro de Transporte e Infraestructura (MTI). Nombrado por acuerdo presidencial No. 126-2017, aprobado el 17 de agosto de 2017, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 157 del 18 de agosto de 2017.

¹⁶⁴ Iván Acosta, Ministro de Hacienda y Crédito Público. Nombrado por acuerdo presidencial No. 26-2012, aprobado el 13 de febrero de 2012, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 29 del 14 de febrero de 2012

¹⁶⁵ Roberto López funge como Presidente Ejecutivo del INSS. Nombrado con el Acuerdo No. AP-01-2012 y publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 23 del 6 de febrero de 2012.

¹⁶⁶ Nahima Janet Díaz Flores, hija del Comisionado General Francisco Díaz, sucedió a Orlando Castillo como directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) desde junio de 2020. TELCOR es un ente descentralizado, bajo la rectoría sectorial directa de la Presidencia.

¹⁶⁷ El CONPES es un órgano de apoyo del Presidente con el objetivo de dirigir la política económica y social del país. Entre otras funciones, está a cargo de la coordinación e implementación del sistema de CPC, estructuras que han sido señaladas por su participación en acciones de represión de la protesta social y de vigilancia y silenciamiento de voces disidentes.

¹⁶⁸ Constitución Política de Nicaragua, art. 3.

¹⁶⁹ Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo con reformas incorporadas, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 35 del 22 de febrero de 2013 (en adelante “Ley del Poder Ejecutivo”).

¹⁷⁰ Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Gobernación; Ministerio de Defensa; Ministerio de Educación; Ministerio de Salud; Ministerio Agropecuario y Forestal; Ministerio de Fomento, Industria y Comercio; Ministerio de Transporte e Infraestructura; Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales; Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez; Ministerio de Energía y Mina; Ministerio del Trabajo; Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa; Ministerio de la Mujer; y Ministerio de la Juventud.

¹⁷¹ Constitución Política de Nicaragua, art. 175.

Municipal, presidido por las y los alcaldes y vicealcaldes.¹⁷² Tras las elecciones municipales de noviembre de 2022, el Consejo Supremo Electoral asignó la totalidad de las alcaldías del país al partido de Gobierno (véase el capítulo III.B.).¹⁷³

127. La Constitución Política de Nicaragua reconoce la autonomía de las regiones de la costa Atlántica: la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).¹⁷⁴ Se trata de entidades jurídicas y políticas conformadas por los pueblos indígenas y afrodescendientes, incluyendo los pueblos *miskitu*, *mayangna*, *rama*, *creole*, garífuna y mestizo, que cuentan con jurisdicción para administrar sus asuntos bajo sus propias formas de organización, conforme a sus tradiciones y culturas.

128. Según la Constitución Política de Nicaragua, el presidente de la República es el jefe de Gobierno, jefe de Estado, y jefe supremo del Ejército y de la Policía Nacional de Nicaragua.¹⁷⁵ En la práctica, el sistema presidencial nicaragüense está marcado por la fuerte tradición histórica de concentración del poder en la figura del presidente o presidenta, la lógica revolucionaria del FSLN y de la visión del Presidente Daniel Ortega, y la debilidad institucional y la fragilidad democrática. Además, en virtud de la reforma constitucional de 2014, el presidente puede reelegirse indefinidamente.¹⁷⁶

129. Desde la llegada al Gobierno de Daniel Ortega en 2007, ha proliferado la creación de puestos y las designaciones de cargos de confianza. Por ejemplo, en julio de 2022, periodistas de investigación detectaron al menos 27 asesores presidenciales en la planilla del Estado.¹⁷⁷ Según este medio, las funciones de dichos asesores se desconocen. Al menos cinco de ellos eran exguerrilleros, y dos exmilitares cercanos a la Presidencia. El hijo del Presidente y la Vicepresidenta, Laureano Ortega Murillo, también figuraba entre los asesores de la Presidencia.¹⁷⁸

130. Al mismo tiempo se ha producido un proceso de desinstitucionalización democrática y de partidización del Estado. Numerosas fuentes refirieron que para obtener un empleo en el sector público, es necesario contar con la recomendación del CPC local, o de los secretarios o miembros de los CLS.¹⁷⁹ Las fuentes entrevistadas denunciaron también presiones en el seno de las instituciones para pagar cuotas mensuales al partido FSLN, así como para participar en actividades políticas y de apoyo al Gobierno.¹⁸⁰

b) *El Poder Electoral*

131. El Poder Electoral es el ente encargado de organizar, dirigir y vigilar los procesos electorales. Lo conforman el CSE, los Consejos Departamentales, los Consejos Municipales y las Juntas Receptoras de Votos.¹⁸¹ El CSE está integrado por siete magistradas y magistrados propietarios y tres suplentes, elegidos por la Asamblea Nacional por un periodo de cinco años, durante el cual gozan de inmunidad.¹⁸²

¹⁷² Ley No. 40, Ley de Municipios, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 155 del 17 de agosto de 1988, art. 18.

¹⁷³ Resultados de las elecciones municipales de 2022 disponibles en: <https://www.lagaceta.gob.ni/primeros-resultados-de-las-elecciones-soberanas-municipales-2022-en-nicaragua/>.

¹⁷⁴ Constitución Política de Nicaragua, arts. 180–181.

¹⁷⁵ *Ibid.*, arts. 92, 97 y 144.

¹⁷⁶ *Ibid.*, art. 148 (del que se eliminó la prohibición de reelección).

¹⁷⁷ El Presidente tendría más asesores que ministros.

¹⁷⁸ Nicaragua Investiga, “Los asesores decorativos de Daniel Ortega: un gasto de más de C\$30 millones al año”, disponible en: <https://nicaraguainvestiga.com/reportajes/89234-asesores-decorativos-daniel-ortega-gasto-millonario/>.

¹⁷⁹ Entrevistas del GHREN GGIV001, GGIV003, BBIV012, BBIV035. Los CPC y CLS constituyen unidades locales de control político y social al nivel de las instituciones en el caso de los CLS, y de las comunidades para los CPC.

¹⁸⁰ Entrevistas del GHREN BBIV001, BBIV006, BBIV0012, BBBIV013 BBIV0015.

¹⁸¹ Constitución Política de Nicaragua, arts. 168 y 169.

¹⁸² *Ibid.*, arts. 170 y 172.

132. En Nicaragua se celebran comicios para elegir al presidente de la República, diputados nacionales, diputados departamentales, diputados al parlamento centroamericano, alcaldes y concejales.¹⁸³

133. Desde las elecciones municipales de 2008, numerosas voces han denunciado irregularidades en la gestión de procesos electorales por parte del CSE.¹⁸⁴ Como se expuso en el capítulo 2.1.1, el CSE ha actuado con opacidad y ha adoptado una serie de decisiones que han favorecido al partido de Gobierno, facilitando así la cooptación de Estado.

c) *El Poder Legislativo*

134. De acuerdo con la Constitución Política de Nicaragua, el Poder Legislativo lo ejerce la Asamblea Nacional por delegación y mandato del pueblo. La Constitución garantiza el sufragio universal, igualitario, directo, libre y secreto, mediante el sistema de representación proporcional.¹⁸⁵

135. La Asamblea Nacional está integrada por 90 diputados o diputadas, con sus respectivos suplentes, de los cuales 20 son elegidos a nivel nacional, y 70 en las circunscripciones departamentales y regiones autónomas. Los diputados o diputadas son elegidas por un periodo de cinco años, durante los cuales gozan de inmunidad y están exentos de responsabilidad por sus opiniones.¹⁸⁶ Cabe señalar que, en virtud de la reforma constitucional del año 2000, el ex Presidente o ex Presidenta de la República y el ex Vicepresidente o ex Vicepresidenta electos en el periodo inmediato anterior, así como las personas candidatas a Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente que hubieran obtenido el segundo lugar en dicha elección, se incorporarán a la Asamblea Nacional como Diputados.¹⁸⁷

136. Las atribuciones de la Asamblea Nacional incluyen: la elaboración y aprobación de leyes y decretos; la concesión de amnistías e indultos; la fiscalización de las labores del Ejecutivo;¹⁸⁸ la destitución de personas funcionarias del Gobierno; el otorgamiento y la revocación de personerías jurídicas de las asociaciones civiles; la aprobación o rechazo de instrumentos internacionales celebrados con países u organismos de Derecho Internacional; y la elección¹⁸⁹ de las magistradas y magistrados de la CSJ y del CSE, de la Fiscal o el Fiscal General, de la Procuradora o Procurador y Subprocuradora o Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, y de las y los integrantes del Consejo Superior de la Contraloría General, entre otros.¹⁹⁰

137. El pluralismo en la Cámara Legislativa ha venido reduciéndose desde el retorno de Daniel Ortega al Gobierno en 2007. El partido de Gobierno, el FSLN, goza de mayoría absoluta en la Asamblea Nacional desde el año 2011.¹⁹¹ Desde aquella legislatura contaron con la mayoría necesaria para llevar a cabo reformas parciales o totales de la Constitución.¹⁹²

¹⁸³ Ley Electoral, art. 1.a.

¹⁸⁴ Noticias ONU, “Elecciones en Nicaragua: ONU Derechos Humanos condena la falta de garantías a derechos y libertades”, 4 de noviembre de 2021; Nicaragua: Elecciones 2021: Un Plan Doloso para Acabar con la Democracia, disponible en: <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/nicaragua-elecciones-2021.pdf>.

¹⁸⁵ Constitución Política de Nicaragua, art. 132.

¹⁸⁶ *Ibid.*, arts. 132, 136 y 139.

¹⁸⁷ *Ibid.*, art. 133.

¹⁸⁸ A través de la solicitud de informes y de comparecencia a Ministras y Ministros, Viceministras y Viceministros, Procurador o Procuradora General y Subprocurador o Subprocuradora General, Presidentes y Presidentas de entes autónomos y Gubernamentales.

¹⁸⁹ Las candidatas y los candidatos deberán ser propuestos para cada cargo por el Presidente de la República y por las Diputadas y Diputados de la Asamblea Nacional, y elegidos por al menos el sesenta por ciento de las Diputadas y Diputados de la Asamblea.

¹⁹⁰ Constitución Política de Nicaragua, art. 138.

¹⁹¹ En 2011 obtuvieron 63 escaños, o el 68 por ciento de la Asamblea Nacional.

¹⁹² El artículo 194 de la Constitución Política de Nicaragua requiere un 60 por ciento de votos para la aprobación de una reforma parcial, o dos tercios para una reforma total de la Constitución.

138. Composición durante el periodo que abarca el mandato del GHREN

- 2017–2022. El 9 de enero de 2017, tomaron posesión 90 diputados y diputadas electas a la Asamblea Nacional de Nicaragua. Así, la Asamblea Nacional quedó integrada por 71 diputados del FSLN (70 electos más el escaño reservado constitucionalmente para el Vicepresidente de la República saliente), 13 del PLC, 2 del PLI, 2 de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), 1 del Partido Conservador, 1 de la Alianza por la República y 1 del partido indígena YATAMA.
- 2022–2027. La actual Asamblea Nacional se instaló el 9 de enero de 2022. El FSLN ocupa 75 escaños; el PLC¹⁹³ tiene 10 legisladores (9 electos más el que corresponde por ley al candidato presidencial que quedó en el segundo lugar, Walter Espinoza); el PLI y la ALN tienen dos parlamentarios respectivamente; y la Alianza por la República y YATAMA tienen un representante uno cada uno. Además de la Junta Directiva de la Asamblea, presidida por Gustavo Porras,¹⁹⁴ parlamentarios del FSLN presiden 13 de las 16 comisiones de la Asamblea Nacional.

139. La mayoría absoluta del FSLN en la Asamblea Nacional permitió al partido de Gobierno adoptar medidas legislativas de manera expedita, y reforzar la concentración de poder en el Ejecutivo y, en particular, en la figura del presidente.

140. La Asamblea Nacional no sólo no ha ejercido su labor de fiscalización del Poder Ejecutivo de manera eficaz, sino que ha adoptado medidas orientadas a garantizar la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos. En junio de 2019, la Asamblea presentó y aprobó la iniciativa de Ley de Amnistía, pese a las preocupaciones expresadas por las instituciones de derechos humanos.¹⁹⁵ En noviembre de 2021, la Asamblea solicitó al presidente Daniel Ortega que expulsase del país a la Organización de Estados Americanos (OEA), a raíz de las críticas de este organismo a los comicios de 2021.¹⁹⁶

141. La Asamblea Nacional también ha contribuido a las acciones del Gobierno para reprimir y silenciar a las personas opositoras o que son percibidas como tales. Desde abril de 2018, el órgano legislativo ha desarrollado y aprobado varias leyes que contribuyen a la destrucción del espacio cívico y criminalizan el ejercicio de derechos civiles y políticos (véase el capítulo III.B). Asimismo, la Asamblea Nacional jugó un papel directo en la cancelación de la personería jurídica de más de cientos de organizaciones de la sociedad civil.¹⁹⁷

142. La dominancia total del FSLN en la Asamblea Nacional desde 2011 también ha permitido al Gobierno controlar el nombramiento de todos los puestos clave en los restantes poderes del Estado, tales como del o la Fiscal General o los magistrados y Magistradas del CSE y de la CSJ.

¹⁹³ El PLC es considerado por la oposición como un partido aliado del FSLN.

¹⁹⁴ Se trata del quinto período consecutivo como legislador de Porras, quien preside la Asamblea Nacional desde 2017. Cabe notar que Porras es uno de tres diputados sandinistas sancionados por Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y la Unión Europea. Las listas de sanciones están disponibles en: <https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2019/06/nicaragua-sanctions.html>; <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm715>; <https://www.gov.uk/government/news/uk-imposes-sanctions-on-senior-nicaraguan-individuals-following-rigged-elections>; <https://www.opensanctions.org/entities/Q28173996/>.

¹⁹⁵ En junio de 2019, la entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó sobre la Ley de Amnistía y la falta de reparación a las víctimas, y expresó que la adopción de una amplia Ley de Amnistía podría impedir el procesamiento de personas potencialmente responsables de graves violaciones de derechos humanos: <https://www.ACNUDH.org/nicaragua-bachelet-alerta-acerca-de-la-ley-de-amnistia-y-la-falta-de-reparacion-a-las-victimas/>. Véase <https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/145.asp>.

¹⁹⁶ Carta del Ministro de Relaciones Exteriores al Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes, el 18 de noviembre de 2021, MRE/DM/00284/11/21.

¹⁹⁷ DW en español, “Denuncian la disolución de más de 3.000 ONG en Nicaragua”, 7 de diciembre de 2022, disponible en: <https://www.dw.com/es/denuncian-la-disoluci%C3%B3n-de-m%C3%A1s-de-3000-ong-en-nicaragua/a-64009140>

d) *El Poder Judicial*

143. La Constitución Política de Nicaragua reconoce el derecho al acceso a la justicia efectiva de todos los y todas las nicaragüenses¹⁹⁸ y establece que los magistrados, magistradas, jueces y juezas, deben regirse en el ejercicio de su actividad judicial por los principios de igualdad, publicidad, gratuidad y derecho a la defensa.¹⁹⁹

144. La falta de independencia del sistema judicial –el cual incluye tanto los órganos jurisdiccionales como los órganos auxiliares del Poder Judicial– constituye uno de los factores estructurales que han contribuido a las violaciones y abusos de derechos humanos identificados por el GHREN. El uso indebido del sistema de justicia para perseguir constreñir el ejercicio de libertades fundamentales y la impunidad prevalente frente graves violaciones a los derechos humanos no sólo constituyen violaciones del derecho al acceso a la justicia, sino que también han facilitado la perpetuación y el escalamiento de otras violaciones y abusos.

145. Los Tribunales de Justicia forman un sistema unitario cuyo órgano superior es la Corte Suprema de Justicia. El Poder Judicial está constituido, además, por tribunales de apelación, juzgados de distrito y juzgados locales.

146. La carrera judicial²⁰⁰ se rige por los principios de mérito, responsabilidad, igualdad, publicidad, estabilidad, imparcialidad, independencia y especialidad.²⁰¹ Para el ingreso en la carrera judicial, debería realizarse un concurso de mérito y pruebas de oposición previa convocatoria pública. Sin embargo, la información obtenida por el GHREN apunta a que no ha habido concursos por oposición desde 2017.²⁰²

147. En materia penal, los jueces locales pueden conocer y resolver, en primera instancia, de las causas por faltas penales y por delitos menos graves. Por su parte, los jueces y juezas de distrito conocen y resuelven en primera instancia las causas por delitos graves, con o sin intervención de jurado, y en segunda instancia las resoluciones dictadas por los jueces y juezas locales.²⁰³ Las salas penales de los tribunales de apelación, constituyen la segunda instancia en cuanto a los autos previstos por el Código Procesal Penal y a sentencias dictadas por los jueces de distrito. Desde abril de 2018, los Juzgados de Distrito de lo Penal han conocido en primera instancia la mayoría de los casos dirigidos contra personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales. La última instancia de casación en materia penal es la Sala de lo Penal de la CSJ, que es también competente para la revisión de casos de delitos graves.²⁰⁴ Los jueces y juezas de ejecución de la pena controlan el cumplimiento del régimen penitenciario y el respeto de las finalidades constitucionales y legales de la pena y de las medidas de seguridad.

148. En los casos contra personas opositoras al Gobierno, reales o percibidas, el GHREN ha identificado un patrón de sustracción del juez natural a quien le correspondería por ley llevar el caso, a favor de los juzgados de distrito de Managua (véase el capítulo III.B). Para ello se ha utilizado como base jurídica el artículo 22 del Código Procesal Penal que permite lo anterior “cuando se trate de delitos de relevancia social y trascendencia nacional”. La imprecisión de esta disposición no ofrece criterios para determinar las circunstancias en las que sería aplicable, abriendo la puerta a la discrecionalidad y arbitrariedad en el ejercicio de la competencia.

¹⁹⁸ Constitución Política de Nicaragua, art. 160.

¹⁹⁹ *Ibid.*, art. 165.

²⁰⁰ *Ibid.*, art. 159.

²⁰¹ Ley de Carrera Judicial, art. 2.

²⁰² Entrevistas del GHREN BBIV001, BBIV006, BBIV012, BBIBV035; documento en archivo del GHREN BBD0C337.

²⁰³ Ley No. 260, Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada el 7 de julio de 1998, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 137 del 23 julio 1998 (en adelante “Ley Orgánica del Poder Judicial”), art. 48, reformado por el art. 423, del Código Procesal Penal. Ley No. 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 243 del 21 de diciembre de 2001 y No. 244 del 24 de diciembre de 2001 (en adelante “Código Procesal Penal”).

²⁰⁴ Código Procesal Penal, art. 21.

149. Asimismo, según la información recabada por el GHREN, si bien existe un sistema aleatorio de reparto en la distribución de asuntos judiciales, existiría supuestamente una clave de acceso directo que permitiría asignar de manera directa asuntos a juzgados específicos. Esto habría servido para el tráfico de influencias y para el reparto de los casos de interés político para el Gobierno a juzgados específicos.²⁰⁵

i) Órganos jurisdiccionales

a. La Corte Suprema de Justicia

150. La CSJ es competente, entre otras atribuciones consagradas en la Constitución: para organizar y dirigir la administración de justicia; para conocer y resolver los recursos presentados contra los tribunales de justicia, los de amparo por violación de derechos establecidos en la Constitución Política de Nicaragua, y los recursos de inconstitucionalidad; para nombrar y destituir a los magistrados de tribunales de apelaciones, tribunales militares y en general al secretario de la CSJ y a los defensores públicos y jueces de todo el país; y para resolver las solicitudes de extradición y autorizar las solicitudes de ejecución de sentencias pronunciadas en el extranjero.²⁰⁶ El pleno de la CSJ de Justicia es competente también para conocer de las causas penales contra el Presidente y Vicepresidente de la República, una vez retirada la inmunidad por la Asamblea Nacional.²⁰⁷

151. Según lo establecido en la Constitución Política de Nicaragua, la CSJ está integrada por 16 magistrados, elegidos por la Asamblea Nacional a partir de ternas propuestas por el presidente de la República²⁰⁸ y por los propios diputados.²⁰⁹ Las y los magistrados de la CSJ son nombrados por un periodo de cinco años, gozan de inmunidad, y sólo pueden ser separados de sus cargos por las causas previstas en la Constitución y la ley. La CSJ está compuesta por cuatro salas: constitucional, civil, penal y contencioso-administrativa. Cada sala está integrada por al menos tres magistradas o magistrados.²¹⁰ La presidenta de la CSJ es, desde el año 2010, Alba Luz Ramos Vanegas y el actual vicepresidente de la CSJ es Marvin Aguilar García.²¹¹

152. La CSJ, a través del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, planifica y ejecuta la política administrativa y financiera del Poder Judicial, y conoce de las infracciones al régimen disciplinario.²¹² La Comisión de Régimen Disciplinario está formada por un mínimo de tres Magistrados de la CSJ²¹³ y es la encargada de conocer en primera instancia de las infracciones al régimen disciplinario cometidas por funcionarios del régimen de carrera judicial.²¹⁴ También tiene la competencia de conocer de los reclamos disciplinarios que levanten los clientes contra abogados y notarios.²¹⁵

²⁰⁵ Entrevistas del GHREN BBIBV035, BBIV038.

²⁰⁶ Constitución Política de Nicaragua, art. 164.

²⁰⁷ *Ibid.*, art. 130.

²⁰⁸ *Ibid.*, art. 163. A diciembre de 2022, la CSJ contaba con diez magistrados; habiendo renunciado cuatro (Rafael Solís, Carlos Aguerri Hurtado, José Adán Guerra e Ileana Pérez) y fallecido dos (Francisco Rosales y Ligia Molina).

²⁰⁹ Cada Magistrada o Magistrado o es elegido con el voto favorable de al menos el sesenta por ciento de los Diputados, en virtud del art. 138 de la Constitución Política de Nicaragua.

²¹⁰ Constitución Política de Nicaragua, arts. 162–163.

²¹¹ Los puestos de Presidenta o Presidente, y Vicepresidenta o Vicepresidente de la CSJ son elegidos por la mayoría de los votos de los jueces que la integran, por un período de dos años, pudiendo ser reelectos en dichos cargos. Ver Constitución Política de Nicaragua, arts. 162–163.

²¹² Ley No. 501, Ley de Carrera Judicial, aprobada el 14 de octubre del 2004, publicada en Las Gacetas, Diario Oficial Nos. 9, 10 y 11 del 13, 14 y 17 de enero de 2005 (en adelante “Ley de Carrera Judicial”), art. 4.

²¹³ Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 71.

²¹⁴ *Ibid.*, art. 72.

²¹⁵ *Ibid.*, art. 72.

b. Los tribunales de apelaciones

153. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece un tribunal de apelaciones en cada una de las nueve circunscripciones judiciales de Nicaragua.²¹⁶ Estos tribunales son competentes para: conocer en segunda instancia de los recursos presentados en contra de los juzgados de distrito; conocer los recursos de amparo y de exhibición personal, así como de revisión en material penal; conocer en primera instancia los procesos especiales de responsabilidad por delitos propios de determinados funcionarios públicos y, en segunda instancia, los delitos cometidos por jueces locales.²¹⁷

c. Los juzgados de distrito

154. Cada departamento y región autónoma en Nicaragua cuenta con al menos un juzgado de distrito, con sede en la cabecera de estos. Los juzgados se clasifican, según la materia, en juzgados únicos, civiles, de familia, de lo penal, del trabajo y especiales. Los juzgados de distrito son unipersonales y sus jueces y juezas son nombrados por tiempo indefinido por el pleno de la CSJ y son inamovibles del cargo, salvo en casos de destitución por los supuestos establecidos en la ley.²¹⁸

d. Los juzgados locales

155. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece al menos un juzgado local en cada municipio, con sede en la cabecera municipal. Al igual que los juzgados de distrito, estos juzgados son unipersonales y sus jueces y juezas son inamovibles del cargo. Se clasifican, según la materia, en juzgados únicos, civiles, de familia, de lo penal, del trabajo y especiales.²¹⁹

ii) Órganos auxiliares del Poder Judicial

a. La Dirección Nacional de la Defensoría Pública

156. La Constitución Política de Nicaragua consagra el derecho a la debida defensa y establece que toda persona tiene derecho, entre otras garantías mínimas vinculadas a la tutela judicial efectiva, a tener acceso a un defensor de oficio.²²⁰ El Estado, a través de la Dirección de Defensores Públicos, garantiza la asesoría legal de un defensor público o defensora pública a las personas que no tengan capacidad económica para sufragar los gastos de un abogado o abogada particular, así como en los casos de abandono, revocatoria, muerte, renuncia o excusa del abogado o abogada.²²¹ El Código Procesal Penal establece que sólo se designará abogado defensor público o de oficio en aquellos casos en los que la persona acusada no haya designado a un representante legal de libre elección.²²²

157. La Defensoría Pública fue creada en 1998 como órgano autónomo del Poder Judicial.²²³ Sin embargo, el cargo de defensor público forma parte de la carrera judicial, mientras que la Dirección de Defensores Públicos es un órgano que depende de la CSJ.²²⁴ En la actualidad, la institución, dirigida por Clarisa Indiana Ibarra Rivera, cuenta con un total de 18 delegaciones departamentales de la Dirección de Defensores Públicos.²²⁵

²¹⁶ *Ibid.*, arts. 38 y 40.

²¹⁷ *Ibid.*, art. 41.

²¹⁸ *Ibid.*, arts. 44–46.

²¹⁹ *Ibid.*, arts. 52–54.

²²⁰ Constitución Política de Nicaragua, art. 34.1.

²²¹ Código Procesal Penal, art. 4, párr. 1.

²²² Constitución Política de Nicaragua, art. 34 y Código Procesal Penal, art. 4, párr. 2.

²²³ La Ley Orgánica del Poder Judicial entró en vigor el 23 de enero de 1999 y fue implementada el 14 de mayo de 1999, creando la Dirección de Defensores Públicos y Defensoría Pública, como órgano dependiente de la CSJ con autonomía funcional.

²²⁴ Ley Orgánica del Poder Judicial, arts. 146 y 211.

²²⁵ Mapa delegaciones de Defensoría Pública en Nicaragua, disponible en: <https://www.poderjudicial.gob.ni/defensoria/mapadp.asp>

158. Como se desarrollará más adelante, las investigaciones realizadas por el GHREN han establecido la participación de la Defensoría Pública en la violación de las garantías procesales, representando a personas, incluyendo a personas privadas de la libertad, en contra de su voluntad y en contravención de su derecho al acceso a un abogado defensor de su elección. El GHREN ha recibido información múltiple y creíble indicando que los miembros de la defensoría pública habrían actuado en contra de los intereses de personas opositoras o percibidas como tales, cuya representación estaba a su cargo (ver capítulo III.B).

b. El Instituto de Medicina Legal

159. La misión del Instituto de Medicina Legal (IML) y sus médicos forenses es auxiliar de manera imparcial a los juzgados y tribunales, a la Policía Nacional, a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría de los Derechos Humanos, mediante la práctica de pruebas e informes periciales, tanto tanatológicos como clínicos y de laboratorio, así como realizar evaluaciones de las personas detenidas, lesionadas o enfermas que estén bajo la jurisdicción de aquéllos o de las autoridades penitenciarias.²²⁶ El Director del IML es, desde abril de 2022, el doctor Julio Espinoza Castro, tras la destitución de su predecesor en el cargo, Zacarías Duarte, tras 17 años a la cabeza de la institución.²²⁷

160. El IML integra el Sistema Nacional Forense y a todos los médicos y las médicas forenses de Nicaragua.²²⁸ El IML cuenta con 28 delegaciones y circunscripciones judiciales²²⁹ y está adscrito a la CSJ, aunque está facultado para operar con autonomía en el desempeño de sus funciones técnicas profesionales.²³⁰

161. Los y las m médicas forenses pueden ser nombrados y destituidos, con causa justificada, por el pleno de la CSJ.²³¹ Son considerados personal al servicio de la Administración de Justicia y están a las órdenes inmediatas de jueces y tribunales.²³²

162. El IML y los médicos y médicas forenses jugaron un papel instrumental en la omisión de la investigación de violaciones a la vida e integridad –asesinatos y lesiones de diversa gravedad– cometidas por agentes del Estado o grupos armados afines al Gobierno. Según múltiples fuentes creíbles, médicos y médicas forenses y funcionarias y funcionarios del IML han participado en el ocultamiento o falsificación de expedientes e informes forenses. En algunos casos reportados al GHREN, las autopsias nunca tuvieron lugar a pesar de las solicitudes de los familiares de las víctimas. Así mismo, el IML tuvo un papel importante en la elaboración de informes forenses sobre heridas sufridas por los policías antimotines

2. Otras instituciones relevantes

a) *El Ministerio Público*

163. El Ministerio Público tiene a su cargo la función acusadora y la representación de los intereses de la sociedad y de la víctima del delito en el proceso penal, a través del Fiscal General de la República, quien sólo está subordinado a la Constitución Política y a las leyes.²³³ El Ministerio Público es un órgano autónomo, que técnicamente no forma parte del Poder Judicial ni del Ejecutivo.²³⁴

²²⁶ Ley Orgánica del Poder Judicial, arts. 184–185; Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 88.

²²⁷ Reelegidos en 2017 por la vía del Acuerdo Número 192-2017 del Consejo Nacional de Administración de la Carrera Judicial.

²²⁸ Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 87.

²²⁹ IML, Departamento de Estadísticas. Boletín Estadístico Agosto 2022, disponible en: https://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/iml/pdf/boletin_agosto_2022.pdf.

²³⁰ Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 87.

²³¹ Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 64.

²³² *Ibid.*, art. 183.

²³³ Ley No. 346, Ley Orgánica del Ministerio Público, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 196 del 17 de octubre del 2000, arts. 3–6 y 10 (en adelante “Ley Orgánica del Ministerio Público”).

²³⁴ Constitución Política, art. 138(9)(b).

164. Según sus atribuciones legales,²³⁵ el Ministerio Público debe promover de oficio o a instancia de parte, la investigación y persecución de los delitos de acción pública, así como remitir a la Policía Nacional las denuncias recibidas para que se efectúen las investigaciones pertinentes, y ejercer la acción privada cuando las personas ofendidas sean incapaces y carezcan de representante legal, y la acción civil en algunos casos específicos determinados por ley.²³⁶

165. Los órganos substantivos del Ministerio Público son el Fiscal General, el Fiscal General Adjunto, la Inspectoría General, los 16 fiscales departamentales y de regiones autónomas de la Costa Caribe, los fiscales auxiliares, y los fiscales especiales.²³⁷ El o la Fiscal General está a cargo del Ministerio Público.²³⁸ Tanto este rol, como el de Fiscal General Adjunto o Adjunta, es designado por la Asamblea Nacional, a partir de una lista propuesta por el Presidente de la República.²³⁹ El cargo de Fiscal General lo ostenta Ana Julia Guido Ochoa, mientras que Julio González se desempeña como Fiscal Adjunto.²⁴⁰

166. Según fuentes concordantes y numerosas fuentes abiertas, la Unidad Especializada Contra los Delitos de Delincuencia Organizada de la Fiscalía ha sido instrumental para dirigir los casos contra personas opositoras al Gobierno, reales o percibidas como tales.²⁴¹

167. La Ley Orgánica del Ministerio Público establece que la carrera del Ministerio Público se regirá por los principios de igualdad, mérito, capacidad, estabilidad, eficiencia, especialidad y responsabilidad.²⁴² La selección de candidatos debe efectuarse a través de la convocatoria pública de un concurso por oposición.²⁴³ No obstante, el Grupo ha recibido información sobre la falta de convocatorias de concurso por oposición pública en los últimos años y de la contratación de fiscales afines al Gobierno, solamente a través de procesos internos.²⁴⁴

168. La Ley reconoce a los fiscales y servidores del Ministerio Público la estabilidad o inamovilidad en el cargo y negarse a pagar aportes, financiamientos o cualquier forma de contribución económica y material a partidos políticos, agrupaciones o entidades de otra naturaleza.²⁴⁵ Sin embargo, el Grupo ha sido informado de que, desde el principio de la crisis en abril de 2018, las y los funcionarios y servidores públicos del Estado se han visto presionadas y presionados a pagar regularmente cuotas de membresía al FSLN. Ello pone en entredicho la autonomía de los funcionarios del Ministerio Público y del Estado en general.²⁴⁶

169. La presente investigación ha evidenciado una falta de apego a las garantías procesales, la instrumentalización de la ley para la persecución e incluso acusaciones fabricadas por el Ministerio Público para llevar ante los tribunales a aquellas personas opositoras del Gobierno, reales o percibidas como tales (ver capítulo III.B).

b) *El Sistema Penitenciario Nacional*

170. El Sistema Penitenciario Nacional (SPN) es la institución del Estado con facultades expresas para la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por las autoridades judiciales de Nicaragua. Sus fines principales son: la ejecución de sentencias penales y medidas cautelares privativas de libertad, dictadas por los tribunales; y la reeducación y

²³⁵ Código Procesal Penal, art. 54.

²³⁶ Ver Código Procesal Penal, art. 144.

²³⁷ Ley Orgánica del Ministerio Público, arts. 13 a 19.

²³⁸ Constitución Política de Nicaragua, arts. 138 y 150.

²³⁹ Ley Orgánica del Ministerio Público, art. 24.

²⁴⁰ El 19 Digital, “Asamblea Nacional nombra a magistrados del CSE”, 9 de abril de 2014, disponible en <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:17656-asamblea-nacional-nombra-a-magistrados-del-cse>

²⁴¹ Entrevistas del GHREN BBIV001, BBIV021.

²⁴² Ley 568, Ley de Carrera del Ministerio Público, aprobada el 20 de junio de 2006, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 192 del 4 de octubre de 2006 (en adelante “Ley de Carrera del Ministerio Público”), art. 3.

²⁴³ Ley de Carrera del Ministerio Público, art. 18.

²⁴⁴ Entrevista del GHREN BBIV021.

²⁴⁵ Ley de Carrera del Ministerio Público, art. 31.

²⁴⁶ Entrevista del GHREN BBIV001, BBIV006, BBIV0012, BBBIV013 BBIV0015

reinserción de la persona privada de libertad a las actividades de la sociedad. El SPN tiene su ámbito de competencia en todo el territorio nacional, con funciones de control, reeducación y seguridad penal.²⁴⁷

171. El SPN es un cuerpo armado, de naturaleza civil, apolítico, apartidista y con rango de Dirección General dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Gobernación. En este sentido, le corresponde al Ministerio de Gobernación coordinar, dirigir y administrar el SPN a través de su Director General.²⁴⁸ El Director General es el superior jerárquico y máxima autoridad del SPN y es el encargado de ejecutar la política penitenciaria.²⁴⁹ Las Direcciones Penitenciarias son órganos de ejecución tienen bajo su responsabilidad la administración, control y resguardo de las personas privadas de libertad remitidos por las autoridades judiciales competentes en el cumplimiento de las sanciones penales y medidas cautelares privativas de libertad.²⁵⁰

172. El GHREN documentó casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, con la participación activa de agentes del SPN en varias prisiones. En particular, el GHREN documentó varios casos en la cárcel de la Modelo, cuyo Director es desde 2018 Venancio Allaniz Ulloa, y tratos particularmente graves en su sección de máxima seguridad, al cargo del Director Roberto Clemente Guevara Gómez.²⁵¹

173. Funcionarias y funcionarios del SPN participaron en la comisión de violaciones y abusos –incluyendo actos de tortura y otros tratos o penas crueles, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso– contra personas opositoras del Gobierno, reales o percibidas como tales detenidas en los centros de detención bajo su jurisdicción (ver capítulo III.B).

3. La independencia de jueces y fiscales

174. La independencia y autonomía de magistrados, magistradas, jueces y juezas, está firmemente consagrada en la constitución política.²⁵² La Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce también la independencia interna de los mismos, en cuanto a todas sus actuaciones, aunque el superior jerárquico puede girar instrucciones generales de carácter procedimental.²⁵³ De la misma manera, la Constitución establece la independencia y la autonomía orgánica, funcional y administrativa del Ministerio Público.²⁵⁴

175. El Código de Ética establece que las y los funcionarios de Carrera Judicial no deben permitir ningún tipo de interferencia en el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de otros poderes e instituciones del Estado, ni dejarse influir por la presión de los medios, la opinión pública, partidos políticos u otros grupos.²⁵⁵ La Ley prohíbe asimismo la participación de magistradas, magistrados, juezas y jueces en procesos políticos electorales, así como en reuniones, manifestaciones y otros actos de carácter político electoral o partidista, aunque sean permitidos a los demás ciudadanos.²⁵⁶

176. A pesar del marco jurídico existente, las investigaciones del Grupo revelan una interferencia en el ejercicio de las funciones judicial y fiscal, que obstaculiza el acceso a la

²⁴⁷ Ley No. 473, Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 222 del 21 de noviembre de 2003 (en adelante “Ley del Régimen Penitenciario”), arts. 3 y 5–6.

²⁴⁸ Ley del Régimen Penitenciario, art. 4; Decreto Ejecutivo No. 16-2004, Reglamento de la Ley No. 473, Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, aprobado el 12 de marzo de 2004, publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 54 del 17 de marzo de 2004, art. 8 (en adelante “Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario”).

²⁴⁹ Ley del Régimen Penitenciario, arts. 14–15.

²⁵⁰ *Ibid.*, art. 26.

²⁵¹ Entrevistas del GHREN EEIV005, EEIV016, EEIV017, EEIV023, EEIV050, EEIV064, EEIV067, EEIV069, EEIV009, EEIV069. Véase <https://www.migob.gob.ni/penitenciario/establecimientos-penitenciarios/>.

²⁵² Constitución Política de Nicaragua, art. 165; Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 6.

²⁵³ Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 8.

²⁵⁴ Constitución Política de Nicaragua, art. 138(9)(b); Ley No 346, Ley Orgánica del Ministerio Público, Texto Consolidado, art. 1.

²⁵⁵ Código de Ética de los Funcionarios y Empleados del Poder Judicial, art. 7.

²⁵⁶ Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 144.

justicia para las víctimas, y el derecho a un juicio justo por un tribunal independiente e imparcial.²⁵⁷

177. El control por parte del partido del Gobierno se fue obteniendo de manera paulatina a lo largo del tiempo, culminando con el nombramiento en 2014 por parte de la Asamblea Nacional de once magistrados de la CSJ afines al partido²⁵⁸ y la injerencia partidista en las instituciones de manera más intensa desde abril de 2018.²⁵⁹

178. Como han confirmado las investigaciones del GHREN, el Presidente y la Vicepresidenta de la República ejercen su influencia en las diferentes estructuras al interior del Poder Judicial y la del Ministerio Público, a través de los CLS y de la Juventud Sandinista.²⁶⁰ De acuerdo con los testimonios recogidos por el GHREN, el personal del Poder Judicial como del Ministerio Público estarían obligados a pagar cuotas de membresía y contribuciones al partido FSLN, como muestra de su fidelidad y apoyo al Gobierno.²⁶¹

179. Según la información recibida por el GHREN, las instrucciones provenientes de la Presidencia estarían trasladadas a las instituciones a través de la persona que ejerce el cargo de secretaria o secretario político del FSLN en el seno de la institución. En el caso del Poder Judicial, el secretario político es Marvin Aguilar García, Vicepresidente de la CSJ, mientras que en el caso del Ministerio Público la secretaria es directamente Ana Julia Guido Ochoa de Romero, Fiscal General. El Grupo ha recibido alegaciones indicando que los jueces, las juezas y los y las fiscales que se negasen o ignorasen instrucciones provenientes de la Presidencia sufrirían hostigamiento y represalias.²⁶²

180. El GHREN recibió información que indica los jueces y juezas a cargo de procesos contra personas consideradas opositoras al Gobierno, reales o percibidas como tales ven recompensada su fidelidad con ascensos de carrera a pesar de que los juicios que instruyeron adolecieron de numerosas violaciones del debido proceso.²⁶³ Según testimonios recibidos por el GHREN, confirmada por la información publicada en la página web del Poder Judicial, no ha habido concursos por oposición públicos desde el 2017, y todos los nombramientos efectuados desde entonces han sido a personas afines al FSLN.²⁶⁴

181. Según detallaron varias fuentes con conocimiento interno, los secretarios políticos son, al interior de la CSJ, Marvin Aguilar, vicepresidente de la CSJ y, para el Tribunal de Apelaciones de Managua, el magistrado Leonel Ernesto Rodríguez Mejías. Bajo su jerarquía estarían los magistrados Octavio Rothschild y Henry Morales –estos a su vez encargados de vigilar los juicios de interés político para la Presidencia del Gobierno– y Karen Vanessa Chavarría, Jueza del Juzgado noveno de audiencia de Managua quienes transmitirían instrucciones “por orientaciones de Marvin Aguilar”.²⁶⁵ Según un testimonio, “*las orientaciones vienen del Carmen [la residencia] de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Aquí nadie se mueve si ellos no lo autorizan*”.²⁶⁶

182. Lo mismo puede afirmarse respecto al Ministerio Público.²⁶⁷ Como expresó un testigo, “*todo es jerárquico; no se mueve una sola de hoja de un árbol sin que la Fiscal General lo autorice*”. Además, de acuerdo con los testimonios de extrabajadores del Poder Judicial y del

²⁵⁷ Entrevistas del GHREN BBIV001, BBIV005, BBIV006, BBIV011, BBIV012, BBIV015, BBIV035 y BBIV038.

²⁵⁸ <https://noticias.asamblea.gob.ni/eligen-magistrados-de-la-corte-suprema-de-justicia/>

²⁵⁹ Entrevista del GHREN BBIV005.

²⁶⁰ Informe Anual 2018 de la CIDH, Informe especial sobre Nicaragua, párrs. 87 y ss.

²⁶¹ Entrevista del GHREN BBIV001.

²⁶² Entrevistas del GHREN BBIV001, BBIV021.

²⁶³ Entrevista del GHREN BBIV001, BBIV006, BBIV012, BBIV015, BBIV030y BBIV035. Un caso notorio de ascenso es el de Ernesto Rodríguez quien pasó de ser Juez Titular del Juzgado Tercero Local Penal a Magistrado Presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua.

²⁶⁴ El GHREN solicitó información actualizada al Gobierno de Nicaragua sobre los concursos de oposición y procesos de nombramiento de Magistrados, Magistradas, Jueces, Juezas y Fiscales. El Grupo no recibió respuesta a su solicitud.

²⁶⁵ Entrevistas del GHREN BBIV001, BBIV021.

²⁶⁶ Entrevistas del GHREN BBIV012, BBIV035, BBIV038.

²⁶⁷ Entrevista del GHREN BBIV012.

²⁶⁸ Entrevistas del GHREN BBIV001, BBIV021.

Ministerio Público recogidos por el GHREN, los casos contra los conocidos como “autoconvocados” y otras personas consideradas opositoras son fabricados por un grupo de fiscales de confianza del Gobierno, mientras que otros fiscales son obligados a firmar los escritos de acusación de estos casos “políticos” como prueba de lealtad.²⁶⁸

183. De acuerdo con los testimonios recibidos por el GHREN, la injerencia del Poder Ejecutivo habría conducido a numerosos despidos no justificados y a renunciadas de funcionarios del sistema de justicia, así como por parte de magistrados, magistradas, jueces, juezas y fiscales a sus cargos.²⁶⁹ Del mismo modo, la injerencia del Ejecutivo habría conllevado la celebración de juicios por delitos no cometidos o sobre casos infundados, a la fabricación de prueba y a la manipulación de procesos, así como a numerosas violaciones de las garantías procesales, dando lugar a serias violaciones al derecho al debido proceso y a detenciones arbitrarias.

C. Marco de seguridad

1. Antecedentes y evolución de las fuerzas de seguridad del Estado

184. En 1979, tras la caída del Gobierno de Anastasio Somoza Debayle, el Gobierno de Reconstrucción Nacional del FSLN, a través de la promulgación del Estatuto Fundamental de la República de Nicaragua, disolvió la Guardia Nacional, la Oficina de Seguridad Nacional y el Servicio de Inteligencia Militar, y estableció el Ejército Nacional, conformado por los combatientes del FSLN y los miembros de la Guardia Nacional que hubiesen participado en la lucha.²⁷⁰ El Estatuto Fundamental atribuyó el mando del Ejército a los jefes militares y dirigentes “del movimiento armado que puso fin a la dictadura”.²⁷¹ En 1990, a través de la aprobación de la Ley de Organización Militar del Ejército Popular Sandinista, la Asamblea Nacional estableció las funciones y estructura de la institución militar.²⁷² Así, el actual Ejército está intrínsecamente ligado a la revolución sandinista, tanto por sus orígenes como por su composición y jefatura.

185. De la misma manera, los antecedentes de la actual Policía Nacional se sitúan en la Policía Sandinista, el primer cuerpo policial del Estado,²⁷³ creado en 1980 como cuerpo dependiente del Ministerio del Interior.²⁷⁴ Su misión y facultades quedaron definidas en la Ley No. 65 de 1989.²⁷⁵

186. Con la elección de la candidata de la coalición Unión Nacional Opositora, Violeta Barrios de Chamorro, a la presidencia de Nicaragua en 1990, se firmaron una serie de acuerdos orientados a garantizar una transición política pacífica, a promover la despartidización y profesionalización del Ejército y la reducción de sus efectivos, y a definir aspectos de la desmovilización de efectivos de la Resistencia Nicaragüense.²⁷⁶

²⁶⁸ Entrevista del GHREN BBIV021.

²⁶⁹ Entrevistas del GHREN BBIB001, BBIV005, BBIV006, BBIV030, BBIV035.

²⁷⁰ Estatuto Fundamental de la República de Nicaragua, aprobado el 20 de julio de 1979, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 1 del 22 de agosto de 1979, Capítulo VI - Las Fuerzas Armadas (en adelante “Estatuto Fundamental”).

²⁷¹ Estatuto Fundamental, art. 26.

²⁷² Ley No. 75, Ley de Organización Militar del Ejército Popular Sandinista del 27 de diciembre de 1989, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 39 del 23 de febrero de 1990. Esta Ley Orgánica fue derogada y reemplazada por la Ley Orgánica Militar No. 181 “Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar”, del 9 de febrero de 1994, y actualizada más recientemente a través de la Ley No. 1009, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia Seguridad y Defensa Nacional, aprobada el 27 de noviembre de 2019.

²⁷³ Decreto Ley 559 del 25 de octubre de 1980, Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 253 del 3 de noviembre de 1980.

²⁷⁴ *Ibid.* art. 1.

²⁷⁵ Ley de Funciones de la Policía Sandinista. Ley No. 65, aprobada el 10 de octubre de 1989, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 244 del 26 de diciembre de 1989.

²⁷⁶ Protocolo de Procedimientos de la Transferencia del Poder Ejecutivo de la República de Nicaragua; Acuerdos de Toncontín, 23 de marzo de 1990; Acuerdo de Managua, 18 de abril de 1990. Para julio de

187. Durante la década de los 90 se promovió el fortalecimiento del Ejército y la profesionalización y reducción de los efectivos militares. Paralelamente, la Policía Nacional vivió también un periodo de transición, durante el cual se produjo un proceso de reorganización y fortalecimiento interno que incluyó un cambio de nombre y de uniforme, así como la regulación de la actuación policial.²⁷⁷

188. La reforma constitucional de 1995 transformó formalmente el Ejército Popular Sandinista en Ejército de Nicaragua y a la Policía Sandinista en Policía Nacional, permitiendo que sus respectivas misiones se implementaran como en calidad de instituciones nacionales independientes, y no ligadas a un partido político o gobierno específico.²⁷⁸ En los años sucesivos, continuaron los esfuerzos para la institucionalización, democratización y profesionalización del sector de defensa y de seguridad. Se reguló la función policial, se creó una jefatura nacional²⁷⁹ y se adoptó el Reglamento de la Policía Nacional.²⁸⁰

189. A partir del año 2000, se llevó a cabo un programa de modernización y capacitación de la Academia de Policía y de la Policía Nacional,²⁸¹ y se implementó la “Política Integral Policía-Comunidad y Derechos Humanos” que tenía como fin garantizar el fortalecimiento de la relación de la Policía con las comunidades.²⁸² En cuanto al Ejército, en 1997 se adoptó el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica (TMSD)²⁸³ y en 1998 se definió la carrera militar²⁸⁴ y se regularon las relaciones de los cuerpos armados con las instituciones civiles de la administración.²⁸⁵

190. Desde 2007, con la victoria electoral del FSLN, la normativa relativa a las fuerzas de seguridad del Estado sufrió considerables cambios. En 2007, se estableció la responsabilidad legal del Director General de la Policía Nacional de garantizar el cumplimiento de las órdenes del Presidente de la República y del Ministro de Gobernación.²⁸⁶ En 2014, la novena reforma constitucional transformó la relación institucional de la fuerza pública y militarizó el alcance

1990, se habían desmovilizado y habían entregado sus armas 22,413 miembros de la Resistencia Nicaragüense, y se habían acogido al Plan de Desmovilización 54,446 de sus familiares. Derivado del proceso de reducción y reestructuración del Ejército, aproximadamente 55,000 miembros del Ejército Popular Sandinista pasaron a la condición de retiro. También se produjo una reorganización del Estado Mayor, y la concentración y almacenamiento de aproximadamente 78,000 armas asignadas a las unidades de lucha irregular (Batallones de Lucha Irregular, Batallones Ligeros de Cazadores, Compañía Permanente Territorial, pelotones de exploración y unidades de reserva y de milicias). Ejército de Nicaragua 30 años de vida institucional: (1979-2009), págs. 77-79, disponible en: <https://www.ejercito.mil.ni/contenido/relaciones-publicas/publicaciones/docs/memoria-1979-2009.pdf>.

²⁷⁷ Se promulgaron decretos y leyes que regularon la actuación de la Policía Nacional, entre ellos la Ley 12 de 1992 sobre las funciones de la policía en materia de auxilio judicial, y el Decreto Ejecutivo 45 de 1992, que estableció que el Presidente de la República ejercería la Jefatura Suprema de la Policía a través del Ministro o Viceministro de Gobernación.

²⁷⁸ Constitución Política de Nicaragua, arts. 92-93.

²⁷⁹ Ley No. 228, Ley de la Policía Nacional, aprobada el 31 de Julio de 1996, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 162 del 28 de agosto de 1996.

²⁸⁰ Reglamento de la Ley de la Policía Nacional, Decreto No. 26-96, aprobado el 25 de octubre de 1996, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 32 del 14 de febrero de 1997.

²⁸¹ Ministerio de Gobernación, Policía Nacional, Programa de Modernización y Desarrollo de la Policía Nacional de Nicaragua para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, octubre de 2000. Disponible en: <https://www.policia.gob.ni/cedoc/private/lev2/sector/diagnostico/programamodernizacionpn.pdf>.

²⁸² Política Integral Policía-Comunidad y Derechos Humanos, febrero de 2002, disponible en: www.policia.gob.ni/cedoc/sector/prevc/PolitIntegral_PolComun.pdf.

²⁸³ El TMSD fue ratificado por Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá con el fin de promover un nuevo modelo de seguridad regional. Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, 15 de diciembre de 1995, disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/Instrumentos.nsf/bde7f9f0e2863496062578b80075d822/57814b7ae898a23f062573da005b17a4?OpenDocument>.

²⁸⁴ Normativa Interna Militar, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 165 del 2 de septiembre de 1998.

²⁸⁵ Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, aprobada el 27 de marzo de 1998, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 102 del 3 de junio de 1998.

²⁸⁶ Ley No. 612, Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, aprobada el 24 de enero de 2007 y publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 20 del 29 de enero de 2007.

de la seguridad y defensa nacional, dejando su ámbito y definición a la discrecionalidad del Presidente de la República.²⁸⁷ El Presidente pasó a ser el Jefe Supremo del Ejército y la Policía Nacional, ejerciendo funciones anteriormente propias de los Ministerios de Defensa y de Gobernación, respectivamente.²⁸⁸ Se eliminó también la prohibición de que cualquier militar en funciones pudiera acceder a altos cargos públicos.²⁸⁹ La reforma a la Constitución de 2014 consagró la participación de los habitantes, la familia y la comunidad en la implementación del denominado “modelo comunitario” de la Policía Nacional.²⁹⁰

191. La Asamblea Nacional, predominantemente del partido oficialista, aprobó de manera expedita leyes y decretos que consolidaron un marco normativo que refuerza las funciones militares y de vigilancia e inteligencia. Se adoptó una nueva Ley de la Policía,²⁹¹ así como normativa militar en materia de organización, jurisdicción y previsión social.²⁹² La adopción de la Ley de Seguridad Soberana en 2015 introdujo cambios importantes en la política nacional de seguridad democrática y dentro de las estructuras de seguridad del Estado. Amplió las competencias del Ejército, militarizando asuntos de orden civil y englobando actividades relativas a la seguridad ciudadana en el concepto de seguridad nacional. Esta ley ha sido ampliamente criticada a nivel nacional e internacional²⁹³ y fue objeto de una acción de inconstitucionalidad por parte del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), sin que hasta el momento la CSJ se haya pronunciado al respecto. Uno de los aspectos más problemáticos de la ley es su definición de “riesgo a la seguridad soberana” como aquellos factores “incierto o aleatorios con un grado de incertidumbre”. Esta conceptualización ambigua de las amenazas a la seguridad soberana deja un amplio margen a la interpretación y la discrecionalidad en la aplicación de la ley.

192. La Ley de Seguridad Soberana creó el Sistema Nacional de Seguridad Soberana, liderado por el Presidente de la República y cuya Secretaría Técnica está a cargo de la Dirección de Información para la Defensa (DID) del Ejército. Este sistema está integrado por una variedad de instituciones públicas, entre las que destacan el Ejército, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, y la Dirección General de Asuntos Aduaneros. Sus actividades, información, estructura y organización están bajo reserva en virtud de la Ley.²⁹⁴

193. El anexo al presente informe resume de la evolución legislativa y de las políticas del Estado en materia de seguridad y defensa durante el periodo 1979–2020.

²⁸⁷ Ley No. 854, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, aprobada el 29 de enero de 2014, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 26, del 10 de febrero de 2014.

²⁸⁸ Constitución Política de Nicaragua, arts. 95 y 97.

²⁸⁹ Esta prohibición estaba formulada de manera explícita en la Constitución a partir de la reforma implementada a través de la Ley No. 192 de 1995.

²⁹⁰ Constitución Política de Nicaragua, art. 97.

²⁹¹ Ley No. 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, aprobada el 26 de junio de 2014, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 125 del 7 de julio de 2014 (en adelante “Ley de la Policía Nacional”).

²⁹² Ley No. 181 de 1994, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar; fue actualizada por la Ley No. 855 de 2014, aprobada el 12 de febrero de 2014 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 41 del 3 de marzo de 2014 (en adelante “Código Militar”).

²⁹³ Véase CIDH, Informe Anual 2015, Capítulo IV.A Uso de la Fuerza, párr. 31, disponible en: <https://www.confidencial.digital/politica/ley-de-seguridad-soberana-ambigua-y-discrecional/>; http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2021_nicaragua-es.pdf, párr. 94 y pie de pág. En el marco del Examen Periódico Universal en 2019, diferentes organizaciones de derechos humanos recomendaron la derogación de las leyes de Seguridad Soberana y contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo. Véase <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/046/75/PDF/G1904675.pdf?OpenElement>.

²⁹⁴ Véase Ley de Seguridad Soberana, art. 14, el cual establece que tanto el ordenamiento interno e institucional y el carácter reservado de su trabajo e información y/o datos constituyen información pública reservada, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley No. 621, Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada el 16 de mayo de 2007 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 118 del 22 de junio de 2007 (en adelante “Ley de Acceso a la Información”).

2. Instituciones de seguridad del Estado

194. El Ministerio de Defensa, como órgano asesor del Presidente, está a cargo de la formulación e implementación de los planes y políticas de la Defensa Nacional. Sin embargo, no tiene mayores funciones de coordinación o administración y no forma parte de la cadena de mando del Ejército de Nicaragua.²⁹⁵ El Ministerio de Gobernación, a su vez, cumple funciones de coordinación y planificación en materia de seguridad ciudadana, y su rol de supervisión de la Policía fue suprimido en 2014.

a) *El Ejército de Nicaragua*

195. La Constitución de Nicaragua define a la institución armada como una “institución nacional, profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante” y afirma su subordinación a la autoridad civil ejercida directamente por el Presidente de la República.²⁹⁶ El Código Militar por su parte dispone que el Ejército se regirá por la Constitución Política y las leyes, así como por los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y otros instrumentos de Derecho Internacional Público ratificados y aprobados por Nicaragua.²⁹⁷

196. La Constitución define la misión de la institución armada en función de la defensa de la soberanía, de la independencia y la integridad territorial, y establece que, en casos excepcionales, cuando la estabilidad del país se viera amenazada por grandes desórdenes internos, calamidades o desastres naturales, el Presidente, en Consejo de Ministros, podrá ordenar la intervención del Ejército en apoyo a la Policía Nacional.²⁹⁸

197. Desde 2014, se ha venido observando una expansión de las funciones y actividades del Ejército más allá del ámbito de defensa nacional. Así, el Código Militar reformado en 2014 amplía las funciones del Ejército a la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y actividades conexas; contribuir al desarrollo nacional; la gestión de desastres naturales y apoyo en emergencias; el apoyo electoral; la protección del medio ambiente y la protección de los sistemas de comunicación nacional.²⁹⁹ Asimismo, dente, en caso de necesidad, el presidente, reunido en Consejo de Ministros, podrá ordenar la intervención del Ejército “en asonadas o motines que excedan la capacidad de las fuerzas de la Policía Nacional para sofocarlos”.³⁰⁰

i) Estructura organizativa y cadena de mando

198. Las fuerzas del Ejército de Nicaragua están integradas por la Fuerza Terrestre, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval. Los Comandos Militares Regionales son los órganos de mando administrativo y militar territorial de las tropas terrestres en el territorio político administrativo al cual se circunscriben.

199. La jerarquía militar comprende los siguientes niveles de mando:

- 1) **La Jefatura Suprema.** El Ejército está subordinado a la autoridad civil, ejercida por el Presidente de la República, Daniel Ortega, en su carácter de Jefe Supremo del Ejército.³⁰¹ A diferencia de otros países, el Ministerio de Defensa no forma parte de la cadena de mando.
- 2) **El Alto Mando.** Corresponde a la Comandancia General, compuesta por: el Comandante en Jefe del Ejército (General Julio César Avilés Castillo),³⁰² a

²⁹⁵ Constitución Política de Nicaragua, art. 13, literal e).

²⁹⁶ *Ibid.*, art. 93.

²⁹⁷ Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, art. 1.

²⁹⁸ Constitución Política de Nicaragua, art. 92.

²⁹⁹ Código Militar, art. 2 “Funciones del Ejército”, numeral 6.

³⁰⁰ *Ibid.* art. 6.

³⁰¹ Constitución Política de Nicaragua, art. 92.

³⁰² El actual Comandante en Jefe del Ejército ha ejercido este cargo durante 12 años: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/3133c0d121ea3897062568a1005e0f89/9e3d01ba3274a78d062584b9006147b4?OpenDocument>. El Comandante del Ejército, el General Avilés y el Jefe del Estado Mayor, General Rodríguez, fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros

quien se subordinan todas las fuerzas del Ejército; el Jefe del Estado Mayor (General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz),³⁰³ y el Inspector General Mayor (General Marvin Elías Corrales Rodríguez).³⁰⁴ Estos tres cargos son nombrados directamente por el Presidente de la República, en su calidad de Jefe Supremo del Ejército.

- 3) **El Consejo Militar.** Es el más alto órgano de consulta del Alto Mando para asuntos de doctrina y estrategia, relacionados con el desarrollo de la institución militar y los planes de defensa. Está integrado por los jefes de las Direcciones del Estado Mayor General; los jefes de los Órganos de Apoyo de la Comandancia General con equivalencia jerárquica; los jefes de Fuerza Aérea y Fuerza Naval; los jefes de Grandes Unidades Subordinadas directamente al Alto Mando; y los Oficiales Superiores.³⁰⁵
- 4) **El Mando Superior.** Está representado por el Estado Mayor General, conformado por el jefe del Estado Mayor y por los jefes de las direcciones que las componen.³⁰⁶ El Estado Mayor General es el órgano técnico, operativo, administrativo y de servicio en el que se apoya el Alto Mando para la planificación, dirección y control del Ejército, así como para su adiestramiento y aseguramiento técnico-material y operacional.³⁰⁷
- 5) **El Mando de Unidades.** Corresponde a los jefes de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Naval, a los jefes de las grandes unidades subordinadas al alto mando, a los jefes de órganos comunes del ejército, y a los jefes de otras unidades.³⁰⁸
- 6) **Mandos de órganos comunes.** Los órganos comunes de las fuerzas del Ejército son: el Comando de Apoyo Logístico, el Cuerpo Médico Militar, la Universidad, Escuelas y Academias Militares, la Unidad de Guardia de Honor, el Estado Mayor de la Defensa Civil, el Cuerpo de Ingenieros, el Cuerpo de Transmisiones, la Dirección de Contra Inteligencia Militar y la Dirección de Inteligencia para la Defensa (DID).

ii) La Dirección de Inteligencia para la Defensa (DID)

200. La DID ejerce la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Soberana. La estructura y funcionamiento de la DID no se conoce públicamente, pues es considerada información reservada de acuerdo con la definición de la Ley de Acceso a la Información Pública.³⁰⁹ La DID es la sucesora de la Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE), creada en los años 80 al interior del Ministerio del Interior, y conocida por su papel de órgano de vigilancia política del Gobierno sandinista de la época. Tras las elecciones de 1990, cambió su nombre a DID y fue trasladada al Ejército como el órgano de inteligencia del Estado.

de los Estados Unidos (en adelante OFAC por sus siglas en inglés), porque de acuerdo con esta entidad habrían proporcionado armas a los grupos que llevaron a cabo actos de violencia contra civiles en el marco de las protestas de 2018, y se habrían negado a ordenar su desarme y desmantelamiento. Véase <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1019> y <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0552>.

³⁰³ El general de Brigada Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz fue nombrado nuevo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en 2017, el segundo cargo en jerarquía en esa institución. El acuerdo presidencial 64/2017 del 11 de mayo de 2017, lo asciende a Mayor General. <http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/951b8627774a1eaa062586e300765dac?OpenDocument> (sin vigencia).

³⁰⁴ El Inspector General Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez fue ascendido a Mayor General mediante acuerdo presidencial 64/2017 del 11 de mayo de 2017 y nombrado Inspector General mediante la Orden 031/2017.

³⁰⁵ Código Militar, art. 14.

³⁰⁶ Las Direcciones del Estado Mayor son Personal y Cuadros, Inteligencia Militar Operaciones y Planes, Logística, Doctrina y Enseñanza, Asuntos Civiles y Finanzas.

³⁰⁷ Código Militar, art. 10. Mando Superior.

³⁰⁸ Código Militar, art. 12.

³⁰⁹ Véase Ley de Acceso a la Información.

iii) Ascensos, nombramientos y otros beneficios

201. El Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo del Ejército, tiene la facultad de nombrar y remover al Comandante en Jefe del Ejército, así como a los Subdirectores Generales y el Inspector General. La reforma de 2014 al Código Militar suprimió la cláusula que impedía la reelección del Comandante en Jefe del Ejército, permitiendo la renovación del cargo por el Presidente de la República.³¹⁰ Esta reforma también facultó al Presidente de la República a extender el tiempo de la prestación del servicio militar para los Oficiales Generales y otros oficiales, y a reincorporar a oficiales en condición de retiro o de situación de reserva para ocupar cargos en la institución militar.³¹¹

202. Con la reforma al Código Militar de 2014, también se eliminó la prohibición a los miembros del Ejército de ostentar cargos públicos, estableciendo que “podrán ocupar cargos temporalmente en el ámbito del Poder Ejecutivo, por razones de Seguridad Nacional cuando el interés supremo de la Nación así lo demande”.³¹² De acuerdo con información pública, al menos 22 exmilitares sancionados por su presunta participación en la comisión de violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción estarían a cargo de las direcciones de empresas estatales, ministerios y otras instancias políticas.

203. Se ha identificado un patrón de ascensos y nombramientos de miembros del Ejército Nacional, así como de designaciones de militares y exmilitares afines al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en instituciones del Poder Ejecutivo y empresas del Estado o mixtas. Tan sólo durante el 2021, se otorgaron 1,568 condecoraciones (1,459 en proceso ordinario, 46 a personalidades extranjeras, 56 a oficiales que pasaron a la honrosa condición de retiro y 7 póstumas).³¹³ Según, los medios de comunicación, en 2019,³¹⁴ 2020,³¹⁵ 2021,³¹⁶ y 2022³¹⁷ fueron entregados al menos 300 títulos de propiedad a exmilitares del Ejército Nacional.

b) La Policía Nacional de Nicaragua

204. La Policía Nacional es el único cuerpo policial del país. Es la sucesora de Policía Sandinista, a la cual reemplazó formalmente en 1995.³¹⁸ Las competencias de la Policía incluyen una variedad de funciones en materia de prevención y seguridad ciudadana y humana, investigaciones, auxilio judicial e inteligencia policial y seguridad y protección de personalidades.³¹⁹ La Ley de la Policía Nacional establece que ésta trabajará siguiendo un modelo preventivo, proactivo y comunitario, con la participación protagónica de los habitantes, la familia y la comunidad. También reafirma el respeto a los derechos humanos y la equidad de género como dos de los siete principios doctrinarios de la institución.³²⁰

³¹⁰ Código Militar, art.8.

³¹¹ *Ibid.*, art. 35.

³¹² *Ibid.*, art. 31 *quinquies*.

³¹³ Ejército Nacional, Informe. 43 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua. 2 de septiembre 2022, p. 17.

³¹⁴ El 19, “Retirados del Ejército reciben títulos de propiedad”, 17 de agosto de 2019, disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:93203-retirados-del-ejercito-reciben-titulos-de-propiedad>

³¹⁵ Viva Nicaragua 13, “Gobierno entrega títulos de propiedad a retirados del Ejército de Nicaragua”, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ZhmGplBEuM>.

³¹⁶ La Gente, “Entregan títulos de propiedad a exmilitares”, 30 de octubre de 2021, disponible en: <https://radiolaprimerisima.com/noticias-generales/destacado/entregan-titulos-de-propiedad-a-exmilitares/>.

³¹⁷ Según el Procurador Auxiliar de la Procuraduría General de la República, el licenciado Ervin Gutiérrez, con la entrega de febrero de 2022 se dio cumplimiento a las orientaciones del Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo. El 19, “Gobierno de Nicaragua otorga 100 títulos de propiedad a retirados del Ejército”, 12 de febrero de 2022, disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:125320-gobierno-de-nicaragua-otorga-100-titulos-de-propiedad-a-retirados-del-ejercito->.

³¹⁸ Constitución Política de Nicaragua, art. 97.

³¹⁹ Ley de la Policía Nacional, art. 7.

³²⁰ Ley de la Policía Nacional, art 5.

205. A finales de 2021,³²¹ la Policía Nacional estaba integrada por 17.349 hombres y mujeres, con un promedio de 260 policías por cada 100,000 habitantes.³²² La Policía se estructura territorialmente en delegaciones, que se constituyen y ubican en determinadas circunscripciones territoriales, y tienen competencia para la prevención e investigación del delito.

i) Estructura organizativa y cadena de mando

206. La Jefatura Suprema de la Policía Nacional le corresponde al Presidente de la República, Daniel Ortega. El Presidente tiene la facultad para la toma de decisiones estratégicas y operativas, así como para nombrar y destituir al Director o Directora General, a los Subdirectores y Subdirectoras Generales, y al Inspector o Inspectora General de la Policía Nacional.

207. La Jefatura Nacional se compone por el Director o Directora General de la Policía, los Subdirectores o Subdirectoras, y el Inspector o Inspectora General. El Director o Directora General de la Policía dirige, administra y ejerce el mando único en la institución y garantiza el cumplimiento de las órdenes del Presidente de la República.³²³ Según la Ley de la Policía Nacional, el Presidente de la República, como Jefe Supremo de la Policía Nacional, está facultado para nombrar y destituir a los altos cargos de la institución policial.³²⁴

208. Desde el 5 de julio de 2018, el Director General de la Policía Nacional el Comisionado General Francisco Javier Díaz.³²⁵ Según los medios de comunicación, Díaz lidera también la Comisión Nacional contra el Lavado de Dinero.³²⁶ Entre el 5 de septiembre de 2006 y el 5 de julio de 2018, la Directora General de la Policía fue la Primera Comisionada Armintha Granera Sacasa.³²⁷

209. Los Subdirectores Generales cumplen funciones específicas en materia operacional, de inteligencia política e investigación judicial, vigilancia y patrullaje y comunicaciones. Los Subdirectores Generales de la Policía, los Comisionados Generales Adolfo Joel Marengo Corea y Ramón Antonio Avellán Medal fueron nombrados en agosto de 2018.³²⁸ El Subdirector Marengo fue el Jefe de Inteligencia Policial y de Investigación de la Policía Nacional entre agosto de 2018 y octubre de 2022, y presidió la Comisión Nacional de Crimen Organizado. En noviembre de 2022, fue “enviado a retiro” y en su lugar fue ascendido el Comisionado General Zhukov Serrano Pérez.³²⁹

210. El Consejo Nacional de Policía Nacional es la instancia consultiva y asesora de la Jefatura Nacional, y está integrado por el Director o la Directora General, Subdirectores y Subdirectoras Generales, Inspector o Inspectora General, y Jefes y Jefas de Zonas Policiales, de Especialidades Nacionales, de Órganos de Apoyo y de las Delegaciones de Policía. Véase el anexo del presente informe para un organigrama con la estructura y cadena de mando de la Policía Nacional.

³²¹ A la fecha de cierre de este informe, no se disponía de datos públicos oficiales más recientes.

³²² Policía Nacional, Anuario estadístico 2021, p. 49, disponible en: <https://www.policia.gob.ni/wp-content/uploads/2022/07/Anuario-Estad%C3%ADstico-Policial-2021.pdf>.

³²³ Ley de la Policía Nacional, art. 13 (atribuciones y funciones del Director o Directora General).

³²⁴ *Ibíd.*, art. 10, numerales 2–5.

³²⁵ Francisco Díaz fue nombrado formalmente mediante Acuerdo Presidencial No. 98-A-2018 de 5 de julio de 2018. Es consuegro de Daniel Ortega; la hija de Daniel Ortega, Blanca Díaz Flores está casada con Maurice Díaz. Fue nombrado de facto desde 2017 y el acuerdo presidencial de su nombramiento se emitió en 2018 (Acuerdo 98-A-2018) <http://200.62.64.4/contenido/noticias/2018-03/dea-realiza-visita-cmdancia.html>.

³²⁶ Nicaragua Investiga. Un delito sin condenados en Nicaragua, el lavado de dinero, 1 de abril de 2022. <https://nicaraguainvestiga.com/reportajes/79742-delito-condenados-nicaragua-lavado-dinero/>

³²⁷ Granera fue nombrada en 2006, por un periodo de cinco años. Sin embargo, su mandato se extendió por un total de 12 años hasta que fue retirada de la carrera policial en julio de 2018, en virtud del Acuerdo Presidencial No. 113-A-2018.

³²⁸ Acuerdo Presidencial No. 137-A-2015, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 162 del 23 de agosto de 2015. Designación efectuada el 1 de septiembre de 2015.

³²⁹ Acuerdo Presidencial No. 168 de 2022 de fecha 21 de noviembre de 2022, publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 220 del 23 de noviembre de 2022.

211. En los últimos años se han concedido numerosos ascensos, inclusive a personas que habrían estado presuntamente involucradas en la comisión de violaciones a derechos humanos. Se ha incrementado el número de Comisionados Generales de la Policía, de cuatro en 2007, a 24 en 2018 y 37 en 2020.³³⁰ Entre ellos figuran el Comisionado General Jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), Luis Alberto Pérez Olivas y el Comisionado General Zacarías Salgado, jefe del Bloque II del TAPIR.³³¹

212. A nivel nacional, la Policía Nacional está integrada por 23 “especialidades” que realizan labores de vigilancia, inteligencia, investigación y operaciones, así como siete órganos de apoyo. Entre estos se incluyen las especialidades de Inteligencia Policial, Auxilio Judicial, Seguridad Pública, Convivencia y Seguridad Ciudadana y Humana, y Operaciones Especiales Policiales

ii) La Dirección de Seguridad Pública y la Policía Voluntaria

213. La Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional es la encargada de implementar el Modelo Policial Preventivo, Proactivo y Comunitario, de supervisar y controlar eventos o actividades, cuya autorización legal corresponde a la Policía Nacional, de emitir las licencias y permisos correspondientes, y de supervisar y ejecutar la captación, organización, supervisión y control de la Policía Voluntaria.³³²

214. El Cuerpo de Policías Voluntarios fue concebido como una modalidad de participación ciudadana, y creado como un cuerpo auxiliar de apoyo a la Policía Nacional. A pesar de que la Policía Voluntaria depende de la Dirección de Seguridad Pública, está adscrita y subordinada a las delegaciones de policía respectivas. Sus funciones de acuerdo con la ley son principalmente de vigilancia y seguridad ciudadana.³³³

215. Según las investigaciones del GHREN, a Dirección de Seguridad Pública, en articulación con otras direcciones, departamentos y especialidades de la Policía Nacional jugó un rol central en las acciones implementadas en el marco del control de las manifestaciones de abril de 2018 (véase capítulo III.A). Además, la Dirección de Seguridad Pública coordinó y dirigió las intervenciones de la Policía Voluntaria en el contexto de la represión a las protestas y tranques en 2018. El propio Gobierno enfatizó el rol de la Policía Voluntaria, junto con la Policía Nacional, en dicha represión.

iii) La Dirección de Operaciones Especiales Policiales

216. El acceso a información pública sobre la base legal, composición, estructura y dotación de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) es limitado. El artículo 7 numeral 15 de la Ley de la Policía Nacional establece que le corresponde “(...) intervenir para restablecer el orden público ante graves alteraciones, participar en operaciones especiales en contra del narcotráfico, terrorismo, crimen organizado y otras actividades delictivas graves, coadyuvar en la protección y seguridad del Presidente de la República y de otras personalidades nacionales y extranjeras, apoyo a la población civil ante calamidades y desastres naturales y en cualquier otra situación crítica que afecte el orden público, la estabilidad y la seguridad ciudadana y humana”.

217. La DOEP se compone de distintas unidades integradas por fuerzas élite especiales, tales como el destacamento de Tácticas y Armas Policiales de Intervención y Rescate (TAPIR), la Brigada Especial Antidisturbios y el Grupo de Intervención Rápida. Estas unidades cuentan con efectivos entrenados para intervenir en crisis y en contextos de crimen organizado, terrorismo y lucha contra el narcotráfico, a nivel nacional, y cuentan con

³³⁰ Anuarios estadísticos de la Policía Nacional.

³³¹ Zacarías Salgado fue investigado por su rol en la llamada “Masacre de Las Jagüitas”, el GHREN no ha podido obtener documentación sobre este caso. Véase La Prensa, “Expolicías en La Jaüita estarán entre 2 y 11 años en la cárcel”, 30 de julio de 2015, disponible en: <https://www.laprensani.com/2015/07/30/nacionales/1875245-leen-sentencia-contr-policias-involucrados-en-caso-las-jaguitas>.

³³² Ley de la Policía Nacional, art. 23.

³³³ Ley de la Policía Nacional, art. 7, literal r).

armamento de largo alcance y francotiradores. El jefe de la DOEP desde antes de 2018 es el Comisionado General Justo Pastor Urbina.

218. La intervención de efectivos policiales con efectivos de Brigada Especial Antidisturbios y TAPIR durante la represión evidencian una articulación desde el más alto nivel y a nivel territorial. Las investigaciones del GHREN permiten concluir que los equipos antidisturbios y otros efectivos de la Policía Nacional tuvieron un papel central en la represión de la protesta social, y que llevaron a cabo un uso desproporcionado de la fuerza y otros abusos en contra de los manifestantes, dejando como saldo un gran número de víctimas fatales. Asimismo, los grupos armados pro-gobierno actuaron en articulación o con la aquiescencia de la Policía Nacional y, específicamente, de la Brigada Especial Antidisturbios (véase el capítulo III.A).

iv) Dirección de Auxilio Judicial

219. La Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) es la especialidad de la Policía Nacional encargada de realizar las investigaciones de delitos en articulación con el Ministerio Público. Según la Ley de la Policía Nacional, la policía, en sus funciones de auxilio judicial: investiga, recoge pruebas, practica diligencias para la comprobación de los delitos, y detiene a los presuntos responsables; realiza las primeras diligencias y elabora los expedientes investigativos que remite al Ministerio Público; brinda auxilio al Poder Judicial; y ejecuta y garantiza el cumplimiento de sus órdenes e instrucciones.³³⁴

220. El actual jefe de la Dirección de Auxilio Judicial es el Comisionado Mayor Luis Alberto Pérez Olivas, integrante del FSLN y vinculado históricamente a la Policía Nacional. Fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos por su papel como jefe de la Policía y director de la cárcel de El Chipote.³³⁵

221. La antigua sede de la Dirección de Auxilio Policial era conocido como “El Chipote”, construido en 1931 y se encuentra en las orillas de la Laguna de Tiscapa, en Managua. El Chipote tiene una historia de utilización como centro de torturas, tanto bajo la dictadura somocista como tras la Revolución Sandinista. Todas sus celdas eran “de castigo”; en su mayoría muy pequeñas y en estado insalubre, sin adecuada ventilación y sin acceso a luz natural. En febrero del 2019, se inauguraron las nuevas instalaciones de la DAJ bajo el nombre Complejo Policial Evaristo Vásquez, conocidas como “El Nuevo Chipote”, a donde fueron trasladadas la mayoría de las personas previamente detenidas en las viejas instalaciones. Aunque estas instalaciones nuevas cuentan con una infraestructura más adecuada y salubre, las prácticas de interrogatorios, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes persistieron (véase el Capítulo III.B).³³⁶

222. Como se detallará más adelante, las autoridades de la DAJ han hecho uso indebido de la figura de la detención policial, al utilizar El Nuevo Chipote como centro de detención de personas sentenciadas, a las que no corresponde recluir ahí. El GHREN tiene motivos razonables para creer que desde abril de 2018 se han registrado graves abusos y violaciones a derechos humanos en los centros de detención El Chipote y El Nuevo Chipote, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y tratos inhumanos, crueles o degradantes (véase el capítulo III, A–B).

3. Grupos armados pro-gobierno y otros mecanismos de control

a) *Grupos armados pro-gobierno*

223. El GHREN identificó un patrón de intervención de grupos armados progubernamentales desde el mismo día 18 de abril de 2018 (véase el capítulo III.A). Los grupos armados pro-gobierno atacaron violentamente a las y los participantes en las protestas sociales en Nicaragua y participaron en operaciones de levantamiento de barricadas o “tranques”, en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado, siguiendo instrucciones

³³⁴ Ley de la Policía Nacional, arts. 46–47.

³³⁵ En 2016, Pérez Olivas fue ascendido a la Dirección de Auxilio Judicial. Pérez Olivas es por tanto el responsable de El Chipote y el Nuevo Chipote. En 2018 fue ascendido a Comisionado General.

³³⁶ Entrevistas del GHREN EEIV024, EEIV038, DDIV022.

de autoridades del Estado y/o de los líderes territoriales del partido de Gobierno. En varios casos investigados por el Grupo de Expertos, miembros de grupos armados pro-gobierno fueron responsables directos de la muerte de manifestantes.

224. Las investigaciones llevadas a cabo por el GHREN han evidenciado que, desde abril de 2018, estos grupos han realizado funciones de represión de la protesta social, han estado involucrados en detenciones arbitrarias, y han llevado a cabo actividades de vigilancia y hostigamiento a personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales (véase capítulo III.A y III.B).³³⁷ El GHREN ha recabado abundante información que indica que estos grupos actuaron de manera coordinada y/o con la aquiescencia de las fuerzas de seguridad del Estado, tanto en intervenciones conjuntas como separadas. Asimismo, el GHREN tiene motivos razonables para creer que los grupos armados pro-gobierno actuaron con el beneplácito de autoridades de alto nivel del Estado, que garantizando una total impunidad por sus abusos.

225. El GHREN considera prioritario continuar investigando a profundidad estos grupos, incluyendo sus estructuras de mando, acciones, métodos, financiación, entrenamiento, y vínculos con otros actores.

i) Concepto

226. En el contexto de la protesta social nicaragüense, los términos “grupos de choque”, “turbas sandinistas”, “parapoliciales”,³³⁸ “paraestatales”³³⁹ y “paramilitares”³⁴⁰ han sido a menudo utilizados por los medios de comunicación, organizaciones nacionales e internacionales, en la cultura popular, así como en los testimonios recogidos por el GHREN, para describir los grupos armados que actúan a favor del Gobierno con el fin de reprimir la protesta social, y con la connivencia o el beneplácito de las fuerzas de seguridad del Estado.

227. El GHREN utiliza el término “grupos armados pro-gobierno” para referirse a los grupos, de composición heterogénea y con diversos niveles de organización, con las siguientes características comunes: a) realizan funciones represivas a favor del Gobierno, a través del uso de la fuerza y/o la violencia; b) no se identifican como miembros de las fuerzas de seguridad del Estado; c) utilizan armas, incluyendo armas contundentes y armas de fuego; d) actúan en colaboración con la policía; y e) se articulan con las estructuras políticas locales del FSLN.

ii) Caracterización

a. “Turbas sandinistas” y “grupos de choque”

228. Son grupos de simpatizantes sandinistas organizados y activos con anterioridad a 2018, con presencia en todo el país. Se caracterizan por sus acciones para impedir o dispersar las manifestaciones públicas percibidas como contrarias al Gobierno. Las acciones frecuentemente empleadas incluyen: la organización contra protestas; la ocupación del espacio público; y el uso de intimidación, amenazas y ataques violentos contra las personas manifestantes.

229. Los primeros reportes sobre la actuación de grupos de choque datan de noviembre de 2008, cuando estos grupos presuntamente agredieron a personas que se manifestaban por los

³³⁷ Ver también Informe GIEI Nicaragua pp. 54–56; Amnistía Internacional, *Disparar a matar – Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua*, pp. 10–15; Connectas, “Armados en las calles: la red de paramilitares al servicio de Daniel Ortega”, Disponible en: <https://www.connectas.org/paramilitares-daniel-ortega/>.

³³⁸ Ver Informe de la CIDH “Graves violaciones a los Derechos Humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 86, 21 de junio de 2018, párr. 35, 58 y ss. disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-es.pdf>; Amnistía Internacional, *Disparar a matar - Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua*, Título 3.2. Utilización de grupos parapoliciales, págs. 10–15.

³³⁹ Informe GIEI Nicaragua, pp. 54–56.

³⁴⁰ CENIDH–FIDH, ¡Basta ya de impunidad! Ejecuciones extrajudiciales y represión en Nicaragua, ¿hasta cuándo?, 2021.

resultados de las elecciones municipales en varios municipios del país.³⁴¹ A partir de 2008 se han reportado patrones similares de ataques a manifestantes por turbas o grupos de choque, por ejemplo, en 2013 en el contexto de reclamos de personas retiradas por pensiones –en el caso conocido como *OcupalInss*–, o en 2016 en el marco de protestas en contra del proyecto del canal interoceánico.³⁴² Según diversas fuentes, estos grupos se caracterizaron desde sus inicios por operar con el beneplácito o tolerancia de la Policía.³⁴³

230. Como en ocasiones anteriores, estos grupos fueron movilizados para oponerse a las manifestaciones desde el mismo 18 de abril de 2018. La represión de las primeras protestas por parte de estos grupos y de la Policía Nacional acrecentó el descontento social, desencadenando una ola de protestas en todo el país.

231. De acuerdo con los testimonios recogidos por el GHREN, los miembros de las turbas sandinistas y los grupos de choque estaban armados con objetos contundentes como garrotes y palos, y portaban cascos. En algunos casos estos grupos contaban con elementos motorizados. Las turbas sandinistas y los grupos de choque estaban integradas en su mayoría por hombres jóvenes, incluyendo miembros de la Juventud Sandinista, jóvenes en riesgo de exclusión social –incluyendo integrantes y exintegrantes de pandillas– y trabajadores de instituciones del Estado. De acuerdo con numerosas fuentes,³⁴⁴ las personas habrían sido captadas, coordinadas y dirigidas a través de las estructuras locales del FSLN, de funcionarios de los gobiernos locales y, a nivel comunitario, por los Consejos Familiares, Comunitarios y de Vida (anteriormente denominados CPC), así como por los CLS y los sindicatos de las diferentes instituciones del Estado.³⁴⁵

b. Estructuras delincuenciales

232. Organizaciones y medios han denunciado el reclutamiento de jóvenes en riesgo de exclusión a través de los programas de prevención de la violencia y reinserción de jóvenes pandilleros promovidos por la Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional.³⁴⁶ De acuerdo con las alegaciones recibidas por el GHREN, la Policía y autoridades locales habrían movilizado a grupos de jóvenes estructurados en redes de narcomenudeo o dedicadas al hurto menor para reprimir la protesta social.³⁴⁷

c. Grupos pro-gobierno militarizados

233. Tras los primeros momentos de la crisis de abril de 2018, y en vista de que las protestas y los tranques continuaban, rebasando la capacidad de respuesta de la Policía Nacional y de los grupos de choque, comenzó a darse una transformación de los grupos armados a favor del Gobierno. Aparecieron así grupos altamente organizados y preparados, con capacidad para ejercer una violencia más letal, a través del empleo de tácticas militares y/o policiales. Los miembros de estos grupos utilizaban medios, distintivos y prendas de estilo militar, a

³⁴¹ La CIDH condenó la violencia en su comunicado de prensa 51/08 “CIDH expresa su preocupación por la situación en Nicaragua”, de 25 de noviembre de 2008.

³⁴² ACNUDH, Informe 2018, p. 37.

³⁴³ CIDH, Graves violaciones a Derechos Humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, junio de 2018, par. 58 y cc; Lira, Elvira Cuadra. “Dispositivos del silencio: control social y represión en Nicaragua”, *Nicaragua En Crisis: Entre La Revolución y La Sublevación*, editado por Aleksander Aguilar Antunes et al., CLACSO, 2018, pp. 245–256.

³⁴⁴ Entrevistas del GHREN BBIV023, BBIV031. Ver también: Lira, Elvira Cuadra. “Dispositivos del silencio: control social y represión en Nicaragua”, *Nicaragua En Crisis: Entre La Revolución y La Sublevación*, editado por Aleksander Aguilar Antunes et al., CLACSO, 2018, pp. 247–249; Informe GIEI Nicaragua, pp.54–56.

³⁴⁵ Entrevistas del GHREN BBIV013, BBIV024, BBIV031.

³⁴⁶ Informe GIEI Nicaragua, p. 55; véase CENIDH-FIDH, ¡Basta ya de impunidad! Ejecuciones extrajudiciales y represión en Nicaragua, ¿hasta cuándo?, 2021. Ver también: Confidencial, Complicidad oficial con pistolero FSLN, 7 de septiembre de 2015; La Prensa, “Pistolero es fuerza de choque oficialista”, 5 de septiembre de 2015, disponible en: <https://www.laprensani.com/2015/09/05/nacionales/1896576-pistolero-es-fuerza-de-choque-oficialista>.

³⁴⁷ Véase capítulo III.A.

menudo vistiendo camisas de algún color distintivo, y utilizaban armas de fuego, incluyendo armas de uso tradicional en contexto de guerra.³⁴⁸

234. Según información recibida por el GHREN, estos grupos fueron conformados principalmente por ex combatientes del Ejército Popular Sandinista, antiguos miembros del Ejército, de la Policía³⁴⁹ y de la seguridad del Estado,³⁵⁰ y por trabajadores de instituciones públicas. Algunos militares retirados de alto rango contribuyeron al reclutamiento de miembros y a la organización de los grupos militarizados.³⁵¹ Estos grupos jugaron un rol central en la represión, y en particular durante llamada “operación Limpieza”.³⁵²

iii) La posición del Gobierno

235. La postura de las autoridades frente a las acciones de los grupos armados pro-gobierno ha sido contradictoria. Durante sus intervenciones ante diversos medios internacionales, el Presidente Daniel Ortega ha negado los vínculos del Gobierno con fuerzas paramilitares y, en su lugar, ha acusado a la oposición política de conformar “grupos paramilitares armados,” financiados por actividades de narcotráfico y por organismos internacionales, para atacar a la policía y al gobierno.³⁵³

236. Al ser confrontado por un periodista con una fotografía de un grupo de hombres armados que portaban banderas e insignias del FLSN, el Presidente Daniel Ortega negó que fueran paramilitares, y dijo que eran “ciudadanos defendiéndose”. Después mencionó que la foto podría ser un montaje.³⁵⁴ En otra ocasión, el Presidente Ortega identificó a las personas que integran los grupos armados alineados con el Gobierno como “policías voluntarios”, afirmando que apoyaban a la Policía Nacional y que sus miembros pueden cumplir con esa labor “enmascarados” durante el desarrollo de operaciones especiales.³⁵⁵ Cabe señalar que los estándares internacionales sobre uso de la fuerza establecen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben identificarse como tales,³⁵⁶ y que los agentes de policía uniformados deben estar siempre identificados durante las manifestaciones o reuniones públicas.³⁵⁷

237. A pesar de estas declaraciones del Presidente, el Director General de la Policía Nacional, el Comisionado Francisco Díaz, en su momento afirmó que, “*no todo el mundo era un policía voluntario, sino también nuestros oficiales de policía profesionales. En la ley de cualquier país, cuando la vida está en peligro, a la policía se le permite usar pasamontañas para proteger su identidad*” y agregó que, “*la mayoría eran policías*

³⁴⁸ *Ibid.* Ver también Informe GIEI Nicaragua, p.190.

³⁴⁹ Según información recibida por el GHREN, la Policía Nacional habría reclutado a ex-policías que habían sido dados de baja por diversas causas (inclusive baja deshonrosa) para reintegrar las fuerzas policiales, o bien para conformar grupos armados progubernamentales.

³⁵⁰ Ex empleados del Ministerio del Interior (MINT) y de la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE).

³⁵¹ Informe del GIEI Nicaragua, p. 56; Lira, Elvira Cuadra. “Dispositivos del silencio: control social y represión en Nicaragua”, Nicaragua En Crisis: Entre La Revolución y La Sublevación, editado por Aleksander Aguilar Antunes et al., CLACSO, 2018, pp. 249–250.

³⁵² Los eventos y violaciones ligadas a la “operación limpieza” son descritas en detalle en el capítulo III.A del presente informe.

³⁵³ CNN, Daniel Ortega concede una entrevista a CNN, disponible en: <https://edition.cnn.com/videos/spanish/2018/07/31/nicaragua-protetas-daniel-ortega-entrevista-oppenheimer-kay-guerrero-fernando-rincon.cnn>; Youtube Bret Baier. Bret Baier interviews President Daniel Ortega. <https://www.youtube.com/watch?v=IU-vsCDeUjI>.

³⁵⁴ CNN, Daniel Ortega sobre presunta foto de paramilitares: Son ciudadanos defendiéndose, disponible en: <https://cnnespanol.cnn.com/video/nicaragua-paramilitares-daniel-ortega-entrevista-intvw-oppenheimer-cara-a-cara-p2/>.

³⁵⁵ Euronews. Daniel Ortega niega querer perpetuarse en el poder en Nicaragua en su entrevista con euronews (min. 7:23) <https://www.youtube.com/watch?v=nir0r4hycua>.

³⁵⁶ ONU, Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, A/CONF.144/28/Rev.1, pp. 117–124, párr. 10.

³⁵⁷ Comité de Derechos Humanos. Observación general núm. 37 (2020), relativa al derecho de reunión pacífica (artículo 21), CCPR/C/GC/37, párrs. 77, 89, 92.

profesionales en trabajo encubierto”.³⁵⁸ Lo anterior contravendría lo establecido en la ley, que, como se señaló anteriormente, establece que los miembros de la Policía Voluntaria realizan únicamente labores de prevención y que “*estarán debidamente identificados con uniformes y distintivos propios, su actividad deberá ser siempre coordinada y supervisada por un miembro de la Policía Nacional y en su actuar están sujetos a los principios fundamentales de actuación de la institución*”.³⁵⁹

238. Por su parte, según reportaron los medios de comunicación, el jefe del Ejército de Nicaragua, el General Julio César Avilés, rechazó la presencia de “paramilitares” en Nicaragua, y afirmó que el Ejército no tiene la base legal, ni la estructura, ni el equipamiento para desarmarlos, pero no negó la existencia de los grupos armados pro-gobierno.³⁶⁰

239. En su respuesta oficial a una carta conjunta enviada por un grupo de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos en noviembre de 2018,³⁶¹ el Estado de Nicaragua expresó que los “tranques ilegales” habían sido desinstalados por la Policía Nacional, y que “la Policía Nacional *con el apoyo de la Comunidad* ha restablecido el orden constitucional”.³⁶²

b) Mecanismos de vigilancia y control social

240. Los Comités de Liderazgo Sandinista, las Juventudes Sandinistas, los sindicatos afines al FSLN y los “Gabinetes de Familia”, anteriormente conocidos como Consejos de Poder Ciudadano (CPC), conforman una red organizativa con una amplia implantación territorial y sectorial. Esta estructura combina y articula tanto instituciones formales como formas de organización partidaria del FSLN.³⁶³

i) Consejos del Poder Ciudadano y Gabinetes de Familia

241. Los CPC y GPC fueron creados por el Gobierno en 2007 como estructuras territoriales de participación ciudadana, con presencia en todo el territorio de Nicaragua.³⁶⁴ Los CPC y GPC se implantaron en cada barrio, comunidad, municipio, departamento o región autónoma, integrados en el Gabinete Nacional del Poder Ciudadano. La participación en los CPC y GPC era voluntaria y no remunerada.³⁶⁵

242. Los CPC y GPC se conformaron como una red de estructuras gubernamentales integradas en el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES).³⁶⁶ La actual Vicepresidenta del Gobierno, Rosario Murillo, entonces Coordinadora de la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía, fue nombrada Secretaria Ejecutiva del CONPES, quedando a cargo de la coordinación y supervisión de la estructura nacional de instituciones de

³⁵⁸ Declaraciones del Comisionado Francisco Díaz al diario noruego Dagbladet, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zB_VD2JuGG0&t=49s.

³⁵⁹ Ley de la Policía Nacional, art. 25.

³⁶⁰ La Prensa Nicaragua “El Ejército no tiene estructura ni equipos para el orden público”, 25 de julio de 2019. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=yz7DXNbFci4&t=216s>; La Prensa. El Ejército no tiene estructura ni equipos para el orden público, asegura el general de Ejército, Julio Cesar Avilés. Julio 24 de 2019, disponible en: <https://www.laprensani.com/2019/07/24/nacionales/2572528-el-ejercito-no-tiene-estructura-ni-equipos-para-el-orden-publico-asegura-el-general-de-ejercito-julio-cesar-aviles>.

³⁶¹ AL NIC 5/2018 (7 de noviembre de 2018), disponible en: <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=24170>.

³⁶² Informe del Estado de Nicaragua Respecto a la Comunicación Conjunta de los Procedimientos Especiales de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Naciones Unidas (27 de noviembre de 2018) (énfasis añadido), disponible en: <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadFile?gId=34426>.

³⁶³ Informe GIEI Nicaragua, pp. 56–57

³⁶⁴ Decreto Ejecutivo No. 112 del 29 de noviembre de 2007, aprobado el 29 de noviembre del 2007, publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 230 del 29 de noviembre del 2007.

³⁶⁵ *Ibid.*, art. 1.

³⁶⁶ Salvador Martí i Puig, Nicaragua 2008: polarización y pactos. Revista de ciencia Política, volumen 29, No. 2, 2009, pp. 515–531.

participación ciudadana. El actual presidente de la Asamblea Nacional y entonces presidente, Gustavo Porras ocupó el puesto de Secretario Adjunto.

243. Los CPC se dividían en grupos de trabajo para atender las diversas necesidades de la comunidad. En noviembre de 2007, los CPC de seguridad ciudadana sustituyeron a los Comités de Prevención del Delito, que habían sido hasta el momento la forma de organización y participación comunitaria promovida por la Policía para la realización de actividades de prevención del delito.³⁶⁷

244. En 2014 se crearon los Gabinetes de la Familia, la Comunidad y la Vida (“Gabinetes de Familia”),³⁶⁸ presentes en los niveles departamentales, municipales, barrios y comarcas,³⁶⁹ e integrados por “personas, mujeres, hombres, jóvenes, adultas mayores que [promueven] los valores y unidad familiar, auto estima y estima, responsabilidad, derechos y deberes, comunicación, convivencia, entendimiento y espíritu de comunidad a fin de lograr coherencia entre lo que se es, lo que se piensa y lo que se hace”.³⁷⁰ Las competencias y objetivos de los Gabinetes de Familia se solapan significativamente con las de los CPC, que, en general, lograron una mayor implantación en las comunidades. Las alcaldías cuentan con oficinas de participación ciudadana, responsables de coordinar acciones con los Gabinetes de Familia.

245. Desde su creación, el Gobierno hizo un uso partidario de las estructuras de participación ciudadana. Como ha sido corroborado por diversas fuentes, los CPC y los GPC fueron cooptados por personas o miembros del FSLN o por personas cercanas al mismo, y han sido utilizados para canalizar beneficios y ayudas sociales a personas afines al Gobierno con la finalidad de generar o reforzar lealtades.³⁷¹ Antes y después del 2018, los Gabinetes de Familia llevaron a cabo tareas de vigilancia y control social, premiando a las personas partidarias del Gobierno con recomendaciones, puestos y otros beneficios. El GHREN recibió información sobre el papel de estos grupos para generar inteligencia sobre personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales y sus actividades, amenazar e intimidar a estas personas, e incluso participar en operativos de detención.³⁷²

ii) Los Comités de Liderazgo Sandinista

246. Los Comités de Liderazgo Sandinista (CLS) forman parte de la estructura partidaria del FSLN, junto con las Juventudes Sandinistas, los sindicatos afines al FSLN y otras estructuras. De acuerdo con los testimonios recibidos y otras fuentes consultadas,³⁷³ los CLS se establecieron CLS al interior de todas las instituciones públicas, con el objetivo vigilar a las funcionarias y los funcionarios públicos y sus actividades políticas, así como de coordinar y promover su participación en actividades de apoyo al Gobierno.

247. Cada CLS es liderado por una secretaria o secretario político, que sirve como enlace entre las instituciones del Estado y el FSLN. De acuerdo con diversas fuentes, el secretario político de Managua, Fidel Moreno, fue el encargado de convocar las reuniones de los secretarios políticos a nivel nacional, y de transmitir las instrucciones del Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo.³⁷⁴ En su testimonio ante la Comisión de

³⁶⁷ Cuadra, Elvira. “Dispositivos del silencio: control social y represión en Nicaragua”, *Nicaragua En Crisis: Entre La Revolución y La Sublevación*, editado por Aleksander Aguilar Antunes et al., CLACSO, 2018, pp. 250–251.

³⁶⁸ A pesar de la creación de los Gabinetes de Familia en 2014, las personas nicaragüenses, incluyendo medios, expertos y testigos a menudo se refieren a los CPC o a los “antes llamados CPC” para identificar estas estructuras.

³⁶⁹ Ley No. 870, Código de Familia, aprobada el 24 de junio de 2014, publicada en *La Gaceta*, Diario Oficial No. 190 del 8 de octubre de 2014 (en adelante “Código de Familia”), art. 34.

³⁷⁰ *Ibid.* art. 32.

³⁷¹ GGIV001, GGIV003; CIDH, Nicaragua: Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho, 25 octubre de 2021, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 288, pp. 37–38.

³⁷² Véase capítulo III.

³⁷³ GIEI Nicaragua, p. 57; CIDH, *Nicaragua: Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho*, 25 de octubre de 2021, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 288; Lira, Elvira Cuadra. “Dispositivos del silencio: control social y represión en Nicaragua”, *Nicaragua En Crisis: Entre La Revolución y La Sublevación*, editado por Aleksander Aguilar Antunes et al., CLACSO, 2018, p. 251; Informe de la verdad. Dictadura y represión en Nicaragua: Lucha contra la impunidad, 2021.

³⁷⁴ Entrevista del GHREN BBIV013. Agregar fuentes. GGCS088, GGCS102.

Derechos Humanos del Congreso de los Estados Unidos, una exfuncionaria pública confirmó que la orden de Rosario Murillo de atacar a las personas opositoras se canalizó a través de las estructuras políticas del FSLN:

[E]l 19 de abril, todos los secretarios políticos, los coordinadores de la Juventud Sandinista y los secretarios de los sindicatos fuimos convocados en el auditorio del Parque Japonés. En la entrada, los funcionarios escanearon las identificaciones de todos los participantes y Fidel Moreno Briones prohibió que las personas grabaran la reunión, todos guardamos los teléfonos celulares. El propósito de la reunión fue organizar la respuesta a las protestas callejeras. Moreno Briones tenía un mensaje claro: “Debemos defender la Revolución, vamos con todo, no les permitiremos que nos roben la Revolución”.³⁷⁵

248. Numerosas fuentes han apuntado a la responsabilidad de los secretarios políticos en los ataques a manifestantes y tranques o barricadas en 2018. Según testimonios disponibles en fuentes abiertas de miembros de grupos armados pro-gobierno, los secretarios políticos habrían reclutado, proporcionado armas, realizados pagos o promesas y girado órdenes a los miembros de estos grupos.³⁷⁶

D. La situación de los derechos humanos previa a 2018

249. Los procesos descritos de erosión gradual del Estado de derecho, de la separación de poderes, de las garantías e institucionalidad democráticas se tradujeron en un deterioro progresivo de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, que aceleró con la llegada al poder del presidente Ortega en 2007.

250. Las violaciones y abusos de derechos humanos que se cometieron en el país a partir de 2018 y que se documentan en el presente informe no representan eventos aislados, sino que conectan con patrones preexistentes de violaciones y abusos que venían siendo denunciados tanto por los mecanismos internacionales de derechos humanos por organizaciones de la sociedad civil nicaragüenses. Por su parte, la ausencia de respuesta y remedio efectivos ante estos actos, en gran medida asociada a la falta de control judicial efectivo y a la falta de implementación de las reformas jurídicas e institucionales necesarias, generó de hecho un clima de impunidad que facilitó la escalada de la violencia y de la persecución en contra de las personas opositoras o percibidas como tales a partir de la crisis de derechos humanos que comenzó en abril de 2018.

251. La presente sección presenta una descripción de la situación de los derechos humanos en el periodo previo a 2018, con especial énfasis en los patrones de violaciones de derechos humanos que constituyeron el foco de la investigación del GHREN en su primer informe. La situación sobre los derechos relativos a la identidad de género y orientación sexual durante este periodo, incluyendo la violencia sexual y de género, se analiza en el capítulo relativo a las dimensiones de género de las violaciones de derechos humanos (*infra*, III.C).

1. Ejecuciones extrajudiciales

252. En sus últimas observaciones sobre Nicaragua, que datan de 2008, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por el “uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía”, y recomendó al Estado que tomara las medidas necesarias para la protección del derecho a la vida y a la integridad física en el contexto de las actuaciones policiales.³⁷⁷ El Comité se refirió específicamente al uso excesivo de la fuerza policial en los

³⁷⁵ Denuncia ante la Comisión “Tom Lantos” de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos, disponible en: https://humanrightscommission.house.gov/sites/humanrightscommission.house.gov/files/documents/Testimony_Ligia%20Gomez_final%20%282%29.pdf.

³⁷⁶ Nicaragua Investiga, “Así los secretarios políticos y alcaldes del FSLN fueron piezas fundamentales de la represión del 2018”, 18 de abril de 2022, disponible en: <https://nicaraguainvestiga.com/politica/80732-secretarios-politicos-alcaldes-represion-2018/>.

³⁷⁷ Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Nicaragua, CAT/C/NIC/CO/1 (10 de junio de 2009), párr. 16.

centros penitenciarios, en el curso de las detenciones, o en el contexto de las protestas sociales.³⁷⁸

253. Durante este periodo fueron documentados diversos casos de muerte en custodia a manos de efectivos de la policía. Es el caso, por ejemplo, de Lubi Jesús Pérez Oporta, que falleció el 26 de abril de 2013, supuestamente a manos de oficiales de la policía cuando permanecía detenido en las celdas policiales del Distrito Seis de Managua. El asesinato, inicialmente atribuido a otro recluso, fue archivado en primera instancia por la Fiscalía Departamental.³⁷⁹

254. Los mecanismos internacionales de derechos humanos documentaron asimismo casos de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. Entre ellas se encuentra el caso de Modesto Duarte Altamirano, quien fue supuestamente torturado y ejecutado sumariamente el 25 de enero de 2015 en la comunidad El Portal, Jinotega, por un grupo de veinte supuestos miembros del ejército.³⁸⁰

255. Entre los casos más emblemáticos de ejecuciones extrajudiciales en contextos de operativos de seguridad destaca también la conocida como “masacre de las Juagüitas”. El 11 julio de 2015, en Managua donde los menores José Efraín y Aura Marina, de 11 y 12 años, y su tía Katherine Anielka Ramírez Delgadillo, de 22, fueron abatidos por disparos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. Aunque nueve oficiales fueron acusados y condenados a penas por de homicidio imprudente y otros delitos, los medios de comunicación desvelaron que ocho de estos permanecían en activo y se habían beneficiado de ascensos, incluyendo al jefe del operativo.³⁸¹

2. Detenciones arbitrarias

256. Durante el periodo previo a 2018, los mecanismos internacionales de derechos humanos alertaron sobre la existencia de un patrón de detenciones arbitrarias en Nicaragua. Dicho patrón continuó dándose de forma generalizada a pesar de la promulgación del Código Procesal Penal de 2001, que sustituyó el antiguo sistema inquisitorial y lo reemplazó por un sistema acusatorio.

257. La última visita al país del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (en adelante “WGAD” por sus siglas en inglés) tuvo lugar en 2006. Ya en ese momento, el Grupo de Trabajo expresó su preocupación de que “comen[zara] a tolerarse, en la práctica, la vulneración de los plazos procesales establecidos para el marco legal de la detención”.³⁸² Ello incluía la falta de presentación del detenido al juez de audiencia preliminar en el plazo de 48 horas prescrito por la ley,³⁸³ así como del plazo de 12 días posteriores a la detención que establece la legislación para la celebración de la audiencia preliminar.³⁸⁴

258. En su informe sobre Nicaragua, el WGAD expresó su preocupación sobre la situación de los denominados “donados”, como se denominaba habitualmente a personas detenidas sin contacto alguno con el mundo exterior, y sin acceso alguno a los beneficios penitenciarios, y que con frecuencia se encontraban recluidas más allá del término de sus sentencias.³⁸⁵

259. Entre otros, los mecanismos de derechos humanos identificaron las deficiencias del sistema de registro como uno de los principales factores que contribuyeron a la práctica generalizada de las detenciones arbitrarias. El Comité contra la Tortura alertó sobre la

³⁷⁸ *Ibid.*, párrs. 14, 16.

³⁷⁹ Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, Carta de alegación conjunta núm. NIC 3/2014 (16 de diciembre de 2014).

³⁸⁰ Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, Carta de alegación conjunta núm. NIC 2/2015 (23 de marzo de 2015).

³⁸¹ 100% Noticias. “La impunidad viaja en patrulla en Nicaragua: El crimen de Las Jagüitas,” 21 de enero 2021, disponible en: <https://www.connectas.org/especiales/nicaragua-no-calla/la-impunidad-viaja-en-patrulla-en-nicaragua/>

³⁸² Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, A/HRC/4/40/Add.3 (9 de noviembre de 2006), párr. 80.

³⁸³ *Ibid.*, párrs. 77–78.

³⁸⁴ *Ibid.*, párr. 79.

³⁸⁵ *Ibid.*, párr. 84.

“ausencia en las delegaciones de policía de registros eficaces, claros y sistemáticos” para conocer con claridad y certeza las fechas de entrada y salida de las personas detenidas de las estaciones policiales, así como los lugares y las autoridades ante quien se les haya presentado o confiado.³⁸⁶ Por ejemplo, el WGAD pudo constatar la ausencia de dichos registros en su visita a las estaciones policiales de Estelí y Bluefields, donde la falta de los mismos impedían constatar si las personas detenidas habían sido siquiera presentadas ante el juez semanas de su detención.³⁸⁷

260. Durante el periodo 2012–2019, el WGAD emitió observaciones en varios casos de detenciones arbitrarias. Estos casos tuvieron como denominador común los arrestos sin órdenes de captura y sin que las personas detenidas fueran informadas de los cargos, tuvieran acceso a asistencia legal o médica, entre otras irregularidades del derecho al debido proceso.³⁸⁸

261. Los mecanismos internacionales de derechos humanos identificaron también un patrón de detenciones arbitrarias masivas en el contexto de las protestas sociales, como se puso especialmente de manifiesto con las movilizaciones en contra del proyecto de construcción del canal interoceánico a partir de 2013. El 23 de diciembre de 2014, se reportó la dispersión violenta de un grupo de 110 personas cuando se manifestaban pacíficamente en el kilómetro 110 de la Carretera Panamericana, a la altura del Departamento de Rivas, así como la población de El Tule, en el kilómetro 26 de la carretera San Carlos–Managua. En el curso de dichos operativos, se calcula que hasta 87 personas fueron detenidas de forma arbitraria, algunas de las cuales fueron acusadas de delitos graves como terrorismo o exposición de personas a peligro, y trasladadas a “El Chipote”. Los manifestantes fueron posteriormente liberados, que no tuvieron acceso a familia y abogados, ni a la presentación al juez en el plazo prescriptivo y que fueron sometidos a malos tratos.³⁸⁹ Casos similares de detenciones en el contexto de las protestas contra el canal interoceánico se dieron en el contexto de las protestas de octubre de 2015.³⁹⁰

3. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

262. La práctica habitual de actos de tortura y malos tratos contra la población carcelaria y sus familias ha sido objeto de denuncias constantes con anterioridad a la protesta social de 2018. Entre los factores de la persistencia de este fenómeno se encuentra la ausencia de mecanismos efectivos de prevención de actos de tortura, así como la impunidad generalizada por dichos actos, tal y como ha sido señalado por los mecanismos internacionales de derechos humanos.

263. En 2009, el Comité contra la Tortura llevó a cabo su examen periódico sobre el cumplimiento por parte de Nicaragua de sus obligaciones en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas. En sus observaciones finales, sobre Nicaragua, el Comité contra la Tortura tomó nota de la entrada en vigor, en 2009, del nuevo Código Penal, que, en su artículo 436, tipificó por primera vez una definición explícita de tortura bajo un capítulo dedicado a los delitos de lesa humanidad.³⁹¹ El Comité expresó su preocupación por la falta de concordancia entre la definición del Código Penal con la definición recogida en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura, en la medida en que no se contemplaban específicamente los actos cometidos por “un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas,

³⁸⁶ CAT/C/NIC/CO/1, párr. 20.

³⁸⁷ A/HRC/4/40/Add.3, párrs. 81–83.

³⁸⁸ Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Caso 10/2012 (04 May 2012); Caso 16/2016 (25 April 2016).

³⁸⁹ Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, Carta de alegación conjunta, Caso núm. NIC 1/2015 (23 de febrero de 2015).

³⁹⁰ Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, Carta de alegación conjunta, Caso núm. NIC 6/2015 (14 de enero de 2016).

³⁹¹ Ley No. 641 que dicta el Código Penal. *La Gaceta* núms. 83, 83, 85, 86 y 87 (5, 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2008), art. 486.

a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.³⁹² El Comité censuró asimismo la falta de una definición de tortura en el Código Penal Militar de 2006.³⁹³

264. El Comité contra la Tortura expresó su preocupación por la “ausencia completa de casos y sentencias relativas a delitos de tortura y malos tratos”, lo que, en opinión del Comité, podía “asemejarse a la impunidad”.³⁹⁴ Entre los datos aportados por el Gobierno, el Comité destacó que la gran mayoría de las investigaciones en los casos de violaciones de derechos humanos por agentes públicos (un 68%) fueron declaradas negativas y que tan solo el 4% fue remitieron al Ministerio Público.³⁹⁵ El Comité también llamó la atención sobre una serie de falencias estructurales en la prevención de la tortura, incluyendo la ausencia de un sistema efectivo de inspección de las condiciones de detención y la falta de acceso por parte de organizaciones no gubernamentales.³⁹⁶

265. En 2014, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes llevó a cabo su primera visita al país, a raíz de la cual concluyó que la situación de las personas privadas era “sumamente preocupante”.³⁹⁷ En su informe al Gobierno de Nicaragua, el Subcomité documentó numerosas alegaciones de formas de tortura y malos tratos durante el arresto o detención, interrogatorios iniciales y traslados, concluyendo que dichos actos eran “muy frecuentes” en las instituciones penitenciarias visitadas,³⁹⁸ sin que los exámenes médicos del IML sirvieran efectivamente para documentar y prevenir dichos casos.³⁹⁹ El Subcomité alertó asimismo sobre un patrón de maltrato y abuso, incluyendo casos de abuso sexual, contra familiares de las personas detenidas.⁴⁰⁰

266. Las denuncias de la sociedad civil se centraron especialmente en los casos de tortura y malos tratos en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial o “El Chipote”. Según organismos no gubernamentales, las denuncias relativas a tortura llevada a cabo por efectivos policiales en “El Chipote” se incrementaron con la llegada al poder del presidente Ortega al poder en 2007, e involucraron con mayor frecuencia casos motivados ideológicamente.⁴⁰¹

267. Entre los casos emblemáticos de tortura y malos tratos se cuenta el de Juan Rafel Lanzas Maldonado, un campesino de la Comunidad Cerro Colorado, municipio de Matiguás, departamento de Matagalpa. Según reportaron los medios de comunicación, el Sr. Lanzas fue detenido junto con su primo del 28 de diciembre de 2017 por un robo de maquinaria agrícola que no cometió, y, tras ser golpeado en reiteradas ocasiones, fue trasladado a la prisión de Matiguás, donde tuvo que dormir en el suelo del baño común durante 18 días. Debido a las heridas causadas por el maltrato policial y la falta de higiene, el Sr. Lanzas sufrió una infección y le fueron amputados sus dos pies y parte de las pantorrillas.⁴⁰² La denuncia contra los supuestos abusos cometidos por la Policía fue sobreesfida.⁴⁰³

³⁹² CAT/C/NIC/CO/1, párr. 10.

³⁹³ *Ibid.*

³⁹⁴ CAT/C/NIC/CO/1, párr. 11.

³⁹⁵ *Ibid.*, párr. 12.

³⁹⁶ *Ibid.*, párr. 12.

³⁹⁷ Comunicado de prensa de Naciones Unidas: “El Subcomité para la Prevención de la Tortura concluye su primera visita a Nicaragua” (21 de mayo de 2014), disponible en: <https://www.ohchr.org/es/press-releases/2014/05/nicaragua-subcommittee-prevention-torture-concludes-its-first-regular-visit>

³⁹⁸ Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Visita a Nicaragua del 7 al 16 de mayo de 2014: recomendaciones y observaciones dirigidas al Estado parte, CAT/OP/NIC/ROSP/1 (11 de enero de 2023), párrs. 53–56.

³⁹⁹ *Ibid.*, párrs. 57–59.

⁴⁰⁰ *Ibid.*, párrs. 63–64.

⁴⁰¹ Diario Las Américas: “El Chipote, un tenebroso sitio de tortura en Nicaragua”, 1 de julio de 2015, disponible en: <https://www.diariolasamericas.com/america-latina/el-chipote-un-tenebroso-sitio-tortura-nicaragua-n3195981>

⁴⁰² La Prensa, “La historia real tras la amputación de Juan Lanzas,” 18 de febrero de 2018, disponible en: <https://www.laprensani.com/2018/02/18/suplemento/la-prensa-domingo/2378076-la-historia-real-tras-la-amputacion-de-juan-lanzas>.

⁴⁰³ Expediente Público, “La gangrena que carcome al Poder Judicial y Policial en Nicaragua,” 7 de diciembre de 2018, disponible en: <https://www.expedientepublico.org/la-gangrena-que-carcome-el-poder-judicial-y-policial-en-nicaragua/>

4. Condiciones de detención

268. Junto con los patrones de tortura y malos tratos, se denunciaron serias carencias en relación con las condiciones de las personas detenidas. A pesar de las recomendaciones emitidas por los mecanismos de derechos humanos a lo largo de largo de las últimas dos décadas, no se han conocido mejoras sustantivas de dichas condiciones.

269. Al menos desde 1999, los mecanismos internacionales de derechos humanos han venido alertando sobre la situación de hacinamiento existente en los centros de detención nicaragüenses, así como las condiciones existentes en dichos centros, tales como la insalubridad, la escasez de agua potable y alimentación adecuadas, la insuficiencia de luz natural y la falta de ejercicio físico, así como el acceso limitado a la atención médica. Se reportó la falta de separación entre acusados y condenados, entre adultos y menores, y entre mujeres y hombres.⁴⁰⁴ También se reportaron malas condiciones de detención de para niños en conflicto con la justicia y la falta de correccionales para la rehabilitación de estos.⁴⁰⁵ La situación de las prisiones en las regiones autónoma del Caribe fue objeto de especial preocupación.⁴⁰⁶

270. Las condiciones en las prisiones y otros centros de detención de Nicaragua fueron objeto de examen pormenorizado durante la visita oficial del Subcomité para la Prevención de la Tortura en 2014. El Subcomité describió como “críticas” las condiciones de la mayor parte de los centros de detención visitados en el país.⁴⁰⁷ En el análisis del Subcomité, la situación de hacinamiento en las cárceles nicaragüenses estaba vinculada con los lineamientos de la política criminal en el país, y en particular las condenas desproporcionadas por hechos subsumibles bajo determinadas categorías de delitos, tales como el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de activos y el crimen organizado, con un sesgo claramente determinado por el estrato social.⁴⁰⁸ La falta de acceso a los beneficios penitenciarios, incluyendo la libertad condicional, operó también otro factor determinante en la condición de hacinamiento.⁴⁰⁹

271. Según el análisis del Subcomité, la situación de hacinamiento generalizado tiene una serie de impactos negativos sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad, incluyendo el derecho a la salud, la integridad física y la vida. En este sentido, el Subcomité concluyó que las condiciones de hacinamiento, junto con la falta de higiene, suponía “una situación inhumana que impacta directamente en la salud de las personas privadas de libertad”.⁴¹⁰ Al mismo tiempo, el hacinamiento limita la capacidad del personal del personal y de las instalaciones para que las personas detenidas puedan acceder a determinados derechos y beneficios, tales como el régimen de visitas o la realización de actividades laborales, educativas o recreativas.⁴¹¹

272. La Dirección Penitenciaria de Máxima Seguridad, ubicada en el municipio de Tipitapa, departamento de Managua, representó, a raíz de su inauguración en abril 2014, una mejora de la situación de hacinamiento que se vivía en otros centros del país. El Subcomité contra la Tortura llevó a cabo una visita del penal, y censuró el “régimen extremadamente severo” y el “trato cruel” al que estaban sujetos los detenidos, que permanecían detenidos de pies y de manos sin poder abandonar su celda, salvo por una hora a la semana, y que permanecían reclusos en condiciones meteorológicas extremas.⁴¹²

⁴⁰⁴ Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Nicaragua: CCPR/C/NIC/CO/3 (12 de diciembre de 2008), párr. 17; CAT/C/NIC/CO/1, párrs. 21–22; CAT/OP/NIC/ROSP/1, párr. 17.

⁴⁰⁵ Comité de Derechos del Niño, CRC/C/15/Add.265 (21 de septiembre de 2005), párr. 43.

⁴⁰⁶ CAT/C/NIC/CO/1, párr. 21.

⁴⁰⁷ CAT/OP/NIC/ROSP/1, párr. 17.

⁴⁰⁸ *Ibid.*, párrs. 18–19.

⁴⁰⁹ *Ibid.*, párr. 20.

⁴¹⁰ *Ibid.*, párr. 29.

⁴¹¹ *Ibid.*, párrs. 21–22.

⁴¹² *Ibid.*, párr. 23.

5. Derecho a la protesta pacífica

273. Los mecanismos internacionales reportaron durante este periodo el uso excesivo de la fuerza y de ataques violentos producidos en el contexto de manifestaciones y de otras formas de protesta social, así como en sus impactos en el disfrute de derechos humanos básicos.

274. Ya en 2008, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza y los “arrestos abusivos” en el contexto de las protestas sociales.⁴¹³ En términos similares, el Comité contra la Tortura llamó la atención por la represión violenta contra los participantes, incluyendo miembros de la oposición política y representantes de organizaciones no gubernamentales. El Comité expresó especial preocupación por los actos violentos perpetradas por “patrullas ciudadanas”, en algunos casos con la anuencia o aprobación tácita de las autoridades.⁴¹⁴

275. A partir de 2008 se reportaron ataques a manifestantes por turbas o grupos de choque, con el beneplácito o aquiescencia de la policía. Por ejemplo, este patrón se observó durante las manifestaciones por los resultados de las elecciones municipales en 2008, también en 2013 en el contexto de reclamos de personas retiradas por pensiones –en el caso conocido como *OcupaInss*– o desde 2014 en el marco de protestas en contra del proyecto del canal interoceánico.⁴¹⁵

276. Un grupo de titulares de mandatos del Consejo de Derechos Humanos la ONU expresó su preocupación por los ataques perpetrados contra la marcha campesina contra el canal interoceánico que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2015, en Managua. Los días 26 y 27 de octubre de 2015, la Policía retuvo varios buses y camiones que conducían a participantes en la marcha nacional campesina de oposición al canal en Managua. En el transcurso de dichas retenciones, se produjeron arrestos de líderes y defensores de derechos humanos, así como una serie de agresiones que involucraron a fuerzas parapoliciales.⁴¹⁶

277. Asimismo, los expertos y expertas de la ONU recabaron información sobre agresiones perpetradas por simpatizantes del partido de Gobierno durante la manifestación del 27 de octubre de 2015, que tiraron piedras y láminas de acero contra las personas manifestantes desde camiones. Un grupo de 50 personas movilizadas en moto atravesaron supuestamente el cordón policial y agredieron física y verbalmente a las personas manifestantes, varias de las cuales resultaron heridas. Los expertos y expertas de la ONU expresaron especial preocupación por el impacto restrictivo de estos actos sobre el ejercicio del derecho a la libertad de reunión, así como la aparente falta de intervención policial para proteger a los manifestantes.⁴¹⁷

6. La situación de las personas defensoras de derechos humanos

278. Los informes de los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos previos a abril de 2018 dan cuenta del progresivo deterioro de la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua, incluyendo defensoras del ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas. Los ataques contra personas defensoras se intensificaron a partir de 2014, en el contexto de las protestas en contra del proyecto de construcción del canal interoceánico y de las movilizaciones ciudadanas por la democracia con los denominados “miércoles de protesta”.

279. Los mecanismos internacionales comenzaron a llamar la atención sobre la situación de mecanismos internacionales de derechos humanos de forma sistemática a partir de finales de los 2000. En 2008, el Comité de Derechos Humanos reportó acerca del “acoso sistemático y amenazas de muerte” contra personas defensoras. El Comité expresó particular preocupación por la situación de las defensoras de derechos de las mujeres.⁴¹⁸

⁴¹³ CCPR/C/NIC/CO/3, párr. 17.

⁴¹⁴ *Ibid.*, párr. 16.

⁴¹⁵ ACNUDH, Informe 2018, p. 37.

⁴¹⁶ Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, Carta de alegación conjunta, Caso núm. NIC 6/2015 (14 de enero de 2016).

⁴¹⁷ *Ibid.*

⁴¹⁸ CAT/C/NIC/CO/1, párr. 18.

280. Entre los casos examinados por los procedimientos especiales de la ONU se encuentran los agresiones y deportación arbitraria contra dos abogados de la ONG internacional Centro para la Justicia (CEJIL) en mayo de 2015, quienes fueron sometidos a una deportación forzosa por partes de agente migratorios cuando se destinaban a ingresar en país. En una comunicación enviada al Gobierno de Nicaragua emitida, entre otros, por el Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos, se expresó la preocupación que esta deportación estuviera vinculada a la actividad de defensa jurídica llevada a cabo por CEJIL en relación con el caso del canal interoceánico.⁴¹⁹

281. El 18 de mayo de 2017, un grupo de titulares de mandato de procedimientos especiales, volvieron a dirigirse al Gobierno para expresar su preocupación por los actos de intimidación, difamación y amenaza, incluyendo amenazas de muerte, contra cuatro conocidas defensoras de derechos humanos del país, vinculadas entre otros a la defensa de los derechos territoriales de las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua y al movimiento de protesta contra la construcción del canal interoceánico.

282. En el periodo entre 2007–2017, la CIDH adoptó nueve resoluciones de medidas cautelares en relación con Nicaragua. De ellas, el 80 por ciento tuvieron como objeto proteger a personas y organizaciones, destacadas por su labor de defensa de los derechos humanos. Las resoluciones de la CIDH documentaron una serie de patrones de presuntas amenazas y actos de violencia contra las personas defensoras, sus familiares y allegados, y usurpación de bienes, la mayoría de los cuales se dio en el periodo 2016–2017.⁴²⁰ En ocasiones, los actos fueron perpetrados por personas armadas y que aparentaban vestir con uniformes militares.⁴²¹ Según la CIDH, estos ataques se vieron agravados por la estigmatización de las personas defensoras por parte de altas autoridades del Estado a través de los medios de comunicación, exponiendo a dichas personas a ulteriores situaciones de riesgo.⁴²²

283. Entre los casos emblemáticos del sistema interamericano de protección, se encuentra el caso *Acosta y otros* que fue objeto de una sentencia condenatoria de la Corte IDH contra el Estado de Nicaragua en marzo de 2017. Los hechos del caso se relacionan con el asesinato en Bluefields del Sr. Francisco José García Valle, esposo de la Sra. María Luisa Acosta, una reconocida defensora de derechos humanos y directora de la ONG Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas (CALPI). En su sentencia, la Corte IDH concluyó que Nicaragua actuó negligentemente en la investigación del asesinato del esposo de la Sra. Acosta, obviando su vinculación con la actividad de defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas en el Caribe Sur.⁴²³ La Corte IDH calificó el asesinato del Sr. García Valle como un atentado contra una defensora de derechos humanos, y determinó que, en consecuencia el Estado tenía una especial obligación de explorar líneas de investigación para determinar que existían indicios que vincularon el asesinato a la actividad de la Sra. Acosta.⁴²⁴

284. La Sentencia de la Corte IDH en el caso *Acosta* se refirió más ampliamente a la alarma y preocupación existentes en relación con la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Nicaragua, particularmente en relación a “conflictos de tierras de comunidades indígenas,”⁴²⁵ e identificó la existencia de “situaciones preocupantes para que estas personas continúen desarrollando libremente y con seguridad su labor”.⁴²⁶ En este contexto, la sentencia de la Corte ordenó al Estado, como medida de no repetición, que

⁴¹⁹ Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, Carta de alegación conjunta, Caso núm. NIC 4/2015 (29 May 2015).

⁴²⁰ CIDH, Resolución No. 37/15, Caso núm. MC 505-15; Resolución núm. 44/16, Caso núm. MC 505-15 (2016); Resolución No. 2/16 (ampliación), Caso núm. MC 505-15; Resolución núm. 17/2016, resolución MC núm. 121–16 (2016); Resolución núm. 16/2017, Caso núm. MC 505-15 (2017); Resolución núm. 33/2017, Caso núm. MC 331-17 (2017).

⁴²¹ CIDH, Resolución núm. 33/2017, núm. MC 331-17 (2017), párr. 20.

⁴²² *Ibid.*

⁴²³ Corte IDH, *María Luisa Costa y otros v. Nicaragua*, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 25 de marzo de 2017, Serie C No. 334, párrs. 131–146, 148–169, 170–175, 181–182, 186–191 y 200.

⁴²⁴ *Ibid.*, párrs. 133–134.

⁴²⁵ *Ibid.*, párr. 221.

⁴²⁶ *Ibid.*, párr. 222.

elaborara “mecanismos de protección y protocolos de investigación para casos de situaciones de riesgo, amenazas y agresiones de defensoras y defensores de derechos humanos”.⁴²⁷ En resoluciones posteriores de supervisión del cumplimiento de la sentencia, la Corte concluyó que Nicaragua no había tomado medidas suficientes para dar cumplimiento de sus requerimientos y que, lejos de observarse un “mejoramiento sustancial” en la situación de las personas defensoras de derechos humanos, dicha situación “empeor[ó] significativamente” desde la emisión de la Sentencia, y en particular a partir de abril de 2018.⁴²⁸

E. Cronología de los principales eventos (abril de 2022 – 18 de febrero de 2023)

1. Abril a septiembre de 2018: estallido de la protesta social y de la represión

285. El descontento social acumulado durante años (ver Capítulo II.A) estalló en una serie de protestas masivas que se llevaron a cabo por toda Nicaragua a partir de abril de 2018. El 3 de abril, se declaró un incendio en la reserva biológica de Indio Maíz, al sureste del país, que causó la quema de más de 500 hectáreas.⁴²⁹ Grupos ambientalistas, campesinos y estudiantes se movilizaron en varios puntos del país para denunciar la insuficiente respuesta al incendio por parte de las autoridades.

286. El 16 de abril de 2018, el Gobierno aprobó un decreto presidencial reformando Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).⁴³⁰ La reforma preveía un aumento de la aportación salarial de los trabajadores a la seguridad social, así como una reducción de las pensiones.⁴³¹ El 18 de abril, un grupo de adultos mayores que comenzó una protesta ante las instalaciones del INSS en León, fue agredido por grupos pro-gobierno.⁴³² Esa misma tarde, como señal de protesta, se convocó a plantones en el Camino de Oriente en la entrada principal de la Universidad Centroamericana (UCA), en Managua, que fueron atacadas de manera conjunta por grupos armados pro-gobierno y policías antimotines.⁴³³

287. La represión de las protestas del 18 de abril generó una gran indignación ciudadana, dando lugar, al día siguiente, a protestas en varios departamentos del país. El uso de la fuerza letal por la Policía provocó el fallecimiento de varios manifestantes y numerosos heridos, desatando aún más el descontento social.⁴³⁴

288. Entre el 20 y el 22 de abril, las movilizaciones se intensificaron, extendiéndose a todo el país. El movimiento estudiantil comenzó a tomar protagonismo en las mismas, con la toma de varios centros universitarios en León y Managua.⁴³⁵ Las manifestaciones y concentraciones fueron duramente reprimidas, mientras que simpatizantes del gobierno

⁴²⁷ *Ibid.*, 223.

⁴²⁸ Caso Acosta y otros v. Nicaragua (Supervisión de Cumplimiento de Sentencia), Corte IDH, Resolución de 22 de noviembre de 2019, párr. 44. Véase también Caso Acosta y otros v. Nicaragua (Supervisión de Cumplimiento de Sentencia), Corte IDH, Resolución de 16 de marzo de 2021, párr. 17.

⁴²⁹ Mongabay, “Nicaragua: fuego arrasa con bosques de la Reserva Indio Maíz,” 10 de abril de 2018, reproducido en: <https://es.mongabay.com/2018/04/nicaragua-incendio-reserva-indio-maiz/>

⁴³⁰ Decreto Presidencial No. 03-2018, de 17 de abril de 2018, *La Gaceta, Diario Oficial* No. 72, de 19 de abril de 2018.

⁴³¹ CNN en español, “¿Qué ocurre en Nicaragua? Claves para entender la reforma del Seguro Social”, 20 de abril de 2018, disponible en <https://cnnespanol.cnn.com/2018/04/20/tres-muertos-por-protestas-en-nicaragua-que-ocurre-claves-para-entender-la-reforma-del-seguro-social/>

⁴³² La Prensa, “Nicolas Palacios, el primer agredido de las protestas de abril”, 7 de mayo de 2018, disponible en: <https://www.laprensani.com/2018/05/07/departamentales/2415161-nicolas-lopez-el-primero-agredido-de-las-protestas-de-abril>

⁴³³ La Prensa, “Así se contamos el primer día de las agresiones a las protestas contra la reforma del Seguro social en Nicaragua,” 18 de abril de 2018, disponible en: <https://www.laprensani.com/2018/04/18/politica/2784898-ammnistia-internacional-identifica-tres-taticas-que-la-dictadura-aplica-para-profundizar-la-represion-en-nicaragua>

⁴³⁴ ACNUDH, Informe 2018, párr. 14.

⁴³⁵ Amnistía Internacional, “Nicaragua: Disparar a matar: estrategias de represión de la protesta en Nicaragua,” AI Index Number: AMR 43/8470/2018, 29 de mayo de 2018 (en adelante “Disparar a Matar”), pp. 7-8, disponible en: <https://www.amnesty.org/es/documents/amr43/8470/2018/es/>

realizaron contra-movilizaciones para respaldar la reforma.⁴³⁶ Se produjeron enfrentamientos, destrozos, incendios en bienes públicos y privados, y saqueos de supermercados.⁴³⁷ En muchos departamentos, grupos de personas autoconvocadas conformaron el Movimiento 19 de abril y empezaron a levantar barricadas como forma de autoprotección.

289. El 22 de abril, el Gobierno revocó la reforma al seguro social y aceptó iniciar un proceso de Diálogo Nacional, con la mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. El diálogo preveía la participación de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, compuesta por organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, organizaciones campesinas y el sector empresarial.⁴³⁸ El 29 de abril, la Asamblea Nacional aprobó la creación de una Comisión de la Verdad para “conocer, analizar y esclarecer la verdad de los sucesos que han acontecido en Nicaragua desde el 18 de abril del 2018,”⁴³⁹ sin participación de personas de la oposición.⁴⁴⁰ Dichas medidas no consiguieron aplacar las protestas por todo el país.⁴⁴¹

290. El 30 de mayo, con ocasión del día de las Madres, las madres de las víctimas de la represión en las protestas convocaron a una marcha en Managua para pedir justicia por sus hijos. La marcha logró movilizar a miles de personas, y se replicó en otras ciudades. En Managua, la Policía Nacional y grupos armados pro-gobierno dispararon contra manifestantes desarmados en el sector de la UNI y frente al Estadio Nacional, donde se apostaron francotiradores. Los medios de comunicación reportaron 15 muertos y numerosos heridos.⁴⁴² En las marchas celebradas en Chinandega, Estelí y Masaya también se registraron víctimas fatales.⁴⁴³

291. La “Marcha de las Madres” fue un parteaguas dentro de la crisis. La población continuó levantando tranques y barricadas en gran parte del territorio nacional.⁴⁴⁴ Se levantaron tranques en las principales arterias de comunicación del país, que se abrían y cerraban de manera intermitente⁴⁴⁵ mientras barrios y poblaciones enteras se replegaron en sí mismas, organizándose en centros de acopio de comida y medicamentos e improvisado centros médicos.⁴⁴⁶

2. Junio a septiembre de 2018: la “Operación Limpieza”

292. El 15 de junio, por iniciativa de la Conferencia Episcopal, volvió a reunirse el plenario de la Mesa del Diálogo, suspendido tras la Marcha de las Madres.⁴⁴⁷ Como parte de los

⁴³⁶ 100% Noticias, “Juventud Sandinista realiza plantón a favor de reformas INSS”, 18 de abril de 2018, disponible en <https://web.archive.org/web/20180425114437/http://100noticias.com.ni/juventud-sandinista-realiza-planton-a-favor-de-reformas-inss/>

⁴³⁷ ACNUDH, Informe 2018, párr. 96.

⁴³⁸ Documento en el archivo del GHREN DDDOC070.

⁴³⁹ Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, Resolución número 1/2018, aprobada el 29 de abril de 2018, La Gaceta, Diario Oficial No. 81 de 30 de abril del 2018.

⁴⁴⁰ La Comisión fue conformada por el sacerdote franciscano Uriel Molina Oliú, la doctora Myrna Kay Cunningham Kain, el vicerrector de la UNAN-Managua, Jaime López Lowery, el subprocurador de derechos humanos Adolfo Jarquín Ortel, y el académico Cairo Amador.

⁴⁴¹ VosTV, “Zonas afectadas por tranques en Nicaragua”, 14 de mayo 2018, disponible en: <https://www.vostv.com.ni/nacionales/7152-zonas-afectadas-por-tranques-en-nicaragua/>

⁴⁴² El País, “Al menos 15 muertos en la marcha de las madres en Nicaragua”, 31 de mayo de 2018, disponible en: https://elpais.com/internacional/2018/05/31/america/1527729663_434755.html

⁴⁴³ La Prensa, “Entierran a personas asesinadas en Chinandega en la masacre del día de las Madres, 1 de junio 2018, disponible en: <https://www.laprensani.com/2018/06/01/departamentales/2428618-entierran-a-personas-asesinadas-en-chinandega-masacre-dia-de-las-madres>

⁴⁴⁴ Confidencial, “Más de cien tranques en toda Nicaragua”, 9 de junio 2018, disponible en: <https://www.confidencial.digital/nacion/87-tranques-empieza-cerco-sobre-managua/>

⁴⁴⁵ Youtube, “Reporte especial: los tranques en el interior de Nicaragua”, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=WhwGv-cdeVQ>; BBC, “Crisis en Nicaragua: “Si el gobierno mata, la Panamericana se cierra””, 4 julio 2018, disponible en <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44711577>

⁴⁴⁶ Confidencial, “La Managua bloqueada entre tranques y barricadas”, 10 de junio 2018, disponible en: <https://www.confidencial.digital/nacion/la-managua-bloqueada-entre-tranques-y-barricadas/>

⁴⁴⁷ Ver:

https://twitter.com/de_mediacion/status/1007001463200124930?cxt=HHwWhMC85dqfy_kbAAAA

acuerdos alcanzados, se conformó una Comisión de Verificación y Seguridad con el objetivo de cesar toda forma de violencia y amenaza y la remoción de los tranques.⁴⁴⁸ La Mesa de Diálogo planteó asimismo la urgencia de contar con la presencia de organismos internacionales como la CIDH, el ACNUDH y la Unión Europea.⁴⁴⁹

293. A pesar de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo, desde mediados de junio la policía y los grupos armados pro-gobierno actuaron de forma coordinada para atacar y dismantelar los tranques y barricadas, en el contexto de la se denominó Operación para la Paz – conocida popularmente como la “operación Limpieza”. Dichas intervenciones condujeron a enfrentamientos entre fuerzas de seguridad, grupos armados pro-gobierno y personas manifestantes, que escalaron los niveles de violencia.⁴⁵⁰

294. La mayoría de los tranques y cortes de carreteras fueron dismantelados a la fuerza por operativos conjuntos de la Policía y grupos armados pro-gobierno entre el 15 y el 17 de julio, que fueron particularmente violentas en Carazo, Chinandega, Granada, Managua y Masaya. Los enfrentamientos entre policías antimotines, grupos armados pro-gobierno y personas manifestantes dejaron como saldo un número alarmante de personas fallecidas y heridas.⁴⁵¹

295. Durante el resto del mes de julio, la Policía Nacional y los grupos armados pro-gobierno llevaron a cabo nuevos ataques contra los tranques y barricadas que todavía permanecían en pie, desoyendo los esfuerzos de mediación por parte de la Comisión de Verificación y Seguridad.

3. Agosto a diciembre de 2018: persecución de la sociedad civil

296. Tras concluir el levantamiento de los tranques y cierres de carretera, el Gobierno aceleró la persecución penal de líderes y lideresas sociales, así como de las personas asociadas con las protestas. Se reportaron altos niveles de violencia durante las capturas, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual cometida contra las personas detenidas, así como graves violaciones al debido proceso (véase el capítulo 3.B).

297. El 16 de julio, la Asamblea Nacional adoptó una Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La nueva ley reformó la tipificación de los delitos de terrorismo y de financiamiento del terrorismo, ampliando su definición y las penas asociadas a los mismos.

298. El 28 de septiembre, la Policía Nacional emitió un comunicado para prohibir las protestas contra el Gobierno y amenazando a las personas y organismos que convocaran a “desplazamientos ilegales”.⁴⁵² A pesar de dicha prohibición, siguieron convocándose protestas, aunque de menor intensidad, como piquetes, sentadas y otro tipo de manifestaciones, que continuaron siendo reprimidas.⁴⁵³

299. Entre los meses de octubre y diciembre de 2018 se reportó un aumento de los hostigamientos, vigilancia, ataques y detenciones de periodistas y liderazgos, la expulsión de personas naturalizadas o residentes que participaron en las protestas, así como el cierre de ONG y medios de comunicación.

⁴⁴⁸ Documento en el archivo del GHREN DDDOC063.

⁴⁴⁹ Nodal, “Nicaragua: llega un equipo de la CIDH para colaborar en el reinicio del Diálogo Nacional”, 24 de junio de 2018, disponible en: <https://www.nodal.am/2018/06/nicaragua-llega-un-equipo-de-la-cidh-para-colaborar-en-el-reinicio-del-dialogo-nacional/>

⁴⁵⁰ Véase Cap. 3.A.

⁴⁵¹ CIDH, Comunicado de prensa No. 128/18, “CIDH condena el recrudecimiento de la violencia en Nicaragua”, 13 de junio de 2018, disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/128.asp>

⁴⁵² El País, “Ortega declara ilegales las protestas en Nicaragua”, 29 de septiembre 2018, disponible en: https://elpais.com/internacional/2018/09/29/america/1538186460_718736.html

⁴⁵³ La Prensa, “Las siete marchas azul y blanco que la Policía Orteguita ha prohibido”, 24 de julio 2019, disponible en: <https://www.laprensani.com/2019/07/24/nacionales/2571737-las-siete-marchas-azul-y-blanco-que-la-policia-orteguista-ha-prohibido>

4. Febrero de 2019 a febrero de 2020: nueva fase de diálogo y primeras excarcelaciones

300. El 27 de febrero de 2019, dio inicio una nueva fase del diálogo nacional entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la Alianza Cívica, que condujo a un acuerdo en torno a la liberación de las personas presas políticas y el respeto a los derechos constitucionales de la ciudadanía.⁴⁵⁴ Coincidiendo con el inicio del diálogo, el Gobierno promovió la liberación unilateral de cientos de personas presas. El 11 de junio, la Asamblea Nacional aprobó una Ley de Amnistía, produciéndose nuevas excarcelaciones.

301. Sin embargo, a partir de julio se produjeron nuevas detenciones, así como recapturas de personas previamente excarceladas. El 31 de diciembre de 2019, el Gobierno anunció la excarcelación de 91 personas presas opositoras bajo el régimen de casa por cárcel. Entre ellas se encontraba la autodenominada “banda de los aguadores,” formada por 16 activistas arrestados en noviembre cuando intentaban dar agua a un grupo de mujeres que se mantenía en huelga de hambre en una iglesia asediada por la Policía Nacional.⁴⁵⁵

302. Entre enero y febrero de 2020, tras la nueva ronda de diálogo con el Gobierno, los movimientos políticos de la oposición dieron comienzo a un proceso de acercamiento con miras a fijar un frente común de cara a la contienda electoral de 2021.⁴⁵⁶

5. Marzo de 2020 a abril de 2021: estallido del COVID-19 y aprobación de leyes represivas

303. A partir de marzo de 2020 se produjo el estallido de la pandemia del COVID-19. El Gobierno desoyó las recomendaciones internacionales, negándose a cerrar sus fronteras y a suspender clases presenciales de la educación pública. A partir del 5 de mayo, el Ministerio de Sanidad (MINSA) dejó de publicar reportes diarios sobre el COVID-19, contribuyendo a la falta de transparencia sobre la prevalencia de la enfermedad.⁴⁵⁷ Mientras tanto, el Gobierno continuó convocando a actos de carácter masivo.⁴⁵⁸

304. Hacia finales de 2020, la Asamblea Nacional adoptó una serie de instrumentos legislativos con impactos restrictivos sobre el espacio cívico y democrático (véase el Capítulo IV.B). El 15 de octubre, la Asamblea Nacional adoptó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, limitando la capacidad de las ONGs y otras entidades para acceder a la financiación extranjera. El 27 del mismo mes, la Asamblea Nacional adoptó la Ley Especial de Ciberdelitos, que introducía penas por la publicación de noticias que pudieran producir “alarma, temor o zozobra”. En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, declarando como “traidores a la patria” a las personas responsables de una larga lista de acciones que “lesionen los intereses supremos de la nación”. El 18 de enero de 2021, se aprobó una reforma del artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua, que restringía las penas de prisión a un máximo de 30 años, para permitir la figura de la prisión perpetua por “delitos graves, cuando concurren circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional”.

⁴⁵⁴ Vatican News, “Avanza el diálogo nacional de Nicaragua: acuerdos en favor de la ciudadanía”, 30 de marzo de 2019, disponible en <https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-03/dialogo-nacional-nicaragua-un-paso-adelante-firma-de-acuerdos.html>

⁴⁵⁵ BBC News Mundo, “Crisis en Nicaragua: el gobierno libera a 91 presos opositores, incluida “la banda de los aguadores”, 31 de diciembre de 2019, disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-50950560>

⁴⁵⁶ Confidencial, “Alianza y Unab llaman a Coalición “sin exclusiones””, 18 de enero de 2020, disponible en: <https://www.confidencial.digital/politica/alianza-y-unab-llaman-a-coalicion-sin-exclusiones/>

⁴⁵⁷ Otras Miradas, “La negligencia de Daniel Ortega propaga la COVID-19 en Nicaragua”, 26 de mayo de 2020, disponible en: <https://www.agenciaocote.com/blog/2020/05/26/la-negligencia-de-daniel-ortega-propaga-la-covid-19-en-nicaragua/>

⁴⁵⁸ El 19 Digital, “Nicaragüenses caminan con la Fuerza de la Fe y la Esperanza, en Amor en tiempos del Covid-19,” 14 de marzo de 2020, disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:101259-nicaraguenses-caminan-con-la-fuerza-de-la-fe-y-la-esperanza-en-amor-en-tiempos-del-covid-19>

6. Mayo a diciembre de 2021: elecciones presidenciales y criminalización de la oposición política

305. A partir de mayo de 2021 comenzó el periodo más intenso de criminalización de organizaciones de sociedad civil y de personas opositoras, que precedió a la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas anunciadas para el 7 de noviembre de ese mismo año.

306. El 2 de junio, la precandidata presidencial Cristina Chamorro fue detenida y sometida a arresto domiciliario, acusada de un supuesto delito de lavado de dinero durante su periodo como presidente de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.⁴⁵⁹ El 13 de agosto, las instalaciones del periódico La Prensa, uno de los últimos rotativos independientes de gran circulación, fueron ocupadas y confiscadas *de facto* por la Policía Nacional.⁴⁶⁰

307. Entre junio y noviembre las autoridades detuvieron a otros seis candidatos presidenciales para las elecciones de noviembre. Durante el mismo periodo, fueron detenidas numerosas personas pertenecientes a movimientos políticos de la oposición, movimientos sociales y al sector privado. Por su parte, el CSE canceló la personalidad jurídica de tres partidos políticos de oposición.⁴⁶¹

308. Las elecciones de noviembre dieron como resultado la victoria del Presidente Daniel Ortega y de la Vicepresidenta Rosario Murillo con un 75 por ciento de los votos, mientras que el FSLN se alzó con 75 de los 90 diputados.⁴⁶² Los resultados de las elecciones fueron desconocidos por gran parte de la comunidad internacional.⁴⁶³ Según fuentes no gubernamentales, el promedio nacional de participación fue únicamente del 18.5%.⁴⁶⁴

309. El 18 de noviembre, el Gobierno de Nicaragua inició el retiro formal del país de la Organización de Estados Americanos con la denuncia de la Carta de la organización.⁴⁶⁵

7. Enero 2022 a la fecha de redacción de este informe: cierre total del espacio cívico y democrático

310. El 2022 representó el cierre total del espacio cívico con el cierre masivo de organizaciones sin fines de lucro (OSFL), incluyendo universidades y ONG. Entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, se clausuraron seis universidades privadas nacionales e internacionales.⁴⁶⁶

311. Durante la primera mitad de 2022, diversas figuras relacionadas a la Iglesia Católica sufrieron actos de represión por parte de las autoridades. En marzo, el Gobierno retiró el beneplácito al Nuncio Apostólico de la Santa Sede, obligándole a dejar el país.⁴⁶⁷ En julio,

⁴⁵⁹ BBC Mundo, “Cristiana Chamorro: la aspirante presidencial opositora queda bajo arresto domiciliario en Nicaragua después de que se ordenara su detención,” 2 de junio de 2021, disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57338515>

⁴⁶⁰ France 24, “Policía allana el diario ‘La Prensa’ de Nicaragua después de que este salió de circulación,” 13 de agosto de 2021, disponible en: <https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210812-nicaragua-laprensa-cierra-version-impresa>

⁴⁶¹ Véase el Cap. III.B.

⁴⁶² France24, “Nicaragua: Daniel Ortega es reelegido con 75 % de los votos tras unos comicios sin oposición,” 8 de noviembre de 2021, disponible en <https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20211108-nicaragua-ortega-reeleccion-abstencion-oposicion-detenciones>.

⁴⁶³ France24, “La OEA y la comunidad internacional descalifican las elecciones de Nicaragua”, 14 de noviembre de 2021, disponible en <https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20211114-la-oea-y-la-comunidad-internacional-descalifican-las-elecciones-de-nicaragua>.

⁴⁶⁴ Urnas Abiertas, “Radiografía de la farsa electoral”, noviembre de 2022, p. 4, disponible en <https://urnasabiertas.com/wp-content/uploads/2021/11/Informe-9-Urnas-Abiertas-7N.pdf>

⁴⁶⁵ Comunicado de Prensa: “CIDH reafirma su competencia sobre Nicaragua y lamenta su decisión de denunciar la Carta de la OEA en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos,” 20 de noviembre de 2021.

⁴⁶⁶ Confidencial, “Más de 18 000 estudiantes afectados por confiscación de seis universidades”, 9 de febrero de 2022, disponible en: <https://www.confidencial.digital/nacion/mas-de-18-000-estudiantes-afectados-por-confiscacion-de-seis-universidades/>.

⁴⁶⁷ Santa Sede, “Comunicato della Santa Sede, 12.03.2022”, disponible en: <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/12/0170/00365.html>.

un grupo de religiosas de la orden Madre Teresa de Calcuta que fueron expulsadas del país en el mes de julio.⁴⁶⁸

312. El 24 de abril, las autoridades nicaragüenses expulsaron la OEA del país y el retiraron de su representación diplomática ante este organismo. El mismo día, la Policía Nacional ocupó las instalaciones de la organización en Managua e incautó sus bienes.⁴⁶⁹

313. A partir de julio de 2022, se produjo la cancelación masiva de organizaciones sin fines de lucro.

314. También en julio, la Policía Nacional, junto con miembros del FSLN, tomaron por la fuerza cinco alcaldías del país (El Almendro, El Cuá, Murra, San Sebastián de Yalí y Santa María de Pantasma), y depusieron a sus alcaldes. Todos los alcaldes pertenecían al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).⁴⁷⁰ Con la toma de estas alcaldías, el FSLN controló el 92 por ciento de las alcaldías del país.⁴⁷¹

315. Desde principios de agosto se materializó una nueva escalada de persecución en contra de la Iglesia Católica a través de detención de figuras religiosas, el allanamiento y el asedio a algunos templos, el cierre de medios de comunicación de la Iglesia, la expulsión de personas religiosas, y la prohibición de realizar celebraciones religiosas como procesiones y otras tradiciones católicas.⁴⁷²

316. El 6 de noviembre tuvieron lugar elecciones municipales para la elección de autoridades locales en los 153 municipios de Nicaragua, en un clima marcado por la desmovilización, detenciones arbitrarias y hechos de violencia electoral.⁴⁷³ Las elecciones dieron la victoria al FSLN en la totalidad de los municipios del país.⁴⁷⁴

317. Entre agosto de 2022 y enero de 2023, se llevaron a cabo nuevas detenciones arbitrarias y condenas de personas opositoras, incluyendo miembros de la Iglesia Católica y familiares de liderazgos políticos.

318. El 9 de febrero, el Tribunal de Apelaciones de Managua decretó la “deportación inmediata” de 222 presos políticos, que fueron trasladados a los Estados Unidos.⁴⁷⁵ Al día siguiente, el Gobierno declaró “traidoras de la patria” a las personas liberadas y les privó de

⁴⁶⁸ BBC News Mundo, “Nicaragua expulsa del país a las monjas de la orden de la Madre Teresa”, 7 de julio de 2022, disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-62078505>

⁴⁶⁹ El País, “Daniel Ortega expulsa a la OEA de Nicaragua”, 25 de abril de 2022, disponible en: <https://elpais.com/internacional/2022-04-25/daniel-ortega-expulsa-a-la-oea-de-nicaragua.html>

⁴⁷⁰ France 24, “Nicaragua: Daniel Ortega ‘toma’ cinco alcaldías controladas por la oposición”, 4 de julio de 2022, disponible en: <https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220704-partido-de-ortega-toma-cinco-municipios-opositores-en-nicaragua-y-reemplaza-alcaldes>

⁴⁷¹ Confidencial, “Las 11 alcaldías de Nicaragua en las que aún no ondea la bandera del FSLN,” 5 de noviembre de 2022, disponible en: <https://www.confidencial.digital/politica/las-ultimas-alcaldias-de-nicaragua-en-las-que-aun-no-ondea-la-bandera-del-fsln/>

⁴⁷² Christian Solidarity Network (CSW), “Civil society under siege,” 13 de diciembre de 2022, disponible en: <https://www.csw.org.uk/2022/12/13/report/5885/article.html>; Confidencial: “‘Iglesia por cárcel’, la embestida orteguista contra las procesiones,” 8 de febrero de 2023, disponible en: <https://www.confidencial.digital/nacion/iglesia-por-carcel-la-embestida-orteguista-contra-las-procesiones/>.

⁴⁷³ Urnas Abiertas, “Coacción del voto y desinterés ciudadano marca previa de las elecciones municipales”, 4 de noviembre de 2022, disponible en: <https://urnasabiertas.com/coaccion-del-voto-y-desinteres-ciudadano-marca-previa-de-las-elecciones-municipales/>.

⁴⁷⁴ Urnas Abiertas, “Nicaragua observa”, 6 de noviembre de 2022, disponible en: https://urnasabiertas.com/wp-content/uploads/2022/12/UA_Nicaragua-Observa_6N.pdf

⁴⁷⁵ Resolución del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Managua. Sala Penal Uno, 8 de febrero de 2022, en el archivo del GHREN BBD0C307.

la nacionalidad nicaragüense.⁴⁷⁶ El 15 de febrero, otras 94 personas fueron privadas de su nacionalidad.⁴⁷⁷

⁴⁷⁶ Declaración del Magistrado Presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, reproducido en El 19, Nicaragua ordena la deportación de 222 traidores a la Patria, 9 de febrero de 2023, disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:136779-nicaragua-ordena-la-deportacion-de-222-traidores-a-la-patria>

⁴⁷⁷ Resolución del Magistrado Presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua, 15 de febrero de 2023, en el archivo del GHREN BBD0C332, BBD0C333, BBD0C334, BBD0C335, BBD0C336.

Parte II: Hallazgos

III. Violaciones de derechos humanos

A. Ejecuciones extrajudiciales

1. Marco normativo

319. El derecho a la vida y a no ser privado arbitrariamente de ella es esencial a toda persona humana y como tal, es un derecho inderogable, salvo por necesidad absoluta. Está reconocido como una norma de *ius cogens* y receptado en tratados regionales e internacionales de los cuales Nicaragua es parte.⁴⁷⁸ El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante “ICCPR” por sus siglas en inglés) estipula que “[e]l derecho a la vida es inherente a la persona humana” y que nadie “podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.⁴⁷⁹ Por su parte, la Convención Americana reconoce que toda persona tiene el derecho a que se respete su vida y a no ser privado arbitrariamente de ésta.⁴⁸⁰ Adicionalmente, la propia Constitución Política de Nicaragua establece que: “[e]l derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana”.⁴⁸¹

320. El Estado está obligado a proteger el derecho a la vida, y por tanto a garantizar que nadie sea privado arbitrariamente⁴⁸² de su vida. Esta obligación se extiende a todo momento y en toda circunstancia, incluso durante conflictos internos u otra emergencia pública.⁴⁸³ El uso de la fuerza potencialmente letal con el propósito de hacer cumplir la ley es una medida extrema a la que solo se debe recurrir cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida o evitar lesiones graves ante una amenaza inminente.⁴⁸⁴

321. Por consiguiente, las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (incluyendo la policía, el ejército, otras fuerzas de seguridad del Estado, o cualquier otra persona o grupo que actúe en cualquier otra capacidad pública), solamente están autorizados a utilizar armas de fuego en condiciones y circunstancias limitadas. El uso de armas de fuego con una intención deliberadamente letal solo se permite cuando sea estrictamente necesario para proteger una vida.⁴⁸⁵ En cualquier otro caso, lo anterior equivaldría a un uso arbitrario de la fuerza y, en determinadas circunstancias, podría constituir una ejecución

⁴⁷⁸ Declaración Universal, art. 3; ICCPR, arts. 4 y 6, párr. 1; Convención Americana, art. 27.

⁴⁷⁹ ICCPR, art. 6, párr. 1. El artículo 26 del ICCPR garantiza a todas las personas el derecho a igual protección de la ley “sin discriminación”.

⁴⁸⁰ Convención Americana, art. 4.

⁴⁸¹ Constitución Política de Nicaragua, art. 23.

⁴⁸² La privación arbitraria de la vida es inadmisibles en virtud del derecho internacional y no se requiere demostrar ‘intencionalidad’ por parte del Estado para que una muerte o privación de una vida se considere ‘arbitraria’. Véase Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca de la adopción de un enfoque de género respecto de las ejecuciones arbitrarias, A/HRC/35/23, 6 de junio de 2017, párrs. 29 y 34.

⁴⁸³ ICCPR, art. 4; Convención Americana, art. 27. Véase ACNUDH y Unión Interparlamentaria, Derechos Humanos – Manual para Parlamentarios No. 26, 2016, pp. 53, 55.

⁴⁸⁴ Véase ONU, Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 1989 (en adelante “Principios Básicos”), Principio 9; ONU, Asamblea General, Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, A/RES/34/169 (17 de diciembre de 1979) (en adelante “Código de Conducta para Funcionarios”), comentario al art. 3. Véase también Consejo de Derechos Humanos, La promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas, A/HRC/RES/38/11 (16 de julio de 2018), párr. 11.

⁴⁸⁵ Principios Básicos, Principio 9. Sin embargo, no se requiere intencionalidad por parte del Estado o agente del Estado para que una privación de la vida se considere arbitraria, ya que es suficiente que haya habido un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza. Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca de la adopción de un enfoque de género respecto de las ejecuciones arbitrarias, A/HRC/35/23 (6 de junio de 2017), párr. 34.

extrajudicial.⁴⁸⁶ El Estado es también responsable de las violaciones del derecho a la vida cometidas por agentes no estatales que actúan a instancias del gobierno o con su conocimiento o consentimiento. Los Estados deben proteger y garantizar el derecho a la vida, entre otros, mediante el ejercicio de la debida diligencia para evitar privaciones arbitrarias de la vida por parte de agentes privados.⁴⁸⁷

322. El derecho internacional exige a los Estados que sus agentes públicos y /o quienes actúen con su consentimiento expreso o tácito, adopten todas las medidas de precaución razonables para proteger la vida.⁴⁸⁸ Los estándares internacionales de derechos humanos establecen los criterios y estrategias que deben guiar a la autoridad pública en el uso de la fuerza durante manifestaciones públicas, incluso cuando éstas se tornen violentas.⁴⁸⁹ La autoridad pública, o quien la detente con su consentimiento expreso o tácito, debe utilizar en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza. Las armas de fuego no son una herramienta táctica apropiada para la vigilancia de reuniones.⁴⁹⁰

323. Además, los Estados tienen la obligación positiva de proteger activamente las reuniones pacíficas. Dicha obligación abarca la protección de las personas participantes en reuniones pacíficas frente a actos de violencia perpetrados por individuos o grupos de personas, incluyendo contra manifestantes, agentes provocadores, agentes del Estado o individuos que operen a cuenta de este, con el propósito de perturbar, dispersar o suprimir tales reuniones.⁴⁹¹

324. La normativa nicaragüense, haciendo eco de sus obligaciones internacionales, establece una serie de reglamentaciones prohibiendo la portación o el uso de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales afines que pongan en riesgo la vida humana, durante manifestaciones populares, actos y/o asambleas públicas, espectáculos y reuniones políticas y durante protestas de carácter social o en el caso de enfrentamientos a grupos de manifestantes en situaciones de alteración al orden público.⁴⁹²

⁴⁸⁶ Las ejecuciones extrajudiciales constituyen una forma específica de privación arbitraria de la vida, llevada a cabo mediante el uso deliberado de fuerza letal por agentes del Estado, a instancias de éstos o con su consentimiento y/o aquiescencia, contra una persona. Véase, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 6 (art. 6 – derecho a la vida), 30 de abril de 1982, párr. 3.

⁴⁸⁷ Véase Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, A/HRC/14/24 (20 de mayo de 2010), párr. 46 a), b) y d).

⁴⁸⁸ Esas medidas incluyen la adopción de legislación que regule: el uso de la fuerza letal; la implementación de procedimientos destinados a garantizar que las actuaciones de las fuerzas del orden se adecúen a los estándares internacionales en la materia; la presentación de informes; y la notificación, revisión e investigación obligatorias de incidentes que hayan resultado en víctimas fatales. Véase Principios Básicos, Principio 1; Consejo Económico y Social, Principios de las Naciones Unidas relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, Res. 1989/65 (24 de mayo de 1989) (en adelante “Principios de Prevención e Investigación”), Principio 8.

⁴⁸⁹ Véase Principios Básicos, Principios 9, 12–14; Código de Conducta para Funcionarios, comentario al art. 3; Consejo de Derechos Humanos, La promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas, A/HRC/RES/38/11, 16 de julio de 2018, párrs. 10, 11 y 13; Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, A/HRC/17/28 (23 de mayo de 2011), párr. 75. Véase también CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Protesta y Derechos Humanos, 2019, párrs. 101–117.

⁴⁹⁰ Véase Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 37 (2020), relativa al derecho de reunión pacífica (artículo 21), 17 de septiembre de 2020 (en adelante “Observación General No. 37”), párrs. 78–79, 81, 87–88, 92. Véase también, “Naciones Unidas. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Informe Preparado por la Secretaría de las Naciones Unidas, A/CONF.144/28/Rev.1 (27 de agosto a 7 de septiembre de 1990), capítulo 2, pp. 117–124.

⁴⁹¹ Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, A/HRC/20/27 (21 de mayo de 2012), párr. 33.

⁴⁹² Decreto Presidencial No. 26-96, Reglamento de la Ley de la Policía Nacional, aprobado el 25 de octubre de 1996, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 32 del 14 de febrero de 1997, arts. 175–200.

325. La obligación de protección al derecho a la vida incluye también la obligación de los Estados de investigar, de manera exhaustiva, inmediata e imparcial, todos los casos en que exista sospecha de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Esto incluye, investigar de forma independiente e imparcial con miras a identificar, enjuiciar y, llegado el caso, condenar a aquellos responsables de estos crímenes.⁴⁹³ Las investigaciones y los procesos que de ellas deriven deben llevarse a cabo de conformidad con las normas internacionales en la materia y deben tener por objeto asegurar que las personas responsables sean llevadas ante la justicia, incluso para explorar la responsabilidad de los superiores en relación con las violaciones del derecho a la vida cometidas por sus subordinados y subordinadas.⁴⁹⁴

2. Contexto de las privaciones arbitrarias de la vida

326. La primera etapa de la represión a las protestas sociales multitudinarias de 2018 se caracterizó por el elevado número de víctimas mortales y personas heridas. En esta etapa que abarca el periodo comprendido entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018, se reportaron un elevado número de violaciones y abusos al derecho a la vida y a la integridad física en casi todos los departamentos del país, como resultado de la represión de las manifestaciones y los tranques, y de los enfrentamientos entre elementos de la Policía Nacional y/o grupos armados pro-gobierno y los manifestantes.

327. Ante la falta de datos oficiales confiables,⁴⁹⁵ los organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han desarrollado sus propios registros y listados de personas fallecidas y heridas en el marco de las protestas sociales que se desencadenaron en 2018. A continuación, se señalan las cifras de víctimas mortales y de personas heridas reportadas por diferentes organismos y organizaciones, y entidades del Gobierno. Las diferencias entre las cifras reportadas por las fuentes se deben a los diversos horizontes temporales que abarca cada registro, así como a los distintos criterios adoptados por cada fuente para incluir o excluir casos en función de su vinculación al contexto.

⁴⁹³ Principios Básicos, Principio 7; Principios de Prevención e Investigación, Principios 8–10; Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, A/HRC/17/28 (23 de mayo de 2011), párr. 119(7). Véase Observación General No. 37, párr. 90; Consejo de Derechos Humanos, La promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas, A/HRC/RES/38/11 (16 de julio de 2018), párr. 13. Véase también la versión revisada del Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias (Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas), 2016 (en adelante “Protocolo de Minnesota”).

⁴⁹⁴ Véase Principios de Prevención e Investigación, Principios 9–10, 18–19; Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 31, 26 de mayo de 2004, párr. 18. Véase también los principios desarrollados en el Protocolo de Minnesota.

⁴⁹⁵ El GHREN subraya que no se han realizado investigaciones creíbles por parte del Estado, de las muertes violentas en el contexto de las protestas del 2018. Los datos proporcionados por el Gobierno de Nicaragua en los distintos comunicados e informes a mecanismos internacionales de derechos humanos reproducen los datos presentados por la Policía Nacional, señalada como la principal institución perpetradora de las ejecuciones extrajudiciales. En lo que respecta a la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz (CVJP), cabe señalar que ésta fue creada mediante la Resolución No. 01-2018 de la Asamblea Nacional. La Asamblea nombró también a sus cinco miembros, todos con vínculos al partido de Gobierno. Los hallazgos la CVJP han sido fuertemente cuestionados por la sociedad civil, por presentar versiones de los hechos que reproducen el discurso oficialista y culpabilizan a las personas manifestantes de las muertes. Por otro lado, la información oficial disponible relativa a las personas heridas es parcial, debido a la negativa de numerosos centros de salud a brindar asistencia médica a personas manifestantes, y el miedo de las personas a ser identificadas por haber sido tratadas en centros de salud y de ser sometidas a otras formas de represión.

Tabla 1
Cifras de personas fallecidas, según las fuentes

Fuente	Período	Personas fallecidas			Civiles heridos		
		Civiles fallecidos	Policías fallecidos	Peronas heridas	Policías heridos		
Gobierno de Nicaragua ⁴⁹⁶	19 de abril– 13 de septiembre de 2018	198	176	22	1240	839	401
GIEI Nicaragua. ⁴⁹⁷	18 de abril -30 de mayo de 2018	109	106	3	1400		
CIDH ⁴⁹⁸	18 de abril–1 de octubre de 2018	350	332	23	más de 2000 ⁴⁹⁹		
CVJP ⁵⁰⁰	18 de abril de 2018 – 15 de julio 2019 ⁵⁰¹	251	229	22	2264	1846	418
CEJIL ⁵⁰²	18 abril – 1 octubre de 2018	342	319	23	1457		

328. El GHREN investigó 40 casos, para lo cual reunió y analizó una amplia gama de evidencias, incluyendo: testimonios de testigos oculares y otras fuentes de información directas; certificados de defunción expedidos por las autoridades nicaragüenses;⁵⁰³ abundante evidencia fotográfica y audiovisual; documentación aportada por diversas organizaciones de la sociedad civil que proporcionan acompañamiento a las víctimas, tales como la Asociación de Madres de Abril (AMA), el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH); informes de organismos de derechos humanos y de la sociedad civil; el análisis cruzado de listados

⁴⁹⁶ República de Nicaragua, Informe del Estado de Nicaragua Respecto a la Comunicación Conjunta de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Managua, 26 de noviembre de 2018), disponible en: <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadFile?gId=34426>.

⁴⁹⁷ GIEI Nicaragua, “Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018”, diciembre de 2018, p. 178, (en adelante “Informe GIEI Nicaragua”), disponible en: https://gieinicaragua.org/giei-content/uploads/2019/02/GIEI_INFORME_DIGITAL_07_02_2019_VF.pdf.

⁴⁹⁸ Base de datos del MESENI de registro de víctimas fatales, compartida por la CIDH con el GHREN. La versión pública de dicho registro está disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/jsform/?File=/es/cidh/MESENI/registro.asp>.

⁴⁹⁹ CIDH, Comunicado de Prensa, “A cuatro años del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua: CIDH presenta balance de actividades y resultados”, 29 de agosto de 2022, disponible en: <https://www.oas.org/pt/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/189.asp>.

⁵⁰⁰ CVJP, Cuarto Informe Preliminar de 15 de julio de 2019, Anexo II (en adelante “Cuarto Informe”), en el archivo del GHREN FFDOC045. La CVJP ha ido modificando la cifra de personas fallecidas en el contexto de la protesta social a lo largo de su labor, conforme a la exposición de cada víctima a una ruta de verificación propia de la metodología de dicha Comisión, reflejándose estas variaciones de la siguiente manera: i) 209 personas fallecidas (197 hombres y 12 mujeres), reportadas en el Primer Informe Preliminar de 10 de julio de 2018; ii) 269 personas fallecidas (258 hombres y 11 mujeres) y 2035 personas lesionadas (1842 hombres y 193 mujeres), en el Segundo Informe Preliminar en el archivo del GHREN FFDOC034 (en adelante “Segundo Informe”), que cubre el periodo del 18 de abril al 30 de septiembre de 2018; iii) 253 personas fallecidas (243 hombres y 10 mujeres, 1 persona LGBTI), reportadas en el Tercer Informe Preliminar de 5 de febrero de 2019 (en adelante “Tercer Informe”), en el archivo del GHREN FFDOC038; y iv) 251 personas fallecidas y 2035 personas lesionadas (1842 hombres y 193 mujeres) según el Cuarto Informe.

⁵⁰¹ Entre el 23 de septiembre de 2018 y el 15 de julio de 2019, la CVJP registró sólo un fallecimiento, correspondiente a la muerte en detención de Eddy Antonio Montes Praslin el 16 de mayo de 2019.

⁵⁰² Registro facilitado por CEJIL al GHREN, en el archivo del GHREN DDDOC607. CEJIL pudo verificar el vínculo de 281 muertes al contexto de la crisis de derechos humanos nicaragüense. En 81 casos no fue posible confirmar el vínculo de manera definitiva.

⁵⁰³ Evidencia archivada en la base de datos del GHREN. El GHREN tuvo acceso a: constancias de defunción expedidas por el Ministerio de Salud, que permitieron corroborar la causa de la muerte; epicrisis o documentos de alta médica, expedidos por los centros médicos; y certificados de defunción expedidos por varias alcaldías (en muchos casos dichos certificados también recogían la causa de la muerte).

oficiales de víctimas publicados por la CVJP y la Policía Nacional; información oficial publicada por la Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal; las bases de datos aportadas por la CIDH y por CEJIL; y fuentes abiertas, incluyendo la cobertura periodística de los hechos, así como las denuncias realizadas a través de las redes sociales. A fin de corroborar los patrones identificados en los casos investigados, el GHREN examinó otros 75 casos de muertes en el contexto de las protestas de 2018, sobre la base de información directa y secundaria.

329. El GHREN tiene motivos razonables para creer que, en los 40 casos investigados, la Policía Nacional y/o grupos armados pro-gobierno cometieron ejecuciones extrajudiciales. Con base al conjunto de evidencia recabada, el GHREN tiene motivos razonables para creer que los casos investigados son representativos de patrones más amplios de conducta, que se replicaron de manera sistemática y generalizada durante varios meses y en todo el territorio del país.

330. Es importante recalcar que la represión de las protestas en Nicaragua en 2018 no es un fenómeno nuevo o aislado, sino que existen antecedentes que permiten entender estos sucesos como un escalamiento cuantitativo y cualitativo de la violencia que venía ejerciéndose por el Estado desde años atrás. Como se detalla en el Capítulo II.C del presente informe, existen precedentes importantes en los que se reportó la actuación conjunta de elementos de la Policía Nacional y grupos de choque para impedir o suprimir manifestaciones. Asimismo, se reportaron agresiones a manifestantes por grupos de choque y un uso excesivo de la fuerza por la Policía Nacional, así como asesinatos de personas consideradas como opositoras por partidarios del FSLN y/o por agentes de la Policía Nacional. En la mayoría de los casos, las responsabilidades por dichos actos nunca fueron esclarecidas, contribuyendo a generar una percepción de impunidad que permitió que la violencia contra las personas manifestantes se extendiera a gran escala en 2018. Además, como también se expuso en el Capítulo II.B, para 2018 se había completado un proceso de politización de la Policía Nacional, que para entonces ya estaba bajo el control total de la Presidencia de la República.

331. El GHREN subraya las dificultades enfrentadas para obtener información oficial, tanto pública como a través de solicitudes de información al Estado, sobre las investigaciones de las muertes ocurridas en el marco de las protestas de 2018.⁵⁰⁴ Es más, el Grupo documentó varios casos en los que las autoridades impidieron el acceso a las y los familiares de las víctimas a información sobre las circunstancias de las muertes, negándose a entregar constancia de las defunciones o manipulando su contenido, omitiendo realizar las autopsias pertinentes,⁵⁰⁵ y/o condicionando la entrega de los cuerpos de las víctimas a la firma de actas por las familias en las que debían desistir de su derecho a denunciar los hechos y a solicitar la realización de una autopsia. La adopción de la Ley de Amnistía tampoco contribuyó al esclarecimiento de los hechos en relación con las muertes ocurridas en el marco de las protestas de 2018, ni a la rendición de cuentas.⁵⁰⁶

332. Debido a limitaciones de tiempo y recursos, y teniendo en cuenta la escala de las violaciones, su impacto y la centralidad de los eventos de 2018 para comprender la situación de derechos humanos en Nicaragua, durante el primer ciclo de su mandato el Grupo de Expertos decidió concentrar sus investigaciones relativas a las violaciones al derecho a la vida sobre las muertes en el contexto de las protestas de 2018. Por ende, este informe se enfoca en los casos registrados durante el periodo entre el 18 de abril y el 28 de septiembre de 2018, que concentra la mayoría de las privaciones de la vida reportadas durante el alcance temporal del mandato del GHREN. Dicho periodo coincide con los meses en que se produjeron las movilizaciones masivas de personas, y termina con la prohibición de realizar protestas, anunciada por la Policía Nacional el 28 de septiembre de 2018.⁵⁰⁷

⁵⁰⁴ El GHREN envió cartas al Gobierno de Nicaragua solicitando información sobre las muertes en el contexto de las protestas de 2018 y las correspondientes investigaciones. Sin embargo, no recibió respuesta a sus comunicaciones.

⁵⁰⁵ Entrevistas del GHREN DDIV026, CCIV022.

⁵⁰⁶ Para más información, véase Capítulo III.A.

⁵⁰⁷ Policía Nacional de la República de Nicaragua, Nota de prensa No. 115 (Managua, 28 de septiembre de 2018), disponible en: <https://www.policia.gob.ni/?p=23327>, en el archivo del GHREN DDDOC073.

333. El GHREN recibió información respecto a los presuntos asesinatos de 32 personas pertenecientes a los pueblos Mayangna y Miskitu, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte desde el 20 de septiembre de 2018 hasta el 22 de mayo 2022.⁵⁰⁸ Dichas muertes, y las alegaciones recibidas respecto a la supuesta negligencia del Estado respecto a sus obligaciones de proteger a las víctimas, así como de investigar y perseguir a los responsables,⁵⁰⁹ son de gran preocupación para el GHREN y ameritan una investigación a profundidad.

334. El GHREN también tuvo acceso a información respecto a presuntos asesinatos de personas campesinas, muchas de las cuales protagonizaron los movimientos de oposición a las políticas del Gobierno del Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo, con anterioridad a abril de 2018.⁵¹⁰ A partir del estallido social, la violencia presuntamente ejercida por parte del Gobierno contra el grupo campesino se acrecentó. Ésta se ilustra con la detención del líder del Movimiento Campesino Medardo Mairena y la muerte de Ernesto Jarquín, sobre quien se alega que fue asesinado a tiros en la localidad de Mulukukú a fines de marzo de 2021 por un agente del Gobierno.⁵¹¹ Por razones de tiempo y recursos, el GHREN no ha podido desarrollar en profundidad, al cierre de este primer informe, la investigación sobre estas alegaciones ni la supuesta negligencia del Estado respecto a sus obligaciones de proteger a las víctimas y de investigar y perseguir a los responsables. Estas áreas son de gran preocupación para el GHREN y ameritan una investigación en profundidad.

3. Perfiles de las víctimas

335. La mayoría de las víctimas mortales de la violencia Estatal durante el periodo examinado fallecieron en el contexto de las manifestaciones o acciones de protesta de 2018. El GHREN tiene motivos razonables para creer que la mayoría de las personas fallecidas fueron personas manifestantes. Sin embargo, también fallecieron personas que se encontraban en las inmediaciones de los lugares donde se produjeron las protestas, así como simpatizantes del FSLN y/o integrantes de grupos armados pro-gobierno y al menos 22 agentes de la Policía Nacional.⁵¹²

336. Debido a las limitaciones de tiempo enfrentadas por el Grupo, no fue posible verificar la identidad de cada una de las personas fallecidas en 2018 en el contexto de las protestas. En 115 casos de muertes en el contexto de protestas verificados por el GHREN, el Grupo pudo establecer que 78 de las víctimas fueron personas que se encontraban manifestándose o participando en tranques y barricadas; 24 fueron personas que se encontraban en las inmediaciones del escenario de protesta, pero que no estaban participando en la misma (a menudo reportadas como “víctimas colaterales”); dos personas habrían sido asesinadas por

⁵⁰⁸ Informe confidencial en el archivo del GHREN GGDOC051.

⁵⁰⁹ En 2022, la CIDH amplió las medidas cautelares otorgadas en 2013 a favor de tres comunidades en el Territorio Mayangna Sauni As de Nicaragua, por considerar que se encontraban en una situación de riesgo. Véase CIDH, Resolución 9/2022, Medida Cautelar No. 505-15 “Indígenas de las Comunidades Musawas, Suniwas y Wilú del Territorio Mayangna Sauni As en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte respecto de Nicaragua” (13 de febrero de 2022).

⁵¹⁰ Véase en este sentido, las declaraciones del líder campesino y ex candidato presidencial en las elecciones de 2021, Medardo Mairena, quien se refiere a los reclamos de las personas campesinas, como antesala a las protestas de abril de 2018 y los ataques sufridos por los campesinos por parte del Gobierno del Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo, como respuesta. Confidencial, Medardo Mairena: “Ortega quiere mantenerse en el poder sin importar cuál sea el costo”, 13 de febrero de 2023, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=YEgGTgCv28>.

⁵¹¹ Véase, DW, América Latina, Destacado líder campesino opositor es asesinado a tiros en Nicaragua, 30 de marzo de 2021, disponible en: <https://www.dw.com/es/destacado-l%C3%ADder-campesino-opositor-es-asesinado-a-tiros-en-nicaragua/a-57055368>.

⁵¹² Policía Nacional de Nicaragua, “Policía Nacional presenta cifras de fallecidos en intento de golpe suave” (Managua, 7 de agosto de 2018), disponible en: <https://www.policia.gob.ni/?p=20995>, en el archivo del GHREN DDDOC608.

prestar auxilio a los manifestantes; cuatro eran policías; y una periodista. En seis casos no fue posible establecer el perfil de la víctima.⁵¹³

337. Debido a la falta de cooperación del Gobierno de Nicaragua, no fue posible establecer cuántas personas simpatizantes del FSLN y/o integrantes de grupos armados pro-gobierno fallecieron durante las movilizaciones de 2018. Sin embargo, el Grupo notó con alarma que, en varios casos, las autoridades afirmaron que personas fallecidas eran simpatizantes del partido de Gobierno y que habían sido asesinadas por las personas manifestantes. Esta información fue posteriormente desmentida por testigos y familiares de las víctimas, quienes explicaron que las personas fallecidas no eran simpatizantes del Gobierno ni integrantes de grupos armados pro-gobierno, sino que estaban participando en las manifestaciones.⁵¹⁴ De la misma manera, la falta de información oficial ha impedido la investigación por el Grupo de las muertes y lesiones presuntamente sufridas por elementos de la Policía Nacional.⁵¹⁵ El GHREN solicitó información al respecto al Estado de Nicaragua pero no recibió respuesta alguna.⁵¹⁶

338. Con referencia al perfil de las víctimas, los hombres jóvenes fueron la población más afectada por las violaciones y abusos al derecho a la vida en el marco de las protestas, y sufrieron violencia e impactos desproporcionados físicos y psicológicos. El rango etario de las víctimas es consistente con el perfil de las personas que participaron en las protestas: en un inicio protagonizadas por el estudiantado y, tras los primeros hechos de represión, con un creciente involucramiento de personas de todas las edades y pertenecientes a todos los sectores de la sociedad nicaragüense (véase Tabla 2).

339. Según un informe preparado por una coalición de organizaciones de derechos humanos nicaragüenses y organizaciones de víctimas y familiares de víctimas, al menos 37 jóvenes habrían resultado heridos en un ojo en el marco de las protestas, de los cuales 15 habrían requerido prótesis oculares. Otro joven habría perdido la vista en ambos ojos como consecuencia de un disparo en la cabeza.⁵¹⁷ Sin embargo, cabe destacar que se registraron

⁵¹³ El 16 de junio de 2018, seis miembros de una familia, entre ellos dos niños de corta edad, murieron como consecuencia de un incendio provocado en una casa en el barrio Carlos Marx, en la ciudad de Managua. Según la ACNUDH, la casa habría sido incendiada porque los dueños no permitieron a elementos de la policía y a francotiradores utilizar el tejado como punto privilegiado para disparar a las personas manifestantes. ACNUDH, Informe 2018, párr. 23, disponible en: https://www.ACNUDH.org/wp-content/uploads/2021/12/Nicaragua-Report-FINAL_SP.pdf. Véase también: <https://www.laprensani.com/2018/06/16/nacionales/2436445-al-menos-dos-ninos-heridos-en-un-incendio-en-el-barrio-carlos-marx-managua>.

⁵¹⁴ Por ejemplo, con respecto a los acontecimientos ocurridos en el marco de la marcha de las madres en Managua el 30 de mayo, la Nota de Prensa 33-2018 de la Policía Nacional atribuyó el fallecimiento de seis personas a la agresión de un grupo de delincuentes con armas de fuego y morteros en contra de personas que participaban en el acto oficialista Cantata en homenaje a las Madres Nicaragüenses y de fuerzas policiales que realizaban labores de seguridad y orden público. La información reportada, en particular la referente al lugar y hora de los hechos, fue desmentida por investigaciones del GIEI Nicaragua. Policía Nacional de Nicaragua, Nota de Prensa No. 33-2018 (Managua, 31 de mayo de 2018), disponible en: <https://www.policia.gob.ni/?p=19356>, en el archivo del GHREN DDDOC080; Informe GIEI Nicaragua, pp. 171 y 172. Según nota de prensa de la Policía Nacional, Richard Edmundo Pavón, la víctima fallecida en Tipitapa el 19 de abril de 2018, era simpatizante sandinista, y los perpetradores eran grupos de vándalos que querían atacar la Alcaldía de Tipitapa. Sin embargo, la familia desmintió dicha información y aclaró que “hacía tiempo que no participaba de la Juventud Sandinista y que se había sumado a los jóvenes que estaban en contra de la reforma”. Véase Policía Nacional de Nicaragua, Nota de Prensa No. 12-2018 (Managua, 19 de abril de 2018), disponible en: <https://www.policia.gob.ni/?p=18784>, en el archivo del GHREN DDDOC094.

⁵¹⁵ Policía Nacional de Nicaragua, “Policía Nacional presenta cifras de fallecidos en intento de golpe suave” (Managua, 7 de agosto de 2018), disponible en: <https://www.policia.gob.ni/?p=20995>, en el archivo del GHREN DDDOC608.

⁵¹⁶ Carta de solicitud de información enviada al Presidente Daniel Ortega el 21 de Noviembre de 2022, referencia: GHREN/C/2022-011.

⁵¹⁷ Informe de la Verdad – Dictadura y Represión en Nicaragua: Lucha contra la Impunidad, 18 de noviembre de 2021 (en adelante “Informe de la Verdad 2021”), p. 68, disponible en: https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/Informe-de-la-Verdad_Dictadura-y-Represion-en-Nicaragua.pdf

víctimas de todas las edades, incluyendo muertes de niños, entre ellos un bebé cuatro meses, un bebé de 14 meses, y una niña de tres años.⁵¹⁸

Tabla 2
Personas fallecidas según su edad, según la fuente

<i>Fuente</i>	<i>0-17</i>	<i>18-25</i>	<i>26-35</i>	<i>36-40</i>	<i>41-50</i>	<i>51 +</i>
GIEI Nicaragua ⁵¹⁹	8	50		43		16
CIDH ⁵²⁰	27	107	98	27		66
CVJP ⁵²¹	19	84	72			78
CEJIL ⁵²²	27	105			159	38

340. También se observa una diferencia notable entre las cifras de hombres y de mujeres fallecidas.⁵²³ Como se mencionó anteriormente, no se dispone de datos similares referentes a las personas heridas que permitan confirmar la misma tendencia.⁵²⁴ En este sentido, cabe señalar que los testimonios y demás información recabada por el Grupo de Expertos evidenciaron que el movimiento de protesta involucró a un amplio sector de la población. Al igual que los hombres, las mujeres tuvieron una fuerte participación en la protesta social y, en varias ocasiones, ocuparon roles de liderazgo y organización (véase la Tabla 3).

Tabla 3
Personas fallecidas según su sexo, según distintas fuentes

<i>Fuente</i>	<i>Período</i>	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>
GIEI Nicaragua ⁵²⁵	18 de abril–30 de mayo de 2018	107	2
CIDH ⁵²⁶	18 de abril–1 de octubre de 2018	334	15
CVJP ⁵²⁷	18 abril de 2018–5 de febrero de 2019 ⁵²⁸	243	10
CEJIL ⁵²⁹	18 de abril–1 de octubre de 2018	326	16

⁵¹⁸ Según la Coordinadora de la Niñez - Nicaragua (CODENI), al menos 29 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados en el contexto de la crisis del 2018. CODENI, Pronunciamento No. 8 (Managua, 23 de noviembre de 2018), disponible en: <https://www.facebook.com/codeni.nicaragua/photos/a.1923270994563870/2750121308545497/?type=3>.

⁵¹⁹ Informe GIEI Nicaragua, p. 74.

⁵²⁰ Base de datos del MESENI de registro de víctimas fatales, compartida por la CIDH con el GHREN. La CIDH no cuenta con datos referentes a la edad de 13 víctimas, y en 4 casos considera la información “imprecisa”.

⁵²¹ Los datos se refieren al tercer informe de la CVJP, ya que el cuarto y último informe no proporcionó cifras desglosadas por su edad. CVJP, Tercer Informe, p. 4.

⁵²² Registro facilitado por CEJIL al GHREN, en el archivo del GHREN DDDOC607.

⁵²³ Cabe señalar que el Grupo de Expertos se ha enfrentado con una escasez de información y de documentación sobre los casos de mujeres fallecidas, lo que contrasta con los datos existentes sobre los casos con víctimas masculinas.

⁵²⁴ El Grupo de Expertos no ha tenido acceso hasta la fecha de redacción de este informe, a una lista desagregada por sexo de las personas heridas, que permitiría profundizar el análisis de género. Las únicas cifras de personas heridas desglosadas por sexo se han encontrado en el Segundo Informe de la CVJP y refieren una cifra de 2035 personas heridas: 1842 hombres y 193 mujeres. CVJP, Segundo Informe p. 52.

⁵²⁵ Informe GIEI Nicaragua, p. 178.

⁵²⁶ Base de datos del MESENI de registro de víctimas fatales, compartida por la CIDH con el GHREN.

⁵²⁷ Los datos se refieren al tercer informe de la CVJP, ya que el cuarto y último informe no proporcionó cifras desglosadas por sexo. CVJP, Tercer Informe p. 4.

⁵²⁸ El informe de la CVJP no registró ninguna víctima mortal entre el 23 de septiembre de 2018 y el 5 de febrero de 2019.

⁵²⁹ Registro facilitado por CEJIL al GHREN, en el archivo del GHREN DDDOC607.

341. El análisis de género realizado por este Grupo permitió identificar algunos elementos iniciales que explicarían la diferencia en la identidad de género de las personas fallecidas:

- Los manifestantes varones tuvieron mayor propensión a ocupar la primera línea durante las manifestaciones, y a enfrentarse directamente a las fuerzas del orden, lo cual los colocó en una situación de mayor vulnerabilidad.⁵³⁰
- Los hombres y, en ocasiones, las mujeres manifestantes, canalizaron la participación de las mujeres en los tranques y barricadas en roles y actividades que reproducían estereotipos de género vinculados al cuidado.⁵³¹ Esto resultó en un mayor involucramiento de las mujeres en actividades como la atención en los puestos de salud y de acopio de alimentos y medicamentos o en la preparación y distribución de alimentos. En general, dichas actividades fueron menos visibles y, por ende, las mujeres tuvieron menor presencia en los puntos donde se produjeron los abusos y violaciones.
- En algunos incidentes, manifestantes varones habrían alejado a las mujeres en momentos en los que se producían ataques y/o enfrentamientos.⁵³²
- Algunos testimonios de mujeres recogidos por el GHREN indican que las fuerzas de seguridad y los grupos armados pro-gobierno habrían sido menos susceptibles a disparar contra manifestantes de sexo femenino.⁵³³

342. El GHREN recibió información sobre el fallecimiento de personas de la comunidad LGBTI; sin embargo, no fue posible confirmar los datos relativos a dichos eventos, incluyendo la orientación sexual o identidad de género de las personas fallecidas.

343. En cuanto a la distribución geográfica de las muertes, los datos disponibles muestran que, en 2018, se registraron muertes violentas vinculadas a las protestas en casi todos los departamentos del país.⁵³⁴ El mayor número de víctimas se concentró en el departamento de Managua, seguido por los departamentos de Masaya, Carazo, Matagalpa, León, Estelí y Jinotega. Los casos investigados por el GHREN cubrieron los departamentos de Managua, Masaya, Carazo, León Estelí, y Jinotega (véase la Tabla 4).

Tabla 4

Distribución geográfica de las muertes, según la fuente

<i>Fuente</i>	<i>Lugares de los hechos, según distintas fuentes</i>
GIEI Nicaragua ⁵³⁵	Managua (73), Estelí (10), Masaya (8), Matagalpa (6), León (5), Chinandega (4), Boaco (2) y RACCS (1).
CIDH ⁵³⁶	Tuvieron lugar en 15 de los 17 departamentos y regiones autónomas, siendo éstos: Managua (142), Masaya (48) Matagalpa (29), Carazo (29), León (25), Jinotega (19), Estelí (16). RACCN (11) y Rio San Juan (10), Chinandega (8), Chontales (7), Boaco (4), Granada (3), Madriz (3), RACS (1).
CVJP ⁵³⁷	Fallecidas: Managua (96), Masaya (35), Carazo (28), Matagalpa (20), León (16), Estelí (13), RACCN (9), Rio San Juan (9), Chinandega (7), Jinotega (6), Chontales (4), Boaco (4), Granada (3), RACCS (1).

⁵³⁰ Por ejemplo, entrevistas del GHREN DDIV015, DDIV036.

⁵³¹ Por ejemplo, entrevistas del GHREN DDIV015; DDIV036.

⁵³² Por ejemplo, entrevista del GHREN DDIV015.

⁵³³ Por ejemplo, entrevistas del GHREN DDIV004, DDIV013.

⁵³⁴ Según el GIEI Nicaragua, se registraron muertes en ocho de los 17 departamentos y regiones del país; según la CVJP en 14 de 16; según la CIDH y CEJIL en 15 de 17.

⁵³⁵ Informe GIEI Nicaragua, p. 76.

⁵³⁶ Base de datos del MESENI de registro de víctimas fatales, compartida por la CIDH con el GHREN. La versión pública de dicho registro está disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/jsform/?File=/es/cidh/MESENI/registro.asp>.

⁵³⁷ CVJP, Cuarto Informe.

Fuente	Lugares de los hechos, según distintas fuentes
CEJIL ⁵³⁸	Managua (132), Masaya (49), Carazo (29), Matagalpa (25), León (24), Estelí (18), RACCN (15), Jinotega (13), Río San Juan (10), Chinandega (7), Chontales (7), Boaco (6), Granada (83), Madriz (3) y RACS (1).

4. Patrones

a) *Uso arbitrario de la fuerza para impedir o reprimir actos de protesta pública*

344. La información recabada y analizada por el GHREN confirma que las privaciones del derecho a la vida y la integridad física registradas entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018 se dieron en su gran mayoría en el contexto de las manifestaciones públicas.

345. El GHREN constató que, frente al estallido de la protesta social, el Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo se valieron de la Policía Nacional, grupos de choque y grupos armados pro-gobierno para reprimir las protestas de manera violenta. Así, elementos de la Policía Nacional hicieron un uso arbitrario y excesivo de la fuerza de manera generalizada que, en numerosos casos, causó graves lesiones y resultó en la comisión de ejecuciones extrajudiciales. Como se describe a continuación, la actuación conjunta de las fuerzas policiales y los grupos armados pro-gobierno resultó también en una elevada cifra de muertes y de personas heridas de gravedad. Dichas acciones estuvieron acompañadas de detenciones arbitrarias o ilegales masivas, tortura y malos tratos, y constituyeron también violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión. El resultado esperado del uso excesivo y letal de la fuerza de manera sistemática y generalizada, esto es, la supresión o inhibición de la protesta pública, se materializó a partir de julio de 2018 y se consolidó con la prohibición de las protestas por la Policía Nacional en septiembre de ese año.

346. El GHREN coincide con otros organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones nacionales e internacionales, en concluir que la respuesta global de las autoridades de Nicaragua a las protestas de 2018 fue violatoria de los estándares aplicables sobre la gestión adecuada de manifestaciones, y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.⁵³⁹

347. El GHREN tiene motivos razonables para creer que la mayoría de las personas que participaron en las mismas lo hicieron de manera pacífica. Sin embargo, la represión violenta de la protesta por la Policía Nacional y los grupos armados pro-gobierno a partir del mes de abril causó enfrentamientos con las personas manifestantes y exacerbó las tensiones y la polarización en todo el país. Aunque el movimiento de protesta en general continuó siendo pacífico, a medida que los actos de represión al mismo continuaron, algunas personas manifestantes respondieron de manera crecientemente violenta para repeler los ataques de la Policía Nacional y de los grupos armados pro-gobierno, o para disuadir a los mismos de actuar.

348. El GHREN recibió información sobre actos de violencia perpetrados por algunas personas manifestantes en el contexto de las protestas, incluyendo el lanzamiento de piedras, el uso de armas de fabricación casera –principalmente “morteros,” y algunas “bombas de

⁵³⁸ Registro facilitado por CEJIL al GHREN, en el archivo del GHREN DDDOC607.

⁵³⁹ Informe ACNUDH 2018, p. 7 y párrs. 48, 52 y 62; Informe GIEI Nicaragua, párr. 358; CIDH, “Graves violaciones a los Derechos Humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 86, 21 de junio de 2018 (en adelante “Informe CIDH sobre Graves Violaciones”), párr. 88, disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-es.pdf>; Comunicado de prensa de la ACNUDH “Nicaragua: Expertos de la ONU expresan su consternación por la respuesta violenta del Gobierno a las protestas pacíficas”, 27 de abril de 2018, disponible en: <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23005&LangID=E>.

contacto⁵⁴⁰ y bombas Molotov-; el GHREN también documentó el uso de armas convencionales en algunos casos.⁵⁴¹ Dichos actos habrían resultado presuntamente en la muerte de 22 agentes de la Policía y en lesiones a un alto número de elementos, así como en la muerte de un número desconocido de simpatizantes del partido de Gobierno, incluyendo miembros de grupos armados pro-gobierno.⁵⁴² Resulta preciso señalar que el Gobierno no ha proporcionado ningún dato sobre esta última cifra.

349. La ACNUDH refirió instancias de abusos y delitos cometidos por personas contrarias al Gobierno durante los meses álgidos de la protesta social (abril a agosto de 2018), incluyendo episodios de violencia entre diferentes bandos, represalias, ajustes de cuentas, así como ataques en contra de integrantes del FSLN, funcionarios y funcionarias del Gobierno, miembros de las fuerzas de seguridad –en particular de la Policía Nacional–, y edificios de instituciones públicas y propiedad privada.⁵⁴³ Por su lado, la CVJP afirmó que “las protestas [...] se convirtieron en expresiones de odio, vandalismo, saqueo, tortura y muerte” y se refirió a “daños a la propiedad pública y privada, la economía nacional, a la salud, los derechos humanos, al patrimonio cultural, entre otros”.⁵⁴⁴ El GHREN también identificó que, en algunos casos, se desarrollaron prácticas criminales en el contexto de los tranques, incluyendo el cobro indebido de peajes, actos de acoso, robos e incluso detenciones ilegales o secuestros.⁵⁴⁵ El GHREN no pudo investigar dichos eventos en mayor profundidad debido

⁵⁴⁰ El GHREN consideró el peritaje de análisis forense presentado en el marco de la investigación realizada por el GIEI Nicaragua: Dr. Rodolfo G. Pregliasco, “Analysis of the capacity of the damage of 2 ½” homemade mortars used by protestors in Nicaragua”, 22 de marzo de 2019. Los morteros son artefactos de fabricación casera, usualmente utilizados en celebraciones de carácter religioso. Consiste en un empaque de papel de estraza conteniente pólvora proyectado por un tubo metálico (lanzamortero) con dos manubrios. Con el transcurso de los acontecimientos algunas personas insertaron también fragmentos de vidrio y piedras. Su alcance es de aproximadamente 60 metros. Las bombas de contacto se fabricaban principalmente en Masaya, haciendo un empaque de papel de estraza que en su interior contenía pólvora y otros objetos (como piedras y vidrios) y cubierto con cinta adhesiva. Se lanzaban manualmente. La Ley para el Control de Armas de Fuego “prohíbe el uso de morteros y artefactos pirotécnicos, con el objetivo de provocar o causar lesiones, poner en riesgo la vida humana o causar daños a la propiedad”. Ley No. 510, Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 40 del 25 de febrero de 2005 (en adelante “Ley para el Control de Armas de Fuego”), art. 148, apartado X. Véase también Informe GIEI Nicaragua, p. 215; LaPrensa, Magazine, Las armas militares usadas contra el pueblo en Nicaragua, 9 de julio de 2018, disponible en: <https://www.laprensani.com/magazine/reportaje/las-armas-militares-usadas-contra-el-pueblo/>, en el archivo del GHREN DDDOC390; material fotográfico en el archivo del GHREN IIDOC066 y DDDOC174; Vice en Español, Crisis política en Nicaragua, 18 de junio de 2019, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=cxhuds8gx6I>, en el archivo del GHREN IIDOC042.

⁵⁴¹ Por ejemplo, el GHREN tiene conocimiento del caso del tranque La Trinidad, instalado sobre la carretera Panamericana Norte kilómetro 124, en donde, el 30 de mayo de 2018, se produjeron enfrentamientos entre simpatizantes del Gobierno y elemento de la Policía Nacional que procedían en caravana a la ciudad de Managua y personas manifestantes. Fuentes entrevistadas por el GHREN refirieron que se trataba de personas manifestantes armadas procedentes de los departamentos de Nueva Segovia, Madriz y Estelí. Como resultado de este enfrentamiento, tres personas fallecieron, dos de ellos simpatizantes del gobierno. Entrevistas en el archivo del GHREN DDIV024, BBIV019; Policía Nacional de Nicaragua, Nota de Prensa No. 32-2018 (Managua, 30 de mayo de 2018), disponible en: <https://www.policia.gob.ni/?p=19354>, en el archivo del GHREN DDDOC079.

⁵⁴² De acuerdo con el GIEI Nicaragua, si bien los morteros tienen un uso festivo en celebraciones culturales y religiosas en Nicaragua, también pueden ser cargados con canicas, piedras pequeñas, clavos, vidrio quebrado, etc. En algunos casos, las heridas provocadas por este tipo de artefactos pueden ser de gravedad, si se utilizan a corta distancia. Informe GIEI Nicaragua, p. 215. La CVJP reportó que en 107 de los 418 casos de lesión de elementos de la Policía Nacional en el marco de las protestas éstas habían sido causadas por mortero. La CVJP no reportó víctimas fatales de policías como resultado del impacto de un mortero. CJVP, Cuarto Informe, p. 27.

⁵⁴³ Informe ACNUDH 2018, párr. 104.

⁵⁴⁴ CJVP, Cuarto Informe, p. 25.

⁵⁴⁵ Por ejemplo, el GHREN recibió información respecto a la detención ilegal por parte de manifestantes de agentes de la Policía Nacional e integrantes de grupos armados pro-gobierno en Carazo y Masaya. Entrevistas del GHREN DDIV015, DDIV019, DDIV022, DDIV020. Véase también Informe ACNUDH 2018, párr. 104; CJVP, Cuarto Informe, p. 26.

a la falta de información disponible al respecto y a la falta de cooperación del Estado de Nicaragua.

350. En todo caso, el GHREN no encontró evidencia alguna de que los actos de las personas que se manifestaron en contra del Gobierno, incluyendo los actos violentos cometidos por algunas personas que participaron en las protestas, hayan estado coordinados o hayan respondido a un plan preexistente que pudiera calificarse como un “intento de golpe de Estado,” tal y como sostuvo el Gobierno de Nicaragua.

351. El GHREN subraya que las instancias de violencia y los actos delictivos mencionados no justifican de ninguna forma el uso desproporcionado y excesivo de la fuerza, inclusive de fuerza letal, en contra de las personas manifestantes, en violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El análisis de la información recabada por el GHREN, incluyendo el tipo de armamento utilizado durante los operativos, el posicionamiento de los agentes frente a las personas manifestantes, y las zonas del cuerpo de las víctimas impactadas por los proyectiles de arma de fuego, indica que los elementos de la Policía Nacional y los grupos armados pro-gobierno utilizaron fuerza letal de manera arbitraria, deliberada y sistemática, con la intención de matar a las personas manifestantes o, al menos, de infligir daños o lesiones corporales graves.

352. En este sentido, el GHREN enfatiza que, en virtud del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la comisión de actos de violencia esporádica u otros actos delictivos por algunos individuos, no anula el derecho a la libertad de reunión pacífica de las demás personas en las protestas sociales.⁵⁴⁶ El Estado de Nicaragua tiene el deber de proteger a las personas participantes en manifestaciones pacíficas de los actos perpetrados por personas o grupos de personas, incluyendo por parte de personas manifestantes, así como de contra manifestantes y grupos armados pro-gobierno.⁵⁴⁷ Además, el uso de la fuerza letal por agentes del Estado sólo puede dirigirse contra la persona individual o el grupo de personas que representen un riesgo inminente para la vida, y en ningún momento puede dirigirse contra la población manifestante en general.⁵⁴⁸

353. El conjunto de información recolectada y examinada por el GHREN dan motivos razonables para creer que la Policía Nacional y los grupos armados pro-gobierno utilizaron fuerza letal en contra de personas que se manifestaban pacíficamente, así como en contra de manifestantes que llevaron a cabo actos de violencia sobre las cosas o sobre las personas, pero que no suponían amenazas letales.

i) Escenarios de la represión

354. Las violaciones y abusos investigados por el GHREN fueron cometidos en tres escenarios principales vinculados a la protesta social:

- a) marchas, manifestaciones y concentraciones en espacios públicos, como calles, plazas y parques o en sus inmediaciones;⁵⁴⁹
- b) toma de los espacios públicos como forma de protesta y reivindicación social, incluyendo la toma de instalaciones universitarias;⁵⁵⁰
- c) “tranques” y barricadas.⁵⁵¹

⁵⁴⁶ Informe del Relator Especial sobre el derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, A/HRC/20/27, 21 de mayo de 2012, párr. 8, disponible en: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/135/89/PDF/G1213589.pdf?OpenElement>.

⁵⁴⁷ Sobre la obligación positiva de facilitar las reuniones pacíficas, véase el Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación pacífica, A/HRC/20/27, 21 de mayo de 2012, párr. 33.

⁵⁴⁸ Véase Principios Básicos, Principio 9.

⁵⁴⁹ Este es el caso, por ejemplo, de la represión a marchas y manifestaciones en Estelí el 30 de mayo de 2018 y en Managua el 23 de septiembre de 2018.

⁵⁵⁰ Por ejemplo, el GHREN recibió información sobre la toma de la Universidad Politécnica (UPOLI), la Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). DDIV011, DDIV033, DDIV036, DDIV042.

⁵⁵¹ Según la CVJP, el 50% por ciento de las muertes ocurrieron en proximidad a los tranques.

355. La palabra “tranque” es utilizada en Nicaragua para referirse a los cortes de carreteras y calles, y constituyen una forma de protesta común en el país. En los primeros días de las protestas, varios de los tranques comenzaron como bloqueos intermitentes. A medida que pasaron los días, y con el incremento de la violencia, las personas manifestantes fueron fortificando los tranques en las carreteras y levantando barricadas en las calles de pueblos y ciudades, construidas con piedras, troncos y adoquines. Especialmente, a partir del mes de mayo de 2018, se produjo un fenómeno de atrincheramiento de la protesta, como medida de protección o defensa frente a la violencia perpetrada en contra de las personas manifestantes por grupos armados pro-gobierno y elementos de la Policía Nacional.⁵⁵² Muchos de los tranques se convirtieron en bloqueos totales de importantes vías de transporte y rutas comerciales clave, y constituyeron un punto de presión contra el Gobierno. Según ACNUDH, “a mediados de mayo los tranques y barricadas erigidas por los manifestantes se habían extendido a vecindarios de Managua y a los 15 departamentos del país, llegándose a un estimado de 180 barricadas y tranques de carretera a lo largo de todo el territorio Nacional”.⁵⁵³

ii) Análisis temporal de las violaciones

356. Las muertes violentas en el contexto de las manifestaciones se extendieron tanto en el espacio como en el tiempo. Las primeras muertes se produjeron el 19 de abril de 2018, y la última víctima en el contexto de las protestas falleció el 23 de septiembre de 2018.

357. Según el desglose de la información realizado por CEJIL, el mes que reportó más víctimas fue junio, mes en el que se registraron un total de 134 muertes, es decir, el 39 por ciento del total de casos de muertes registradas por CEJIL en el marco de la protesta social de 2018.⁵⁵⁴ El registro mantenido por la CIDH reportó 129 muertes para el mismo periodo, es decir casi el 37 por ciento del total de víctimas registradas por dicho organismo, arrojando la misma conclusión.⁵⁵⁵ Los datos de la CVJP difieren sustancialmente, pero coinciden en señalar el mes de junio como el más mortífero del periodo, con 89 fallecimientos (el 35 por ciento del total de víctimas reconocidas por la CVJP).⁵⁵⁶

358. Los días que habrían reportado más víctimas mortales fueron, en orden cronológico: el 20 de abril (27 personas fallecidas en las ciudades de Managua, León, Estelí y Sébaco, para ambos registros de CEJIL y CIDH); el 30 de mayo (22 personas fallecidas en Managua, Estelí, Chinandega y Masaya según CEJIL, y 20 según la CIDH); y el 8 de julio.⁵⁵⁷ Las fechas señaladas corresponden a jornadas hito para la movilización social, a saber:

- **20–22 de abril:** durante los días iniciales del estallido de la protesta social se produjeron números elevados de víctimas, con 27 personas muertas el 20 de abril, 15 personas muertas el 21 de abril y 11 personas muertas el 22 de abril.
- **30 de mayo:** en el marco de la celebración del día de las madres en Nicaragua, se convocaron marchas en solidaridad con las madres de personas fallecidas como resultado de la represión de la protesta, las cuales alcanzaron niveles de asistencia multitudinaria.
- **8 de julio:** se desarrolló el primer operativo de gran envergadura con el objetivo de eliminar o desarmar los tranques y barricadas, en Carazo. Los operativos para eliminar los tranques y barricadas se intensificaron en anticipación de la celebración nacional del 19 de julio (aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista de 1979).⁵⁵⁸

⁵⁵² Entrevistas del GHREN BBIV013, DDIV009, CCIV010, DDIV014, DDIV048.

⁵⁵³ Informe ACNUDH 2018, párr. 60.

⁵⁵⁴ Registro facilitado por CEJIL al GHREN, en el archivo del GHREN DDDOC607.

⁵⁵⁵ Base de datos del MESENI de registro de víctimas fatales.

⁵⁵⁶ CVJP, Tercer Informe, pp.2 y 3.

⁵⁵⁷ El registro de la CVJP coincide en señalar el 30 de mayo (15 personas fallecidas) y 8 de julio (19 personas fallecidas) como las fechas de mayor mortalidad. Sin embargo, sólo registra una persona fallecida el 21 de abril, y ninguna el 20 y el 22 de abril. CVJP, Tercer Informe, pp. 2 y 3.

⁵⁵⁸ De acuerdo con ACNUDH, durante este periodo se levantaron por la fuerza tranques en Boaco, Carazo, Granada, Jinotepe, La Trinidad, León, Managua, Masaya, Matagalpa, la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) y Rivas, entre otros. Informe ACNUDH 2018, p. 17.

359. Según CEJIL, en los meses de junio y julio de 2018, los eventos de privación de la vida ocurrieron casi a diario: solo en 13 días de 61 no se registraron fallecimientos. Según el registro de la CIDH, los días sin fallecimientos para la misma temporada fueron solamente 10. De acuerdo con los datos registrados por CEJIL, los periodos más largos entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018, durante los cuales no se registraron personas fallecidas, fueron los comprendidos entre: el 24 de abril y el 6 de mayo; el 28 de julio al 4 de agosto; y el 19 de agosto al 15 de septiembre. Los datos de la CIDH difieren ligeramente, conformando el mismo patrón.

360. El primer periodo en el que no se registraron personas fallecidas (24 de abril a 6 de mayo) corresponde al primer intento de sentar las bases para un Diálogo Nacional, y al establecimiento de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz (CVJP). Durante este lapso de tiempo, las personas manifestantes realizaron marchas; sin embargo, la actuación por parte de las fuerzas de seguridad del Estado no fue letal. A partir de los últimos días de julio se registra una disminución importante en el número de víctimas mortales, con un total de cinco víctimas entre los meses de agosto y septiembre. Este descenso en el número de muertes coincidió con el cese abrupto de la protesta, derivado del derribo de los tranques y barricadas a través de operativos altamente violentos, y la posterior movilización de cientos de efectivos de la Policía Nacional e integrantes de grupos armados pro-gobierno para patrullar y vigilar la vía pública de manera constante.⁵⁵⁹

361. Así, los datos examinados confirman que las cifras más elevadas de muertes violentas coinciden con los periodos de protestas masivas, así como con las operaciones ordenadas por el Gobierno para retirar por la fuerza los tranques y barricadas que se habían extendido por todo el país.⁵⁶⁰ Se observa una continuidad en términos temporales de las violaciones y abusos al derecho a la vida de la población nicaragüense durante el periodo examinado (18 de abril a 28 de septiembre de 2018), con repuntes alarmantes alrededor de fechas clave, lo cual apunta a la sistematicidad de dichas violaciones.

b) *Uso de armas de alto potencial lesivo*

362. El GHREN recuerda que el uso de la fuerza está regulado y, por lo tanto, el Estado tiene la obligación de garantizar la protección de otros derechos que deben ser protegidos a través de la estructuración de un contexto seguro, que permita ejercer de manera amplia los derechos asegurados en la Constitución y en las normas internacionales. Los derechos a la libertad de expresión y libre manifestación deben estar precedidos de aseguramientos adecuados al monopolio de la fuerza del Estado y, por lo tanto, no puede incrementarse el riesgo, ni permitir actuaciones por fuera del riesgo permitido, como es evidente en el caso que sucedió en Nicaragua en donde hubo uso ilícito de la fuerza.

363. Nadie puede justificar el uso masivo e indiscriminado de la fuerza ni siquiera con armas no letales en medio de una manifestación. La existencia de protocolos de uso de la fuerza limita la propia utilización de armas en esta clase de operaciones. En este sentido, los Estados deben garantizar que existan recursos expeditos y adecuados para determinar esta clase de violaciones y determinar los responsables. El artículo 2 del Código de Conducta para Funcionarios establece que “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”.⁵⁶¹

364. El uso de armas de fuego por la Policía Nacional para reprimir las protestas se pudo constatar desde el 19 de abril de 2018, el segundo día de las protestas masivas. Aquél mismo día se registraron las primeras víctimas fatales de la represión de la protesta social: un policía

⁵⁵⁹ Cabe señalar que en ningún momento dentro del periodo en observación, el Presidente de Nicaragua declaró un estado de excepción, tal y como el mismo Estado recordó en su Cuarto informe periódico ante el Comité de Derechos Humanos. Nicaragua, Cuarto informe periódico que Nicaragua debía presentar en 2012 en virtud del artículo 40 del Pacto, CCPR/C/NIC/4 (27 de septiembre de 2019), párr. 34.

⁵⁶⁰ Informe ACNUDH 2018, párr. 58.

⁵⁶¹ Código de Conducta para Funcionarios, art. 2.

y un manifestante fallecidos durante manifestaciones en la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI),⁵⁶² y una persona fallecida en Tipitapa.⁵⁶³

365. Al respecto, cabe recordar que la normativa nacional prohíbe la portación o el uso por la policía o por cualquier grupo afiliado con la policía de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales afines que pongan en riesgo la vida humana, durante manifestaciones populares, inclusive durante protestas de carácter social o en el caso de enfrentamientos a grupos de manifestantes en situaciones de alteración al orden público.⁵⁶⁴

366. En distintos momentos, las más altas autoridades del Gobierno y de la institución policial justificaron la actuación de personas armadas no uniformadas, identificándolas como policías voluntarios, figura reconocida en la Ley Orgánica de la Policía.⁵⁶⁵ Sin embargo, la misma Ley establece que los policías voluntarios solamente pueden realizar tareas auxiliares a la Policía Nacional en labores de prevención (y por tanto no en tareas de mantenimiento del orden), y que “para el cumplimiento de sus tareas estarán debidamente identificados con uniformes y distintivos propios”.⁵⁶⁶ Añadido a lo anterior, la Ley no prevé el uso de armas de fuego por parte de los integrantes de la policía voluntaria.⁵⁶⁷

367. Aun así, desde el inicio de la represión a la protesta social, integrantes de grupos de choque atacaron a personas manifestantes con violencia, utilizando objetos contundentes, incluyendo palos y piedras. El GHREN también recibió información del uso de morteros por los grupos de choque. Conforme transcurrieron los días, grupos armados pro-gobierno se incorporaron a la represión de las protestas, utilizando armas de fuego, y fueron los autores materiales de la muerte de varias personas manifestantes.⁵⁶⁸

368. Un elemento agravante señalado por varias fuentes entrevistadas por el GHREN, es la presencia de sujetos armados situados en tejados de casas y edificios o desde lugares fuera de la vista de las personas manifestantes, que las y los testigos identificaron como “francotiradores”.⁵⁶⁹ El uso de francotiradores⁵⁷⁰ en los operativos indicaría una intencionalidad de producir la muerte de las personas manifestantes, ya que su entrenamiento está dirigido a abatir al blanco.⁵⁷¹ Independientemente del nivel de entrenamiento de las personas que efectuaron los disparos desde posiciones de altura durante los operativos para repeler y/o disolver las marchas y las barricadas, su posicionamiento *per se* denota la intención de emplear técnicas de combate, en lugar de otras técnicas de control de multitudes o tácticas policiales apropiadas para desescalar las situaciones de violencia.

369. El GHREN considera que, en cualquier situación en donde un agente del Gobierno use un arma de fuego, se tiene que considerar que tiene la intención de matar o de infligir

⁵⁶² Policía Nacional de Nicaragua, Nota de Prensa No. 13-2018 (Managua, 19 de abril de 2018), disponible en: <https://www.policia.gob.ni/?p=18784>, en el archivo del GHREN DDDOC095. En la nota se informa del fallecimiento del elemento de la Policía Nacional. No se menciona la persona manifestante fallecida en el ejercicio de la protesta.

⁵⁶³ Policía Nacional de Nicaragua, Nota de Prensa No. 12-2018 (Managua, 19 de abril de 2018), disponible en: <https://www.policia.gob.ni/?p=18784>, en el archivo del GHREN DDDOC094. Cabe destacar que la versión reportada en la nota en cuanto a la víctima fue desmentida.

⁵⁶⁴ Reglamento de la Ley de la Policía Nacional, arts. 175–200; Ley para el Control de Armas de Fuego, art. 148, apartado xi.

⁵⁶⁵ Ley No. 872, arts. 23–26.

⁵⁶⁶ Entrevista Daniel Ortega en EURONEWS, 30 julio 18, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=NiROR4hYCuA> (desde min 7.28); entrevista a Francisco Díaz, Jefe de la Policía Nacional, realizada por el periodista noruego Halldor Hustadnes el 30 de noviembre de 2018, disponible en: https://youtu.be/zB_VD2JuGG0 (desde el min. 0.33).

⁵⁶⁷ Poseer, tener, transportar y usar un arma de fuego sin tener la respectiva licencia está tipificado como delito en virtud de los arts. 120 y 121 de la Ley para el Control de Armas de Fuego.

⁵⁶⁸ Material fotográfico en el archivo del GHREN CCDOC096, IIDOC010, DDDOC298, DDDOC377, DDDOC378.

⁵⁶⁹ Entrevistas del GHREN DDIV016, DDIV009, DDIV019, DDDOC020, DDIV025, DDIV027, DDIV028, DDIV048. Material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC391. Véase Informe GIEI Nicaragua, pp. 162 y 163.

⁵⁷⁰ Entrevista del GHREN BBIV015.

⁵⁷¹ Entrevistas realizadas por el GHREN con expertos del sector seguridad, DDIV016, DDIV050, DDIV051.

graves daños, ya que son muy raras las situaciones en las que estos agentes son entrenados en el uso no letal de estas armas. Adicionalmente, y posiblemente más importante, el Grupo considera que las autoridades que autorizan el uso de estas fuerzas y de estas armas deben estar al tanto del resultado probable que dicho uso conlleva.

i) Muertes por arma de fuego

370 Los registros elaborados por diversas fuentes evidencian un elevado número de muertes por arma de fuego en el contexto de las manifestaciones de 2018 (Véase la Tabla 5). Los datos recogidos por diferentes fuentes, y presentados a continuación, permiten estimar que, entre un 70 y un 80 por ciento de las muertes, se produjeron por lesiones causadas por impactos de bala.

Tabla 5

Muertes por arma de fuego y análisis de lesiones, según la fuente

Causa de muerte	GIEI Nicaragua (18 abril- 30 mayo de 2018)	CIDH (18 abril- 30 julio de 2018)	CEJIL (18 abril- 1 octubre de 2018)	CVJP ⁵⁷² (18 abril- 21 septiembre de 2018)	
				MS	INML
Muertes por Impacto en zona vital					
Tórax	57	30%	127	32	37
Cráneo	31	23.1%	106	27	40
Cuello	7	23%		6	7
Abdomen				15	17
Muertes por arma de fuego	95	248	263	106	109
Porcentaje	(87%)	(70%)	(77%)	(39%)	(40%)
Muertes totales	109	355	342		269

371. Además, es notorio el elevado número de víctimas que sufrieron impactos en zonas vitales, evidenciando que el objetivo no fue detener o herir a las personas, sino neutralizarlas.

372. El GHREN analizó 68 documentos de defunción que dan cuenta de fallecimientos por uso de armas de fuego entre el 19 de abril y el 23 de septiembre de 2018. Asimismo, los casos investigados por el GHREN también confirman los patrones aquí señalados. De los 40 casos investigados por el GHREN, 39 víctimas fallecieron como resultado de heridas causadas por armas de fuego, todas ellas presentaron impactos de bala en zonas vitales.

373. Información recabada a través de testimonios,⁵⁷³ cruzada con evidencia fotográfica⁵⁷⁴ y las investigaciones realizadas por organismos y organizaciones nacionales e internacionales,⁵⁷⁵ confirman que en el ejercicio de la represión de la protesta, las armas fueron apuntadas directamente contra las personas manifestantes.

ii) Tipo de armas utilizadas

374. El Grupo no ha tenido acceso al tratamiento criminalístico que las autoridades competentes han dado a las evidencias y, en particular, a las 116 autopsias realizadas por el

⁵⁷² CVJP, Second Report pp. 7-8. The CVJP gathers different data provided by the Ministry of Health, based on 120 death certificates (MS) and by the National Institute of Legal Medicine, based on 116 autopsies (INML).

⁵⁷³ Entrevistas del GHREN DDIV028, DDIV042.

⁵⁷⁴ Material audiovisual y fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC060, DDDOC411, DDDOC412, DDDOC413, DDDOC414, IIDOC031.

⁵⁷⁵ Informe GIEI Nicaragua, p. 180; Amnistía Internacional, Disparar a Matar.

IML mencionadas en el Segundo Informe de la CVJP.⁵⁷⁶ Así, el Grupo no ha tenido acceso a peritajes balísticos y de los resultados de autopsias que permitan determinar con certeza el tipo de proyectil y de arma utilizada y la ubicación probable de quienes dispararon las armas en cada caso individual.⁵⁷⁷

375. A pesar de ello, a partir del análisis de evidencia fotográfica y audiovisual verificada por el GHREN con el apoyo de un experto en seguridad y armas,⁵⁷⁸ el Grupo de Expertos pudo identificar diversas armas utilizadas por integrantes de grupos armados pro-gobierno y por elementos de la Policía Nacional en los lugares e inmediaciones donde se produjeron las muertes de las víctimas:

- armas cortas;
- escopetas 12, incluyendo Remington, Maverick 88 y Mossberg (armas cuyo poder varía en relación con su uso dependiendo del cartucho que se utilice. Tienen alto poder, sin embargo, su precisión es de corta distancia);
- AK-47, AK-74, fusiles de asalto calibre 7,62 (armas con un gran poder, excelente desempeño, alcance y precisión y susceptibles de ocasionar mayor daño al impacto);
- Galil, fusil de asalto, calibre 5.56;
- M16 y M16-A1, fusiles de asalto que utilizan munición de 5.56 (tienen gran precisión y alcance, inclusive a larga distancia);
- Dragunov, fusil de francotiro de fabricación Soviética, calibre 7.62 (de gran alcance y precisión);
- PKM, ametralladoras de fabricación soviética, calibre 7.62 (es un ametralladora de uso general de gran alcance que al mismo tiempo es ligera, lo que facilita su transporte); y
- RPG, un lanzacohetes, o arma trazadora antitanque y antiaéreo de alto poder explosivo.

376. El armamento identificado por el Grupo coincide en su mayoría con el analizado e identificado por el GIEI Nicaragua en su informe.⁵⁷⁹ El GHREN identificó a elementos de la DOEP de la Policía Nacional portando fusiles de francotirador Dragunov, fusiles de asalto, ametralladoras PKM y antitanque RPG.⁵⁸⁰ Todas estas armas han sido diseñadas para fines bélicos y con la intención de matar; por esta razón son desproporcionadas para el uso contra grupos civiles en un contexto de manifestaciones y disturbios civiles.⁵⁸¹

377. Expertos en seguridad y armas consultados por el GHREN coincidieron con que la mayoría de las armas identificadas no son aptas para uso en un contexto de disturbios civiles o control de multitudes, ya que todas ellas son susceptibles de causar un daño

⁵⁷⁶ Si bien existe una normativa precisa para el procedimiento forense de extracción de proyectil, cadena de custodia y entrega a la Policía Nacional para la realización del peritaje balístico, una fuente confiable relató al GHREN cómo las autoridades competentes no respetaron el mismo de manera sistemática. Entrevista del GHREN BBIV015. Véase Norma Técnica para la realización de Autopsias Médico Legales NT/IML-008/02/16, segunda versión, febrero de 2016, disponible en: <https://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/iml/pdf/norma-008-02-16.pdf>, en el archivo del GHREN DDDOC604.

⁵⁷⁷ CVJP, Segundo Informe pp. 7–8.

⁵⁷⁸ Entrevista del GHREN DDIV050; material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC055, DDDOC056, IIDOC003, IIDOC004, IIDOC005, IIDOC009, IIDOC011, IIDOC012, IIDOC013, IIDOC015, IIDOC023 IIDOC025, IIDOC027, IIDOC056, IIDOC057, IIDOC058, IIDOC061, IIDOC062, IIDOC063, IIDOC064, IIDOC068, IIDOC069, IIDOC074, DDDOC064, DDDOC148, DDDOC322; material audiovisual en el archivo del GHREN IIDOC006, IIDOC029, IIDOC031, IIDOC033, IIDOC034, DDDOC117, DDDOC605, DDDOC245, DDDOC341.

⁵⁷⁹ Informe GIEI Nicaragua, p. 181.

⁵⁸⁰ Material fotográfico en el archivo del GHREN DDDO056. Durante el último operativo realizado en el departamento de Carazo, las personas protestantes recuperaron una PKM. Material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC064.

⁵⁸¹ Entrevistas del GHREN DDIV050, DDIV051; material fotográfico en el archivo del GHREN IIDOC023.

desproporcionado.⁵⁸² Tomando en cuenta la natura de la protesta social y las personas involucradas, el GHREN considera que el uso de estas armas fue desproporcionado al riesgo que enfrentaban los elementos de la Policía Nacional y los grupos armados pro-gobierno.

378. El GHREN tiene motivos razonables para creer que, el uso en sí de armas de alto poder por parte de elementos de la Policía Nacional, así como su complicidad y aquiescencia hacia grupos armados pro-gobierno en posesión y uso de éstas, demuestra el uso ilícito de la fuerza y demuestra la intencionalidad de producir la muerte de las personas manifestantes.

c) *Coordinación entre la Policía Nacional y grupos armados pro-gobierno*

379. EL GHREN tiene motivos razonables para creer que la Policía Nacional actuó de manera conjunta y coordinada con grupos armados pro-gobierno con el objetivo de reprimir la protesta social, confirmando patrones ya evidenciados por distintas organizaciones.⁵⁸³ El GHREN analizó el actuar coordinado de la Policía Nacional y los grupos armados pro-gobierno en distintos escenarios de protesta, y durante las distintas fases de la represión de las manifestaciones de 2018.⁵⁸⁴

380. Durante los primeros días de movilización social, las protestas tomaron la forma de marchas que se extendieron por todo el país. Éstas se desarrollaron durante el día y generalmente tenían como destino final las delegaciones del INSS en las distintas localidades. En varias ocasiones, el FSLN, a través de grupos como las Juventudes Sandinistas o sindicatos vinculados al FSLN, organizó eventos paralelos o contramarchas.⁵⁸⁵ Durante el transcurso de las marchas, grupos de personas civiles, identificados por testigos como fuerzas de choque, aparecían en proximidad de efectivos de la Policía Nacional, e insultaban y agredían a las personas manifestantes, intentando desviar el recorrido o dispersar la marcha. Las agresiones por integrantes de las fuerzas de choque usualmente comenzaban con agresiones verbales y físicas, a través de empujones y forcejeo, y se intensificaban hacia el final de las marchas, a menudo ya de noche, produciéndose agresiones físicas más severas con uso de objetos contundentes como palos, tubos, piedras, y en algunas ocasiones armas de fuego.⁵⁸⁶

381. El análisis de incidentes realizado por el GHREN permitió identificar que, en algunos casos, la Policía Nacional se mostró pasiva frente a las agresiones a manifestantes por integrantes de grupos armados pro-gobierno, incumpliendo con su deber de proteger a la población y de garantizar el ejercicio de la libertad de reunión, y poniendo en evidencia su aquiescencia con dichos ataques. En otros casos, la Policía Nacional facilitó la actuación de los grupos armados pro-gobierno al proporcionarles recursos que utilizaron durante los operativos de represión a las marchas, así como protección a sus integrantes. Finalmente, en numerosos casos se produjo una intervención directa de la Policía, de manera simultánea y coordinada con los grupos armados pro-gobierno.

⁵⁸² Entrevistas del GHREN DDIV051 (“aunque seas un militar o policía entrenado, la potencia de esos calibres puede perforar más de un cuerpo o atravesar muros, ocasionando daños colaterales [...] ninguna de ellas sería aceptable en un contexto urbano para ocasionar el daño menor”), DDIV050 (eso aplica especialmente en el caso de armas de calibre 7.62 (AK-47, Dragunov y PKM), las cuales son armas de mayor alcance y poder que las utilizadas comúnmente por cuerpos de seguridad de fuerzas especiales, y que son calibre 5.56).

⁵⁸³ Informe GIEI Nicaragua, pp. 177–178; Informe CIDH sobre Graves Violaciones, párr. 58; Informe ACNUDH 2018, párr. 102; Amnistía Internacional, *Disparar a Matar*, pp. 10–15; Amnistía Internacional, *Sembrando el terror: de la letalidad a la persecución en Nicaragua*, 18 de octubre de 2018 (en adelante “*Sembrando el Terror*”), pp. 13–18, 42, 67 y 69, disponible en: <https://www.amnesty.org/es/documents/amr43/9213/2018/es/>.

⁵⁸⁴ Material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC157, DDDOC374, DDDOC150, DDDOC375. Véase Confidencial, “Esta Noche 19 de abril 2018 (COMPLETO) – Represión y censura ante protestas por reformas al INSS”, 19 de abril de 2018 (min. 2:24 a 7:55), disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=BQhtByCDcqY>; Canal 10 Nicaragua, “Grupos paramilitares desmontaron tranques en la entrada a Ticuantepe”, 19 de junio de 2018, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=GM2iI3pvlq>; Euronews en Español, “Nicaragua: ¿hacia una guerra civil?”, 18 julio de 2018, disponible en: <https://youtu.be/emVAqGb3Sw>.

⁵⁸⁵ Entrevistas del GHREN DDIV02, BBIV013; Informe GIEI Nicaragua, pp. 142 y 156.

⁵⁸⁶ Entrevistas del GHREN DDIV011, DDIV015, DDIV024.

i) Ejemplos ilustrativos

382. El 18 de abril de 2018, la Policía Nacional dejó actuar a los grupos de choque progubernamentales en León, quienes golpearon a las personas adultas mayores que se manifestaban por las reformas al seguro social y robaron cámaras y celulares a los periodistas que cubrían la movilización.⁵⁸⁷ Dichas agresiones despertaron la indignación de la ciudadanía, y empujaron a miles de nicaragüenses a manifestarse en los días sucesivos.

383. El GIEI Nicaragua documentó cómo el mismo 18 de abril, en Managua, grupos de personas que vestían camisetas de la Juventud Sandinista y grupos de personas motorizadas, agredieron a un grupo de personas reunidas en un plantón pacífico en el sector de Camino de Oriente.⁵⁸⁸ Las personas manifestantes y periodistas que se encontraban cubriendo el evento fueron golpeadas con palos, bates, tubos, cadenas, y otros objetos contundentes, por lo que se dispersaron.⁵⁸⁹ Aproximadamente media hora más tarde, las personas manifestantes se reunieron de nuevo con el objetivo de iniciar una marcha. Sin embargo, policías antimotines lanzaron bombas lacrimógenas contra las personas congregadas, a pesar de que se estaban manifestando pacíficamente.⁵⁹⁰

384. Imágenes publicadas por el GIEI Nicaragua muestran cómo, el 19 de abril, un integrante de un grupo de choque disparó con un arma de fuego a manifestantes en la Plaza Domingo Gadea de Estelí, en presencia de elementos de la Policía Nacional, incluyendo agentes antimotines, quienes no intervinieron para detener al agresor.⁵⁹¹ Al día siguiente, el 20 de abril, también en Estelí en horas de la tarde, personas manifestantes comenzaban a dispersarse tras concluir una marcha hasta la Plaza Domingo Gadea. Imágenes verificadas por el GIEI Nicaragua y analizadas por este Grupo muestran cómo un agente de las brigadas antimotines lanzó una bomba lacrimógena o un pequeño artefacto explosivo hacia las personas congregadas. Acto seguido, agentes antimotines comenzaron a disparar proyectiles de goma y gases lacrimógenos contra el grupo de personas mientras éstas retrocedían. En el video pueden apreciarse personas vestidas de civil portando cascos de moto y cargando piedras, situadas detrás de los elementos de la policía y actuando en apoyo a éstos.⁵⁹² “[F]ue la policía quien hizo un acto para que empezara un enfrentamiento. Uno sacó una bomba lacrimógena, no había que hacer nada, ya se estaba disolviendo la marcha y todos yéndose para su casa. En eso que tiran la bomba, los mismos policías empiezan a atacar con otras bombas, y los sandinistas atrás tirando piedras y cualquier objeto y se veía gente muy conocida atacando a los manifestantes”.⁵⁹³ De acuerdo con testigos presenciales, las personas manifestantes respondieron lanzando piedras para hacer retroceder a la policía y a los grupos armados pro-gobierno.⁵⁹⁴

385. Imágenes grabadas en Estelí en horas de la noche del mismo día muestran a un grupo de individuos vestidos con camisetas blancas abasteciéndose de piedras de una camioneta

⁵⁸⁷ Confidencial, “18 de abril: El estallido. Crónica del primer día de la protesta cívica”, 18 de abril de 2019, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=uy8ELjr1EBM>; Trinchera de la Noticia TV, “Marcha de protesta atacada por sandinistas en León”, 18 de abril de 2018, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=yx086a1YmhY>. Véase también Informe GIEI Nicaragua, p. 66.

⁵⁸⁸ Informe GIEI Nicaragua, p. 82. Evidencia videográfica del incidente verificada por el GIEI Nicaragua disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=mMO3CeAkZW4>.

⁵⁸⁹ Agencia EFE, “Disturbios y heridos deja protesta por reforma a Seguro Social en Nicaragua”, 18 abril de 2018, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ErFL7xhLBC4> (en el min. 1:00 patrullas policiales y antidisturbios hicieron presencia en el lugar minutos después que las agresiones habían concluido, escoltando a los agresores y replegando a los manifestantes para disipar la concentración); La Prensa Nicaragua, “Así comenzó la rebelión cívica en Nicaragua el 18 de abril de 2018”, 18 abril de 2019, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=fOLsqKIX3IU>; Confidencial, “Esta Noche 19 de abril 2018 (COMPLETO) | Represión y censura ante protestas por reformas al INSS”, 19 de abril de 2018 (desde min. 2:42).

⁵⁹⁰ Informe GIEI Nicaragua, pp. 83–85. El GIEI Nicaragua reunió evidencias videográficas de este evento: <https://www.youtube.com/watch?v=7QXmk2jxt4g>.

⁵⁹¹ GIEI Nicaragua “Grupos Armados”, 23 de diciembre de 2018 (min. 1:13–1:22), disponible en: https://vimeo.com/307975997/embedded=true&source=vimeo_logo&owner=93011450.

⁵⁹² GIEI Nicaragua, “Inicio de represión a protesta pacífica”, 21 de diciembre de 2018 (min. 0:28), disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=d-4ZQnUxcB0>; entrevista del GHREN DDIV024.

⁵⁹³ Entrevista del GHREN DDIV024.

⁵⁹⁴ Entrevistas del GHREN DDIV011, DDIV024.

con insignias de la Policía Nacional y lanzando piedras en contra de otro grupo de personas, todo ello en presencia de oficiales de la policía.⁵⁹⁵ Otro testigo relató al GHREN: *“llegaron camionetas de la policía con cargadas de piedras y empezaron a dárselas a fanáticos del gobierno, trabajadores de la alcaldía, para que se las tiraran contra nosotros [...] Logramos llegar hasta la alcaldía, [...] estaba frente de la alcaldía cuando [elementos de la policía y grupos armados pro-gobierno] empezaron a disparar de nuevo, vi que cayó una persona a mi lado, cuando intenté recogerlo para ver si estaba bien, lo que vi es que estaba sangrando mucho, que tenía un hoyo en su cabeza porque le habían disparado”*.⁵⁹⁶ Un tercer video muestra cómo policías entregan a una persona a integrantes de uno de los grupos armados pro-gobierno, quienes proceden a agredir físicamente a la víctima.⁵⁹⁷ Aquella noche, enfrentamientos entre manifestantes, policía y grupos armados pro-gobierno, resultaron en la muerte de tres personas.⁵⁹⁸

386. Según testimonios recabados por el GHREN, las marchas protagonizadas por estudiantes en Masaya los días 19 y 20 abril fueron repelidas por grupos de choque integrados por simpatizantes del Gobierno y trabajadores de la Alcaldía, quienes actuaron de manera conjunta con elementos de la Policía Nacional de Masaya.⁵⁹⁹ Un testigo describió los incidentes del 19 de abril: *“quien marcaba la pauta era el grupo de motorizados y la policía les daba la cobertura, y actuaban conjuntamente. Actuaban conjuntamente, pero de manera muy ordenada”*.⁶⁰⁰ El testigo refirió que la marcha fue interceptada por policías y fuerzas de choque: *“en la calle Limón, a unos 150 metros de llegar a la carretera Masaya-Managua, [...] hay un puente en el cual ya había presencia policial y funcionarios públicos y partidarios y adeptos del gobierno portando morteros artesanales que eran disparados contra los manifestantes que intentaban seguir la marcha. No fue posible avanzar porque fue abundante, recibimos disparos de balines por parte de los antimotines”*.⁶⁰¹ Las personas manifestantes retrocedieron, y fueron seguidas por patrullas policiales y personas motorizadas. Cuando intentaron reagruparse para hacer un cierre de la marcha, las personas manifestantes fueron agredidas de nuevo: *“nos dieron persecución hasta llegar al barrio de Monimbó [...] atrás de ellos ya venían policías, funcionarios con morteros, lanzándonos piedras, ofensas”*.⁶⁰²

387. También se observó la coordinación entre la Policía Nacional y grupos armados pro-gobierno durante los operativos realizados para desalojar a las y los estudiantes que habían tomado varias universidades.

388. De acuerdo con el informe del GIEI Nicaragua, el 18 de abril de 2018, grupos de choque agredieron con piedras y palos a personas que se encontraban en la entrada de la UCA en Managua.⁶⁰³ De acuerdo con Amnistía Internacional, dos vehículos de la Policía Nacional llegaron a la escena y abastecieron a integrantes de grupos de choque con piedras para agredir a las personas manifestantes. Tras cometer las agresiones, las fuerzas de choque se retiraron y sus integrantes abordaron buses custodiados por la policía.⁶⁰⁴

389. Según el GIEI Nicaragua, el 19 y 20 de abril, la Policía Nacional actuó sola en su intento fallido de desalojar a los estudiantes de la UNI en Managua. El 20 de abril, a lo largo del día, la policía utilizó munición letal contra las y los estudiantes, provocando la muerte de

⁵⁹⁵ GIEI Nicaragua, “Policía Nacional abastece de piedras” (21 de diciembre de 2018), disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=8e4O2ocD2XY>; Informe GIEI Nicaragua, p. 97.

⁵⁹⁶ Entrevista del GHREN DDIV011.

⁵⁹⁷ GIEI Nicaragua, “Policía Nacional entrega detenidos a grupos de choque” (21 de diciembre de 2018), disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=jT0D3DvOR8>.

⁵⁹⁸ Informe GIEI Nicaragua, p. 98.

⁵⁹⁹ Entrevistas del GHREN DDIV040, DDIV009, DDIV028. Véase Confidencial, “Esta Noche 19 de abril 2018 (COMPLETO) | Represión y censura ante protestas por reformas al INSS”, 19 de abril de 2018 (min. 12:06 a 12:18).

⁶⁰⁰ Entrevista del GHREN DDIV009.

⁶⁰¹ Entrevista del GHREN DDIV027.

⁶⁰² Entrevista del GHREN DDIV027.

⁶⁰³ Informe GIEI Nicaragua, p. 85. Véase Confidencial, “Esta Noche 19 de abril 2018 (COMPLETO) | Represión y censura ante protestas por reformas al INSS”, 19 de abril de 2018 (desde min. 7:32).

⁶⁰⁴ Amnistía Internacional, Disparar a Matar, p. 11.

tres personas y un gran número de heridos.⁶⁰⁵ Esa tarde, la Policía facilitó la entrada por la fuerza de grupos armados pro-gobierno a las instalaciones de la UNI, quienes irrumpieron disparando a las y los estudiantes, y provocando la muerte de una cuarta víctima.⁶⁰⁶ Un testigo confirmó al GHREN la presencia de elementos de la Policía Nacional el 20 de abril en la parte frontal de la UNI “vestidos de negro y encapuchados” y en la parte de atrás portando “manga corta de camisa celeste, con chaleco fluorescente y sus cascos de moto”, así como la presencia de un grupo de “motorizados vistiendo camisetas blancas, no encapuchados, con palos, y cascos” que trataba de tirar la cerca de alambre para irrumpir en la universidad.⁶⁰⁷ De acuerdo con el testigo, cuando intentaba salir de la UNI, escuchó un disparo y vio a una persona caer. Manifestantes la tomaron de las manos y pies y la llevaron adentro. Esta persona falleció.⁶⁰⁸

d) *Escalada de la violencia y consolidación de los esquemas de represión*

i) El antes y el después de la marcha de las madres

390. La represión de las marchas de las madres, en particular en las ciudades de Managua y Estelí el 30 de mayo de 2018 constituye un punto de inflexión en la situación de derechos humanos nicaragüense. Se constató una fuerte escalada de la capacidad represiva y del uso letal de la fuerza por la Policía Nacional y por grupos armados pro-gobierno para suprimir dichos eventos.

391. En Managua, miles de personas marcharon pacíficamente para acompañar a las madres de las víctimas fallecidas durante las protestas y denunciar la grave situación de derechos humanos que atravesaba el país. Según el GIEI Nicaragua, francotiradores se habrían apostado en el Estadio Nacional y sobre las laderas de Lomas de Tiscapa en Managua, desde donde dispararon de manera indiscriminada hacia la multitud, hiriendo a varias personas y procurando la muerte de al menos dos.⁶⁰⁹ Efectivos policiales y grupos armados pro-gobierno habrían realizado incursiones hacia el sector del estadio, desplazándose en motocicletas y camionetas desde las cuales habrían disparado contra las personas manifestantes con armas de fuego. En el sector de la UNI, integrantes de grupos armados pro-gobierno dispararon con armas de fuego a personas manifestantes que se resguardaban tras barricadas, hiriendo a varias personas y matando al menos a tres. Las personas manifestantes respondieron con piedras y morteros, pero siguieron sufriendo ataques incluso mientras intentaban replegarse.⁶¹⁰

392. En Estelí se reprodujo la dinámica represiva de las marchas del 19 y 20 de abril. Material audiovisual y fotográfico analizado por el GHREN evidencia la presencia de personas armadas a las afueras de la sede de la Dirección General de Impuestos (DGI)⁶¹¹ y en el parque central.⁶¹² Un testigo refirió al GHREN que “desde la DGI hasta la Plaza Gadea estaban los paramilitares armados. En estos casos los policías eran como guardianes de ellos”.⁶¹³ Entre ellas se identificaron integrantes de los CPC y trabajadores de la Alcaldía de Estelí, de la DGI y de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios

⁶⁰⁵ Una grabación obtenida y verificada por el GIEI muestra cómo elementos de la Policía Nacional dispararon desde su ubicación en paseo Tiscapa a estudiantes que se encontraban en el interior del recinto universitario de la UNI, en Managua. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=bP-M-o_OS2Q. Véase Confidencial, “Esta Noche 19 de abril 2018 (COMPLETO) | Represión y censura ante protestas por reformas al INSS”, 19 de abril de 2018 (desde min. 2:42)

⁶⁰⁶ Informe GIEI Nicaragua, pp. 188–189.

⁶⁰⁷ Entrevista del GHREN DDIV042.

⁶⁰⁸ Entrevista del GHREN DDIV042.

⁶⁰⁹ Informe GIEI Nicaragua, pp. 158–163; Confidencial, “El recuento #EnCaliente del ataque a la “madre de todas las marchas” en Nicaragua”, 30 de mayo de 2019 (min. 14:48 a 17:00), disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ywLKpaXq2kE>.

⁶¹⁰ Informe GIEI Nicaragua, p. 167; EAAF, SITU, “Nicaragua: Marcha de las Madres Reconstrucción”, disponible en: <https://marchadelasmadres.com/#/es>.

⁶¹¹ Material audiovisual y fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC114, DDDOC115, DDDOC136; documentos en el archivo del GHREN DDDOC121, DDDOC127, DDDOC129.

⁶¹² Material audiovisual y fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC037.

⁶¹³ Entrevista del GHREN DDIV024.

(ENACAL).⁶¹⁴ El Grupo analizó un video en el que se ve una persona disparar con arma de fuego corta en las inmediaciones de la Plaza Gadea.⁶¹⁵ En otros videos se puede observar cómo personas manifestantes trasladan a heridos:⁶¹⁶ en uno de ellos se escucha a una persona decir “*ya mataron a uno*”;⁶¹⁷ mientras en otro se escucha a otra decir, “*lo que están haciendo es disparar*”.⁶¹⁸

393. A partir del 30 de mayo se observa una transformación de la protesta social en respuesta a la represión de la marcha de las madres. Aunque las personas manifestantes habían empezado a levantar barricadas desde los primeros días de las protestas, a partir de ese momento crítico, el fenómeno de atrincheramiento se afianzó e incrementó de manera significativa. A partir de junio, si bien se siguieron realizando marchas, éstas se llevaron a cabo en entornos más resguardados, dentro de las áreas donde los tranques y barricadas levantadas por personas manifestantes proporcionaban protección frente a posibles ataques.⁶¹⁹ En este contexto, los tranques y barricadas se convirtieron en la forma misma de la protesta. A partir de este momento, cambió también el escenario donde se ejerció la represión.

ii) Operativos policiales y de grupos armados altamente organizados

394. A partir de junio, la Policía Nacional y los grupos armados pro-gobierno cambiaron también su estrategia y *modus operandi*, adaptándose al nuevo contexto. Desde mediados de junio hasta finales de julio, se desarrollaron una serie de operativos policiales y de grupos armados pro-gobierno en todo el país, conocidos popularmente como la “Operación Limpieza”. Su objetivo fue el de derribar las barricadas y tranques que habían paralizado el país en protesta por la situación de derechos humanos que atravesaba el país. Los operativos fueron llevados a cabo de manera conjunta por elementos de la Policía Nacional, incluyendo fuerzas antimotines y grupos armados pro-gobierno militarizados, y se desarrollaron de manera cada vez más organizada y coordinada a nivel táctico y operativo, con un creciente empleo de recursos materiales, logísticos y armamentísticos y tácticas altamente especializadas.

395. En una entrevista con un medio de comunicación, un exintegrante de uno de dichos grupos relató que participó en operativos en distintas ciudades y departamentos: “*en Jinotepe, Masaya, Monimbó, Las Esquinas, en Diriamba... prácticamente en todo andábamos nosotros*”.⁶²⁰ Mencionó que los integrantes de grupos armados pro-gobierno “*andábamos en coordinación con la Policía Nacional, trabajando*” y que “*todo se hacía bien coordinado, en conjunto con la policía*”.

396. La fuente refirió que los grupos armados pro-gobierno en Carazo recibieron armas y fueron coordinados por el Secretario Político del FSLN en San Marcos y por un exmilitar retirado: “*a todos nosotros nos daban armas, escopetas, para que fuéramos a limpiar los tranques y como prueba de eso tenemos*”.⁶²¹ Este testimonio coincide con lo expresado por testigos entrevistados por el GHREN, y con entrevistas realizadas a otros miembros de grupos pro-gobierno, al señalar que la entrega de las armas se realizaba en la casa zonal del FSLN en San Marcos, Carazo; este lugar funcionaba como cuartel general de los grupos armados

⁶¹⁴ Documentos en el archivo del GHREN DDDOC035, DDDOC136, DDDOC129, DDDOC122.

⁶¹⁵ Material audiovisual en el archivo del GHREN DDDOC117.

⁶¹⁶ Material audiovisual en el archivo del GHREN DDDOC039, DDDOC040, DDDOC041, DDDOC042, DDDOC131.

⁶¹⁷ Material audiovisual en el archivo del GHREN DDDOC039.

⁶¹⁸ Material audiovisual en el archivo del GHREN DDDOC042.

⁶¹⁹ Personas manifestantes que habían participado en esta marcha y que procedían del departamento de Carazo refirieron al GHREN que el nivel de represión perpetrada y el miedo de que semejantes ataques se pudieran dar a lo largo y ancho del país, determinaron el levantamiento de tranques y barricadas en el departamento como protección. En particular, el Tranque San José, que anteriormente las personas manifestantes cerraban a diario unas dos horas de manera intermitente como forma de protesta, habría sido cerrado de manera permanente a partir de esta fecha. Entrevistas del GHREN DDIV015, DDIV016, DDIV018.

⁶²⁰ La Prensa Nicaragua, “Las confesiones de un paramilitar del régimen de Daniel Ortega”, 24 de octubre de 2018, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=duXnIeOdKtE&t=9s>.

⁶²¹ *Ibíd.*

pro-gobierno en la zona y, desde ahí, se habrían lanzado los operativos en Diriamba, Dolores, Jinotepe, La Concepción, Masatepe y Niquinohomo, entre otros.⁶²²

397. Al ser preguntado sobre el tipo de armas que les fueron entregadas, la fuente precisó: “*todos andaban escopeta y algunos M16*”. Explicó que también se les proporcionaron camisetas de diferentes colores para identificarse: grises para operar en Jinotepe y azules para Masaya.⁶²³ Dicha información coincide con las evidencias fotográficas y audiovisuales recabadas por el GHREN.⁶²⁴

398. La mayoría de los ataques a barricadas se produjeron en horarios vespertinos o en la madrugada, y en algunos casos fueron precedidos por cortes de la electricidad y otros servicios.⁶²⁵ Así, muchos de los operativos se produjeron en la oscuridad, limitando la capacidad de reacción de las personas manifestantes, así como su habilidad de documentar los hechos. Asimismo, los cortes de electricidad obstaculizaron la comunicación entre las personas convocadas y la toma de fotografías y videos, por estar sus teléfonos descargados. En la mayoría de los casos, el contexto de atrincheramiento también implicó la ausencia de periodistas durante las ofensivas contra los tranques. En varios de estos eventos se alegó la presencia de francotiradores en los tejados.⁶²⁶

399. Entre el 8 y el 24 de julio de 2018 se realizaron operativos masivos en distintos departamentos, con un despliegue de recursos sensiblemente mayor, tanto en términos del número de elementos que participaron, como del nivel de especialización de los efectivos y la cantidad y capacidad lesiva del armamento utilizado. Estas operaciones se realizaron con el objetivo de desarmar de manera definitiva los tranques y las barricadas levantadas por la población manifestante, y para retomar el control de las instalaciones universitarias que permanecían tomadas por estudiantes.

400. El Grupo identificó que la primera operación se dio de manera simultánea en Jinotepe, Diriamba y Dolores, en el departamento de Carazo, el 8 de julio. Posteriormente siguieron otras operaciones, entre las cuales figuran el ataque a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y a la adyacente Iglesia de la Divina Misericordia el 13 de julio en la ciudad de Managua, la operación en el barrio de Monimbó, Masaya, el 17 de julio, y la operación en la ciudad de Jinotega el 23 de julio.

401. En la mayoría de los operativos de desarme de tranques investigados por el GHREN se produjo una acción conjunta y coordinada de la Policía Nacional, incluyendo fuerzas especiales, y grupos pro-gobierno militarizados. El número de elementos que participaron y el nivel de coordinación entre los grupos que participaron en los operativos varió en función del área y la complejidad de las estructuras de las barricadas o tranques que se pretendían despejar, así como de la capacidad de las personas manifestantes de repeler el ataque, lo cual evidencia el manejo de información y significativo grado de planificación de dichos operativos.

402. De acuerdo con los testimonios recabados, durante los operativos realizados en Jinotepe (Diriamba y Dolores) y Monimbó, los efectivos se movían de manera simultánea procediendo en columnas desde distintos puntos de acceso, hasta el objetivo, creando un

⁶²² Entrevista del GHREN DDIV017; La Prensa “Anduvimos apoyando quitando tranques: las confesiones de los tomatierres desalojados que fueron paramilitares”, 21 de octubre de 2018, disponible en: <https://www.laprensani.com/2018/10/21/departamentales/2487188-las-confesiones-de-los-tomatierres-desalojados-que-fueron-paramilitares>.

⁶²³ La Prensa Nicaragua, “Las confesiones de un paramilitar del régimen de Daniel Ortega”, 24 de octubre de 2018.

⁶²⁴ Material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC055, DDDOC102, DDDOC103, DDDOC104, DDDOC147, DDDOC14; material audiovisual en el archivo del GHREN DDDOC057, DDDOC058, DDDOC144, DDDOC145, DDOC151.

⁶²⁵ Por ejemplo, en la tarde/noche del 22 de junio de 2018, se produjo un apagón en una zona de los Barrios Orientales de Managua, causado por un disparo a un transformador de luz, previo al operativo realizado en la madrugada del 23 de junio en dicha zona. Entrevistas del GHREN DDIV001, DDIV010. Durante el operativo del 8 de julio en Carazo, la señal telefónica de Claro fue suspendida desde las 06:00. También se cortaron los servicios de agua y en algunos puntos de la electricidad. Entrevista del GHREN DDIV015; testimonio original recabado por FIDH/CENIDH en el archivo del GHREN DDDOC270.

⁶²⁶ Entrevistas del GHREN DDIV016, DDIV019, DDDOC020, DDIV027, DDIV028, DDIV048.

cercos.⁶²⁷ En Carazo, las columnas mantenían un orden preciso: en primer lugar, avanzaban integrantes de grupos armados pro-gobierno, quienes encabezaban la ofensiva y a quienes podía identificarse porque vestían camisas blanca, y utilizaban pasamontañas, botas militares y armas largas. En segundo lugar, procedían elementos de las fuerzas especiales de la Policía Nacional, que utilizaban tácticas de intervención altamente especializadas.⁶²⁸

403. De acuerdo con residentes del Barrio Camilo Ortega en Jinotega, alrededor de las 15:00 del 23 de julio de 2018 se observó que numerosos elementos de la Policía Nacional y grupos armados pro-gobierno se desplegaron a la entrada del sector con el fin de desmontar las dos últimas barricadas que quedaban.⁶²⁹ Alrededor de las 18:00, miembros del Movimiento Azul y Blanco hicieron un llamado de apoyo para evitar que la policía entrara en el barrio, a través de un comunicado en directo.⁶³⁰ Tras el llamado, numerosas personas empezaron a entrar en el barrio por la Calle Centenario.⁶³¹ Sobre las 21:00–21:30, los elementos de la Policía Nacional y grupos armados pro-gobierno, comenzaron a disparar contra las personas manifestantes.⁶³² Elementos de la Policía Nacional también empezaron a desmontar las barricadas.

404. Cuando empezaron los disparos, las y los jóvenes autoconvocados tuvieron que huir agachados, gateando para no ser alcanzados por los balazos.⁶³³ De acuerdo con un testigo ocular de los hechos, *“al ver un montón de gente que venía al barrio, comenzaron a disparar los policías [...] Incluso yo anduve en esa marcha, me acuerdo de que me pasé brincando esta barricada y casi me dieron un balazo. Incluso uno de ellos chavalos, de los que iban al lado mío, le pasaron rozando, así un balazo”*.⁶³⁴ El ataque continuó toda la noche; un testigo relató que esa noche no pudieron dormir porque se escucharon balazos “a cada rato” hasta las 4 de la mañana, y agregó: *“lo último que se escuchó fue: ríndanse hijoeputas los tenemos rodeados”*.⁶³⁵

iii) Represión de los intentos de protestas tras el desmantelamiento de tranques y barricadas

405. La coordinación entre la Policía Nacional y los grupos armados pro-gobierno continuó incluso durante las semanas sucesivas a la ejecución de operativos de levantamiento de tranques y barricadas.⁶³⁶ Una vez desarmados éstos, policías e integrantes de grupos pro-gobierno militarizados mantuvieron una fuerte presencia en las zonas donde se habían alzado

⁶²⁷ Entrevistas del GHREN DDIV018, DDIV019, DDIV045, DDIV027.

⁶²⁸ Entrevistas del GHREN DDIV018, DDIV019.

⁶²⁹ Testimonios originales recabados por FIDH/CENIDH en el archivo del GHREN BBD0C061, BBD0C030, BBD0C029; La Prensa, “Policías y paramilitares desmontan barricadas del barrio sandino, en Jinotega”, 23 de julio de 2018, disponible en: <https://www.laprensani.com/2018/07/23/departamentales/2452411-policias-y-paramilitares-desmontan-barricadas-del-barrio-sandino-en-jinotega>; El Confidencial, “Barrio Sandino fue acechado durante horas”, 27 de julio de 2018, disponible en: <https://www.confidencial.digital/reporte-ciudadano/barrio-sandino-fue-acechado-durante-horas/>. Véase La Prensa, “Al menos tres muertos y 25 heridos tras ataque en el barrio Sandino en Jinotega”, 24 de julio de 2018, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=PWTRSsjCQJK> (min. 1:16).

⁶³⁰ ¡Viva Nicaragua Libre!, Grabación en vivo del 24 de julio de 2018, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=Vj9SQ0dqj8> (en el video, se pueden ver cinco manifestantes con las caras cubiertas, dos de ellos armados con morteros de fuegos artificiales); testimonios originales recabados por FIDH/CENIDH en el archivo del GHREN BBD0C029, BBD0C061; Onda Local, “Jinotega: ¡Auxilio, están disparando a matar!”, 24 de julio de 2018, disponible en: <https://ondalocalni.com/noticias/467-jinotega-auxilio-están-disparando-a-matar/>.

⁶³¹ Testimonio original recabado por FIDH/CENIDH en el archivo del GHREN BBD0C029; La Prensa, “Al menos tres muertos y 25 heridos tras ataque en el barrio Sandino en Jinotega”, 24 de julio de 2018.

⁶³² 100% Noticias, “Barrio Sandino, en Jinotega es atacado por paramilitares y policías”, 23 de julio de 2018, disponible en: <https://100noticias.com.ni/nacionales/91786-barrio-sandino-es-atacado-por-paramilitares-y-poli/>.

⁶³³ Testimonio original recabado por FIDH/CENIDH en el archivo del GHREN BBD0C030.

⁶³⁴ Testimonio original recabado por FIDH/CENIDH en el archivo del GHREN BBD0C029.

⁶³⁵ Testimonio original recabado por FIDH/CENIDH en el archivo del GHREN BBD0C030.

⁶³⁶ Véase “Nicaragua Carazo Diriamba 9 de julio 2018”, 10 de julio de 2018, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=8ftFudU8XUE>.

los tranques y barricadas, para mantener el control sobre las mismas.⁶³⁷ Material fotográfico analizado por el GHREN muestra una consistente presencia de elementos de la Policía Nacional fuertemente armados en las marchas, atrás de las cuales se aprecian miembros de un grupo armado pro-gobierno, muchos de ellos motorizados, con banderas del FSLN, y el rostro cubierto con pañuelos rojo y negro y/o cascos.⁶³⁸

406. Una persona manifestante relató al GHREN cómo, durante una de las últimas marchas, vio, al llegar a una esquina, alrededor de 20 miembros de un grupo armado pro-gobierno “con banderas del Frente Sandinista, armados y motorizados”, quienes amenazaron a las personas manifestantes con matarles.⁶³⁹ Las personas manifestantes fueron interceptadas por policías y grupos armados pro-gobierno; intentaron retroceder, pero se les lanzaron dos morteros seguidos por un “*tercer mortero [que] era como una señal y nos comienzan a disparar a quemarropa*”.⁶⁴⁰

407. Una fuente periodística entrevistada por el GHREN que estaba cubriendo la marcha relató que, en un momento dado, los policías antimotines lanzaron bombas lacrimógenas a las personas manifestantes y tras ello, comenzaron a disparar.⁶⁴¹ La fuente y el resto de los y las periodistas presentes también tuvieron que correr a causa de los disparos. Las y los periodistas, identificándose como tales, atravesaron corriendo un puente de hierro para huir; mientras lo hacían pudieron sentir las balas golpeando el metal del puente, lo que les hizo pensar que les estaban disparando directamente a ellas y ellos.⁶⁴²

e) *Denegación de asistencia médica*

408. El GHREN tiene motivos razonables para creer que, siguiendo órdenes de la Ministra de Salud, Sonia Castro, se dio la instrucción a las directoras y directores de centros de salud y hospitales de todo el país, de denegar el ingreso y atención médica a personas manifestantes, y de reportar a la Policía, a las personas manifestantes que llegaran a los hospitales requiriendo asistencia médica. Según testigos entrevistados por el GHREN, dicha instrucción fue transmitida por la Ministra Castro de manera verbal, y reiterada por correo electrónico.⁶⁴³

409. Algunos de los centros médicos identificados por testigos y organizaciones que denegaron la atención médica a personas manifestantes, incluyen: el Hospital Cruz Azul, que es parte del INSS; el Centro de Salud de Ciudad Belén en Managua; el Hospital España en Chinandega;⁶⁴⁴ el Centro de Salud Alejandro Calero, en Masaya;⁶⁴⁵ y los hospitales Antonio Lenin Fonseca, Alemán Nicaragüense,⁶⁴⁶ Manolo Morales, Roberto Calderón, Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello -HEODRA- y San Juan de Dios de Estelí,⁶⁴⁷ todos pertenecientes al Ministerio de Salud.⁶⁴⁸

410. El GHREN pudo documentar tres casos en los cuales la muerte de las víctimas presuntamente se debió a la falta de atención médica.⁶⁴⁹ Según un testigo entrevistado por el Grupo, en la barricada “El Retén”, en el centro de Concepción, una persona fue herida por arma de fuego en el tórax y trasladada al Centro de Salud Alejandro Calero, a un km de la barricada. Sin embargo, por orden de la Jefa de Enfermería del centro de salud, le cerraron

⁶³⁷ Este patrón se constató en las ciudades de Managua durante el mes de junio y julio, y en Diriamba, Jinotepe y Masaya en julio.

⁶³⁸ Material fotográfico en el archivo del GHREN CCDOC084, CCDOC085, CCDOC088, CCDOC089, CCDOC090, CCDOC091.

⁶³⁹ Entrevista GHREN BBIV017; material fotográfico en el archivo del GHREN CCDOC088.

⁶⁴⁰ Entrevista del GHREN BBIV017.

⁶⁴¹ Entrevista GHREN CCIV055.

⁶⁴² Entrevista del GHREN BBIV020.

⁶⁴³ Entrevistas del GHREN, IIIV001, IIIV002, IIIV003.

⁶⁴⁴ Informe GIEI Nicaragua, p. 207.

⁶⁴⁵ Entrevista del GHREN DDIV017.

⁶⁴⁶ Entrevista del GHREN DDIV003.

⁶⁴⁷ Entrevista del GHREN DDIV032.

⁶⁴⁸ Informe CIDH sobre Graves Violaciones p. 50.

⁶⁴⁹ El GHREN no cita la evidencia por razones de confidencialidad y seguridad.

los portones y le negaron la atención. El testigo pudo identificar a integrantes de grupos armados pro-gobierno resguardando el hospital y rodeando la entrada.⁶⁵⁰

411. Una víctima de 15 años falleció el 20 de abril de 2018 en el Hospital Bautista, por un disparo de arma en el cuello. Al menor de edad le fue denegado el acceso al Hospital Cruz Azul.⁶⁵¹ De acuerdo con el GIEI Nicaragua, la víctima falleció como resultado de los retrasos en el acceso a asistencia médica.⁶⁵²

412. Según el testimonio de un médico de Carazo entrevistado por Human Rights Watch, “su superior en el Ministerio de Salud le había indicado que el centro de salud a su cargo debía atender únicamente a “nuestra gente”, presuntamente refiriéndose a las bandas armadas pro-gobierno”. El médico agregó que, el 8 de julio de 2018, “cerca de 20 miembros armados de estas bandas llegaron al centro de salud y no permitieron que entrara nadie más [...] Según su testimonio, ocho miembros de estas bandas recibieron atención médica, pero no se atendió a manifestantes”.⁶⁵³

i) Discriminación y estigmatización

413. Una variedad de fuentes, víctimas y testigos, incluyendo profesionales médicos que presenciaron los hechos, afirmaron que las personas heridas y sus familias sufrieron discriminación y estigmatización en los centros médicos por ser manifestantes, y que algunas personas heridas fueron objeto de malas prácticas médicas intencionales.⁶⁵⁴ Las conductas descritas al GHREN por varios testigos incluyen la falta de atención especializada y de tratamiento médico a las personas conforme a la gravedad de las heridas que presentaban, y el maltrato físico a personas heridas de gravedad.⁶⁵⁵

414. El GIEI Nicaragua documentó, entre otros, los casos de cuatro víctimas que fallecieron presuntamente por falta de debida diligencia y negligencia médica.⁶⁵⁶

415. Un testigo entrevistado por el GHREN relató las vejaciones sufridas por su familiar en un hospital público en Managua. La víctima había sufrido una herida en un órgano vital, no recibió la atención médica debida, y falleció.⁶⁵⁷

ii) Vigilancia y presencia de grupos armados pro-gobierno en centros de salud

416. Testigos entrevistados por el Grupo denunciaron que elementos de la Policía Nacional y grupos armados pro-gobierno mantenían presencia en las afueras y adentro de los hospitales y, en ocasiones, solicitaban información sobre los pacientes y personal médico en los centros de salud.⁶⁵⁸ Elementos de la Policía Nacional y grupos armados pro-gobierno también impidieron el acceso a los socorristas para asistir a personas manifestantes heridas, como ocurrió en el caso del ataque a la UNAN e Iglesia Divina Misericordia el 13 de julio.

417. Según testimonios, disminuyó drásticamente la asistencia de personal médico a los centros de salud debido a la directiva del Ministerio de Salud de no proporcionar asistencia a personas manifestantes, así como a la presencia permanente de integrantes de grupos armados pro-gobierno en los alrededores de los mismos, y a la vigilancia por parte de

⁶⁵⁰ Entrevista del GHREN DDIV017.

⁶⁵¹ GIEI Nicaragua, “Hospital Cruz Azul niega atención a Álvaro Conrado” (21 de diciembre de 2018), disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=XgEGkr97ISk>; Amnistía Internacional, *Disparar a Matar*, p. 27.

⁶⁵² Informe GIEI Nicaragua, p. 206.

⁶⁵³ Human Rights Watch, Nicaragua, “Despido arbitrario de médicos y trabajadores de la salud”, 7 de agosto de 2018, disponible en: <https://www.hrw.org/es/news/2018/08/07/nicaragua-despido-arbitrario-de-medicos-y-trabajadores-de-la-salud>.

⁶⁵⁴ Entrevistas del GHREN IIIV003, IIIV002, DDIV007, IIIV008, DDIV014.

⁶⁵⁵ Entrevistas del GHREN IIIV003, IIIV002; testimonio original recabado por CPDH en el archivo del GHREN DDDOC571.

⁶⁵⁶ Informe GIEI Nicaragua, p. 208. El GHREN pudo documentar una de estas muertes de manera directa, pero no cita la evidencia por razones de confidencialidad.

⁶⁵⁷ Entrevista del GHREN DDIV007.

⁶⁵⁸ Entrevistas del GHREN DDIV010, DDIV007.

miembros de los sindicatos del sector salud, quienes acosaban e intimidaban a las y los profesionales de la salud.⁶⁵⁹

iii) Uso de ambulancias y personal del sistema de salud en apoyo a la policía y grupos armados pro gobierno

418. Cabe destacar también la cooperación del Ministerio de Salud durante los operativos de represión de la protesta. Testimonios y análisis fotográfico confirman la presencia de ambulancias y personal del sistema de salud para proporcionar tratamiento a los elementos policiales e integrantes de los grupos armados pro-gobierno.⁶⁶⁰ Sin embargo, los testigos denunciaron que durante dichos operativos el sistema de salud no dio auxilio a las personas manifestantes.⁶⁶¹

419. Un testigo relató al GHREN que “se oían disparos espantosos, detonaciones muy fuertes y me llamó mucho la atención que las últimas ráfagas de ametralladora se sintieron aproximadamente a las 5.30 de la mañana, y en todo ese lapso de tiempo no sonó ninguna ambulancia que trajera herido o trasladara muertos, o algo, sino que al amanecer se encontraron los cuerpos de las personas y tuvieron que ser sus familiares los que tuvieron que llegar a traer ya fallecidos”.⁶⁶²

420. Según Amnistía Internacional, el 9 de julio de 2018 se documentaron imágenes que muestran una caravana de al menos 23 camionetas de integrantes de grupos pro-gobierno, armados con una variedad de escopetas, pistolas, morteros improvisados, pistolas *slam gun* y rifles estilo AK y portando la bandera del FSLN. La caravana estaba también integrada por tres ambulancias del Ministerio de Salud.⁶⁶³

iv) Represalias contra profesionales de la salud y estudiantes de medicina

421. El Ministerio de Salud afirma haber prestado atención médica a 1921 personas heridas⁶⁶⁴ y realizado 109 autopsias.⁶⁶⁵ Sin embargo, un gran universo de víctimas heridas y fallecidas fueron atendidas en puestos médicos improvisados, consultorios privados, y por la Cruz Roja Nicaragüense, sin el apoyo del Gobierno.⁶⁶⁶ Médicos, profesores y estudiantes de medicina, entre otras personas, apoyaron de manera voluntaria con mano de obra e insumos en los puestos médicos improvisados.

422. Éstos y otros profesionales de la salud que desafiaron la instrucción de denegar la asistencia médica a las personas manifestantes heridas sufrieron represalias. Las personas entrevistadas por el Grupo relataron que las trabajadoras y los trabajadores de la salud estaban vigilados permanentemente por miembros de los sindicatos afines al partido de Gobierno, y que quienes proporcionaron asistencia durante las protestas fueron detenidos arbitrariamente, acosados y amenazados de muerte, y sus casas fueron pintadas.⁶⁶⁷

⁶⁵⁹ Entrevistas del GHREN DDIV010, DDIV032.

⁶⁶⁰ Entrevista del GHREN DDIV007; véase 100% Noticias, “Paramilitares nuevamente atacan Masaya”, 17 de julio de 2018, disponible en: <https://100noticias.com.ni/videos/171-paramilitares-atacan-masaya/>; Amnistía Internacional, *Sembrando el Terror*, p. 15.

⁶⁶¹ Entrevistas del GHREN DDIV0017, IIV001.

⁶⁶² El GHREN no cita la evidencia por razones de seguridad.

⁶⁶³ Amnistía Internacional, *Sembrando el Terror*, p. 15.

⁶⁶⁴ CVJP, Tercer Informe, p. 3.

⁶⁶⁵ CVJP, Tercer Informe, p. 4.

⁶⁶⁶ Un profesor médico quien, durante las protestas, estaba atendiendo en el puesto médico de la UNI, hizo un llamado a toda la población y al gremio médico para que los apoyara. En este llamado afirmó que habían atendido heridos de gravedad con neumotórax traumático y traumas craneoencefálicos por un balín: “*la Policía nos está flagelando directamente, nos está flagelando a todos, tirándonos a matar con balas de goma tiros de AK, tiros de escopeta incluso, bombas lacrimógenas y bombas aturdidoras*”, disponible en: <https://www.facebook.com/watch/?v=10155843625619790>. Entrevistas del GHREN DDIV007, DDIV015.

⁶⁶⁷ Entrevistas del GHREN DDIV024, DDIV017, IIV002.

423. Muchos médicos, paramédicos y personal de la salud fueron forzados a renunciar y/o presionados a abandonar el país.⁶⁶⁸ La CIDH afirmó que se reportaron al menos 300 casos de profesionales de la salud despedidos.⁶⁶⁹ De acuerdo con un abogado que representó a varios médicos despedidos, la mayoría de los despidos se hicieron bajo el art. 45 del Código Laboral, por rescisión del contrato de trabajo por tiempo indeterminado y sin causa justificada.⁶⁷⁰

424. Un testigo refirió que farmacias que brindaron insumos para los puestos médicos improvisados habían sido cerradas, y organizaciones de trabajadores de la salud sido canceladas, incluyendo la Asociación Médica Nicaragüense.⁶⁷¹ Adicionalmente, el GHREN recibió información referente a la cancelación de las matrículas de estudiantes de medicina que proporcionaron asistencia médica durante las protestas (Véase Capítulo III.B). La CIDH adoptó medidas cautelares a favor aquellos que prestaron asistencia médica y auxilio a personas heridas producto de los actos de violencia durante la protesta social de 2018, a través de Brigadas Médicas, por considerar que estas personas se encontrarían en una situación de riesgo a partir de dicha participación.⁶⁷²

f) *Impunidad y obstaculización del esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia*

425. El Gobierno del Presidente Daniel Ortega ha atribuido la responsabilidad por todos los actos de violencia, incluida la responsabilidad por las 198 muertes oficialmente reconocidas por el Gobierno, a las personas que participaron en las protestas, las cuales el Gobierno calificó de “intento golpista”. El Gobierno no ha reconocido ninguna instancia de uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional, ni la comisión de ninguna acción delictiva por parte de grupos armados pro-gobierno. De hecho, el Gobierno niega la existencia de dichos grupos.

426. El 30 de abril de 2018, la Asamblea Nacional estableció la CVJP con el mandato de recopilar información, analizar y establecer los hechos que tuvieron lugar en Nicaragua a partir del 18 de abril de 2018.⁶⁷³ Sin embargo, los hallazgos de dicha comisión presentaron versiones de los hechos que reprodujeron el discurso oficialista y culpabilizaron a las propias personas manifestantes de las muertes.

427. Por otro lado, las autoridades de Nicaragua han utilizado el discurso del supuesto golpe de estado para estigmatizar y perseguir penalmente a personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas, integrantes de partidos políticos de oposición, profesionales de medios de comunicación independientes, y a otras personas opositoras o percibidas por el Gobierno como tales, por su rol en el marco de las protestas de 2018.

⁶⁶⁸ Entrevistas del GHREN DDIV024, IIIV001. Véase también: CIDH, Migración forzada de personas nicaragüenses a Costa Rica, OEA/Ser.L/V/II. Doc.150/19 (8 de septiembre de 2019), p. 41.

⁶⁶⁹ La Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIDH expresó su preocupación frente a los despidos arbitrarios y hostigamientos contra personal médico, docentes de Universidad y estudiantes, así como los efectos negativos sobre la salud de pacientes. Comunicado de prensa, 10 de septiembre de 2018, disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/203.asp>.

⁶⁷⁰ Ley No. 185, Código Laboral de 1996, art. 45. Cuando el empleador rescinda el contrato de trabajo por tiempo indeterminado y sin causa justificada pagará al trabajador una indemnización equivalente a: 1) Un mes de salario por cada uno de los primeros tres años de trabajo; 2) Veinte días de salario por cada año de trabajo a partir del cuarto año. En ningún caso la indemnización será menor de un mes ni mayor de cinco meses. Las fracciones entre los años trabajados se liquidarán proporcionalmente.

⁶⁷¹ Entrevista del GHREN IIIV002. Véase Asamblea Nacional, Decreto No. 8757, Decreto de Cancelación de Personalidades Jurídicas, 2021, disponible en: [http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/\(\\$AI\)/A78C33D100A85E64062587270072ACAB?OpenDocument](http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($AI)/A78C33D100A85E64062587270072ACAB?OpenDocument).

⁶⁷² Véase CIDH, Resolución 94/2018, Medidas cautelares No. 1051-18. Erick Juriel Murillo Pavón respecto de Nicaragua, 28 de diciembre de 2018, disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/94-18MC1051-18-NI.pdf>.

⁶⁷³ Véase Asamblea Nacional, Resolución No. 01-2018, aprobada el 29 de abril de 2018, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 81 del 30 de abril de 2018, disponible en: [http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/\(\\$AI\)/0DEC5E914B77941E062582720071DC4E?OpenDocument](http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($AI)/0DEC5E914B77941E062582720071DC4E?OpenDocument).

428. El GHREN no tiene conocimiento acerca de ningún proceso penal contra agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, o contra personas integrantes de grupos armados pro-gobierno por las violaciones y abusos de los derechos humanos cometidas desde el inicio de la represión a la protesta social en 2018.⁶⁷⁴

429. Numerosos testigos entrevistados por el Grupo de Expertos reportaron prácticas por parte de las autoridades competentes que obstaculizaron y obstruyeron los procesos para esclarecer las circunstancias de las muertes y obtener justicia en los casos de ejecuciones extrajudiciales.⁶⁷⁵ En varios casos documentados por el GHREN, personal médico o policial exigió a los familiares de las víctimas que firmasen “actas de desistimiento”, como condición para poder retirar el cuerpo de su familiar o para obtener un certificado de defunción.⁶⁷⁶ En dichas actas, los familiares de las víctimas debían expresar su renuncia a denunciar los hechos y a solicitar la realización de una autopsia. Estos hallazgos confirman un patrón ya evidenciado por otros organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.⁶⁷⁷ El GHREN también documentó casos en los que las autoridades intentaron manipular el contenido de los certificados de defunción, y entregar certificados que indicaban otras causas de muerte, cuando la muerte se había dado por impacto de arma de fuego.⁶⁷⁸

430. La normativa nacional establece que el IML debe realizar la autopsia médico legal en la investigación de casos de muerte violenta, muerte súbita o inesperada, muerte sospechosa de criminalidad, muerte bajo custodia y muerte en la que se investiga responsabilidad profesional, para auxiliar a las autoridades competentes.⁶⁷⁹ Para ello, el IML debe seguir un procedimiento reglamentado en el Norma Técnica para la realización de autopsias médico legales que incluye el levantamiento del cadáver, cadena de custodia y preservación de las pruebas.⁶⁸⁰ En particular, en lo que refiere a muertes debidas a lesiones por proyectil de arma de fuego, el procedimiento prevé que el médico legal recupere los proyectiles si permanecieran éstos dentro del cadáver y entregarlos a la Policía Nacional, además de proporcionar información sobre el tipo de arma involucrada y la distancia de disparo, entre otras cosas; todo ello finalizado al esclarecimiento de los hechos que condujeron a la muerte.⁶⁸¹

431. Una fuente relató al GHREN cómo, durante los actos de represión de la protesta social, este procedimiento se rompió en todos sus eslabones: *“llegaban Hilux en la noche, tiraban los cadáveres en el primer portón. Los guardas de seguridad tenían que levantar los cadáveres y correr y llevarlos a la Morgue, ahí violas toda la cadena de custodia. Después de eso comienzas a ver en todos los hospitales lo que pasaba. Es que mucha gente moría en el hospital y cuando las causas son por arma de fuego vos tenés que enviar los cadáveres para que se les haga una autopsia. Pero lo que se envía a medicina legal es solo la epicrisis, el acta de defunción. Con el acta de defunción se hacía la autopsia. Sin un cadáver no se puede hacer una autopsia, solo con un acta de defunción no te puedes pronunciar. Hay varias*

⁶⁷⁴ El GHREN solicitó información al Estado al respecto a través de una comunicación. A la fecha de redacción de este informe no se ha recibido ninguna respuesta.

⁶⁷⁵ Entrevistas del GHREN DDIV026, DDIV031, CCIV022. Documento en el archivo del GHREN DDDOC603.

⁶⁷⁶ El GHREN tuvo conocimiento de que, en al menos tres casos, personal de salud requirió a la familia dirigirse a la estación de la Policía Nacional para poder obtener la constancia de defunción necesaria para realizar el entierro.

⁶⁷⁷ Informe GIEI Nicaragua, p. 247; Amnistía Internacional, Disparar a Matar, pp. 22 y 32; CIDH, Graves Violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, p. 54.

⁶⁷⁸ Entrevistas del GHREN DDIV013, DDIV029; Informe GIEI Nicaragua, p. 138.

⁶⁷⁹ Norma Técnica para la realización de Autopsias Médico Legales NT/IML-008/02/16. Segunda versión, febrero de 2016, pp. 9 y 10, disponible en: <https://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/iml/pdf/norma-008-02-16.pdf>, en el archivo del GHREN DDDOC604.

⁶⁸⁰ *Ibid.*

⁶⁸¹ *Ibidem*, Anexo 2. Protocolos estandarizados de actuación para autopsias médico-legales según causa básica de la muerte, p. 105.

de las autopsias que se hicieron sin un cadáver".⁶⁸² Esta práctica fue también hallada por el GIEI Nicaragua quien la definió como práctica de "autopsias confeccionadas".⁶⁸³

432. Según los familiares de víctimas, organizaciones acompañantes de víctimas, y otras fuentes entrevistadas por el GHREN, en muchos casos de muerte violenta, el IML trató de rehusarse del realizar o no realizó una autopsia. Si bien en algunos casos eso se vincula a las actas de desistimiento, en otros casos fue en desacato a sus obligaciones y en otros por oposición de las familias de las víctimas, quienes relataron no haber tenido confianza en la institución.⁶⁸⁴ En al menos tres casos documentados por el GHREN, la familia tuvo que insistir para que se realizara la autopsia.⁶⁸⁵

433. Por otro lado, varios testimonios recabados por el Grupo señalaron que algunas fiscalías se negaron a recibir las denuncias referentes a la muerte de sus familiares.⁶⁸⁶ En los casos en los que las fiscalías recibieron la denuncia, el personal del Ministerio Público no llevó a cabo las diligencias necesarias para impulsar la investigación, como la realización de autopsias, peritajes balísticos y acciones de preservación de la escena del crimen y custodia de evidencias. Al contrario, se solicitó a las personas denunciantes que reunieran evidencias sobre los casos, poniendo la carga de la prueba sobre las familias de las víctimas y sin dejar constancia de las evidencias entregadas a la fiscalía.⁶⁸⁷ En varios casos, horas después de los ataques armados, civiles procedieron a limpiar las calles de los casquillos, sangre y otros elementos que habrían servido para la investigación, inclusive confiscando imágenes de cámara de negocios que habían podido grabar los hechos.⁶⁸⁸

434. Familiares que acudieron en varios momentos al Ministerio Público para obtener información sobre el avance de las investigaciones recibieron en los mejores de los casos respuestas evasivas y, en los peores, intimidaciones. En algunos casos se dirigió a los familiares a que solicitaran información sobre la investigación a la Policía Nacional, a quienes las y los familiares responsabilizaban de la muerte de la víctima por acción, omisión o aquiescencia.⁶⁸⁹ Familiares de víctimas entrevistados por el GHREN reportaron actos de vigilancia, intimidación y amenaza por parte de funcionarias y funcionarios públicos, en particular de elementos de la Policía Nacional que realizaban rondas de patrullaje o se apostaban en el exterior de sus viviendas.⁶⁹⁰ En otros casos, recibieron visitas de funcionarios estatales que les ofrecieron algo -sumas de dinero, ayuda, atención médica, trabajo- a cambio de que cambiaran su versión de los hechos.⁶⁹¹

435. Asimismo, la adopción de la Ley de Amnistía el 8 de junio 2019,⁶⁹² dejó sin efecto los cargos contra todas personas involucradas en la comisión de crímenes en el contexto de las

⁶⁸² Entrevista del GHREN BBIV015.

⁶⁸³ Informe GIEI Nicaragua, p. 247. El GIEI encontró que, en ocho casos, los médicos forenses realizaron el informe semanas después de ocurridos los decesos, basándose únicamente en el expediente médico remitido por los hospitales, sin haber examinado el cadáver.

⁶⁸⁴ El GHREN identificó por lo menos seis casos en los que familiares rechazaron la realización de una autopsia por falta de confianza en las instituciones a cargo de la investigación. En un caso se expresó que se confiaba en que de esa manera por lo menos se pudiera guardar la bala como evidencia para futuras investigaciones. Entrevista del GHREN DDIV012. Véase Informe GIEI Nicaragua, p. 246.

⁶⁸⁵ Entrevista del GHREN CCIV022; testimonio original recabado por CPDH en el archivo del GHREN DDDOC631. Véase también Amnistía Internacional, *Disparar a Matar*, p. 22.

⁶⁸⁶ Entrevista del GHREN DDIV012; documentos en el archivo del GHREN DDDOC601, DDDOC521.

⁶⁸⁷ Entrevistas del GHREN DDIV026, DDIV031; documento en el archivo del GHREN DDDOC127; documento recabado por CPDH en el archivo del GHREN DDDIC656.

⁶⁸⁸ Entrevista del GHREN DDIV041; documento en el archivo del GHREN DDDOC603. Véase también Amnistía Internacional, *Disparar a Matar*, p. 23.

⁶⁸⁹ Entrevistas del GHREN DDIV026; testimonio original recabado por CPDH en el archivo del GHREN DDDOC129.

⁶⁹⁰ Entrevistas del GHREN DDIV001, DDIV003, DDIV005, DDIV041, DDIV013, DDIV014, BBIV018; testimonio original recabado por CPDH en el archivo del GHREN DDDOC129; documentos en el archivo del GHREN DDDOC26, DDDOC271, DDDOC603, DDDOC631, DDDOC691, DDDOC692.

⁶⁹¹ Entrevistas del GHREN, CCIV022, DDDOC029; entrevistas a familiares realizada por CPDH, en el archivo del GRHEN DDDOC012, DDDOC397, DDDOC651.

⁶⁹² Ley No. 996, Ley de Amnistía, fue aprobada el 8 de junio de 2019 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 108 del 10 de junio de 2019. Se aprobó a través de un procedimiento expreso por la Asamblea

protestas sociales, incluidas aquellas personas vinculadas al Estado e integrantes de grupos pro-gobierno que actuaron con el beneplácito del mismo.⁶⁹³ El artículo 1 de dicha Ley establece que “las autoridades competentes no iniciarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad así como la ejecución de sentencias, al momento de entrada en vigencia de la presente Ley”.

436. La entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que la adopción de la Ley de Amnistía “podría impedir el procesamiento de personas potencialmente responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el contexto de las protestas contra el Gobierno”.⁶⁹⁴ En efecto, las y los familiares de las víctimas entrevistados por el GHREN, y las y los abogados y organizaciones que les brindan acompañamiento, afirmaron que, incluso antes de la adopción de la Ley, no hubo ningún avance en la investigación de la muerte de sus familiares, lo cual se acentuó aún más tras la adopción de la misma. En algunos casos, el personal del Ministerio Público les explicó que la investigación debía cerrarse en virtud de la Ley de Amnistía.⁶⁹⁵

437. El GHREN tiene motivos razonables para creer que la adopción de dicha Ley estuvo orientada a proteger a las instituciones, estructuras, entidades policiales y grupos armados pro-gobierno que cometieron violaciones, abusos y delitos en 2018, y en particular a facilitar la impunidad y la clausura de las investigaciones relativas a las muertes de personas civiles en el contexto de los actos de represión a la protesta social.

g) *Casos ilustrativos*

438. Tras el análisis del historial coyuntural de las diferentes fases de la represión desde abril de 2018 y de las más recientes acciones emprendidas por el gobierno de Nicaragua en contra de la población civil, el GHREN consideró prudente no socializar en esta ocasión información que pueda conducir a la identidad de las fuentes y así exponer a víctimas, testigos y familiares a ulteriores riesgos. Por ello, los eventos y los casos que habían sido seleccionados por el GHREN como estudios de caso representativos de los patrones arriba presentados, y sobre los cuales se describían las circunstancias de la ejecución extrajudicial de 15 víctimas, no serán parte del presente informe. La información correspondiente permanece en el archivo del GHREN con el objetivo de contribuir a futuros esfuerzos de rendición de cuentas.

439. Se presentan a continuación un recuento histórico de eventos ocurridos en la ciudad de Masaya entre el 19 de abril y el 17 de julio, el cual ejemplifica la continuidad y sistematicidad de los ataques en contra de las personas manifestantes y la población civil en general; así como en la UNAN e Iglesia Divina Misericordia entre el 13 y 14 de julio de 2018, el cual ejemplifica la arbitrariedad y desproporcionalidad del uso de la fuerza en contra de personas manifestantes. Ambos casos demuestran la intencionalidad de ocasionar daño y

Nacional, en 24 horas. No fue consultada a la sociedad civil ni a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

⁶⁹³ El art. 1 de la Ley de Amnistía ordena: “Concédase amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada en vigor de la presente Ley. La amnistía se extiende a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencias. Por tanto, las autoridades competentes no iniciarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de (sentencias, al momento de entrada en vigencia de la presente Ley. Así mismo, las personas que se encuentran privadas de libertad al momento de entrada en vigencia de la presente Ley deberán obtener su libertad de forma inmediata. Por disposición de esta Ley, las autoridades competentes cancelarán los Registros de antecedentes penales de todas las personas beneficiadas por la amnistía”. Documento en el archivo del GHREN FFDOC059.

⁶⁹⁴ ACNUDH, comunicado, “Bachelet alerta acerca de la ley de amnistía y la falta de reparación a las víctimas en Nicaragua”, 8 de junio 2019, disponible en <https://www.ohchr.org/es/2019/06/nicaragua-bachelet-warns-against-amnesty-law-and-lack-reparations-victims?LangID=S&NewsID=24684>.

⁶⁹⁵ Testimonio original recabado por CPDH, en el archivo del GHREN DDDOC420; documentos en el archivo del GHREN DDDOC601, DDDOC579, DDDOC580, DDDOC581, DDDOC622.

una planificación que no pudo prescindir de órdenes precisas impartidas por la alta jerarquía del Estado.

Caso 1 Continuum de violencia: Masaya, 19 de abril–17 julio de 2018

La ciudad de Masaya es considerada un bastión del sandinismo, en particular el barrio de Monimbó, el cual fue el epicentro del primer levantamiento contra Somoza el 26 febrero del 1978. Este ligado histórico confirió a la protesta en Masaya una importancia simbólica para ambas posiciones, la de los pobladores que a partir de la represión a la protesta social se fueron atrincherando y ganando control de la ciudad, y la de las fuerzas de seguridad del Estado quienes, en actuación conjunta con grupos armados pro-gobierno, atacaron en múltiples ocasiones para retomar control de la misma.

El caso de la ciudad de Masaya es ejemplificativo de cómo la represión contra la población civil se ha perpetrado de manera constante y desproporcionada, causando desde entonces la muerte de numerosas víctimas civiles a lo largo de 89 días, desde el 20 de abril hasta el 17 de julio, día en el que elementos de la Policía Nacional y grupos armados pro-gobierno ejecutaron una operación masiva que terminó por desarticular de manera violenta la protesta social en la ciudad.

El registro de la CIDH reporta 40 personas fallecidas (4 elementos de la Policía Nacional y 37 civiles) en la ciudad de Masaya desde el 20 de abril hasta el 17 de julio, cuya muerte es vinculada a la protesta social.⁶⁹⁶ Otro civil falleció el 17 de septiembre de 2018 a causa de las heridas de arma de fuego recibidas el 19 de junio de 2018.⁶⁹⁷ En 30 de los casos, la muerte habría derivado de herida de arma de fuego; en los 10 casos restantes, la CIDH no tuvo datos al respecto. En su IV Informe, la CVJP identifica 35 víctimas fallecidas en la ciudad de Masaya en este marco de tiempo.⁶⁹⁸ Tras su investigación, el GHREN pudo verificar la muerte de al menos 29 personas, incluida una víctima no reportada en dichos registros y la persona que falleció el 17 de septiembre del 2018 como consecuencia de las heridas sostenidas el 19 de junio.

Al igual que en el resto del país, la población de Masaya se movilizó a partir del día 19 de abril, en protesta a la reforma al INSS. Ese día se organizó a través de las redes sociales una marcha cuyo destino era la delegación departamental del INSS, en la calle Panamericana. De acuerdo con la investigación realizada por el GIEI Nicaragua, la marcha del 19 de abril fue predominantemente pacífica. Sin embargo, fue primero obstaculizada y después reprimida por elementos de la Policía Nacional y grupos de choque. De acuerdo con información en posesión del GHREN, confirmada por datos oficiales, la Policía Nacional utilizó balas de goma y gases lacrimógenos para reprimir la protesta,⁶⁹⁹ resultando en tres personas heridas por impactos de dichas balas.⁷⁰⁰

Un testigo ocular de los hechos⁷⁰¹ relató al GHREN cómo policías antimotines y regulares, y grupos de choque, incluyendo motorizados, atacaron la marcha a la altura del parque central, con disparos de goma, morteros y disparos al aire. Acorde con el testimonio, los elementos de la Policía Nacional actuaban conjuntamente y de manera ordenada con los no uniformados: los motorizados marcaban la pauta del ataque mientras que la policía daba

⁶⁹⁶ El GHREN filtró la base de datos de la CIDH por “ciudad del hecho”, obteniendo 40 registros de víctimas bajo Masaya y una bajo Monimbó. No se incluyó una persona no identificada cuyo lugar de fallecimiento es San Juan de la Concepción. De acuerdo con la base de datos, otras seis personas habrían fallecido en otras localidades del Departamento.

⁶⁹⁷ Esta víctima se encuentra en el IV Informe de la CVJP en el “Listado de nombres de 2,264 ciudadanos lesionados en todo el país de los cuales 418 corresponden a miembros de la policía nacional”, CVJP, Cuarto Informe, p. 207.

⁶⁹⁸ La CVJP estableció no haber encontrado constancia de registro en el patrón electoral de dos víctimas fatales adicionales CVJP, Cuarto Informe, p. 15.

⁶⁹⁹ Informe GIEI Nicaragua, p. 102.

⁷⁰⁰ Ministerio de Salud, Informe de personas lesionadas, atendidas en Unidades de Salud, 18 de abril al 5 de junio 2018. Documento entregado al GHREN por la CIDH, en el archivo del GHREN DDDOC363. Casos 1060, 1062, 1063. Cabe destacar que en estos tres casos las balas impactaron respectivamente cara, cuello cabelludo y labios, lo que podría dar a suponer que los disparos apuntaron a la cabeza para ocasionar mayor daño.

⁷⁰¹ Entrevista del GHREN DDIV009.

cobertura.⁷⁰² La evidencia analizada por el GHREN señala al coordinador de la brigada de motociclistas de la ciudad de Masaya y exconcejal del FSLN como líder del grupo armado pro-gobierno quien habría participado en el operativo.⁷⁰³

La información recabada por el GHREN de distintas fuentes coincide con que algunas personas manifestantes en la ciudad de Masaya hicieron uso de piedras, así como de armas caseras incluyendo hondas, morteros⁷⁰⁴ y bombas de contacto,⁷⁰⁵ cuya fabricación se fue perfeccionando a lo largo de la protesta. Testimonios dan cuenta de que en fases posteriores de la protesta pocas personas estaban en posesión de armas de fuego, incluyendo escopetas de cacería y revólveres.⁷⁰⁶ El 12 de mayo, personas manifestantes habrían recuperado un fusil de asalto M16 A1 durante enfrentamientos con grupos armados pro-gobierno militarizados.⁷⁰⁷

Por otro lado, tal y como se describe a continuación, la evidencia analizada por el GHREN y los testimonios recogidos coinciden en que los elementos de la Policía Nacional, en ocasiones de manera conjunta y coordinada con grupos armados pro-gobierno, hicieron uso consistente de armas de fuego, sin recurrir, a partir del 20 de abril, a otros medios menos lesivos. La falta de uso de medios que pudiesen ocasionar menor daño a las personas manifestantes da al Grupo de Expertos motivos razonables para creer que las fuerzas de seguridad hicieron un uso de la fuerza arbitrario, desproporcionado e ilegal en contra de la población civil de Masaya de manera continuada desde el 20 de abril hasta el 17 de julio de 2018, causando un alto número de privaciones arbitrarias de la vida.

La mañana del 20 de abril, un grupo de manifestantes destruyó e incendió las instalaciones del “Comandito” del barrio Monimbó.⁷⁰⁸ Según testimonios recabados por el GIEI Nicaragua, este acto habría sido en reacción a la represión de la protesta del día anterior.⁷⁰⁹ En la tarde de este mismo día, una marcha pacífica procedía desde la avenida Real de Monimbó hacia la plaza del parque central de Masaya, mientras otro grupo de manifestantes ya se encontraba en esta misma plaza. También en este lugar se encontraban elementos de la Policía Nacional, incluyendo elementos de la unidad antimotines, así como miembros de grupos de choque vestidos de civil, portando morteros, y quienes estaban ubicados al lado de los elementos de la Policía Nacional.⁷¹⁰

De acuerdo con el GIEI Nicaragua, “[a]proximadamente a las 15:30 horas, la división antimotines de la policía comenzó su avance por dicha calle que desemboca en el barrio Monimbó. Simultáneamente, la policía empezó a reprimir mediante el disparo de balas de goma al otro grupo de manifestantes que se encontraba dentro del Parque Central”.⁷¹¹ Durante la noche, se produjeron enfrentamientos entre las personas manifestantes y elementos de la Policía Nacional y grupos armados pro-gobierno en el Parque Central y alrededor del mercado de artesanía, y se reportó el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad en contra de las personas manifestantes. De acuerdo con el GIEI Nicaragua⁷¹² y

⁷⁰² Véase también Informe GIEI Nicaragua, p. 103.

⁷⁰³ Entrevista del GHREN DDIV009. Véase <https://twitter.com/latrincheranic/status/1083768542476918784>; El Informe Nicaragua, “Muere Enrique Luna de la Juventud Sandinista que lideró paramilitares para atacar Masaya”, 5 de noviembre de 2018, disponible en: <https://elinformeni.com/muere-enrique-luna-de-la-juventud-sandinista-que-lidero-paramilitares-para-atacar-masaya/#.Y5NCanbMKUk>, en el archivo del GHREN DDDOC309.

⁷⁰⁴ Entrevista del GHREN DDIV028; material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC319, DDDOC317, DDDOC320.

⁷⁰⁵ Entrevistas del GHREN DDIV004; DDIV009; DDIV013; DDIV028. Material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC174.

⁷⁰⁶ Entrevistas del GHREN DDIV013; DDIV027.

⁷⁰⁷ Material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC318.

⁷⁰⁸ Informe GIEI Nicaragua, pp. 104–105; material audiovisual en el archivo del GHREN DDDOC156.

⁷⁰⁹ Informe GIEI Nicaragua, p. 105.

⁷¹⁰ El Nuevo Diario, “Protestas en Monimbó contra reformas al INSS”, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=xzcgV3SzYuY> (minuto 30.43); material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC157; DDDOC310.

⁷¹¹ Informe GIEI Nicaragua, p. 105.

⁷¹² Informe GIEI Nicaragua, p. 106.

con el registro de víctimas de la CIDH, cuatro personas murieron a causa de herida por proyectiles de arma de fuego.⁷¹³

El 21 de abril se conformó el Movimiento 19 de abril de Masaya.⁷¹⁴ Ese día, una quinta persona falleció por herida penetrante por arma de fuego en tórax, como reportado en el certificado de defunción emitido por la Alcaldía de Masaya el 25 de abril de 2018.⁷¹⁵ Según información revelada por la familia, la víctima no estaba siquiera participando en la protesta.⁷¹⁶ Además, de acuerdo con información del Ministerio de Salud, entre los días 20 y 21 de abril de 2018, 13 personas ingresaron a centros de salud por lesiones; dos de esas personas fueron heridas por proyectiles de arma de fuego.⁷¹⁷

Si bien, las personas manifestantes habrían empezado a levantar unas barricadas a partir de la represión a las protestas del 19 de abril, la práctica se fue incrementando exponencialmente después de los enfrentamientos del 20 de abril que resultaron en las primeras víctimas fatales. Los pobladores de Masaya erigieron barricadas en toda la ciudad como forma de protesta contra la represión sufrida y, acorde a los testimonios y la prensa, como forma de protección y autodefensa.⁷¹⁸ Análisis de imágenes satelitales del 14 de julio de 2018 realizadas por UNOSAT⁷¹⁹ identifican 178 posibles barricadas localizadas en diferentes ubicaciones de la ciudad en Masaya, con concentración importante en la zona sur de la ciudad. Cabe destacar que anteriormente a esta fecha, tras un operativo de gran magnitud realizado el 19 de junio, la Policía Nacional ya había retomado control de la parte norte de la ciudad y desarmado las barricadas en esa zona. Para la fecha referente a la imagen, la población manifestante se había replegado en el barrio de Monimbó.



Foto 1: Mapa de barricadas en Masaya, 14 de julio de 2018

(Fuente: UNOSAT)

Un testigo relató al Grupo de Expertos que, por el miedo generado por la presencia de elementos de grupos armados pro-gobierno en los hospitales públicos, estudiantes de medicina y enfermería organizaron puestos médicos en diferentes lugares de la ciudad para atender a las personas manifestantes que resultaban heridas.⁷²⁰

⁷¹³ La CVJP solo reconoció tres de ellas. En al menos un caso, el centro hospitalario no entregó dictamen *post mortem* a la familia, según reportado en la página de la Asociación Madres de Abril.

⁷¹⁴ Entrevista del GHREN CCIV010.

⁷¹⁵ Documento en el archivo del GHREN DDDOC050.

⁷¹⁶ El GHREN no cita la evidencia por razones de seguridad.

⁷¹⁷ Informe de personas lesionadas del Ministerio de Salud, en el archivo del GHREN DDDOC363.

⁷¹⁸ Entrevistas del GHREN DDIV009, CCIV010, DDIV045. Véase también: Confidencial, “Masaya resiste con 200 barricadas: el símbolo de la protesta nacional”, 11 de junio de 2018 (min. 2.00–2.23 y 2.45–3.07), disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=PzZXLNKSksw>.

⁷¹⁹ Documento en el archivo del GHREN DDDOC558. UNOSAT identificó 178 posibles barricadas en diferentes lugares de Masaya, Nicaragua. El mapa general muestra la ubicación de las barricadas identificadas.

⁷²⁰ Entrevista del GHREN CCIV010.

Las marchas siguieron a ritmo diario, particularmente en el barrio de Monimbó.⁷²¹ En línea con el análisis temporal de los fallecimientos, en los 20 días siguientes al 21 de abril no se registraron víctimas fatales en la ciudad de Masaya en el marco de la protesta social.

En el mes de mayo, los enfrentamientos se recrudecieron. De acuerdo con información recabada por fuentes abiertas, el 12 de mayo trabajadores de la Alcaldía de Masaya habrían intentado remover las barricadas en el barrio San Miguel y se produjeron enfrentamientos entre elementos de la Policía Nacional y grupos armados pro-gobierno, y las personas manifestantes, principalmente en la zona del mercado de artesanías.⁷²² De acuerdo con el GIEI Nicaragua y con el registro de víctimas de la CIDH, dos personas resultaron impactadas por proyectiles de arma de fuego, ambas en el cráneo, falleciendo uno el mismo día y el segundo en la madrugada del día siguiente, 13 de mayo.⁷²³

El 30 de mayo se registró otra víctima mortal, por impacto de bala en el tórax. Según un testigo ocular, el disparo habría llegado desde un edificio de dos pisos contiguo a la estación de la Policía Nacional, arriba del cual se apostaba un francotirador.⁷²⁴ El lugar desde donde se dio el disparo señalado por esta fuente, equivaldría a una distancia de tiro de 100 metros.⁷²⁵

Entre el 2 y el 3 de junio hubo un repunte de la violencia en Masaya. De acuerdo con el registro de la CIDH, cuatro personas murieron el 2 de junio y cinco el 3 de junio. La CVJP reconoció ocho personas fallecidas en estos días: siete el 2 de junio y una el 3 de junio.⁷²⁶ Dos de las víctimas eran menores de edad. Siete de las nueve víctimas fueron impactadas por proyectiles de armas de fuego, cinco en el tórax, uno en el cráneo y uno en el ojo. El GHREN no encontró información en relación con dos de las personas fallecidas. Las muertes tuvieron lugar en la zona aledaña al Parque Central y el Parque de San Miguel, que incluye el mercado de artesanías y el cuartel de la Policía Nacional. Testimonios refirieron presencia de antimotines y francotiradores en la zona.⁷²⁷

Un testigo ocular relató al GHREN que a la 1 o 2 de la tarde del 2 de junio, se encontraba a media cuadra del parque San Miguel cuando presencié la muerte de un manifestante: *“al joven se le había acabado el mortero, estaba de pie, con capucha, tenía el tubo del mortero en la mano y levantó los brazos rindiéndose. Pensé que lo iban a capturar, pero la mujer policía le disparó con un tiro en el pecho, a distancia de 20 metros. El chavo cayó y los policías se fueron, no llamaron ni una ambulancia. Eran unos 10–20 policías”*.

De acuerdo con información recibida por el GHREN, la misma tarde del 2 de junio un grupo de manifestantes se encontraba dentro del mercado de artesanías. Alrededor de las 17 horas llegaron varias patrullas de la Policía Nacional a rodear el mercado. Policías empezaron a disparar hacia los manifestantes, quienes empezaron a correr, para huir del lugar.⁷²⁸ Algunos manifestantes no lograron salir del mercado por lo que trataron de ocultarse. Al ser descubierto por la policía, uno de los manifestantes se arrodilló frente a un policía, mientras éste le apuntaba con su arma. La víctima habría suplicado de que no le disparara antes de recibir un disparo en el pecho a quemarropa por parte del policía.⁷²⁹

⁷²¹ Véase El Nuevo Diario, “Continúan protestas en Masaya”, 6 de mayo de 2018, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=BRm5CXuOF00>.

⁷²² Confidencial, “Masaya: tensa tregua tras 24 horas de terror”, 13 de mayo de 2018, disponible en: <https://www.confidencial.digital/nacion/masaya-tensa-tregua-tras-24-horas-de-terror/>, en el archivo del GHREN DDDOC330; La Prensa, “Masaya recibe marcha de apoyo luego de la represión de paramilitares orteguistas”, 12 de mayo de 2018, disponible en: <https://www.laprensani.com/2018/05/12/departamentales/2418585-antimotines-atacan-sorpresivamente-a-jovenes-manifestantes-en-el-centro-de-masaya>, en el archivo del GHREN DDDOC364.

⁷²³ El GHREN no cita la evidencia por razones de seguridad.

⁷²⁴ Entrevista del GHREN DDIV045. Material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC352.

⁷²⁵ De acuerdo con el testigo, la víctima se encontraba en las siguiente coordenadas: 11.97330225691047-86.09504968966503 y el tirador en: 11.973540022384828-86.09425025839393.

⁷²⁶ CVJP, Cuarto Informe.

⁷²⁷ Entrevistas del GHREN DDIV027, DDIV028, DDIV045.

⁷²⁸ Testimonio original recabado por CPDH, en el archivo del GHREN DDDOC159.

⁷²⁹ Testimonio original recabado por CPDH, en el archivo del GHREN DDDOC159: material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC152, DDDOC160.

En nota de prensa de 3 de junio de 2018, la Policía Nacional informó que, en la mañana del 2 de junio, “grupos delincuenciales encapuchados, con armas de fuego, morteros y bombas molotov, continuaron realizando actos terroristas en contra de la delegación de la Policía Nacional de Masaya, creando terror y pánico entre los vecinos del sector. Fuerzas policiales repelieron estos actos terroristas y criminales, resultando lesionados 08 compañeros policías. Fueron capturados 19 delincuentes y dos adolescentes. Posteriormente fueron puestos en libertad por intermediación de la iglesia Católica”. Según el comunicado, todas las personas detenidas poseían antecedentes policiales de robo con intimidación, fuerza y violencia. Al final de la nota se informa del fallecimiento de una de las víctimas, “como consecuencia de actos terroristas realizados por grupos delincuenciales, encapuchados, con armas de fuego, artesanales, morteros y bombas molotov”. No hubo mención de las otras tres víctimas fatales del 2 de junio registradas por la CIDH.

Entre las víctimas del 3 de junio se identificó un efectivo de la DOEP de la Policía Nacional. La nota de prensa de la Policía Nacional del 4 de junio reporta que “*Grupos delincuenciales encapuchados, con armas de fuego, morteros y bombas molotov, continuaron saqueando el mercado de artesanías, viviendas, creando terror y pánico entre los vecinos del sector. Policía Nacional restableció el orden público. Posteriormente atacaron la delegación de la Policía Nacional de Masaya, repelidos y dispersados por fuerzas policiales, siendo asesinado por estos grupos terroristas, con impacto de bala el compañero Policía José Abraham Martínez, 21 años y un policía lesionado*”. Con respecto a esta muerte, la nota de prensa emitida por la Dirección General de Comunicación del Poder Judicial el 5 de junio de 2018 informó que el IML determinó que la muerte de la víctima “*fue violenta y desde el punto médico legal, la manera de la muerte es homicida*”. El IML no reporta la causa de la muerte.

El GHREN encontró información sobre la muerte de otro policía, presuntamente perteneciente a un órgano de inteligencia, información esta última que no se pudo corroborar. La ausencia de respuesta a las solicitudes de información enviada por el Grupo de Expertos al Estado de Nicaragua no permitió aclarar las circunstancias específicas que causaron estas muertes.

De acuerdo con una persona que se encontraba en Masaya en esos días, a inicios del mes de junio las personas manifestantes mantenían control de la ciudad por sus cuatro costados, mientras que entre un grupo de entre 20 y 30 elementos de la Policía Nacional se mantenía en el cuartel de la policía en Masaya y dentro de un perímetro marcado, por un lado, por el mercado viejo de artesanías y, por el otro lado, por el colegio Humberto Alvarado.⁷³⁰

Los días 6, 9 y 17 de junio perdieron la vida tres personas en Masaya, una por día, las tres por proyectil de arma de fuego, respectivamente en cráneo,⁷³¹ tórax⁷³² y ojo.⁷³³ Las muertes se dieron en el contexto de ataques de policías y grupos armados pro-gobierno contra barricadas que habían sido erigidas en la zona del parque central y el sector controlado por la Policía Nacional.⁷³⁴ Dos fuentes entrevistadas por el GHREN afirmaron haber sido testigos de los hechos que llevaron a la muerte de la víctima del 9 de junio.⁷³⁵ Una de ellas relató que la víctima estaba buscando a su hijo, quien participaba en la protesta. Fue a buscarlo “*se asomó a la esquina pensando de ver a su hijo y el francotirador lo vio y le tiró un tiro en el pecho*”.⁷³⁶

En la nota de prensa de la Policía Nacional del 10 de junio de 2018, se reportó que en la tarde del 9 de junio, en el costado oeste del parque central de Masaya, un “grupo delincencial de encapuchados, con armas de fuego, morteros y bombas molotov, incendiaron el Restaurante

⁷³⁰ Entrevista del GHREN DDIV027.

⁷³¹ Documento en el archivo del GHREN DDDOC043.

⁷³² Entrevista del GHREN DDIV028.

⁷³³ Documento en el archivo del GHREN DDDOC044.

⁷³⁴ Véase Confidencial, “Masaya resiste con 200 barricadas: el símbolo de la protesta nacional”, 11 de junio de 2018, min. 6:13–7:35, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=PzZXLNKSksw>.

⁷³⁵ Entrevistas del GHREN DDIV028; DDIV045.

⁷³⁶ Entrevista del GHREN DDIV028.

Nicafé” y que en eso resultó fallecida una persona por impacto de bala en el tórax.⁷³⁷ El lugar de la muerte de la víctima de acuerdo con el comunicado no coincide con los testimonios de los testigos oculares entrevistados por el GHREN. Además, ambos confirmaron que la muerte no estaba relacionada con actos vandálicos.⁷³⁸ En la misma nota de prensa se reportó que en el sector Sur y Norte de la Delegación Policial Departamental de Masaya, “*Grupo de sujetos encapuchados, con armas de fuego, morteros y bombas molotov, quienes mantienen tranques en la ciudad, asediaron y atacaron durante todo el día y la noche, las instalaciones, lesionando a tres compañeros policías*”.⁷³⁹

En la madrugada del 19 de junio, elementos de la DOEP de la Policía Nacional realizaron un operativo para ejecutar la extracción del Comisionado Avellán, quien permanecía en el cuartel de la Policía Nacional de Masaya desde el 2 de junio.⁷⁴⁰ Para poder ingresar a Masaya, era necesario previamente desarmar el tranque Ticuantepé, en el km 14 de la carretera Managua–Masaya, el cual, de acuerdo con evidencias audiovisuales, fue atacado por elementos de la Policía Nacional y grupos armados pro-gobierno vestidos con camisa blanca, alrededor de las 5 de la mañana.⁷⁴¹

Evidencia audiovisual muestra a elementos del Grupo de Intervención Rápida (GIR) de la Policía Nacional disparando con armas AK47 en las calles de Masaya.⁷⁴² Al menos tres personas fallecieron durante este operativo⁷⁴³ y una cuarta fue herida en el cráneo y falleció el 16 de septiembre de 2018, a consecuencia de las lesiones sufridas durante el operativo.⁷⁴⁴ En nota de prensa de aquel día, la Policía Nacional no hizo mención de los hechos y reportó en su lugar que “Grupos delincuenciales, con armas de fuego, artesanales y morteros” habrían estado saqueando las instalaciones de la sede del Consejo Electoral Departamental del municipio de Masaya.⁷⁴⁵

A partir del operativo del 19 de junio, la Policía Nacional recuperó control de la zona norte de Masaya, desarmando las barricadas con el uso de palas mecánicas. A raíz de esto, las personas manifestantes se concentraron en Monimbó. Para entonces la Policía Nacional mantenía el patrullaje en el tramo de la carretera de Nindirí hasta el empalme de Las Flores.⁷⁴⁶ Asimismo, se impuso un toque de queda de facto a las 6 de la tarde en la zona norte de la ciudad. Personas vestidas con jeans, botas, camisas azules o celeste, usando pasamontañas y

⁷³⁷ Policía Nacional, Nota de Prensa No. 49-2018, 10 de junio de 2018, disponible en: <https://www.policia.gob.ni/?p=19436>, en el archivo del GHREN DDDOC161.

⁷³⁸ Entrevista del GHREN DDIV043.

⁷³⁹ Policía Nacional de Nicaragua, Nota de Prensa No. 49-2018 (Managua, 10 de junio de 2018) en el archivo del GHREN DDDOC161.

⁷⁴⁰ Entrevista del GHREN DDIV013. Véase 100% Noticias, “La operación de extracción del comisionado Avellán en Masaya”, 22 de junio de 2018, disponible en: <https://www.facebook.com/NOTICIAS-12-NICARAGUA-200823376627607/videos/la-operaci%C3%B3n-de-extracci%C3%B3n-del-comisionado-avell%C3%A1n-en-masaya-quien-llevaba-m%C3%A1s-d/1836978309678764/>; La Prensa, “Operativo de la Policía para sacar al comisionado Ramón Avellán deja seis muertos en Masaya”, 19 de junio de 2018, disponible en: <https://www.laprensani.com/2018/06/19/nacionales/2437705-operacion-sangrienta-ramon-avellan-de-masaya>.

⁷⁴¹ Canal 10 Nicaragua, “Grupos paramilitares desmontaron tranques en la entrada a Ticuantepé”, 19 de junio de 2018, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=GM2iI3pvlG>; Artículo 66, “Después de atacar el tranque de Ticuantepé, los paramilitares armados mantienen control de ese sitio”, 19 de junio de 2018, disponible en: <https://www.facebook.com/Articulo66/videos/despu%C3%A9s-de-atacar-el-tranque-de-ticuantep%C3%A9-los-paramilitares-armados-mantienen-c/1759291907473315/>.

⁷⁴² Véase: <https://twitter.com/LoboMY/status/1141218399764328448>; <https://twitter.com/LoboMY/status/1141233159130030080>. De acuerdo con los testigos oculares entrevistados por el GHREN, no hubo presencia de sujetos no uniformados en la ejecución de esta operación en la ciudad de Masaya. Entrevistas del GHREN DDIV027, DDIV013.

⁷⁴³ Documentos en el archivo del GHREN DDDOC334, DDDOC047; DDDOC049.

⁷⁴⁴ Testimonio original recabado por CPDH en el archivo del GHREN DDDOC308; documentos en el archivo del GHREN DDDOC305, DDDOC307.

⁷⁴⁵ Policía Nacional de Nicaragua, Nota de Prensa No. 69-2018 (Managua, 19 de junio de 2018), disponible en: <https://www.policia.gob.ni/?p=19566>, en el archivo del GHREN DDDOC164.

⁷⁴⁶ Entrevista del GHREN DDIV027.

portando armas largas, hacían rondas en camionetas. Si veían a alguna persona en la calle, se la llevaban detenida⁷⁴⁷

De acuerdo con la lista de la CIDH, el 21 de junio se reportaron otros tres fallecimientos en el departamento de Masaya, mientras que la CVJP solo reconoció dos. Las dos víctimas que coinciden en los dos registros habrían muerto por heridas de arma de fuego, en el sector de los Tranques de Mebasa. El GHREN recibió información que una de las víctimas no estaba involucrada en la protesta; sin embargo, el Grupo de Expertos no pudo comprobar si estas muertes ocurrieron en la ciudad o en los tranques a las afueras de la misma, ni el nivel de vinculación con el contexto de la represión.

El 23 de junio de 2018, una trabajadora de la Alcaldía fue alcanzada por una bala en el cuello al salir del cementerio, zona en la que se estaba dando un enfrentamiento entre personas manifestantes y elementos de la policía nacional. El hecho fue reportado en una nota de prensa de la Policía Nacional, donde se alega que la víctima habría muerto por impacto de bala tras un ataque de un grupo de sujetos encapuchados con armas de fuego, mientras realizaba labores de limpieza en el Barrio Ulises Tapia Roa, del Cuerpo de bomberos 3 cuadras al oeste.⁷⁴⁸

De acuerdo con testimonios y fuentes periodísticas,⁷⁴⁹ el 15 de julio ocurrió el fallecimiento de un teniente de la Unidad de Inspecciones de Antinarcóticos de la Policía Nacional, ocurrido según fuentes oficiales en el empalme Las Flores, carretera a Catarina.⁷⁵⁰ Para este día tanto la CVJP como la CIDH registraron cuatro fallecimientos en el departamento, información que queda pendiente corroborar.

El 17 de julio de 2018 tuvo lugar un operativo en el barrio de Monimbó, que terminó con las barricadas y con la protesta social en la ciudad de Masaya. Los testimonios y fuentes abiertas coinciden en la presencia de un número muy alto de efectivos de fuerzas especiales de la Policía Nacional y de grupos pro-gobierno militarizados. Estos últimos estaban encapuchados, vestían camisa azul, y algunos portaban una pañoleta roja y negra.⁷⁵¹ Un video grabado por un ciudadano desde la ventana de una casa habitación muestra el tránsito de siete camionetas con sujetos vestidos con camisas azules y portando armas largas. La voz en la grabación indica que eso estaba ocurriendo a las 6 de la mañana y que los vehículos se dirigían hacia Las 7 esquinas, un cruce que queda a dos cuadras al norte de la Plaza Central de Masaya.⁷⁵² Otro video muestra varias camionetas con sujetos vestidos de azul y una ambulancia del MINSa, entrando a Masaya.⁷⁵³

El ataque se dio desde la madrugada y desde todos los flancos de entrada al barrio de Monimbó. En medios sociales se reportó a las 6.44 de la mañana “fuerte presencia paramilitar en Tranques de Membasa, el Rúnel, Nindirí y estación policial y en Camino Viejo a Niquinomo. Los 4 puntos cardinales de Monimbó rodeados. Hoy el color de los paramilitares es azul”.⁷⁵⁴ A las 6.57 se reportaron “grupos militarizados” en camisa azul en el Camino Viejo a Santa Catarina.⁷⁵⁵ Un testigo relató al GHREN: “los muchachos nos comunicaron ese 17 de julio que estaban atacando a Monimbó por distintos lados [...] rodearon a Monimbó [...]

⁷⁴⁷ Entrevista del GHREN DDIV013.

⁷⁴⁸ Policía Nacional de Nicaragua, Nota de Prensa No.72-2018 (Managua, 23 de junio de 2018), disponible en: <https://www.policia.gob.ni/?p=19653>, en el archivo del GHREN DDDOC067.

⁷⁴⁹ Confidencial, “La resistencia de Masaya y la Operación Limpieza que masacró a Monimbó”, 24 de julio de 2019, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=NtjEg3jcefg>.

⁷⁵⁰ Policía Nacional de Nicaragua, “Teniente Gabriel de Jesús Vado, ¿presente, presente!”, 15 de julio de 2019, disponible en: <https://www.policia.gob.ni/?p=35160>.

⁷⁵¹ Entrevista del GHREN DDIV044; material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC056; DDDOC147; DDDOC148; DDDOC149; DDDOC150; DDDOC313.

⁷⁵² Véase Llegada de los paramilitares llegando a Masaya, 17 de julio de 2018, disponible en: <https://www.facebook.com/Mov19AOficial/videos/llegada-de-los-paramilitares-llegando-a-a-masaya/402562023600775/>.

⁷⁵³ Material audiovisual en el archivo del GHREN DDDOC292.

⁷⁵⁴ Véase <https://twitter.com/brujamistica/status/1019201417255538688>; material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC293, DDDOC289, DDDOC289.;

⁷⁵⁵ Material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC321.

totalmente ese día”.⁷⁵⁶ Otro testigo refirió que a las 5 de la mañana se despertó al oír disparos y que al tratar de identificar la dirección de donde venían, entendió que estaban rodeados.⁷⁵⁷

Elementos de la DOEP y grupos armados pro-gobierno militarizados participaron en el operativo de manera conjunta y coordinada.⁷⁵⁸ Material fotográfico muestra a elementos de los grupos pro-gobierno apuntando armas en contra de civiles y realizando detenciones.⁷⁵⁹ Una foto de ese día muestra al Comisionado Ramón Avellán junto a dos personas vestidas de camisa azul, una de ellas portando una escopeta calibre 12.⁷⁶⁰ Detrás de los elementos de la policía y los grupos pro-gobierno había palas mecánicas que iban desarmando las barricadas.⁷⁶¹ Un testigo refirió al GHREN que el operativo terminó alrededor de la 1 de la tarde cuando las fuerzas de seguridad habían tomado el control de la zona.⁷⁶² Material fotográfico y audiovisual evidenció el uso por parte de elementos de las fuerzas especiales de la policía nacional de fusiles de asalto como AK47 y Galil; ametralladoras PKM y lanzacohetes RPG-7; Dragunov y 308, ambas armas de francotirador.⁷⁶³ Por parte de los grupos pro-gobierno militarizados se evidenció el uso escopetas, AK47, M16 Y M16-A1 y en un caso de un fusil Dragunov.⁷⁶⁴ El GHREN accedió a material fotográfico de casquillos recuperados tras la operación:⁷⁶⁵ según observación de un experto consultado por el GHREN, hay una alta probabilidad de que se trate de municiones calibre 5,56, las cuales coinciden con las armas M16A1, identificadas en la evidencia fotográfica.⁷⁶⁶

La CIDH contabilizó cinco personas fallecidas durante este operativo, entre las que se encuentra un elemento de la Policía Nacional.⁷⁶⁷ El oficial de la Policía Nacional tenía de 24 años y el dictamen médico legal realizado por el IML indica que la causa de la muerte fue herida por proyectil de arma de fuego craneo facial.⁷⁶⁸

En nota de prensa del 17 de julio, la Policía Nacional informó que ese mismo día *“aproximadamente a las 07:00 de la mañana, en el barrio Países Bajos, ciudad de Masaya, fuerzas policiales que realizaban labores de restablecimiento del orden público, para traer la paz, seguridad y tranquilidad, fueron atacadas por grupos de terroristas con armas de fuego, que desde hace 82 días mantenían secuestrada a la población con tranques en Monimbó y barrios aledaños, en los que cometían asesinatos, secuestros, torturas, asaltos, extorsiones, incendios y amenazas, causando terror y zozobra en los habitantes”*.⁷⁶⁹ La misma nota informa del fallecimiento del elemento de la policía, responsabilizando a *“terroristas armados”* del mismo.

⁷⁵⁶ Entrevista del GHREN DDIV045.

⁷⁵⁷ Entrevista del GHREN DDIV027.

⁷⁵⁸ Véase <https://twitter.com/CIDH/status/1151886465900658688>; material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC056; DDDOC298.

⁷⁵⁹ Material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC105; DDDOC312.

⁷⁶⁰ Material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC304.

⁷⁶¹ Entrevistas del GHREN DDIV004; DDDIV022; DDIV044; material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC296; DDDOC314.

⁷⁶² Entrevista del GHREN DDDIV022.

⁷⁶³ Amnistía Internacional, *Sembrando el terror*, pp. 19 y 20; material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC056, IIDOC009, IIDOC010, IIDOC011, IIDOC013, IIDOC062, IIDOC063, IIDOC064.

⁷⁶⁴ Material fotográfico en el archivo del GHREN IIDOC003, IIDOC057, IIDON058, IIDOC005, IIDOC056, DDDOC298, IIDOC023. Véase: <https://www.facebook.com/watch/?v=10156621225463724>, en el archivo del GHREN IIDOC006.

⁷⁶⁵ Material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC061.

⁷⁶⁶ Material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC055; entrevista del GHREN DDIV050.

⁷⁶⁷ La CVJP solamente registró tres muertes, por no encontrar inscripción en el padrón electoral de dos de las víctimas registradas por la CIDH. CVJP, Cuarto Informe.

⁷⁶⁸ Poder Judicial, Dirección General de Comunicación, *“Ingresan fallecidos por diversas causas al IML”*, 18 de julio de 2018, disponible en: https://www.poderjudicial.gob.ni/prensa/notas_prensa_imprimir.asp?id_noticia=8895, en el archivo del GHREN DDDOC166.

⁷⁶⁹ Policía Nacional de Nicaragua, Nota de Prensa No. 88-2018 (Managua, 17 de julio de 2018), disponible en: <https://www.policia.gob.ni/?p=20249>, en el archivo del GHREN DDDOC100. El GHREN no encontró otro documento de la Policía Nacional que informara sobre los hechos del 17 de julio de 2018 en Masaya y las personas civiles que resultaron fallecidas.

Testimonios y fuentes abiertas reportaron que el día 18 de julio elementos de la DOEP y grupos armados pro-gobierno mantuvieron presencia en la ciudad de Masaya, patrullando y ocupando el espacio público.⁷⁷⁰ Evidencia audiovisual y fotográfica da cuenta de sujetos civiles vestidos con camisa azul y encapuchados en posesión de armas de alto calibre, desplazándose en camionetas.⁷⁷¹

La prensa oficialista celebró la operación como liberación de la ciudad y sus ciudadanos del secuestro realizado por parte de terroristas financiados por la derecha golpista.⁷⁷²

Caso 2: Ataque UNAN Managua e Iglesia Divina Misericordia

En el marco de la protesta social, a partir del 7 de mayo de 2018, personas manifestantes, incluyendo estudiantes, tomaron las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) en Managua. Las personas manifestantes establecieron su centro de operaciones en la sede del Instituto de Geología y Geofísica (IGG-CIGEO/UNAN-Managua) en la parte noreste del recinto universitario.⁷⁷³ Se organizaron a través de la conformación de grupos, coordinados entre sí, cada uno responsable de uno de los seis portones del recinto.⁷⁷⁴ Las personas a cargo de los portones quinto y sexto, también estaban a cargo de barricadas que fueron levantadas a partir del 8 de mayo, con el fin de proteger a las personas manifestantes.⁷⁷⁵

El 10 de julio de 2018, los coordinadores de los portones comenzaron a reunirse con un grupo de la Comisión de Verificación y Seguridad (CVS), ya que éstos habían recibido información de que se estaba planeando un ataque contra la UNAN como el que había sido ejecutado en Carazo dos días antes.⁷⁷⁶ A la luz de los riesgos inherentes al posible ataque para las personas manifestantes, el diálogo se enfocó en la planificación de una salida de la universidad en condiciones de seguridad y garantías. A estas alturas, muchos de las y los estudiantes que estaban en la UNAN, se encontraban cansados y con miedo debido a los frecuentes ataques,⁷⁷⁷ pero no podían regresar a sus casas por temor a las posibles represalias tanto a sus familias como a ellos mismos.⁷⁷⁸

Al día siguiente, se llevó a cabo una segunda reunión, en la que participaron el coordinador de la CVS y un representante de la Iglesia Católica. En ésta, se habría acordado la preparación de una carta en donde las y los estudiantes comunicaban la intención de salir pacíficamente del recinto académico y las condiciones requeridas para ello, incluyendo garantías de seguridad en términos de medidas cautelares otorgadas por organismos internacionales de derechos humanos, y garantías de no represalia ni persecución en contra de quienes apoyaron a los estudiantes durante la toma de la UNAN Managua, así como de sus familiares.⁷⁷⁹ En la carta se solicitaba que la entrega de la universidad se hiciera en presencia de una comisión

⁷⁷⁰ Entrevistas del GHREN DDIV004, DDIV022; material fotográfico y audiovisual en el archivo del GHREN IIDOC062, IIDOC063, DDDOC172, DDDOC103, DDDOC104.

⁷⁷¹ AFP Español, “Masaya vigilada tras toma de control por gobierno de Nicaragua”, 18 de julio de 2018, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=Jyl0A0dM5N8>; Agencia EFE, “Gobierno de Nicaragua celebra toma de Masaya”, 18 de julio de 2018, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=olDJybOjyw4>; Ap Archive, “Grupos paramilitares controlan calles en Masaya, Nicaragua”, 24 de julio de 2018, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=rxHO5SnNilg>; material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC055, DDDOC150, DDDOC102.

⁷⁷² El 19 Digital, “Monimbó, Masaya Territorio Liberado”, 17 de julio de 2018, disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79150-monimbo-masaya-territorio-liberado->; material audiovisual en el archivo del GHREN IIDOC006.

⁷⁷³ Entrevista del GHREN DDIV033; fotografías en el archivo del GHREN DDDOC032; DDDOC033.

⁷⁷⁴ Entrevista del GHREN DDIV036.

⁷⁷⁵ Entrevistas del GHREN DDIV036, DDIV47; fotografías en archivo del GHREN DDDOC348, DDDOC349, DDDOC350.

⁷⁷⁶ Entrevistas del GHREN DDIV033, DDIV036.

⁷⁷⁷ Entrevistas del GHREN DDIV036, DDIV047, DDIV052.

⁷⁷⁸ Entrevistas del GHREN DDIV036, DDIV047, DDIV052.

⁷⁷⁹ Entrevista del GHREN DDIV033.

de fiscalización y de organizaciones de derechos humanos y que fuera grabada por el Canal Católico, para que dieran fe de que la universidad se estaba entregando en buen estado.⁷⁸⁰

La carta estaba dirigida al coordinador de la CVS, quien habría transmitido la misiva al Gobierno a través del canal de comunicación que, acorde a las fuentes consultadas, constaba de contactos directos con la Vicepresidenta Rosario Murillo y otros en su Gobierno.

El día 13 de julio alrededor de las 11.00 a.m., antes de que la carta pudiera ser enviada,⁷⁸¹ las personas al interior del recinto universitario empezaron a escuchar tiros de armas de fuego aislados en el costado norte, desde la suburbana, en proximidad del portón 6 de la UNAN.⁷⁸² Se informó de ello al coordinador de la CVS, reiterando que las y los estudiantes estaban formalizando su intención de dejar las instalaciones de la universidad. La respuesta que llegó del canal de comunicación con el Poder Ejecutivo era que se trataba probablemente de simpatizantes del gobierno que estaban celebrando el repliegue y que no se trataba de un ataque a la UNAN.⁷⁸³

A las 12 del medio día, los disparos se intensificaron, dirigiéndose directamente en contra de las barricadas ubicadas en la rotonda universitaria. En material audiovisual⁷⁸⁴ el GHREN pudo observar un grupo armado disparando con armas de fuego desde dos barricadas ubicadas en la pista de la UNAN a la altura del edificio de Axis distribuidores SA.⁷⁸⁵ Uno de los sujetos está disparando con una M16 A1, un fusil de asalto calibre 5.56 de gran precisión y alcance y se aprecia un cargador de bala de tambor con capacidad de hasta 75 balas.⁷⁸⁶ Testimonios recabados por el GHREN y por fuentes abiertas relatan la desesperación y miedo de las y los estudiantes en la barricada de la rotonda que quedaron horas bajo el fuego sin poder resguardarse.⁷⁸⁷

La comunicación con la CVS fue constante y a través de ésta las personas manifestantes informaban del ataque y solicitaban ordenar un cese el fuego para que pudieran evacuar la universidad en condiciones de seguridad.⁷⁸⁸ Se les respondía que eran las y los estudiantes los que estaban atacando y que tenían que replegarse, lo cual se hacía imposible bajo la balacera.⁷⁸⁹ Las y los estudiantes se coordinaron para evacuar el recinto universitario de manera segura, trasladando a las y los que estaban en la zona bajo ataque con el camión de la basura y organizándose con ciudadanos para la salida definitiva a la universidad.⁷⁹⁰ Mientras, en la barricada en la rotonda universitaria los estudiantes resistían el ataque con morteros, piedras y unas botellas que, según los testimonios recibidos por el GHREN, se usaron solo de manera defensiva.⁷⁹¹

Antes de que las salidas se volvieran inaccesibles sobre las 3:00–3:30 p.m., muchos estudiantes lograron salir del recinto universitario por la puerta número cinco, gracias al apoyo ciudadano, para ser trasladados a casas de seguridad.⁷⁹²

A esta altura del ataque, varias personas fueron heridas por arma de fuego: la mayoría de ellas lograron ser evacuadas, con excepción de cuatro que quedaron atrapadas en el recinto

⁷⁸⁰ Documento en el archivo del GHREN DDDOC012.

⁷⁸¹ Entrevista del GHREN DDIV033.

⁷⁸² Entrevista del GHREN DDIV033.

⁷⁸³ Entrevista del GHREN DDIV033.

⁷⁸⁴ 100% Noticias, “De esta forma paramilitares atacan en UNAN-Managua”, 13 de julio de 2018, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=4ds9H5zYK70>.

⁷⁸⁵ Véase <https://goo.gl/maps/zn9BYEztkaxb7VXZ9>.

⁷⁸⁶ Confidencial, “Reporte de noticias | El arsenal de guerra usado por Daniel Ortega para reprimir”, 12 de febrero de 2019 (min. 0:53), disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=G2RC1GM-O5c&t=58s>; Bellingcat, “Análisis del Arsenal de los Paramilitares Nicaragüenses”, 12 de febrero de 2019, disponible en: <https://es.bellingcat.com/noticias/america/2019/02/12/analisis-del-arsenal-de-los-paramilitares-nicaraguenses/>.

⁷⁸⁷ Entrevista del GHREN DDIV033. El Nuevo Diario, “Ataques a la UNAN continúan y estudiantes piden ayuda”, 13 de julio, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=oebtmoHu7o0>.

⁷⁸⁸ Entrevista del GHREN DDIV033.

⁷⁸⁹ *Ibid.*

⁷⁹⁰ Entrevista del GHREN DDIV036. Véase <https://twitter.com/i/status/1017905756232962048>.

⁷⁹¹ Entrevistas del GHREN DDIV033, DDIV036, DDIV011.

⁷⁹² Entrevista del GHREN DDIV036.

universitario y luego en la iglesia de la Divina Misericordia hasta que se logró la negociación para su evacuación a las 10.30 de la noche.⁷⁹³

Nunca cesó el fuego, las personas manifestantes que estaban atrás de la barricada se replegaron como pudieron, arrastrándose hasta el recinto universitario,⁷⁹⁴ “*los muchachos empezaron a desplegarse dentro de la universidad, escondidos, arrastrándose. Yo escuchaba cada vez las balas más cerca. Estaba en un edificio que tiene un patio en el centro y las balas pegaban encima del concreto, pasaban arriba de mi cabeza y se nos caían encima pedazos de concreto*”.⁷⁹⁵ En el repliegue, un grupo de estudiantes se habría refugiado en lo que llaman “el monte”, la parte verde del recinto universitario que por falta de mantenimiento tenía pasto alto y brindaba ocasión para esconderse.⁷⁹⁶

Al replegarse las y los estudiantes, los sujetos que estaban atacando entraron en las instalaciones y quemaron el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Arlen Siu, el cual funcionaba como kínder.⁷⁹⁷ La versión dada por el secretario General de la UNAN Managua y difundida por los medios oficialistas responsabilizan del hecho a las y los estudiantes, tildados de “terroristas”.⁷⁹⁸

Unos doscientos estudiantes, de los cuales 40 eran mujeres, buscaron refugio con el padre Raúl Zamora en la Iglesia de la Divina Misericordia.⁷⁹⁹ Llevaron consigo los instrumentos de primer auxilio que aún tenían almacenados.⁸⁰⁰ Aproximadamente 15 estudiantes se quedaron atrás de las barricadas en las inmediaciones de la iglesia, en la pista Jean Paul Genie.⁸⁰¹

La iglesia también se convirtió en el blanco de ataque y estuvo bajo balas de armas de alto calibre, como se evidencia de la observación de los profundos hoyos en las paredes del edificio,⁸⁰² así como de las ojivas recolectadas en su interior.⁸⁰³ Análisis de las evidencias fotográficas realizado por un experto refiere que se usaron armas calibre 5,56 y calibre 9mm.⁸⁰⁴

Los testimonios al GHREN relatan que las “balas” llegaban de todas partes, en particular desde el techo del edificio de Claro, a unos 45 metros al norte de la iglesia de la Divina Misericordia; desde la pista Jean Paul Genie en dirección este y desde el lado sur la calle perpendicular a ésta que divide el parque Villa Fontana de la propiedad eclesiástica. Las personas manifestantes usaron los bancos y mesas de la iglesia para protegerse de las balas que a través de los vitrales impactaban dentro del edificio.⁸⁰⁵ Los relatos coinciden con que los disparos fueron sostenidos y constantes, tras interrumpirse en algunos momentos por unos pocos segundos.⁸⁰⁶

⁷⁹³ Entrevista del GHREN DDIV033.

⁷⁹⁴ Material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC353.

⁷⁹⁵ Entrevista del GHREN DDIV033.

⁷⁹⁶ Entrevista del GHREN DDIV033.

⁷⁹⁷ Entrevistas del GHREN DDIV033; DDIV052.

⁷⁹⁸ El 19 Digital, “Terroristas atrincherados en la UNAN queman instalaciones de esta Alma Mater”, 13 de julio de 2018, disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79021-terroristas-atrincherados-en-la-unan-queman-instalaciones-de-esta-alma-mater>; <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79021-terroristas-atrincherados-en-la-unan-queman-instalaciones-de-esta-alma-mater>.

⁷⁹⁹ Entrevista del GHREN DDIV036. Entrevista a sacerdote en Reportaje Nicaragua Investiga, en el archivo del GHREN IIDOC014.

⁸⁰⁰ Entrevista del GHREN DDIV033.

⁸⁰¹ Entrevista del GHREN DDIV052.

⁸⁰² La Prensa, “Así quedó la parroquia Divina Misericordia tras el ataque de paramilitares”, 15 de julio de 2018, disponible en: <https://www.laprensani.com/2018/07/15/imagenes/2449201-asi-queda-la-parroquia-divina-misericordia-tras-el-ataque-de-paramilitares>; material fotográfico en el archivo del GHREN CCDOC233, CCDOC234, CCDOC235.

⁸⁰³ Material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC328.

⁸⁰⁴ Material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC062; entrevista del GHREN DDIV050.

⁸⁰⁵ Material fotográfico en el archivo del GHREN CCDOC202, CCDOC203, CCDOC204, CCDOC205, CCDOC206, CCDOC207, CCDOC210, CCDOC211, CCDOC212, CCDOC225, CCDOC229, CCDOC194, CCDOC218, CCDOC221, DDCOD224, CCDOC231, CCDOC236, CCDOC239.

⁸⁰⁶ Entrevistas del GHREN DDIV033, DDIV036, DDIV052.

Los testimonios y relatos publicados en los medios coinciden en que había más de doscientas personas refugiadas en la Iglesia, entre las cuales estaban dos sacerdotes y dos periodistas.⁸⁰⁷ En videos grabados por las personas en la iglesia y difundidos por las mismas en la red se escuchan disparos y el terror que estaban experimentando los jóvenes que se habían refugiado en la iglesia.⁸⁰⁸ Al anochecer, las y los estudiantes se dieron cuenta de que la electricidad había sido cortada hasta que dentro y afuera de la iglesia la oscuridad fue absoluta.⁸⁰⁹

A través del canal del CVS se seguía solicitando que se cesara el fuego y se permitiera la salida de las y los jóvenes para garantizar su integridad. El Gobierno continuó alegando que eran las personas manifestantes quienes estaban atacando y se les solicitó dejar las armas. Todos los testimonios recabados coinciden en que no había armas en la iglesia, sino algunos morteros.⁸¹⁰ Los intentos constantes de negociación lograron que dejaran entrar dos ambulancias para trasladar a las cuatro personas heridas y evacuar a dos periodistas extranjeros que se encontraban con las y los estudiantes desde que empezó el ataque. La negociación fue encabezada por el CEN y también hubo presión internacional, gracias a los mensajes difundidos por las personas manifestantes y los periodistas presente y por la cobertura mediática.⁸¹¹ El Secretario General de la OEA hizo un llamado a que se detuviera el ataque cuando éste aún se dirigía contra la UNAN.⁸¹²

A las 10:30 p.m. se detuvieron los disparos y se abrió el cerco para que ingresaran las dos ambulancias y un vehículo. Éstos tuvieron que detenerse a dos cuadras de la iglesia. En un video entregado al GHREN se observa la entrada en la ambulancia de los heridos, en un ambiente de total oscuridad.⁸¹³ Estas transportaron a cuatro personas que fueron heridas unas 12 horas antes y no tuvieron acceso a atención médica.⁸¹⁴

Tras la salida de las ambulancias se reinició el ataque con la misma intensidad: “En toda la noche hubo heridos, lastimados, desvanecidos, cortaron la electricidad, estábamos en tinieblas, a las 2 de la mañana empezó otra rafagueada, disparaban todo el tiempo pero había momentos que agarraban de ametralladora. Lanzaron también un fuego de bengala que pegó a un mantel que prendió fuego, pero los chavalos lograron mitigarlo a tiempo. Hasta de los botes de los floreros para mitigar el incendio”.⁸¹⁵

En el ataque dos personas fallecieron por impacto de arma de fuego en cráneo.

En la mañana del 14 de julio, las negociaciones resultaron en la evacuación de las y los estudiantes y en su traslado a la Catedral de Managua. Alrededor de las 6:30 a.m. las y los manifestantes fueron reagrupados fuera de la casa cural, donde los negociadores les

⁸⁰⁷ BBC News Mundo, “Nicaragua: cómo fue vivir más de 15 horas bajo el asedio de fuerzas paramilitares en una iglesia llena de estudiantes”, 15 de julio de 2018, disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44836156>; La Mesa Redonda, “En Divina Misericordia, fuerza paramilitar disparaba a matar”, 13 de julio de 2020, disponible en: <https://www.lamesaredonda.net/en-divina-misericordia-fuerza-paramilitar-disparaba-a-matar/>.

⁸⁰⁸ Material audiovisual en el archivo GHREN DDDOC346, DDDOC325, DDDOC326, DDDOC327

⁸⁰⁹ Entrevistas del GHREN DDIV033, DDIV036, DDIV052.

⁸¹⁰ Entrevistas del GHREN DDIV033, DDIV036, DDIV052.

⁸¹¹ Véase: La Prensa, “Estudiantes de la UNAN Managua siguen cercados por los paramilitares en la Iglesia Divina Misericordia”, 13 de julio de 2018, disponible en: [https://www.laprensani.com/2018/07/13/nacionales/2448522-un-estudiante-herido-en-ataque-la-unan-managua](https://www.laprensani.com/2018/07/13/nacionales/2448522-un-estudiante-herido-en-ataque-la-unan-managua;);

https://twitter.com/partlowj/status/1017960349914554368?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eetweetembed%7Ctwtterm%5E1017960349914554368%7Ctwgr%5E3db2b400dbfcfb6b33caf15c94d01c4e67de481f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F

https://twitter.com/silviojbaez/status/1017921357131206656?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eetweetembed%7Ctwtterm%5E1017921357131206656%7Ctwgr%5E3db2b400dbfcfb6b33caf15c94d01c

⁸¹² Véase: Luis Almagro on Twitter: "Solicitamos que se detenga el ataque a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua @UNANManagua y se proteja la vida de los estudiantes. Es inadmisibles el uso de la fuerza contra la Universidad. Cualquier desalojo a la Universidad debe de ser negociado @OEA_oficial <https://t.co/HLMrFI6fFn>" / Twitter

⁸¹³ Material audiovisual en el archivo del GHREN DDDOC355.

⁸¹⁴ Entrevista del GHREN DDIV033.

⁸¹⁵ Entrevista del GHREN DDIV036.

comunicaron las condiciones marcadas por el Gobierno para la salida.⁸¹⁶ Éstas preveían el total desarme de las y los estudiantes, los cuales, según los testigos, no tenían para entregar más que unos morteros.⁸¹⁷ Las ambulancias que transportaban los cuerpos de las dos víctimas fatales debieron esperar a la salida de los demás vehículos. Mujeres y hombres tenían que salir por separado, ocupando un microbús y dos buses respectivamente. Los tres vehículos salieron entre las 8 y 8:30 a.m.; llevaban las ventanillas bajadas y las y los estudiantes tenían que mantener el rostro descubierto.⁸¹⁸ Un cordón policial bloqueó el paso desde el cruce a la altura del Club Terraza. Se observa presencia de elementos de la Policía Nacional en las inmediaciones de Iglesia.⁸¹⁹

Tras el ataque, medios oficialistas difundieron fotos de armas alegando que se habían encontrado en el recinto de la UNAN y que habrían sido usadas por las y los estudiantes ahí atrincherados, para ejecutar actos de vandalismo incluso fuera del mismo.⁸²⁰ En estas fotos, se aprecian dispositivos de fabricación casera y cinco armas de fuego, tres escopetas, un revolver y una AK47. El mismo artículo alega que *“los sujetos fueron descubiertos cuando atacaron la caravana por el Repliegue de la Paz realizada en el país, justo cuando se disponía a abandonar las inmediaciones de la UNAN Managua y dejaron nueve heridos”*.⁸²¹

La Policía Nacional informó que *“grupos terroristas armados, que mantenían secuestrada el recinto Universitario Rubén Darío UNAN–Managua, desde hace 45 días, ocupándolo como centro de torturas, desde este lugar salían en vehículos y motocicletas a cometer asesinatos, robos con intimidación, incendios, ataques armados a sedes y vehículos diplomáticos, secuestros y graves alteraciones al orden público, manteniendo amenazados, aterrorizados y en zozobra a los habitantes de ese sector. La Policía Nacional tuvo conocimiento de dos personas fallecidas en tranques con sujetos armados, alrededores de UNAN–Managua [...] ambos fallecidos por impacto de arma de fuego, miembros de estos grupos terroristas”*.⁸²²

B. Violaciones sistemáticas de otros derechos civiles y políticos

440. Los ataques al pluralismo cívico y político en Nicaragua se han acelerado y agudizado desde abril de 2018. El conjunto de información analizada por el GHREN evidencia que el Gobierno de Nicaragua implementó una serie de medidas legales y fácticas orientadas a la supresión de toda crítica u oposición.⁸²³ Dichas medidas se aplicaron de manera sistemática y generalizada en contra de las personas consideradas como opositoras o críticas del Gobierno.

441. A través de estrategias represivas que se han ido sofisticando con el transcurso del tiempo, el Gobierno ha provocado el cierre del espacio cívico y democrático, no solamente a las personas integrantes de la oposición política y de los movimientos sociales, sino a todas las personas que expresan críticas o posturas diferentes a su línea política, quienes son percibidas y tratadas como una potencial amenaza al control del Gobierno sobre el poder del Estado.

442. El GHREN investigó 102 casos de graves violaciones y abusos a los derechos civiles y políticos, e identificó los principales patrones, permitiendo constatar que el Gobierno

⁸¹⁶ Material audiovisual en el archivo del GHREN DDDOC345.

⁸¹⁷ Entrevistas del GHREN DDIV033, DDIV036.

⁸¹⁸ Entrevistas del GHREN DDIV033; DDIV036; DDIV052.

⁸¹⁹ La Nación, “Estudiantes vivieron noche de horror en ataque de las fuerzas de Daniel Ortega contra iglesia en Nicaragua”, 14 de julio de 2018 (min. 00.50), disponible en, <https://www.nacion.com/el-mundo/politica/estudiantes-vivieron-noche-de-horror-en-ataque-de/26F7SAZTQBB2RP6RI4IRVXUPGM/story/>; material fotográfico en el archivo del GHREN DDDOC339, DDDOC357, DDDOC359, DDDOC360.

⁸²⁰ TeleSurtv, “Hallan armas en una universidad de Nicaragua”, 14 de julio de 2018”, disponible en: <https://www.telesurtv.net/news/hallan-armamentos-universidad-managua-nicaragua--20180714-0028.html>.

⁸²¹ *Ibid.*

⁸²² Policía Nacional de Nicaragua, Nota de Prensa No. 86-2018 (Managua, 16 de julio de 2018), disponible en: <https://www.policia.gob.ni/?p=19993>, en el archivo del GHREN DDDOC098.

⁸²³ Material testimonial, documental, fotográfico y videográfico en el archivo del GHREN.

respondió a las expresiones de descontento social con medidas represivas crecientemente articuladas. Dichas vulneraciones fueron cometidas por parte de un plan o política impulsada por las máximas autoridades del Estado para mantener el poder y suprimir cualquier forma de disenso.

443. El Grupo identificó a una variedad de actores e instituciones que participaron en la comisión de graves y sistemáticas violaciones y abusos a los derechos la libertad e integridad física; a no ser sometido a torturas y otros tratos o penas crueles; a no ser privado arbitrariamente de la nacionalidad; a permanecer en el propio país; a la participación en la vida pública, incluyendo el derecho a ser elegida o elegido y a tener acceso a la función pública; el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluyendo el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas; las libertades de asociación y de reunión pacífica; a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; y a la educación y las libertades académicas, entre otras.

444. El GHREN identificó patrones de actos de acoso, intimidación, estigmatización, criminalización,⁸²⁴ detención arbitraria y tortura y otros tratos o penas crueles contra las voces críticas al Gobierno, así como restricciones desproporcionadas y discriminatorias a las libertades fundamentales, en contravención de los estándares internacionales de derechos humanos. Además, el GHREN concluyó que organizaciones y partidos fueron cancelados y medios de comunicación cerrados de manera arbitraria. El GHREN subraya que el respeto de los derechos humanos y de las libertades mencionadas es un prerrequisito y un elemento fundamental de la democracia.⁸²⁵

445. La violación continuada y discriminatoria de derechos y libertades fundamentales, dirigida contra las personas opositoras, o contra aquellas que son percibidas como críticas o adversarias al Gobierno, ha generado un clima persecutorio basado en la supresión del disenso en todas las esferas de la vida social y política en Nicaragua. Dicho contexto ha propiciado que se produzcan también abusos, por parte de terceros, de los derechos de las personas opositoras o percibidas como tales. Estos incluyen amenazas, acosos, ataques, y asesinatos por parte de partidarios del Gobierno.

446. En su conjunto, dichas violaciones y abusos han llevado al colapso del espacio cívico, y han forzado a miles de personas defensoras de derechos humanos, trabajadoras y trabajadores de ONGs, activistas, periodistas, líderes y lideresas estudiantiles, personas religiosas, artistas, así como los principales liderazgos políticos nacionales y territoriales de oposición, a abandonar el país.⁸²⁶ La Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) afirmó que al menos 260 mil personas huyeron desde Nicaragua a causa de las graves violaciones a los derechos humanos.⁸²⁷

447. Así, los actores de la sociedad civil nicaragüense se han visto obligados a salir de Nicaragua, y se han instalado paulatinamente fuera de las fronteras de su país, llegando a una situación en la que prácticamente la totalidad de medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior ante la imposibilidad de hacerlo en Nicaragua.⁸²⁸ Las personas que permanecen en Nicaragua se han visto obligadas

⁸²⁴ El GHREN entiende como criminalización el uso indebido del derecho penal, ya sea por actores estatales o no estatales, con el objetivo de controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.

⁸²⁵ Véase Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2002/46, (E/CN.4/RES/2002/46), art. 1.

⁸²⁶ De acuerdo con el ACNUR, hasta junio de 2022, más de 260.000 nicaragüenses se habían visto obligados a huir de su país, incluyendo 191.875 a Costa Rica, 30.937 a México, 21.556 a Estados Unidos de América, 8.124 a Guatemala, 6.774 a España, y 5.170 a Panamá. ACNUR, Consideraciones de Protección Internacional con respecto a Personas que huyen de Nicaragua (enero de 2023) HCR/PC/NIC/2023/01, p. 32.

⁸²⁷ UNHCR, “International Protection Considerations with Regard to People Fleeing Nicaragua” (2023), p. 7.

⁸²⁸ El GHREN recopiló los testimonios de 170 personas defensoras de derechos humanos, integrantes de ONGs, activistas, periodistas, estudiantes, personas religiosas, artistas, y miembros de partidos o movimientos políticos de oposición que se han visto obligadas a abandonar el país desde el inicio de la crisis.

a practicar la autocensura para poder continuar con su labor. Otras han dejado de participar en actividades políticas o de defensa de los derechos humanos por miedo a represalias.

448. En febrero de 2023, las autoridades de Nicaragua privaron arbitrariamente de su nacionalidad a 316 personas, acusándolas de ser “traidoras a la patria”, y expulsaron a 222 de ellas del territorio nicaragüense, en violación de su derecho a permanecer en su propio país. Se ordenó la confiscación de sus bienes a favor del Estado, y sus nombres eliminados de los registros de nacimiento y del registro civil. Existen serias preocupaciones respecto a este nuevo patrón de violaciones, que podría replicarse en el futuro, y que se ha constituido en una amenaza a todas las personas críticas del Gobierno, dentro y fuera del país.

1. Marco jurídico

a) *El derecho a la libertad y a la seguridad personal*

449. El derecho a la libertad personal es un derecho humano fundamental, esencial e inalienable, reconocido en el derecho internacional consuetudinario como una norma de *ius cogens*.⁸²⁹ El ICCPR, del que Nicaragua es parte, prohíbe tanto el arresto y la detención arbitrarias como la privación ilegal de libertad, o la privación de libertad impuesta en desacuerdo con los procedimientos establecidos por la ley.⁸³⁰ Por su parte, la Convención Americana establece que “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”.⁸³¹ La garantía fundamental contra la detención arbitraria es inderogable.⁸³²

450. El WGAD señala que la privación de libertad es arbitraria si está comprendida en una de las cinco categorías siguientes:⁸³³

- a) **Categoría I:** cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que justifique la privación de la libertad (como el mantenimiento de una persona en detención tras haber cumplido la pena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable);
- b) **Categoría II:** cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades proclamados en los artículos 7, 13–14, y 18–21 de la Declaración Universal⁸³⁴ y además, respecto de los Estados Parte, en los artículos 12, 18–19, 21–22, y 25–27 del ICCPR⁸³⁵;
- c) **Categoría III:** cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados afectados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario;
- d) **Categoría IV:** cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de recurso administrativo y judicial; y

⁸²⁹ La Declaración Universal, en su art. 9, establece que nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 35 sobre la libertad y seguridad personales (art. 9), CCPR/C/GC/35 (16 de diciembre de 2014), párr. 66; véase también la Deliberación No. 9 relativa a la definición y el alcance de la privación arbitraria de libertad en virtud del derecho internacional consuetudinario, en Informe del WGAD, A/HRC/22/44 (24 de diciembre de 2012) (en adelante “Deliberación No. 9”), párr. 51.

⁸³⁰ ICCPR, art. 9.

⁸³¹ Convención Americana, art. 7.

⁸³² Véase Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 29 sobre los estados de emergencia (art. 4), CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (31 de agosto de 2001), párrs. 4 y 11; Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 35 sobre la libertad y seguridad personales (art. 9), CCPR/C/GC/35 (16 de diciembre de 2014), párr. 66.

⁸³³ Deliberación No. 9, párr. 38.

⁸³⁴ Relativos a la igualdad y no discriminación, y a la libertad de circulación y asilo.

⁸³⁵ Relativos a la libertad ambulatoria, libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de opinión y expresión, de asamblea pacífica y asociación y participación en la vida pública y política, y de reconocimiento y derecho de las minorías religiosas, étnicas, culturales e idiomáticas.

e) **Categoría V:** cuando la privación de libertad constituye una violación del derecho internacional por razones de discriminación basada en el nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, situación económica, opiniones políticas o de cualquier índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra circunstancia, y que persigue o puede derivar en la vulneración de la igualdad de los derechos humanos.

451. A efectos del derecho internacional de los derechos humanos, el término “detención” abarca todas las formas de privación de la libertad, incluyendo la detención domiciliaria.⁸³⁶ Se considera que una persona está privada de la libertad, cuando no puede salir de su situación de detención física, impuesta por un tercero, a voluntad. Esta abarca la privación de la libertad antes, durante o después del juicio, así como la privación de libertad sin que se haya llevado a cabo un juicio de ninguna clase.⁸³⁷

452. La noción de “arbitrario” debe interpretarse de manera amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad, así como la inobservancia de las debidas garantías procesales. En este sentido, una detención autorizada por la ley puede devenir arbitraria si esa privación de libertad que se produce inicialmente conforme a la legislación y el procedimiento aplicable dejara de ser razonable, necesaria y proporcional al objetivo perseguido. Por lo anterior, el concepto de “arbitrariedad” no debe equipararse con el de “contrario a la ley”.⁸³⁸

453. Como Estado parte del ICCPR y de la Convención Americana, Nicaragua está obligada a proteger de manera efectiva a las personas que se encuentran dentro de su jurisdicción contra la detención arbitraria o ilegal, así como a garantizar las garantías procesales y el derecho a un juicio justo.⁸³⁹ A modo de ejemplo, algunos de los derechos y garantías judiciales, tanto sustantivas como procesales, que contribuyen proteger la libertad de las personas y garantizar que nadie sea privado, ilegal o arbitrariamente, de su libertad, incluyen: el derecho a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra de la persona detenida; el control judicial de la privación de la libertad; la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva; el derecho a impugnar la legalidad de la detención; el derecho a la presunción de inocencia; el derecho a la asistencia efectiva de un abogado o abogada de la elección de la persona detenida; y el derecho a recurrir el fallo ante un tribunal, juez o jueza superior.⁸⁴⁰

454. La Constitución Política de Nicaragua establece que “[n]adie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley con arreglo a un procedimiento legal”.⁸⁴¹ Asimismo, prevé que la detención solamente puede efectuarse en virtud de mandamiento escrito de juez competente o de las autoridades expresamente facultadas por la ley, salvo en caso de flagrante delito.⁸⁴² La Constitución

⁸³⁶ Véase Deliberación No. 9, párr. 57; TPIY, *Prosecutor v. Tihomir Blaškić*, causa núm. IT-95-14-PT, Decision on the Motion of the Defence Filed Pursuant to Rule 64 of the Rules of Procedure and Evidence, 3 de abril de 1996, párr. 16.

⁸³⁷ Véase CCPR/C/GC/35, párr. 17; ONU, Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, Res 43/173 (9 de diciembre de 1988), Principios 1 y 2.

⁸³⁸ Deliberación No. 9, párr. 61; Véase CCPR/C/GC/35, párrs. 5 y 11–17.

⁸³⁹ ICCPR, arts. 9 y 14; Convención Americana, arts. 7 y 8.

⁸⁴⁰ ICCPR, arts. 9 y 14; Convención Americana, arts. 7-9. Véase Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 32 sobre el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia (art. 14), CCPR/C/GC/32 (23 de agosto del 2007); CCPR/C/GC/35, párrs. 15 y 66; Deliberación No. 9, párrs. 47–48. Véase también Corte IDH, Caso *Chaparro Álvarez y Lapo Itúñez vs. Ecuador*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia, 21 de noviembre de 2007, párr. 51; Caso *Yvon Neptune vs. Haití*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia, 6 de mayo de 2008, párr. 89.

⁸⁴¹ Constitución Política de Nicaragua, art. 33.

⁸⁴² *Ibid.*, art. 33.1.

también contiene un listado de garantías de debido proceso en concordancia con los estándares internacionales en la materia.⁸⁴³

b) *Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes*

i) La prohibición absoluta e inderogable de la tortura

455. Los Estados están obligados a respetar y hacer respetar el derecho a la dignidad humana y a la integridad personal, física, psíquica y moral.⁸⁴⁴ La violación de la dignidad humana e integridad personal puede adquirir diversas formas. Entre ellas se encuentran la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que son actos prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos.⁸⁴⁵ Esta prohibición es absoluta, no pudiendo ser en ninguna circunstancia objeto de derogación o excepción.⁸⁴⁶

456. La Convención contra la Tortura define la misma como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.⁸⁴⁷

457. Asimismo, la Convención Interamericana contra la Tortura entiende por tortura “todo acto realizado intencionalmente, por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, por cualesquiera fines, incluyendo de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena, y la aplicación de métodos que puedan o no causarle dolor físico o angustia psíquica, tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental”.⁸⁴⁸

458. La Convención contra la Tortura impone obligaciones perentorias a los Estados Parte, incluido Nicaragua, que surgen de la naturaleza de norma de *ius cogens* y de la prohibición absoluta que la tortura detenta. Entre dichas obligaciones se encuentran las de educar, e informar integralmente sobre la prohibición de la tortura a las y los funcionarios públicos que apliquen la ley, así como legislar para que la normativa interna refleje los deberes y funciones de las y los funcionarios públicos. También se prevé la obligación por parte de las autoridades de investigar pronta e imparcialmente los actos de tortura que lleguen a su conocimiento, así

⁸⁴³ *Ibid.*, arts. 33.2(1)-(3) y 34. Véase, Código Procesal Penal, arts. 1–5 (principio de legalidad; presunción de inocencia; principio de respeto a la dignidad humana; derecho a la defensa; principio de proporcionalidad); arts. 8–11 (principio de gratuidad y celeridad procesal; intervención de la víctima; principio acusatorio; juez natural); arts. 13–17 (principio de oralidad; principio de oportunidad; libertad probatoria; licitud de la prueba; y derecho a recurso).

⁸⁴⁴ Véase entre otros, Declaración Universal, art. 5, ICCPR, art. 7 y Convención Americana, art. 5(2), que proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Véase también Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 26 de junio de 1987 (en adelante “Convención contra la Tortura”), art. 2(1); Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 9 de diciembre de 1975; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 9 de diciembre de 1985 (en adelante “Convención Interamericana sobre la Tortura”), art. 5.

⁸⁴⁵ ICCPR, art. 7; Convención contra la Tortura, art. 2(1).

⁸⁴⁶ ICCPR, art. 4(2); Convención contra la Tortura, art. 2(2) y (3); Convención Interamericana sobre la Tortura, art. 5. Véase, CIJ, Fallo sobre Cuestiones Relativas a la Obligación de Procesar o Extraditar (*Bélgica c. Senegal*), 20 de julio de 2012, párr. 99 estableciendo que: “la prohibición de la tortura forma parte del derecho internacional consuetudinario y se ha convertido en norma imperativa (*ius cogens*). Esa prohibición se basa en una práctica internacional generalizada y sobre la *opinio juris* de los Estados”.

⁸⁴⁷ No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. Convención contra la Tortura, art. 1(1).

⁸⁴⁸ No están comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a estas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos descritos por la propia Convención como tortura y definidos en el mismo artículo 2. Convención Interamericana sobre la Tortura, art. 2.

como de procesar y en su caso, extraditar a la persona que se supone haya cometido el delito.⁸⁴⁹ Ninguna declaración que haya sido obtenida como resultado de tortura puede ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado dicha declaración.⁸⁵⁰

459. Los Estados también están obligados a prohibir, en cualquier territorio bajo su jurisdicción, actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen al umbral de los actos de tortura y respecto a los cuales tienen las mismas obligaciones detalladas anteriormente.⁸⁵¹ Tanto la Convención contra la Tortura como la Convención Interamericana contra la Tortura prohíben los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes pero no contienen una definición de los mismos.⁸⁵² Se ha sugerido que los criterios decisivos para distinguir los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la tortura incluyen: el propósito de la conducta, la intención del perpetrador y la impotencia de la víctima, en lugar de la intensidad del sufrimiento infligido.⁸⁵³

460. El artículo 36 de la Constitución de Política de Nicaragua establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley”. Por su parte, el Código Penal establece que: “El Estado garantiza que toda persona a quien se atribuya delito o falta penal tiene derecho a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. No podrán imponerse penas o medidas de seguridad que impliquen torturas, procedimientos o tratos inhumanos, crueles, infamantes o degradantes”.⁸⁵⁴ La Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena también establece expresamente en su artículo 7 la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como el maltrato físico o psicológico.

461. El CAT recomendó al Estado de Nicaragua adecuar la definición de tortura en consonancia con el artículo 1 de la Convención, puesto que no contempla específicamente los delitos cometidos por las funcionarias o funcionarios públicos o por otras personas en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. A su vez, instó al Estado de Nicaragua a reformar el Código Penal Militar, ya que el mismo no incorpora el delito de tortura, sino el abuso de autoridad y lesiones.⁸⁵⁵ Sin embargo, a la fecha de redacción del presente informe, el Estado de Nicaragua no había implementado las recomendaciones del CAT.

462. Además de los instrumentos internacionales antes referidos, el Grupo ha consultado para su análisis, otros documentos que contienen una serie de principios básicos reconocidos por la comunidad internacional. Estos incluyen: las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos o “Reglas Nelson Mandela” (en adelante “Reglas Nelson Mandela”) que constituyen los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad; las

⁸⁴⁹ En este sentido, los Estados deben asegurar que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes, y deben tomar las medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado. Véase Convención contra la Tortura, arts. 6–7, 10–13. Respecto a la obligación de extraditar a aquellos responsables sospechados de torturar, véase CIJ, Fallo sobre Cuestiones Relativas a la Obligación de Procesar o Extraditar (*Bélgica c. Senegal*), 20 de julio de 2012, párrs. 92–95.

⁸⁵⁰ Véase Convención contra la Tortura, art. 15.

⁸⁵¹ *Ibid.*, arts. 2 y 16.

⁸⁵² Convención contra la Tortura, art. 16; Convención Interamericana sobre la Tortura, arts. 6–7.

⁸⁵³ Véase Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas inhumanos, crueles o degradantes, Manfred Nowak, A/HRC/13/39/Add.5 (9 de febrero de 2010), párr. 60.

⁸⁵⁴ Ley No. 641, Código Penal, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nos. 83-87, de fechas 5 al 9 de mayo del 2008 (en adelante “Código Penal”), art. 4, disponible en: <https://ni.vlex.com/vid/codigo-penal-38391041>.

⁸⁵⁵ CAT, Examen de los informes presentados por los Estados Parte en virtud del artículo 19 de la Convención, CAT /C/NIC/CO/1 (10 de junio de 2009), párr. 10.

Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok); las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing); y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio).⁸⁵⁶

ii) La violencia sexual como práctica de tortura

463. Los mecanismos universales y regionales de protección de los derechos humanos han determinado que los actos de violencia sexual pueden constituir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.⁸⁵⁷ La Corte IDH ha reconocido que “la violación sexual es una experiencia sumamente traumática que tiene severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima “humillada física y emocionalmente”, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas. De ello se desprende que es inherente a la violación sexual el sufrimiento severo de la víctima, aun cuando no exista evidencia de lesiones o enfermedades físicas”.⁸⁵⁸

464. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y otros mecanismos internacionales de protección han establecido que “la violencia por razón de género contra la mujer puede constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante en determinadas circunstancias, en particular en los casos de violación”.⁸⁵⁹ Por sus graves consecuencias, la violencia sexual puede constituir un método particularmente grave de tortura.⁸⁶⁰ La Corte IDH ha resaltado que la violencia sexual cometida en contra de una mujer que se encuentra detenida o bajo la custodia de un agente del Estado es un acto especialmente grave y reprochable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente.⁸⁶¹ También recordó que las amenazas y el peligro de

⁸⁵⁶ UNGA, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), A/RES/70/175 (17 de diciembre de 2015); UNGA, Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), A/RES/65/229 (16 de marzo de 2011); UNGA, Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), A/RES/40/33 (28 de noviembre de 1985); UNGA, Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), A/RES/45/110 (14 de diciembre de 1990).

⁸⁵⁷ El CEDAW ha establecido que “la violencia por razón de género contra la mujer puede constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante en determinadas circunstancias, en particular en los casos de violación, violencia doméstica o prácticas tradicionales nocivas”. CEDAW, Recomendación general núm. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19, CEDAW/C/GC/35 (26 de julio de 2017), párr. 16. Véase Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, A/HRC/31/57 (5 de enero de 2016); CAT, Decisión adoptada por el Comité en virtud del artículo 22 de la Convención, respecto de la comunicación núm. 854/2017, CAT/C/67/D/854/2017 (11 de septiembre de 2019); Corte IDH, *Caso Fernández Ortega y otros vs. México*, Sentencia, 30 de agosto de 2010 (en adelante “Sentencia *Caso Fernández Ortega*”); *Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia, Serie C No. 160, 25 de noviembre de 2006 (en adelante “Sentencia *Caso Penal Miguel Castro Castro*”), párr. 260.

⁸⁵⁸ Corte IDH, Sentencia *Caso Penal Miguel Castro Castro*, párr. 306; *Caso Espinoza González vs. Perú*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia, 20 de noviembre de 2014 (en adelante “Sentencia *Caso Espinoza González*”), párr. 193.

⁸⁵⁹ CEDAW, 26 de julio de 2017, párr. 16. Véase, por ejemplo: Tribunal Europeo de Derechos Humanos, *Aydin vs. Turkey*, 23178/94 (1997); Relator Especial para la Tortura, Informe sobre la Tortura y otras formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, U.N. Doc. E/CN.4/1986/15 (1986), párr. 119; CAT, Observación General No. 2, U.N. Doc. CAT/C/GC/2, 24 de enero de 2008, párr. 18.

⁸⁶⁰ Véase, por ejemplo, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, A/HR/31/57 (5 de enero de 2016), párr. 51.

⁸⁶¹ Corte IDH, Sentencia *Caso Penal Miguel Castro Castro*, párr. 311; *Caso Favela Nova Brasília vs. Brasil*, Sentencia, 16 de febrero de 2017 (en adelante “Sentencia *Caso Favela Nova Brasília*”), párr. 255.

someter a una persona a graves lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado que puede ser considerada tortura psicológica.⁸⁶²

c) *Derecho a participar en los asuntos públicos*

465. La Declaración Universal y el ICCPR, así como diversos tratados internacionales vinculantes para Nicaragua, reconocen el derecho a participar en los asuntos públicos.⁸⁶³ Este derecho comporta la libre participación de todas las personas en la vida política de Nicaragua, y comprende tres dimensiones fundamentales: el derecho a participar, a votar y a ser elegida o elegido, y el derecho a tener acceso a la función pública.⁸⁶⁴

466. Asimismo, Nicaragua debe garantizar de manera efectiva el pleno ejercicio y respeto de los derechos reflejados en los artículos 19, 21 y 22 del ICCPR, incluyendo: la libertad de participar en actividades políticas individualmente o a través de partidos políticos y otras organizaciones; la libertad de debatir los asuntos públicos; la libertad de realizar manifestaciones y reuniones pacíficas, incluyendo aquellas que tengan por objeto criticar u oponerse a un gobierno; así como la libertad para publicar material o propaganda política y realizar campañas electorales.

467. El ejercicio efectivo del derecho a participar en los asuntos públicos también está vinculado al disfrute de otros derechos humanos, como el derecho a la libertad de opinión y expresión, a la libertad de asociación y reunión pacífica, y a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, entre otros.⁸⁶⁵

d) *Libertad de expresión y opinión*

468. La libertad de opinión y de expresión es un elemento central de la democracia y un prerequisite para el ejercicio de otras libertades fundamentales. El derecho a la libertad de opinión y de expresión está protegido por varios instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos.⁸⁶⁶

469. El derecho a la libertad de expresión y de opinión implica que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones, y que todas las personas tienen derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro medio de su elección.⁸⁶⁷ Este derecho a expresarse libremente y sin interferencia incluye el derecho a mantener y expresar una opinión sin restricciones ni censura, a recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación o difusión, así como el derecho al acceso a la información pública.⁸⁶⁸

470. Tanto el ICCPR como la Convención Americana establecen que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales y, por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, siempre que éstas estén establecidas

⁸⁶² Véase, *inter alia*, Corte IDH, Sentencia *Caso Fernández Ortega*, párr. 128; *Caso Rosendo Cantú y otra vs. México*, Sentencia, 31 de agosto de 2010, párr. 118; *Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala*, Sentencia, 4 de septiembre de 2012, párr. 132; Sentencia *Caso Favela Nova Brasília*, párr. 252.

⁸⁶³ Declaración Universal, art. 21; ICCPR, arts. 1 y 25; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, art. 5.c; ICESCR, arts. 1 y 8; CEDAW, arts. 7 y 8; Convención sobre los Derechos del Niño, art. 15; Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, arts. 41 y 42; y Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, arts. 4.3, 29, 33 párr. 3.

⁸⁶⁴ ICCPR, art. 25.

⁸⁶⁵ Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 34, Artículo 19, Libertad de opinión y libertad de expresión, CCPR/C/GC/34 (12 de septiembre de 2011), párrs. 2, 4–5, 7–9, 20. Véase ACNUDH – América del Sur, “El derecho humano a la participación en la dirección de los asuntos públicos”, 14 de agosto de 2021.

⁸⁶⁶ Declaración Universal, art. 19; ICCPR, art. 19; ICESCR, art. 19; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, art. 5); Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, art. 7; Convención Americana, art. 13; Declaración de Principios de la OEA sobre Libertad de Expresión.

⁸⁶⁷ Declaración Universal, art. 19; ICCPR, art. 19, párrs. 1–2, Convención Americana, art. 13.

⁸⁶⁸ Véase CCPR/C/GC/34, párrs. 9, 11, 13, 18.

en la ley y sean necesarias para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás, así como la protección de la seguridad nacional, o la salud o la moral públicas.⁸⁶⁹

471. La Constitución Política de Nicaragua garantiza el derecho a la información veraz, incluyendo la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas por diversos medios y sin censura de ninguna clase. La Constitución señala que el derecho a informar es una responsabilidad social, y que no puede ser sujeto a censura sino a responsabilidades ulteriores establecidas en la ley.⁸⁷⁰

e) *Libertades de asociación y de reunión pacífica*

472. Los derechos a la reunión pacífica y la asociación están consagrados en la Declaración Universal, el ICCPR y la Convención Americana.⁸⁷¹ La Constitución Política de Nicaragua también reconoce tanto el derecho de reunión pacífica, estableciendo que el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo, así como el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley.⁸⁷²

473. El derecho de reunión protege las reuniones pacíficas de personas con fines específicos, principalmente expresivos.⁸⁷³ Las reuniones han sido definidas como toda congregación intencional y temporal de un grupo de personas en un espacio privado o público con un propósito concreto.⁸⁷⁴ El derecho de reunión es un derecho individual que se ejerce colectivamente e incluye las manifestaciones y las protestas.⁸⁷⁵ En este sentido, la protesta es una herramienta fundamental de participación política y una forma de expresar peticiones y reclamos a la autoridad pública. También es un mecanismo esencial para defender los derechos humanos y denunciar públicamente los abusos o violaciones a los mismos.⁸⁷⁶

474. El término “pacífica” debe ser interpretado en sentido amplio. El Estado tiene por tanto el deber de respetar el derecho a celebrar y participar en reuniones pacíficas, así como la obligación positiva de facilitar el ejercicio de ese derecho.⁸⁷⁷ La participación en manifestaciones pacíficas es una forma importante de ejercer el derecho a la libertad de expresión, libertad de asociación y participación política.⁸⁷⁸ Las respuestas represivas a las manifestaciones públicas no sólo afectan los derechos anteriormente señalados, sino que pueden violentar otros derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad física y a la seguridad personal, o el derecho a la libertad.⁸⁷⁹

475. Por lo que respecta al derecho a la libertad de asociación, éste supone el derecho de las personas a interactuar y organizarse entre ellas para expresar, promover, buscar y defender de forma colectiva intereses comunes.⁸⁸⁰ La formación de una asociación y la participación

⁸⁶⁹ ICCPR, art. 19. Véase Convención Americana, art. 13; CCPR/C/GC/34, párrs. 21–36.

⁸⁷⁰ Constitución Política de Nicaragua, arts. 66 y 67.

⁸⁷¹ Declaración Universal, art. 20, párrs. 1 y 2; ICCPR, arts. 21–22, párrs. 1 y 2; Convención Americana, arts. 15, 16.1.

⁸⁷² Constitución Política de Nicaragua, arts. 53–54.

⁸⁷³ Comité de Derechos Humanos, Observación general núm. 37 (2020), relativa al derecho de reunión pacífica (artículo 21), CCPR/C/GC/37 (17 de septiembre de 2020), párr. 4.

⁸⁷⁴ Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, A/HRC/20/27 (21 de mayo de 2012), párr. 3.

⁸⁷⁵ CCPR/C/GC/37, párrs. 4–6.

⁸⁷⁶ Véase Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, A/HRC/17/28 (23 de mayo de 2011), párr. 31; Consejo de Derechos Humanos, La promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas, A/HRC/RES/25/38 (11 de abril de 2014), considerandos.

⁸⁷⁷ Véase CCPR/C/GC/37, párr. 9; A/HRC/RES/25/38, párr. 2.

⁸⁷⁸ CCPR/C/GC/37, párrs. 9, 100; A/HRC/RES/25/38, considerandos, párr. 3. Véase CIDH, Segundo informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, 31 de diciembre de 2011, párrs. 128 y 129.

⁸⁷⁹ Véase CCPR/C/GC/37, párrs. 74, 78–79, 85, 88; A/HRC/RES/25/38, párrs. 2, 9–11; CIDH, Segundo informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, 31 de diciembre de 2011, párrs. 128 y 129.

⁸⁸⁰ Véase Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, en A/72/135 (14 de julio de 2017), párr. 22.

en ella deben ser voluntarias; ninguna persona puede ser amenazada u obligada, directa o indirectamente, por el Estado o por un particular, a pertenecer a un grupo o asociación.⁸⁸¹

476. Tanto el ICCPR como la Convención Americana señalan que las libertades de asociación y reunión pacífica únicamente pueden estar sujetas a restricciones que estén establecidas en la ley; sean necesarias en una sociedad democrática; y estén orientadas hacia un propósito legítimo, como la protección de la seguridad nacional, la seguridad pública, el orden público, la salud y la moral públicas, y los derechos y libertades de otras personas.⁸⁸²

f) *Libertad de pensamiento, conciencia y religión*

477. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión abarca la libertad de pensamiento sobre todas las cuestiones, las convicciones personales y el compromiso con la religión o las creencias, ya se manifiesten a título individual o en comunidad con otras personas.⁸⁸³ Los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos distinguen entre la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de creencias y la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias.⁸⁸⁴ La libertad de pensamiento y de conciencia o de tener la religión o las creencias de la propia elección es inderogable, y no está sujeta a limitaciones ni restricciones. Sin embargo, la libertad de manifestar la religión o las creencias puede restringirse con el fin de proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás, a condición de que tales limitaciones estén prescritas por la ley y sean estrictamente necesarias.⁸⁸⁵

478. La Constitución Política de Nicaragua garantiza la libertad de conciencia, religión y de culto. La Constitución puntualiza que nadie puede eludir la observancia de las leyes, ni impedir a otros el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, invocando creencias o disposiciones religiosas.⁸⁸⁶

g) *Derecho a la educación y libertad académica*

479. El derecho a la educación está consagrado en la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Declaración Americana).⁸⁸⁷ La Constitución Política de Nicaragua también reconoce el derecho que todos los nicaragüenses tienen a la educación y a la cultura.⁸⁸⁸

480. El derecho a la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Con el fin de lograr el pleno ejercicio de este derecho, la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita

⁸⁸¹ Véase ACNUDH y Unión Interparlamentaria, Derechos Humanos - Manual para Parlamentarios No. 26, 2016, p. 184.

⁸⁸² ICCPR, arts. 21–22; Convención Americana, arts. 15, 16.2. Véase CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, 2010, párrs. 74–75.

⁸⁸³ Declaración Universal, art. 18; ICCPR, art. 18.1; Convención Americana, arts. 12.1 y 13.1. Véase Comité de Derechos Humanos, Observación general núm. 22: derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18), 13 de julio de 1993.

⁸⁸⁴ Declaración Universal, art. 18; ICCPR, art. 18.1; Convención Americana, arts. 12.1 y 13.1.

⁸⁸⁵ Las restricciones deben ser adoptadas por leyes que deben estipular criterios precisos para su aplicación, los cuales deberán aplicarse con objetividad, y deberán ser proporcionales al interés que se busca proteger. Las restricciones no deben anular el propósito del derecho protegido y deben respetar en su enunciación y aplicación los principios de igualdad y no discriminación. Véase ICCPR, art. 18.2; Convención Americana, arts. 12.3 y 13.2.

⁸⁸⁶ Constitución Política de Nicaragua, art. 69.

⁸⁸⁷ Declaración Universal, art. 26.1; ICESCR, art. 13.1; Declaración Americana, art. XII.

⁸⁸⁸ Constitución Política de Nicaragua, art. 58.

h) *El derecho a la nacionalidad y la prohibición de la privación de la nacionalidad*

481. El derecho a la nacionalidad está reconocido en una variedad de instrumentos jurídicos internacionales.⁸⁸⁹ El artículo 15 de la Declaración Universal establece que “a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”.⁸⁹⁰ La Asamblea General en su resolución 50/152 y el Consejo de Derechos Humanos en sus resoluciones 7/10, 10/13, 13/2, 20/5 y 26/14 han reafirmado el carácter fundamental del derecho a una nacionalidad, así como la prohibición de la privación arbitraria de la nacionalidad.

482. La cuestión de la nacionalidad está también regulada en la Convención para reducir los casos de apatridia, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.⁸⁹¹ El artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos retoma los mismos principios y dispone que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.

483. El derecho a la nacionalidad implica la prohibición de su privación arbitraria.⁸⁹² Aunque la adquisición o pérdida de la nacionalidad se rige por la legislación interna, los Estados han de cumplir sus obligaciones internacionales en la materia.⁸⁹³ La Corte IDH indicó que las facultades de regulación estatal relacionadas con la nacionalidad “están limitadas [...] por su obligación de garantizar la plena protección de los derechos humanos”.⁸⁹⁴ El Consejo de Derechos Humanos consideró que la privación arbitraria de la nacionalidad, especialmente por motivos discriminatorios, como la opinión política o de cualquier otra índole, la religión, el sexo, el origen nacional o social, la posición económica, constituía una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.⁸⁹⁵

484. La privación arbitraria de la nacionalidad comprende todas las formas de privación de la nacionalidad, incluida la “pérdida”, excepto cuando la persona lo solicite voluntariamente. La privación de la nacionalidad se refiere, en general, a las situaciones de “desnacionalización” (o retirada de la ciudadanía), así como a la denegación del acceso a la nacionalidad (o la negativa a conceder la ciudadanía). La arbitrariedad no se limita a la ilegalidad, sino a los estándares de justicia y las garantías del debido proceso, así como a la no discriminación.

485. No toda privación de la nacionalidad es arbitraria. Para no ser arbitraria, la privación de la nacionalidad debe realizarse de conformidad con el derecho interno y cumplir con las normas procesales y sustantivas específicas del derecho internacional de los derechos humanos, en particular los principios de proporcionalidad, no discriminación o igualdad, y el debido proceso. En este sentido, la medida en cuestión debe servir a un objetivo legítimo compatible con los objetivos del derecho internacional de los derechos humanos. También debe ser la medida menos intrusiva entre las que permitan alcanzar el resultado deseado, y debe ser proporcional al interés que se pretende proteger. Además, la decisión que conduzca a la privación de la nacionalidad debe emitirse por escrito y estar abierta a una revisión

⁸⁸⁹ Entre ellos la Declaración Universal, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

⁸⁹⁰ Asamblea General de la ONU, Resolución 217 A, 10 de diciembre de 1948, disponible en: <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

⁸⁹¹ Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Secretario General, Los derechos humanos y la privación arbitraria de la nacionalidad, A/HRC/13/34, 14 de diciembre de 2009, párr. 3.

⁸⁹² Asamblea General de la ONU, A/Res/50/152, 9 de febrero de 1996, párr. 16.

⁸⁹³ Documentos oficiales de la Asamblea General, sexagésimo primer período de sesiones, Suplemento No 10 (A/61/10), cap. IV, comentario al artículo 4, párr. 6.

⁸⁹⁴ Corte IDH, Opinión Consultativa No. OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Propuesta de modificación a la Constitución política de Costa Rica relacionada con la naturalización, párr. 38, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_04_esp.pdf

⁸⁹⁵ Véase, *inter alia*, Consejo de Derechos Humanos, Décimo período de sesiones, Resolución 10/13. Los derechos humanos y la privación arbitraria de la nacionalidad, 26 de marzo de 2009, punto resolutivo 2; Resolución 32/5, 30 de junio de 2016, A/HRC/32/5, punto resolutivo 2.

administrativa o judicial efectiva.⁸⁹⁶ Por consiguiente, el concepto de arbitrariedad abarca toda acción del Estado, ya sea legislativa, administrativa o judicial, y está relacionado con actos ilegales, así como, en términos más generales, con la falta de idoneidad, justicia y previsibilidad.⁸⁹⁷

486. La privación arbitraria de la nacionalidad tiene efectos sobre el disfrute de los derechos humanos; hace que las personas afectadas se conviertan en no-ciudadanas para el Estado que les privó de su nacionalidad. La privación arbitraria de la nacionalidad, por lo tanto, pone a las personas afectadas en una situación de desventaja respecto al goce de sus derechos humanos, pues algunos de estos pueden ser objeto de limitaciones que de lo contrario no serían aplicables, y pone a las personas en una situación de especial vulnerabilidad.⁸⁹⁸

i) *El derecho a entrar y salir del propio país*

487. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 12, que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular por él, a escoger libremente en él su residencia y a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. Las restricciones a ese derecho deben ser previstas por la ley, necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros. Esas limitaciones tienen que ser compatibles con los demás derechos humanos. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.

488. El Comité de Derechos Humanos considera que la libertad de circulación es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona. Las restricciones aportadas a su goce no deben comprometer la esencia del derecho; deben ajustarse al principio de proporcionalidad, ser adecuadas para desempeñar su función protectora y ser el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir el resultado deseado. A su vez, deben ser compatibles con los otros derechos humanos y con los principios fundamentales de igualdad y no discriminación y no ser arbitrarias.⁸⁹⁹

489. La libertad de circulación incluye el derecho de toda persona a entrar en su propio país. El Comité de Derechos Humanos subrayó que “hay pocas circunstancias, si es que hay alguna, en que la privación del derecho a entrar en su propio país puede ser razonable. Un Estado Parte no debe impedir arbitrariamente a una persona el regreso a su propio país por la vía de despojarla de su nacionalidad o de expulsarla a un tercer país”.⁹⁰⁰

2. Perfiles de las víctimas

490. Los patrones de abusos y violaciones de derechos humanos identificados por el GHREN se han dirigido contra un grupo heterogéneo de personas, liderazgos, organizaciones y entidades. El trabajo realizado permitió al GHREN concluir que las personas y/o entidades que han sido y continúan siendo el objetivo de violaciones y abusos fueron victimizadas en función de su opción política opositora al Gobierno; sea dicha postura real o una percepción de las autoridades. Por este motivo, el GHREN se refiere en su análisis a ataques y violaciones de derechos humanos cometidas en contra de “voces críticas al Gobierno” o de “personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales”.⁹⁰¹

⁸⁹⁶ Asamblea General de la ONU, A/HRC/13/34, párr. 43.

⁸⁹⁷ Asamblea General de la ONU, A/HRC/13/34, párr. 25.

⁸⁹⁸ Asamblea General de la ONU, Informe del Secretario General, Los derechos humanos y la privación arbitraria de la nacionalidad, A/HRC/19/43, 19 de diciembre de 2011, párr. 47; Consejo de Derechos Humanos, Resolución 32/5, 30 de junio de 2016, A/HRC/32/5, punto resolutivo 7.

⁸⁹⁹ Comité de Derechos Humanos, Observación general No.27, Libertad de circulación (art. 12), 2 de noviembre de 1999, CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, párrs. 14, 18 y 20.

⁹⁰⁰ *Ibid.* párr. 20

⁹⁰¹ El GHREN ha recabado testimonios de personas con perfiles diversos, desde reconocidas defensoras y defensores de derechos humanos, personas con un claro liderazgo político, o celebrados periodistas e intelectuales de Nicaragua, hasta personas anónimas que participaron por primera vez en protestas, marchas, partidos o movimientos sociales a raíz de los sucesos de 2018.

491. El común denominador a este grupo de personas es que han sido percibidas por la administración del Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo como una amenaza a su control del Estado, ya sea por su prominencia o liderazgo, por el papel que desempeñan en la defensa de los derechos humanos o en el acceso a la información, por ser activas en movimientos sociales, o simplemente por haber participado en manifestaciones o en actividades consideradas “disidentes”.

492. El perfil de las víctimas objeto de violaciones y abusos se ha ido ampliando con el paso del tiempo. En un primer momento, las personas que participaron en las manifestaciones de 2018, y en particular aquellas que habían asumido un cierto liderazgo en el contexto de las protestas, tranques, tomas de universidades y coordinación del apoyo humanitario a las personas manifestantes, fueron el objetivo de las vulneraciones de derechos humanos.⁹⁰²

493. Tras la fase inicial de movilización masiva en 2018, los ataques se centraron en personas y organizaciones con perfiles públicos altos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y la profundización del cierre del espacio cívico, los ataques se fueron extendiendo hacia un grupo más amplio de voces críticas, incluyendo personas defensoras de derechos humanos, estudiantes, feministas, organizaciones sociales, periodistas y empleados de medios de comunicación independientes, y miembros de partidos políticos.

494. El GHREN analizó las dinámicas específicas de la represión ejercida contra las mujeres consideradas críticas del Gobierno. Las mujeres y los grupos y organizaciones de mujeres han sido un blanco específico de violaciones y abusos a los derechos humanos.⁹⁰³ Los movimientos feministas y los liderazgos de mujeres gozan de una trayectoria histórica y una importancia crucial en Nicaragua, con una significativa participación de las mujeres en las organizaciones y actividades de defensa de los derechos humanos. Las mujeres feministas y organizaciones de mujeres adoptaron posturas críticas hacia el Gobierno de Daniel Ortega desde épocas anteriores al 2018. Además, muchas de las mujeres activas y en roles de liderazgo provienen de una tradición sandinista, habiendo roto con el FSLN en distintos momentos, desde la década de los 90s. Durante las protestas, las mujeres participaron activamente en los movimientos de protesta y contribuyeron al desarrollo de estrategias y actividades para brindar asistencia médica, apoyo logístico, protección, acompañamiento y servicios jurídicos a las víctimas y sus familiares.⁹⁰⁴ Por estos distintos motivos, las mujeres y los grupos y organizaciones de mujeres han sido objeto de represalias.

495. La represión ha sido también particularmente fuerte hacia aquellas personas que participaron en la revolución, o que en algún momento de sus vidas fueron parte del FSLN.

496. El cierre del espacio cívico y democrático se agudizó dramáticamente en el contexto de las elecciones presidenciales de 2021, con la cancelación de tres partidos de oposición y la persecución penal de las principales figuras políticas de oposición, de periodistas, y de liderazgos sociales, empresariales y locales.

497. A partir de 2022 y hasta la fecha de redacción de este informe, se observó la victimización de un grupo cada vez más extenso de personas por expresar posturas críticas, incluyendo en redes sociales, o por ser activas en organizaciones y movimientos sociales, incluyendo líderes religiosos, integrantes de la Iglesia Católica, y familiares de personas opositoras o de víctimas de violaciones y abusos a los derechos humanos. La cancelación de la personalidad jurídica de cientos de organizaciones de la sociedad civil formó parte de esta dinámica.

498. El GHREN tiene motivos razonables para creer que el objetivo de la represión de las voces disidentes o inconformes fue suprimir todas las formas actuales o potenciales de crítica o protesta contra el Gobierno que puedan generar un cambio en el *status quo*. Así, se ha

⁹⁰² CIDH, Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 287 (5 octubre 2020), párr. 39; entrevistas del GHREN EEIV001, EEIV002, EEIV004, EEIV005, EEIV006, EEIV007, EEIV0010, EEIV0011, EEIV013, EEIV014.

⁹⁰³ Entrevistas del GHREN AAIV005, AAIV017, AAIV024, AAIV045.

⁹⁰⁴ Elvira Cuadra Lira, Quebrar el cuerpo, quebrar el alma: la reconfiguración de las violencias hacia las mujeres en Nicaragua 2018-2022, Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, 2022, p. 8.

producido un efecto silenciador generalizado, se ha provocado la desarticulación de movimientos sociales y organizaciones cívicas, se obstaculizado el acceso a información independiente, se han impedido las manifestaciones públicas, se han restringido las libertades de culto de la población, y se han anulado todas las alternativas políticas al partido de Gobierno.

3. Patrones

a) *Detenciones violentas, sin orden de detención, incomunicados y sin garantías*

i) Detenciones caracterizadas por el uso de la violencia

499. Las detenciones de personas opositoras, reales o percibidas, se caracterizaron por el uso de violencia por la Policía e integrantes de grupos armados pro-gobierno y el despliegue de grandes operativos para ejecutar las aprehensiones.⁹⁰⁵ En la gran mayoría de los casos investigados por el Grupo, agentes de la Policía Nacional y/o miembros de grupos armados pro-gobierno utilizaron la violencia de manera excesiva e innecesaria, incluyendo a través de disparos de arma de fuego, golpes con armas de fuego y otros objetos contundentes, golpes con puños, patadas, insultos y amenazas, tanto durante la aprehensión como en los traslados de las personas detenidas. Estos hallazgos son consistentes con lo afirmado previamente por el GIEI Nicaragua, la CIDH, y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.⁹⁰⁶

500. Las detenciones realizadas en el contexto de las manifestaciones de 2018 por agentes de la Policía Nacional y por integrantes de grupos armados pro-gobierno fueron particularmente violentas. Un testigo detenido el 19 de abril durante una marcha en Estelí relató al GHREN que agentes de la Policía lo detuvieron “*a patadas y golpes de puño, con bastones y culatas de armas, jaladas de cabello, insultos, y empujones*”. El testigo refirió que “[p]asamos por la UNAN y la UPONIC [Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y Universidad Popular de Nicaragua] de Estelí, hasta que en cierto punto del centro de la ciudad se nos puso enfrente [nombre de una persona civil] y nos sacó un revólver. La Policía no hizo nada, al contrario, se me tiró encima. Me sacaron los patrulleros de azul oscuro, famosos por usar la violencia extrema en la ciudad, me subieron a la patrulla, y empezaron a golpearme con las culatas de sus armas, alrededor de 4 o 5 policías. Pasé una noche en la estación de Policía, al día siguiente me dejaron [ir], con muchas advertencias”.⁹⁰⁷

501. Durante el periodo entre junio y agosto de 2018, conocido popularmente como la “operación limpieza”, las detenciones a menudo se realizaron en el marco de operativos de gran escala, con fuertes despliegues policiales y la participación de civiles encapuchados fuertemente armados que fueron identificados por las y los testigos como integrantes de grupos armados pro-gobierno. Un joven manifestante detenido en julio de 2018 junto con otras cinco personas describió:

A las 15:00 mientras íbamos en camino de regreso, aparecieron dos patrullas delante, y alcanzamos a ver a otras 15 que estaban parqueadas en la cuesta de la calle. De las patrullas bajaron un montón de oficiales y empezaron a balear nuestra camioneta. Eran policías revueltos, oficiales, antimotines y ‘paramilitares’. Me dieron un culetazo que me dejó la nariz rota, la ceja cortada y el ojo con una lesión permanente. Me agarraron y me tiraron en la tina [parte trasera de la camioneta]. Un comisionado me agarró a cachetazos, un oficial me puso la bota sobre la cara y empezó a restregármela en el piso de la tina. Al poco tiempo llegaron unas busetas

⁹⁰⁵ Entrevistas del GHREN EEIV004, EEIV005, EEIV006, EEIV007, EEIV009, EEIV010, EEIV011, EEIV012, EEIV015, EEIV017, EEIV023, EEIV063, EEIV064, EEIV065, EEIV066, EEIV067, EEIV068, EEIV069, CCIV056, AAIV046, AAIV047, AAIV048, AAIV049, AAIV050, AAIV051, AAIV052.

⁹⁰⁶ Informe GIEI Nicaragua, p. 197; CIDH, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 287, pp. 34–39; Informe Colectivo Nicaragua Nunca Más, “Volviendo a ser humano, Informe sobre excarcelados y excarceladas políticas” disponible en: <https://colectivodhnicaragua.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2020/02/Informe-Volviendo-a-ser-humanos.pdf>; Amnistía Internacional, Sembrando el terror.

⁹⁰⁷ Entrevista del GHREN EEIV016.

de la Dirección de Auxilio Judicial y me subieron en una de ellas. Me tenían enchanchado [esposado] con las manos hacía atrás y la cara en las rodillas, cuando vino una oficial y a puño me golpeó en la cara, me dio en el labio y me arrebató un diente.⁹⁰⁸

502. Otro joven manifestante relató al GHREN cómo fue detenido en julio de 2018 en Masaya:

Íbamos camino a Monimbó cuando una camioneta gris nos interceptó. De la camioneta bajaron siete personas con pasamontañas negras, armadas, vestidas de civil con zapatos deportivos [el testigo las identificó como 'paramilitares']. Me pusieron una AK en la nuca e intentaron sacarme del vehículo, yo dije que podía salir solo, pero me agarraron del pelo, intenté levantarme, pero me patearon en la canilla [espinilla] y me volví a caer. Al rato bajó su jefe, el director de la inteligencia de policía en Masaya. Uno de los muchachos me apuntó de nuevo a la cara. Me ataron las manos y me quitaron los zapatos. Me llevaron a la estación de policía de Nindirí. Mientras me tenían en la tina [parte trasera de la camioneta] me estaban pateando en el estómago.⁹⁰⁹

503. Los integrantes de grupos armados pro-gobierno también ejecutaron detenciones de manera aparentemente autónoma en el contexto de las manifestaciones de 2018, y entregaron después a las personas detenidas a la Policía Nacional. En algunos casos, las personas fueron trasladadas a lugares no oficiales de detención, donde fueron torturadas e interrogadas antes de ser entregadas a la policía. Una joven entrevistada por el GHREN se desplazaba junto con otros jóvenes, cuando su vehículo fue interceptado por integrantes de un grupo armado pro-gobierno:

Los paramilitares empezaron a disparar al vehículo. Perforaron las llantas [...] nos bajamos de la camioneta porque no había manera de seguir avanzando. Era un lugar vacío. En cuestión de minutos llegó un carro pequeño de donde salieron paramilitares armados y encapuchados. Empezaron a gritarnos y a decirnos: "Ahora sí no se pueden escapar". Nos pusieron en fila y nos apuntaron con las armas. Empezaron a gritar con furia: "¿Dónde están las armas?". Decían que si no les decíamos dónde estaban las armas nos iban a matar. Nos quitaron los teléfonos, revisaron el vehículo. Nosotros les decíamos que no teníamos armas. Nos gritaban: "¿Por qué le hacen esto a nuestro comandante?" [...] Fuimos esposados con los cordones de los zapatos [...] Nos empezaron a gritar más, que éramos tranquilos, que lo íbamos a pagar. A mí, uno de ellos me dijo "vos te vamos a violar y después te vamos a matar". Mientras me amarró las manos, uno me agarró del pelo, me levantó al aire y me tiró al suelo para que me quedara boca abajo en el piso, en la tierra.⁹¹⁰

504. A partir de julio de 2018 se registraron también aprehensiones selectivas de personas opositoras o percibidas como tales, que se realizaron en espacios públicos, oficinas, casas de habitación o en casas de seguridad donde las personas se encontraban resguardadas. A menudo las personas detenidas habían sido sometidas a vigilancia, actividades de inteligencia, intimidaciones y amenazas, durante semanas o meses antes de su detención. En al menos 25 casos investigados por el GHREN, las detenciones se realizaron con una presencia desproporcionada de fuerzas policiales, con despliegues que incluyeron elementos de la DOEP y personas vestidas de civil encapuchadas. El Grupo constató que en el desarrollo de dichos operativos, se produjo un patrón de violaciones al debido proceso y de violencia sobre las cosas.⁹¹¹ Como reslatón una víctima,

Alrededor de las 14:00 unos 40 antimotines de la DOEP tumbaron la puerta y entraron a mi casa. Entraban por todos lados, caían como hormigas del techo, pasaron por encima del muro, destrozaron las flores. Me llevaron a empujones, no pude ni contar la cantidad de patrullas que estaban estacionadas fuera de la casa

⁹⁰⁸ Entrevista del GHREN EEIV006.

⁹⁰⁹ Entrevista del GHREN EEIV004.

⁹¹⁰ Entrevista del GHREN AAIV010. Este relato coincide con la entrevista AAIV019.

⁹¹¹ Entrevistas del GHREN AAIV038, AAIV046, AAIV047, AAIV048, AAIV049, AAIV050, AAIV052, EEIV005, EEIV016, EEIV065.

[...]. Se llevaron varias cosas personales, mi cámara, filmadora, mis radios, mis grabadoras.⁹¹²

505. Durante muchas de estas detenciones y allanamientos los agentes de la Policía también agredieron a las personas detenidas y a las personas presentes en los inmuebles, incluyendo a familiares y personas de avanzada edad.⁹¹³ Varios niños y niñas estuvieron presentes durante las capturas violentas de sus familiares y los allanamientos y registros que siguieron.⁹¹⁴ Según un testimonio recabado por la misión,

*No tengo idea cómo lograron entrar a nuestra casa. Entraron más de 10 policías. Esposaron a mi abuela que estaba en silla de ruedas y sufre de demencia y a la trabajadora doméstica. Me dieron un galletazo [golpe] que me caí en el piso. Me pusieron las esposas tan fuertes que me dolían.*⁹¹⁵

506. Según otro testimonio:

*Llegaron a las 05:00, tres o cuatro patrullas de la policía, a mi padre de 79 años lo golpearon, lo tiraron al piso, mi mamá se puso a gritar hasta que se desmayó. Al día siguiente supimos que mi hermano estaba en el Chipote y un mes después lo trasladaron a la Modelo”.*⁹¹⁶

ii) Detenciones sin presentar una orden de detención

507. En ninguno de los 44 casos investigados por el GHREN se informó a las personas sobre el motivo de su detención o se les presentó con un mandato judicial u orden de detención policial. Tampoco se les permitió contactar a su familia o a quien estimaran conveniente.⁹¹⁷ Lo anterior, en contravención al art. 33 de la Constitución Política de Nicaragua y al art. 95 del Código Procesal Penal.

508. Con base al examen de órdenes de detención emitidas, cruzado con evidencia testimonial y documental, el GHREN pudo establecer que, en al menos 25 casos investigados por el Grupo, el Director de la DAJ emitió una orden de detención.

509. En los casos en que las detenciones se dieron en casas de habitación y otros inmuebles, estuvieron acompañadas del allanamiento y registro de estos. Dichos procedimientos también se realizaron sin presentar orden de detención o de allanamiento alguna, en contravención del Código Procesal Penal y la Constitución Política de Nicaragua, que establecen que sólo se podrá registrar o allanar el domicilio con orden escrita de juez competente.⁹¹⁸ Los allanamientos se dieron a menudo en horarios nocturnos, fuera del horario establecido en la ley, sin que concurrieran las circunstancias excepcionales previstas en la misma.⁹¹⁹ Tampoco se entregaron los recibos de ocupación de los bienes sustraídos de las viviendas de las personas detenidas.⁹²⁰

⁹¹² Entrevista del GHREN EEIV065.

⁹¹³ Entrevistas del GHREN EEIV009, EEIV023, EEIV063.

⁹¹⁴ Entrevistas del GHREN AAIV038, AAIV047, AAIV050.

⁹¹⁵ Entrevista del GHREN EEIV063.

⁹¹⁶ Entrevista del GHREN EEIV023.

⁹¹⁷ Entrevistas del GHREN EEIV004, EEIV005, EEIV007, EEIV006, EEIV009, EEIV012, EEIV015, EEIV016, EEIV017, EEIV024, EEIV035, EEIV045, EEIV063, EEIV064, EEIV065, EEIV066, EEIV067, EEIV069, BBIV003, AAIV002, AAIV008, AAIV018, DDIV022, AAIV010, AAIV019, AAIV046, AAIV047, AAIV048, AAIV049, AAIV050, AAIV051, AAIV052.

⁹¹⁸ Constitución Política de Nicaragua, art. 26; Código Procesal Penal, art. 217.

⁹¹⁹ El art. 217 párr. 2 del Código Procesal Penal establece que “la diligencia de allanamiento deberá practicarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde. Podrá procederse a cualquier hora cuando el morador o su representante consienta o en los casos sumamente graves y urgentes, en los que los jueces resolverán en un plazo máximo de una hora las solicitudes planteadas por el fiscal o el jefe de la unidad policial a cargo de la investigación”.

⁹²⁰ Entrevistas del GHREN EEIV003, EEIV004, EEIV005, EEIV009, EEIV013, EEIV019, EEIV020, EEIV021, EEIV025, EEIV028, EEIV065, EEIV067, EEIV069, AAIV038, AAIV046, AAIV047, AAIV048, AAIV049, AAIV050, AAIV051, AAIV052; documentos en el archivo del GHREN AADOC031, AADOC053.

iii) Falta de presentación ante autoridad judicial dentro del plazo legal

510. Según la Constitución Política de Nicaragua, las personas detenidas tienen el derecho de ser presentadas ante autoridad competente dentro del plazo de 48 horas posteriores a su detención o, de lo contrario, a ser puestas en libertad.⁹²¹ El Código Procesal Penal también reconoce este derecho y establece que las personas detenidas deberán ser presentadas ante el juez o jueza para la celebración de la audiencia preliminar, donde el Ministerio Público deberá presentar su acusación. De no cumplirse este requisito, el juez o la jueza deberá ordenar la libertad de la persona detenida.⁹²²

511. El Grupo de Expertos documentó cómo desde el inicio de las protestas, se violó de manera sistemática este derecho de las personas detenidas. En todos los casos investigados por el GHREN, las víctimas fueron presentadas por primera vez ante una autoridad judicial, e informadas de las razones de su detención varios días, e incluso semanas, después de la misma.⁹²³

iv) Falta de efectividad del recurso de exhibición personal o habeas corpus

512. El GHREN tiene motivos razonables para creer que las autoridades judiciales, policiales y del Sistema Penitenciario Nacional entorpecieron o impidieron deliberadamente la ejecución de los recursos de exhibición personal o *habeas corpus* interpuestos a favor de personas opositoras o percibidas como tales, negándoles su derecho a comparecer y a impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal.⁹²⁴

513. El GHREN recibió abundante información sobre prácticas utilizadas por las autoridades para retrasar la ejecución de los recursos de exhibición personal, que incluyeron: la designación por la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de personas fallecidas o que residían en el extranjero o en departamentos lejanos a los centros penitenciarios como jueces o juezas ejecutoras; el nombramiento de jueces o juezas ejecutoras que se excusaban repetidamente de realizar dichas exhibiciones; o la negativa por parte de las autoridades de la DAJ y del Sistema Penitenciario a dar cumplimiento a las órdenes vinculadas con dichos recursos, impidiendo que los jueces y juezas ejecutoras pudieran ver a las personas detenidas.⁹²⁵ En algunos casos, los jueces o juezas declararon los recursos de exhibición personal inadmisibles, aduciendo que no habían transcurrido las 48 horas del plazo máximo para la presentación de la persona detenida ante la autoridad judicial, que la persona detenida había sido presentada ante un juez o jueza competente para una audiencia especial de protección de garantías constitucionales, o que la ejecución de dicho recurso está fuera de su competencia y corresponde a la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones, entre otros.⁹²⁶

v) Desaparición forzada y reclusión en régimen de aislamiento

514. El GHREN constató un patrón consistente en la incomunicación de las personas detenidas, y la negativa de las autoridades a proporcionar información a sus familiares o representantes legales sobre su paradero. Dicho hallazgo coincide con lo expresado por ACNUDH, la CIDH, el WGAD, y organizaciones internacionales y nacionales de derechos

⁹²¹ Constitución Política de Nicaragua, art. 33 inciso 2.2.

⁹²² Código Procesal Penal, arts. 95(9) y 256. Véase también CIDH, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 287, pp. 42–44.

⁹²³ EL GHREN investigó 44 casos de personas detenidas entre abril de 2018 y septiembre de 2022. En todos los casos las audiencias preliminares se realizaron varios días, incluso semanas después de la aprehensión de la persona.

⁹²⁴ ICCPR, art. 9, párrs. 3–4. Dicho recurso está regulado por la Ley No. 49, Ley de Amparo, aprobada el 11 de febrero de 2008, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 212 del 4 de noviembre de 2008, arts. 52 a 60.

⁹²⁵ Entrevistas del GHREN EEIV014, EEIV032; documentos confidenciales en el archivo del GHREN EEDOC103, EEDOC104. Véase también CIDH, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 287, pp. 114–115; CIDH, Comunicado de prensa 210/2018 “Relatoría sobre los Derechos de Personas Privadas de Libertad realiza visita a Nicaragua”, Managua/Washington DC (26 de septiembre de 2018); ACNUDH, Informe 2018, párr. 84.

⁹²⁶ Amnistía Internacional, “Nicaragua: ¿Dónde están?: Desaparición forzada como estrategia de represión”, 25 de agosto de 2021, p. 13, disponible en: <https://www.amnesty.org/es/documents/amr43/4631/2021/es/>.

humanos.⁹²⁷ En varios casos, estos hechos pueden calificarse técnicamente como desapariciones forzadas.

515. En la mayoría de los casos investigados por el GHREN, las personas fueron detenidas por miembros de la Policía Nacional en lugares públicos o en sus casas y trasladadas a estaciones de policía o a la Dirección de Auxilio Judicial. En al menos 31 casos investigados por el GHREN, tras su traslado las personas detenidas permanecieron en régimen de aislamiento e incomunicación durante periodos que duraron entre unos días a varios meses sin permitírseles ningún contacto con sus familias ni con sus abogados o abogadas. La detención prolongada en régimen de incomunicación puede facilitar la perpetración de violencia sexual y de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y puede constituir en sí misma tal trato. En al menos 29 de los casos investigados por el GHREN, las personas fueron sometidas a dichos tratos durante el periodo de aislamiento e incomunicación.⁹²⁸

516. De acuerdo con numerosos testimonios recabados por el GHREN, a pesar de las múltiples solicitudes por parte de las y los familiares y los equipos jurídicos de las personas detenidas, las autoridades les negaron la información sobre su ubicación.⁹²⁹ En algunos casos, el Ministerio Público o la Policía emitió un comunicado de prensa en referencia a la detención de las personas, confirmando que éstas se encontraban bajo custodia del Estado. Sin embargo, no se reveló el lugar de reclusión de las personas ni se proporcionó información sobre su estado de salud o condiciones de detención.

517. Ante la falta de información sobre las personas detenidas, sus familiares y representantes legales plantearon recursos de exhibición personal o *habeas corpus*. Sin embargo, como se ha expuesto, dichos recursos no se ejecutaron de manera eficaz.

518. El GHREN también recibió información sobre detenciones realizadas durante las protestas de 2018 por integrantes de grupos armados pro-gobierno, quienes trasladaron a las personas detenidas a lugares no oficiales de detención. Según la información recibida, las personas permanecieron desaparecidas en dichos lugares durante periodos que oscilaron desde horas hasta días, incluyendo lugares secretos, casas del partido FSLN, o instalaciones de alcaldías.⁹³⁰ Posteriormente fueron entregadas a la policía, en algunos casos con signos evidentes de tortura.

⁹²⁷ ACNUDH, Informe2018, pp. 29–30; WGAD, Opinión núm. 39/2020 (Nicaragua), A/HRC/WGAD/2020/39 (9 de octubre de 2020); WGAD, Opinión núm. 10/2022 (Nicaragua), A/HRC/WGAD/2022/10 (27 de mayo de 2022); WGAD, Opinión núm. 19/2019 (Nicaragua), A/HRC/WGAD/2019/19 (2 de julio de 2019); CIDH, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 287, párr. 77; Amnistía Internacional, “Nicaragua: ¿Dónde están?: Desaparición forzada como estrategia de represión” (25 de agosto de 2021); Colectivo Nicaragua Nunca Más, “Nicaragua entre represión y resistencia ciudadana, La situación de derechos humanos en Nicaragua 2021–2022”, p. 57.

⁹²⁸ Entrevistas del GRHEN, EEIV004, EEIV005, EEIV006, EEIV007, EEIV009, EEIV010, EEIV012, EEIV015, EEIV016, EEIV018, EEIV019, EEIV020, EEIV023, EEIV024, EEIV036, EEIV45, EEIV050, EEIV063, EEIV064, EEIV065, EEIV066, EEIV067, EEIV068, EEIV069, AAIV046, AAIV048, AAIV049, AAIV050, AAIV052. El WGAD ha reiterado en distintas ocasiones que la privación de libertad en régimen de incomunicación coloca a las personas fuera de la protección de la ley y vulnera el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica consagrado en el art. 6 de la Declaración Universal y el art. 16 del ICCPR. Por ello, el WGAD siempre ha sostenido que la reclusión en régimen de incomunicación constituye un acto de detención arbitraria. WGAD, Vínculos entre la detención arbitraria y los casos de tortura y malos tratos, A/HRC/39/45 (2 de julio 2018), párrs 59–60.

⁹²⁹ Entrevistas del GHREN EEIV006, EEIV007, EEIV012, EEIV013, EEIV016, EEIV020, EEIV022, EEIV024, EEIV029, EEIV042, EEIV045, EEIV036, EEIV034, EEIV028, EEIV065, EEIV069.

⁹³⁰ Entrevistas del GHREN BBIV003, EEIV045, EEIV069, CIDH, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 287, párr. 109. Véase también, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/16/52 (3 de febrero 2011), párrs. 67–68. El Relator Especial recordó la resolución 60/148 de la Asamblea General y la resolución 8/8 del Consejo de Derechos Humanos, en que se afirma que la detención prolongada en situación de incomunicación o la detención en sitios secretos pueden facilitar la comisión de actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y constituir en sí una forma de trato de ese tipo. Véase UNGA, La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, A/RES/60/148 (21 de febrero de 2006).

b) *Instrumentalización del derecho penal*

519. Durante el período que se examina, las autoridades de Nicaragua instrumentalizaron el derecho penal y el sistema de justicia para detener arbitrariamente y perseguir por la vía penal a personas opositoras o percibidas como tales. Se utilizaron acusaciones penales infundadas, desproporcionadas, basadas en leyes violatorias de los derechos humanos y/o en pruebas falsas, como instrumento de persecución política, y se privó a las personas acusadas de sus derechos al debido proceso y defensa, quedando totalmente indefensas frente a estas acusaciones.

520. El GRHEN investigó 44 casos de detenciones de personas privadas de su libertad como consecuencia de su participación en las protestas sociales de 2018 y/o del ejercicio de su derecho a la libertad de asociación y reunión pacífica, libertad de opinión y de expresión, y/o libertad de pensamiento, conciencia y religión. En los 44 casos investigados, el Grupo pudo establecer que las autoridades del sistema de justicia privaron de su libertad a personas opositoras o percibidas como tales de manera arbitraria.⁹³¹ Las víctimas de detención arbitraria en los casos investigados fueron condenadas a penas de prisión largas, de entre cuatro y 17 años de prisión, y fueron sometidas a condiciones de detención contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos.⁹³²

521. Asimismo, el GHREN analizó 25 expedientes judiciales,⁹³³ y consideró la información contenida en informes de organismos internacionales y mecanismos de protección de los derechos humanos - incluyendo la CIDH, ACNUDH y el CAT -; informes y otra documentación puesta a disposición por organizaciones de la sociedad civil como peritajes; y material fotográfico y audiovisual.⁹³⁴ Con base al conjunto de información analizada, el GHREN tiene motivos razonables para creer que las detenciones arbitrarias fueron utilizadas de manera sistemática y generalizada para perseguir a personas opositoras al Gobierno o consideradas como tales.

522. El Grupo pudo identificar patrones de reiteración de conductas, una evolución de la estrategia en el tiempo, y la intervención concertada de diferentes instituciones y Poderes del Estado. El GHREN concluyó que dichas violaciones no fueron actos aislados o aleatorios, sino que fueron parte de una política de Estado con el objetivo de suprimir toda crítica o acto de oposición. Dicha política incluyó la adopción de legislación penal contraria a los estándares internacionales de derechos humanos, con la finalidad de aportar una apariencia de legalidad a las prácticas de detención arbitraria desarrolladas, y de facilitar la criminalización de las personas consideradas críticas u opositoras al Gobierno.

523. De acuerdo con datos proporcionados por la CIDH, 2.018 personas habían sido privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de la crisis de derechos humanos nicaragüense, desde abril de 2018 hasta diciembre de 2022.⁹³⁵ A la fecha de redacción de este informe, 37 personas que se autoidentificaron como “presas políticas” continúan detenidas.⁹³⁶

524. Los perfiles de las víctimas y los cargos empleados para la instrumentalización del derecho penal evolucionaron en el tiempo. El GHREN documentó una serie de patrones

⁹³¹ Estas privaciones de libertad se encuadran dentro de las categorías de privaciones arbitrarias de libertad desarrolladas por el WGAD.

⁹³² Las personas detenidas fueron también víctimas de desapariciones forzadas, y de actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

⁹³³ El GHREN pudo obtener 25 expedientes judiciales parciales que proporcionaron suficientes elementos para realizar un análisis comprensivo del proceso judicial. El GHREN también recibió otros 19 expedientes incompletos que proporcionaron información adicional consistente con los patrones identificados. El GHREN subraya la falta de acceso a los expedientes completos por parte de las propias víctimas y de sus defensas técnicas.

⁹³⁴ Organizaciones que han puesto a disposición del GHREN expedientes judiciales y otra documentación han sido la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN), la UDJ, el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos.

⁹³⁵ Datos compartidos con el GHREN por la CIDH, elaborados a partir de la base de datos de personas privadas arbitrariamente de la libertad del MESENI.

⁹³⁶ Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, informe de febrero 2023, disponible en: <https://presasypresospolicosnicaragua.org/wp-content/uploads/2023/02/03ea9894-16a8-4c62-8c3c-6ebf01258e6e.pdf>.

dentro de distintas etapas por las que ha pasado el uso de la detención arbitraria como mecanismo de represión de los actos de las personas opositoras al Gobierno o consideradas como tales. Durante estas etapas, se evidencian prácticas diferenciadas, así como una progresiva sofisticación en los métodos empleados, que incluyeron el desarrollo de legislación específica para perseguir a las personas opositoras o percibidas como tales. Pueden distinguirse las siguientes grandes fases.

Abril de 2018 a junio de 2018

525. Durante este periodo se produjeron detenciones masivas, violentas e indiscriminadas en el contexto de manifestaciones, realizadas por agentes de la Policía Nacional en coordinación con integrantes de grupos armados pro-gobierno.⁹³⁷ El GIEI Nicaragua caracterizó estas detenciones como “razzias policiales”.⁹³⁸ Durante estos operativos, cientos de hombres y mujeres, y decenas de adolescentes fueron privados de su libertad.⁹³⁹ La mayoría de las personas detenidas fueron liberadas entre 24 y 48 horas después.

Julio de 2018 a junio de 2019

526. Se inicia la criminalización selectiva de liderazgos.⁹⁴⁰ Durante este periodo continuaron las detenciones masivas en el contexto de las manifestaciones y los operativos de levantamiento forzoso de tranques, conocidos popularmente como “operación limpieza”. Además, se inició la persecución penal selectiva de personas que habían asumido un rol de liderazgo en el contexto de las manifestaciones, así como de periodistas considerados críticos y críticas del Gobierno, bajo acusaciones de entorpecimiento de servicios públicos (en relación a tranques y barricadas), y delitos graves como terrorismo; asociación para delinquir; crimen organizado; secuestro; y delitos relacionados con la portación o tenencia, tráfico, fabricación y uso de armas, entre otros.⁹⁴¹ Durante este periodo se comenzó a gestar una práctica que se afianzó en 2020, consistente en la adopción o modificación de legislación para permitir o facilitar la persecución penal de las personas opositoras al Gobierno o consideradas como tales. Así, el 16 de julio de 2018, la Asamblea Nacional aprobó la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva que modificó las definiciones de terrorismo y financiamiento al terrorismo contenidas en el Código Penal.⁹⁴²

Febrero a junio de 2019

527. En este periodo se produjo la liberación de 492 personas relacionadas con las protestas sociales en el marco de la “Mesa de Negociación por el Entendimiento y la Paz”⁹⁴³ entre el

⁹³⁷ Entrevistas del GHREN EEIV004, EEIV005, EEIV006, EEIV007, EEIV016, EEIV045, EEIV050, EEIV67, EEIV069.

⁹³⁸ Informe GIEI Nicaragua, p. 194.

⁹³⁹ La CIDH registró más de 200 adolescentes privados de libertad durante los primeros días de las protestas; algunos fueron detenidos en centros reservados para hombres adultos mayores de 18 años. CIDH, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 287, párrs. 174–175.

⁹⁴⁰ El GHREN investigó 20 casos de detenciones de manifestantes entre julio de 2018 y junio de 2019 (13 hombres, siete mujeres, incluyendo una mujer trans, y un niño).

⁹⁴¹ Expedientes al archivo del GHREN EEDOC003, EEDOC006, EEDOC053, EEDOC054, EEDOC059, EEDOC064, EEDOC065, EEDOC066, EEDOC066, EEDOC078; entrevistas del GRHEN AAIV010, AAIV019.

⁹⁴² Véase Capítulo III.1.4 del presente informe para un análisis detallado de la Ley contra el Lavado de Activos. Ley No. 977, Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobada el 16 de julio de 2018, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 138 del 20 de julio de 2018 (en adelante “Ley contra el Lavado de Activos”), disponible en: https://www.bcn.gob.ni/sites/default/files/marco_juridico_financiero/12_Ley_No_977_Ley_contra_el_Lavado_de_Activos.pdf.

⁹⁴³ El proceso de negociación comenzó el 27 de febrero y finalizó el 27 de marzo de 2019. Se acordó la liberación de todas las personas detenidas en el marco de los acontecimientos de abril de 2018 y el cierre jurídico definitivo de sus casos de conformidad con la legislación vigente. Se acordó, además, que el Comité Internacional de la Cruz Roja supervisaría el proceso de liberación en base a una lista actualizada y consolidada, que se elaboró a partir de listas presentadas por las dos partes.

Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.⁹⁴⁴ La entrada en vigor de la Ley de Amnistía el 10 de junio de 2019 dejó sin efecto las medidas de privación de la libertad dictadas contra todas las personas que participaron en los eventos de 2018, incluidas las personas manifestantes.⁹⁴⁵

Julio de 2019 a diciembre de 2020

528. Durante esta fase se produce el hostigamiento y recapturas de personas excarceladas y desarrollo de una arquitectura legal para criminalizar. Durante los meses siguientes a las liberaciones, y en especial a partir de la suspensión de los trabajos de la Mesa de Negociación en julio de 2019, se constataron patrones de intimidación, amenazas, y vigilancia permanente por elementos de la Policía Nacional y por civiles integrantes de grupos pro-gobierno a las personas excarceladas.

529. Si bien el número de personas detenidas se redujo sustancialmente a raíz del proceso de liberaciones descrito, en junio de 2019, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas aún reportaba un total de 91 hombres que seguían privados de libertad por motivos políticos. Esta cifra fue ascendiendo durante los siguientes meses y hasta el 30 de diciembre de 2019, cuando el Ministerio de Gobernación anunció nuevamente la liberación de otras 91 personas bajo el régimen especial de convivencia familiar.⁹⁴⁶

530. Durante este periodo también se produjeron numerosas recapturas de personas que habían sido previamente detenidas por su participación en las manifestaciones de 2018. Se acusó a personas opositoras, reales o percibidas, de la comisión de delitos comunes, incluyendo tráfico de drogas, tráfico y tenencia ilegal de armas, y robo agravado.⁹⁴⁷ Entre octubre y diciembre de 2020, la Asamblea Nacional adoptó dos leyes que fueron instrumentales para la persecución penal de las personas opositoras o percibidas como tales: la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Soberanía.⁹⁴⁸

531. En noviembre de 2021 se registraron 22 detenciones (17 hombres y 5 mujeres) de personas que habían sido activas en la organización de movimientos y partidos políticos para la participación en las elecciones presidenciales. Entre las personas detenidas se encontraban

⁹⁴⁴ Según el Ministerio de Gobernación, 350 de estas liberaciones se realizaron por decisión unilateral del Gobierno, 36 basadas en la lista presentada en la Mesa de Negociación y 106 con motivo de la aprobación de la Ley de Amnistía. Ministerio de Gobernación, Nota de prensa del 27 de febrero 2019 (100 personas), disponible en: <https://www.migob.gob.ni/nota-de-prensa-25/>; Nota de prensa del 15 de marzo 2019 (50 personas), disponible en: <https://www.migob.gob.ni/nota-de-prensa-13-2-2/>; Nota de prensa del 5 de abril 2019 (50 personas), disponible en: <https://www.migob.gob.ni/nota-de-prensa-13-2-2/>; Nota de prensa del 20 de mayo 2019 (100 personas); Nota de prensa del 30 de mayo 2019 (50 personas) disponible en: <https://www.migob.gob.ni/nota-de-prensa-19/>; Ministerio de Gobernación, Nota de prensa del 16 de abril 2019 (36 personas) disponible en: <https://www.migob.gob.ni/nota-de-prensa-14/>; Nota de prensa del 10 de junio 2019 (50 personas), disponible en: <https://www.migob.gob.ni/nota-de-prensa-21/>; Nota de prensa del 11 de junio 2019 (56 personas), disponible en: <https://www.migob.gob.ni/nota-de-prensa-22/>.

⁹⁴⁵ La Ley de Amnistía se caracterizó por una ambigüedad en relación con los delitos amnistiados, las personas beneficiadas y las autoridades que determinarían la aplicación de la amnistía. Además, la Ley contempló la posibilidad de revocar los beneficios establecidos por la misma si se perpetraban “nuevos hechos que incurrieran en conductas repetitivas generadoras de los delitos (...) contemplados” y sin establecer un período de prescripción (art. 3). Así, no se extinguiría por completo la acción penal, tal y como contempla el Código Procesal Penal (arts. 6, 72 y 155) sino que ésta quedaría en una suerte de suspensión, y podría ser reactivada en cualquier momento si se cometiera un nuevo delito.

⁹⁴⁶ Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, Informe mensual, junio 2019, disponible en: <https://presasypresopoliticospolicosnicaragua.org/wp-content/uploads/2020/08/Personas-Presas-Politicospolicosnicaragua-Junio-2019.pdf>; Ministerio de Gobernación, Nota de prensa 30 de diciembre 2019, disponible en: <https://www.migob.gob.ni/nota-de-prensa-25/>.

⁹⁴⁷ Documentos en el archivo del GHREN EEDOC071, EEDOC160, EEDOC260; entrevistas del GHREN EEIV067, EEIV069.

⁹⁴⁸ Véase Capítulo III.1.4 del presente informe para un análisis detallado de estas leyes. Ley No. 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada el 27 de octubre de 2020, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 201 del 30 de octubre de 2020 (en adelante “Ley de Ciberdelitos”); Ley No. 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada el 21 de diciembre de 2020, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 237 del 22 de diciembre de 2020 (en adelante “Ley de Soberanía”).

al menos nueve personas que habían sido privadas de su libertad previamente por su participación en las manifestaciones de 2018.⁹⁴⁹ Durante este periodo se comenzaron a utilizar los nuevos tipos penales de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, introducidos a finales de 2020, y que desde 2021 se convirtieron en los tipos penales más utilizados para perseguir a personas opositoras o percibidas como tales.

2022–actualidad

532. Las detenciones de familiares de víctimas y persecución penal por ejercer las libertades de expresión y de conciencia o religión. Desde agosto de 2022 y hasta la fecha de redacción de este informe, la criminalización se ha extendido también a otros perfiles de voces críticas, con la detención de 12 líderes religiosos e integrantes de la Iglesia Católica, un académico y al menos 8 familiares de personas opositoras o percibidas como tales, incluyendo familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos que habían reclamado justicia para sus seres queridos.

c) *Adopción de leyes para restringir y criminalizar el ejercicio de libertades fundamentales*

533. La Asamblea Nacional adoptó una serie de leyes que fueron utilizadas para criminalizar el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir penalmente a personas opositoras, reales o percibidas. Entre ellas se incluyen la “Ley Contra el Lavado de Activos”, la “Ley de Ciberdelitos”, la “Ley de Soberanía”, y la Ley No. 1060 de reforma al Código Procesal Penal.

i) *Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva*

534. La Ley Contra el Lavado de Activos reforma los artículos 394 y 395 del Código Penal, que tipifican respectivamente los delitos de “terrorismo” y “financiamiento al terrorismo”.⁹⁵⁰ Según la disposición reformada del Código Penal, comete el delito de terrorismo “[q]uien individualmente o actuando en conjunto con organizaciones terroristas realice cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a cualquier persona o a destruir o dañar bienes o servicios públicos o privados, cuando el propósito de dichos actos, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”. La Ley establece una pena de quince a veinte años de prisión.⁹⁵¹

535. Esta definición es más amplia que la de “actos terroristas” contenida en la Ley contra el Lavado de Activos,⁹⁵² ya que hace referencia a la destrucción o daño de bienes o servicios públicos o privados. Dicho precepto se ha considerado en perjuicio del derecho a las libertades de reunión pacífica y de expresión, ya que podría utilizarse en contra de las personas que participan en manifestaciones públicas en las que, inadvertidamente, se causen daños materiales.⁹⁵³

536. Un grupo de Relatores y Relatoras Especiales de la ONU expresó preocupación sobre lo anterior, al concluir que la referencia a daños a “bienes o servicios públicos o privados”

⁹⁴⁹ Listado proporcionado por la organización Unidad de Registro (UDR), en el archivo del GHREN EEDOC102.

⁹⁵⁰ Ley contra el Lavado de Activos, arts. 4.2, 4.15, 4.16 y 44.

⁹⁵¹ Ley contra el Lavado de Activos, art. 44, que reforma el art. 394 del Código Penal.

⁹⁵² “Actos terroristas; Son aquellos que tengan como objetivo causar la muerte o lesiones físicas y/o psíquicas contra cualquier persona, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, es intimidar a una población u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”, así como aquellos actos definidos en una serie de instrumentos internacionales de los que Nicaragua es parte. Ley contra el Lavado de Activos, art. 4.2.

⁹⁵³ Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, A/HRC/40/52 (1 de marzo de 2019), párr. 41; Carta de los Mandatos Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos al Gobierno de la República de Nicaragua, OL NIC 4/2020 (4 de enero de 2021), p. 2.

puede interpretarse por las autoridades para indebidamente calificar y criminalizar a manifestantes que no son pacíficos como “terroristas”. El Grupo de Expertos coincide en que la posible calificación de terroristas a manifestantes que participen en manifestaciones que se tornen violentas, desconoce la esencia del concepto de terrorismo, y restringe de manera desproporcionada el ejercicio de la libertad de reunión. En este sentido, los delitos contra la propiedad, que no tengan la calidad de terrorismo e independientemente de su gravedad, no deben ser objeto de legislación antiterrorista.⁹⁵⁴

537. Tanto la definición de “organización terrorista” como la de “terrorista” conforme a la Ley contra el Lavado de Activos prevé la participación “como cómplice” como requisito suficiente para que su actividad sea considerada como terrorista y reciba la pena correspondiente.⁹⁵⁵ Lo anterior introduce una amplia discreción para que las autoridades pertinentes puedan calificar a una persona como participante en una actividad terrorista basándose en criterios jurídicos de participación y complicidad imprecisos.

538. Por lo que respecta al financiamiento al terrorismo, el art. 395 del Código Penal modificado por la Ley contra el Lavado de Activos castiga con penas de entre 15 y 20 años de prisión a “quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, recolecte, capte, canalice, deposite, transfiera, traslade, asegure, administre, resguarde, intermedie, preste, provea, entregue activos, sean estos de fuente lícita o ilícita, con la intención de que se utilicen o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para [...]” cometer actos terroristas.⁹⁵⁶

539. El GHREN examinó varios casos de acusaciones por delitos de terrorismo planteadas desde abril de 2018, y concluyó que en dichos casos las autoridades del sistema de justicia hicieron uso de dichos tipos penales para procesar a personas por hechos que no guardaban congruencia con el tipo penal. De acuerdo con información proporcionada al GHREN por la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), desde abril de 2018 se registraron 174 acusaciones por terrorismo en Nicaragua, entre ellas 13 por conspiración para cometer actos terroristas y cinco por financiamiento al terrorismo.

ii) Ley No. 1042: Ley Especial de Ciberdelitos

540. La Ley de Ciberdelitos entró en vigor a finales del 2020. El art. 30 de la Ley de Ciberdelitos tipifica como delito la “propagación de noticias falsas”, estableciendo que:

quien, usando las [t]ecnologías de la [i]nformación y la [c]omunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella a una persona o a su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días multa”. La Ley prevé una pena de uno a tres años de prisión en los casos en que la publicación o difusión de dicha información perjudique “el honor, prestigio o reputación” de una persona o su familia; y pena de tres a cinco años de prisión si dicha publicación o información “incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana.”⁹⁵⁷

541. Un grupo de Relatores y Relatoras Especiales de la ONU expresó preocupación sobre la compatibilidad del art. 30 con el art. 19 del ICCPR, y el art. 13 de la Convención Americana.⁹⁵⁸ El ICCPR “no autoriza las prohibiciones penales de la expresión de opiniones erróneas o interpretaciones incorrectas de acontecimientos pasados”.⁹⁵⁹ Además, el delito en

⁹⁵⁴ OL NIC 4/2020, p. 2.

⁹⁵⁵ Ley contra el Lavado de Activos, art. 4.15 y 4.16.

⁹⁵⁶ Ley contra el Lavado de Activos, art. 44, que reforma el art. 395 del Código Penal.

⁹⁵⁷ Ley de Ciberdelitos, art. 30.

⁹⁵⁸ Comunicación OL NIC 3/2020 de la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos y la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo al Gobierno de la República de Nicaragua (13 de noviembre de 2020).

⁹⁵⁹ CCPR/C/GC/34, párr. 49.

el art. 30 está tipificado en términos ambiguos y subjetivos, prohibiendo la difusión de “información falsa” o “información tergiversada”, lo cual es incompatible con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión.⁹⁶⁰ El GHREN coincide con los Relatores y las Relatoras Especiales en señalar que la Ley de Ciberdelitos viola el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, al prever el uso del derecho penal en varios de sus artículos para sancionar actos que pueden enmarcarse dentro del ejercicio de dicho derecho.

542. El art. 30 de la Ley requiere que la información que se considera falsa “*produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella a una persona o a su familia*”. Como lo han señalado los Relatores y las Relatoras Especiales, este criterio es intrínsecamente subjetivo, haciendo difícil predecir de antemano qué tipos de información podrían producir dicho efecto.⁹⁶¹ La falta de precisión en la definición del delito de propagación de información falsa genera un elevado nivel de incertidumbre jurídica y podría tener un efecto inhibitorio en la difusión de ideas, críticas e información por miedo a sufrir un proceso penal. Por ejemplo, podría llevar a la persecución penal de personas por expresar información errónea de buena fe. Del mismo modo la parodia, la sátira política y el debate sobre asuntos de interés público, discursos protegidos por el ICCPR, podrían quedar abiertos a sanción a tenor de la Ley.

543. El art. 30 de la Ley también introduce la pena de prisión para casos de difamación. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos ha expresado que el encarcelamiento no es nunca un castigo adecuado para estos casos.⁹⁶² Además, el mismo Código Penal no prevé la pena de prisión como castigo por calumnia o injuria, y el motivo para la imposición de esta pena no se justifica debidamente en la Ley de Ciberdelitos.⁹⁶³

544. Las declaraciones realizadas por las más altas autoridades dejan clara la intención del Gobierno nicaragüense de restringir de manera ilícita la libertad de expresión.⁹⁶⁴ Desde su adopción a finales de 2020, se han documentado al menos 55 casos en los que se utilizó la Ley de Ciberdelitos para perseguir penalmente la expresión de opiniones políticas.⁹⁶⁵

iii). Ley No. 1055: Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

545. En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Soberanía, la cual consta de un único artículo sustantivo que establece que:

Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico, serán “Traidores a la Patria” por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin

⁹⁶⁰ *Ibid.*

⁹⁶¹ OL NIC 3/2020.

⁹⁶² CCPR/C/GC/34, párr. 47.

⁹⁶³ Véase Código Penal Título IV.

⁹⁶⁴ Por ejemplo, en junio de 2021, Rosario Murillo expresó durante una entrevista radial: “A veces las Personas creen que ser Comunicador les da carta de impunidad para convertir los Espacios de Comunicación en Espacios de intimidación y de destrucción de la tranquilidad [...] ser Periodista es ser veraz, responsable, es comunicar los hechos, sin sesgos, y sobre todo sin Agendas Políticas de una Cultura, masiva desgraciadamente, de Odio. Cultura de Odio, esa es la que destilan los Medios Internacionales de Comunicación”. El 19 Digital, “Compañera Rosario Murillo en Multinoticias” (Managua, 25 de junio de 2021), disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:117652-companera-rosario-murillo-en-multinoticias-25-06-21>.

⁹⁶⁵ Listado proporcionado por UDR, en el archivo del GHREN EEDOC102.

*perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua para los “Actos de Traición”, los “Delitos que comprometen la Paz” y los “Delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua”.*⁹⁶⁶

546. La Ley de Soberanía infringe las libertades de expresión y de opinión, y el derecho a participar en la vida pública, al sancionar la expresión de opiniones protegidas por el derecho internacional, como el discurso político, y limitar de manera desproporcionada y arbitraria el derecho de participación política. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos, que supervisa el cumplimiento por los Estados del ICCPR, ha señalado que las restricciones al derecho a postularse a cargos públicos deben basarse en criterios “objetivos y razonables”.⁹⁶⁷

547. Esta legislación también podría facilitar la inhabilitación para acceder a cargos de elección popular de las personas que hubieran participado en las protestas de 2018, las cuales, como se expuso previamente, el Gobierno calificó de “intento de golpe de Estado”. Por otro lado, la Ley estigmatiza al definir como “traidores a la patria”, entre otros, a quienes “demanden o aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos” o “inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos”.

548. La Ley de Soberanía no prevé la creación de un nuevo tipo penal de “traición a la patria”. El artículo único de esta Ley describe las conductas genéricamente denominadas “traición a la patria” o “traidores a la patria,” que en virtud de esta son susceptibles de una especie de sanción, ya que la ley prevé la inhabilitación para optar a cargos de elección popular. La Ley tampoco determina ningún proceso específico, penal, administrativo, o de cualquier otra naturaleza, para la aplicación de dicha sanción.

549. El 9 de febrero de 2023, la Ley de Soberanía fue invocada por el Tribunal de Apelaciones de Managua para agregar sanciones a personas detenidas y juzgadas por otros delitos. Estas sanciones incluyeron en un primer momento la inhabilitación para ejercer cargos de elección pública, y después la privación de la nacionalidad y la expulsión de 222 personas.⁹⁶⁸ Además, fue utilizada para privar arbitrariamente de su nacionalidad a otras 94 personas, a través de una resolución que las declaró traidoras a la patria. Las personas fueron también declaradas prófugas de la justicia y se ordenó la confiscación de todos sus bienes a favor del Estado. Dichas sanciones gravísimas se aplicaron sin la celebración de ningún proceso legal que permitiera a las personas ejercer su derecho a la defensa.

iv) Ley No. 1060 de reforma al Código Procesal Penal

550. En febrero de 2021, la Asamblea Nacional introdujo una reforma al Código Procesal Penal que permitió “legalizar” las detenciones prolongadas sin presentar una acusación.

551. La Ley No. 1060 introdujo el art. 253 *bis* en el Código Procesal Penal, que permite a los jueces o juezas dictar una medida de ‘detención judicial’, ampliando el plazo máximo de 48 horas entre la detención y la audiencia preliminar establecido en la Constitución, hasta 90 días.⁹⁶⁹ El Ministerio Público podrá solicitar la ampliación del plazo durante una audiencia especial de tutela de garantías “*Siempre que se considere que los resultados de la*

⁹⁶⁶ Ley de Soberanía, art. 1.

⁹⁶⁷ Comité de Derechos Humanos, Observación general No. 25, Artículo 25, la participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, HRI/GEN/1/Rev.7 (1996), párr. 4.

⁹⁶⁸ El 19 Digital, “Declaración del Magistrado Presidente de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, con relación a la Deportación de 222 traidores a la Patria”, disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:136779-nicaragua-ordena-la-deportacion-de-222-traidores-a-la-patria->.

⁹⁶⁹ En virtud del art. 253 *bis* de Código Procesal Penal, el juez o jueza podrá dictar la medida de ‘detención judicial’ por un plazo máximo de 90 días, para lo cual tomará en consideración “la gravedad del hecho, la complejidad de la investigación, la pluralidad de afectados, imputados o conductas, cuando la investigación se trate de delitos vinculados al crimen organizado, o se trate de delitos de relevancia social y trascendencia nacional y cualquier otra información o elemento de prueba que ayude a fundamentar la procedencia de la solicitud”. Los elementos ambiguos de “relevancia social y trascendencia nacional” se encuentran también en la Ley No. 952 que agrega el séptimo inciso al art. 22 del Código Procesal Penal y amplía la competencia territorial de los Tribunales de Managua.

investigación requieren mayor tiempo para complementar información o elementos de prueba suficientes para sustentar y formular acusación contra una o varias personas”.⁹⁷⁰

552. Dicha reforma es contraria a la Constitución Política de Nicaragua y a los estándares internacionales de derechos humanos, y atenta contra la presunción de inocencia y el derecho a conocer sin demora y en detalle la acusación.⁹⁷¹ En palabras de ACNUDH, la ley que introdujo esta reforma “*permite detener para investigar, en lugar de investigar para detener*”.⁹⁷² Además, pone en riesgo la integridad y seguridad de los denominados y las denominadas “detenidos o detenidas judiciales”, quienes permanecen sin control judicial de garantías efectivo ya que la ‘detención judicial’ no está debidamente regulada en la ley.

d) *Instrumentalización del sistema de justicia*

553. Funcionarias y funcionarios de la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, el Sistema Penitenciario Nacional y el Instituto de Medicina Legal realizaron acciones concertadas para garantizar y extender la privación arbitraria de la libertad de estas personas, violar sus derechos procesales, fabricar evidencia, y ocultar actos de tortura y desaparición forzada.

554. El GHREN tiene motivos razonables para creer que las y los funcionarios recibieron instrucciones directas de la jerarquía del Estado. Todo ello fue posible debido a la manifiesta falta de independencia de la judicatura y de autonomía fiscal en Nicaragua, que se agravó aún más a partir de abril de 2018. De acuerdo con numerosos testimonios concordantes de actores del sistema de justicia, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público responden en su funcionamiento a una estructura vertical, estrictamente jerárquica, que garantiza el cumplimiento de las instrucciones de las altas jerarquías del Gobierno. De esta manera ha desaparecido la división de poderes prevista constitucionalmente, para ser reemplazada por un sistema de justicia dirigido y controlado por el Poder Ejecutivo.⁹⁷³

555. Así, el sistema de justicia fue movilizado para detener y convalidar *a posteriori* operativos ilegales de detención, allanamiento y otras diligencias que fueron presentadas como pruebas documentales, periciales y testimoniales en la acusación fiscal, así como para acusar, condenar y ejecutar sentencias basadas en procesos judiciales con evidencia producida *ad hoc* o normativa interpretada y/o diseñada para ejecutar las instrucciones de la Presidencia, violando las más elementales garantías procesales y haciendo caso omiso de las quejas y recursos interpuestos por familiares, abogados, abogadas, y defensores y defensoras de derechos humanos.⁹⁷⁴

556. El GHREN tiene motivos razonables para creer que la Policía Nacional y el Ministerio Público operaron de manera conjunta para generar acusaciones contra personas opositoras o percibidas como tales, fabricando prueba, instruyendo a testigos de cargo y redactando escritos de acusación que no se ajustaban a la realidad.⁹⁷⁵ Existió, además, una complicidad entre la Policía Nacional y el Ministerio Público para no presentar a las personas detenidas ante la autoridad judicial competente en los términos previstos por ley, prolongando así su permanencia bajo custodia policial. Esto tuvo como fin otorgar tiempo adicional a las y los agentes del Estado para continuar investigando e interrogando a las personas detenidas. En otros casos, estos retrasos ayudaron a que las secuelas físicas de las torturas perpetradas en

⁹⁷⁰ *Ibid.*

⁹⁷¹ El 27 de marzo de 2021, el CENIDH interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley No. 1060 ante la Corte Suprema de Justicia. El recurso fue admitido por la Corte en julio de 2021; sin embargo, no había sido resuelto a la fecha de redacción de este informe.

⁹⁷² ACNUDH, 3 de febrero de 2021, disponible en: <https://twitter.com/ACNUDH/status/1356955406187307008>; Noticias ONU, “ONU Derechos considera que la reforma del código penal de Nicaragua es ‘contraria a la Constitución’” (3 de febrero de 2021), disponible en: <https://news.un.org/es/story/2021/02/1487582>.

⁹⁷³ Entrevistas del GHREN EEIV014, EEIV025, EEIV028, EEIV029, EEIV032, EEIV039, BBIV001, BBIV005, BBIV015.

⁹⁷⁴ Entrevistas del GHREN BBIV001, BBIV006, BBIV011, BBIV012, BBIV013, EEIV014, EEIV028, EEIV032, EEIV052.

⁹⁷⁵ Entrevistas del GHREN BBIV001, BBIV005, BBIV006.

contra de las personas detenidas desaparecieran o se disimularan, antes de que éstas fueran presentadas ante juez competente.⁹⁷⁶

557. El GHREN recibió información que indica que los jueces y juezas del Poder Judicial, dirigido por la Presidenta de la CSJ Alba Luz Ramos y el Vicepresidente Marvin Aguilar, eran instruidos e instruidas sobre las acusaciones preparadas por el Ministerio Público junto con la Policía Nacional que debían ser confirmadas, bajo amenaza de ser destituidos y destituidas de sus cargos.⁹⁷⁷

558. También se constató que algunos de los jueces y juezas que han enjuiciado y condenado a personas opositoras o percibidas como tales, desde el 2018, han ascendido de categoría profesional. Sin embargo, no consta a este Grupo que se haya convocado ningún concurso público por oposición desde el 2017, que sería la vía regular para el ascenso en la carrera judicial. Uno de los jueces ascendidos es ahora el Presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, encargado de revisar las condenas en segunda instancia. El mismo juez también firmó las dos primeras resoluciones emitidas en febrero de 2023 resolviendo retirar la nacionalidad nicaragüense a un total de 316 personas.⁹⁷⁸ Asimismo, el GHREN recibió información sobre el nombramiento como jueces de expolicías cercanos al partido de Gobierno, e incluso de una persona conocida como integrante de uno de los grupos armados pro-gobierno.⁹⁷⁹

e) *Instrumentalización de la detención con fines de investigación*

559. A partir de febrero de 2021, con la adopción de la Ley No. 1060, las autoridades judiciales autorizaron la detención judicial de manera sistemática a favor del Ministerio Público, dejando a las personas detenidas sujetas a la custodia prolongada de la Policía. La ampliación del plazo otorgó a la policía y el Ministerio Público tiempo adicional para desarrollar la acusación, reunir y/o manipular evidencias e identificar a otras personas opositoras o percibidas como tales y vincularlas al mismo proceso penal.

560. Las personas permanecieron detenidas durante meses sin acusación fiscal, tras la celebración secreta y a puertas cerradas de audiencias especiales de tutela de garantías constitucionales. Durante las mismas, no se permitió a las personas detenidas estar representadas por un abogado o abogada defensora de su elección. En presencia de defensores y defensoras públicas, la autoridad judicial determinó la procedencia de las solicitudes del Ministerio Público de ampliación del plazo de detención, fijando 90 días como plazo razonable para la “investigación complementaria” y la formulación de la acusación, y dictando la medida de “detención judicial”.

561. Por ejemplo, una persona opositora fue detenida en 2021 y permaneció incomunicada de su familia y abogada durante tres meses.⁹⁸⁰ La audiencia de tutela de garantías prevista en la Ley No. 1060 se celebró sin que ninguna autoridad notificase a los familiares o representante legal del detenido para que pudieran participar o tener conocimiento de los resultados de la misma. Sus familiares presentaron un recurso de exhibición personal ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, el cual resolvió que el recurso era improcedente por falta de fundamentación de motivos. La audiencia preliminar se realizó de manera oral y privada en las instalaciones de la DAJ, sin notificar de nuevo a los familiares o representantes legales de libre elección del detenido, quien no pudo ver a su abogada hasta la audiencia inicial, tres meses después. Fue acusado de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas por medio de las tecnologías de la información y comunicación, y condenado a nueve años de prisión.

562. En virtud de dichas órdenes de detención judicial, las personas detenidas han sido sometidas a la custodia prolongada por la Policía Nacional, y en particular por la DAJ,

⁹⁷⁶ Entrevistas del GHREN EEIV014, EEIV025, EEIV029, EEIV028, EEIV032, EEIV039, BBIV001, BBIV005, BBIV006, BBIV012, BBIV030.

⁹⁷⁷ Documento en el archivo del GHREN BBDOC194.

⁹⁷⁸ Entrevistas del GHREN BBIV005, BBIV001, BBIV006, BBIV012; documentos en el archivo del GHREN BBDOC332, BBDOC333, BBDOC334, BBDOC335, BBDOC336, BBDOC339.

⁹⁷⁹ Documento en el archivo del GHREN BBDOC337; entrevista del GHREN BBIV001.

⁹⁸⁰ Entrevistas del GHREN EEIV019, EEIV042.

entidad encargada también de llevar a cabo las investigaciones, permitiendo a ésta realizar cuantos interrogatorios estime necesarios y exponiendo a las personas detenidas a riesgos de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Cabe destacar, además, que la DAJ no cuenta con facilidades adecuadas para la privación prolongada de la libertad, al tratarse de un recinto policial, y no cuenta con las regulaciones, protocolos y personal especializado de los que dispone el Sistema Penitenciario Nacional.

563. Las autoridades judiciales también hicieron un excesivo y arbitrario de la figura de la detención preventiva, imponiéndola de manera generalizada, sin tener en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, los criterios de proporcionalidad y finalidad del proceso, ni la ausencia de prueba, y sin la debida consideración de medidas alternativas a la detención. Todo esto está en contravención del principio de la excepcionalidad de esta medida establecido en los estándares internacionales de derechos humanos y en la propia normativa nicaragüense.⁹⁸¹

564. Del mismo modo, durante todo el periodo bajo examen, los tribunales aplicaron de manera generalizada la “tramitación compleja” de conformidad con el art. 135 del Código Procesal Penal, duplicando la duración máxima del proceso judicial, así como los plazos para interponer recursos y realizar actuaciones dentro del mismo. Así, los procesos penales se dilataron deliberadamente bajo un argumento de legalidad.

f) *Instrumentalización de la acusación penal*

565. Durante la primera etapa de la crisis, correspondiente a las manifestaciones masivas de 2018, la Policía Nacional hizo uso abusivo de la figura de “escándalo público” contemplada en el artículo 537 del Código Penal, para detener a las personas manifestantes ante la supuesta flagrancia de la falta.⁹⁸² Este patrón fue confirmado por la CVJP, que reportó un total de 1.248 detenciones vinculadas a las protestas en el periodo comprendido del 18 de abril al 16 de agosto 2018, siendo el motivo en 1.075 de ellas el escándalo público.⁹⁸³ La mayoría de las personas detenidas durante este primer periodo no fueron objeto de acusación fiscal, sino que fueron dejadas en libertad dentro de un plazo de 24 a 48 horas.⁹⁸⁴

566. Ante la persistencia de las manifestaciones, a partir de julio de 2018 las autoridades utilizaron el derecho penal de manera selectiva y arbitraria para perseguir penalmente a las personas que habían organizado o ejercido roles de liderazgo en el contexto de las mismas. La mayoría de las personas detenidas entre julio de 2018 y junio de 2019 fueron acusadas por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos (art. 327 del Código Penal) –en relación con tranques y barricadas– y por delitos graves incluyendo terrorismo (art. 394 del Código Penal), asociación para delinquir (art. 392 del Código Penal), Crimen Organizado (art. 393 del Código Penal), secuestro simple (art. 163 del Código Penal), secuestro extorsivo (art. 164 del Código Penal), portación o tenencia ilegal de armas de fuego o municiones (art. 401 del Código Penal), fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, sustancias o artefactos explosivos (art. 404 del Código Penal).

567. A través del análisis de evidencia documental y testimonial y de la revisión de 25 expedientes legales correspondientes a personas detenidas por hechos vinculados a eventos

⁹⁸¹ Código Procesal Penal, arts. 167–169; ICCPR, art. 9, párr. 3. Véase CCPR/C/GC/35, párr. 38.

⁹⁸² El artículo 231 del Código Procesal Penal otorga a la Policía Nacional facultades de detención sin mandamiento judicial en tres supuestos: i) cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento de cometerlo; ii) cuando sea perseguido huyendo del sitio del hecho; o iii) cuando se le sorprenda en el mismo lugar o cerca de él con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir su participación inmediata en el hecho. Entrevista del GHREN EEIV031. Véase CIDH, Informe, Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, 21 junio 2018, párr. 122, disponible en <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-es.pdf>

⁹⁸³ La información presentada, según la CVJP, fue el resultado de un proceso de investigación y verificación con fuentes oficiales, redes sociales y medios de comunicación al 15 de octubre del 2018.

⁹⁸⁴ Informe GIEI Nicaragua, p. 195.

de protesta, el GHREN pudo establecer que las personas fueron acusadas de delitos desproporcionados y/o no correspondían a los hechos objeto de acusación.⁹⁸⁵

568. Cabe resaltar como ejemplo de este patrón el caso de los “aguadores”. Se trató de la detención arbitraria de nueve hombres y siete mujeres, en su mayoría jóvenes, 13 de los cuales eran integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco,⁹⁸⁶ cuando intentaban entregar agua y medicamentos a un grupo de diez madres de personas encarceladas en el contexto de las protestas.⁹⁸⁷ Las madres se encontraban en huelga de hambre desde el 14 de noviembre de 2019 en la Iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, demandando la liberación de sus familiares. En respuesta, la alcaldía de Masaya cortó los servicios públicos de agua y luz eléctrica de la iglesia, que fue rodeada por agentes de la DOEP de la Policía Nacional.

569. La primera noche de la protesta, jóvenes y pobladores de Masaya se presentaron frente a la iglesia con botellas de agua y medicinas para entregar a las manifestantes. La policía no les permitió acercarse y les ordenó retirarse. No obstante, algunas de las personas jóvenes lograron pasar varias botellas de agua por las rejas de la iglesia y se retiraron del lugar. En su camino de regreso a Managua fueron interceptadas y detenidas por un contingente de tres patrullas. Los y las jóvenes fueron trasladados a la estación de Policía de Masaya y posteriormente a El Chipote. El 17 de noviembre de 2019, la Fiscalía de Managua formuló acusación y solicitó la apertura de proceso contra las 16 personas detenidas, en calidad de autoras del delito de tráfico ilícito de armas. El 30 de diciembre de 2019, los 16 jóvenes fueron excarcelados bajo régimen de convivencia familiar. El juicio oral, previsto para enero de 2020, nunca tuvo lugar.⁹⁸⁸

570. A partir de julio de 2019 y hasta principios de 2021, el GHREN ha constatado la imputación de delitos comunes contra personas opositoras o percibidas como tales, en referencia a presuntos hechos que no guardaban relación aparente con su participación en las protestas de 2018 o en movimientos o actos de oposición al Gobierno. En palabras de una víctima entrevistada por el GHREN:

Me capturaron en febrero de 2020. Me acusaron de tráfico de estupefacientes. La mayoría de las personas capturadas en este tiempo fuimos acusadas de delitos comunes como robo, estupefacientes. Incluyeron información de mi perfil de Facebook, y me acusaron de traficar drogas en la universidad. Fui detenido en celda de castigo de la 300.⁹⁸⁹

571. De acuerdo con la organización Unidad de Registro, de las 88 personas detenidas durante este período (86 hombres y 2 mujeres), al menos 52 fueron acusadas de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, en varios casos, en concurrencia con el delito de fabricación, tráfico, tenencia/portación ilegal de armas, 15 fueron acusadas de robo agravado, y por lo menos otras 15 fueron acusadas de fabricación, tráfico, tenencia/portación ilegal de armas.⁹⁹⁰

⁹⁸⁵ Al respecto, el GIEI Nicaragua constató “la existencia de patrones de comportamiento en los procesos de criminalización, en donde la congruencia entre los hechos y la adecuación típica de las conductas fue inexistente. [...] se hizo uso abusivo de los tipos penales de terrorismo y crimen organizado, para perseguir y sancionar los actos de oposición al gobierno”. Informe GIEI Nicaragua, p. 265.

⁹⁸⁶ La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) nació en octubre de 2018 como movimiento político que agrupó partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones estudiantiles, académicas, profesionales, feministas, campesinos, empresarios, entre otros, para demandar, entre otras cosas, la reactivación del diálogo nacional.

⁹⁸⁷ Expedientes en el archivo del GHREN EEDOC010, EEDOC011, EEDOC012, EEDOC013, EEDOC014. Véase Amnistía Internacional, comunicado “Detención de activistas en Nicaragua”, 18 de noviembre 2019, disponible en: <https://www.amnesty.org/es/documents/amr43/1423/2019/es/>; La Prensa Nicaragua, “La historia de “los aguadores de a pie” de Masaya”, 20 de diciembre 2019, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=fU8bEHo7Vxs>

⁹⁸⁸ Entrevistas del GHREN EEIV010, EEIV001, EEIV041; WGAD, Opinión No. 21/2020, relativa a 16 personas (Nicaragua) ante el Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/WGAD/2020/21 (3 de julio de 2020).

⁹⁸⁹ Entrevista del GHREN EEIV067.

⁹⁹⁰ Listado proporcionado por (UDR, en el archivo del GHREN EEDOC102.

572. Por ejemplo, joven estudiante fue detenido por primera vez en septiembre de 2018 y condenado por los delitos de entorpecimiento de servicios públicos y portación y uso ilegal de armas de fuego. En 2019 fue excarcelado bajo el régimen de convivencia familiar y los cargos en su contra fueron suspendidos en virtud de la Ley de Amnistía. Unos meses después fue nuevamente detenido y condenado por el delito de robo agravado a 4 años y 6 meses de prisión. Fue recluido durante aproximadamente tres años en régimen de aislamiento en la sección de máxima seguridad del complejo penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo.⁹⁹¹

g) *Instrumentalización del proceso penal*

573. Las acusaciones se basaron en leyes contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos, en cargos infundados que no se correspondían con los hechos descritos, o fueron sustentados en pruebas falsas. Los procesos penales estuvieron plagados de graves irregularidades y de violaciones de las garantías al debido proceso. Frente a este tipo de acusaciones, los tribunales violaron de manera generalizada los derechos de las personas opositoras o percibidas como tales a la presunción de inocencia, a la igualdad ante los tribunales, a un juicio imparcial, y a una defensa eficaz por un abogado o abogada de su elección, dejando a las personas en la indefensión.

a. Violaciones del derecho a la presunción de inocencia

574. Las detenciones y procesos de criminalización se dieron en el contexto de una fuerte estigmatización de las personas opositoras o percibidas como tales. En repetidas ocasiones, las autoridades, incluyendo el Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo, acusaron públicamente a las personas opositoras, reales o percibidas, de ser responsables de la comisión de graves delitos, realizando aseveraciones sobre su culpabilidad, y utilizando lenguaje denigrante. Varias de las personas detenidas fueron también objeto de campañas específicas de estigmatización y deslegitimación por parte de las autoridades del Estado, así como a través de redes sociales y medios de comunicación afines al Gobierno. Las autoridades también emitieron comunicados oficiales que presentaron a las personas detenidas como culpables. Dichas acciones se llevaron a cabo de manera previa o coetánea a los procesos penales de los que fueron objeto las personas, en violación de su derecho a la presunción de inocencia.⁹⁹²

575. Así, en 2018 y 2019 varias de las personas detenidas con relación a su participación en manifestaciones y tranques fueron trasladadas al Complejo Policial Plaza el Sol en Managua, expuestas ante los medios de comunicación y presentadas como “terroristas”, “delincuentes violentos”, y “golpistas”, capturados exitosamente por la Policía Nacional.⁹⁹³

576. El 31 de enero de 2022, el Ministerio Público informó sobre la apertura de los juicios de las personas que se encontraban detenidas en la DAJ y en arresto domiciliario –todas con un alto perfil público por su liderazgo político, empresarial, o por su trabajo académico o periodístico. A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público expresó que “[e]stos mismos criminales y delincuentes que han reincidido, atentando contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad. Son los mismos que promovieron los actos terroristas de la agresión del fallido intento de golpe de Estado del año 2018, habiendo paralizado el país y creado daño a la economía; son los mismos que han

⁹⁹¹ WGAD, Opinión No. 39/2020, A/HRC/WGAD/2020/39 (9 de octubre de 2020); CIDH, Resolución 33/2021, Medida cautelar No. 205-21, 22 de abril de 2021.

⁹⁹² CCPR/C/GC/32, párr. 30: “[t]odas las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar los resultados de un juicio, por ejemplo, absteniéndose de hacer comentarios públicos en que se declare la culpabilidad del acusado. Normalmente, los acusados no deberán llevar grilletes o estar enjaulados durante el juicio, ni ser presentados ante el tribunal de alguna otra manera que dé a entender que podría tratarse de delincuentes peligrosos”.

⁹⁹³ Entrevistas del GHREN EEIV04, EEIV005, EEIV012, EEIV017, EEIV069; documento en el archivo del GHREN EEDOC179. Véase, por ejemplo, Vivanicaragua13, “Policía Nacional captura a los terroristas acusados de causar zozobra en Managua”, 18 de septiembre 2018, disponible en: <https://youtu.be/GQ9WFhfOttY>; El 19 Digital, “Presentan a sujetos señalados de terrorismo y asesinato”, 18 de septiembre 2018, disponible en: <https://youtu.be/MY1hKGV00vQ>.

provocado tanto dolor y luto en las familias nicaragüenses a casusa de los asesinatos, torturas y secuestros”.⁹⁹⁴

- b. Procesos penales basados en leyes contrarias a las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos, en cargos infundados o en pruebas falsas

577. El análisis de testimonios, documentación y revisión de expedientes permitió al GHREN constatar la imputación de personas opositoras o percibidas como tales bajo tipos penales creados por leyes contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos; bajo cargos infundados y/o desproporcionados; o sustentada en pruebas falsas.

578. Desde su aprobación a finales de 2020, la Ley de Cibercrimitos y la Ley de Soberanía han sido ampliamente utilizadas para perseguir a individuos por su opción política o por expresar puntos de vista críticos u opuestos a los del Gobierno. Entre mayo de 2021 y el 15 de febrero de 2023, al menos 90 personas fueron detenidas y acusadas por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en virtud de los arts. 410 y 412 del Código Penal, en conexión con la Ley de Soberanía.⁹⁹⁵ Además, en 53 de estos casos, las personas fueron acusadas de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, en aplicación del art. 30 de la Ley de Cibercrimitos.

579. El análisis de los 25 expedientes a los que tuvo acceso el GHREN también permitió constatar que en la mayoría de los casos no se estableció una relación clara, precisa, específica y circunstanciada del hecho punible y la participación de los acusados y/o las acusadas en él, tal como se requiere en virtud del principio de legalidad.⁹⁹⁶ Al contrario, se observaron flagrantes incongruencias en relación con las personas, lugares y tiempos de la perpetración de los hechos, así como vacíos evidentes en la calificación legal y los elementos de convicción que la sustentaban, e imputaciones delictivas basadas en generalidades, como la participación de “grupos de sujetos de identidades desconocidas o sujetos aun no identificados”.⁹⁹⁷

580. La formulación de las acusaciones se basó ampliamente en elementos de prueba poco rigurosos y fuertemente genéricas, que no precisaban ni establecían la participación de las personas acusadas en hechos vagamente descritos, y en testimonios de agentes de la Policía Nacional.

581. El GHREN tiene motivos razonables para creer que, en muchos de los casos examinados, la policía y el Ministerio Público presentaron evidencia “fabricada”, incluyendo testimonios falsos y documentación manipulada. Por ejemplo, en varios casos se presentaron órdenes de detención con fechas posteriores a la fecha en la que las personas fueron detenidas, o se manipularon las fechas para aparentar que la orden había sido emitida antes de la detención. Múltiples y creíbles testigos entrevistados por el GHREN refirieron también que agentes de la policía “plantaron” armas o drogas en sus vehículos.⁹⁹⁸ En otros casos, las víctimas refirieron que se presentaron como prueba publicaciones en redes sociales desde cuentas falsas a su nombre.⁹⁹⁹

- c. Violaciones de los derechos a la igualdad ante los tribunales y a un juicio imparcial

582. En la mayoría de los procesos judiciales analizados por el GHREN, los jueces y juezas aceptaron el conjunto de las pruebas presentadas por el Ministerio Público –que incluían, en algunos casos, testimonios únicamente de personal de la policía–, mientras se descartaron las

⁹⁹⁴ Ministerio Público – República de Nicaragua, Comunicado 001-2022, 31 de enero de 2022, disponible en: <https://ondalocalni.com/media/uploads/2022/01/31/juicios-politicos-ministerio-publico.jpg>.

⁹⁹⁵ Listado proporcionado por UDR, en el archivo del GHREN EEDOC102.

⁹⁹⁶ Código Procesal Penal, art. 77, inciso 4.

⁹⁹⁷ Expedientes judiciales en el archivo del GHREN EEDOC003, EEDOC004, EEDOC006, EEDOC053, EEDOC059, EEDOC064, EEDOC067.

⁹⁹⁸ Entrevistas del GHREN EEIV003, EEIV017, EEIV018, EEIV022, EEIV025, EEIV029, EEIV067 EEIV069.

⁹⁹⁹ Entrevistas del GHREN EEIV025, EEIV036, EEIV046, AAIV051.

pruebas de descargo, alegaciones u objeciones de la defensa.¹⁰⁰⁰ Los abogados y abogadas defensoras entrevistadas por el GHREN denunciaron que los recursos interpuestos en relación con irregularidades del proceso y de los medios de prueba presentados en la acusación fiscal fueron sistemáticamente rechazados.¹⁰⁰¹

583. La falta de igualdad ante los tribunales también incluyó la falta de igualdad de medios procesales,¹⁰⁰² ya que los abogados y abogadas no tuvieron acceso a la totalidad del expediente, a los escritos de acusación fiscal, a medios de prueba y a copias de actos investigativos, y se bloqueó el acceso al sistema de consultas en línea del Poder Judicial.

584. En todos los procesos penales analizados que tuvieron lugar a partir de 2021, se negó a los abogados y abogadas el acceso a los escritos de acusación, lo que les impidió preparar la defensa e introducir pruebas de descargo. Ante la imposibilidad de acceder a los escritos de acusación, y el temor a sufrir represalias, las personas acusadas optaron por no presentar testigos de descargo y su defensa eligió la estrategia de refutación de la prueba en su totalidad considerando que, por un lado, ésta se había obtenido de forma ilegal y, por otro lado, no sustentaba la teoría fáctica del delito. Sin embargo, los tribunales aceptaron la totalidad de la acusación fiscal y medios de prueba presentados por el Ministerio Público, y declararon la culpabilidad de todas las personas acusadas, quienes fueron condenadas a penas de prisión de entre 8 y 13 años, e inhabilitación absoluta para el desempeño de función, empleo o cargo público durante el mismo periodo.

585. A partir de 2022, los tribunales tampoco han entregado las sentencias, lo cual ha impedido a las y los defensores redactar escritos de apelación debidamente sustentados y argumentados, al no conocer los argumentos legales esgrimidos por la autoridad judicial en las mismas.

d. Violaciones del derecho a un abogado o abogada de la elección de la persona acusada y represalias contra abogados y abogadas.

586. Las audiencias se realizaron a puerta cerrada, sin notificación previa, y en horarios y espacios inusuales buscando evitar el escrutinio público e impedir la presencia del abogado o abogada de la elección de la persona acusada. En varios casos documentados, esto favoreció la designación de un defensor o defensora pública de oficio.¹⁰⁰³ De acuerdo con el testimonio de una defensa técnica:

*Llevaron a cabo las audiencias de varios acusados de forma secreta, no se nos notificaban. Las hacían incluso en horas de la madrugada. El proceso arrancó el 2 de junio y tuvimos acceso a los acusados hasta el mes de septiembre y solo por diez minutos, antes de la audiencia preliminar, cuando se nos presentó un expediente de 250 folders. Hubo múltiples violaciones al debido proceso. Nunca se nos comunicó las razones de acusación, no lográbamos acceder a los documentos, al expediente físico y digital que debe ser público. Aun así, pudimos hacerlo, presentamos recursos, incidentes de nulidad que no los resolvían. Cuando alegábamos violaciones de las normas constitucionales y procesales, los jueces guardaban silencio.*¹⁰⁰⁴

587. En los casos en los que los abogados y las abogadas lograron constituirse como defensoras, realizaron sus labores en condiciones extremadamente limitantes. No tuvieron

¹⁰⁰⁰ Expedientes en el archivo del GHREN EEDOC027, EEDOC028, EEDOC053, EEDOC054, EEDOC055, EEDOC056, EEDOC057, EEDOC058, EEDOC059, EEDOC060, AADOC100, AADOC101, AADOC102, AADOC103, AADOC104, AADOC105, AADOC108, AADOC10, AADOC11, AADOC12, AADOC13, AADOC13, AADOC15, AADOC116; entrevistas del GHREN EEIV008, EEIV014, EEIV025, EEIV028, EEIV029, EEIV032, EEIV039, EEIV063, EEIV064, EEIV065, EEIV066, EEIV067, EEIV068, EEIV069.

¹⁰⁰¹ Entrevistas del GHREN EEIV008, EEIV014, EEIV025, EEIV028, EEIV029, EEIV032, EEIV039, EEIV044, EEIV052.

¹⁰⁰² ICCPR, art. 14, párr. 1.

¹⁰⁰³ ACNUDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua, A/HRC/42/18, 17 de septiembre 2019, párr. 42; entrevistas del GRHEN, EEIV008, EEIV014, EEIV025, EEIV028, EEIV029, EEIV032, EEIV063, EEIV064, EEIV065, EEIV066, EEIV067, EEIV068, EEIV069, AAI046, AAI047, AAI048, AAI049, AAI050, AAI051, AAI052.

¹⁰⁰⁴ Entrevista del GHREN EEIV008.

acceso a los expedientes completos, ni gozaron de privacidad en las comunicaciones con sus representados y representadas. En ninguno de los 44 casos investigados por el GHREN, se permitió a los abogados o abogadas visitar a las personas detenidas en los lugares de custodia a fin de conferir sobre el caso y preparar la defensa. Durante las audiencias, agentes de la policía realizaron fotos y grabaciones de las conversaciones entre las personas detenidas y sus equipos jurídicos, y los jueces y juezas prohibieron a los abogados y abogadas el uso de teléfonos móviles y la toma de notas escritas.¹⁰⁰⁵

588. Los abogados y las abogadas defensoras fueron objeto de tratos vejatorios e intimidaciones por parte de jueces, fiscales, y de la policía.¹⁰⁰⁶

Cada vez son más agresivos descalificando técnicamente a la defensa. Cuando presentamos nuestros alegatos de apertura, refutando las pruebas de la fiscalía y exponiendo que no podemos presentar testigos porque hay miedo en las personas, nos amenazan con solicitar medidas disciplinarias ante la Corte Suprema de Justicia en nuestra contra por estar presentando alegatos impertinentes. El juez me dijo que “ya conozco como trabaja usted.”¹⁰⁰⁷

589. Los abogados y las abogadas defensoras también han sido objeto de represalias, incluyendo ataques, amenazas contra su vida y contra la de sus familiares, persecución penal, vigilancias, intimidaciones, desprestigio de su trabajo, e inhabilitación para ejercer la abogacía.¹⁰⁰⁸

590. El GHREN documentó el caso de una abogada que defendió más de 60 casos de personas detenidas y procesadas en 2018 y 2019 en el marco de las protestas, y que fue víctima de amenazas y acoso a través de las redes sociales: “[v]eremos dónde te vas a meter. Veremos si del otro lado podrás abogar x por golpistas que ya fueron despachados”.¹⁰⁰⁹ En agosto de 2019, cuando salía de su lugar de trabajo, se percató de que su coche hacía un ruido extraño. Cuando llevó su coche al mecánico, éste le informó de que le habían aflojado las llantas. Semanas después, miembros de grupos pro-gobierno rodearon su casa e hicieron pintadas en las paredes, escribiendo la palabra “plomo” en letras mayúsculas. Un mes más tarde, una noche, un grupo de personas motorizadas rodeó su casa y le gritó que era “golpista”, “asesina”, “defensora de tranqueros” y que se iba a arrepentir. Aunque llamó al número de emergencias de la policía, nunca contestaron. Sus hijos menores de edad también fueron víctimas de amenazas a través de las redes sociales: “Te pasaste en canal 10. Sabemos dónde vivís. Sabemos dónde estudian tus [...] hijos [...]. Te daremos la paz”.¹⁰¹⁰ Ante el constante acoso y amenazas, la abogada tomó la decisión de salir de país junto con su familia.¹⁰¹¹

591. Desde 2019, al menos 13 abogados y abogadas que defendieron a personas opositoras detenidas se han visto forzadas a abandonar el país tras ser objeto de actos de hostigamiento, vigilancias, y amenazas.¹⁰¹² Los abogados y las abogadas que han permanecido en el país realizan sus labores en condiciones extremadamente complejas que implican un constante riesgo, y que les obligan a limitar sus actividades profesionales y personales. Una persona que defendió penalmente a manifestantes y personas opositoras detenidas relató al GHREN:

Han quebrado los vidrios de mi vehículo frente a 30–40 policías y nadie hizo nada. [...] También me han chocado el vehículo. Uno de los choques duros fue en 2020. La

¹⁰⁰⁵ Entrevistas del GHREN EEIV008; EEIV014, EEIV025, EEIV029, EEIV028, EEIV032, EEIV052, EEIV070.

¹⁰⁰⁶ Al respecto, el Comité de Derechos Humanos, en su Observación General No. 32, ha reiterado que “una audiencia no es imparcial y se viola el derecho a la defensa si, por ejemplo, el acusado en un proceso penal enfrenta [...] manifestaciones de hostilidad o se evidencia el apoyo hacia una de las partes de la sala”.

¹⁰⁰⁷ Entrevista del GHREN EEIV048.

¹⁰⁰⁸ Entrevistas del GHREN EEIV008, EEIV014, EEIV025, EEIV028, EEIV029, EEIV032, EEIV039, EEIV052, EEIV070.

¹⁰⁰⁹ Mensaje de 25 de julio 2019 a través de Facebook Messenger, en el archivo del GHREN EEDOC190.

¹⁰¹⁰ Mensaje de 25 de julio 2019 a través de Facebook Messenger, en el archivo del GHREN EEDOC191.

¹⁰¹¹ Entrevista del GHREN EEIV014; documentos en el archivo del GHREN EEDOC193, EEDOC194, EEDOC195.

¹⁰¹² Entrevista del GHREN EEIV070.

*última vez fue [...] de 2021. En esta fecha en un programa de Grigsby [programa de radio afín al Gobierno] mencionaron a un grupo de abogados golpistas, que hacían lavado de dinero. Eran todos los abogados de la Unidad de Defensa Jurídica. Por eso tuve que dejar mi casa, me vi obligada de cambiar de casa.*¹⁰¹³

592. Los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados reconocen unas garantías mínimas para el ejercicio de su profesión. Entre ellas se encuentra la obligación de los gobiernos de velar por las condiciones adecuadas para que los abogados y las abogadas puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; que puedan comunicarse libremente con sus clientes; y que no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión. Cuando su seguridad sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, los Estados deberán brindar protección adecuada.¹⁰¹⁴

h) Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, y degradantes

593. El GHREN tiene motivos razonables para creer que, durante el periodo examinado, agentes de la Policía Nacional y del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) e integrantes de grupos armados pro-gobierno cometieron actos de tortura física y psicológica, incluyendo la violencia sexual y de género, y otros tratos o penas crueles, inhumanos, o degradantes, en contra de personas opositoras o percibidas como tales. Los actos reportados al GHREN fueron deliberados, realizados por agentes del Estado o con su consentimiento o aquiescencia en el contexto de las aprehensiones, interrogatorios y detención de las víctimas. En algunas ocasiones, las violaciones y abusos descritos fueron cometidas con el objetivo de intimidar y castigar a las personas opositoras o percibidas como tales. En otras, fueron cometidos con el objetivo de extraer información.

594. El GHREN concluyó que en al menos 37 casos investigados por el Grupo las personas privadas de la libertad fueron sometidas a una variedad de actos y una combinación de tratos y condiciones que violan la prohibición imperativa de la tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y cuyo común denominador es que tuvieron por objeto infligir dolor y sufrimientos físicos y psicológicos.¹⁰¹⁵ El GHREN constató que agentes de la Policía Nacional y del SPN fueron los principales responsables de esas conductas. En algunos casos, hubo participación de actores no estatales, en particular de civiles pertenecientes a grupos armados pro-gobierno, quienes actuaron conjuntamente con actores estatales o con el conocimiento y/o la aquiescencia de éstos.

595. De conformidad con la investigación que adelantó el GHREN, se pudo evidenciar de manera razonable que varios de los métodos empleados, considerados aisladamente, constituyen claramente actos de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. También se utilizaron métodos, técnicas o condiciones de detención que por sí solas no pueden equipararse a actos de tortura. Sin embargo, su combinación y/o recurrencia, o larga duración, junto con otros factores estresantes externos o vulnerabilidades - incluyendo condiciones de salud, edad, identidad de género y orientación sexual -, tuvieron impactos

¹⁰¹³ Entrevista del GHREN EEIV025.

¹⁰¹⁴ Véase <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-role-lawyers>.

¹⁰¹⁵ El GHREN recabó los testimonios de personas excarceladas, testigos, y familiares de personas detenidas. El Grupo también analizó los informes de organismos internacionales y mecanismos de protección de los derechos humanos, incluyendo la CIDH, ACNUDH y el CAT; los expedientes judiciales y los requerimientos de exámenes médicos legales, así como los recursos de exhibición personal para establecer el estado de salud de la persona detenida; documentación puesta a disposición del Grupo por organizaciones de la sociedad civil, como la UPPN, la UDJ, CPDH, incluyendo informes, peritajes, dictámenes médicos y psicológicos; material fotográfico que corrobora los testimonios recibidos; y las Medidas Cautelares de la CIDH y Opiniones emitidas por el WGAD que incluyeron información y consideraciones relevantes sobre actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes a los que fueron sometidas las personas privadas de su libertad.

devastadores sobre las personas.¹⁰¹⁶ Así, en lugar de examinar cada factor por separado para determinar cuáles trascienden el umbral de “gravedad”, el GHREN consideró el “entorno de tortura” generado por la combinación de estas distintas prácticas y factores, con el fin de entender la realidad y los efectos sobre las víctimas que los experimentan y analizarlos de manera integral y no como una serie de técnicas y circunstancias aisladas.¹⁰¹⁷

596. La información recolectada indica que se produjo una evolución en el tiempo de los métodos de tortura y formas de malos tratos empleados. Durante 2018 se reportaron más casos relativos al uso de violencia física y violencia sexual durante y después de los interrogatorios. Durante todo el periodo bajo examen, se constatan patrones de tratos discriminatorios en los centros del SPN, que constituyeron tratos inhumanos y degradantes y, en algunos casos, tortura.

597. A partir de 2021, los testimonios recogidos hacen referencia a métodos más complejos con combinación de distintas técnicas y con la generación de entornos de tortura psicológica, destinados principalmente a castigar y quebrar a las personas detenidas. Respecto a esta última fase, un testigo afirmó: “[a]hora se trata de un ataque psicológico en contra de las personas para destruir su personalidad a través del encierro prolongado, la falta de atención médica, la mala alimentación. Ahora hay otro tipo de violencia [porque] el mensaje ya está dado con los asesinatos y las torturas, el miedo está instalado, la barbaridad quedó evidenciada, y entonces ahora van matando de a poquito a las personas”.¹⁰¹⁸

i) Malos tratos durante las aprehensiones

598. Las aprehensiones y traslados a las estaciones de la Policía y a la DAJ se realizaron a menudo mediante el despliegue de extraordinarios contingentes policiales de la DOEP, frecuentemente asistidos por grupos armados pro-gobierno, y haciendo un uso desproporcionado e innecesario de la fuerza a patadas y golpes de puño, porras policiales y culatas de armas, tirones de cabello, insultos, amenazas, y empujones.¹⁰¹⁹ En algunos casos se ejerció violencia severa con el objetivo de causar dolor o sufrimiento intencional y deliberadamente a una persona indefensa, alcanzando el umbral de la tortura.¹⁰²⁰ Según un testigo,

*Dos policías se me acercaron y me preguntaron mi nombre. Desde ese momento empezaron a agredirme, a golpearme con culetazos, me esposaron. En el camino me seguían golpeando y me [hacían preguntas]. Yo decía que no sabía de qué me estaban hablando. Mi esposa me informó que éstos entraron en la casa y empezaron a registrarla, la golpearon, ella preguntaba qué buscaban, pero no le contestaban. [...] En el Chipote me desnudaron y continuaron a golpearme con culetazos, me esposaron y me metieron en una celda preventiva, siguieron preguntando [...]*¹⁰²¹

¹⁰¹⁶ ONU, Informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, A/73/152 (12 de julio de 2018), disponible en: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/220/44/PDF/N1822044.pdf?OpenElement>.

¹⁰¹⁷ *Ibid.* Véase Informe del Relator Especial, Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, A/HRC/40/59, 16 de enero de 2019, párrs. 48, 59–60. En particular, cuando no hay dolores ni sufrimientos físicos, siempre debe tenerse debidamente en cuenta el contexto en que se utilizan determinados métodos. Por ejemplo, si bien en circunstancias normales los insultos y la difamación expresados públicamente pueden constituir un delito penal, pero no tortura, esa evaluación puede cambiar considerablemente cuando la misma conducta se convierte en una cuestión de vilipendio y persecución sistemáticos promovida por el Estado que implica medidas adicionales como la detención arbitraria, la vigilancia constante, la denegación sistemática de justicia y las amenazas o intimidaciones graves.

¹⁰¹⁸ Entrevista del GRHEN EEIV025.

¹⁰¹⁹ Entrevistas del GHREN EEIV004, EEIV006, EEIV009, EEIV007, EEIV010, EEIV011, EEIV012, EEIV015, EEIV016, EEIV017, EEIV024, EEIV045, AAIV002, AAIV047, AAIV048, AAIV050, AAIV052, DDIIV022, EEIV031, EEIV038.

¹⁰²⁰ Véase Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Uso de la fuerza al margen de la detención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, A/72/178, párr. 47.

¹⁰²¹ Entrevista del GHREN EEIV009.

599. Cuando la detención se realizó en una casa, las víctimas entrevistadas reportaron de manera consistente el ingreso violento en el inmueble.¹⁰²² Un testigo refirió:

*Me detuvieron en la casa de un amigo [...] Llegó la policía y detuvo a 13 personas. Era un grupo de policías y gente encapuchada, cercaron la casa y entraron sin orden encañonando a la dueña, llegaron y empezaron a golpearlos, nos quitaron los zapatos, nos tomaron fotos estando nosotros en el suelo, luego nos tiraron en las camionetas y nos pisotearon para que miráramos hacia abajo.*¹⁰²³

600. En algunos casos que tuvieron lugar durante el periodo de las protestas de 2018, integrantes de grupos pro-gobierno detuvieron y mantuvieron a personas manifestantes cautivas en lugares no oficiales de detención, incluyendo instalaciones que facilitaron personas afines al Gobierno, el FSLN y algunas alcaldías. En estos lugares, los integrantes de estos grupos sometieron a personas manifestantes a largos interrogatorios y a castigos haciendo uso de la tortura, incluyendo, a través de golpizas y provocación de quemaduras.¹⁰²⁴ Tras varias horas o días, entregaron a las personas detenidas a la Policía Nacional, con signos visibles de violencia.¹⁰²⁵ Sin embargo, la Policía no detuvo a los perpetradores ni llevó a cabo acciones orientadas a la protección de la víctima y el esclarecimiento de los hechos; al contrario, continuó torturando y maltratando a las personas entregadas.

601. Un joven manifestante relató cómo fue detenido por integrantes de un grupo armado pro-gobierno en un lugar de detención clandestino:

*No supe cuánto tiempo pasó, pero me trasladaron a un lugar en el que se escuchaban grillos y ranas. Me acuerdo de que pensaba en mi familia. Pensaba que nadie me iba a encontrar. Me llevaron a una finca que se usaba como prisión clandestina. Desde la entrada se escuchaban gritos. Me quitaron los zapatos y los calcetines. Me bajaron del vehículo a punta de golpes por todos lados. Me costaba caminar porque estaba enchachado [esposado] y con bridas [esposas de cable plástico] en los pies. Me golpeaban con algo metálico, creo que con un AKA.*¹⁰²⁶

602. En otros casos, los integrantes de grupos armados pro-gobierno participaron en la aprehensión de las personas conjuntamente con agentes de la Policía Nacional, y agredieron violentamente a las personas detenidas, tanto durante los traslados como en las estaciones de la policía.¹⁰²⁷

Iba para el mercado para comprar algo y en una esquina pararon unas 15 personas con AK y escopetas, con la cara tapada y vestidos de civil. Me hicieron señas para parar. [...] Se pusieron mal cuando vieron que tenía la bandera [de Nicaragua]. Empezaron a patearme entre todos con las armas buscando mi cara, mi nariz. Me ataron con los cordones de mis zapatos, me pusieron la camisa en mi cara. Me metieron en una camioneta [...]. Tres de las personas se quedaron conmigo atrás en la tina y eran muy agresivas. Una persona en concreto me golpeaba con las manos, a patadas, con el arma. Si yo hablaba me agredía, si me callaba también. Anduvieron por todas las calles de [lugar omitido]. Paraban en algún momento y hacían disparos al aire. [...] A las 18:00 me llevaron a la policía de [lugar omitido]. Me quitaron los

¹⁰²² Entrevistas del GHREN EEIV003, EEIV005, EEIV011, EEIV016, EEIV023, EEIV047, EEIV063, EEIV065, AAIV002, AAIV047, AAIV048, AAIV050, AAIV052.

¹⁰²³ Entrevista del GHREN EEIV016.

¹⁰²⁴ Entrevistas del GHREN BBIV003, EEIV035.

¹⁰²⁵ Entrevistas del GHREN EEIV045, BBIV003, AAIV018, AAIV019; documento en el archivo del GHREN EEDOC052; UPPN y Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), Informe “Detenidos, torturados y desplazados; el presidio político y sus secuelas en Nicaragua, presentado ante el Comité de las Naciones Unidas contra la tortura (CAT) durante su 74º período de sesiones del 12 al 29 de julio del 2022 (en adelante “Informe UPPN y RIDH”), p. 4, disponible en: <https://ridheuropa.org/es/detenidos-torturados-y-desplazados-el-presidio-politico-y-sus-secuelas-en-nicaragua/>.

¹⁰²⁶ Entrevista del GHREN BBIV003; CIDH Informe, Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018, 5 de octubre 2020, párr. 81, disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua-PPL-es.pdf>

¹⁰²⁷ Entrevistas del GHREN EEIV004, EEIV016, EEIV022, EEIV024, EEIV045, EEIV050, EEIV067, EEIV069, AAIV010, AAIV019.

*cordones, me pusieron las esposas de metal y me entregaron a la policía. Me esperaban unas 80 personas en fila con tubos, pedazos de metal, madera. Me dijeron de pasar por medio de la fila y empezaron a golpearme entre todos, policías y civiles, soldados, personas fanáticas del gobierno gritando “vendepatria”. Me desmayé. Cuando recuperé el conocimiento, me desperté bocabajo, no podía ver, de la sangre, ni podía escuchar muy bien.*¹⁰²⁸

603. De acuerdo con la información recibida a la fecha de redacción de este informe, estos actos no han sido objeto de investigaciones o sanciones por las autoridades y están impunes.

ii) Tortura y malos tratos en custodia policial

604. El uso de técnicas de tortura físicas y sexuales fue especialmente prevalente entre abril de 2018 y junio de 2019, durante extensos interrogatorios realizados bajo custodia policial con la finalidad de obtener información. La tortura y los malos tratos también estuvieron orientados a castigar a las personas que participaron en las protestas.

a. Con la finalidad de obtener información

605. El GHREN investigó los casos de 17 personas que fueron sometidas a tortura y malos tratos durante interrogatorios realizados por agentes de la Policía Nacional en las estaciones de la Policía Nacional y en las instalaciones de la DAJ en Managua.¹⁰²⁹ En dichos lugares, las personas detenidas permanecieron encerradas sin que se les permitiera una llamada telefónica con su familia o sus abogados o abogadas, y sin ser informadas de las razones de su detención.¹⁰³⁰

606. Las autoridades buscaron extraer información a través de la detención arbitraria de las personas, y de la utilización de métodos de tortura, tratos inhumanos crueles y degradantes, amenazas, y otras vejaciones. Las personas fueron sometidas a numerosos e intensos interrogatorios, durante los cuales los y las agentes de la Policía Nacional les cuestionaron repetidamente sobre los liderazgos estudiantiles y sociales, las formas organizativas de las protestas de 2018, y las fuentes de financiamiento de las manifestaciones y de otras actividades de los movimientos de oposición y de los actores considerados críticos del Gobierno, que fueron descritas por las autoridades como “acciones terroristas”.

Les pedí mostrarme una orden de juez, y en vez de eso uno de los policías me pegó en la boca y me dijo que no tenía derecho de hablar. “Solo queremos que digas [contenido omitido]”. En ese momento me abrieron [ataron] los pies con un clavo en cada pared. Me pateaban, me golpeaban, me dieron la vuelta y empezaron a darme con machete en la espalda y otras partes del cuerpo. Me dejaron descansar por un minuto y luego empezaron a quitarme las uñas de los pies. Yo lloraba, gritaba [...]. Luego me desnudaron, me tiraron agua y empezaron con alambres a hacerme descargas eléctricas en el pie y los testículos. Me preguntaban de nuevo de varias personas, me dijeron que me iban a cortar la oreja. Me hicieron una cicatriz grande

¹⁰²⁸ Entrevista del GHREN EEIV045.

¹⁰²⁹ Entrevistas del GHREN EEIV024, EEIV038, DDIV022. Según información recibida, la mayoría de las víctimas fueron trasladadas a las instalaciones de la DAJ. Véase Informe UPPN y RIDH, p. 7. El Chipote, construido en 1931 a las orillas de la Laguna de Tiscapa, en un área retiradas e inaccesible al público, tiene una historia de utilización como centro de torturas, tanto bajo la dictadura somocista como con posterioridad a la revolución Sandinista. Todas sus celdas eran “de castigo”; en su mayoría muy pequeñas y en estado insalubre, sin adecuada ventilación y sin acceso a luz natural. Al quedar inauguradas las nuevas instalaciones de la DAJ en El Nuevo Chipote, ahí fueron trasladadas la mayoría de las personas previamente detenidas en las viejas instalaciones. Aunque estas instalaciones nuevas cuentan con una infraestructura más adecuada y salubre, las prácticas de interrogatorios, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes persistieron. Véase Diario Las Américas, “El Chipote, un tenebroso sitio de tortura en Nicaragua”, 1 de julio 2015, disponible en <https://www.diariolasamericas.com/america-latina/el-chipote-un-tenebroso-sitio-tortura-nicaragua-n3195981>.

¹⁰³⁰ Entrevistas del GHREN EEIV004, EEIV005, EEIV006, EEIV007, EEIV009, EEIV010, EEIV012, EEIV015, EEIV016, EEIV017, EEIV024, EEIV035, EEIV045, AAIV002, AAIV008, AAIV010 y DDIV022.

*en el ojo, posteriormente a eso, me trasladaron a la celda y me tiraron. Perdí el conocimiento, y me desperté dentro de la celda.*¹⁰³¹

607. Las técnicas de tortura documentadas por el Grupo en el contexto de interrogatorios incluyeron: golpes y palizas que se propinaron en diferentes partes del cuerpo – incluyendo en cara, costillas, estómago, espalda, glúteos, cabeza y dientes –; la aplicación de descargas eléctricas, incluyendo en los genitales; la provocación de quemaduras con ácido y cigarrillos; asfixia; ahogamiento simulado (“submarino”); golpes con manos abiertas en los oídos (coloquialmente conocido como el “teléfono”); lesiones penetrantes con armas punzocortantes en muñecas y tobillos; arrancamiento de uñas; y posturas de tensión (piernas abiertas, suspensión de las manos, esposados a las sillas durante horas).¹⁰³² Para ello se utilizaron instrumentos como bastones policiales, cadenas, cintas, cuerdas, armas de fuego, pistolas eléctricas tipo táser, esposas, cuchillos, y bridas, entre otros.

608. Un testigo detenido en El Chipote en julio de 2018 describió las torturas sufridas:

*El tercer día me sacaron de nuevo a puñetazos al interrogatorio, me decían que me paso de listo; el cuarto día pasó igual; el quinto día empezó la misma preguntadera, quién me pagaba, quién me autorizaba. Estaba con la cara hinchada de los golpes, el ojo hinchado y cerrado, podía ver solo por un ojo y percatarme de la hora más o menos. El mismo capitán, que siempre estaba presente en los interrogatorios, sacó esta vez un teléfono y empezó a grabar. Los demás seguían golpeándome en la cara, en las costillas, en el estómago, siempre enchachado [esposado] con las manos hacía atrás [...]. En ese momento, entraron otros dos oficiales con una tenaza, me golpearon, me patearon hasta que casi me desmayé. Al rato pusieron mis manos sobre un escritorio y me desprendieron una uña de mi mano izquierda. Esta vez el dolor fue insufrible, les pedí perdón, les rogué de parar, me desprendieron la segunda uña, me jalaban la tercera poniendo una rodilla encima de sus manos, ya no aguanté más el dolor [...] eran más de cinco y el capitán que se reía.*¹⁰³³

609. El GHREN también recibió testimonios sobre actos de violencia sexual en las instalaciones de la DAJ, inclusive casos de violación:

*Me pusieron de una manera que tenía las manos y los pies hacía arriba, me colgaron de una cadena con un gancho del techo. Quedé con la espalda hacía abajo y la cara hacía arriba. [...] salieron y regresaron y me preguntaron. Yo dije “qué te puedo decir si no tengo idea de qué me estás hablando, no puedo decirte lo que vos querés escuchar porque no sé”. Entonces empezaron a golpearme con puños, codazos, rodillazos, patadas. Luego me bajaron, me pusieron sobre el escritorio esposado y empezaron a darme con alambres, comenzaron a ponerme el cigarro encendido en mis pompis, en las piernas, yo gritaba, lloraba y ellos me tapaban la boca. En algún momento les dije que ya no podía más. Me dijeron que me iban a dar una pastilla. Empezaron a violarme.*¹⁰³⁴

610. Los testimonios recabados por el GHREN refirieron cómo, además del dolor físico sufrido, las personas detenidas fueron sometidas a sufrimientos mentales y psicológicos a través de humillaciones, amenazas, incluyendo amenazas de muerte tanto en su contra como en contra de sus familias; se les mostraron fotos de su vida cotidiana y se les hizo saber que estaban siendo vigiladas.¹⁰³⁵ En la gran mayoría de los casos investigados por el GRHEN, las personas fueron obligadas a desnudarse y hacer sentadillas, y algunas de ellas fueron obligadas a permanecer desnudas durante largos períodos de tiempo.¹⁰³⁶

¹⁰³¹ Entrevista del GHREN EEIV024.

¹⁰³² Entrevistas del GHREN EEIV004, EEIV006, EEIV009, EEIV015, EEIV016, EEIV024, EEIV045, EEIV030, BBIV003, DDIV022 y AAIV019; UDJ, informe “Principales resultados y hallazgos – Proceso de peritación forense”, noviembre 2022, pp. 38–39.

¹⁰³³ Entrevista del GHREN EEIV006.

¹⁰³⁴ Entrevista del GHREN EEIV024.

¹⁰³⁵ Entrevista del GHREN EEIV004, EEIV005, EEIV006, EEIV007, EEIV009, EEIV010, EEIV012, EEIV015, EEIV016, EEIV017, EEIV024, EEIV035, EEIV045, AAIV002, AAIV008, AAIV010, AAIV019, y DDIV022.

¹⁰³⁶ *Ibid.*

611. Un joven detenido en El Chipote en septiembre de 2018 relató al GHREN:

En el Chipote me obligaron desnudarme, a hacer sentadillas. Me pusieron en una celda muy angosta donde procedieron a tomar mis datos. Luego vino un comisionado y empezaron a interrogarme, luego me llevaron a otra celda. Me volvieron a sacar a otra interrogación. Finalmente me pusieron en una celda con cuatro lápidas [camas de cemento]. No había luz, había una puerta de metal gruesa. Me pasaban las cosas por una ventanilla [...]. Durante la primera semana me sacaban cinco a siete veces al día a interrogarme a golpes. Nunca se presentaban ni daban identificaciones. Una persona tenía un sol en su uniforme, sería cargo de subcomisionado. Otro tenía dos soles. En una ocasión me amenazaron con mi familia. Me dijeron que sabían dónde trabajaba mi [familiar], en la empresa [nombre omitido] y que había hecho un trabajo [...]. Me contaban el horario de [mis familiares].¹⁰³⁷

612. Las mujeres sufrieron insultos sexistas y amenazas específicas con ser sometidas a violencia sexual. Durante los interrogatorios a mujeres detenidas, los y las agentes utilizaron insultos sexistas como “putas”, “mujeres vagas”, “perras malditas”. Los agentes también hicieron comentarios sobre los hijos e hijas de las detenidas, buscando inducir sentimientos de culpabilidad por “ser malas madres”, en referencia a visiones patriarcales del rol de las mujeres en la sociedad y, en particular, a que las mujeres no debían estar participando en manifestaciones o eventos políticos, sino que debían mantenerse en sus casas dedicadas “a cuidar a sus hijos y a sus familias”.¹⁰³⁸ Los actos de denigración de la orientación sexual de las personas también fueron comunes durante los interrogatorios.¹⁰³⁹

b. Con la finalidad de castigar

613. Se utilizaron también los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con la finalidad de intimidar y castigar a las personas que participaron en las protestas de 2018. Según los testimonios y la información recabada, se observó un especial ensañamiento en contra de funcionarias y funcionarios públicos, militares retirados y retiradas, líderes y lideresas campesinas, estudiantes, y antiguos integrantes del FSLN y de las Juventudes Sandinistas que participaron en las manifestaciones, y que fueron considerados traidores y traidoras al partido y al sandinismo.¹⁰⁴⁰

614. Se reportó que agentes policiales, tanto hombres como mujeres, fueron los principales perpetradores de estos actos que tuvieron lugar, en la mayoría de los casos, en las estaciones de policía y en El Chipote. Sin embargo, en al menos siete de los casos investigados por el GHREN, las víctimas reportaron haber sido torturadas y/o tratadas de forma cruel, inhumana o degradante, también por integrantes de grupos armados pro-gobierno en presencia y/o con el conocimiento de las autoridades policiales.¹⁰⁴¹ Un exfuncionario público que sufrió actos de tortura relató al GHREN:

Los paramilitares estaban adentro junto con los policías que entraron y empezaron a golpearme uno por uno mientras decían “¿Qué hacemos con el desertor?” Dos paramilitares me agarraron y me llevaron a un pasillo horrible, húmedo, áspero, yo decía “¿dónde me llevan?, ¿dónde me llevan?”. Al final de este pasillo había un lugar vacío, parecía destinado para lockers [casilleros], yo resistí, pero me tiraron en este espacio, intenté levantarme, pero me arrodillaron y me estrellaron contra la pared [...]. Los oficiales estaban viendo. Me patearon durante tres horas aproximadamente. Me desmayé muchas veces, me defecué, me oriné. Me ofrecieron un cigarro, para descansar un ratito. Comenzaron a patearme de nuevo, porque era

¹⁰³⁷ Entrevista del GHREN EEIV012.

¹⁰³⁸ Entrevistas del GHREN AAIV002, AAIV010, AAIV047, AAIV050; documento en el archivo del GHREN AADOC084.

¹⁰³⁹ Entrevistas del GHREN AAIV008, AAIV039.

¹⁰⁴⁰ CIDH Informe, Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018, 5 de octubre 2020, párrs. 8, 115, 159, 172; entrevistas, <https://www.facebook.com/watch/?v=2108348169495364>.

¹⁰⁴¹ Entrevistas del GHREN EEIV004, EEIV06, EEIV016, EEIV024, EEIV045, BBIV003, DDIV022.

*un traidor... Al mismo tiempo pude ver como torturaban a [nombre de su compañero]”.*¹⁰⁴²

615. Por otro lado, durante la detención en las estaciones de la Policía y, en especial en El Chipote, se utilizaron prácticas de irritación sensorial o fisiológica¹⁰⁴³ mediante malos olores, privación de sueño, comida y bebida, privación de libertad en espacios muy pequeños, húmedos, sucios, o bien totalmente oscuros o con luz artificial permanente.¹⁰⁴⁴ Las personas no fueron provistas de sábanas ni colchones, y fueron obligadas a dormir en el suelo, que describieron como frío y mojado.¹⁰⁴⁵ Un testigo relató:

*Cuando me desperté estaba en un lugar oscuro donde no podía ver nada, sin agua y sin comida. Pasaron siete u ocho días hasta que abrieron la puerta para darme algo de comer. Así pasé 72 días en total aislamiento, del [mes omitido] de 2018 que me trasladaron al Chipote hasta [mes omitido] de 2018, que me sacaron al doctor [centro médico] del Chipote.*¹⁰⁴⁶

616. Según el testimonio de otro testigo:

*En El Chipote estaba detenido en una celda muy pequeña de cuatro camarotes, una pileta para lavarse y un hueco para hacer nuestras necesidades y todo apestaba. Tenía la puerta sellada, la luz permanecía apagada y había ausencia completa de luz natural. En el techo había un hueco cubierto con malla y barrotes y a veces por las noches llegaban culebras y gatos que lográbamos ver por el brillo de sus ojos. En el otro pasillo se escuchaban los llantos de las muchachas. Todos estábamos en la incertidumbre y pensábamos que nos iban a matar, yo no dormía pensando en mi hijo y lloraba. Los días que permanecí en El Chipote, en la total oscuridad, podía percatarme del tiempo aproximadamente, gracias a las requisas ordinarias que se realizaban en el recinto. Durante estas requisas, los oficiales nos sacaban [...] desnudos de nuestras celdas, y nos ordenaban pronunciar nuestros nombres, apellidos y código de preso. Si no lo hacíamos, nos estallaban la cabeza contra la pared.*¹⁰⁴⁷

617. Otro testigo describió las condiciones de detención en El Chipote en los términos siguientes:

*El calabozo número 20 de la DAJ estaba lleno de agua, los camarotes quebrados. Estuve 38 días en este calabozo siempre esposado. El chorro de agua se mantenía siempre abierto. Me sacaban a torturar, me volvían a meter, siempre recibiendo golpizas en la cabeza, los costados. La puerta era de hierro, y por los barrotes entraba un poco de luz amarillenta. Con cada cambio de guardia abrían el calabozo para torturarme. Había escuchado de un puesto médico y pedí atención [...], más el zancudero ahí adentro [en referencia a que había muchos mosquitos], había perdido la noción del tiempo. Me llevaron a este puesto médico en dos o tres ocasiones, me daban pastillas [...] para dormir, pero no las tomaba porque temía que iban a venir a matarme cuando estaba durmiendo. Siempre estaba desnudo con un calzoncillo.*¹⁰⁴⁸

¹⁰⁴² Entrevista del GHREN EEIV004.

¹⁰⁴³ Relator Especial sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, informe A/HRC/43/49, 20 de marzo de 2020, párr. 26: “La tortura física, “sin contacto”, evita la interacción física directa, pero sigue manipulando de forma intencionada las necesidades, funciones y reacciones fisiológicas para infligir dolores o sufrimientos físicos. Aunque esas técnicas utilizan deliberadamente el conducto del cuerpo de la víctima para infligirle dolores y sufrimientos, en ocasiones se consideran como tortura psicológica, principalmente por sus motivos psicológicos y por su efecto destabilizador previsto en la mente y las emociones humanas, así como por el limitado contacto físico entre el torturador y la víctima. No obstante, si las técnicas “sin contacto” infligen dolores o sufrimientos físicos graves de cualquier tipo, deberían considerarse tortura física”.

¹⁰⁴⁴ Entrevistas del GHREN EEIV004, EEIV005, EEIV006, EEIV009, EEIV012, EEIV016, EEIV017, EEIV024, EEIV045, DDIV022, AAIV039, AAIV047, AAIV048, AAIV052.

¹⁰⁴⁵ Entrevistas del GHREN EEIV004, EEIV005, EEIV006, EEIV012, EEIV016, EEIV017, EEIV024, EEIV045, AAIV047, AAIV048, AAIV050, AAIV051, AAIV053, DDIV022.

¹⁰⁴⁶ Entrevista del GHREN EEIV024.

¹⁰⁴⁷ Entrevista del GHREN EEIV006.

¹⁰⁴⁸ Entrevista del GHREN EEIV009.

618. En al menos nueve casos investigados por el GHREN, tanto hombres como mujeres fueron obligados a permanecer desnudos o semidesnudos durante su detención en la Dirección de Auxilio Judicial, por periodos que oscilaron desde unas horas hasta varias semanas.¹⁰⁴⁹

iii) Torturas y trato discriminatorio en el Sistema Penitenciario Nacional

619. Las personas opositoras o percibidas como tales que fueron trasladadas a centros del SPN fueron sometidas a tratos discriminatorios y a condiciones de detención contrarias a los estándares internacionales, que constituyeron tratos inhumanos, crueles o degradantes y, en algunos casos, tortura.

620. Entre abril de 2018 y junio de 2019, la mayoría de los hombres detenidos fueron trasladados al complejo carcelario Jorge Navarro de Tipitapa, en Managua, conocido como “La Modelo”, y las mujeres al Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM) de Tipitapa, también llamado “La Esperanza”. En estos centros, las personas fueron recluidas en celdas o galerías separadas en condiciones de hacinamiento, y privadas de cualquier interacción con presos y presas comunes. A partir de julio de 2019, las personas detenidas por motivos políticos fueron recluidas en centros del SPN en diversos lugares del país, además de en La Modelo y en La Esperanza.¹⁰⁵⁰

621. Las personas detenidas en La Modelo y en La Esperanza fueron sometidas a malos tratos implementados de forma discriminatoria, como castigo por su opción política, real o percibida. Éstos incluyeron golpizas, amenazas e insultos; prohibición de comunicarse con otras personas detenidas; aislamiento en celdas de castigo; comida inadecuada y en algunos casos en porciones más reducidas que las correspondientes a presos comunes; cortes de agua y luz en las celdas; y la negativa a entregar la paquetería con alimentos e insumos básicos que traían sus familias. El acceso a atención médica fue muy limitado, y se brindó en raras ocasiones o cuando la situación médica de la persona se había agravado.

a. Aislamiento prolongado e indefinido

622. En La Modelo, varios de los detenidos fueron sometidos a un régimen de aislamiento prolongado e indefinido en la sección de máxima seguridad, conocida como “La 300” y en las celdas de castigo conocidas como “El Infernillo”.¹⁰⁵¹ Los detenidos fueron ubicados en celdas segregadas, de 3 por 2 metros; estas celdas estaban cerradas con puertas de metal, eran oscuras, insalubres, sin ventilación y suficiente luz natural, y estaban expuestas a la humedad, el frío o el calor extremo.¹⁰⁵² Este trato particularmente severo fue aplicado mayoritariamente a líderes de tranques y de tomas de universidades, líderes sociales, integrantes de la oposición política, exmilitantes del FSLN, y líderes estudiantiles.¹⁰⁵³

*[Nombre omitido] me dijo que esto era mi final, que iba a pagar, que iba a saber ahora qué es la prisión. Me habían quitado la ropa, estaba solo en bóxer. La puerta de la celda era sellada, tenía un espacio de 3 por 2 metros. Pasé [más de nueve meses] detenido en esta celda. Siempre estuve en La 300, siempre solo. Con el tiempo logramos que nos dejaran entrar una biblia.*¹⁰⁵⁴

¹⁰⁴⁹ Entrevista del GHREN EEIV09.

¹⁰⁵⁰ Mecanismo para el registro de personas presas políticas, Lista personas presas políticas Nicaragua, octubre–noviembre 2022, disponible en: <https://presasypresospoliticosnicaragua.org/wp-content/uploads/2022/12/lista-PP-oct-nov-2022.pdf>.

¹⁰⁵¹ Las Reglas Nelson Mandela definen el aislamiento como “aquel que se extiende por un mínimo de 22 horas diarias sin contacto humano apreciable. Por aislamiento prolongado se entiende el aislamiento que se extiende durante un período superior a 15 días consecutivos”. Restringen el uso del aislamiento en circunstancias excepcionales, como último recurso, durante el menor tiempo posible y con sujeción a una revisión independiente y prohíben el uso del aislamiento indefinido y prolongado. Reglas Nelson Mandela, Reglas 38.2, 43.1, 44, 45.1, 45.2, 46.

¹⁰⁵² Documentos en el archivo del GHREN EEDOC039, EEDOC040, EEDOC041, EEDOC042, EEDOC043, EEDOC044, EEDOC045, EEDOC046, EEDOC047, EEDOC048, EEDOC049 y EEDOC050.

¹⁰⁵³ Entrevistas del GHREN EEIV005, EEIV016, EEIV023, EEIV067, EEIV069.

¹⁰⁵⁴ Entrevista del GHREN EEIV017.

623. Las celdas de El Infiernillo alcanzaban temperaturas de 45 grados Celsius y contaban con acceso limitado a agua. Varios testigos describieron al GHREN las condiciones de detención en estas celdas de castigo:

Me llevaron a las celdas del módulo 3-2 conocido como “El Infiernillo” [...], sin permiso de tener panas [palanganas] o platos para comer, ni sábanas, ni toallas, ni cepillo de dientes, y empezaron los ataques psicológicos, robándome mi paquetería o sustrayendo cosas de ella para disimular el robo, la falta de atención médica [...]. Se deterioró mi salud, al solicitar medicamento recibía violencia verbal, algunas veces nos prensaban y golpeaban los dedos con la ventanilla de la puerta [...] todo eso en ese pequeño espacio, la presión de calor es muy fuerte ya que no cuenta con suficiente ventilación, está plagado de alimañas como alacranes, culebras, arañas, escarabajos, moscas [...] el agua llegaba sucia y por tiempos cortos [...] no se nos permitía ningún tipo de actividad mental y física, es prohibido hacer pechada [flexiones], no hay acceso a libros, deporte y ningún tipo de recreación, estábamos en régimen de aislamiento, todo reo que tuviera comunicación con nosotros era sancionado por el régimen penitenciario.¹⁰⁵⁵

624. Otro testigo describió su experiencia personal en los términos siguientes:

En El Infiernillo se me contaminó la piel, se me pudrió. Me salieron hongos, mi piel se erupcionaba. Sentía profundo dolor y ardor. Mi mamá había tratado de traerme la farmacia entera porque además tenía problemas de pulmones. Faltaba luz, faltaba aire, es muy difícil reciclar el aire ahí. La sensación térmica en este lugar llega a 45 grados.¹⁰⁵⁶

625. Las salidas de la celda fueron irregulares y escasas; algunas personas no pudieron abandonarlas para salir al patio o recibir visitas, ni comunicarse con sus familiares durante semanas, o incluso meses. Algunos detenidos permanecieron en dicho régimen por más de dos años. A partir de 2020, se instalaron cámaras en cada celda, impidiendo cualquier momento de privacidad.

626. La medida de aislamiento se impuso tanto a las personas condenadas como a aquellas a la espera de juicio y, en la mayoría de los casos, no fue justificada o explicada. Por ejemplo, no se informó a las personas detenidas ni a sus representantes si se trataba de una medida disciplinaria o una medida para la prevención de riesgos y la protección de la persona privada de libertad. El aislamiento tampoco se aplicó con carácter de medida circunstancial y temporal, tal y como lo requiere el artículo 108 de la Ley del Régimen Penitenciario.¹⁰⁵⁷ Al contrario, se aplicó por períodos de tiempo indefinidos y prolongados durante los cuales las personas detenidas no tuvieron ningún contacto humano significativo, tanto dentro de la prisión como con el mundo exterior. Tampoco tuvieron acceso a correspondencia y llamadas telefónicas, ni a material de lectura, televisión o radio.¹⁰⁵⁸

En abril me trasladaron a El Infiernillo [...]. Me hicieron pasar por el túnel que conduce a El Infiernillo y me dijeron que ahora las cosas cambian. Me encerraron en una celda de 3 por 2 con una cámara encendida las 24 horas. Ahí empezó mi hostigamiento, decidieron que no iba a tener visitas, llegaba el director en la madrugada para [insultarme], otro día [me golpeó]. Pasé un buen rato con la sangre en la cara sin tener agua para limpiarme. En estas celdas el agua viene por una hora al día [...]. Pasé [número omitido] años en

¹⁰⁵⁵ Documentos en el archivo del GHREN EEDOC051, EEIV016.

¹⁰⁵⁶ Entrevista del GRHEN EEIV067.

¹⁰⁵⁷ Ley del Régimen Penitenciario, art 108 (medidas cautelares en caso de riesgo): En los casos en que esté en riesgo la integridad física de los privados de libertad y su familia, así como el orden y la seguridad en el centro penitenciario o de su personal, se deben tomar las medidas cautelares siguientes: 1. Ubicación del privado de libertad en unidades de máxima seguridad dentro del mismo centro; [...] Las medidas cautelares se utilizarán exclusivamente como forma de prevención y solución circunstancial y temporal ante situaciones de inminente peligro personal o institucional. En cualquiera de los casos estas medidas deben de ser razonadas y fundamentadas por escrito por parte del director del centro penitenciario, todo debe de hacerse constar en el expediente del privado de libertad y comunicárselo de forma personal al interno.

¹⁰⁵⁸ Entrevistas del GHREN EEIV005, EEIV013, EEIV016, EEIV026, EEIV027, EEIV067, EEIV069.

*el Infernillo aislado [...] era tanta la tristeza de no saber lo que estaba pasando fuera, nunca tener salidas al patio sol, nunca ver el sol.*¹⁰⁵⁹

627. En varios casos documentados, las personas detenidas en las celdas de máxima seguridad sólo pudieron recibir visitas una vez al mes, y durante un tiempo reducido de entre 15 y 45 minutos. Durante dichas visitas, no se permitió ningún contacto físico entre el detenido y sus familiares, ya que se realizaron a través de un vidrio y mediante un teléfono. Las conversaciones fueron grabadas. El programa de visitas se alteraba a menudo sin aviso previo, algo que causaba mucha frustración y sufrimiento tanto a las personas detenidas como a sus familiares.¹⁰⁶⁰ De acuerdo con un testimonio:

*Se nos puso un régimen de visitas mensuales, en mi caso personal de 30 minutos al mes, hablando a través de un teléfono que graba todas las conversaciones y que está siendo monitoreado, y lo sé porque me decían cosas que yo había hablado con mis familiares [...]. Día a día en las celdas de máxima [seguridad] es lo mismo, compañeros enfermos, comida deplorable, insultos, amenazas, discriminación, represión, odio, ataques psicológicos en los que te cambiaban las fechas de las visitas o simplemente no te las daban para que no sepas qué día te vendrán a visitar, lo que provoca desgaste ¿será que vayan a venir? ¿será que a alguien de mi familia le pasó algo? ¿les habrá ocurrido algo?*¹⁰⁶¹

628. Según el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el régimen de aislamiento reduce los contactos sociales significativos a un mínimo absoluto. El nivel de estímulo social que resulta de ello no es suficiente para que la persona conserve un estado razonable de salud mental.¹⁰⁶² Para el Relator, el régimen de aislamiento prolongado reviste especial preocupación; el plazo de 15 días es el límite entre el “régimen de aislamiento” y el “régimen de aislamiento prolongado” porque, en ese punto, algunos de los efectos psicológicos nocivos del aislamiento pueden ser irreversibles.¹⁰⁶³ El Relator Especial ha considerado que cuanto más prolongada sea la duración del régimen de aislamiento o mayor la incertidumbre acerca de la duración, mayor será el dolor y el sufrimiento de las personas sometidas a ese régimen, así como el riesgo de causar un daño grave o irreparable a la persona reclusa. Diversos mecanismos de derechos humanos, tales como el Comité de Derechos Humanos, el CAT y la Corte IDH han considerado que dicha situación podría constituir un trato o castigo cruel, inhumano o degradante, o incluso tortura.¹⁰⁶⁴

b. Condiciones de detención inadecuadas y discriminatorias

629. Las condiciones de detención en las instalaciones del SPN fueron violatorias de los estándares internacionales de derechos humanos. En 2018 y la primera mitad de 2019, las personas detenidas en el marco de las manifestaciones fueron privadas de cualquier interacción con los presos y presas comunes y fueron recluidas en celdas o galerías separadas en condiciones de hacinamiento. Debido a las condiciones de hacinamiento, muchas personas

¹⁰⁵⁹ Entrevista del GHREN EEIV069.

¹⁰⁶⁰ Entrevistas del GHREN EEIV005, EEIV016, EEIV017, EEIV023.

¹⁰⁶¹ Entrevista del GHREN EEIV016.

¹⁰⁶² Véase Informe del Relator Especial contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, informe A/66/268, 5 de agosto de 2011, párr. 62. Los efectos negativos en la salud pueden producirse después de solo unos pocos días de régimen de aislamiento, y los riesgos para la salud aumentan con cada día que se pase en esas condiciones. Los expertos que han examinado los efectos del régimen de aislamiento han constatado tres elementos comunes que están intrínsecamente presentes en ese régimen: el aislamiento social, una estimulación ambiental mínima y una “oportunidad mínima de interacción social”. Véase, en este mismo sentido, A/63/175.

¹⁰⁶³ Las investigaciones muestran asimismo que el régimen de aislamiento parece causar “trastornos psicóticos”, un síndrome que se ha denominado “psicosis de prisión”. Los síntomas pueden incluir ansiedad, depresión, ira, trastornos cognitivos, distorsiones de la percepción, paranoia y psicosis y lesiones autoinfligidas. *Ibid.*, párr. 26.

¹⁰⁶⁴ CAT, Examen de los informes presentados por los estados parte en virtud del artículo 19 de la Convención, Conclusiones y recomendaciones, CAT/C/DNK/CO/5, párr. 14; Corte IDH, *Cantoral Benavides Vs. Perú*, Sentencia de 18 de agosto de 2000, párrs. 63 y 104.

no tuvieron cama, colchón o manta.¹⁰⁶⁵ A partir del segundo semestre de 2019, las personas opositoras fueron acusadas por delitos comunes, y comenzaron a ser privadas de su libertad también en áreas asignadas a presos comunes, con algunas excepciones en el caso de personas recluidas en la unidad de máxima seguridad y en celdas de castigo.

630. Las personas opositoras, reales o percibidas, recibieron una alimentación inadecuada en el SPN. El GHREN recibió múltiples y creíbles testimonios que indicaron que en la comida se encontraban gusanos, pedazos de vidrio, piedras, moscas, aluminio. Al mismo tiempo, los alimentos que les llevaban sus familias eran sistemáticamente retenidos y requisados; por lo que en los casos en que finalmente se entregaba se encontraban en malas condiciones, caducados y evidentemente manipulados.¹⁰⁶⁶ De igual forma, las condiciones de higiene y salubridad fueron y continúan siendo muy precarias.

631. El acceso a la atención médica fue muy limitado o inexistente. Según los testimonios recibidos, se brindó atención médica en muy pocas ocasiones, o cuando la situación del o de la paciente ya se había deteriorado y era grave. En algunos casos las autoridades penitenciarias ignoraron órdenes judiciales para la atención médica, la realización de evaluaciones forenses y remisión a especialistas. Además, la distribución de medicamentos a los y las pacientes crónicas fue desordenada.¹⁰⁶⁷ Por otro lado, el GHREN también recibió testimonios sobre malos tratos hacia las personas privadas de libertad por los médicos del SPN.¹⁰⁶⁸ Una abogada defensora expresó al GHREN:

*Solicité en [varias]ocasiones la valoración física o psicológica de mi defendido bajo el principio de la humanidad. Además, solicité examen de médico y odontólogo forenses del Instituto Médico Forense, pero él no fue valorado ni una vez.*¹⁰⁶⁹

632. Un preso relató su experiencia con los servicios médicos en los términos siguientes:

*Cuando me desperté en el hospital [...] el doctor decidió sacarme solamente placas [heridas omitidas]. El muchacho que me sacaba las placas me decía con señas que tenía [heridas omitidas]. El doctor dijo “este perro no tiene nada, llévenselo”.*¹⁰⁷⁰

633. Por otro lado, existieron casos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el marco de interrogatorios, requisas y castigos en el SPN. Estos se aplicaron por medio de cortes de agua, luz y entrega de la paquetería con los insumos que proveían las familias, golpizas, y amenazas. Un joven detenido en La Modelo relató:

*Me sacaron a golpearme en varias ocasiones. Recuerdo [...] que nos sacaron [a varios hombres] para ejemplificar, nos colgaron de un tubo con los grilletes al revés, llegaron a golpearlos con culetazos, con bates, mientras nos decían que eran del frente sandinista, querían desquitarse contra nosotros. Después de eso no recibí atención médica, escupí y vomité sangre, defecué sangre y nunca recibí atención médica. Mi familia presentó una denuncia porque se enteró de las heridas. Otro día estaban enojados y llegaron a golpearlos. Hasta el doctor llegó a golpearlos.*¹⁰⁷¹

634. Según otro testimonio:

*Nos recibieron con golpes, nos desnudaron. Empezaron a turnarse con tonfas [porras], unos 20 minutos, nosotros estábamos engrilletados, nos dieron uniformes. Nos golpeaban, nos amenazaban todo el tiempo. Nos dejaron con daños en la columna. Y complicaban nuestras visitas, la atención médica. En dos años me barbeé dos veces porque querían agredirnos de esta forma también, cortándonos el pelo feo.*¹⁰⁷²

¹⁰⁶⁵ Entrevistas del GHREN EEIV004, EEIV005, EEIV006, EEIV07, EEIV009, EEIV010, EEIV012, EEIV015, EEIV023, EEIV024, EEIV026, EEIV037, EEIV045, DDIV022.

¹⁰⁶⁶ Entrevistas del GHREN EEIV005, EEIV006, EEIV012, EEIV016, EEIV045, EEIV050, DDIV022.

¹⁰⁶⁷ Entrevistas del GHREN EEIV004, EEIV005, EEIV006, EEIV009, EEIV010, EEIV012, EEIV015, EEIV023, EEIV024, EEIV026, EEIV037, EEIV045, DDIV022.

¹⁰⁶⁸ Entrevistas del GHREN EEIV016; EEIV024.

¹⁰⁶⁹ Entrevista del GHREN EEIV029.

¹⁰⁷⁰ Entrevista del GHREN EEIV024.

¹⁰⁷¹ Entrevista del GHREN EEIV016.

¹⁰⁷² Entrevista del GHREN EEIV067.

635. Al menos en cuatro ocasiones, agentes antidisturbios llevaron a cabo operativos en La Modelo y La Esperanza, durante los cuales hicieron un uso excesivo de la fuerza, agrediendo a las personas detenidas por medio de golpes, patadas, bastones policiales, y químicos (gases lacrimógenos) dirigidos directamente a la cara y los genitales.¹⁰⁷³ Por ejemplo, el 7 de febrero de 2019, en La Esperanza, algunas mujeres detenidas en el marco de las protestas fueron violentamente reprimidas con golpes por los custodios por haberse opuesto al traslado de tres de ellas. Algunas de ellas fueron gravemente heridas como resultado de esa intervención.¹⁰⁷⁴

636. La muerte del preso Eddy Montes Praslín también se produjo en este contexto de constante tensión. El 16 de mayo de 2019, un grupo de hombres privados de libertad en el pabellón 61 de La Modelo protestaron por las condiciones inhumanas de detención. Los custodios del penal respondieron a la protesta mediante la utilización de armas de fuego, causando la muerte del Sr. Montes, e hiriendo a 17 personas más.¹⁰⁷⁵ Según testigos presenciales entrevistados por el Grupo, el personal penitenciario no habría prestado auxilio a la víctima, a pesar de que estaba bajo su custodia y de que los demás detenidos solicitaron de inmediato que se le prestara socorro.¹⁰⁷⁶

iv) Tortura blanca y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en El Nuevo Chipote¹⁰⁷⁷

637. A partir de mayo de 2021, se produjo la detención de muchos de los principales liderazgos políticos de oposición del país, personas activas en movimientos y partidos políticos, periodistas, académicos y líderes religiosos. La mayoría de las personas detenidas durante este periodo fueron trasladadas a un nuevo recinto de la Dirección de Auxilio Judicial –Complejo Policial Evaristo Vásquez, inaugurado en 2019 y conocido como “El Nuevo Chipote”– con la excepción de algunas personas que fueron reclusas en La Esperanza y La Modelo, y algunos líderes y lideresas políticas territoriales reclusos en centros del SPN en otros departamentos del país.¹⁰⁷⁸

¹⁰⁷³ Entrevista del GHREN EEIV004, EEIV005, EEIV006, EEIV016, EEIV017, EEIV023, EEIV024, EEIV026, EEIV029, EEIV033; <https://cnnespanol.cnn.com/2019/02/21/denuncian-golpiza-a-presos-de-carcel-la-modelo-en-nicaragua/>

¹⁰⁷⁴ Documentos en el archivo del GHREN AADOC127 y AADOC057. Véase también La Prensa, Denuncian nueva golpiza a presas políticas de la dictadura Ortega-Murillo, 8 de febrero de 2019, disponible en: <https://www.laprensani.com/2019/02/08/nacionales/2522379-denuncia-nueva-golpiza-presas-politicas-de-la-dictadura-ortega-murillo>; Artículo 66, Mujeres de la diáspora nicaragüense denuncian en Miami los abusos contra las presas políticas, disponible en: <https://www.articulo66.com/2019/02/15/mujeres-la-diaspora-nicaraguense-denuncian-miami-los-abusos-las-presas-politicas/>; y Radio Corporación, Noticiero en línea del 8 de febrero de 2019, disponible en: <https://es-la.facebook.com/RadioCorporacion/videos/noticiero-en-l%C3%ADnea-viernes-08-de-febrero-2019/282804985730918/>

¹⁰⁷⁵ La Prensa, “Así ocurrió el asesinato de Eddy Montes, según los relatos de los excarcelados políticos”, 21 de mayo 2019, disponible en: <https://www.laprensani.com/2019/05/21/nacionales/2551494-asi-ocurrio-el-asesinato-de-eddy-montes-segun-los-relatos-de-los-excarcelados-politicos>.

¹⁰⁷⁶ Entrevistas del GHREN, EEIV004, EEIV005, EEIV006, EEIV009, EEIV024, DDI022.

¹⁰⁷⁷ Según imágenes satelitales obtenidas mediante DigitalGlobe el 14 de diciembre 2022, las instalaciones de El Chipote parecen haber sido demolidas. Sin embargo, las instalaciones nuevas de la DAJ, conocida como Nuevo Chipote, habrían sido ampliadas; fotos satelitales en el archivo del GHREN EEDOC262; EEDOC262; EEDOC263.

¹⁰⁷⁸ El 4 de octubre de 2022, la Corte IDH otorgó medidas provisionales a 45 personas privadas de su libertad en ocho centros de detención en Nicaragua. En su resolución, la Corte admitió la solicitud presentada por la CIDH considerando que las personas sometidas a detenciones arbitrarias a partir de 2020 y durante 2021, “se encontrarían en condiciones insalubres, sufriendo malos tratos con la aplicación arbitraria de regímenes de máxima seguridad, además de la falta de atención médica adecuada, oportuna y especializada”. Por lo tanto, ordenó la adopción de “*las medidas que fuesen necesarias para evitar daños irreparables a los derechos a la vida, integridad personal y salud*” de las 45 personas beneficiarias, así como su liberación inmediata. Ante la falta de cumplimiento por parte del Estado, la Corte IDH declaró el desacato permanente de Nicaragua unas semanas después. Véase Corte IDH, Resolución de 4 de octubre de 2022, Medidas Provisionales, Asunto 45 personas privadas de su libertad en 8 centros de detención respecto de Nicaragua; Corte IDH, comunicado de prensa, “Corte Interamericana declara desacato permanente del estado de nicaragua respecto a las medidas

638. El GHREN investigó 14 casos de personas opositoras o percibidas por las autoridades como tales, que fueron privadas de su libertad en El Nuevo Chipote desde mayo de 2021. Se constató una evolución en los métodos empleados contra el grupo de personas detenidas en estas instalaciones, privilegiando prácticas como el aislamiento prolongado e indefinido, incluyendo en algunos casos en régimen de incomunicación, la irritación sensorial, amenazas, insultos, y la creación de un “entorno de tortura”: esto es, la generación de una variedad de situaciones y combinación de métodos deliberadamente diseñados para infligir dolor y sufrimientos mentales y físicos (acceso limitado a luz natural, restricciones alimentarias, privación del sueño, prohibición de realizar cualquier actividad de recreo, y de acceso a material de lectura, escritura, televisión, radio, correspondencia o llamadas de familiares).

639. En algunos casos, dichos tratos alcanzaron el umbral de la tortura, debido a su combinación, carácter prolongado, la presencia de otros factores estresantes o vulnerabilidades y los graves daños psicológicos infligidos a las víctimas. Dichas prácticas estuvieron orientadas a castigar y quebrar a las personas, y no necesariamente a obtener información.

a. Aislamiento

640. A su llegada a El Nuevo Chipote, tanto los hombres como las mujeres fueron despojados de su ropa y permanecieron reclusas solas en celdas separadas, sin una frazada o almohada, durmiendo en una plancha de cemento sin colchón, sin ningún abrigo, toalla, o ropa. Se les privó de todo contacto con sus familiares, abogados y abogadas. Durante los primeros días e incluso semanas de su detención, las autoridades se negaron a brindar información sobre el paradero de las personas detenidas a sus familias, abogadas y abogados, que los buscaban tanto en la DAJ como en las estaciones de policía, sin poder obtener información oficial al respecto. La detención o arresto sin que la autoridad informara sobre la suerte o el paradero de las personas detenidas, sustrayéndolas así de la protección de la ley, constituye técnicamente desaparición forzada. La desaparición forzada puede equivaler a una forma de tortura tanto en lo que respecta a la persona desaparecida como a sus familiares.¹⁰⁷⁹

641. Tras pasar entre unas semanas y varios meses detenidas en aislamiento, la mayoría de las personas fueron ubicadas en celdas compartidas por dos personas. Sin embargo, no se les permitía hablar entre ellas, aplicándoseles diversos castigos en caso de incumplir esta regla. Custodios presentes las 24 horas del día estaban encargados de asegurar que las personas no pudieran hablar, especialmente en el pabellón de las mujeres. Se identificó un trato particularmente duro contra cuatro mujeres dirigentes políticas de UNAMOS, quienes fueron reclusas en celdas separadas durante la totalidad de su detención, esto es, más de 18 meses.

642. Las salidas a patio sol fueron dispersas o inexistentes para hombres y mujeres. Las salidas variaron para los distintos presos y presas, desde frecuencias de una vez a la semana por 15 minutos a ninguna salida por un tiempo prolongado de dos meses, hasta la prohibición absoluta.¹⁰⁸⁰ Las personas detenidas tuvieron prohibido cualquier tipo de comunicación con otros y otras detenidas; les fue prohibido cualquier contacto con el mundo exterior, aparte de las visitas irregulares de sus familiares, y no tuvieron acceso a información, material de lectura o escritura o ninguna actividad recreativa.¹⁰⁸¹ Según los testimonios recibidos, las etiquetas de los productos que sus familias les entregaban fueron retiradas para restringir totalmente su posibilidad de lectura.

Las mujeres solían leer en voz alta las etiquetas del papel higiénico, de las botellas de agua, para poder escuchar su propia voz [...] Cuando cesaron por un tiempo los

provisionales adoptadas en los asuntos Juan Sebastián Chamorro y otros y 45 personas privadas de su libertad en 8 centros de detención respecto de Nicaragua. San José, Costa Rica, 29 de noviembre de 2022, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_86_2022.pdf

¹⁰⁷⁹ Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Informe A/56/156, 3 de julio de 2001, párrs. 9–16.

¹⁰⁸⁰ Entrevistas del GHREN AAI047, AAI048, AAI050, AAI052, EEIV063, EEIV064, EEIV065; EEIV068.

¹⁰⁸¹ Entrevistas del GHREN AAI047, AAI048, AAI050, AAI051, AAI052, EEIV063, EEIV064, EEIV065, EEIV068.

*interrogatorios [ella] los extrañó [a los agentes de policía] porque fue el único contacto humano que tenía.*¹⁰⁸²

b. Condiciones de detención

643. La atención médica fue inadecuada, insuficiente e incluso negada, hecho que agravó la situación de las personas que sufrían de enfermedades crónicas o causó nuevos padecimientos a otras personas, que se fueron presentando debido a las condiciones de detención. Se mencionaron hernias, diabetes, y problemas de presión alta, ácido úrico, y dermatológicos. La distribución de los medicamentos a los pacientes crónicos continuó siendo desordenada.¹⁰⁸³ Según el testimonio de un testigo cercano a la persona detenida:

*El caso de [nombre omitido] es dramático, tiene [una serie de afectaciones médicas], no le han dado ninguna respuesta, sólo mandan un médico del sistema judicial. Estuvo en una celda de castigo empotrada y húmeda [muchos] días. Eso le provocó hongos en todo su cuerpo que tampoco han sido tratados. Ha perdido peso de forma extrema.*¹⁰⁸⁴

644. El 12 de febrero de 2022, Hugo Torres Jiménez, uno de los líderes emblemáticos de la revolución sandinista en Nicaragua e integrante de UNAMOS, murió ocho meses después de ser detenido.¹⁰⁸⁵ Según lo denunciado por organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, las condiciones precarias y la falta de atención médica aceleraron el deterioro de su salud. Hugo Torres murió en un hospital de Managua bajo custodia carcelaria. Tenía medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 30 de agosto de 2021. La CIDH había considerado que sus derechos a la vida, integridad personal y salud se encontraban en grave riesgo.¹⁰⁸⁶

645. La alimentación de las personas detenidas también fue de mala calidad e intencionalmente reducida; como relató un testigo: “hubo días que se podían contar los granitos de frijol”.¹⁰⁸⁷ El acceso a alimentos ha sido usado de manera arbitraria en contra de las personas detenidas en la DAJ, pasando de raciones pequeñas y supresión de ciertos tipos de alimentos, a comidas copiosas y altamente calóricas.¹⁰⁸⁸ Según la información recolectada, las restricciones a la alimentación han sido utilizadas como mecanismo de castigo contra las personas detenidas, en particular después de las declaraciones públicas realizadas por sus familiares.¹⁰⁸⁹

646. El 29 de agosto 2022, en conferencia de prensa, familiares de personas detenidas denunciaron públicamente que las raciones de comida en El Nuevo Chipote fueron disminuidas en extremos incompatibles con la vida y que la mayoría de las personas presas habían bajado de peso de forma pronunciada. Como respuesta a dichas denuncias, entre agosto y septiembre 2022, el Gobierno realizó “audiencias informativas” durante las cuales

¹⁰⁸² Entrevista del GRHEN EEIV010.

¹⁰⁸³ Entrevistas del GRHEN EEIV008, EEIV011, EEIV013, EEIV019, EEIV020, EEIV021, EEIV025, EEIV029, EEIV032, EEIV047.

¹⁰⁸⁴ Entrevista del GRHEN EEIV008.

¹⁰⁸⁵ Listado proporcionado por la organización Unidad de Registro (UDR), en el archivo del GHREN EEDOC102.

¹⁰⁸⁶ CIDH, Resolución 71/2021 Medidas Cautelares Nos. 593–21, 665–21 y 680–21, Ana Margarita Vijil Gurdíán y otros respecto de Nicaragua, 30 de agosto de 2021, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_71-21_mc_593-21.%20665-21%20y%20680-21_ni_es.pdf

¹⁰⁸⁷ Entrevistas del GHREN EEIV010, EEIV025, EEIV047, EEIV063, EEIV065, EEIV066, EEIV068, AAIV047, AAIV048, AAIV050, AAIV052.

¹⁰⁸⁸ Entrevistas del GHREN EEIV063, EEIV065, EEIV066, EEIV068, AAIV047, AAIV048, AAIV050, AAIV052.

¹⁰⁸⁹ Ver en particular, Presos políticos de ‘El Chipote’ en situación “crítica de salud”, denuncian familiares, 24 de enero de 2022, disponible en: <https://www.lamesaredonda.net/presos-politicos-de-el-chipote-en-situacion-critica-de-salud-denuncian-familiares/>; Comunicado de familiares de personas presas políticas secuestradas en la estación policial, El Chipote, 6 de mayo de 2022, disponible en: <https://alianza-progresista.info/2022/05/06/comunicado-de-familiares-de-personas-presas-politicas-secuestradas-en-la-estacion-policial-el-chipote/>; https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-crisis_familias-denuncian-adelgazamiento-extremo-de-opositores-presos-en-nicaragua/47861566

presentó públicamente a 27 de las personas detenidas para demostrar su “buen estado” de salud. Dichas audiencias no existen en el derecho procesal penal nicaragüense, y fueron realizadas sin presencia de la defensa técnica de las personas detenidas.

c. Incertidumbre y arbitrariedad en la aplicación de las reglas y protocolos internos

647. La ausencia de regulación de la privación de la libertad prolongada en El Nuevo Chipote, un recinto policial que no es parte del SPN, situó a las personas detenidas en una posición de vulnerabilidad e instauró un clima generalizado de inseguridad. Ante la falta de reglamentación, las autoridades ejercieron el control arbitrariamente, cambiando las normas constantemente, aplicando castigos y restringiendo los derechos de las personas detenidas a voluntad.

648. Esta situación, combinada con la arbitrariedad de los procesos penales y las dificultades para comunicarse con el mundo exterior y con sus familias, ocasionó una ansiedad extrema a las personas detenidas, contribuyendo a patrones de tratos inhumanos y degradantes, que en algunos casos constituyeron tortura.

649. Las visitas familiares a las personas detenidas en El Nuevo Chipote se autorizaron de manera irregular, en intervalos de entre 45 y 75 días, y mediante notificación unas horas antes de la visita. Las víctimas y sus familiares no tuvieron posibilidad de tener ningún tipo de comunicación fuera de las visitas; la entrega de paquetería también fue obstaculizada. Esto generó mucha tensión y estrés a las víctimas y las y los familiares. Al menos cuatro de las personas detenidas tuvieron prohibido todo contacto con sus hijos e hijas por periodos que oscilaron entre 15 y 18 meses.¹⁰⁹⁰

v) Castigo a través del castigo a familiares

650. Durante todo el periodo bajo examen, y en los diversos lugares de detención, las personas opositoras, reales o percibidas, fueron objeto de castigos y amenazas contra la vida e integridad de sus familiares. La tortura psicológica a menudo tuvo un componente de género, con insultos sexistas, y amenazas y culpabilización a las mujeres utilizando a sus hijos e hijas.¹⁰⁹¹

651. El uso de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se extendió también a familiares de las personas detenidas. Los familiares reportaron haber sufrido violencia física y/o psicológica por el personal de El Nuevo Chipote, La Modelo y La Esperanza. Ello incluyó tratos humillantes o degradantes, violencias sexuales y de género durante los registros, y amenazas de represalias contra sus familiares detenidos si denunciaban las condiciones de detención.¹⁰⁹²

vi) Uso de la violencia sexual

652. El GHREN tiene motivos razonables para creer que agentes de la Policía Nacional, del SPN y, en algunos casos, personas afines al gobierno, cometieron actos de violencia sexual en contra de personas opositoras o percibidas como tales. Esos hechos se realizaron en el marco de la privación de libertad de las víctimas. La similitud de los métodos empleados en diversos lugares de reclusión revela un patrón de comportamientos intencionales y organizados.

653. El GHREN recibió testimonios directos de víctimas de diferentes formas de violencia sexual y analizó declaraciones de otras personas sobrevivientes recabadas originalmente por

¹⁰⁹⁰ El GHREN recibió información sobre una flexibilización de la medida a partir de diciembre 2022, que el Gobierno presentó como una concesión humanitaria en el marco de las fiestas navideñas. Así se facilitaron las visitas el 7, 24, 25, 31 de diciembre de 2022 y el 1 de enero de 2023, entrevista del GHREN EEIV046.

¹⁰⁹¹ Entrevistas del GHREN AAIV008, AAIV010, AAIV047, AAIV048, AAIV050.

¹⁰⁹² Entrevistas del GHREN EEIV011, AAIV032, AAIV036, AAIV047. Véase también Corte IDH, Resolución de 4 de octubre de 2022, Medidas provisionales respecto de Nicaragua, Asunto 45 personas privadas de libertad en 8 centros de detención respecto de Nicaragua.

mecanismos internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.¹⁰⁹³ Esta información presenta una visión parcial de la situación debido, entre otras razones, a los obstáculos que existen para que las víctimas de violencia sexual denuncien esos hechos y los estigmas sociales asociados a esa dinámica de violencia, tanto para hombres, mujeres y personas de la diversidad sexual.

654. El uso de las diferentes formas de violencia sexual ha variado en función de las distintas fases de represión. La información recabada indica que el uso de la violación y de las torturas sexuales fue más frecuente durante las primeras etapas de la crisis – entre abril y agosto de 2018 – mientras que otras formas de violencia sexual como la desnudez forzada y los tocamientos sexuales siguen siendo prácticas comunes. El hecho de que ciertas formas de violencia sexual ya no sean reportadas con la misma frecuencia podría indicar un cambio en las prácticas de tratamiento de las personas detenidas y, por ende, reflejaría un control institucional sobre el comportamiento de las personas agresoras.

655. Agentes de la Policía Nacional, hombres y mujeres, fueron identificados como los perpetradores y perpetradoras o cómplices de estos hechos. Varios testimonios relatan la presencia de mujeres durante hechos de violaciones.¹⁰⁹⁴ Se reportó también la presencia de personas encapuchadas, escondiendo su identidad, algunas vestidas de civil.¹⁰⁹⁵ La información recabada por el GHREN indica que actos de violencia sexual tuvieron generalmente lugar en las instalaciones de la DAJ, en estaciones de policía en diferentes lugares del territorio nacional, o en lugares clandestinos de detención (en el 2018), lo que confirmaría la hipótesis de que esta práctica no responde a hechos aislados ni individuales.¹⁰⁹⁶

a. La violación

656. Tanto el GHREN como otros mecanismos de derechos humanos han recibido numerosos testimonios sobre el uso de violación en contra de mujeres y hombres y personas trans detenidas arbitrariamente.¹⁰⁹⁷ Se reportó el uso de la violación, particularmente durante el primer periodo de la represión, entre abril y agosto de 2018. Estos hechos ocurrieron en contexto de la privación de la libertad, generalmente en el marco de interrogatorios.

657. Conforme a la información recolectada por el GHREN, la violación de los hombres fue generalmente, pero no únicamente, llevada a cabo mediante la penetración por los órganos genitales masculinos del perpetrador o perpetradores,¹⁰⁹⁸ por objetos,¹⁰⁹⁹ o dedos.¹¹⁰⁰ En contra de hombres, la violación no sólo genera sufrimiento físico, sino que persigue el objetivo de “desmasculinizarlos” o “feminizarlos”, como forma de devastación psíquica y humillación.

658. Un testigo entrevistado por el GHREN relató que fue arrestado violentamente en 2018 por policías de la DOEP en Managua. Según su testimonio, durante un interrogatorio,

metieron a los hombres y me dijeron que me iban a dar una paliza y una cosa que nunca voy a olvidar. Fui a dar un golpe [a uno de los hombres], pero estaba tan sedado que no le di. Los hombres me golpearon, me agarraron a patadas. Me tiraron

¹⁰⁹³ Con la finalidad de evitar procesos de revictimización, el GHREN limitó la recepción de testimonios directos de víctimas de violencia sexual. La información del GHREN se basa en la recopilación de testimonios recibidos, así como sobre otros recolectados por entidades identificadas por la seriedad de sus métodos de recopilación de la información y la credibilidad de sus fuentes. Se realizaron también reuniones con personas que atendieron o analizaron casos de violencia sexual. Entrevistas del GHREN AAIV028, AAIV041, EEIV047.

¹⁰⁹⁴ Documentos confidenciales en el archivo del GHREN AADOC063, AADOC024.

¹⁰⁹⁵ Documento confidencial en el archivo del GHREN AADOC024.

¹⁰⁹⁶ Un documento recibido por el GHREN señala particularmente a las delegaciones de policía de Nindirí, Masaya y Granada. Documento confidencial en el archivo del GHREN, AADOC016.

¹⁰⁹⁷ Ver en particular CIDH, Personas privadas de libertad en Nicaragua, 5 de octubre de 2020, OEA/Ser.L/V/II.Doc 287/20; Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Tribunal de Conciencia, La violencia sexual como crimen de lesa humanidad bajo el régimen Ortega-Murillo, 2018.

¹⁰⁹⁸ Entrevistas del GHREN EEIV006, EEIV024. Véase también Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Tribunal de Conciencia, La violencia sexual como crimen de lesa humanidad bajo el régimen Ortega-Murillo, 2018, p. 80.

¹⁰⁹⁹ Entrevista del GHREN EEIV045.

¹¹⁰⁰ Entrevista del GHREN EEIV015.

*contra la pared. Tenía algo de metal y me lo pusieron en la parte de atrás, en el ano. Sangré. Ahí es donde yo sentí que todo el “hope” [esperanza, en inglés] que yo tenía estaba perdido. Me dije, cuando me violaban, que ya ahí, ya sí me quebraron.*¹¹⁰¹

659. Una víctima reportó haber sido golpeada y torturada reiteradamente durante interrogatorios, incluyendo mediante el arrancamiento de sus uñas. Durante uno de estos interrogatorios, la víctima relató que se puso a reír y lanzó un beso a los oficiales de policía presentes. “*Al ver esto, los oficiales me dijeron ‘ya te vamos a enseñar qué es el amor’. Al instante me agarraron entre dos y me bajaron el pantalón, me recostaron en un escritorio y entre los cinco me penetraron una y otra vez*”. Cuando regresó a su celda, la víctima se percató de que presentaba sangrado anal. Reportó que fue trasladado al IML para una evaluación, pero ni él ni su representante legal tuvieron nunca acceso al informe.¹¹⁰²

660. El GHREN documentó el uso de diversos métodos para violar a las mujeres, tales como la penetración vaginal por el órgano sexual de sus perpetradores;¹¹⁰³ la introducción de dedos en la vagina;¹¹⁰⁴ o la penetración con armas de fuego.¹¹⁰⁵ El GHREN también recibió información sobre una mujer que habría sido obligada a escoger entre seguir siendo golpeada o ser violada.¹¹⁰⁶ Se reportaron varios casos de violaciones por varios perpetradores, así como víctimas que fueron violadas durante varios días. Estos patrones de victimización afectaron especialmente a las mujeres.¹¹⁰⁷

661. En El Chipote Viejo, una detenida que se encontraba embarazada reportó que, durante un interrogatorio, “*entraron dos hombres que comenzaron a golpearme. Luego me ordenaron que hiciera 50 sentadillas, que tuviera los brazos levantados y las piernas abiertas. Mientras mis piernas temblaban como gelatina, ellos me tocaban y metían sus dedos, exigiéndome que les dijera antes quiénes eran los terroristas a los que yo apoyaba*”. Además, fue sometida a varias formas de tortura durante varios días: “[i]ntentaban humillarme, pero yo era tan superior a ellos, que la única salida que les quedaba era desaparecerme físicamente”.¹¹⁰⁸

662. Otra víctima relató que

*la oficial me bajó en ese momento ella misma el short y el calzón y me empezó a tocar y después se salió y después vino con un hombre que andaba con la cara tapada vestido de ropa de civil. La mujer me dijo “habla” y yo le dije que no me hicieran nada, que yo no sabía nada, por favor; en ese momento, me empujó y me caí al suelo [esposada con las manos hacia atrás], después ella me agarró de la boca y me la tapó con sus manos y el hombre comenzó a violarme. La mujer sólo se reía, el hombre nunca habló. Traté de moverme para que se quitara y ella me pegó en la cabeza y [me dijo] que me quedara quieta. Solo sentía mis lágrimas porque ella me tenía los ojos y la boca tapada con sus manos, el hombre vino, se levantó, y se fue.*¹¹⁰⁹

663. El GHREN recibió también el testimonio de un hombre homosexual que fue encerrado durante 15 días con reos comunes particularmente violentos, quienes lo violaron.¹¹¹⁰

¹¹⁰¹ Entrevista del GHREN BBIV003.

¹¹⁰² Entrevista del GHREN EEIV006.

¹¹⁰³ Documento confidencial en el archivo del GHREN AADOC063.

¹¹⁰⁴ Entrevista original obtenida por Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Tribunal de Conciencia, La violencia sexual como crimen de lesa humanidad bajo el régimen Ortega-Murillo. 2018, p. 32.

¹¹⁰⁵ Documento confidencial en el archivo del GHREN AADOC016.

¹¹⁰⁶ Documento confidencial en el archivo del GHREN AADOC070.

¹¹⁰⁷ Documento confidencial en el archivo del GHREN AADOC024.

¹¹⁰⁸ Entrevista original obtenida por Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Tribunal de Conciencia, La violencia sexual como crimen de lesa humanidad bajo el régimen Ortega-Murillo. 2018, p. 34.

¹¹⁰⁹ Documento confidencial en el archivo del GHREN AADOC083.

¹¹¹⁰ Entrevista del GHREN AAIV009.

b. La amenaza de violación

664. El GHREN recibió información sobre el uso de la amenaza de violación durante los arrestos y las detenciones.¹¹¹¹ Una testigo entrevistada describió la vulnerabilidad y el temor de las mujeres a ser violadas: “*Antes de una amenaza de arresto o asesinato, venía el temor del ataque en el cuerpo y las amenazas de violación. Es mucho más fuerte pensar que, si te agarran, te van a violar*”.¹¹¹²

665. La amenaza de violación se extendió también a los familiares de las personas detenidas. Particularmente, algunas de las mujeres detenidas fueron amenazadas con la violación de sus hijas:

*Me dijo [el oficial a cargo del interrogatorio] que ya que yo no quería cooperar iban a traer a mi hija a [ubicación omitida], porque mi hija era grande y querían abusar sexualmente de ella y comenzó a describirme todos los actos que iban a hacer con la niña ya que yo no estaba cooperando.*¹¹¹³

c. Torturas sexuales

666. El GHREN recibió testimonios e información sobre el uso de otras formas de torturas sexuales durante interrogatorios, dirigidas a lesionar o infligir daño en los órganos sexuales de las víctimas. Por ejemplo, un testigo entrevistado por el GHREN relató que fue arrestado violentamente en mayo de 2018 por agentes de la DOEP en Managua. El testigo refirió que hombres encapuchados le aplicaron choques eléctricos en los genitales repetidamente, mientras lo insultaban: “[m]e agarraron a patadas, a golpes en la cara, en el estómago, en los genitales. Me decía que era un cerdo, un [...] chancho”.¹¹¹⁴

667. Otros testigos refirieron haber recibido patadas o golpes en los genitales durante varios minutos y, en ciertos casos, hasta horas.¹¹¹⁵ Según uno de estos testigos:

*Me bajaron parcialmente el pantalón, me abrieron las piernas y me golpearon, patearon durante dos horas en los testículos, las piernas, los hombros y el estómago, eran cuatro o cinco “paramilitares” del mismo grupo que me había secuestrado. Se turnaban entre sí para patearme en los testículos, uno de ellos me apuntaba y gritaba que todavía no me iba a matar y que me iba a morir despellejado, y que antes me iban a vaciar los huevos a patadas.*¹¹¹⁶

668. Otra víctima relató lo que le sucedió en El Chipote Viejo en los siguientes términos:

Los parapoliciales [integrantes de grupos armados pro-gobierno] estaban adentro junto con los policías que entraron y empezaron a golpearlos uno por uno mientras decían “¿Qué hacemos con el desertor?” Dos paramilitares me agarraron y me llevaron a un pasillo horrible, húmedo, áspero, yo decía “¿dónde me llevan, ¿dónde me llevan?”. Al final de este pasillo había un lugar vacío, parecía destinado para lockers [casilleros], yo me resistí, pero me tiran en este espacio, intenté levantarme, pero me arrodillan y me estrellan contra la pared. “Te vamos a arrancar los huevos”. Les contesté: “[q]uitame las chachas [esposas] pues”. Entonces ellos empiezan a quitarme el pantalón. Los oficiales están viendo [...]. Intentan quitarme la camisa y les dije que “cómo me vas a quitar la camisa idiota si estoy enchachado”. Distinguía por lo menos cuatro voces y el jefe. Me patearon durante tres horas aproximadamente

¹¹¹¹ Entrevista del GHREN AAIV010. La testigo relató también el acoso sexual al cual fueron sometidas un grupo de mujeres que protestaban, especialmente por integrantes de grupos armados pro-gobierno que se tocaban los genitales mientras las mujeres pasaban marchando. Véase también CIDH, Personas privadas de libertad en Nicaragua, 5 de octubre de 2020, OEA/Ser.L/V/II.Doc 287/20, párr. 185.

¹¹¹² Entrevista del GHREN AAIV010.

¹¹¹³ Véase también UPPN, RIDH y RIDHE, Detenidos, torturados y desplazados, Informe acerca de la tortura y el trato inhumano, cruel y degradante de personas privadas de libertad en condición de detención política en Nicaragua y la permanencia de la violencia de Estado en sus vidas post-carcelarias, informe dirigido para el CAT (en adelante “Informe UPPN, RIDH y RIDHE”), p. 5.

¹¹¹⁴ Entrevista del GHREN BBIV003.

¹¹¹⁵ Informe UPPN, RIDH y RIDHE, p. 7.

¹¹¹⁶ Ibid, p. 8.

*a los testículos. Me desmayé muchas veces, me defecué y me oriné. Me ofrecieron un cigarro, para descansar un ratito.*¹¹¹⁷

d. Desnudez forzada y otras formas de violencias sexuales

669. El desnudamiento forzado fue utilizado contra las personas detenidas en muchos lugares de detención,¹¹¹⁸ como una práctica generalizada al momento de la aprehensión y/o durante el transcurso de la detención (incluyendo en las celdas, durante interrogatorios, o durante requisas). Las prácticas de desnudez forzada aplicadas no respondieron a los procedimientos de registro o inspección corporal establecidos en las normas vigentes que regulan el SPN.¹¹¹⁹ Se trata de una práctica orientada a afirmar el poder de la persona agresora sobre la víctima, humillar, y generar sentimientos de vulnerabilidad e indefensión en la víctima.¹¹²⁰

670. Un testigo relató que al llegar a las instalaciones de El Chipote Viejo le hicieron desnudarse dentro de la celda frente a varios oficiales, hombres y mujeres. Lo revisaron y le quitaron todas sus pertenencias. Durante el interrogatorio que siguió le obligaron a desnudarse de nuevo y tuvo que permanecer desnudo durante 30 minutos. Refirió también que, durante las requisas diarias que se realizaban en las instalaciones de El Chipote, los custodios obligaban a las personas detenidas a desnudarse.¹¹²¹ Este relato coincide con otros testimonios recibidos por el GHREN.¹¹²²

671. El GHREN recibió información sobre casos de personas que fueron forzadas a permanecer desnudas durante varios días durante su detención.

672. Una persona que estuvo presa relató cómo, al llegar a El Chipote:

*me desnudaron y me metieron en una celda preventiva que tal vez es un metro cuadrado. [Uno] nunca se puede sentar, uno siempre está de pie, completamente desnudo. Ahí estuve veinticuatro horas. Me llegaron a echar agua fría y así pasaba entonces, hasta que me pasaron a una celda”.*¹¹²³

673. La desnudez forzada se acompañó, por lo general, de la exigencia de hacer numerosas sentadillas frente a personal de la Policía Nacional y del SPN. El GHREN también recibió información de personas a quienes se les tomaron fotos desnudas.¹¹²⁴ Personas detenidas reportaron haber sido interrogadas desnudas y mantenidas en detención sin ropa durante varios días sin que les sean brindadas mudas.¹¹²⁵ Por ejemplo, una mujer detenida en una delegación de policía fuera de Managua relató:

Allí ingrese el [fecha omitida]. Ya casi era de noche y me dijeron te van a entrevistar [...]. Entonces entran dos hombres encapuchados y también entra una mujer y me dice: “Antes de la entrevista te vamos a revisar” y me dice “quítate la ropa”. Vuelvo a ver a los hombres y les digo: “Cómo me voy a quitar la ropa si hay dos hombres aquí”. Me dice: “Dale. ¡Quítatela o te la quito yo!”. La testigo dijo: “Que se salgan ellos, porque se supone que voy a dar una entrevista y no tengo porque estar desnuda y no tiene por qué haber varones, la misma ley de la policía dice que no puede haber varones donde están requisando una mujer y un varón no puede requisar a una mujer”. Entonces la mujer les dijo que se salieran. Me quito la ropa y quedo en ropa

¹¹¹⁷ Entrevista del GHREN EEIV004.

¹¹¹⁸ Por ejemplo, entrevistas del GHREN EEIV004, EEIV009, AAIV041, AAIV010, AAIV046.

¹¹¹⁹ Véase Ley del Régimen Penitenciario, art. 41.

¹¹²⁰ Como lo subraya el Protocolo de Estambul: “La tortura sexual empieza por la desnudez forzada, que en muchos países es un factor constante en las situaciones de tortura. La persona nunca es tan vulnerable como cuando se encuentra desnuda y desvalida. La desnudez aumenta el terror psicológico de todos los aspectos de la tortura pues abre siempre la posibilidad de malos tratos, violación o sodomía”. ONU, Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, apartado 2215, disponible en: <https://www.ohchr.org/documents/publications/training8rev1sp.pdf>.

¹¹²¹ Entrevista del GHREN EEIV006.

¹¹²² Entrevistas del GHREN EEIV004, AAIV041, AAIV010, AAIV046.

¹¹²³ Documento confidencial en el archivo del GHREN AADOC016.

¹¹²⁴ Entrevista del GHREN, AAIV050.

¹¹²⁵ Entrevistas del GHREN EEIV009, EEIV035.

interior. Me dijo: “¡Quítate todo!”. “Pero es que ando con la regla”, le respondo, y me dijo que no importaba, que me quitara todo. Una vez que estoy completamente desnuda, me arrebató la ropa y entraron los hombres. Me dicen: “Ahora sí, vamos a hablar”. Me pongo las manos adelante porque me quiero tapar, me pusieron las chachas.¹¹²⁶

674. Esta práctica también ha sido utilizada en contra de las personas opositoras, reales o percibidas como tales, detenidas, antes y después de las visitas de sus familiares, o cuando eran trasladadas a los juzgados.¹¹²⁷

675. Del mismo modo, familiares de las personas detenidas denunciaron haber sido obligados a quitarse toda la ropa, sujetos a procedimientos de registro corporal invasivos, y haber sido obligadas y obligados a hacer sentadillas antes de realizar las visitas, en condiciones descritas como “humillantes” y degradantes.¹¹²⁸ Se reportó también una práctica de acercar detectores de metales a las partes íntimas de las y los familiares. Estas acciones afectaron particularmente a las mujeres.

676. Estas prácticas habían sido denunciadas previamente en las instituciones penitenciarias nicaragüenses.¹¹²⁹ Sin embargo, desde el 2018, se han utilizado particularmente para castigar a las y los familiares y a las personas opositoras o percibidas como tales detenidas. Por ejemplo, entre otros casos, la CIDH refirió a la Corte IDH el caso de la madre de una persona detenida a quien se le pedían que se desnudara en presencia de otros oficiales, “incluso habrían intentado penetrar sus partes genitales”.¹¹³⁰ Testimonios recogidos por el GHREN confirman el uso reciente de estas prácticas.¹¹³¹

Como familiares, pasamos por humillaciones. Nos obligaron a quitar la ropa para revisarnos. La última visita fue para mí, como mujer, muy denigrante. La policía me pidió que me desnudara completamente, y me obligó a hacer tres sentadillas. Sentí que eso fue muy humillante, no entiendo por qué se tiene que pasar por eso. [...] No sólo me pasa a mí, les pasa a los demás familiares.¹¹³²

677. El Subcomité para la Prevención de la Tortura subrayó que “las personas sometidas a registro deben poder brindar su consentimiento y no deben ser expuestas a la desnudez total. Los registros intrusivos de partes íntimas están legalmente prohibidos”.¹¹³³ La Corte IDH sostiene que tales requisas no son necesarias para mantener la seguridad penitenciaria o prevenir el desorden.¹¹³⁴

678. Finalmente, el GHREN recibió información sobre mujeres que sufrieron de abortos durante o como consecuencia de su encarcelación,¹¹³⁵ así como sobre varios casos de familiares de personas presas en el marco de la crisis de derechos humanos en Nicaragua que, al visitar los centros de privación de libertad, fueron objeto de registros exhaustivos, que incluyeron tocamientos indebidos debajo de la ropa en zonas íntimas o en los genitales. Niñas menores de edad fueron también sometidas a tocamientos sexuales.¹¹³⁶

¹¹²⁶ Documento confidencial en el archivo del GHREN AADOC169.

¹¹²⁷ Entrevistas del GHREN, AAIV002, AAIV019.

¹¹²⁸ Entrevistas del GHREN AAIV002, EEIV042, AAIV032, AAIV034, AAIV047.

¹¹²⁹ SPCT, CAT/OP/NIC/ROSP/1, 28 de noviembre de 2022, Visita a Nicaragua: recomendaciones y observaciones dirigidas al Estado Parte.

¹¹³⁰ Corte IDH, Resolución de 4 de octubre de 2022, Medidas provisionales respecto de Nicaragua, Asunto 45 personas privadas de libertad en 8 centros de detención respecto de Nicaragua.

¹¹³¹ Entrevistas del GHREN AAIV032, AAIV034, EEIV047.

¹¹³² Entrevista del GHREN EEIV047.

¹¹³³ SPCT, CAT/OP/NIC/ROSP/1, 28 de noviembre 2022, Visita a Nicaragua: recomendaciones y observaciones dirigidas al Estado Parte, párr. 65.

¹¹³⁴ Corte IDH, Resolución de 4 de octubre de 2022, Medidas provisionales respecto de Nicaragua, Asunto 45 personas privadas de libertad en 8 centros de detención respecto de Nicaragua, párr. 161.

¹¹³⁵ Entrevista del GHREN, EEIV035. Véase también CIDH, Personas privadas de libertad en Nicaragua, 5 de octubre de 2020, OEA/Ser.L/V/II.Doc 287/20, párr. 185.

¹¹³⁶ Entrevista del GHREN AAIV032, AAIV034, EEIV042, AAIV047. Véase también Corte IDH, Resolución de 4 de octubre de 2022, Medidas provisionales respecto de Nicaragua, Asunto 45 personas privadas de libertad en 8 centros de detención respecto de Nicaragua.

vii) Graves impactos sobre la salud física y mental

679. Las afectaciones sufridas por las personas detenidas fueron diversas, tanto físicas como psicológicas. El GHREN recibió información sobre secuelas de las torturas, incluyendo padecimientos crónicos, como pérdida de movilidad, dolores de cuerpo, cansancio crónico y dificultad para concentrarse. La privación sensorial durante largos períodos de tiempo causó pérdidas auditivas y visuales. El Grupo también recabó información sobre las lesiones y traumatismos sufridos en el marco de la detención, interrogatorios y castigos, que incluyeron marcas en el cuerpo debido a quemaduras, cortes, y pérdidas de piezas dentales. Se mencionaron también problemas gastrointestinales y dermatológicos debido a la alimentación inadecuada y la falta de salubridad en las instalaciones policiales y penitenciarias, presión alta debido a la falta de medicación y el estrés sufrido por la arbitrariedad de la detención, la incertidumbre jurídica y los malos tratos¹¹³⁷ así como infecciones de transmisión sexual asociadas a agresiones sexuales sufridas bajo custodia policial.¹¹³⁸

680. Según el testimonio de una víctima,

*Tengo secuelas de la tortura en las costillas y los ojos. Mis manos tiemblan, tengo recaídas, momentos que no puedo levantarme, tengo problemas de insomnio, delirio de persecución, siento que me están siguiendo, que me están buscando, pienso que me anda buscando la policía. Cuando me alzan la voz me bloqueo [...] Estoy tomando medicamentos para el estrés, la ansiedad, hay momentos que me siento frágil, que no quiero que me hablen o tengo momentos de rabia. El doctor dijo que tengo un trastorno por todo lo sucedido. Tengo miedo para expresarme y estar con mi esposa.*¹¹³⁹

681. A nivel psicológico, tanto las víctimas como especialistas describieron síntomas de estrés postraumático agudo, insomnio, recuerdos angustiosos recurrentes, ataques de pánico, ansiedad, tendencias a la auto laceración y al suicidio, pesadillas, estrés, y depresión. Las víctimas identificaron problemas adicionales como dificultades para relacionarse con otras personas y para crear relaciones de confianza, ataques de ira y de tristeza, y aislamiento.¹¹⁴⁰ Según otra víctima,

*He tenido problemas de ansiedad, no puedo dormir, cuando ladran los perros pienso que me están persiguiendo. Me separé de mi pareja, me siento agresivo y no quiero hacer daño a nadie. Me siento con mucho enojo, me siento mal cuando veo funcionarios públicos, pienso que en parte todo eso ha sido culpa de ellos.*¹¹⁴¹

682. La mayoría de las personas excarceladas han necesitado acompañamiento psicológico para lograr lidiar con las secuelas emocionales de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sufridos durante su detención. Algunas de ellas han necesitado o continúan necesitando utilizar medicación para tratar una variedad de patologías, como la ansiedad, el insomnio, o la depresión. A menudo el apoyo psicológico fue brindado por organizaciones de la sociedad civil presentes en los países de exilio, sin embargo no todas las personas han tenido la oportunidad de ser asistidas por especialistas. Varias de las personas entrevistadas refirieron que siguen tratando de sobrellevar las secuelas psicológicas de todo lo vivido en las celdas de El Chipote, estaciones de policía y centros penitenciarios del país.¹¹⁴²

¹¹³⁷ Entrevistas del GHREN EEIV004, EEIV005, EEIV006, EEIV007, EEIV009, EEIV012, EEIV015, EEIV016, EEIV024, EEIV045. Véase también Informe UPPN, RIDH y RIDHE.

¹¹³⁸ Peritajes médicos forenses en el archivo del GHREN EEDOC230, EEDOC232, EEDOC235.

¹¹³⁹ Entrevista del GHREN EEIV024.

¹¹⁴⁰ Entrevistas del GHREN EEIV004, EEIV005, EEIV006, EEIV007, EEIV009, EEIV012, EEIV015, EEIV016, EEIV024, EEIV045.

¹¹⁴¹ Entrevista del GHREN EEIV045.

¹¹⁴² Entrevistas del GHREN EEIV004, EEIV005, EEIV006, EEIV007, EEIV009, EEIV015, EEIV016, EEIV024, EEIV045.

683. Por lo que respecta a las 222 personas detenidas arbitrariamente que fueron expulsadas del país en febrero de 2023, al momento de redacción de este informe, no es posible establecer la magnitud de las secuelas de las violaciones y abusos sufridos.

viii) Impunidad

684. El GHREN constató que los autores de actos de tortura y tratos inhumanos, crueles o degradantes gozaron de impunidad general. De acuerdo con la información recibida a la fecha de redacción de este informe, estos actos no han sido objeto de investigaciones o sanciones.¹¹⁴³

685. Es importante destacar la obstrucción deliberada y sistemática de los procesos de rendición de cuentas por parte de las autoridades, y la omisión por parte de las autoridades judiciales de su deber de proteger a las personas detenidas contra la tortura y los tratos o penas crueles. En su mayoría, las víctimas fueron presentadas por primera vez ante una autoridad competente varios días, incluso semanas, después de su detención, con la finalidad de ocultar las marcas físicas de tortura.¹¹⁴⁴ Adicionalmente, se impidió que las víctimas informasen a su defensa técnica al respecto, dado que nunca fueron brindados espacios de reunión confidenciales. Aun así, en algunos casos en que las personas presentaron evidentes signos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes durante las audiencias, los y las abogadas presentaron quejas que fueron ignoradas por los juzgados y suprimidas de las actas de audiencia.¹¹⁴⁵ De igual forma, las víctimas fueron amenazadas con represalias en caso de revelar información sobre las torturas y tratos inhumanos y degradantes durante las visitas a los centros de detención de sus familiares. Dichas conversaciones fueron monitoreadas.

686. La Ley de Amnistía dejó sin efecto los cargos contra “todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la [...] Ley”.¹¹⁴⁶ Como se analizó anteriormente, el contenido ambiguo de dicha Ley fue ampliamente criticado ya que podría dejar en la impunidad violaciones a los derechos humanos, incluidos los casos de tortura y uso excesivo y letal de la fuerza ocurridos en el contexto de las protestas iniciadas en abril 2018.

687. El Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes subrayó que para contrarrestar el riesgo de tortura y otros malos tratos, los Estados deberían establecer garantías procesales mínimas, entre las cuales figura el registro inmediato y adecuado de todo arresto y detención, la prohibición de mantener a cualquier persona en lugares de detención no oficiales, el derecho de los detenidos a tener rápidamente acceso letrado independiente y a la asistencia médica, así como a notificar su detención a sus familiares, impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal independiente.¹¹⁴⁷ El Estado de Nicaragua no ha adoptado dichas medidas para prevenir la ocurrencia de violaciones al derecho a la integridad de las personas. La falta de acceso a mecanismos eficaces de acceso a la justicia tampoco aseguró que esos casos puedan ser investigados, sancionados y reparados con la debida diligencia.

688. Además, Nicaragua ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en 2009, por lo que se comprometió a establecer un mecanismo nacional de prevención independiente y permitir las visitas de supervisión a centros de detención por parte del Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, Nicaragua no ha cooperado con la ONU en el contexto del examen de sus informes periódicos, y se ha negado, hasta el cierre de este informe, a cooperar

¹¹⁴³ El GHREN recabó los testimonios de personas excarceladas, testigos, y familiares. El Grupo también analizó los informes de organismos internacionales y mecanismos de protección de los derechos humanos, incluyendo la CIDH, ACNUDH y el CAT, así como documentación puesta a disposición del Grupo por organizaciones de la sociedad civil, incluyendo informes, peritajes, dictámenes médicos y psicológicos; así como material fotográfico que corrobora dichos testimonios.

¹¹⁴⁴ Entrevistas del GHREN EEIV004, EEIV006, EEIV014, EEIV018, EEIV024.

¹¹⁴⁵ Entrevistas del GHREN EEIV014, EEIV025, EEIV029, EEIV032, EEIV039.

¹¹⁴⁶ Ley de Amnistía, art.1.

¹¹⁴⁷ Informe Relator Especial, A/HRC/34/54 (14 de febrero de 2017), p. 6 disponible en <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/032/28/PDF/G1703228.pdf?OpenElement>.

con la visita prevista al país en 2023 del Subcomité.¹¹⁴⁸ A nivel regional, la CIDH ha señalado que Nicaragua se encuentra obligado por todos los instrumentos internacionales de los cuales es parte y por lo tanto, debe permitir los mandatos de monitoreo del MESENI, que incluye el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en sus diversos mecanismos, el análisis y trámite de los casos y peticiones, la supervisión de sus recomendaciones emitidas en los informes de fondo y el análisis y supervisión activa del cumplimiento de las medidas cautelares vigentes.¹¹⁴⁹

h. Cancelaciones de partidos, organizaciones, y cierres de medios de comunicación

689. Como parte de la estrategia de supresión de la disidencia, el Gobierno también canceló organizaciones y partidos políticos y cerró medios de comunicación de manera arbitraria, provocando el colapso del espacio asociativo y político, y afectando gravemente el derecho de la población a obtener información veraz.

i) Desarrollo normativo para restringir el espacio cívico y democrático

690. La Asamblea Nacional adoptó una serie de normas violatorias del derecho internacional de los derechos humanos. La Ley Contra el Lavado de Activos, la Ley de Agentes Extranjeros, y la Ley de Organizaciones Sin Fines de Impulso impusieron requisitos excesivamente onerosos a las organizaciones de la sociedad civil, restringiendo desproporcionadamente el derecho a la libertad de asociación.¹¹⁵⁰ Dichas leyes se utilizaron para justificar las cancelaciones arbitrarias de la personalidad jurídica de organismos sin fines de lucro, sobre la base del supuesto incumplimiento de estas. Del mismo modo, la Ley No. 1070 de Reforma Electoral aprobada en mayo de 2021 se utilizó para restringir el ejercicio del derecho a la participación política, incluyendo para cancelar tres partidos políticos de oposición durante los meses previos a las elecciones presidenciales de 2021.¹¹⁵¹ Estas leyes también fueron violatorias de los derechos a la libertad de expresión y opinión.

a. Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

691. La Ley contra el Lavado de Activos impone una serie de obligaciones a las Organizaciones Sin Fines de Lucro con el fin de evitar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.¹¹⁵² Sin embargo, la amplitud de los requisitos impuestos a las organizaciones sin fines de lucro, y la discrecionalidad dada a las autoridades al respecto, afecta a la libertad de asociación de las organizaciones sin fines de lucro y desalentar a los ciudadanos y las ciudadanas a integrarlas.

b. La Ley No. 1040: Ley de Regulación de Agentes Extranjeros¹¹⁵³

692. La Ley de Agentes Extranjeros define como “agentes extranjeros”, a quienes considera sujetos obligados conforme a la misma, a toda “*persona natural o jurídica, nicaragüense o de otra nacionalidad, que dentro de Nicaragua percibe fondos, bienes o cualquier objeto de valor provenientes directa o indirectamente de personas naturales, Gobiernos, Agencias, Fundaciones, Sociedades o Asociaciones extranjeras del tipo o naturaleza que sea, que trabaje, reciba fondos o responda a organismos que pertenecen o*

¹¹⁴⁸ Véase Declaración del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del 15 de diciembre de 2022 sobre la Situación de los derechos humanos en Nicaragua, 15 de diciembre de 2022, disponible en: <https://www.ACNUDH.org/situacion-de-los-derechos-humanos-en-nicaragua-declaracion-del-alto-comisionado/>.

¹¹⁴⁹ Véase CIDH, Informe Anual 2021, 8 de noviembre de 2022, Capítulo IV.b, Nicaragua, párrs. 22 y 23.

¹¹⁵⁰ Ley contra el Lavado de Activos; Ley No. 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada el 15 de octubre de 2020, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 192 del 19 de octubre de 2020 (en adelante “Ley de Agentes Extranjeros”).

¹¹⁵¹ Ley No. 1070, Ley de reforma y adición a la Ley Electoral No. 331, aprobada el 4 de mayo de 2021, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 81 del 5 de mayo de 2021 (en adelante “Ley No. 1070”).

¹¹⁵² Ley contra el Lavado de Activos, arts. 37–39.

¹¹⁵³ Ley de Agentes Extranjeros.

son controlados directa o indirectamente, por personas naturales, Gobiernos o entidades extranjeras; salvo las excepciones previstas en la presente Ley".¹¹⁵⁴

693. La designación como "agentes extranjeros" de toda persona u organización que reciba fondos de Gobiernos, Asociaciones o Fundaciones extranjeras es estigmatizante, especialmente considerando que el objeto declarado de la Ley es "*establecer el marco jurídico aplicable a las personas naturales o jurídicas, nacionales o de otra nacionalidad, que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento extranjero utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua, atentando contra la independencia, la autodeterminación y la soberanía nacional, así como la estabilidad económica y política del país*".¹¹⁵⁵ Al respecto, el GHREN recuerda que el Consejo de Derechos Humanos, en su resolución 22/6, exhortó a los Estados a velar por que ninguna ley tipifique como delito o deslegitime las actividades de defensa de los derechos humanos a causa de la procedencia geográfica de su financiación.¹¹⁵⁶

694. La Ley de Agentes Extranjeros obliga a los "agentes extranjeros" a registrar sus organizaciones en el Registro de Agentes Extranjeros a cargo del Ministerio de Gobernación.¹¹⁵⁷ El incumplimiento de esta obligación puede ser sancionado con la intervención de fondos y bienes, la imposición de multas, la cancelación de personalidad jurídica, la prohibición de actividades y el enjuiciamiento por la vía penal.¹¹⁵⁸ Además, las personas naturales o jurídicas registradas como agentes extranjeros deberán informar sobre cualquier transferencia de fondos que reciban de manera directa o indirecta de personas naturales, Gobiernos, organizaciones y otras sociedades extranjeras, así como presentar mensualmente informes detallados y verificables de los gastos, pagos, desembolsos, contrataciones y demás actividades financiadas con dichos fondos.¹¹⁵⁹ Los fondos y donaciones recibidos por "agentes extranjeros" no podrán ser utilizados para financiar actividades que no hayan sido declaradas previamente ante la autoridad competente.¹¹⁶⁰

695. El establecimiento de un sistema de registro obligatorio para las organizaciones y asociaciones que reciban fondos del extranjero, a fin de obtener y/o mantener la personalidad jurídica, y poder operar en el país, constituye una restricción del derecho a la libertad de asociación. Al respecto, el ICCPR establece que el ejercicio del derecho a asociarse libremente "solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás".¹¹⁶¹

696. La protección de la soberanía del Estado no figura entre los intereses enunciados en el Pacto y, por ende, no puede ser invocada como justificación para la restricción del derecho a la libertad de asociación.¹¹⁶² Tampoco es admisible el argumento de que dichas restricciones sean necesarias para proteger la seguridad nacional, ya que significaría considerar que una persona u organización constituye una amenaza para la seguridad del Estado por el mero hecho de recibir financiación de agentes privados, Gobiernos o agencias extranjeras. Dicho postulado no sólo no tiene ningún asidero en el derecho internacional, sino que estigmatiza

¹¹⁵⁴ Ley de Agentes Extranjeros, art. 3.2.

¹¹⁵⁵ Ley de Agentes Extranjeros, art. 1.

¹¹⁵⁶ Consejo de Derechos Humanos, Protección de los defensores de los derechos humanos, A/HRC/RES/22/6 (12 de abril de 2013), párr. 9.

¹¹⁵⁷ Ley de Agentes Extranjeros, art. 6.

¹¹⁵⁸ *Ibid.*, art. 15.

¹¹⁵⁹ *Ibid.*, arts. 9–10.

¹¹⁶⁰ *Ibid.*, art. 11.

¹¹⁶¹ ICCPR, art. 22.2. Véase A/HRC/20/27, pp. 14–15.

¹¹⁶² En opinión del Relator Especial Maina Kiai, "no puede pretenderse que dichas restricciones son necesarias "en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública" ni tampoco "del orden público". La afirmación de que la seguridad nacional se ve amenazada cuando una asociación recibe fondos de fuentes extranjeras no solo es una tergiversación y un argumento espurio, sino que también es contraria al derecho internacional de los derechos humanos". Véase Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, A/HRC/23/39 (24 de abril de 2013), pp. 10–12.

y criminaliza la financiación extranjera de organizaciones sin fines de lucro, asociaciones, y agrupaciones de personas defensoras de derechos humanos, la cual constituye una práctica común en la cooperación internacional orientada al desarrollo y la promoción de los derechos humanos.¹¹⁶³

697. La Ley de Agentes Extranjeros también dispone que los agentes extranjeros deberán abstenerse, so pena de sanciones legales, de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna y externa, y que no podrán financiar movimientos, partidos políticos, coaliciones o alianzas políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas en Nicaragua. Además, las personas naturales que actúen como agentes extranjeros no podrán ser funcionarias o funcionarios, empleadas o empleados públicos ni candidatas o candidatos a cargos públicos de cualquier naturaleza. Este impedimento cesa un año después de que se acredite que se ha dejado de ser agente extranjero.¹¹⁶⁴

698. La Ley no proporciona criterios que permitan definir qué constituye una intervención en las “cuestiones, actividades o temas de política interna y externa” del Estado, generando inseguridad jurídica y dejando un amplio margen de discrecionalidad a la interpretación de los y las funcionarias del Estado, que podría resultar en la prohibición de dedicarse a cualquier tema de interés social o general en el país, y restringir de manera desproporcionada las libertades de expresión, reunión pacífica, y participación política de las personas y asociaciones.

699. La Ley de Agentes Extranjeros restringe las libertades de ONGs, asociaciones y otras agrupaciones de personas defensoras de derechos humanos, y genera onerosas cargas administrativas, incluyendo la obligación de emitir informes detallados mensuales. En la práctica, las organizaciones de la sociedad civil enfrentaron dificultades para cumplir con los requisitos de la Ley, y reportaron numerosas trabas por parte del Ministerio de Gobernación para la recepción de informes, actualizar información legal e incorporar documentación oficial.

700. El nivel de información requerida también generó preocupaciones sobre el derecho a la privacidad y la protección de las personas beneficiarias y socias. Por ejemplo, fuentes entrevistadas por el GHREN ligadas a organizaciones, reportaron que se les solicitó entregar listas de personas que acudieron a actividades realizadas, recibieron asistencia, o participaron en programas de formación. Esto generó preocupación entre organizaciones que trabajan bajo el principio de confidencialidad para proveer, entre otros, asistencia en salud, o servicios a víctimas de violencia de género y violencia sexual. Por otro lado, las organizaciones refirieron al GHREN sentir temor porque la información compartida pueda revertir en la criminalización de socios de trabajo y participantes en sus actividades.¹¹⁶⁵

701. De acuerdo con personas entrevistadas por el GHREN, la entrada en vigor de la Ley ocasionó que el Gobierno comenzara a presionar a los bancos, congelando las cuentas de las organizaciones que no cumplieran con los requisitos impuestos por la ley.¹¹⁶⁶ En su conjunto, la legislación y su aplicación práctica condujeron a una situación que dificultó, y en algunos casos, imposibilitó a las organizaciones que reciben fondos del extranjero operar en el país. Esto redujo el acceso de asociaciones y organizaciones a fuentes externas de financiación,

¹¹⁶³ En virtud del art. 2 del ICCPR, los Estados Parte se comprometen “a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales [...], hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente [...] la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. El art. 11 del Pacto dispone que los Estados Parte “tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”. Véase A/HRC/23/39, párrs. 20 y 31–33.

¹¹⁶⁴ Ley de Agentes Extranjeros, art. 14.

¹¹⁶⁵ Entrevistas del GHREN BBIV009, BBIV010.

¹¹⁶⁶ Entrevistas del GHREN CCIV030, BBIV007, BBIV009, BBIV010; documento en el archivo del GHREN BBD0C137.

restringiendo su capacidad de buscar, obtener y utilizar recursos, que forma parte integral del derecho a la libertad de asociación y del derecho a defender los derechos humanos.¹¹⁶⁷

702. Las dificultades para cumplir los requisitos exigidos por la Ley de Agentes Extranjeros también provocaron que varias organizaciones sin fines de lucro internacionales desistieran en el registro y salieran de Nicaragua.¹¹⁶⁸ Otras, como PEN Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, suspendieron su funcionamiento en rechazo a la Ley antes del plazo otorgado por la misma para registrar a las organizaciones existentes.¹¹⁶⁹

c. Ley No. 1115 y Ley No.1127: Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro y su reforma

703. Previo a la entrada en vigor de la Ley No. 1115 en mayo de 2022, el régimen regulador de las organizaciones sin fines de lucro estaba previsto en la Ley No. 147.¹¹⁷⁰ Dicha Ley establecía que las personalidades jurídicas de las organizaciones sin fines de lucro solo podían ser canceladas por la Asamblea Nacional, previa consulta al Ministerio de Gobernación. Con carácter previo a la cancelación, el Departamento de Registro y Control de Asociaciones podía imponer sanciones administrativas como la multa y/o la intervención por el plazo estrictamente necesario para subsanar irregularidades.¹¹⁷¹

704. La posibilidad de subsanar errores no fue incluida en la Ley No. 1115, que derogó la Ley No. 147 en mayo de 2022.¹¹⁷² Por otro lado, la Ley No.147 permitía que, cancelada la personalidad jurídica de una organización, a sus bienes y acciones se les diera el destino previsto en el acto constitutivo o en sus estatutos, siendo la transferencia de la titularidad el Estado la solución cuando nada se hubiera previsto.¹¹⁷³

705. La versión original de la Ley No. 1115 establecía igualmente que tanto el otorgamiento como la cancelación de la personalidad jurídica de las organizaciones sin fines de lucro competía a la Asamblea Nacional.¹¹⁷⁴ En virtud de dicha normativa, la cancelación de la personalidad jurídica de las organizaciones sin fines de lucro nacionales se iniciaba bien voluntariamente a través de solicitud de la misma organización, o bien a solicitud del Ministerio de Gobernación, a través de un dictamen legal de la Dirección General de Registro y Control de Organizaciones sin Fines de Lucro (DGRC) solicitando la cancelación.

¹¹⁶⁷ Véase A/HRC/23/39, párrs. 15–18 y 20; Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, A/HRC/22/6 (13 de diciembre de 2012), párr. 9; Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, A/RES/53/144 (8 de marzo de 1999), art. 13.

¹¹⁶⁸ El País, “Organizaciones sociales de Nicaragua suspenden sus operaciones por la Ley de Agentes Extranjeros de Ortega”, 5 de febrero de 2021; PEN, “Nicaragua cierra por polémica ley promovida por Ortega”, 5 de febrero de 2021; DW, “We Effect se retira de Nicaragua por “ley de agentes extranjeros””.

¹¹⁶⁹ <https://twitter.com/FundVioleta/status/1357730434201886722>; <https://twitter.com/chamorrocris/status/1357734693731467265>.

¹¹⁷⁰ Ley No. 147, Ley General Sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, aprobada el 19 de marzo de 1992, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 102 del 29 de mayo de 1992 (en adelante “Ley No. 147”), art. 24.

¹¹⁷¹ Ley No. 147, art. 22.

¹¹⁷² Ley No. 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, aprobada el 31 de marzo de 2022, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 66 del 6 de abril de 2022 (en adelante “Ley No. 1115”), art. 21. Para un análisis detallado de la Ley No. 1115, véase la Carta OL NIC1/22 de la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, al Gobierno de Nicaragua (5 de mayo de 2022).

¹¹⁷³ Ley No. 147, art. 25.

¹¹⁷⁴ Ley No. 1115, arts. 20 y 47; Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, aprobada el 8 de octubre 2021, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 58 del 25 de marzo de 2022 (en adelante “Ley No. 606”), art. 92.

706. El 16 de agosto de 2022 entró en vigor la Ley No. 1127 que reformó algunos artículos de la Ley No. 1115.¹¹⁷⁵ Con la nueva reforma, la facultad de cancelar la personalidad jurídica de los organismos sin fines de lucro nacionales pasó al Ministerio de Gobernación, previa solicitud del propio organismo o de la DGRC del propio Ministerio. La cancelación es aprobada mediante Acuerdo Ministerial.¹¹⁷⁶

707. La Ley No. 1115, por un lado, amplió las causales de cancelación de la personalidad jurídica de los organismos sin fines de lucro y, por otro, limitó el destino del patrimonio del organismo cancelado, que pasará a ser propiedad del Estado salvo en los casos de liquidación y disolución voluntarias.¹¹⁷⁷ Es decir, instauró una sanción, aunque no esté articulada como tal en la ley, que resulta desproporcionada al ser aplicable a todas las causales de cancelación del organismo sin fines de lucro. De esta manera se ha institucionalizado la confiscación de facto de los bienes de los organismos sin fines de lucro, lo cual constituye una violación del derecho de la propiedad consagrado en el art. 44 de la Constitución Política de Nicaragua.

708. Esta Ley amplía también el listado de requisitos para la obtención de la personalidad jurídica incluyendo, entre otros, la presentación de una constancia de no objeción por parte del Ministerio de Gobernación y el récord de policía de los miembros que constituyen el organismo sin fines de lucro.¹¹⁷⁸

709. La Ley No. 1115 estableció también una larga lista de obligaciones, excesivamente onerosas y desproporcionadas, y susceptibles de agotar los recursos limitados de las organizaciones sin fines de lucro y afectar su capacidad para llevar a cabo sus actividades. Entre éstas, destaca la obligación abierta de “proporcionar la información que sea requerida por las autoridades competentes sobre sus objetivos y fines, estatutos, actividades, beneficiarios, fuente de financiamiento nacionales o extranjeros, donantes, donaciones, patrimonio, operaciones administrativas, financieras y uso de fondos públicos que reciban, entre otros”.¹¹⁷⁹

710. La Ley también establece que las organizaciones deberán reportar y obtener autorización de la DGRC previamente a la ejecución de proyectos. Dicho requisito vulnera las libertades de asociación y expresión, al someter a la aprobación del Ministerio de Gobernación la realización de sus actividades legítimas, y otorgando a la DGRC una autoridad ilimitada en este sentido.¹¹⁸⁰

711. La Ley No. 1115 prohíbe una serie de acciones, sin precisión en aspectos clave, abriendo por tanto dicha normativa a un uso indebido o arbitrario por los funcionarios y las funcionarias públicas. Entre otros, prohíbe sin definirlo, “realizar actividades directas o

¹¹⁷⁵ Ley No. 1127, Ley de reformas y adiciones a la Ley No. 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro y de Reformas a la Ley No. 522, Ley General del Deporte, Educación Física y Recreación Física, aprobada el 11 de agosto de 2022, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 152 el 16 de agosto de 2022 (en adelante “Ley No. 1127”).

¹¹⁷⁶ Esta reforma entra en directa contravención con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, una norma de jerarquía superior, que otorga a la Asamblea Nacional la potestad de otorgar y cancelar personalidades jurídicas de las organizaciones de fines de lucro.

¹¹⁷⁷ En virtud del art. 47 de la Ley No. 1115 y su reforma, son causales de cancelación: “1) Disolución y liquidación; 2) Cuando fuera utilizada para la comisión de actos ilícitos; 3) Cuando fuera utilizada para violentar el orden público; 4) Por obstaculizar el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control del OSFL; 5) Cuando desnaturalicen los objetivos y fines para el que fue creado, conforme Acta Constitutiva y sus Estatutos; 6) Cuando tengan al menos 1 (un) año de incumplimiento ante la autoridad de aplicación, al no reportar estados financieros y cambios en la Junta Directiva; 7) Cuando sus actividades sean contrarias a la naturaleza de la personalidad jurídica, incluyendo el ánimo de lucro; 8) Por utilizar el esquema organizacional para promover campañas de desestabilización en el país, apoyando, facilitando e incitando a la afectación de la seguridad ciudadana y el ejercicio legítimo de los derechos humanos de las familias nicaragüenses; 9) Por sanción administrativa derivada del incumplimiento a las obligaciones o realización de acciones prohibidas de conformidad a lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y Normativa”.

¹¹⁷⁸ Ley No. 1115, art. 21.

¹¹⁷⁹ Ley No. 1115, art. 34.13. La obligación de verificar la identidad de todos sus beneficiarios y/o destino final de sus donaciones, puede ser demasiado gravosa para las pequeñas organizaciones que pueden carecer de los recursos administrativos y humanos para identificar a cada persona beneficiaria.

¹¹⁸⁰ *Ibid.*, art. 34.25.

indirectas que impliquen proselitismo político”; “intervenir en asuntos de políticas partidarias” o “violentar el orden público, promover campañas de desestabilización en el país”.¹¹⁸¹ La vaguedad de dichos preceptos permite la discreción de la DGRC en la interpretación y aplicación de los mismos, y ha dado lugar al hostigamiento discriminatorio y desproporcionado de las organizaciones sin fines de lucro que trabajan temas políticamente sensibles, o que son críticas del Gobierno o percibidas como tales.

712. Según el tenor de la Ley No. 1115, una vez que la DGRC, en el ejercicio de sus funciones de supervisión y control, estima que el organismo sin fines de lucro ha incumplido con las obligaciones establecidas en la propia ley o su reglamento, ha realizado acciones prohibidas de acuerdo con la ley o su reglamento, o ha obstaculizado las funciones de control de la autoridad,¹¹⁸² no se otorga a los representantes de las organizaciones acceso a un procedimiento que les permita subsanar errores, conduciendo irremediamente a la suspensión o la cancelación de la organización.¹¹⁸³

713. En comparación con años anteriores, en 2022 y tras la entrada en vigor de la Ley No. 1115, se observa un llamativo y desproporcionado número de cancelaciones adoptadas tanto por la Asamblea Nacional, a través de decretos Legislativos, como por el Ministerio de Gobernación, vía acuerdos ministeriales. Entre 2010 y 2017, se registraron un total de 16 iniciativas de cancelaciones, todas a solicitud de la propia organización.¹¹⁸⁴ Entre 2018 y 2021 se dieron 69 cancelaciones. Desde principios de 2022 hasta la fecha de redacción de este informe, más de 3144 organizaciones nacionales e internacionales han sido canceladas.¹¹⁸⁵

714. Varios expertos y expertas de la ONU dirigieron un comunicado conjunto al Presidente Daniel Ortega exponiendo sus inquietudes relativas a posibles violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales garantizados por el derecho internacional, a raíz de la adopción y entrada en vigor de la Ley No. 1115.¹¹⁸⁶

d. Ley No. 1070: Ley de reforma y adición a la Ley Electoral No. 331

715. La Constitución Política de Nicaragua estipula, en su art. 51, que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a elegir y ser elegidos en elecciones periódicas y a optar a cargos públicos. En Nicaragua, el derecho a la participación política también está regulado por la Ley Electoral, la Ley de Municipios y la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades.¹¹⁸⁷ Sin embargo, como se planteó en el capítulo 2 del presente informe, la legislación electoral nicaragüense restringe desproporcionadamente el derecho a la participación política.

716. En mayo de 2021, la Asamblea Nacional aprobó la Ley No. 1070, que no sólo no respondió a las solicitudes de la sociedad civil y de la comunidad internacional de adoptar un

¹¹⁸¹ *Ibid.*, art. 35.

¹¹⁸² Ley No. 1115, art. 37.

¹¹⁸³ Los arts. 38 y 40 de la Ley No. 1115 disponen que las sanciones serán multa, intervención y suspensión y que la intervención podrá conducir a la suspensión o al dictamen legal para la cancelación de la personalidad jurídica.

¹¹⁸⁴ Véanse iniciativas de Decreto Legislativo Nos. 0179923, 20179089, 20168843, 20158604, 20158617, 20158595, 20158594, 20158463, 20148294, 20148147, 20136128, 20137819, 20127624, 20116788, 20106416 y 2016282.

¹¹⁸⁵ ACNUDH, “Crisis en Nicaragua: 2022 en hechos y cifras”, enero 2023, disponible en: <https://www.ACNUDH.org/wp-content/uploads/2023/01/Nicaragua-2022-en-hechos-y-cifras.pdf>

¹¹⁸⁶ Carta de los Mandatos de la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; de la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; del Relator Especial sobre los derechos de los migrantes; del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos al Gobierno de la República de Nicaragua, OL NIC 1/2022 (5 de mayo de 2022).

¹¹⁸⁷ Ley No. 40, Ley de Municipios, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 6 del 14 de enero de 2013; Ley No. 648, Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, aprobada el 14 de febrero de 2008, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 51 del 12 de marzo de 2008.

marco legal que garantizara unos comicios libres, justos, transparentes y observados,¹¹⁸⁸ sino que restringió aún más la competencia electoral y el ejercicio de los derechos políticos.¹¹⁸⁹

717. La reforma electoral expandió las causas de inhabilitación para la inscripción de candidaturas, incorporando lo contemplado en la Ley de Agentes Extranjeros y en la Ley de Soberanía.¹¹⁹⁰ La Ley No. 1070 también prohibió a los partidos políticos “*incurrir en actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, demanden la aplicación de sanciones económicas en perjuicio del Estado y pidan intervenciones militares*” o “*recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público o impedir el funcionamiento regular de los órganos de administración pública*”, bajo pena de pérdida de la personalidad jurídica.¹¹⁹¹

718. Dichos criterios de cancelación reproducen la narrativa oficial que ha sido utilizada por las autoridades desde abril de 2018 para estigmatizar y criminalizar a personas opositoras o percibidas como tales. En su conjunto, estos preceptos impedirían o dificultarían gravemente la inscripción de candidaturas de personas consideradas opositoras al Gobierno, ya sea porque participaron en las manifestaciones de 2018, que el Gobierno catalogó como un Golpe de Estado, o porque han expresado puntos de vista favorables a la imposición de sanciones a instituciones e individuos nicaragüenses, u opiniones que pudieran ser interpretadas como un llamado a la injerencia extranjera.

719. La Ley No. 1070 también estableció que los partidos políticos deben solicitar autorización previa a la Policía Nacional para realizar manifestaciones o concentraciones durante la campaña electoral, otorgando a la Policía la facultad de autorizar o no autorizar dichas reuniones en un plazo de 48 horas.¹¹⁹² Esta exigencia es incompatible con el art. 21 del ICCPR.¹¹⁹³ Del mismo modo, la prohibición general de las manifestaciones de grupos que no participan en las elecciones, contenida en el art. 95 de la Ley No. 1070, contraviene el derecho a la libertad de reunión protegido por el derecho internacional de los derechos humanos.

j) *Cancelación de organizaciones de la sociedad civil*

720. Desde noviembre de 2018 hasta el 15 de febrero de 2023, las autoridades nicaragüenses disolvieron casi la mitad de todas las organizaciones registradas ante el Ministerio de Gobernación en Nicaragua. En efecto, al menos 3.144 organizaciones sin fines de lucro, de las 7.227 registradas en 2017, fueron canceladas durante el periodo que abarca el mandato del GHREN.¹¹⁹⁴

¹¹⁸⁸ Consejo de Derechos Humanos, Situación de los derechos humanos en Nicaragua – Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, A/HRC/42/18 (17 de septiembre de 2019), párr. 65.h; Consejo de Derechos Humanos, Situación de los derechos humanos en Nicaragua – Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, A/HRC/46/21 (11 de febrero de 2021), párr. 71.b. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal – Nicaragua, A/HRC/42/16 (5 de julio de 2019), párrs. 125.93 y 125.114; véase también la resolución de la Asamblea General de la OEA, Restablecimiento de las Instituciones Democráticas y el Respeto de los Derechos Humanos en Nicaragua Mediante Elecciones Libres y Justas, AG/Res. 2962 (L-O/20), en Asamblea General, Quincuagésimo Período Ordinario de Sesiones, Declaración y Resoluciones Aprobadas por la Asamblea General, OEA/Ser.P AG/doc.5717/20 rev. 1, p. 191.

¹¹⁸⁹ Esta reforma fue calificada por la Secretaría General de la OEA como un claro retroceso para el ejercicio de los derechos políticos de los nicaragüenses. OEA, “Informe Nicaragua”, p. 9, disponible en: <https://www.oas.org/fpdb/press/Informe-Nicaragua-Elecciones-2021.pdf>.

¹¹⁹⁰ Ley No. 1070, art. 81.

¹¹⁹¹ Ley No. 1070, arts. 63.13, 63.14 y 74.6.

¹¹⁹² Ley No. 1070, arts. 89.1 y 81.2. Antes de la reforma, la Ley Electoral asignaba la potestad de autorizar las manifestaciones o concentraciones al CSE (Ley Electoral, art. 89).

¹¹⁹³ El Comité de Derechos Humanos afirmó que el hecho de tener que solicitar permiso a las autoridades socava la idea de que la reunión pacífica es un derecho fundamental. Sin embargo, ese no es el caso cuando el régimen de notificación equivalga en la práctica a un sistema de notificación previa y autorización implícita o automática. Véase CCPR/C/GC/37, párrs. 70–73.

¹¹⁹⁴ Boletín ACNUDH enero 2023, “Crisis en Nicaragua: 2022 en hechos y cifras”, disponible en <https://www.ACNUDH.org/wp-content/uploads/2023/01/Nicaragua-2022-en-hechos-y-cifras.pdf>

721. El análisis realizado por el GHREN indica que las autoridades habrían cancelado cientos de asociaciones de manera selectiva. Según un estudio del instituto El Diálogo publicado en octubre de 2022, a pesar de que aproximadamente el 50 por ciento de las 2.000 organizaciones cuyas personalidades jurídicas fueron canceladas hasta octubre del 2022 estaban inactivas, entre las organizaciones activas, las cancelaciones se concentraron en aquéllas con mayor dinamismo y reputación, e implicaron el cierre de prácticamente la totalidad de organizaciones que realizaban labores de defensa de los derechos humanos en Nicaragua.¹¹⁹⁵ Conforme al monitoreo de la organización Iniciativa Nicaragüense de Defensoras, se registraron un total 212 organizaciones canceladas con perfil de feministas o con trabajo en derechos humanos de mujeres entre noviembre 2018 y el 31 de diciembre 2022.¹¹⁹⁶ La mayoría de ellas (202) fueron objeto de esa sanción en 2022.

722. El GHREN se reunió con representantes e integrantes de siete organizaciones de la sociedad civil nicaragüense que fueron canceladas. Todos sus representantes refirieron que no recibieron un preaviso de la cancelación ni tuvieron la oportunidad impugnar o presentar recurso alguno. El Estado intervino los bienes, documentos y equipos de algunas de estas organizaciones.¹¹⁹⁷

i). Primeros cierres tras el estallido de protestas en 2018

723. Antes de la crisis del 2018, la Asamblea Nacional aprobaba de manera muy puntual cancelaciones de organismos sin fines de lucro, en prácticamente en la totalidad de los casos las cancelaciones se realizaron a solicitud de la organización concernida.¹¹⁹⁸ Sin embargo, a finales de 2018, por la vía de la tramitación de urgencia, la Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica de nueve organizaciones que habían sido particularmente críticas del Gobierno: el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), Hagamos Democracia, el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), Popol Na, el Instituto de Liderazgos de la Segovia, y la Fundación del Río.¹¹⁹⁹ De esas organizaciones, cinco eran dirigidas por mujeres.¹²⁰⁰ Es notable que la primera organización cancelada por el Gobierno de Daniel Ortega el 29 de noviembre de 2018 fue CISAS, dedicada a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y dirigida por la feminista Ana Quirós.

724. El director de una de estas organizaciones relató al GHREN que, el 13 de diciembre de 2018, un diputado del FSLN afirmó en televisión que *“era una organización golpista, que financiaba los tranques y que sus integrantes eran responsables de [una] masacre [de*

¹¹⁹⁵ El Diálogo, “La radicalización dictatorial en Nicaragua”, octubre de 2022, p.3. disponible en <https://thediologue.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2022/11/nicaragua-radicalization-SP-draft11.pdf>.

¹¹⁹⁶ Documento en el archivo de GHREN AADOC158. De estas, catorce fueron expropiadas, despojadas o confiscadas de sus bienes (inmuebles, equipos y mobiliario). Entre ellas, CISAS, Popol Na, CINCO, el Instituto de Liderazgo de las Segovias, la Corriente Feminista, el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, la Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka, la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra (MEC), la Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua (FADCANIC), el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua. (CEJUDHCAN) o el Fundación Puntos de Encuentro para la transformación de la vida cotidiana.

¹¹⁹⁷ Entrevistas del GHREN CCIV030; BBIV007; CCIV044; BBIV010; AAIV012; AAIV027; AAIV045.

¹¹⁹⁸ Entre 2010 y 2017 la Asamblea Nacional aprobó un total de 14 cancelaciones de organismos sin fines de lucro. Véase Asamblea Nacional, Repertorio de iniciativas legislativas, disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/SILEG/Iniciativas.nsf/NewBuscarIniciativas.xsp>.

¹¹⁹⁹ Documentos en el archivo del GHREN CCDOC134; CCDOC135; CCDOC136. Ver también La Prensa, “Ministerio de Gobernación confisca bienes de ONG que han sido despojadas de su personería jurídica”, 15 de diciembre de 2018, disponible en: <https://www.laprensani.com/2018/12/15/nacionales/2506013-ministerio-de-gobernacion-confisca-bienes-de-ong-que-fueron-despojadas-de-su-personeria-juridica>.

¹²⁰⁰ CISAS, CENIDH, ILLS, CINCO y Popol Na. Algunas de ellas estuvieron involucradas en la denuncia en contra de Daniel Ortega realizada por su hijastra, Zoliamérica Narváez Murillo, por abuso sexual, violación y acoso sexual. Entrevista del GHREN CCIV044, 19 de enero de 2022.

policías]".¹²⁰¹ Según el director, a las 12 de la noche, la policía allanó las instalaciones de la organización, y confiscó sus bienes, incluyendo toda su documentación. Las cuentas bancarias de la organización fueron congeladas. Las instalaciones y las propiedades fueron confiscadas, incluyendo una propiedad privada del director.¹²⁰²

725. El 14 de diciembre de 2018, el Ministerio de Gobernación publicó una nota de prensa que ahondó en la estigmatización de estas organizaciones, señalando que su cancelación obedeció a que *"incumplieron los requerimientos legales para su funcionamiento, y que violentaron la naturaleza de sus funciones al haber participado activamente durante el fallido Golpe de Estado, promoviendo el Terrorismo, crímenes de odio, y alentando y celebrando la destrucción de Propiedades Públicas y Privadas, de Viviendas, Negocios, y de asalto a la Dignidad Humana de Miles de Personas y Familias, a quienes les fue infringido un trato denigrante, humillante con secuestros, torturas, todo tipo de amenazas a su Vida, en absoluto irrespeto a su Dignidad y a los Derechos Humanos de tod@s l@s nicaragüenses"*. El comunicado añadió que las organizaciones disponían de recursos para cometer dichas violaciones y que, por ello, resolvió cancelar su personalidad jurídica y transferir sus bienes muebles e inmuebles y cualquier otro activo a la administración de Estado para la creación de un "Fondo de atención y reparación Integral para las víctimas del terrorismo".¹²⁰³ Según los medios y personas entrevistadas, la policía tomó los edificios sede de las organizaciones.¹²⁰⁴

ii). Cierres en el marco de la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros

726. Una de las primeras consecuencias de la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros a finales de 2020 fue el cese de funciones de dos de las principales organizaciones defensoras de la libertad de expresión en el país: la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y el Centro PEN nicaragüense.¹²⁰⁵ Ambas organizaciones decidieron cerrar sus puertas. Un extrabajador de la Fundación Barrios de Chamorro relató al GHREN que *"[los trabajadores] entendimos [la decisión], la aceptamos y la apoyamos porque yo como ciudadano nicaragüense no podía aceptar de declararme como agente extranjero sólo por recibir dinero desde el extranjero. Hubo consenso de cerrar antes de someternos a esta ley"*.¹²⁰⁶

727. A lo largo de 2019, se iniciaron seis proyectos de Decretos Legislativos para la cancelación de personalidades jurídicas: uno por insolvencia y cinco por contravenir la Ley General de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y la Ley contra el Lavado de Activos al no presentar sus estados financieros, así como por obstaculizar el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones.¹²⁰⁷ La primera fue la única iniciativa

¹²⁰¹ Morrito es un municipio de Río San Juan donde murieron cuatro policías y un profesor en un tiroteo.

¹²⁰² Entrevista del GHREN CCIV030; documentos en el archivo del GHREN CCDOC134; CCDOC135. El 14 de diciembre de 2018, el Ministerio de Gobernación publicó una nota de prensa donde afirmaba que "los bienes muebles e inmuebles y cualquier otro activo de las organizaciones antes referidas, pasan bajo la administración del Estado de Nicaragua, para la creación del Fondo de Atención y Reparación Integral para las víctimas del Terrorismo". Nota de prensa del Ministerio de Gobernación en el archivo del GHREN CCDOC136.

¹²⁰³ Nota de Prensa de 14 de diciembre de 2018 del Ministerio de Gobernación, en el archivo del GHREN CCDOC134, CCDOC135; CCDOC136. Véase El 19 digital, "Crearán Fondo de Atención y Reparación Integral para las Víctimas de terrorismo", 14 de diciembre de 2018, disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:85243-crearan-fondo-de-atencion-y-reparacion-integral-para-las-victimas-de-terrorismo>. <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:85243-crearan-fondo-de-atencion-y-reparacion-integral-para-las-victimas-de-terrorismo>.

¹²⁰⁴ Entrevistas GHREN BBIV007, 12 de enero de 2023; BBIV008, 13 de enero 2023; BBIV009, 15 de enero de 2023; CCIV030, 16 de noviembre de 2022. Cuatro de las organizaciones canceladas agotaron las vías de recursos internos en Nicaragua y presentaron peticiones ante la CIDH: CENIDH, Fundación del Río, Popol Na y el Instituto de Liderazgo de las Segovia.

¹²⁰⁵ Entrevista del GHREN CCIV025; La Mesa Redonda, PEN Nicaragua suspende operaciones en el país por "Ley de Agentes Extranjeros", 4 de febrero de 2021, disponible en: <https://www.jamesaredonda.net/pen-nicaragua-suspende-operaciones-en-el-pais-por-ley-de-agentes-extranjeros/>.

¹²⁰⁶ Entrevista del GHREN CCIV029.

¹²⁰⁷ Ley No. 147, art. 13, literal f) y art. 24 e); Ley contra el Lavado de Activos, art. 38.

de cancelación adoptada en el año y las cinco restantes fueron descartadas y archivadas.¹²⁰⁸ En 2020, se presentaron un total de cuatro iniciativas de Decretos Legislativos para la cancelación de OSFL. Tres de ellas se impulsaron a instancia de parte interesada y una por la causal relativa a la transgresión del art. 24 e) de la Ley No. 147 y de los arts. 37 y 38 de la Ley contra el Lavado de Activos.¹²⁰⁹

iii). Cierres masivos de organismos sin fines de lucro

728. A partir de 2021, comenzó una dinámica en la que cada iniciativa de cancelación de personalidad jurídica puede contener referencias a varios organismos sin fines de lucro. Durante 2021, se cancelaron un total de 51 organizaciones en virtud de cinco Decretos Legislativos.

729. En agosto de 2021, el Gobierno comenzó a utilizar las leyes restrictivas en contra de ONGs internacionales con presencia en Nicaragua. Solo en el transcurso de ese mes, el Ministerio de Gobernación revocó la inscripción de seis de ellas en el registro de OSFL.¹²¹⁰ El Ministerio de Gobernación invocó como base jurídica la Ley contra el Lavado de Activos y la Ley No. 147, y adoptó la cancelación por la vía de lo que parece ser una resolución administrativa.¹²¹¹ En el caso de las organizaciones internacionales, aunque a menudo se habla de cancelación de personalidad jurídica, en realidad lo que se cancelaron fueron los registros y los números perpetuos en Nicaragua de las organizaciones, puesto que la personalidad jurídica de dichos organismos está constituida en otros países.

730. En 2022, con la entrada en vigor de la Ley No. 1115, inició una ola masiva de cancelaciones de la personalidad jurídica de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil. La Asamblea Nacional adoptó un total de 25 iniciativas de Decreto Legislativo para la cancelación de organismos sin fines de lucro. Este periodo legislativo se destaca no solo por el incremento del número de iniciativas, sino porque la mayoría de ellas hacen referencia a un número importante de asociaciones, oscilando entre 25 y 101 organizaciones en la mayoría de los Decretos Legislativos, sumando al menos 1450 organizaciones canceladas hasta la entrada en vigor de las reformas contenidas en la Ley No. 1127. Tras esta reforma, las cancelaciones pasaron a efectuarse por la vía de Acuerdo Ministerial del Ministerio de Gobernación, que canceló organizaciones en bloques de hasta 100 entidades.

731. Los decretos de cancelación emitidos por la Asamblea Nacional invocaron el supuesto incumplimiento de disposiciones administrativas y financieras por parte de las asociaciones, de conformidad con la Ley contra el Lavado de Activos, la Ley de Agentes Extranjeros; la Ley No. 1115, y la Ley No. 1127.¹²¹² En particular, las autoridades alegaron el incumplimiento por las organizaciones de trámites administrativos relacionados con el registro de las organizaciones y la recepción de fondos provenientes del extranjero, entre otros elementos.

732. De acuerdo con múltiples y creíbles testimonios recibidos por el GHREN, las cancelaciones de organizaciones no gubernamentales estuvieron precedidas por procedimientos arbitrarios por parte de las instituciones del Estado, que obstaculizaron o

¹²⁰⁸ Véanse iniciativas de Decreto Legislativo de 2019 Nos. 20199510, 20199513, 20199514, 20199515 y 20199516.

¹²⁰⁹ Véanse iniciativas de Decreto Legislativo de 2018 Nos. 20180921 y 20181114; de 2019: 20199550; de 2020: 20209631, 20209637, 20209643 y 20209668.

¹²¹⁰ Fundación Oxfam Intermon, Fundación Oxfam Ibis, Diakonia Suecia, National Democratic Institute for International Affairs, International Republican Institute y Helping Hands The Warren William Pagel M.D. Foundation.

¹²¹¹ Ministerio de Gobernación, Reg. 2021-02790, <https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2021/09/NIC-La-Gaceta-1608.pdf>.

¹²¹² Ley No. 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 66 del 06/04/2022, arts. 34, numerales 3), 7), 9), 24), 26), 26.1), 26.3), 27) y 28); 47, numerales 4) y 6); y su Reglamento; Ley contra el Lavado de Activos, art. 38, numeral 4; y Decreto Ejecutivo No. 15-2018, Reglamento de la Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, art. 14, numeral 1, literal a) y b); Ley No. 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.

impidieron la presentación de la documentación administrativa requerida por ley,¹²¹³ pese a los esfuerzos de las organizaciones por presentarla en tiempo y forma. Las personas relataron que el Ministerio de Gobernación se negaba a recibir documentos, o no entregaba acuse de recibo, no aceptaba a trámite los recursos o no los resolvía, o rechazaba la documentación introducida por defectos de forma o incluso faltas ortográficas.¹²¹⁴ En muchos casos, la cancelación de las organizaciones estuvo acompañada del desmantelamiento de sus oficinas, la ocupación de sus bienes, y en ocasiones la criminalización de sus integrantes, quienes también fueron víctimas de intimidación y otros tipos de agresiones.¹²¹⁵

733. Varias personas integrantes de organizaciones canceladas reportaron al GHREN haber tenido también dificultades para presentar los documentos necesarios para llevar a cabo el cierre oficial de las organizaciones ante las autoridades competentes. Según los y las testigos, la documentación no es admitida ni tampoco rechazada, y las autoridades no dejan ninguna constancia del intento de tramitación.¹²¹⁶ Una persona entrevistada lo describió como “*un proceso que nunca termina*”.¹²¹⁷ Esta situación podría exponer a las personas defensoras de derechos humanos a riesgos adicionales, ya que podrían ser sujetas a un proceso penal y/o administrativo en su contra por incumplir con la normativa relevante.

734. Las organizaciones canceladas no pueden recibir fondos para funcionar y, por ende, su capacidad de acción se tornó limitada. Ante la imposibilidad de continuar trabajando en Nicaragua, cientos de organizaciones canceladas se vieron obligadas a cerrar sus puertas o a trasladarse al exterior. Dicha situación generó un nuevo desplazamiento de cientos de integrantes de la sociedad civil quienes se vieron forzados a abandonar el país durante 2022.

k) *Cierre de medios de comunicación*

735. Tan sólo durante el 2018, las autoridades cerraron los siguientes medios: Radio Darío, Radio Amerisque, NotiDalia, NotiWiwilí, NotiPantasma, Radio Stereo Apante, Radio Jerusalén, Radio Humedales, Radio Voz Juvenil, El Confidencial y 100% Noticias. De acuerdo con la información recibida por el GHREN, la policía no habría presentado órdenes de allanamiento ni entregados recibos referentes a la confiscación de bienes a los medios de comunicación afectados.

736. De acuerdo con información recibida por el GHREN, entre septiembre de 2018 y febrero de 2020, el Gobierno impidió a la prensa privada abastecerse de los materiales necesarios para la impresión de periódicos. Durante 18 meses, la Dirección General de Servicios Aduaneros retuvo de manera arbitraria la tinta y el papel prensa que debían recibir *El Nuevo Diario* y *La Prensa*, los dos últimos diarios independientes del país.¹²¹⁸ En septiembre de 2019, *El Nuevo Diario* anunció la suspensión de sus operaciones después de 40 años de actividad, citando “dificultades económicas, técnicas y logísticas que hacen insostenible su funcionamiento”.¹²¹⁹ En los primeros días de junio de 2021, el Gobierno volvió a embargar la importación de papel y de tinta con lo que, el 12 de agosto de 2021, La

¹²¹³ Primero por la Ley No. 147, y más adelante con los crecientes requisitos establecidos por la Ley de Agentes Extranjeros, Ley de Lavado de Activos y Ley de Regulación de los Organismos sin Fines de Lucro.

¹²¹⁴ Entrevistas del GHREN BBIV007; BBIV008; AAIV027; AAIV012; AAIV045.

¹²¹⁵ Entrevistas del GHREN BBIV007; BBIV008.

¹²¹⁶ Entrevistas del GHREN AAIV012; AAIV014; AAIV027; AAIV035; AAIV045.

¹²¹⁷ Entrevistas del GHREN AAIV014.

¹²¹⁸ Entrevistas del GHREN CCIV020; CCIV009; CCIV027; Reporteros sin Fronteras (RSF), “Los diarios independientes de Nicaragua, de nuevo abastecidos de papel. Un respiro momentáneo, denuncia RSF”, disponible en: <https://rsf.org/es/los-diarios-independientes-de-nicaragua-de-nuevo-abastecidos-de-papel-un-respiro-moment%C3%A1neo>.

¹²¹⁹ <https://twitter.com/elnuevodiario/status/1177465402693046277?s=201>; véase también France 24, “Cierra periódico de Nicaragua golpeado por embargo de papel y tinta del gobierno,” 27 de septiembre de 2019, disponible en: <https://www.france24.com/es/20190927-cierra-peri%C3%B3dico-de-nicaragua-golpeado-por-embargo-de-papel-y-tinta-del-gobierno>.

Prensa anunció que dejaría de circular por falta de papel y pasaría a informar exclusivamente en formato digital.¹²²⁰

737. El GHREN recibió información referente a la cancelación de cuatro medios – dos nacionales y dos locales – en 2019. En 2021, se produjo el allanamiento de las instalaciones y la confiscación de los bienes de Confidencial, que tuvo como resultado la salida del país del medio de comunicación.

738. En 2022 se produjo un repunte en los cierres de medios de comunicación. Según ACNUDH, durante 2022, el Gobierno clausuró 26 medios nacionales y tres medios internacionales.¹²²¹

739. Tan solo en agosto de 2022, como parte de los patrones de represión contra la Iglesia Católica, TELCOR ordenó el cierre de varios canales locales pertenecientes a las diócesis de Matagalpa y Estelí: TV Merced, Canal San José, Radio Hermanos, Radio Nuestra Señora de Lourdes, Radio Nuestra Señora de Fátima, Radio Alliens, Radio Monte Carmelo, Radio San José, Radio Católica de Sébaco, Radio Santa Lucía, Radio Esquipulas y Radio Católica de Waslala.¹²²² TELCOR argumentó que las emisoras de la diócesis de Matagalpa no contaban con los permisos requeridos para operar. Sin embargo, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, y actualmente detenido, expresó públicamente que él mismo había presentado toda la documentación requerida desde 2016, pero nunca recibió confirmación o respuesta alguna de las autoridades.¹²²³

740. También en agosto del mismo año, fueron cancelados la Radio Vos y RB3 “El Canal de la Zona Láctea”, en el departamento de Matagalpa; el Canal NGTV3, en Nueva Guinea; Radio Darío y Radio Sky, en León; Radio La Guarachera, en Chinandega; Radio San Carlos, en Río San Juan; y Radio Stereo Fe, en Nueva Segovia.¹²²⁴

741. Las restricciones impuestas por el Gobierno afectaron también a medios de comunicación internacionales. En septiembre de 2022, el Gobierno de Nicaragua sacó del aire la señal de CNN en Español. Al respecto, TELCOR emitió un comunicado en el que indicó que el contenido transmitido por el canal “CNN en Español” contravenía la Constitución Política de Nicaragua, la Ley de Seguridad Soberana, y ordenaba a los cableoperadores autorizados en el país que cesaran la transmisión del canal.¹²²⁵

¹²²⁰ Entrevista del GHREN CCIV020. Véase La Prensa Gráfica, “Nicaragua: La Prensa suspende edición impresa por bloqueo a papel”, 12 de agosto de 2021, disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/internacional/Nicaragua-La-Prensa-suspende-edicion-impresa-por-bloqueo-a-papel-20210812-0012.html>; 100% Noticias, “Diario LA PRENSA y HOY dejan de circular, dictadura en Nicaragua secuestra papel”, 12 de agosto de 2021, disponible en: <https://100noticias.com.ni/nacionales/109384-diario-laprensa-hoy-secuestro-papel/>

¹²²¹ Actualización Oral ACNUDH 15 de diciembre de 2022, disponible en: <https://www.ACNUDH.org/situacion-de-los-derechos-humanos-en-nicaragua-declaracion-del-alto-comisionado/>.

¹²²² Entrevista del GHREN CCIV003; Boletín Ecológico, “Monseñor Rolando Alvarez se refiere al cierre de emisoras de la Diócesis de Matagalpa”, 1 de agosto de 2022, ver <https://www.youtube.com/watch?v=yOZL9Vizbd4&t=2s>; véase también Vatican News, “Nicaragua: Cierran emisoras de la diócesis de Matagalpa” <https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2022-08/nicaragua-el-gobierno-cierra-emisoras-de-la-diocesis-de-matagalp.html>; véase también Confidencial, “La guerra de Daniel Ortega contra el periodismo: 54 medios cerrados, 8 de septiembre de 2022, disponible en: <https://www.confidencial.digital/politica/54-medios-cerrados-guerra-daniel-ortega-periodistas-en-nicaragua/>.

¹²²³ *Ibid.*

¹²²⁴ Confidencial, “La guerra de Daniel Ortega contra el periodismo: 54 medios cerrados, 8 de septiembre de 2022, disponible en: <https://www.confidencial.digital/politica/54-medios-cerrados-guerra-daniel-ortega-periodistas-en-nicaragua/>.

¹²²⁵ Ver el comunicado de TELCOR, disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:132577-comunicado-de-telcor-ordenando-retirar-a-cnn-en-espanol-de-las-grillas-de-television;asi-como-comunicado-de-cnn-al-respecto,disponible-en:https://cnnespanol.cnn.com/2022/09/22/gobierno-nicaragua-saca-del-aire-senal-cnn-espanol-orix/>.

l) *Cancelación de partidos políticos*

742. El GHREN concluyó que durante el periodo bajo examen, el CSE canceló la personalidad jurídica de tres partidos de la oposición política de manera arbitraria.

743. Pocos días después de la aprobación de la Ley No. 1070, el CSE canceló la personalidad jurídica del Partido de Restauración Democrática (PRD) y del Partido Conservador. El 6 de agosto de 2021, el CSE canceló el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL)¹²²⁶ que, según varias fuentes, iba a ser el vehículo de la oposición para presentarse a las elecciones de forma unitaria.¹²²⁷ La cancelación se produjo cuatro días después de la inscripción de la candidatura presentada por CxL.¹²²⁸ Según la resolución del CSE, este partido fue cancelado porque su presidenta supuestamente habría realizado su trámite de solicitud de cédula de ciudadanía de forma irregular. Sin embargo, en la notificación del CSE se acusó al partido de menoscabo a la soberanía nacional, aduciendo que con sus actos había infringido la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Seguridad Soberana y la Ley de Soberanía.¹²²⁹

744. El GHREN analizó las resoluciones de cancelación emitidas por el CSE y concluyó que las mismas presentaron errores de fondo y/o forma (Véase Tabla 6).

Tabla 6

Cancelaciones de partidos políticos durante el periodo de mandato del GHREN¹²³⁰

<i>Partido político y fecha de cancelación</i>	<i>Recurrente</i>	<i>Causal invocada</i>	<i>Análisis jurídico</i>
Partido Restauración Democrática (PRD) 18 de mayo de 2021	Un grupo de pastores y pastoras evangélicos	El presidente del partido actuó contra los principios cristianos y los estatutos del PRD al aliarse con varias organizaciones que integran a la opositora Coalición Nacional, ya que, según los recurrentes, estos partidos promueven “antivalores” que no se corresponden con los principios evangélicos. El CSE justifica su decisión sobre la base de que “se ha podido constatar como hechos notorios y públicos, que efectivamente el [PRD] se ha aliado políticamente con asociaciones y personas en	De acuerdo con el presidente del partido, los recurrentes no eran miembros de su partido sino integrantes de las Comisiones de Paz del Frente Sandinista, por tanto no eran agraviados y no contaban con legitimación para impugnar. ¹²³² El CSE afirmó que el representante legal del partido violó los estatutos de éste, al haberse “divorciado de los postulados que sirvieron de simiente para la constitución del partido”. Sin embargo, los “principios bíblicos” a los que hacen referencia los estatutos del PRD pueden ser interpretados de

¹²²⁶ Notificación de la resolución del CSE en el archivo del GHREN, CCDOC113.

¹²²⁷ Entrevistas del GHREN CCIV026; CCIV029; CCIV004; CCIV016; CCIV033; AAIV048; AAIV050. Véase también Periodismo en resistencia, “Jóvenes analizan a CXL como un posible vehículo electoral en 2021”, 11 de septiembre de 2020, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=6JFwTzIw-qc>

¹²²⁸ DW español, “La oposición nicaragüense registra a su primer candidato a la presidencia”, 2 de agosto 2021, disponible en: <https://www.dw.com/es/la-oposicion-c3%B3n-nicarag%C3%BCense-registra-a-su-primero-candidato-a-la-presidencia/a-58735251>.

¹²²⁹ Notificación de la resolución del CSE en el archivo del GHREN, CCDOC113; Confidencial, “CSE cancela personería jurídica de Ciudadanos por la Libertad”, 6 de agosto de 2021, disponible en: <https://www.confidencial.digital/politica/plc-pide-anular-la-personeria-juridica-del-partido-ciudadanos-por-la-libertad/>.

¹²³⁰ Análisis realizado con base a las resoluciones de cancelación de los tres partidos concernidos, emitidas por el CSE, en archivo del GHREN BBDOC112, BBDOC113, BBDOC114, BBDOC115, BBDOC116.

¹²³² CNN, “Consejo Supremo Electoral de Nicaragua cancela personería a partido que serviría de vehículo a una facción opositora”, 19 de mayo de 2021, disponible en: <https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/19/consejo-supremo-electoral-de-nicaragua-cancela-personeria-a-partido-que-serviria-de-vehiculo-a-una-faccion-opositora/>.

<i>Partido político y fecha de cancelación</i>	<i>Recurrente</i>	<i>Causal invocada</i>	<i>Análisis jurídico</i>
		<p>fechas posteriores al 7 de mayo, implicando con ellos cambios estatutarios que comprometen su razón fundacional”¹²³¹</p> <p>El CSE también refirió al art. 59.3 de la Ley Electoral, que prevé como causal de cancelación la “autodisolución del partido político o por fusión con otro”.</p>	<p>manera diversa, por lo que demostrar su violación requeriría una justificación teológica detallada que probablemente sería incompatible con el derecho a la libertad de religión y creencia de los miembros del PRD, a los que se negaría el derecho a interpretar sus propios “principios bíblicos” fundacionales.</p> <p>La alianza firmada el 16 de mayo por el PRD con agrupaciones pertenecientes a la Coalición Nacional para las elecciones de noviembre no constituye una autodisolución ni una fusión.</p>
Partido Conservador (PC) – 19 de mayo de 2021		<p>El CSE basa su resolución en el art. 74.4 de la Ley No. 1070, que prevé la cancelación de partidos por la no participación en las elecciones.</p> <p>Dicha decisión constaba en un acta presentada por parte del Presidente del Partido a la Dirección de Atención de Partidos Políticos del CSE.</p>	<p>La no presentación a las elecciones no era aún un hecho material a la fecha de la resolución de cancelación, ya que había sido una decisión temporal que podía confirmarse o no, ya que no había expirado el plazo estipulado para presentar candidaturas.</p> <p>El Acta del PC establecía que el Consejo del partido, aprobaba no participar en el proceso electoral, y que “se consultará con los 110,000 votantes que respaldaron al PC en noviembre de 2016, si ellos opinan diferente la decisión se puede cambiar”.¹²³³</p>
Ciudadanos por la Libertad (CxL)6 de agosto de 2021	La representante del Partido Liberal Constitucionalista (PLC)	<p>Según la resolución del CSE, el partido CxL fue cancelado porque su representante legal, habría realizado su trámite de solicitud de cédula de ciudadanía de forma anómala.</p> <p>Sin embargo, en la notificación enviada a la presidenta del partido CxL, el CSE acusó al mismo de haber menoscabado la soberanía nacional e infringido la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Seguridad Soberana y la Ley de Soberanía.</p>	<p>La aplicación de la Ley No. 1055 como causal de cancelación restringe desproporcionadamente el derecho a la participación política.</p> <p>La resolución emitida por el CSE no desarrolla los hechos que se consideran fueron violatorios de la Ley de Soberanía.</p>

¹²³¹ Resolución de cancelación emitida por el CSE, BBDOC113 y BBDCO114.

¹²³³ Recurso de revisión en el archivo del GHREN BBDOC115 y BBDOC116.

m) *Estigmatización, acoso e intimidación*

i) Estigmatización de las voces críticas y discurso incendiario

745. Altos cargos del Gobierno, representantes de instituciones públicas, medios oficialistas y usuarios en redes sociales, han hecho uso de retórica incendiaria que incita al odio contra las personas percibidas como opositoras o críticas del Gobierno.

746. Inicialmente, el discurso de las autoridades buscó minimizar el movimiento social de abril de 2018. Así, el 18 de abril Rosario Murillo caracterizó al movimiento de protesta como “*grupos minúsculos, esas almas pequeñas, tóxicas, llenas de odio, no representan el sentimiento, la necesidad de paz, de trabajo y de cariño del pueblo nicaragüense*” y el 19 de abril se refirió a “*seres pequeñitos, mezquinos, mediocres*”.¹²³⁴ A medida que las protestas continuaron, se comenzó a gestar un discurso público de construcción del enemigo. A través de la repetición de estereotipos negativos, y de la difamación del colectivo, se buscó generar una retórica de “nosotros contra los otros”.

747. Para ello, las autoridades invocaron el amor a la Patria, así como valores tradicionales y figuras propias del lenguaje religioso. En palabras de Rosario Murillo: “*En todo momento, esos, los que están ahí diciendo cualquier cosa, manipulando a las Personas, se han lanzado contra las Iglesias, se lanzan contra las Iglesias, contra los Pastores, contra los Sacerdotes, contra la Familia, son los que en todo momento han querido convertir Nicaragua en un campo ajeno a nuestra manera de ser; promotores del aborto, promotores de formas de Vida que no corresponden con nuestra Cultura, con nuestra manera de sentir, de pensar, de actuar*”.¹²³⁵

748. También se acusó a los grupos de mujeres y las feministas de ser “abortistas”, “traidoras,” de atacar a la familia y a la vida, y se les señaló como personas cuyos valores se contraponen a los del grupo de personas afines al Gobierno. Por ejemplo, el 23 de noviembre de 2018, dos días después de que la Policía Nacional negara la solicitud de organizaciones para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres,¹⁰⁶ Rosario Murillo dijo al Canal 4:

*Las Mujeres Sandinistas, de Movimientos Sociales, Laborales y de Juventud, denunciamos la permanente extorsión de estos Movimientos autodenominados Feministas, que han buscado, obtenido y siguen obteniendo abundantes e ilegítimos recursos, para atacar y destruir a las Mujeres y a las Familias nicaragüenses, cuyas verdaderas Batallas ignoran, en su egoísmo, vanidad y ceguera interesada [...] denunciamos a estas llamadas Líderes, por su responsabilidad e involucramiento en los crímenes de odio que se cometieron contra Mujeres, Hombres, Jóvenes y Familias en nuestra Nicaragua durante el intento fallido de Golpe de Estado. Denunciamos y exigimos que la Justicia establezca responsabilidades y penas para todas y todos los que han participado y todavía pretenden participar en el asedio y el acoso a la Paz.*¹²³⁶

749. Del mismo modo, se procedió a justificar las violaciones y abusos cometidos, adscribiendo la responsabilidad por los hechos de violencia de 2018 a las personas opositoras o percibidas como tales. Desde los inicios de la crisis, el Gobierno mantuvo que los eventos de 2018 atendieron a un intento de Golpe de Estado por parte de “la derecha” política, con el

¹²³⁴ El 19 Digital, “Rosario en Multinoticias”, 20 de abril de 2020, disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:76084-rosario-en-multinoticias-edicion-especial-19-de-abril-del-2018>.

¹²³⁵ A su vez, esta descripción se contraponen a la caracterización del grupo partidario del Gobierno: “Esos que no toman en cuenta ni reconocen el Milagro de la Paz, y que se lanzan, con Almas que parecieran envenenadas, pervirtiendo el Ambiente que con tanta Fe, ese Ambiente Alegre, Seguro, que todos queremos y que con tanta Fe y tanta Dedicación hemos venido alcanzando, gracias infinitas a Dios, y de Su Mano, todos juntos en nuestro País”. El 19 Digital, “Rosario en Multinoticias” (19 de abril del 2018), disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:76067-rosario-en-multinoticias-19-de-abril-del-2018>.

¹²³⁶ Canal 4, Compañera Rosario en Multinoticias (23 de noviembre del 2018), disponible en: <https://www.canal4.com.ni/companera-rosario-multinoticias-23-noviembre-2018>.

apoyo y financiamiento de los Estados Unidos.¹²³⁷ Dicha narrativa se reprodujo y perpetuó a través de comunicaciones oficiales del Gobierno de Nicaragua,¹²³⁸ por funcionarias/os públicas/os a todos los niveles, medios de comunicación oficialistas, y campañas en redes sociales.

750. El Gobierno de Ortega y Murillo ha buscado justificar la violencia ejercida contra la población civil, así como la política de detenciones arbitrarias y discriminación contra personas consideradas como opositoras, a través de la vilificación de dicho colectivo. Entre otros descalificativos, las personas adversarias al Gobierno o percibidas como tales han sido tildadas de “traidores o traidoras a la Patria”, “vendepatrias”, “peleles”, “chingastes”,¹²³⁹ “puchos”,¹²⁴⁰ “irresponsables”, “criminales”, “terroristas”, “vasallos de los imperios”, e “hijos de perra de imperialistas yanquis”.¹²⁴¹

751. En el marco de la violencia causada por los operativos para el levantamiento de tranques, las autoridades y medios oficiales y afines al Gobierno, describieron los mismos como “tranques de la muerte”. Esta idea se ha reforzado a través del tiempo, no sólo a través del discurso, sino también del ensalzamiento de las acciones de la Policía Nacional.¹²⁴² Un ejemplo de ello es la celebración anual en Carazo por miembros del FSLN de “la liberación de los tranques de la muerte”, en referencia al operativo en el que murieron al menos 38 personas.¹²⁴³

752. Rosario Murillo ha utilizado términos que “animalizaron” a las personas inconformes u opositoras al Gobierno, equiparándolas con insectos o bacterias: *“Son comejenes [termitas] que se reproducen, hongos, bacterias que se reproducen. Pero es más grande el alma de nuestros pueblos. Más grande que cualquier comején. No es lo mismo ese insecto que el alma y la dimensión humana de coraje y grandeza que tienen nuestros pueblos y en particular el pueblo nicaragüense, patrimonio heroico que vive en nosotros”*.¹²⁴⁴ Días después, la Vicepresidenta Rosario Murillo comparó a las personas opositoras, reales o percibidas, con una plaga que es preciso eliminar: *“Todos sabemos que las edificaciones, las casas, todo eso lo levantamos [...] De repente descubrimos en las paredes, nidos de comején. Y ese comején quiere meterse, quiere destruir, quiere botar nuestros edificios. ¡Pero no lo permitimos!*

¹²³⁷ El GHREN no encontró evidencia alguna de que hubiera un plan preconcebido, planificación o usurpación del poder por parte de las personas y grupos que participaron en las manifestaciones masivas de 2018. Véase Euronews en español, “Oscar Valero responde a vuestras preguntas sobre la entrevista a Daniel Ortega”, 31 de julio 2018, minuto 10:55, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=saErUvujQA8>; DW Español, “Entrevista exclusiva con Daniel Ortega”, 9 de septiembre de 2018, minuto 2:30, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=U8zxb6Lh7qs>.

¹²³⁸ Véase El Digital 19, “OPINIÓN: La Derecha golpista y la “solución final””, 3 de agosto de 2018, disponible en <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79840-opinion-la-derecha-golpista-y-la-solucion-final>.

¹²³⁹ Lenguaje coloquial nicaragüense para referirse a los restos o residuos de comida o de algunas bebidas.

¹²⁴⁰ Lenguaje coloquial nicaragüense para referirse a los restos, residuos, pequeña cantidad sobrante de alguna cosa.

¹²⁴¹ Véase Declaraciones de Rosario Vicepresidenta de Nicaragua después del Acto en Conmemoración del 199 Aniversario de la Independencia de Centroamérica en El 19 Digital, “Compañera Rosario Murillo: Nos abrazamos con patriotismo nunca con servilismo”, 15 de septiembre del 2020, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=uUwR7ttOArY>; El 19 Digital, “Salud y educación, prioridad del Gobierno Sandinista en 2021”, 22 de octubre de 2020, disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:108639-salud-y-educacion-prioridad-del-gobierno-sandinista-en-2021>; Agencia EFE, “Hijos de perra de imperialistas yanquis: Ortega, a opositores presos” (9 de noviembre de 2021), disponible en: <https://youtu.be/CIIOA-hV0mQ>.

¹²⁴² Véase, El 19 Digital, “Acto Central del 43 Aniversario de la Policía Nacional” (29 de septiembre de 2022), disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:132786-acto-central-del-43-aniversario-de-la-policia-nacional-28-09-22>.

¹²⁴³ El 19 Digital, “Carazo celebra liberación de los tranques de la muerte”, 8 de julio de 2019, disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:91929-carazo-celebra-liberacion-de-los-tranques-de-la-muerte>.

¹²⁴⁴ El 19 Digital, “Mismo invasor, mismos vendepatrias”, 6 de octubre de 2019, disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:95035--mismo-invasor-mismos-vendepatrias>.

*Siempre sabemos cómo combatir eficazmente las plagas, los insectos, los comejenes, y no permitir que destruyan lo que construimos con tan buen corazón”.*¹²⁴⁵

753. En el mismo sentido, en una conferencia realizada durante la jornada electoral del 7 de noviembre de 2021, el Presidente Daniel Ortega se refirió a los opositores a su Gobierno como “sembradores de Muerte”, “sembradores de odio”, “sembradores de terror”, y “demonios que no quieren paz”. “En otros países hasta la pena de muerte les aplican”, dijo.¹²⁴⁶

754. Muchos actores de la sociedad civil fueron también objeto de campañas dirigidas de difamación y acoso a través de las redes sociales, medios de comunicación oficiales y medios afines al Gobierno. En ocasiones, dichas campañas precedieron procesos de criminalización contra las personas afectadas. El GHREN ha recopilado información sobre integrantes de partidos y movimientos políticos, periodistas, integrantes de organizaciones de mujeres, miembros de la Iglesia Católica, entre otros, quienes han sido víctimas de estas campañas.¹²⁴⁷

755. Semanas antes de la detención de Monseñor Alvarez, Willam Grigsby, director del medio radial La Primerísima, cercano al Gobierno, dijo en su transmisión “Sin Fronteras” que varias figuras de la Iglesia Católica eran “tranqueros, borrachos, delincuentes, conspiradores, abusadores sexuales y de niños”, y que se les tenía que abrir causas penales.¹²⁴⁸

756. El GHREN tiene motivos razonables para creer que los discursos descritos fueron parte de una política de Estado de comunicación que incluyó la impartición de directivas a funcionarios/as del Estado sobre la información que debía difundirse y la manera en que debía articularse, así como la implementación de campañas en redes sociales, y campañas mediáticas de difamación y estigmatización de las personas opositoras o consideradas como tales, tanto individual como colectivamente, en colaboración con los medios y periodistas afines al Gobierno.¹²⁴⁹

757. En octubre de 2021, Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, anunció que había eliminado 1.300 cuentas falsas en Nicaragua, así como 140 páginas y 24 grupos que, según la compañía, eran parte de una “granja de troles” vinculada al Gobierno y al FSLN. Según el informe de Meta, las cuentas anuladas habrían formado parte de una red que implementaba campañas de desinformación a favor del Gobierno de Nicaragua. De acuerdo con el conglomerado de redes sociales, dichas campañas habrían sido operadas principalmente por empleados de TELCOR, trabajando desde la sede del servicio postal en Managua, mientras que grupos más pequeños de cuentas falsas se habrían manejado desde otras instituciones gubernamentales, incluida la CSJ y el INSS.¹²⁵⁰

758. La propagación del discurso descrito, de manera reiterada en el tiempo, y amplificada a través de medios y redes sociales, ha contribuido a generar un clima de desinformación y de hostilidad hacia las voces críticas al Gobierno, propicio para la comisión de otras violaciones y abusos en su contra, como las detenciones arbitrarias y actos de acoso e intimidación. Teniendo en cuenta el contexto general de represión de toda oposición o crítica, y de impunidad frente a los ataques por parte del sector de la población alineado con el

¹²⁴⁵ El 19 Digital, “Compañera Rosario Murillo: Los pueblos sabemos construir victorias” (10 de octubre de 2019), disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:95216-companera-rosario-murillo-los-pueblos-sabemos-construir-victorias>.

¹²⁴⁶ El 19 Digital, “Presidente Daniel Ortega: Pueblo de Nicaragua está votando por la paz”, 7 de noviembre de 2021, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=3QiPe3DkeFU>.

¹²⁴⁷ Entrevistas del GHREN CCIV001; CCIV005; CCIV007; CCIV0009; CCIV025; CCIV032; véase CEJIL e IM-Defensoras, Perseguidas por defender y resistir: Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras, México y Nicaragua (Capítulo Nicaragua), 2022, p. 52.

¹²⁴⁸ Radio La Primerísima, <http://youtube.com/watch?v=zU-rX2u1Wcw&t=3253s>, minutos: 13:20 (“uno de estos curas delincuentes”), 14:50 (“borracho, criminal confeso”), 39:30 (sobre Monseñor Alvarez acusándole de tranquero, delincuentes, conspiradores, organizador de asesinatos, deberían estar presos – abusadores sexuales, abusadores de niños, “ábranle causa penal” Alvarez es un alcohólico – Báez es un delincuente).

¹²⁴⁹ Entrevistas del GHREN CCIV007; CCIV009; CCIV020; BBIV012.

¹²⁵⁰ Meta, Informe de Comportamiento Inauténtico Coordinado (octubre 2021), disponible en: https://about.fb.com/ltam/wp-content/uploads/sites/14/2021/11/Copia-de-CIB-October_2021.pdf.

Gobierno contra la población no alineada, el GHREN considera que el discurso descrito puede constituir también incitación a la violencia.

759. El GHREN considera que la difamación y el descrédito de los integrantes de la sociedad civil tuvieron un efecto silenciador, no sólo sobre las personas que lo sufrieron directamente, sino sobre la sociedad en general. El discurso analizado exacerbó la polarización política y contribuyó al rompimiento de la fibra social.

ii) Acoso e intimidación de las personas opositoras o percibidas como tales

760. El GHREN documentó y analizó 47 actos de intimidación y acoso, en sus múltiples formas, en contra de personas opositoras o percibidas como tal, incluyendo periodistas, líderes religiosos, estudiantes, artistas, integrantes de partidos o de movimientos políticos, e integrantes de organizaciones de la sociedad civil. En al menos 23 ocasiones, las personas entrevistadas por el GHREN refirieron que dichos actos fueron cometidos por miembros de la Policía Nacional, y en otras 24 ocasiones indicaron que fueron llevados a cabo por personas vestidas de civil, que identificaron como integrantes de grupos pro-gobierno.¹²⁵¹ En dos ocasiones los testigos refirieron que tanto fuerzas policiales como grupos pro-gobierno participaron conjuntamente.¹²⁵²

761. El GHREN tiene motivos razonables para creer que las personas y organizaciones opositoras al Gobierno o percibidas como tales fueron sujetas a intimidaciones, amenazas y vigilancias por miembros de la Policía Nacional, autoridades públicas a todos los niveles, y por integrantes de grupos pro-gobierno y miembros de estructuras locales afines al FSLN como los CPC, UVE y las Juventudes Sandinistas, que, en algunos casos, actuaron de manera coordinada con las estructuras oficiales del Estado. Dichos patrones de violaciones y abusos se mantuvieron de manera constante a lo largo del periodo que abarca el mandato del GHREN, y fueron perpetrados tanto en la capital como en los distintos departamentos y regiones del país.¹²⁵³

762. Las personas entrevistadas por el GHREN indicaron que los CPC, y las estructuras locales –como los UVE y Juventudes Sandinistas– e institucionales –a través de los CLS y los sindicatos– del FSLN, jugaron un rol fundamental en la vigilancia de la población. Funcionarios y funcionarias de las instituciones del Estado refirieron que estos dos últimos mantuvieron una vigilancia constante de las actividades de las personas empleadas por el Estado, reportando sobre quienes participaban o no participaban en actividades de apoyo al Gobierno, e informando sobre personas que expresaban puntos de vista críticos hacia las autoridades.¹²⁵⁴

763. La criminalización, estigmatización, amenazas y acoso constante a las personas opositoras, reales o percibidas, implicó que no sólo no pudieron participar libremente en la vida social y política del país, sino que no pudieron desarrollar su vida de manera normal. En muchos casos documentados, el hostigamiento a las personas incluyó la pérdida de empleo en el sector público.¹²⁵⁵

764. Las personas entrevistadas por el GHREN expresaron que sentían miedo de salir de su hogar, debido a las vigilancias constantes de las que eran objeto. Ante el temor a represalias, algunas personas se vieron forzadas a cambiar constantemente de residencia. La mayoría de las personas entrevistadas por el GHREN se vieron forzadas a dejar el país debido a esta situación. Cuando son mujeres las víctimas, estas estrategias de protección perturban

¹²⁵¹ Los testigos identificaron a las personas como “paramilitares”, o como integrantes de los CPC.

¹²⁵² Entrevistas del GHREN CCIV001; CCIV003; CCIV007; CCIV008; CCIV009; CCIV013; CCIV014; CCIV017; CCIV018; CCIV020; CCIV023; CCIV027; CCIV032; CCIV033; AAIV010; AAIV019; AAIV050.

¹²⁵³ Un informe de la plataforma de sociedad civil Monitoreo Azul y Blanc registró 1,150 acciones de hostigamiento hacia personas opositoras o percibidas como tales durante el periodo entre el 1 de noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021. En el periodo analizado, dicha organización identificó casos en el 46 por ciento de los municipios del país, y en todas las cabeceras departamentales (incluyendo de las regiones autónomas). Véase Monitoreo Azul y Blanco, “Hostigamientos: parte de la estrategia represiva del Estado de Nicaragua” (junio 2021).

¹²⁵⁴ Entrevistas del GHREN BBIV005; BBIV006; BBIV012; BBIV013.

¹²⁵⁵ Entrevistas del GHREN BBIV001; BBIV006; BBIV013.

de manera especial la vida de sus hijos, hijas y parientes cercanos debido al rol prevalente de cuidado que asumen las mujeres dentro de las familias en Nicaragua.

n) *Privación arbitraria de la nacionalidad y violación del derecho a permanecer en el propio país*

765. El Estado de Nicaragua ha utilizado la privación arbitraria de la nacionalidad y las restricciones a entrar y salir del propio país como mecanismo de castigo y como amenaza contra las personas opositoras o percibidas como tales.

766. El GHREN documentó patrones de violaciones y abusos de los derechos de personas opositoras o percibidas como tales y sus familiares en el marco de procesos migratorios o de viajes al exterior del país, perpetradas a lo largo de todo el periodo examinado, incluyendo detenciones injustificadas e interrogatorios,¹²⁵⁶ confiscación arbitraria de pasaportes,¹²⁵⁷ la negativa a renovar pasaportes y a expedir pasaportes para niños y niñas, y la denegación del derecho a salir y a ingresar en el propio país.¹²⁵⁸ La imposición de restricciones migratorias arbitrarias a hijos e hijas ha sido reportada también como una herramienta para presionar a defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de movimientos políticos.¹²⁵⁹

767. Un informe elaborado por cuatro organizaciones de la sociedad civil y analizado por este Grupo, señaló haber registrado al menos 138 casos de personas afectadas por restricciones migratorias indebidas entre el 2018 y el 2022, de las cuales el 43.7 por ciento eran personas defensoras de derechos humanos, activistas o familiares de personas defensoras.¹²⁶⁰

768. Las violaciones mencionadas empujaron a miles de nicaragüenses a migrar o a transitar a través de puntos de cruce no oficiales, conocidos como “puntos ciegos” o “trochas”, exponiéndolos a graves riesgos.

Caso 3 Anexa Brendalee Alfred Cunningham

Uno de estos casos es el de la activista y defensora de los derechos humanos nicaragüense Anexa Brendalee Alfred Cunningham quien, desde abril de 2022, funge como miembro del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (MEDPI) del Consejo de Derechos Humanos. La Sra. Alfred es una mujer indígena *miskitu*, abogada, con una gran trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua, habiéndose desempeñado, entre otros, como asesora de Gobiernos Territoriales y Gobiernos Comunales Indígenas en Nicaragua.

En julio de 2022, la Sra. Alfred viajó a Ginebra, Suiza, para llevar a cabo su primera misión oficial a la decimoquinta sesión del MEDPI. El 9 de julio de 2022, al finalizar su trabajo en Ginebra, la aerolínea le denegó abordar el avión con destino a Nicaragua, informándole que el Gobierno no autorizaba su ingreso al país.¹²⁶¹ A pesar de reiterados esfuerzos diplomáticos, incluyendo por parte del presidente del Consejo de Derechos Humanos, la Sra. Alfred no ha podido regresar a Nicaragua.¹²⁶² La decisión por parte del Gobierno viola el derecho de la

¹²⁵⁶ Entrevistas del GHREN CCIV017, CCIV013, CCIV018.

¹²⁵⁷ Entrevistas del GHREN EEIV032, EEIV039 CCIV007.

¹²⁵⁸ Entrevistas del GHREN CCIV007, CCIV017, CCIV018, CCIV021, CCIV032, CCIV045. Tal como lo reconoce el art. 13 de la Declaración Universal, toda persona tiene derecho “a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”, así como “a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. El art. 12 del ICCPR agrega que estos derechos no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el Pacto.

¹²⁵⁹ Entrevistas del GHREN CCIV021, CCIV024, CCIV033, EEIV039.

¹²⁶⁰ UDJ, UDR, IM-Defensoras, IND, “Informe de actualización sobre la represión en Nicaragua con énfasis en el grave riesgo a la vida de las personas presas políticas”, p. 5.

¹²⁶¹ Entrevista del GHREN FFIV001.

¹²⁶² Véase declaración del Presidente del HRC, Embajador Federico Villegas, durante Diálogo Interactivo con los expertos del MEDPI durante la 51ª sesión del HRC, 28 de septiembre de 2022, disponible en: <https://media.un.org/en/asset/k1o/k1oi0npjam>.

Sra. Alfred a retornar a su país, así como la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas.¹²⁶³

769. Los patrones descritos se agudizaron en febrero de 2023, cuando el Estado de Nicaragua privó arbitrariamente de la nacionalidad nicaragüense a 316 personas, de manera discriminatoria y en violación de las garantías de debido proceso, dejando a la mayoría de ellas en situación de apatridia y violando su derecho a no ser privadas arbitrariamente de la nacionalidad. Asimismo, se buscó producir la muerte civil de las personas a través de la eliminación de registros de nacimiento, confiscación de bienes, y la expulsión.

770. El 9 de febrero de 2023, el Gobierno de Nicaragua expulsó hacia Estados Unidos a 222 personas detenidas (189 hombres y 33 mujeres),¹²⁶⁴ en virtud de una orden de deportación expedida por el Tribunal de Apelaciones de Managua que las declaró traidoras a la patria. Estas personas habían estado detenidas en la Dirección de Auxilio Judicial, El Nuevo Chipote, en el Distrito III de la división de Policía Nacional de Managua y en diferentes centros penitenciarios del país.¹²⁶⁵

771. El magistrado presidente de la sala uno del Tribunal de Apelaciones de Managua dio lectura a la orden de deportación que establecía lo siguiente: “se ordenó [...] la deportación inmediata de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia, al terrorismo, y a la desestabilización económica, pero además lesionar los intereses supremos de la Nación, establecido en el ordenamiento jurídico, convenios y tratados internacionales de derechos humanos, alterando la paz la seguridad y el orden constitucional”.¹²⁶⁶

772. La resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua justificó la deportación en función del objetivo de “proteger la paz, la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral pública, los derechos y libertades de terceros”.¹²⁶⁷ Aunque algunas de dichas causales podrían justificar en ciertos casos muy limitados la restricción del derecho a permanecer en el país, el Estado no proporcionó una decisión debidamente razonada, ni probó de qué manera específica la permanencia de las personas en el país supone un riesgo para la paz, la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral pública, y los derechos y libertades de terceros. Dicha decisión es violatoria del derecho a permanecer en el propio país, al no ser razonable ni razonada, ni ajustada a los principios de legalidad, proporcionalidad y no discriminación.¹²⁶⁸

773. Las personas fueron transportadas en autobuses hasta el aeropuerto de la Fuerza Aérea de Managua. Antes de bajarse de los vehículos, fueron obligadas por las autoridades nicaragüenses a firmar un papel según el cual daban su consentimiento para salir del país. No todas las personas pudieron leer el documento ante de aposar su firma; otros testimonios

¹²⁶³ Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, A/RES/22 (13 febrero de 1946), art. VI, sección 22, estableciendo que, a los expertos (peritos) “en el desempeño de misiones de las Naciones Unidas, se les otorgarán las prerrogativas e inmunidades que sean necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones, durante el período de sus misiones inclusive el tiempo necesario para realizar los viajes relacionados con las mismas”.

¹²⁶⁴ Según la información de la UDR, la cifra de las personas presas que aparecen tanto en la lista del Mecanismo para el registro de personas presas políticas como en la lista del gobierno es de 217. Las cuatro otras personas no figuran en la lista del Mecanismo.

¹²⁶⁵ A partir del 4 de febrero, el GHREN fue alertado de la imposición de condenas accesorias a las sentencias ya pronunciadas en contra de muchas de esas personas. En virtud de dichas modificaciones, que fueron dictadas a instancias del Ministerio Público, se las declaró “traidoras a la patria” y, como tales, se les impuso la pérdida perpetua de los derechos ciudadanos y/o la inhabilitación perpetua para ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular. Documentos en el archivo del GHREN BBDOC196, BBDOC308 a BBDOC330. Según una fuente especializada consultada, las penas de pérdida de ciudadanía y de inhabilitación perpetua impuestas no existen en el sistema penal nicaragüense y son inconstitucionales. Entrevista del GHREN BBIV027.

¹²⁶⁶ Documento en archivos del GHREN BBDCO307.

¹²⁶⁷ Resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua de 8 de febrero de 2023.

¹²⁶⁸ CCPR/C/21/REv.1/Add.9, párr 21.

indicaron que el espacio del destino estaba en blanco.¹²⁶⁹ Ni las personas expulsadas, ni sus familias ni sus representantes fueron informadas previamente de su expulsión. Las personas fueron informadas del despojo de su nacionalidad tras llegar a los Estados Unidos.

774. Paralelamente a la expulsión, el mismo 9 de febrero, la Asamblea Nacional adoptó, por la vía del trámite de urgencia, una reforma constitucional y legislación específica para privar de su nacionalidad a las personas declaradas traidoras a la patria.¹²⁷⁰ Según esa modificación, el art. 21 de la Constitución Política queda redactado según el siguiente tenor: *"los traidores a la patria pierden la calidad de ciudadano nicaragüense"*.¹²⁷¹

775. El 10 de febrero, en una alocución pública, el Presidente Daniel Ortega calificó a las 222 personas de "agentes de potencias extranjeras" y describió su salida como un "destierro".¹²⁷² Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional confirmó que las diferentes instituciones y poderes del Estado trabajaron sincronizadamente bajo una misma orden para deportar y privar a las personas de su nacionalidad.¹²⁷³

776. En los días posteriores a su llegada a los Estados Unidos, algunas de las personas expulsadas solicitaron sus certificados de nacimiento a través de familiares o representantes legales. Para su sorpresa, la constancia de la inscripción de nacimiento en el Registro Civil había sido eliminada. Asimismo, los apellidos de por lo menos algunos de los hijos e hijas de las personas expulsadas fueron borrados de sus partidas de nacimiento.¹²⁷⁴ Dichas acciones atentan contra el derecho a la identidad de las personas afectadas, y generan impactos significativos en todos los ámbitos de su vida, incluyendo en lo referente a bienes y propiedades a su nombre, asuntos y gestiones migratorias, y problemas complejos como el establecimiento de la filiación.¹²⁷⁵

777. La expulsión súbita del país, la privación arbitraria de su nacionalidad y su desaparición de los registros civiles ha generado una situación de incertidumbre y de ansiedad

¹²⁶⁹ Ninguna copia de dicho documento fue dejado a las personas concernidas. Testimonios recogidos indicaron que las personas seguían con las manos atadas con bridas cuando les obligaron a firmar. Entrevistas del GHREN AAIV048, AAIV049, AAIV0050, AAIV051, AAIV052.

¹²⁷⁰ El 10 de febrero se publicó en La Gaceta, Diario Oficial la aprobación en primera legislatura de la reforma del artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua y la publicación de la Ley No. 1145, Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense para aquellas personas que hayan sido condenadas en virtud de la Ley de Soberanía que entró en vigor el mismo día (La Gaceta, Diario Oficial No. 25 del 10 de febrero de 2023).

¹²⁷¹ Canal 4 Nicaragua, Transmisión especial desde la Asamblea Nacional de Nicaragua", 9 de febrero de 2023, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=2ztdV2jQKtY>. Documento en archivo del GHREN BBD0C305. Cabe destacar que el artículo 20 de la Constitución consagra que "Ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad".

¹²⁷² Canal 4 Nicaragua, "Mensaje del Comandante Daniel y Compañera Rosario a las familias nicaragüenses", de 10 de febrero de 2023, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=aacxInTBIDA> (min. 09:45).

¹²⁷³ Dijo, *inter alia*: "una vez que se toma la decisión se hace unas acciones y un proceso absolutamente sorprendente, realmente hay que reconocer como todos nuestros compañeros de las diferentes instituciones actuaron con una sincronización, bajo... como debe ser, como es nuestro modelo, bajo un solo mando, bajo una sola orden, en una forma muy sincronizada, de tal forma que no se filtró nada". Canal 4 Nicaragua, "Doctor Gustavo Porras en la Revista En Vivo con Alberto Mora – 10 de febrero del 2023" de 10 de febrero de 2023, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=hXW_HawQHvI.

¹²⁷⁴ Entrevistas del GHREN BBIV036, BBIV039 y BBIV040. Véase Artículo 66, Ortega quita apellidos a hijos de expresos políticos desterrados; a otros les niega entrega de pasaporte", 4 de marzo de 2023, disponible en: <https://www.articulo66.com/2023/03/04/ortega-quita-apellido-hijos-exreos-politicos-desterrados-niega-entrega-pasaporte/>

¹²⁷⁵ Entrevista del GHREN AAIV051. Véase también 100% Noticias, "Yubrank Suazo ya no se encuentra inscrito en el registro civil de Nicaragua", 11 febrero 2023, disponible en: <https://100noticias.com.ni/politica/121867-expresos-politicos-yubrank-suazo-max-jerez-eeuu/>; 100% Noticias, "Excarcelados desterrados y borrados del Registro Civil aceptarán nacionalidad española, cónsul explica procedimiento", 11 de febrero de 2023, disponible en: <https://100noticias.com.ni/politica/121874-ciudadania-espanola-expresos-politicos-nicaragua/>.

para las 222 personas expulsadas, que en muchos casos vino a exacerbar los traumas resultantes de su detención en condiciones inhumanas o degradantes, y de las torturas sufridas.

778. El 15 de febrero de 2023, el Tribunal de Apelaciones de la circunscripción de Managua declaró a otras 94 personas, residentes en Nicaragua y en el exterior, traidoras a la patria y resolvió imponer la pérdida de la nacionalidad y ordenar el decomiso de su patrimonio a favor del Estado.¹²⁷⁶ El decomiso se ejecutó de manera inmediata. Dicha orden fue emitida sin la celebración de ningún proceso que permitiese a las personas ejercer su derecho de defensa. Entre las personas blanco de esa medida se encuentran periodistas, religiosos, defensores y defensoras de derechos humanos, escritores y escritoras, académicos y académicas, exfuncionarios públicos, y feministas.¹²⁷⁷

779. El GHREN concluyó que las acciones emprendidas por el Poder Judicial, asistidas por la Asamblea Legislativa, constituyeron privaciones arbitrarias de la nacionalidad contrarias al derecho internacional de los derechos humanos y una expulsión colectiva en violación del derecho a permanecer en el propio país.¹²⁷⁸ Dicha noción es más amplia que el concepto formal de nacionalidad, ya que se entiende que el país cuya nacionalidad es retirada continúa siendo el “propio país” en virtud de los lazos especiales de la persona con dicho país, que impiden considerarla como una persona extranjera.¹²⁷⁹

4. Impactos sobre el espacio cívico y democrático

780. Las conductas descritas, tuvieron graves impactos sobre el disfrute y ejercicio del derecho a participar en los asuntos públicos, a la educación y libertades académicas, y a las libertades de expresión y opinión, de asociación y reunión pacífica, y pensamiento, conciencia y religión.

a) Violaciones al derecho a participar en los asuntos públicos

781. El GHREN ha identificado graves violaciones y abusos al derecho a la participación en la vida pública, incluyendo el derecho a ser elegida o elegido y a tener acceso a la función pública. Aunque éstas se dieron de manera continuada a lo largo de todo el periodo que abarca su mandato, se incrementaron exponencialmente durante los meses previos, durante e inmediatamente posteriores a la celebración de los procesos electorales de noviembre de 2021 y de 2022, y, en particular, de las elecciones presidenciales de 2021. La CIDH también observó un incremento de las solicitudes de medidas cautelares del 720% en 2021, en comparación con el año anterior, que vinculó a la represión del Estado en el contexto de las elecciones presidenciales.¹²⁸⁰

782. Durante los meses previos a las elecciones de 2021, elementos de la Policía Nacional o integrantes de grupos armados pro-gobierno obstaculizaron las reuniones de partidos y movimientos políticos, intimidando a las y los participantes. Personas testigos entrevistadas

¹²⁷⁶ La resolución establece que: “se les impone las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua; II. De conformidad al artículo 2 de la Ley No. 1145 [...] ordénese la pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense de todos los acusados ya mencionados; III. [...] se ordena la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscritos a su favor [...]; IV. A los acusados antes mencionados, se les declara prófugos de la justicia. Todo lo anterior, con el propósito de garantizar la paz social, la seguridad jurídica, la independencia, la soberanía, la autodeterminación del Estado de Nicaragua, y en especial garantiza la protección a la sociedad nicaragüense”. Véase la lista completa en Confidencial, Despojan de nacionalidad y derechos ciudadanos, y confiscan a 94 nicaragüenses, 15 de febrero de 2023, disponible en: <https://www.confidencial.digital/nacion/despojan-de-nacionalidad-a-otros-94-nicaraguenses/>.

¹²⁷⁷ *Ibid.*

¹²⁷⁸ El derecho a permanecer en el propio país se desprende del derecho a entrar en el propio país en virtud del art. 13 de la Declaración Universal y del art. 12, párr. 4 del ICCPR. Véase CCPR/C/21/REv.1/Add.9, párr. 19.

¹²⁷⁹ Véase CCPR/C/21/REv.1/Add.9, párr. 20.

¹²⁸⁰ CIDH, MESENI, “Informe de Balance”, s.f., p. 2, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/MESENI/pdf/2022_MESENI_InformeBalance.pdf.

por el GHREN describieron de manera consistente cómo elementos de la Policía Nacional realizaban retenes y vigilancias en las sedes de los partidos y otros lugares de reunión; amenazaban e interrogaban a las personas; registraban a los y las participantes y solicitaban sus documentos de identificación, en ocasiones para agregar sus nombres en listas; y fotografiaban a las personas y sus vehículos.¹²⁸¹ Un testigo afirmó que “*durante las requisas había excesivo uso de la fuerza hacia las compañeras mujeres; “las violentaban”; al momento de requisarlas; la requisas era demasiado excesiva*”.¹²⁸²

783. De acuerdo con información recibida por el GHREN, los grupos armados pro-gobierno se habrían reactivado en concomitancia con el contexto político preelectoral de 2021, y acosaron, intimidaron y realizaron seguimientos a las personas involucradas en los partidos y movimientos políticos.¹²⁸³ Un testigo relató al GHREN el arribo de integrantes de grupos armados pro-gobierno a una actividad política que se estaba realizando en el interior del país y agregó que “*nos dijeron que nos iban a matar; un carro de ellos nos esperó con otro carro y nos dispararon a la salida del pueblo [...]; teníamos que llegar a Juigalpa 25 km después [para ponernos a salvo], y empezaron a seguimos*”.¹²⁸⁴

784. En junio de 2021 se desató una fuerte ola de criminalización y detención arbitraria contra líderes, lideresas e integrantes de partidos y movimientos políticos de la oposición. Así, entre el 2 de junio y el 24 de julio de 2021, fueron detenidos los siete liderazgos de la oposición política, que habían expresado públicamente su voluntad de presentar sus candidaturas a la presidencia de Nicaragua a través de una coalición que iba a correr a través del partido CxL: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. Cristiana Chamorro fue condenada en marzo de 2022 a ocho años de prisión por los delitos de lavado de dinero y apropiación y retención indebida, en virtud de los arts. 238 y 282 del Código Penal. Los otros seis candidatos fueron acusados y condenados por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, en virtud de los arts. 410 y 412 del Código Penal, en relación con la Ley de Soberanía. Mientras que Arturo Cruz y Noel Vidaurre fueron condenados a 9 años de prisión, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena fueron condenados a 13 años de cárcel e inhabilitados para ejercer cargos públicos. Los juicios contra estos líderes políticos fueron cortos (con una duración aproximada de 7 días) y tuvieron lugar en la Dirección de Auxilio Judicial, sin acceso a la prensa ni al público.

785. También se produjeron detenciones de otras personas integrantes de la oposición política a nivel nacional y local. Entre mayo y noviembre de 2021, la policía detuvo a al menos 60 personas involucradas en la preparación de la campaña electoral en las filas de la oposición política, incluyendo integrantes del partido CxL, el movimiento Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y el partido político UNAMOS.

786. Como se explicó con anterioridad, la adopción de la Ley No. 1070 en mayo de 2021 restringió el derecho a la participación política, al incorporar las prohibiciones contenidas en la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Soberanía como causales de inhabilitación para la inscripción de candidaturas.

787. Entre mayo y agosto de 2021, el CSE canceló tres partidos políticos de oposición, incluyendo el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) que iba a ser el vehículo de la oposición política para lograr una candidatura unitaria para las elecciones presidenciales. El 2 de agosto de 2021, Oscar Sobalvarro y Berenice Quezada inscribieron su candidatura para Presidente y Vicepresidenta por el partido CxL; sin embargo, el mismo fue cancelado cuatro

¹²⁸¹ Entrevistas del GHREN CCIV001, CCIV004, CCIV005, CCIV006, CCIV016, CCIV019, CCIV026, CCIV029, CCIV034, CCIV056.

¹²⁸² Entrevista del GHREN CCIV005.

¹²⁸³ Entrevistas del GHREN CCIV004, CCIV019, CCIV034, CCIV056. Véase Monitoreo Azul y Blanco, “Hostigamientos: parte de la estrategia represiva del Estado de Nicaragua”, p. 20.

¹²⁸⁴ Entrevista del GHREN CCIV034.

días después. Paralelamente a la cancelación del partido, el Ministerio Público también acusó a la Sra. Quezada de supuestos “actos que fomentan e incitan al odio y la violencia”.¹²⁸⁵

788. Así, el 7 de noviembre de 2021 se celebraron unas elecciones sin la participación de la oposición.¹²⁸⁶ Durante la jornada electoral del 7 de noviembre de 2021, la organización Urnas Abiertas registró 285 hechos de “violencia política”¹²⁸⁷ en 14 departamentos y en las 2 regiones autónomas del país. La forma de violencia política más registrada por dicha organización fue la presencia de grupos armados pro-gobierno alrededor y dentro de los centros de votación, ejerciendo un rol de control e intimidación. Habitantes de diferentes municipios habrían reconocido a personas identificadas como miembros de grupos armados pro-gobierno como integrantes de las mesas electorales.¹²⁸⁸ El GHREN también recibió información sobre presiones y coacción a trabajadoras y trabajadores del sector público para que asistieran a actividades realizadas por el partido de Gobierno y ejercieran su derecho al voto, a fin de mantener sus puestos de trabajo.¹²⁸⁹

789. Según datos oficiales del CSE, Daniel Ortega y el FSLN obtuvieron el 75 por ciento de los votos, y el partido oficialista FSLN logró 75 escaños de los 90 que se disputaron.¹²⁹⁰ Varias voces nacionales e internacionales denunciaron que el proceso electoral no respetó los estándares mínimos para unas elecciones democráticas y transparentes.¹²⁹¹

¹²⁸⁵ Nicaragua Investiga, 26 de julio de 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=rKJVmE-qXOA> (min. 1:50); Confidencial, “El exjefe de la Contra, Óscar Sobalvarro, acepta postulación presidencial de ACxL”, 27 de julio de 2021, disponible en: <https://www.confidencial.digital/politica/el-exjefe-de-la-contra-oscar-sobalvarro-acepta-postulacion-presidencial-de-acxl/>; documento en el archivo del GHREN CCDOC297, Comunicado de prensa de la Fiscalía sobre la acusación en contra de la señora Berenice Quezada.

¹²⁸⁶ BBC news mundo, “Elecciones en Nicaragua: qué es el “zancudismo” del que acusan a los partidos que compiten con Ortega”, 4 de noviembre de 2021, disponible en <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58953603>; los partidos que participaron fueron descritos por algunos de los testigos entrevistados por el GHREN como partidos colaboracionistas del FSLN, que no representarían a la oposición; entrevista del GHREN CCIV003.

¹²⁸⁷ Urnas Abiertas, “Noveno informe. Radiografía de una farsa electoral”, 22 de noviembre de 2021, disponible en: <https://urnasabiertas.com/wp-content/uploads/2021/11/Informe-9-Urnas-Abiertas-7N.pdf>. El informe no define el término “violencia política”; sin embargo, registra diez categorías de incidentes de violencia política: vigilancia policial y paramilitar, detenciones arbitrarias, hostigamiento, allanamientos, confiscaciones ilegales, restricciones migratorias, amenazas, órdenes de captura y agresiones físicas.

¹²⁸⁸ Urnas Abiertas, “Informe al Comité de Derechos Humanos sobre el estado de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, pp. 18–19.

¹²⁸⁹ Entrevistas del GHREN CCIV010, CCIV046, BBIV012. Ver también: Confidencial Digital, “Trabajadores del Estado: “Tuvimos que votar contra nuestra voluntad para que no nos despidan”, 9 de noviembre de 2021, disponible en: <https://www.confidencial.digital/politica/trabajadores-del-estado-tuvimos-que-votar-contra-nuestra-voluntad-para-que-no-nos-despidan/>. Asimismo, recibió información sobre casos en que las trabajadoras/es públicas/os habrían sido obligadas/os a enviar *selfies* con el dedo manchado como prueba de haber emitido su voto. Entrevista del GHREN, BBIV012; Confidencial Digital, “Manden una ‘selfie’ con el dedo manchado”: la orden a trabajadores estatales”, 4 de noviembre de 2022, disponible en: <https://www.confidencial.digital/politica/manden-una-selfie-con-el-dedo-manchado-la-orden-a-trabajadores-estatales/>.

¹²⁹⁰ Swissinfo.ch, “Resultados electorales de Nicaragua dan al FSLN 75 escaños de 90 en Asamblea”, 9 de noviembre de 2021, disponible en: https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-elecciones_resultados-electorales-de-nicaragua-dan-al-fsln-75-esca%C3%B1os-de-90-en-asamblea/47094838.

¹²⁹¹ Parlamento Europeo, Situación en Nicaragua Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2021, sobre la situación en Nicaragua (2021/3000(RSP)), P9 TA(2021)0513, 16 de diciembre de 2021, disponible en: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0513_ES.pdf; OEA, Resolución de la Asamblea Regional, AG/RES. 2978 (LI-O/21), párr. 2 (en General Assembly, Fifty-First Regular Session, Proceedings, Vol. I, OEA/Ser.P/LI-O.2, p. 187); OEA, Informe elecciones Nicaragua 2021, p. 16, disponible en: <https://www.oas.org/fpdb/press/Informe-Nicaragua-Elecciones-2021.pdf>.

Caso 4 El partido UNAMOS

El partido UNAMOS, antiguamente llamado Movimiento Renovador Sandinista – MRS, fue fundado en 1995.¹²⁹² En junio de 2008, el Consejo Superior Electoral (CSE) canceló la personalidad jurídica del MRS.¹²⁹³ UNAMOS ha sido conocido por sus posiciones sociales progresistas, en particular a favor de los derechos sociales, derechos de las mujeres y de las personas LGBTI.¹²⁹⁴

Por haber sido creado como un partido disidente del FSLN, sus integrantes han sido considerados “traidores y traidoras” de la revolución por parte del Presidente Daniel Ortega y de la Vicepresidenta Rosario Murillo.¹²⁹⁵ Según varios testimonios recolectados por el GHREN, esa “traición” constituye el motivo por el cual se observa un particular ensañamiento en la represión contra las personas pertenecientes a este partido político, tanto durante las manifestaciones públicas, como posteriormente cuando fueron arrestadas, detenidas o condenadas.¹²⁹⁶

El GHREN ha documentado al menos cinco casos donde las personas dirigentes de UNAMOS fueron golpeadas, amenazadas, o arrestadas con uso de la fuerza durante manifestaciones públicas en 2018.¹²⁹⁷ Ha documentado también las detenciones arbitrarias y criminalización de personas del partido que fueron detenidas, procesadas y condenadas en 2021 y 2022. Según información recibida por el GHREN, en 2021 fueron arrestados 12 integrantes de UNAMOS, incluyendo exdirigentes y dirigentes actuales del partido. Otros nueve fueron detenidos entre septiembre y noviembre de 2022, en su mayoría liderazgos locales. La mayoría de las personas detenidas fueron acusadas y/o condenadas por el delito de menoscabo a la integridad nacional (artículo 410 del Código Penal).¹²⁹⁸

Particularmente grave fue la detención y el fallecimiento de Hugo Torres, vicepresidente del partido y ex “Comandante Uno” de la revolución Sandinista, quien murió en febrero de 2022 cuando se encontraba detenido en El Nuevo Chipote. Las circunstancias de la muerte nunca

¹²⁹² El nombre del partido fue modificado el 17 de enero de 2021.

¹²⁹³ CSE, Resolución 11 de junio de 2008. El MRS presentó un recurso ante la CSJ argumentando la falta de motivación de esa resolución; sin embargo, el mismo sigue sin haber sido resuelto. La decisión del CSE tuvo como consecuencia que el MRS “no haya podido participar de manera independiente en ningún tipo de elección desde entonces”. Sus integrantes han participado en contiendas electorales bajo la bandera de otros partidos. CEJIL, Nicaragua: ¿Cómo se reformó la institucionalidad para concentrar el poder”, 2017.

¹²⁹⁴ Durante las elecciones presidenciales de 2006, el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) decidió aliarse con el MRS con base a cinco puntos programáticos; entrevista del GHREN AAIV017. UNAMOS creó varias redes para trabajar con grupos poblacionales específicos, entre las cuales la red de mujer, la red de diversidad y la red de jóvenes. Entrevistas del GHREN AAIV039, AAIV050. Véase también <https://unamosnic.org>.

¹²⁹⁵ Véase, por ejemplo, la opinión de un profesor de la UNAN Managua publicado el 22 de noviembre de 2019 en “Visión sandinista”: “En el período neoliberal [...] llevó a algunos que se decían de izquierda a traicionar a la revolución. Fue ahí que un grupo traicionó al FSLN y formó el MRS a mediados de los años 90, cuando renunciaron a la lucha revolucionario y antimperalista [...] Son esos traidores que ayer y hoy siguen pidiendo al amo yanqui las sanciones y el perjuicio a Nicaragua, como los hacen grupos políticos, Ong’s y empresarios” disponible en: <http://www.visionandinista.net/2019/11/22/carlos-fonseca-contra-los-traidores-a-la-patria-y-a-la-revolucion/>; Moisés Absalón Pastora, Detalles del momento: el enemigo de la humanidad, Nicaragua Sandino, 27 de octubre de 2021, donde afirma que el MRS pretendió “asesinar” al sandinismo, disponible en: <https://nicaraguasandino.com/detalles-del-momento-el-enemigo-de-la-humanidad/>.

¹²⁹⁶ Entrevistas del GHREN CCIV006, CCIV010, CCI021, CCIV023, CCIV024, CCIV033.

¹²⁹⁷ Entrevistas del GHREN CCIV006, CCIV010, AAIV050; fotografías en el archivo del GHREN CCDOC167, CCDOC168, CCDOC169, CCDOC170, CCDOC171, CCDOC172, CCDOC173, CCDOC174, CCDOC175, CCDOC176, CCDOC177, CCDOC178, CCDOC179, CCDOC180, CCDOC181, CCDOC182, CCDOC183, CCDOC184, CCDOC185. Véase también La Prensa, “Nicolas Palacio, el primer agredido de abril”, 6 de mayo de 2018, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=WqrOrC5C4x0>

¹²⁹⁸ Documento en el archivo del GHREN CCDOC285.

fueron debidamente aclaradas por las autoridades del sistema penitenciario ni por el Ministerio Público.¹²⁹⁹

El GHREN recibió información sobre el trato particularmente severo al que fueron sometidas las mujeres dirigentes de UNAMOS durante su detención en el Nuevo Chipote, que constituyó tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y en algunos casos podría constituir tortura.

Por último, el GHREN documentó cinco casos de familiares de dirigentes de UNAMOS detenidos en septiembre de 2022, en represalia para no encontrar a las personas al que se quería detener, es decir otros liderazgos del partido.¹³⁰⁰

790. El GHREN observó una dinámica similar, a una escala mucho menor, alrededor de las elecciones locales de noviembre de 2022.¹³⁰¹ Para ese entonces, la mayoría de los liderazgos y personas políticamente activas ya se encontraba en el exilio como consecuencia de los eventos de 2021. Los resultados de las elecciones municipales del 6 de noviembre de 2022 otorgaron la victoria al FSLN en la totalidad de las 153 alcaldías del país. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó ante el Consejo de Derechos Humanos que “la preparación y celebración de las elecciones municipales de noviembre tuvo elementos de un ejercicio autocrático”.¹³⁰²

791. Tras las elecciones municipales de 2017, tan sólo 18 de las 153 alcaldías del país no estaban administradas por el partido oficialista. Entre el 2 y el 4 de julio de 2022, el Gobierno despojó *de facto* a las autoridades electas de cinco alcaldías controladas por el partido de oposición CxL, con el argumento que este partido ya no contaba con personalidad jurídica. Dicha circunstancia no estaba prevista en la legislación electoral ni municipal como causal de remoción de una administración electa por voto popular.¹³⁰³ De acuerdo con fuentes consultadas por el GHREN, miembros de la policía, junto con integrantes del FSLN habrían tomado las instalaciones de la alcaldía, nombrado nuevos alcaldes del FSLN y colocado la bandera del partido.¹³⁰⁴ Dichas acciones constituyen una grave afectación al derecho a la participación política, por constituir una remoción ilegal de una autoridad legítimamente electa.

b) *Violaciones y abusos a la libertad de opinión y de expresión*

792. El GHREN identificó graves violaciones y abusos a la libertad de opinión y de expresión durante el periodo que abarca su mandato, con patrones que han evolucionado y se han intensificado con el transcurso del tiempo. El Grupo tiene motivos razonables para creer que desde abril de 2018, las autoridades de Nicaragua han buscado silenciar a las y los periodistas y medios de comunicación independientes a través de: campañas de desprestigio y estigmatización; agresiones, robos y confiscaciones ilegales de equipos por la Policía Nacional y grupos armados pro-gobierno; actos de intimidación y acoso; censura y cierre de medios de comunicación; criminalización y detenciones arbitrarias; allanamientos de

¹²⁹⁹ El País, “Muere el histórico comandante sandinista Hugo Torres, preso por el régimen de Ortega”, 12 de febrero de 2022, disponible en https://elpais.com/internacional/2022-02-12/fallece-en-una-carcel-de-nicaragua-el-historico-comandante-sandinista-hugo-torres-preso-por-el-regimen-de-ortega.html?event_log=go.

¹³⁰⁰ Entrevistas del GHREN CCIV025, CCIV006, EEIV003, AAIV051, EEIV063.

¹³⁰¹ Durante la jornada electoral se reportaron numerosos actos de intimidación, con puestos de control establecidos alrededor de los colegios electorales para rastrear a los votantes, así como el impedimento de acceder a los centros de votación a personas percibidas como opositoras al Gobierno. Urnas Abiertas, “Informe al Comité de Derechos Humanos sobre el estado de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”

¹³⁰² Declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Türk ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la Situación de los derechos humanos en Nicaragua, 15 de diciembre de 2022.

¹³⁰³ ACNUDH, “Situación de los derechos humanos en Nicaragua”, A/HRC/51/42 (12 de septiembre de 2022), párr. 7.

¹³⁰⁴ Entrevistas del GHREN CCIV026, CCIV047. véase también Artículo 66, “Opositores: tomas de las alcaldías de CxL es “ilegal, ilícita e ilegítima””, 4 de julio de 2022, disponible en: <https://www.articulo66.com/2022/07/04/asalto-alcaldias-cxl-nicaragua-ilegal-oposicion-nicaragua/>.

instalaciones de medios de comunicación sin orden judicial y confiscación de sus bienes; y restricciones migratorias indebidas.

i) Estigmatización del ejercicio de la labor periodística

793. Desde abril de 2018, funcionarias y funcionarios del Estado, incluyendo altos cargos del Poder Ejecutivo, realizaron declaraciones públicas que estigmatizaron y deslegitimaron la labor de periodistas y medios de comunicación independientes. Las autoridades nicaragüenses acusaron públicamente a medios y periodistas críticos al Gobierno de propagar “noticias falsas” y de trabajar al servicio de intereses “colonialistas” y del Gobierno de Estados Unidos. Este discurso fue replicado por el medio de comunicación oficial El 19 Digital,¹³⁰⁵ así como por otros medios de comunicación que a lo largo de la crisis han seguido el discurso del Gobierno, y reproducido a través de las redes sociales.

794. En numerosas ocasiones, la vicepresidenta Rosario Murillo descalificó el trabajo de las y los periodistas críticos al Gobierno, a quienes acusó de diseminar noticias falsas o “fake news”.¹³⁰⁶ Esta retórica fue utilizada para censurar y criminalizar a la prensa, evitar críticas, y cuestionar los hechos que se dieron a conocer en medios nacionales e internacionales, y a través de los informes de mecanismos de derechos humanos, sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Gobierno de Nicaragua. El GHREN considera que dicho discurso estaría orientado a construir una versión narrativa alternativa de la realidad, dirigida a justificar las acciones del Gobierno y obstaculizar los procesos de rendición de cuentas.

795. La estigmatización a periodistas y medios debe leerse también en el contexto de la adopción de la Ley de Ciberdelitos que, como se detalló anteriormente, sanciona penalmente la difusión de noticias falsas. En julio de 2021, la señora Murillo advirtió a las y los periodistas que no publicasen “noticias falsas” con “falsos médicos, con falsos pronósticos, con falsas encuestas, noticias falsas”, y amenazó a los medios de comunicación: “*medios de comunicación que nosotros llamamos chachalacos, urracas parlanchinas, que se dedican a cantar únicamente malignidades, y bueno, reiteramos, todo se paga en la vida*”.¹³⁰⁷ Como se analizó previamente, la Ley de Ciberdelitos ha sido utilizada para detener, procesar y condenar a periodistas y a personas individuales que expresaron puntos de vista críticos al Gobierno.

ii) Agresiones a periodistas por ejercer su labor

796. El GHREN analizó 25 casos de agresiones físicas a periodistas durante el ejercicio de su labor. Las agresiones examinadas por el Grupo se dieron en el contexto de coberturas a manifestaciones públicas o eventos políticos, indicando que las y los periodistas fueron objeto de ataques por el rol que realizaron difundiendo información, y documentando e informando sobre las violaciones y abusos a los derechos humanos cometidos en el contexto de las manifestaciones.¹³⁰⁸ Los patrones identificados por el GHREN en los casos analizados

¹³⁰⁵ Por ejemplo: El 19 Digital, “Movimiento de Comunicadores Patrióticos saluda el Día Internacional del Periodista,” 8 de septiembre de 2022: “denunciamos a las transnacionales de la información y a los traidores a la patria que actúan como sirvientes de la política exterior del imperio norteamericano y que forman parte de las agresiones contra los pueblos dignos y soberanos, que no se arrodillan frente al amo y que levantan la bandera de dignidad, soberanía y autodeterminación”, disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:132106-movimiento-de-comunicadores-patrioticos-saluda-el-dia-internacional-del-periodista>.

¹³⁰⁶ Entrevista del GHREN CCIV017. Véase: “Expediente Público, Rosario Murillo califica noticias del 2018 como «teatro», pero miles de datos la desmienten”, (14 de abril de 2022) disponible en: <https://www.expedientepublico.org/rosario-murillo-califica-noticias-del-2018-como-teatro-pero-miles-de-datos-la-desmienten/>.

¹³⁰⁷ Nicaragua Actual “Murillo amenaza a médicos y periodistas independientes ” en la vida todo se paga” (7 de julio de 2021), disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=6eXs6N6eZj8&t=133s>.

¹³⁰⁸ Entrevistas del GHREN CCIV048; CCIV014; CCIV032; CCIV027, CCIV056, CCIV017; evidencia fotográfica en el archivo del GHREN CCDOC106, CCDOC107, CCDOC108, CCDOC109, CCDOC110, CCDOC111, CCDOC112, CCDOC139.

son consistentes con los cientos de casos de agresiones a periodistas denunciados públicamente desde el inicio de la crisis.¹³⁰⁹

797. De acuerdo con la información recibida por el GHREN, al menos 11 periodistas fueron agredidos por elementos de la Policía Nacional, y 14 por integrantes de grupos armados pro-gobierno.¹³¹⁰ Los ataques por grupos armados pro-gobierno estuvieron acompañados a menudo de la apropiación ilegal e intencional de equipos de trabajo propios de la profesión periodística, incluyendo teléfonos móviles, cámaras fotográficas y cámaras de video.¹³¹¹ En al menos dos de estos incidentes, los periodistas reportaron que elementos de la Policía Nacional estaban presentes en el lugar durante la agresión, pero no intervinieron.¹³¹² Periodistas mujeres también fueron objeto de agresiones por parte de la Policía Nacional, en algunos casos con un componente sexual o de violencia de género.¹³¹³

798. El GHREN documentó el caso de un periodista que resultó herido por un disparo de un supuesto miembro de un grupo armado pro-gobierno mientras cubría una manifestación en Managua el 23 de septiembre de 2018.¹³¹⁴ Asimismo, el GHREN recibió información de un periodista que fue asesinado el 21 de abril de 2018 por un disparo en la cabeza con arma de fuego, mientras transmitía en vivo para el noticiero El Meridiano,¹³¹⁵ documentando las protestas en la ciudad costeña de Bluefields.¹³¹⁶

iii) Acaso y vigilancias

799. Periodistas y profesionales de medios de comunicación independientes reportaron al GHREN que elementos de la Policía Nacional y personas vestidas de civil vigilaban de manera permanente las instalaciones de dichos medios. Además, periodistas eran objeto de vigilancia por parte de personas vestidas de civil, tanto en la vía pública como afuera de sus residencias.¹³¹⁷ De acuerdo con periodistas entrevistados por el GHREN, elementos de la Policía, incluyendo brigadas especiales de la DOEP, y personas vestidas de civil que portaban cascos de moto y no mostraban ninguna identificación oficial, registraban los vehículos de los y las periodistas y les pedían su identificación. Múltiples testigos reportaron que, durante dichos registros, los oficiales habrían utilizado fuerza excesiva contra las y los periodistas y proferido ofensas y amenazas contra ellas y ellos.¹³¹⁸

¹³⁰⁹ Entrevista del GHREN CCIV013. Véase por ejemplo, Voces del Sur, Informe Nicaragua, 9 de enero de 2023, disponible en: <https://vocesdelsurunidas.org/wp-content/uploads/2023/01/DOC-20230108-WA0035.pdf>, que documenta 703 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua durante el 2022, incluyendo casos de agresiones en contra de 86 víctimas; Voces del Sur, Informe de Violaciones a la Libertad de Prensa, Nicaragua 2021, enero de 2022, disponible en: <https://vocesdelsurunidas.org/wp-content/uploads/2022/01/INFORME-DE-VIOLACIONES-A-LA-LIBERTAD-DE-PRENSA-2021-1.pdf>, que registra 702 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua durante el 2022, incluyendo casos de agresiones en contra de 171 víctimas.

¹³¹⁰ Evidencia fotográfica en el archivo del GHREN CCDOC071, CCDOC072, CCDOC073, CCDOC092, CCDOC094, CCDOC095.

¹³¹¹ Entrevistas del GHREN CCIV014, CCIV017, CCIV027, CCIV032; evidencia fotográfica en el archivo del GHREN CCDOC106, CCDOC107, CCDOC108, CCDOC109, CCDOC110, CCDOC112.

¹³¹² Entrevistas del GHREN CCIV013, CCIV017, CCIV018, CCIV027.

¹³¹³ Entrevista del GHREN CCIV001.

¹³¹⁴ Entrevistas del GHREN CCIV013, CCIV017, CCIV027; documentos en el archivo del GHREN CCDOC094, CCDOC095.

¹³¹⁵ ACNUDH, Informe 2018, párr. 92.

¹³¹⁶ Entrevista del GHREN CCIV027. Véase La Costeñísima, “La historia detrás del asesinato de Ángel Gahona”, disponible en: <https://lacostenisima.com/2018/08/13/la-historia-detras-del-asesinato-de-angel-gahona/>; Reporteros Sin Fronteras (RSF), “RSF Pide que se abra una investigación por el asesinato de un periodista en Nicaragua”, 4 de Mayo de 2018, disponible en: <https://rsf.org/es/rsf-pide-que-se-abra-una-investigaci%C3%B3n-por-el-asesinato-de-un-periodista-en-nicaragua>. Véase también “Un periodista muere de un disparo en Nicaragua cuando transmitía las protestas,” Agencia EFE, 22 de abril de 2018, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=IhRHvfTXxOI>; “La historia de Angel Gahona, el periodista asesinado en Bluefields,” La Prensa, 13 de mayo de 2018, disponible en: <https://www.laprensani.com/2018/05/13/suplemento/la-prensa-domingo/2418297-la-historia-de-angel-gahona-el-periodista-asesinado-en-bluefields>.

¹³¹⁷ Entrevistas del GHREN CCIV013, CCIV014, CCIV018, CCIV033, CCIV032.

¹³¹⁸ Entrevistas del GHREN CCIV013, CCIV014, CCIV018, CCIV032, CCIV056.

800. Entre septiembre y diciembre de 2018, elementos de la Policía Nacional y personas vestidas de civil instalaron retenes policiales en los alrededores del Canal 100% Noticias, con el fin de registrar a todas las personas que entraban y salían de sus instalaciones. La Policía instaló también retenes en las inmediaciones de las viviendas al menos dos periodistas considerados como opositores obligándolos a parar todos los días y a ser revisados. Durante estas revisiones, sufrieron acoso y amenazas.¹³¹⁹

801. El GHREN también recogió testimonios de actos de intimidación y amenazas a periodistas en el contexto de coberturas periodísticas, tanto en la capital como en el interior del país. Varios periodistas refirieron que elementos de la Policía les habían amenazado, advirtiéndoles de que “dejaran de [joder],” que “si ustedes siguen [haciendo fotos] son hombres muertos”, y dejando claro que “tenemos un arma y nos respalda el gobierno”.¹³²⁰

iv) Acciones de censura y cierre de medios

802. TELCOR jugó un rol instrumental en la censura y las cancelaciones de medios, a través de amenazas a sus directivas, la suspensión de emisiones, y el cierre de medios.

803. La primera acción de censura documentada por el GHREN se dio el 19 de abril de 2018, tan solo un día después del inicio de las protestas masivas, cuando la transmisión por cable de cinco medios de televisión –Canal 100% Noticias, Canal 12, Canal de Noticias de Nicaragua (CDNN23), Telenorte y Canal 51– fue interrumpida por órdenes de TELCOR. Mientras los otros canales regresaron a la transmisión unas horas después, el Canal 100% Noticias se quedó fuera del aire durante seis días.¹³²¹

804. Según la información recibida por el GHREN, el entonces director de TELCOR, Orlando Castillo, citó al director de 100% Noticias, para ordenarle que no diera tanta cobertura a las manifestaciones, y que eliminara de la programación los programas “La Nación”, y “Café con Voz”, programas que eran particularmente críticos del Gobierno. Ante la negativa del director, Castillo le dijo que si no cumplía con las instrucciones del ente regulador, tendría que “atenerse a las consecuencias”.¹³²² El GHREN recibió información que Castillo habría presionado también a la dirección de un canal cercano al Gobierno. La llamada, descrita por un testigo como amenazante, solicitaba al director que no emitiera noticias sobre las protestas si no quería que le retirasen la licencia para transmitir.¹³²³

805. El GHREN recibió múltiples y creíbles testimonios que indicaron que la orden de censura habría sido emitida por el Presidente y la Vicepresidenta de la República. En este sentido, es preciso señalar que TELCOR es una es un ente descentralizado, bajo la rectoría sectorial directa de la Presidencia.

806. Como parte de la estrategia del Gobierno para silenciar a periodistas y medios de comunicación independientes, las autoridades ordenaron el cierre de decenas de medios de comunicación. Además, se impusieron restricciones que imposibilitaron el trabajo de varios medios, incluyendo a través de la censura y del impedimento a la prensa privada de abastecerse de los materiales necesarios para la impresión de periódicos.

807. El GHREN también documentó el allanamiento por parte de la Policía Nacional y la confiscación *de facto* de los bienes, equipos, documentación e inmuebles, de tres de los medios de comunicación independientes más importantes del país: Confidencial, 100% Noticias y La Prensa.

808. Los allanamientos del Confidencial y 100% Noticias se dieron en diciembre de 2018. En ambos casos, se realizaron en horas de la noche. En el caso de Confidencial, se realizó en

¹³¹⁹ Entrevistas del GHREN CCIV013, CCIV014, CCIV018, CCIV033, CCIV032, CCIV056.

¹³²⁰ Entrevistas del GHREN CCIV013, CCIV014, CCIV027.

¹³²¹ Entrevistas del GHREN CCIV013, CCIV014, CCIV018, CCIV023, CCIV032. Véase también TELCOR habría solicitado a los operadores de televisión por cable que suspendieran la retransmisión de dichos canales. La Prensa, “Daniel Ortega saca de la televisión por cable a cuatro canales en Nicaragua”, 19 de abril de 2018, disponible en: <https://www.laprensani.com/2018/04/19/nacionales/2406416-daniel-ortega-saca-del-la-television-por-cable-cuatro-canales-en-nicaragua>.

¹³²² Entrevistas del GHREN CCIV018, CCIV032, CCIV056.

¹³²³ Entrevista del GHREN CCIV023.

ausencia del personal o del representante legal del medio. En el caso de 100% Noticias, el allanamiento por parte de la Policía Nacional se produjo con violencia sobre las cosas, produciendo graves daños en los equipos del canal, y resultó en la detención de tres personas.¹³²⁴ El Confidencial fue allanado por segunda vez en mayo de 2021, en una segunda localización. Durante este allanamiento detuvieron a una persona que se hallaba en el lugar. En agosto de 2021, las instalaciones de La Prensa fueron confiscadas *de facto* por la Policía Nacional, y posteriormente reconvertidas en un centro cultural. En los tres casos, dichos allanamientos se dieron en el marco de procesos de criminalización contra periodistas y directivos de los medios afectados.¹³²⁵

809. Dichos ataques generaron un clima generalizado de miedo y autocensura y forzaron a al menos 178 profesionales de la comunicación a abandonar el país entre abril de 2018 y diciembre de 2022.¹³²⁶

810. Las violaciones descritas no sólo afectaron a las y los periodistas y empleados/as de medios de comunicación, sino a la sociedad nicaragüense en general en su derecho a tener acceso a una información plural.

v) Criminalización de periodistas y empleados de medios independientes

811. Entre mayo y agosto de 2021, y a solo unos meses de las elecciones, se produjeron numerosas detenciones, interrogatorios y allanamientos vinculados con medios de comunicación, organizaciones y fundaciones que trabajaban en la promoción y en la defensa de la libertad de prensa, de expresión y de opinión. Dichas acciones se realizaron sobre la base de la Ley contra el Lavado de Activos de 2018, y la Ley de Agentes Extranjeros y Ley de Cibercrimitos, ambas aprobadas a finales de 2020.

812. En mayo de 2021, las autoridades iniciaron investigaciones administrativas y penales contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una de las principales organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa en el país. A partir del 20 de mayo, el Ministerio Público citó a 63 periodistas, comentaristas, fotoperiodistas, directivas y directivos, y colaboradoras y colaboradores de medios de comunicación, para ser interrogados en el marco de la investigación. Dichas citatorias generaron temor entre profesionales de los medios, llevando a al menos 25 de ellos (ocho mujeres y 17 hombres) a abandonar el país para resguardar su libertad y poder seguir informando.¹³²⁷

813. Paralelamente a los interrogatorios del Ministerio Público, periodistas y medios oficialistas desplegaron una campaña de estigmatización y difamación en contra de periodistas y medios independientes. Por ejemplo, pocos días después de su interrogatorio en la Fiscalía, un periodista fue señalado en el programa “Sin Fronteras” de William Grigsby¹³²⁸ de haber recibido fondos de USAID personalmente y de habérselos transmitido irregularmente a La Prensa.¹³²⁹

814. La organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) denunció que los interrogatorios realizados por el Ministerio Público se convirtieron en el escenario de amenazas e intimidaciones “con la finalidad de silenciar”.¹³³⁰ Las y los periodistas denunciaron haber sido interpeladas/os por las publicaciones e investigaciones

¹³²⁴ Entrevista del GHREN CCIV032, CCIV056, CCIV018.

¹³²⁵ Entrevista del GHREN CCIV033, CCIV032, CCIV056, CCIV020, CCIV009.

¹³²⁶ Voces del Sur, Informe anual 2022 “Año 2022 cierra con preocupante autocensura, marcada tendencia de agresiones a mujeres periodistas y más hostilidad gubernamental”, 9 de enero de 2023, p. 4, disponible en: <https://vocesdelsurunidas.org/wp-content/uploads/2023/01/DOC-20230108-WA0035.pdf>.

¹³²⁷ Entrevistas del GHREN CCIV001, CCIV009, CCIV017, CCIV020, CCIV021, CCIV025, CCIV027, CCIV029. Véase PCIN, Informe anual sobre las agresiones a la prensa independiente, 2021, p. 15, disponible en: <https://pcinnicaragua.org/2022/07/20/informe-anual-sobre-agresiones-2021%ef%bf%bc/>.

¹³²⁸ Periodista ampliamente señalado de ser cercano a las autoridades de Gobierno.

¹³²⁹ Entrevista del GHREN CCIV020.

¹³³⁰ PCIN, Informe anual sobre las agresiones a la prensa independiente, 2021, p. 16, disponible en: <https://pcinnicaragua.org/2022/07/20/informe-anual-sobre-agresiones-2021%ef%bf%bc/>.

que involucraban a personas vinculadas con las instituciones públicas, y haber sido amenazadas/os por el Ministerio Público con aplicarles la Ley de Ciberdelitos.

815. Después de las citatorias ante la Fiscalía, varias y varios periodistas y trabajadores/as de organizaciones que promueven libertad de expresión fueron objeto de bloqueos a sus cuentas bancarias, retenciones migratorias a ellos y a sus familiares, y prohibición de comunicarse con el resto de los investigados.¹³³¹

816. A pesar de que gran parte de la prensa independiente se ha visto obligada a salir de Nicaragua, la organización Voces del Sur documentó la detención en 2021 de nueve personas ligadas a los medios de comunicación –incluyendo periodistas, comentaristas y otros trabajadores y trabajadoras de medios –, que han sido condenados. Tal y como se detalla más adelante, el periodista y gerente general del periódico La Prensa, también fue detenido el 14 de agosto de 2021, y condenado a 9 años de prisión por el delito de lavado de dinero.

817. Varios periodistas exiliados comentaron al GHREN que el miedo a ser objeto de represalias se había agudizado con el transcurso del tiempo y con la aparición de nuevas leyes y procesos de criminalización de profesionales de la comunicación. Una testigo dijo al GHREN que “a partir del 2020 [los periodistas] teníamos que ir calibrando si ponerte a filmar en la calle, [porque] no es seguro; teníamos que ir a hoteles, y [aun así] te mandan a espionar con gente que queda ahí mirando a quien entrevistábamos. Sabíamos que nos vigilaban”.¹³³²

c). *Violaciones de las libertades de asociación y de reunión pacífica*

i) Represión del derecho a la manifestación pacífica

818. Desde abril de 2018, el Estado de Nicaragua implementó una serie de medidas legislativas y políticas, así como acciones represivas, con el objetivo de suprimir el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. El GHREN ha constatado graves violaciones al derecho a la libertad de reunión pacífica, que incluyen el uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones pacíficas; la estigmatización de la protesta social; la criminalización de la libertad de reunión y detenciones arbitrarias en el marco de manifestaciones; y la interferencia e intimidaciones en el contexto de reuniones pacíficas.

819. Las distintas formas de protesta social que se desarrollaron en Nicaragua desde abril de 2018 fueron promovidas con fines de expresión colectiva pacífica, y se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de reunión pacífica. Éste incluye el derecho a celebrar reuniones, sentadas, huelgas, marchas, concentraciones, ocupaciones, actos o protestas, tanto en línea como en lugares públicos.

820. Del mismo modo, en el contexto histórico y social nicaragüense, los llamados “tranques” y las barricadas constituyen una forma de protesta comúnmente utilizada y por tanto se encuadran bajo la protección del derecho a la manifestación pacífica. En este sentido, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación ha considerado las diversas modalidades de protesta, incluyendo las manifestaciones, huelgas, sentadas y ocupaciones pacíficas, como parte del ejercicio de los derechos de asamblea y reunión pacífica.¹³³³

821. La sección III.A del presente informe presenta de manera detallada los hallazgos del GHREN sobre los abusos y violaciones de los derechos a la vida y a la integridad física cometidos en el contexto de las protestas entre abril y septiembre de 2018. El Grupo consideró que el Estado de Nicaragua violó, por acción y por omisión, el derecho a la libertad de reunión pacífica. Por un lado, el Gobierno utilizó su poder político y jurídico e hizo uso del monopolio de la fuerza del Estado para reprimir a las y los manifestantes. Por otra parte,

¹³³¹ Entrevistas del GHREN CCIV017, CCIV021, CCIV029, CCIV033.

¹³³² Entrevista del GHREN CCIV017.

¹³³³ Véase A/HRC/20/27, párr. 12. Del mismo modo, en su informe sobre la situación de los Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, la CIDH hizo especial mención a los cortes de ruta, los cacerolazos y las vigiliadas, así como a desfiles, congresos o eventos deportivos, culturales, artísticos, etc. Véase, CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, 2006.

el Estado omitió su deber de facilitar, supervisar, respetar y proteger las manifestaciones pacíficas frente a la violencia ejercida por terceros.

822. Tal y como describe dicho apartado, el GHREN tiene motivos razonables para creer que la Policía Nacional cometió ejecuciones extrajudiciales en el marco de la represión de las manifestaciones públicas, y que actuó en coordinación y/o connivencia con grupos armados pro-gobierno. El GHREN documentó 40 ejecuciones extrajudiciales en el marco de las protestas entre el 19 de abril y el 23 de septiembre de 2018.

ii) Estigmatización del ejercicio de la libertad de manifestación

823. Desde el inicio de las protestas en 2018, las autoridades estigmatizaron, criminalizaron y descalificaron públicamente los motivos y a las personas que se movilizaban para participar en las manifestaciones. Como se expuso previamente, en diversas alocuciones y comunicados oficiales, el Gobierno y sus altas autoridades caracterizaron a los y las manifestantes como enemigos internos del Estado, y representaron las protestas de 2018 como un intento de golpe de Estado.

824. A finales de septiembre de 2018, la Policía responsabilizó a quienes convocan a “concentraciones y movilizaciones públicas ilegales de las alteraciones al orden público, de las acciones ofensivas y delictivas y de las agresiones que irrespeten el derecho al trabajo, a la seguridad y a la vida de las familias nicaragüenses,” y calificó las protestas como “desplazamientos ilegales desde los cuales se ha promovido y se intenta promover acciones delictivas, destructivas y criminales”.¹³³⁴

825. La Policía Nacional calificó las protestas de “ilegales”, con base a una interpretación restrictiva de la Ley 872 sobre la Policía Nacional que condiciona la celebración de eventos públicos a la autorización de la misma policía. La Policía advirtió que las entidades o personas organizadoras serían responsabilizadas de cualquier crimen o acto violento perpetrado durante las mismas.¹³³⁵ El 13 de octubre del mismo año, la Policía emitió un comunicado reiterando la prohibición de manifestarse, y expresando que “no se permitirán manifestaciones o movilizaciones en la vía pública que no cuenten con el debido permiso y acompañamiento de la Policía Nacional”.¹³³⁶

826. Tras la prohibición de las marchas por la Policía Nacional en septiembre de 2018, todos los intentos de realizar plantones, marchas, o piquetes organizados por grupos de personas opositoras, o que el Gobierno percibe como tales, han sido reprimidos con violencia por la Policía Nacional y por personas vestidas de civiles, afines al Gobierno. Sin embargo, las personas intentaron ejercer su derecho a la manifestación pacífica. El GHREN documentó intentos de manifestaciones, flash-mob, y otras formas de protestas en espacios públicos que fueron impedidos o dispersados por la Policía Nacional y miembros de grupos pro-gobierno a través de arrestos arbitrarios y el uso de la violencia por agentes antidisturbios.

827. El 14 de octubre, elementos de la unidad antidisturbios de la Policía Nacional hicieron un uso excesivo y arbitrario de la fuerza para dispersar una manifestación convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). De acuerdo con el MESENI, al menos 50 personas fueron detenidas. Algunas de ellas, en su mayoría periodistas, fueron liberadas en el mismo lugar. Las demás personas, incluso lideresas sociales y políticas, fueron liberadas al día siguiente.¹³³⁷ Evidencia fotográfica analizada por el GHREN muestra cómo miembros de la Policía Nacional arrastraron por el suelo a personas no armadas, y cómo cuatro policías detuvieron a una mujer que no portaba ningún arma.¹³³⁸

¹³³⁴ Policía Nacional de la República de Nicaragua, Nota de prensa No. 115 (28 de septiembre de 2018), disponible en: <https://www.policia.gob.ni/?p=23327>; DDDOC073, en el archivo del GHREN.

¹³³⁵ *Ibid.*

¹³³⁶ Policía Nacional de la República de Nicaragua, Comunicado, 13 de octubre de 2018, disponible en: <https://www.policia.gob.ni/?p=23782>.

¹³³⁷ CIDH, Comunicado de prensa “CIDH alerta sobre nueva ola de represión en Nicaragua”, 18 de octubre de 2018, disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/223.asp>

¹³³⁸ Entrevistas del GHREN CCIV006; CCIV027; fotografías en el archivo del GHREN CCDOC074, CCDOC167, CCDOC168, CCDOC169. CCDOC170, CCDOC171, CCDOC172, CCDOC173,

828. En noviembre de 2018, la Policía Nacional denegó la solicitud de la UNAB de realizar una manifestación en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En su resolución, la Policía indicó que entre las personas solicitantes había identificado a personas que realizan “prácticas vandálicas en centros comerciales, con el único objetivo de dar continuidad a los actos terroristas y a reactivar los tranques (bloqueos de vías y carreteras) con sus propósitos golpistas”. La Policía también argumentó que la UNAB “carece de personalidad jurídica por lo tanto no puede ejercer derechos ni contraer obligaciones conforme nuestro ordenamiento jurídico”.¹³³⁹ Este último requisito no era necesario antes del 2018, y resulta excesivamente restrictivo del derecho a la manifestación pacífica.¹³⁴⁰ El 23 de noviembre, en Matagalpa, la policía impidió la realización del "Carnaval contra las violencias" organizado durante 20 años por las organizaciones de mujeres del lugar.¹³⁴¹

829. Asimismo, el GHREN analizó información sobre las marchas convocadas en marzo, en julio y en diciembre de 2019 en Managua. El 16 de marzo miembros de la oposición pretendían manifestarse en tres puntos diferentes de la ciudad de Managua: en frente del Edificio Pellas, en Caminos de Oriente y en La Colina. Se realizaron redadas policiales en estos lugares, donde se detuvieron más de 150 personas.¹³⁴² El 30 de ese mismo mes, la UNAB convocó la “sentada nacional” que fue igualmente reprimida por la policía de forma violenta.¹³⁴³ El GHREN también verificó y analizó fotografías y videos de un plantón exprés realizado el 12 de diciembre frente al Hotel Intercontinental de Managua, donde los manifestantes fueron gravemente reprimidos por la Policía Nacional. En las imágenes se pueden distinguir miembros de la Policía con cascos de moto, así como un desproporcionado despliegue de elementos policiales antidisturbios, en contraste con un pequeño número de manifestantes que estaban reunidos pacíficamente.¹³⁴⁴

830. Por último, el GHREN recopiló información sobre la marcha del 25 de julio de 2019, para la conmemoración del “Día nacional del estudiante”. Un grupo de nueve estudiantes redactaron una carta dirigida a la Policía Nacional, informando de su intención de manifestarse.¹³⁴⁵ La Policía Nacional informó en rueda de prensa que dicha manifestación no estaba autorizada, y acusó al grupo de personas organizadoras de ser “desestabilizadores de la paz”. A pesar de la prohibición, las y los estudiantes decidieron hacer plantones en varios

CCDOC174, CCDOC175, CCDOC176, CCDOC177, CCDOC178, CCDOC179, CCDOC180, CCDOC181, CCDOC182, CCDOC183, CCDOC184, CCDOC185.

¹³³⁹ Policía Nacional, Dirección de Seguridad Pública, Resolución 029-2018, 23 de noviembre de 2018, firmada por el Comisionado General, Luis Fernando Barrantes Jiménez, Jefe de la División de Seguridad Pública. Véase también 100% Noticias, Excusa “balurde” de la Policía sandinista para negar permiso a marcha, dice articulación de mujeres, 23 de noviembre de 2018, disponible en: <https://100noticias.com.ni/nacionales/94835-excusa-balurde-policia-marcha/>.

¹³⁴⁰ Entrevista del GHREN CCIV044.

¹³⁴¹ Entrevista del GHREN AAIV045. Véase también IMD, Alerta urgente, disponible en: <https://imdefensoras.org/2018/11/alertaurgente-nicaragua-el-estado-nicaraguense-vulnera-el-derecho-a-la-manifestacion-y-a-la-libertad-de-expresion-de-organizaciones-feministas-y-por-los-derechos-de-las-mujeres-en-visperas-del-dia/>.

¹³⁴² Entrevistas del GHREN CCIV004, CCIV006. Véase también La Prensa, “Así te contamos la manifestación azul y blanco de este sábado y la represión ejercida por la policía orteguista”, 16 de marzo de 2019, disponible en: <https://www.laprensani.com/2019/03/16/nacionales/2533920-en-vivo-marcha-por-los-presos-politicos-en-nicaragua>.

¹³⁴³ Entrevista del GHREN CCIV027; fotografías en el archivo del GHREN CCDOC100, CCDOC101, CCDOC102, CCDOC103, CCDOC104, CCDOC105. Véase también El nuevo Diario, “Policía captura a manifestantes que participaban en sentada nacional en el sector de Metrocentro”, 30 de marzo de 2019, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=F29Qkym8HrY>.

¹³⁴⁴ Entrevista del GHREN CCIV027; fotografías en el archivo del GHREN CCDOC140, CCDOC141, CCDOC142, CCDOC143, CCDOC144, CCDOC145, CCDOC146, CCDOC147, CCDOC148, CCDOC149, CCDOC150, CCDOC151, CCDOC152, CCDOC153, CCDOC154, CCDOC155, CCDOC156, CCDOC157, CCDOC158, CCDOC159, CCDOC160, CCDOC163, CCDOC164, CCDOC165, CCDOC166.

¹³⁴⁵ Carta de los estudiantes dirigida a la Policía Nacional en el archivo del GHREN CCDOC246; fotografía en el archivo del GHREN CCDOC247.

puntos de Managua.¹³⁴⁶ Estos plantones también fueron reprimidos con balas de goma; bombas aturdidoras y lacrimógenas.¹³⁴⁷

831. A pesar de que el número de marchas convocadas fue mucho menor que durante la primera fase de la crisis sociopolítica (entre abril y septiembre de 2018), los movimientos de la oposición siguieron organizando eventos públicos hasta finales de 2020. Después de las detenciones de 2021, y con la gran mayoría de los liderazgos de los movimientos sociales y políticos en el exilio, los y las nicaragüenses dejaron de manifestar en público su disidencia.

iii) Restricciones arbitrarias de la libertad de asociación

832. Como se ha descrito, a partir de 2021, comenzó una dinámica de cancelaciones masivas de la personalidad jurídica de organizaciones. El Grupo documentó cómo el Ministerio de Gobernación dejó de recibir la documentación o solicitó constantemente documentos adicionales a las organizaciones, forzándolas al incumplimiento de sus obligaciones legales. De esta manera, las autoridades justificaron las cancelaciones, intervención y ulterior liquidación de los bienes de muchas de ellas a favor del Estado.

833. El GHREN tiene motivos razonables para creer que la cancelación de organizaciones de la sociedad civil por el Gobierno es arbitraria, y está dirigida a reconfigurar el espacio cívico y garantizar el monopolio del Estado de las actividades comunitarias, de desarrollo y asistencia social.¹³⁴⁸ El GHREN concluyó que dichas acciones formaron parte de una estrategia para reforzar los vínculos de dependencia y la vulnerabilidad frente a políticas clientelares de la ciudadanía.

834. El cierre masivo de organizaciones ha supuesto un duro golpe contra la libertad de asociación y el pluralismo en el país, que históricamente había tenido una vibrante participación de la sociedad civil en los asuntos cívicos, humanitarios y de derechos humanos.

835. La salida de organizaciones internacionales, y la cancelación y cierres de los organismos sin fines de lucro nacionales, no solo quiebra el derecho de asociación de las organizaciones afectadas, sino que tiene un gran impacto negativo sobre el goce de los derechos humanos por los y las nicaragüenses. Las organizaciones canceladas llevaban a cabo un importante trabajo en la defensa de los derechos humanos, incluyendo los derechos de la niñez, de las mujeres, de las personas LGBTIQ, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y de las comunidades rurales y campesinas; el fomento de la democracia; el desarrollo del país y la prestación de servicios sociales y de salud; la protección del medio ambiente; actividades caritativas o humanitarias; así como asuntos estudiantiles y culturales, entre otros. También se vieron afectadas algunas asociaciones de profesionales, así como organizaciones y fundaciones religiosas.

836. Por ejemplo, más de 200 organizaciones de mujeres fueron canceladas.¹³⁴⁹ Dichas organizaciones jugaban un rol fundamental en la atención y protección de las mujeres víctimas de violencia, o en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. La cancelación de muchas de esas organizaciones ha impedido que puedan seguir con sus

¹³⁴⁶ Entrevista CCIV004; fotografías en el archivo del GHREN CCDOC242; CCDOC243; video parcial conferencia de prensa de la Policía Nacional negando la autorización a la manifestación en el archivo del GHREN CCDOC248.

¹³⁴⁷ Entrevista del GHREN CCIV004; fotografías en el archivo del GHREN CCDOC240; CCDOC24. Véase también DW en español, “Policía de Nicaragua reprime marcha y deja varios heridos”, 26 de julio de 2019, disponible en: <https://www.dw.com/es/polic%C3%ADa-de-nicaragua-reprime-marcha-y-deja-varios-heridos/a-49751605>.

¹³⁴⁸ Entrevista del GHREN CCIV038; Un estudio que analizó 750 organizaciones canceladas y de éstas tomó una muestra más específica de 55, concluyó que el volumen de fondos implementados por las mismas anualmente superaba los 400 millones de dólares. El Diálogo, “La radicalización dictatorial en Nicaragua”, octubre de 2022, p.3. disponible en <https://thedialogue.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2022/11/nicaragua-radicalization-SP-draft11.pdf>.

¹³⁴⁹ Según información transmitida al GHREN por la IND, el 29% de las organizaciones feministas y/o que trabajan por los derechos de las mujeres clausuradas trabajaban por el derecho a vivir una vida libre de violencia; otro 22% por la autonomía y el desarrollo rural; el 11% por los derechos de las mujeres indígenas y afrodescendientes y el 8% por los derechos sexuales y reproductivos.

actividades, dejando a las mujeres que atendían sin posibilidad para denunciar, buscar asistencia o protección. La información recibida por el GHREN indica que, desde 2018, las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las organizaciones de mujeres ya no pueden acompañar a las víctimas de violencia a poner denuncia ante las instituciones por ser consideradas opositoras al régimen. Una fuente reportó que los policías disuaden a las mujeres a acudir a las organizaciones de mujeres, argumentando que “las ONG ya están canceladas, que ya no existen”.¹³⁵⁰

d) *Violaciones al derecho de libertad de pensamiento, conciencia y religión*

i) *Ataques y criminalización de líderes religiosos e integrantes de la Iglesia Católica*

837. El GHREN observó que desde abril de 2018 se produjeron ataques y criminalización de miembros de la institución eclesiástica, que continuaron durante todo el periodo que abarca el mandato del Grupo, con una fuerte escalada en 2022.¹³⁵¹

838. El GHREN recibió información sobre 62 incidentes contra la Iglesia Católica en 2018, 88 en 2019, 85 en 2020, 54 en 2021, y 103 hasta finales de septiembre de 2022. Los principales patrones de ataques durante el periodo del mandato del Grupo han sido las amenazas, las agresiones físicas y verbales, las campañas de desprestigios en contra de miembros laicos y religiosos de la Iglesia Católica, así como la vigilancia y las profanaciones de templos.

839. Un informe confidencial de una organización de la sociedad civil entregado al GHREN registró 429 incidentes o agresiones en contra de instituciones religiosas durante el periodo comprendido desde abril de 2018 hasta septiembre de 2022.¹³⁵² De acuerdo con la información recibida, 392 de los incidentes registrados corresponderían a ataques contra la Iglesia Católica, mientras que los 37 incidentes restantes habrían afectado a iglesias evangélicas.¹³⁵³

840. La Iglesia Católica desempeñó un rol fundamental en el primer periodo de la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Debido a su cercanía con diferentes sectores de la sociedad civil, y al fuerte arraigo de la religión católica en la sociedad nicaragüense, el Presidente Daniel Ortega solicitó a la Conferencia Episcopal Nicaragüense que actuase como mediadora del diálogo nacional.¹³⁵⁴ Dicho diálogo inició el 16 de mayo de 2018. Sin embargo, fue suspendido de manera definitiva el 10 de julio como resultado del ataque sufrido por varias personas religiosas el día anterior en Diriamba.¹³⁵⁵

841. El 9 de julio de 2018, tres figuras importantes de la Iglesia Católica -el Cardenal Leonardo Brenes (Presidente de la Conferencia Episcopal Nicaragüense), Monseñor Silvio Báez y el nuncio apostólico Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag - fueron agredidos por integrantes de grupos pro-gobierno cuando realizaban una visita a la ciudad de Diriamba, en el departamento de Carazo. El objetivo de dicha visita era constatar las denuncias de la sociedad civil sobre actos de violencia cometidos por la Policía Nacional desde el día anterior, que habían causado la muerte de varias personas. Durante la misma, los clérigos

¹³⁵⁰ Entrevista al GHREN AAIV012.

¹³⁵¹ Documento en el archivo del GHREN CCDOC280.

¹³⁵² El GHREN verificó la metodología utilizada para la elaboración del informe. La organización solicitó mantener la confidencialidad por motivos de seguridad.

¹³⁵³ Informe confidencial entregado al GHREN, CCDOC280.

¹³⁵⁴ France 24, “Nicaragua: presidente Daniel Ortega condena la violencia y aboga por el diálogo”, 1 de mayo de 2018, disponible en: <https://www.france24.com/es/20180501-nicaragua-dialogo-daniel-ortega-iglesia>.

¹³⁵⁵ El Diálogo Nacional se inauguró el 16 de mayo de 2018 pero una semana después, el 23 de mayo, fue suspendido por los mediadores debido a la evidente imposibilidad de alcanzar un acuerdo. A mediados del mes de junio se reanudó brevemente la mesa de diálogo, pero fue nuevamente suspendida por la Conferencia Episcopal el 10 de julio, tras actos violentos cometidos en contra de miembros de la congregación. Ver, sobre la suspensión del 23 de mayo: Vatican News, “Obispos de Nicaragua suspenden el diálogo nacional por falta de consenso”, 24 de mayo de 2018, disponible en: <https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2018-05/obispos-nicaragua-suspenden-dialogo-nacional-por-falta-consenso.html>.

fueron encerrados en la Basílica de San Sebastián por grupos armados pro-gobierno.¹³⁵⁶ Dos prelados de la Iglesia resultaron heridos, así como varios periodistas que acompañaban la visita.¹³⁵⁷

842. El GHREN investigó también el ataque a la Iglesia de la Divina Misericordia en Managua el 13 de julio de 2018, que causó dos muertos, así como destrozos por impactos de bala, tanto fuera como dentro de la iglesia. A pesar de que el objetivo de este ataque fueron los y las estudiantes que se refugiaron en el lugar, no relacionados o relacionadas directamente con la Iglesia, las imágenes revisadas por el GHREN¹³⁵⁸ muestran los importantes daños causados por la violencia del Estado en un espacio de culto perteneciente a la fe católica, incluyendo numerosos agujeros de bala en las paredes internas y externas de la iglesia, vidrios rotos, y destrucción por impacto de balas de estatuas, obras de arte e imágenes religiosas que se encontraban dentro del templo.

843. El año 2022 estuvo caracterizado por un fuerte incremento de los ataques contra las libertades religiosas, especialmente de los miembros de la Iglesia Católica. Es importante resaltar que no todos los miembros de la Iglesia Católica fueron perseguidos, sino que solamente aquellos que se han pronunciado a favor del respeto de los derechos humanos, y han tomado posturas abiertamente críticas del actuar del Gobierno del Presidente Daniel Ortega, han sufrido represalias.

844. En marzo de 2022, el Gobierno de Nicaragua retiró el beneplácito al Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, Nuncio Apostólico en Managua desde 2018, imponiéndole que abandonara inmediatamente el país.¹³⁵⁹ El Nuncio había tratado de mediar con las autoridades sobre distintos temas de derechos humanos, incluyendo para proteger los derechos de las personas presas por motivos políticos y para asegurar el respeto a la libertad de religión y culto.¹³⁶⁰

845. El GHREN investigó la expulsión de un grupo de religiosas de la orden Madre Teresa de Calcuta, el 5 de julio de 2022. Ese día, las 18 religiosas, quienes llevaban a cabo obras de caridad con personas en situación de pobreza en las ciudades de Granada y de Managua, fueron escoltadas hasta la frontera sur por dos patrullas de migración, cuatro vehículos civiles, dos microbuses grandes, uno pequeño, y un jeep blanco que, según testigos, era de “paramilitares”.¹³⁶¹ Subsecuentemente, las autoridades habrían ocupado las instalaciones de la orden Madre Teresa de Calcuta en la ciudad de Granada y en Managua, que eran utilizadas para atender ancianos y albergar a niñas víctimas de violencia sexual.¹³⁶² De acuerdo con una persona con conocimiento directo del incidente, debido a la velocidad con la que se produjo la expulsión, las hermanas debieron acomodar a las personas ancianas rápidamente con otras órdenes y organizaciones caritativas, mientras que el Estado se hizo cargo de las niñas atendidas en la casa hogar.¹³⁶³

846. A partir de agosto de 2022 se produjo el cierre por TELCOR de 12 medios de comunicación relacionados con la Iglesia, así como el allanamiento y ocupación con uso excesivo de la fuerza por la Policía Nacional de la Iglesia del Divino Niño en Sébaco. El

¹³⁵⁶ Confidencial, “Orteguistas asedian, hieren y roban a obispos y periodistas”, 9 de julio de 2018, disponible en: <https://www.confidencial.digital/nacion/orteguistas-asedian-hieren-y-roban-a-obispos-y-periodistas/>.

¹³⁵⁷ CNN en español, “Nicaragua: agreden a monseñor Silvio José Báez, a otros religiosos y a periodistas en catedral de Diriamba”, 9 de julio de 2018, disponible en: <https://edition.cnn.com/videos/spanish/2018/07/09/monsenor-silvio-jose-baez-herido-diriamba-nicaragua-protestas-daniel-ortega-dialogo-vo-panorama.cnn>.

¹³⁵⁸ Fotografías en el archivo del GHREN CCDOC186 - CCDOC239; ver también Nicaragua Investiga, “Crónica de un día BAJO FUEGO - Iglesia Divina Misericordia”, 14 de julio de 2019, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=pozHTd9_Oc8.

¹³⁵⁹ En su comunicado, la Santa Sede tildó esta decisión unilateral del Gobierno de Nicaragua como grave e injustificada. Santa Sede, Comunicato della Santa Sede, 12 de marzo de 2022, disponible en: <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/12/0170/00365.html>.

¹³⁶⁰ Entrevista del GHREN CCIV039.

¹³⁶¹ El GHREN verificó y analizó evidencia fotográfica que muestra los distintos vehículos utilizados.

¹³⁶² Entrevistas del GHREN CCIV008, CCIV027, CCIV045; fotografías en el archivo del GHREN CCDOC075, CCDOC076, CCDOC077, CCDOC078, CCDOC079.

¹³⁶³ Entrevista del GHREN CCIV045.

GHREN documentó el asedio de la Iglesia de Matagalpa el 4 de agosto de 2022. Doce miembros y trabajadores de la Iglesia, incluyendo el Monseñor Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa, siete sacerdotes, dos seminaristas, un decano y un camarógrafo, fueron encerrados en las instalaciones de la Iglesia desde el 4 al 19 de agosto. En esa fecha, ocho de estas personas fueron aprehendidos; siete de ellos fueron trasladados a las instalaciones del DAJ, mientras que el Obispo Álvarez fue recluso bajo arresto domiciliario.¹³⁶⁴ Monseñor Álvarez fue acusado en diciembre de 2022 del delito de menoscabo a la seguridad nacional. Los demás detenidos fueron acusados en octubre de “organizar grupos violentos” y alentarlos a “realizar actos de odio contra la población” conforme al delito de menoscabo a la integridad nacional en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua (arts. 410 y 412 del Código Penal). En enero de 2023, fueron condenados a diez años de prisión por los delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.¹³⁶⁵

847. El pasado 10 de febrero de 2023, un día después de negarse a ser deportado a los Estados Unidos junto con las 222 personas presas políticas expulsadas, Monseñor Rolando Álvarez fue condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel. Monseñor Álvarez fue hallado culpable de una serie de delitos, incluyendo traición a la patria, menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.¹³⁶⁶ El juicio, inicialmente anunciado para finales de marzo de 2023, fue adelantado de inmediato después de la negativa de Monseñor Álvarez a ser deportado, y celebró en ausencia del imputado y de su abogado defensor.¹³⁶⁷ En su discurso el 9 de febrero de 2023, el Presidente Daniel Ortega afirmó que el Monseñor Álvarez fue trasladado a la cárcel La Modelo tras no acatar la decisión del Estado nicaragüense.¹³⁶⁸ Teniendo en cuenta los patrones de violaciones de derechos humanos documentados en el presente informe en la cárcel La Modelo y en otros lugares de detención, el Grupo alberga graves preocupaciones frente al riesgo de que Monseñor Álvarez sea sometido a tortura y tratos inhumanos, crueles o degradantes.

ii) Restricción del derecho a manifestar las propias creencias

848. El GHREN recibió información sobre vigilancias a líderes religiosos por miembros de la Policía Nacional y de otras instancias del Gobierno, inclusive en los templos y durante la celebración de misas.¹³⁶⁹ El GHREN también registró cuatro ataques durante celebraciones religiosas, incluyendo dos ataques durante la celebración de misas de aniversario de personas fallecidas durante las protestas.

849. Según un informe de la organización Christian Solidarity Worldwide (CSW), las violaciones de la libertad religiosa denunciadas con mayor frecuencia en 2022 fueron las amenazas y hostigamiento por parte de funcionarios del gobierno, simpatizantes del FSLN e integrantes de grupos armados pro-gobierno, que en muchos casos actuaron de manera conjunta.¹³⁷⁰

850. Una testigo entrevistada por el GHREN afirmó que varios miembros de su Iglesia le comentaron que “ya no voy a misa porque viene gente pro-gobierno que toman fotos y graban videos para ver quien está yendo”.¹³⁷¹ Otro testigo afirmó que “*lo que ocurre en los templos es que los sacerdotes están siendo intimidados, visitados por la policía, llega personal del*

¹³⁶⁴ Entrevista del GHREN CCIV057; CSW, “Nicaragua, sociedad civil bajo asedio”; lista de detenciones sobre libertad de culto en el archivo del GHREN CCDOC282.

¹³⁶⁵ France 24, “Nicaragua condena a cuatro sacerdotes por “conspirar” contra el Estado”, 27 de enero de 2023, disponible en <https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20230127-nicaragua-culpables-sacerdotes-conspirar-estado>.

¹³⁶⁶ El País, “Condenado a más de 26 años de cárcel el obispo Rolando Álvarez, símbolo de la resistencia frente a Ortega”, 10 de febrero de 2023, disponible en <https://elpais.com/internacional/2023-02-10/el-regimen-de-ortega-condena-a-mas-de-26-anos-de-carcel-al-obispo-rolando-alvarez.html>.

¹³⁶⁷ Entrevista del GHREN CCIV070.

¹³⁶⁸ El Digital 19, “Álvarez, se negó a acatar la decisión del Estado nicaragüense”, 9 de febrero de 2023, disponible en <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:136810-alvarez-se-nego-a-acatar-la-decision-del-estado-nicaraguense>

¹³⁶⁹ Entrevistas del GHREN CCIV003, CCIV039, CCIV045; CSW, “Nicaragua, la sociedad civil bajo asedio”, p. 3.

¹³⁷⁰ CSW, “Nicaragua, sociedad civil bajo asedio”, 2022.

¹³⁷¹ Entrevista del GHREN CCIV039.

*estado a las misas para saber si se está diciendo algo en contra el Estado. Al principio lo hacían más disimuladamente, ahora llegan hasta con los uniformes de las instituciones del Estado [...] Los sacerdotes se cuidan mucho de lo que dicen en una homilía. Ahora no se puede hacer ni un comentario porque ellos todo entienden que va en contra de ellos”.*¹³⁷²

851. Refiriéndose a un prelado de la Iglesia Católica una persona entrevistada por el Grupo comentó que “es un hombre vigilado; en frente de la iglesia hay siempre policía; hace cinco meses fue a [una visita], le pidieron cedula, lo bajaron del carro. Es represión solapada, que no quiere ser muy visible pero que existe”.¹³⁷³

852. El GHREN también recibió información sobre la prohibición de diversas manifestaciones de culto, incluyendo las procesiones. Un testigo afirmó que “*se nos ha prohibido el derecho de expresarnos como religiosos, y el derecho de las procesiones. La policía no está dando autorizaciones, no te permiten ir a los barrios con una imagen. Han retomado estas tradiciones y se las han llevado para ellos, sacan imágenes paralelas. Esto lo hace la policía*”.¹³⁷⁴ La organización CSW documentó al menos cinco eventos donde la Policía Nacional impidió las procesiones religiosas en varias partes del país.¹³⁷⁵

e) *Derecho a la educación y libertad académica*

i) Represalias contra estudiantes, profesoras y profesores, y entidades universitarias

853. El Gobierno del Presidente Daniel Ortega y de la Vicepresidenta Rosario Murillo ha restringido también el derecho a la educación y la libertad académica. Los y las estudiantes, profesores y profesoras y los centros educativos y otros espacios estudiantiles fueron blanco de ataques continuos a partir de las protestas del 2018, en las que las y los estudiantes tuvieron un rol fundamental. La partidización y el control de las universidades y gremios educativos por parte del Gobierno y de grupos afines a éste incrementó la persecución de estudiantes y profesores considerados opositores al Gobierno, quienes fueron calificados como “enemigos internos” y se les generó una “muerte académica”.

854. Como resultado, cientos de personas jóvenes han tenido que exiliarse y refugiarse en otros países; muchas tuvieron que dejar sus estudios o fueron expulsadas de las universidades por ejercer su derecho de asociación y reunión pacífica. A todas ellas se les ha negado el derecho a una educación libre e independiente y a ejercer una ciudadanía activa como base de la democracia. Según información recopilada por el GHREN, en 2018 al menos 80 estudiantes fueron arbitrariamente expulsados de sus universidades, número que llegó a al menos 250 expulsiones arbitrarias en los años sucesivos.¹³⁷⁶

855. En la sección III.A del presente informe, el GHREN presenta sus hallazgos sobre los abusos y violaciones de los derechos a la vida y a la integridad física cometidos en el contexto de las protestas entre abril y septiembre de 2018. Tal y como se describe en dicho apartado, las personas jóvenes, muchas de ellas estudiantes, fueron la mayoría de las víctimas asesinadas y heridas durante las protestas, detenidas arbitrariamente y sujetas a procesos judiciales que no respetaron el debido proceso, y en algunos casos fueron víctimas de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

856. Durante las protestas de 2018, las universidades fueron refugio de cientos de manifestantes, para protegerse de la acción represiva del Estado. Universidades como la UCA, la UNA la UPOLI, la UNI, la UNA–Managua, entre otras, fueron escenarios de manifestación colectiva, centros improvisados de salud para atender personas heridas, y hogar de jóvenes que no pudieron regresar a sus casas por la persecución en sus hogares y a sus familias.¹³⁷⁷ La acción desproporcionada de las fuerzas de la Policía Nacional y grupos

¹³⁷² Entrevista del GHREN CCIV045.

¹³⁷³ Entrevista del GHREN CCIV039.

¹³⁷⁴ Entrevista del GHREN CCIV045.

¹³⁷⁵ CSW, “Nicaragua, la sociedad civil bajo asedio”, 2022, p. 5, en el archivo del GHREN CCDOC281.

¹³⁷⁶ Entrevistas del GHREN CCIV058, CCIV060, CCIV066.

¹³⁷⁷ Aula Abierta, “Resumen ejecutivo: ilegalización de las universidades en Nicaragua como una violación a la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho a una educación de calidad”, febrero de 2022, documento en el archivo del GHREN CCDOC311.

armados pro-gobierno causaron, en algunos casos, graves daños a las instalaciones universitarias.

857. El GHREN ha recibido información sobre la cancelación de años académicos y becas, la prohibición de matricularse y la negativa por parte de autoridades académicas de entrega de certificados académicos que permitiera a las y los estudiantes homologar sus estudios en otras universidades privadas de Nicaragua o en el exterior. Un exrector de una Universidad entrevistado por el GHREN reportó que la orden recibida fue: “no hay registro académico”, [...] “no lo entregaron” respondiendo “¡porque no!, Vaya a quejarse donde quiera”.¹³⁷⁸

858. Según la organización Aula Abierta, en 2019, el Consejo Universitario de la UNA suspendió a más de 40 estudiantes, cuyas becas fueron canceladas y su derecho de matrícula denegado, alegando que las y los universitarios cometieron actos “de indisciplina muy graves”.¹³⁷⁹ Esto fue corroborado por un testigo entrevistado por el GHREN quien afirmó que, a partir de 2018, las y los estudiantes que participaron en protestas fueron investigados disciplinariamente por “faltas muy graves”. En muchos casos, las y los estudiantes no pudieron seguir estudiando pero se les siguió cobrando la colegiatura.¹³⁸⁰

859. El GHREN también tuvo conocimiento sobre patrones de despidos injustificados de profesores que apoyaron a los estudiantes durante las manifestaciones de 2018 o que se expresaron en contra de las medidas adoptadas por el Gobierno de Daniel Ortega.

860. En un informe preparado por la organización Aula Abierta y analizado por el GHREN, se afirma que, a julio de 2018, 13 profesores de la UNAN–Managua fueron despedidos; para agosto de 2018, ya eran 25 los profesores despedidos.¹³⁸¹

861. Según uno de los testigos entrevistados por el GHREN, personal académico de las universidades que participó en las protestas también fue investigado y judicializado ante juzgados laborales. Esto incluyó a profesores de la facultad de medicina que estaban defendiendo el derecho de sus alumnas y alumnos a manifestarse, y que habían atendido a las personas heridas.

862. La situación de las y los estudiantes y de las profesoras y los profesores requiere de investigación en mayor profundidad, especialmente en lo que se refiere a las libertades académicas y la cooptación de los espacios universitarios por grupos vinculados con el partido de Gobierno.

ii) Control de los espacios universitarios

863. Ya el GIEI Nicaragua concluyó que el ámbito universitario se encuentra fuertemente controlado por el oficialismo y que el “cierre de espacios políticos dentro de la Universidad y dentro del movimiento estudiantil, en particular, fue uno de los detonantes de la masividad de las protestas que se iniciaron en abril y de la participación de estudiantes en ellas”.¹³⁸²

864. Según una persona entrevistada por el GHREN, quien tuvo funciones directivas en una institución de educación superior, desde antes de 2018 “comenzaron las discusiones sobre la autonomía universitaria y se promovió una estrategia de desmantelamiento del modelo de independencia de la universidad públicas y ataques en contra de las universidades privadas. [...] El régimen necesita controlar las universidades públicas y privadas”.¹³⁸³

865. De acuerdo con información recabada por el GHREN, actualmente las y los estudiantes son controlados por la UNEN,¹³⁸⁴ organización universitaria pro-gobierno

¹³⁷⁸ Entrevista del GHREN CCIV040.

¹³⁷⁹ Aula Abierta, Informe: Los universitarios como grupo en situación específica de vulnerabilidad en contextos de restricción del espacio cívico. Caso Nicaragua, párr. 82.

¹³⁸⁰ Entrevista del GHREN CCIV040.

¹³⁸¹ Aula Abierta, “Informe: Los universitarios como grupo en situación específica de vulnerabilidad en contextos de restricción del espacio cívico, Caso Nicaragua”, 2022.

¹³⁸² Informe GIEI Nicaragua.

¹³⁸³ Entrevista del GHREN CCIV040.

¹³⁸⁴ Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua; según varios testigos es una organización estudiantil claramente pro-gobierno.

controlada por el FSLN, y los maestros por el sindicato de maestros.¹³⁸⁵ Según varios testigos, en los últimos años, a través de la UNEN y del Consejo Nacional de Universidades (CNU) se ha establecido en las universidades una política de miedo, también a través de vigilancia en las clases, de amenazas, hostigamiento y de proselitismo político a favor del gobierno en los recintos universitarios.¹³⁸⁶

iii) Cancelación de personalidades jurídicas y cierre de universidades

866. El GHREN recibió información que indica que a partir de 2018, se empezaron a registrar recortes presupuestarios a ciertas instituciones de educación superior, en especial a aquellas que fueron sede de las protestas en 2018.

867. Universidades que fueron ocupadas durante las protestas fueron canceladas, como es el caso de la UPOLI en febrero de 2022.¹³⁸⁷ Esta universidad fue utilizada por estudiantes para protegerse de los ataques de las fuerzas de seguridad y grupos armados pro-gobierno durante más de 50 días.¹³⁸⁸

868. A finales de 2022, según la organización Aula Abierta, se habían cancelado las personalidades jurídicas de 14 universidades en Nicaragua, entre ellas: la Universidad Hispanoamericana (UHISPAM), la UPOLI, Universidad Católica Agropecuaria del Trópico (UCATSE), Asociación Universidad de Estudios Humanitarios (UNEH), Asociación Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC) y la Asociación Universidad Paulo Freire (UPF).¹³⁸⁹ Además, otras universidades extranjeras fueron canceladas: Fundación Universidad de Mobile Latinoamérica Campus (FUMLAC), Universidad Internacional de la Florida, Universidad Estatal de Michigan, Corporación Universidad de Mobile, Fundación Universidad Particular en Ciencias del Mercado, Asociación Universidad Thomas More (UTM), Asociación Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales (UCEM), y la Wake Forest University.¹³⁹⁰ El CUN tomó el control de las Universidades canceladas.

¹³⁸⁵ Entrevistas del GHREN CCIV040, CCIV004, CCIV019.

¹³⁸⁶ Entrevistas del GHREN CCIV062, CCIV066, CCIV068, CCIV069; Aula Abierta, “Resumen ejecutivo: ilegalización de las universidades en Nicaragua como una violación a la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho a una educación de calidad”, febrero de 2022, párr. 31, documento en el archivo del GHREN CCDOC311.

¹³⁸⁷ Aula Abierta, “Resumen ejecutivo: ilegalización de las universidades en Nicaragua como una violación a la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho a una educación de calidad”, febrero de 2022, párr. 8, documento en el archivo del GHREN CCDOC311.

¹³⁸⁸ La UPOLI fue cancelada en febrero de 2022. La Gaceta - N° 24 Lunes 07 Febrero de 2022. En diciembre de 2021 se llevó a cabo la primera cancelación de una universidad, la Asociación Universidad Hispanoamericana (UHISPAM), por no reportar los estados financieros correspondientes al año 2020 y no presentar información sobre sus fuentes de financiamiento. Véase iniciativa de Decreto Legislativo para la Cancelación de la Asociación Universidad Hispanoamericana (UHISPAM), disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/SILEG/Iniciativas.nsf/xpIniciativa.xsp>; Swiss Info, “Cancelación de universidad en Nicaragua deja a miles con carrera inconclusa”, de 21 de diciembre de 2021, disponible en: https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-educaci%C3%B3n_cancelaci%C3%B3n-de-universidad-en-nicaragua-deja-a-miles-con-carrera-inconclusa/47209766.

¹³⁸⁹ Aula Abierta, “Resumen ejecutivo: ilegalización de las universidades en Nicaragua como una violación a la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho a una educación de calidad”, febrero de 2022, párra. 8 y 15, documento en el archivo del GHREN (CCDOC311); Documento de información de complemento en el archivo del GHREN, CCDOC310.

¹³⁹⁰ *Ibid.*. Véase La Gaceta, Diario Oficial No. 22 del jueves 3 de febrero de 2022, disponible en: <http://digesto.asamblea.gob.ni/consultas/util/pdf.php?type=rdd&rdd=AgcJfao5IhM%3D> “Las 07 Universidades, antes mencionadas incumplieron sus obligaciones conforme las Leyes que regulan a los Organismos sin Fines de Lucro, en territorio nicaragüense (Ley 147, Ley 977 y su Reglamento), al no reportar por más de 10 años: 1. Estados Financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de Ingresos, Egresos, Balanza de Comprobación, Detalle de Donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final), violentando el artículo 14 inciso b) del Reglamento de la Ley 977. 2. Juntas Directivas del país de origen (artículo 21 de la Ley 147). 1587 3. Donaciones previas provenientes del exterior, ante el Departamento de Asociaciones. 4. Carencia de documentos de identidad de sus Directivos, Representante Legal en Nicaragua y proveedores de fondos, incumpliendo el artículo 38, numeral 2 de la Ley 977”.

869. La cancelación de las universidades ha afectado a un estimado entre 18,000 y 25,000 estudiantes, que quedaron sin acceso a la educación universitaria. Esta situación afectó especialmente a la Costa Caribe y las zonas rurales del país.¹³⁹¹ Los bienes de las universidades han pasado a ser propiedad del Estado. Las cancelaciones se fundamentaron en la aplicación de los arts 13 y 21 de la Ley No. 147 sobre personas jurídicas sin fines de lucro y en el art. 38 de la Ley contra el Lavado de Activos.

iv) Reformas legales regresivas y cooptación de la institucionalidad universitaria

870. En 2022, a través de la Ley No. 89, se modificó la Ley General de Educación y se adicionó la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior,¹³⁹² otorgando mayores atribuciones al Consejo Nacional de Universidades (CNU) y excluyendo del mismo a la Universidad Centro Americana (UCA), institución que había mantenido una postura crítica frente a la política del Presidente Daniel Ortega. Asimismo, fueron incorporadas al CNU la Universidad Nacional Politécnica (UNP) antes UPOLI, la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, que antes se llamaba Universidad Católica del Trópico Seco (UCATSE) y la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, que absorbió a la Universidad Paulo Freire (UPF, ahora estatal).

871. En virtud del art. 58 de la Ley No. 89, se otorgó la facultad al CNU de intervenir las universidades bajo ciertas causales, entre ellas, por incumplimiento de normativas y regulaciones emitidas por el CNU y por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), así como por denuncia relacionada con el abuso de las facultades que le confiere la ley y su instrumento constitutivo. También se le otorgó al CNU, en coordinación con el CNEA, la facultad de “supervisar” e “intervenir” los perfiles y planes de estudio de las carreras o programas académicos de pregrado, grado y postgrado a las instituciones de educación superior.

872. La reforma también estableció que los directores de los institutos y centros académicos y de investigación de las universidades miembros del CNU “serán nombrados por el Consejo Universitario a propuesta del rector”.

873. Un alto funcionario de una universidad afirmó que estas medidas han restringido la libertad académica e investigativa y han promovido la elección de directivas universitarias bajo criterios subjetivos y partidistas.¹³⁹³ La entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó en su momento ante el Consejo de Derechos Humanos su preocupación por la cancelación de la personalidad jurídica de universidades, y por la reforma de la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, que representa una nueva amenaza para la libertad académica y la autonomía universitaria en Nicaragua.¹³⁹⁴

C. Dimensiones de género

874. El GHREN concluyó que las violaciones y abusos a los derechos humanos de las personas opositoras o percibidas como tales tuvieron dimensiones específicas y generaron impactos diferenciados por razón de género. Así, las violaciones adoptaron expresiones y tuvieron componentes específicos en función del género de las víctimas, producto del entorno

¹³⁹¹ Entrevistas del GHREN CCIV059, CCIV064, CCIV062. Véase Confidencial, “Más de 18 000 estudiantes afectados por confiscación de seis universidades”, 9 de febrero de 2022, disponible en: <https://www.confidencial.digital/nacion/mas-de-18-000-estudiantes-afectados-por-confiscacion-de-seis-universidades/>.

¹³⁹² Ley No. 1114, Ley de Reforma a la Ley No. 582, Ley General de Educación y de Reforma y Adición a la Ley No. 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, del 31 de marzo de 2022, publicada en La Gaceta, Diario Oficial el 6 de abril de 2022, disponible, en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/Indice.nsf/e9401134d79412cc06257d02006fe1d8/a659df4fbee4bb080625881c006e5944?OpenDocument>.

¹³⁹³ Entrevista del GHREN CCIV040.

¹³⁹⁴ Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la Situación de los derechos humanos en Nicaragua, 16 de junio de 2022.

general discriminatorio por motivos de género y de orientación sexual. Dichas expresiones incluyeron el uso de diferentes formas de violencia sexual, de insultos o descalificativos sexistas u homófobos, y de amenazas centradas en la maternidad.

875. Además, se constató la victimización específica de algunas mujeres debido a varios motivos intersecantes: por ser mujeres, feministas, críticas del Gobierno, con un importante liderazgo político, y por ser consideradas “traidoras” del sandinismo –por haberse escindido del sandinismo de Daniel Ortega y haber fundado movimientos alternativos dentro de la corriente sandinista-. Algunas mujeres, y en especial las mujeres familiares de víctimas, también fueron objeto de violaciones debido a las actividades desempeñaron de reclamo de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluyendo víctimas mortales y personas presas por motivos políticos.

876. Por otro lado, los movimientos y organizaciones de mujeres fueron también objeto de difamación y del cierre masivo de organizaciones. Dichas acciones han generado retrocesos significativos en el acceso de las mujeres a sus derechos, incluyendo a causa del debilitamiento de los movimientos de defensa de los derechos de las mujeres y el cierre de organizaciones que brindaban apoyo vital a mujeres y niñas víctimas de violencia, asistencia en materia de acceso a la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva, y actividades de empoderamiento político y socioeconómico de las mujeres.

877. Varios aspectos relativos al género que han marcado los desarrollos políticos y sociales recientes en Nicaragua, y contribuyen a la contextualización y al entendimiento de los hechos represivos documentados en el informe. Asimismo, la perspectiva de género permite entender los factores diferenciados explicativos de las violaciones de derechos humanos –sus causas, motivaciones y mecanismos de facilitación y orientación-, así como las consecuencias e impactos de las mismas –el daño- sobre mujeres, hombres y personas de diferentes géneros, orientación sexual, expresión de género y características sexuales.

878. Esta sección complementa y profundiza los aspectos específicos de género de las violaciones de derechos humanos examinados en las secciones anteriores. Analiza también el impacto diferenciado de estas violaciones sobre mujeres, hombres y personas LGBTI.

1. Elementos de contexto

879. En términos formales, Nicaragua se considera generalmente como un país avanzado en materia de igualdad de género, particularmente a nivel legislativo y de participación política de las mujeres.¹³⁹⁵

880. El artículo 27 de la Constitución Política de Nicaragua establece que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección” y el Código Penal prohíbe todas las formas de discriminación, incluyendo por motivos de sexo o de orientación sexual.¹³⁹⁶ En los últimos 15 años, fueron adoptados o reformados varios instrumentos jurídicos para dotar de efectividad a la normativa constitucional. Entre ellos, cabe resaltar la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, también conocida como “Ley 50/50”, adoptada en 2008;¹³⁹⁷ la reforma del Código Penal de 2008, que eliminó el delito de

¹³⁹⁵ En el informe anual para 2022 presentado por el Foro Económico Mundial, Nicaragua figura en la séptima posición del índice mundial sobre paridad entre hombres y mujeres. Véase World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2022, Insight Report, julio de 2022, disponible en: https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2022.pdf. Informes del Banco Mundial califican a Nicaragua con un puntaje de 86.3 sobre 100 en el índice de Mujeres, Negocios y Derecho de 2021 (<https://wbi.worldbank.org/content/dam/documents/wbi/2021/snapshots/Nicaragua.pdf>) y de 4 en una escala de 6 para la igualdad de género (<https://data.worldbank.org/indicator/IQ.CPA.GNDR.XQ?locations=NI>). La Asamblea Nacional elegida en noviembre de 2021 cuenta con una representación femenina de 50.6 por ciento. Asamblea Nacional, La mujer nicaragüense destaca en todos los espacios de la Asamblea Nacional, 15 de marzo de 2022, disponible en: <https://noticias.asamblea.gob.ni/la-mujer-nicaraguense-destaca-en-todos-los-espacios-de-la-asamblea-nacional>.

¹³⁹⁶ Véase, por ejemplo, los art. 36 y 140 bis del Código Penal.

¹³⁹⁷ Ley No. 648, Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 51 del 12 de marzo del 2008. Entre otras medidas, establece la promoción de “un porcentaje

“sodomía”;¹³⁹⁸ y la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres (Ley No. 779), adoptada en 2012.¹³⁹⁹ En 2009, se creó el Despacho de la Procuraduría Especial de Derechos Humanos para la Diversidad Sexual como parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y, en 2013, el Ministerio de la Mujer.¹⁴⁰⁰ Cabe destacar, asimismo, que el Gobierno de Nicaragua ha implementado varias iniciativas a favor de los derechos de las mujeres y de la unidad familiar¹⁴⁰¹ y que muchas instituciones del Estado están actualmente dirigidas y/o integradas por mujeres.¹⁴⁰²

881. A pesar de estos avances jurídicos y de política pública, las reformas orientadas a asegurar la igualdad formal de género no han resultado en una igualdad de género en términos materiales. Según el análisis del CEDAW, confirmado por entrevistas a expertos y expertas realizadas por el GHREN,¹⁴⁰³ persisten de manera generalizada en la sociedad nicaragüense “actitudes patriarcales y [...] estereotipos profundamente arraigados respecto al papel, la responsabilidad y la identidad de la mujer y el hombre dentro de la familia y en todas las esferas de la sociedad en general”.¹⁴⁰⁴

882. Asimismo, los impactos de las iniciativas anunciadas por el Gobierno han sido limitados. Por ejemplo, las Comisarías de la Mujer y la Niñez fueron desactivadas en 2016, para ser únicamente reabiertas a lo largo del 2022.¹⁴⁰⁵ Según la información recibida por el

proporcional entre mujeres y hombres para los cargos de elección nacional, regional, municipal y del Parlamento Centroamericano, así como en la integración de instancias de toma de decisiones de la administración pública y de los Gobiernos Regionales y Municipales” (art. 9).

¹³⁹⁸ CIDH, Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, OAS/Ser.L/V/II.rev.2 Doc. 36, 12 de noviembre de 2015, párr. 61.

¹³⁹⁹ Asamblea Nacional, Ley No. 779, Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No. 641, Código Penal, aprobada el 26 de enero de 2012 y publicada la Gaceta, Diario Oficial No. 35 del 22 de febrero de 2012 (Ley No. 779).

¹⁴⁰⁰ Asamblea Nacional, Ley No. 832, Ley de reforma y adición a la ley No. 290, “Ley de organización, competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo”, aprobada el 12 de febrero de 2013, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 28 del 13 de febrero de 2013.

¹⁴⁰¹ Por ejemplo, el Gobierno de Nicaragua ha reabierto las Comisarías de la Mujer y publicado una cartilla sobre derechos de las mujeres llamada “Cartilla “Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismos de denuncia para prevención del Femicidio”, que está divulgando en todo el país y está disponible en: <https://www.minim.gob.ni/storage/documents/WHkzsDUji5U9wHk730FOOMQxvza7cxJsyElOqsxZ.pdf>.

¹⁴⁰² Según cifras del Banco Mundial, en 2014, las mujeres representaban el 53,7 por ciento de las personas empleadas en puestos de mediano o alto nivel en Nicaragua. Véase <https://genderdata.worldbank.org/countries/nicaragua/>. En 2022, el 58.8 por ciento de los puestos ministeriales eran ocupados por mujeres. Véase <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099217307022219663/pdf/IDU049aedaf00d6da041fa08959084a3b4b5d6a5.pdf>.

¹⁴⁰³ Entrevistas del GHREN AAIV005, AAIV024, AAIV017.

¹⁴⁰⁴ CEDAW, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Nicaragua, CEDAW/C/NIC/CO/6 (2 de febrero de 2007), párr. 11. Véase también el informe reciente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que subraya su preocupación frente a “la información recibida según la cual los estereotipos de género continúan arraigados en la sociedad, lo cual dificulta el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de las mujeres”. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Nicaragua, E/C.12/NIC/CO/5 (11 de noviembre de 2021), párr. 19.

¹⁴⁰⁵ En 2016, las funciones de las Comisarías de la Mujer fueron trasladadas a la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, y el Gobierno canceló el contrato de las trabajadoras sociales y las psicólogas que atendían en las mismas. Mary Ellsberg, 20 años después de la revolución que provocó “Confites en el infierno”, Envío Digital, número 470, mayo de 2021, disponible en: <https://www.envio.org.ni/articulo/5904>. La Vicepresidenta Rosario Murillo culpó a las organizaciones de mujeres del cierre de las Comisarías, y de promover el aborto desde esas instituciones: “[p]orque andaban por ahí las disfrazadas promoviendo el aborto, desde las Comisarías de la Mujer, y esto es absoluta verdad, es una denuncia que hasta ahora estamos haciendo porque se atreven a hablar de las mujeres, quienes quieren acabar con la vida de las niñas o niños antes de nacer, y usaban las Comisarías de la Mujer para promover esas malas prácticas”. El 19 Digital, Comisarías de la Mujer en Nicaragua sirven para defender la vida, 16 de septiembre de 2020, disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:107399-comisarias-de-la-mujer-en-nicaragua-sirven->

GHREN, estas Comisarías no cuentan con personal adscrito de la Policía Nacional especializado en la atención de mujeres y niñas víctimas de la violencia.¹⁴⁰⁶ Además, se eliminó la coordinación que existía entre las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones de mujeres.¹⁴⁰⁷

883. Añadido a lo anterior, una serie de reformas legales y de políticas públicas adoptadas recientemente han supuesto una regresión en el desarrollo de los derechos de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual. En 2006, el partido político FSLN apoyó la abrogación del aborto llamado “terapéutico”, prohibiendo así toda forma voluntaria de interrupción del embarazo.¹⁴⁰⁸ En los últimos años, la Asamblea Nacional adoptó una serie de reformas legislativas, institucionales y de políticas públicas de fomento de las formas tradicionales de la familia,¹⁴⁰⁹ susceptibles de generar situaciones de mayor desprotección para las mujeres. Por ejemplo, un año después de su adopción, la Ley No. 779 fue modificada,¹⁴¹⁰ introduciendo la mediación para delitos relacionados violencia contra las mujeres con penas inferiores a cinco años de prisión¹⁴¹¹ y restringiendo el delito de femicidio únicamente a las relaciones de pareja.¹⁴¹² Estas medidas fueron fuertemente criticadas por el movimiento de mujeres y feminista.¹⁴¹³ Por otra parte, la reforma al Código de Familia no

[para-defender-la-vida](https://www.policia.gob.ni/?p=96594). Según la Policía Nacional, al 14 de diciembre de 2022, habían sido inauguradas 175 Comisarías de la Mujer en todo el país: <https://www.policia.gob.ni/?p=96594>.

¹⁴⁰⁶ Entrevistas del GHREN AAIV005, AAIV004, AAIV033.

¹⁴⁰⁷ Entrevistas del GHREN AAIV012, AAIV040.

¹⁴⁰⁸ Los órganos internacionales de derechos humanos han calificado las leyes que penalizan el aborto como discriminatorias y como un obstáculo para que las mujeres tengan acceso a atención médica. Han recomendado que los Estados eliminen todas las disposiciones punitivas hacia las mujeres que se han sometido a abortos. Estos organismos también han solicitado que los Estados permitan el aborto en ciertos casos. Véase ACNUDH, Serie de información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos: Aborto,

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Abortion_WEB_SP.pdf; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales sobre Perú, CEDAW/C/PER/CO/7-8 (2014), párr. 36; Declaración sobre salud y derechos sexuales y reproductivos: Revisión del CIPD Más allá del 2014 (2014). Véase también Karen Kampwirth, *Abortion, Antifeminism, and the Return of Daniel Ortega: In Nicaragua, Leftist Politics?*, in *Latin American Perspectives*, Issue 163, Vol. 35, No. 6, November 2008, 122–136, p. 123.

¹⁴⁰⁹ Entrevistas del GHREN AAIV005, AAIV004, AAIV033, AAIV017. Por ejemplo, el Decreto No. 42-2014 afirma que “las políticas sociales buscan el fortalecimiento de la Familia mediante estrategias y acciones que promueven el rescate y el fortalecimiento de valores a fin de lograr en los hogares relaciones armoniosas de colaboración, complementariedad y equidad entre mujeres y hombres”. Decreto Ejecutivo No. 42-2014, Reglamento a la Ley No. 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres de Reformas a la Ley No. 641, Ley del Código Penal, aprobado el 30 de julio de 2014, publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 143 del 31 de julio de 2014 (Decreto No. 42-2014).

¹⁴¹⁰ Ley No. 846, Ley de modificación al artículo 46 y de adición a los artículos 30, 31 y 32 de la Ley No. 779, Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No. 641 “Código Penal”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 185 del 1 de octubre de 2013. La Ley había sido impugnada mediante varios recursos ante la Corte Suprema de Justicia, la cual, en agosto de 2013, la declaró constitucional, pero emitió reparos frente a la prohibición de la mediación. La reforma fue adoptada con sólo cuatro votos en contra. Azahálea Solís, *La Ley 779 tiene una larga historia de lucha y su reforma envía a la sociedad un mensaje muy negativo*, Envío Digital, Número 380, noviembre de 2013, disponible en: <https://www.envio.org.ni/articulo/4770>.

¹⁴¹¹ La eliminación de la mediación había sido una demanda persistente del movimiento de mujeres (Mary Ellsberg, 20 años después de la revolución que provocó “Confites en el infierno”, Envío Digital, número 470, mayo de 2021). El art. 46 de la Ley No. 779 especificaba que ninguna mediación se autorizaba en los delitos señalados en la misma, sin excepción. La Ley No. 846, abrió la puerta a la mediación para nueve delitos cuya pena es menor a cinco años de prisión, considerados como “menos graves”.

¹⁴¹² Esta reforma fue llevada a cabo mediante el Decreto No. 42-2014 y mediante la Ley No. 1058. Esta segunda reforma modifica en pocos términos la nueva definición del femicidio e instituye la pena perpetua para ese delito si se constituyen algunas circunstancias agravantes. Véase también: <https://www.confidencial.digital/nacion/ley-779-lleva-tres-reformas-y-cada-una-la-aleja-mas-de-combatir-violencia-machista/>.

¹⁴¹³ Entrevistas del GHREN AAIV005, AAIV024, AAIV004, AAIV033, AAIV017.

contempló el matrimonio entre personas del mismo sexo como lo habían reclamado grupos LGBTI.¹⁴¹⁴

884. En lo relativo a la población LGBTI, se ha denunciado la inaplicación de la legislación vigente,¹⁴¹⁵ así como la persistencia de restricciones *de jure* o *de facto*.¹⁴¹⁶ Diversas personas entrevistadas por el GHREN coincidieron en señalar que Nicaragua no había llevado a cabo esfuerzos suficientes para el reconocimiento pleno de la población LGBTI, la cual sigue marginada en la sociedad nicaragüense.¹⁴¹⁷

885. Otro elemento fundamental por considerar es la relevancia del movimiento de mujeres (en toda su heterogeneidad) en Nicaragua que ha sido una voz crítica contra el Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo. Históricamente ligado a las luchas sandinistas, adquirió una fuerza política y social autónoma del FSLN, y cuenta con bases territoriales amplias, sólidas y activas, conectadas mediante redes.¹⁴¹⁸

886. Estos aspectos se han visto reflejados tanto en las dinámicas de las protestas sociales como en los patrones de violaciones a los derechos humanos documentadas por el GHREN en este informe.

2. Ejecuciones extrajudiciales

887 Tal y como se documentó en el capítulo III.A, la mayoría de las víctimas letales de las diferentes fases de la represión que tuvo lugar a partir de 2018 fueron hombres. Entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018, el número de mujeres fallecidas en el contexto de las protestas fue de 15 o 16, según las fuentes consultadas. Dos de ellas eran integrantes de la Policía Nacional.¹⁴¹⁹ Existe poca información respecto a las circunstancias de esas muertes.¹⁴²⁰

888. Entre los casos reportados de mujeres fallecidas en el contexto de las protestas, se destaca el de una estudiante brasileña de medicina de la Universidad Americana. Fue disparada en el pecho mientras conducía por un barrio de Managua, de regreso a su casa. Al día siguiente, el 23 de julio de 2023, falleció a causa de las heridas en el Hospital Militar de Managua. Un hombre, identificado como “paramilitar” por los familiares y como guardia de seguridad privada por las autoridades,¹⁴²¹ confesó haber sido el autor de los hechos. El 1 de agosto de 2018, se llevó a cabo una audiencia preliminar, en la que el sospechoso admitió los hechos, a raíz de la cual fue declarado culpable sin necesidad de otras pruebas, siendo condenado a quince años de prisión.¹⁴²² Según una denuncia presentada ante la CIDH, la representación legal de la madre de la víctima no tuvo acceso al expediente completo. En

¹⁴¹⁴ Véase Código de Familia.

¹⁴¹⁵ Documento en el archivo del GHREN, AADOC070.

¹⁴¹⁶ Por ejemplo, las familias homosexuales fueron excluidas del Código de Familia.

¹⁴¹⁷ Entrevistas al GHREN AAI003, AAI039.

¹⁴¹⁸ Entrevistas al GHREN AAI005, AAI024, AAI017.

¹⁴¹⁹ Por otra parte, la Mesa Nacional LGBTIQ+ reportó ocho asesinatos de personas LGBTI durante las protestas (siete gay y una lesbiana) y agregó que los cuerpos de tres de ellas fueron encontrados después de varios días de desaparecidas. Documento en archivo del GHREN, AADOC163. El GHREN no pudo verificar las condiciones de la muerte de estas personas.

¹⁴²⁰ La socióloga nicaragüense Elvira Cuadra explica al respecto que: “[I]os femicidios de estas mujeres han quedado en la invisibilidad y el silencio de tal manera que hay poca información sobre ellos. Hay varias razones que influyen: la cantidad de mujeres asesinadas es inferior a la de hombres asesinados, no ha habido investigación de organismos independientes de derechos humanos, y las familias de las víctimas tienen temor por las represalias que podría sufrir”. Elvira Cuadra Lira, *Quebrar el Cuerpo, Quebrar el Alma*, CETCAM (2022). El GHREN ha recibido información de varias fuentes según la cual, actualmente, casos de muertes y desapariciones, en particular de mujeres, no son reportadas por el temor de los familiares. Entrevistas del GHREN EEIV002, AAI012.

¹⁴²¹ CIDH, Informe No. 254/22 Petición 2432-18, Informe de admisibilidad de Raynéia Gabrielle Da Costa Lima Rocha y su madre María José Costa, OEA/Ser.L/V/II Doc. 258, 3 octubre 2022.

¹⁴²² *Ibid.*

julio de 2019, el condenado se benefició de la Ley de Amnistía, siendo indultado y puesto en libertad.¹⁴²³ La CIDH admitió a trámite el caso el 3 de octubre de 2022.

889. El análisis de género de las violaciones en contra del derecho a la vida e integridad física resulta incompleto debido a la imposibilidad de obtener información precisa sobre el perfil de las personas heridas durante los meses de protesta social.¹⁴²⁴ En este sentido, la información de la que dispone el GHREN sobre el número exacto de heridos o heridas, la identidad de las víctimas, y las circunstancias de esos hechos es limitada.

890. El hecho de que las personas fallecidas durante la represión en el contexto de las protestas han sido hombres, en su vasta mayoría, puede explicarse por distintos motivos. En primer lugar, debe considerarse que el movimiento de protesta social involucró masivamente a toda la población. Al igual que los hombres, las mujeres tuvieron una fuerte participación y, en varias ocasiones, ocuparon roles de liderazgo y organización. No obstante, el papel desempeñado por las mujeres en el contexto de las protestas en muchos casos se vio afectado por los roles y actividades establecidas tradicional, cultural y socialmente, reproduciendo estereotipos de género vinculados al cuidado. Como resultado, algunas mujeres tendieron a involucrarse en actividades menos visibles y que, por ende, conllevan menos exposición a los ataques. En muchos casos, las mujeres tuvieron mayores responsabilidades en los puestos de salud y de acopio de medicamentos y alimentos, ocupándose de la preparación y distribución de alimentos, al tiempo que lideraron el acompañamiento a víctimas y a sus familiares en la búsqueda de protección y justicia.¹⁴²⁵

891. En segundo lugar, los manifestantes varones ocuparon más a menudo la primera línea y se enfrentaron más frecuente y directamente a las fuerzas de seguridad del Estado y a grupos armados pro-gobierno, lo que les colocó en una posición de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, el GHREN recibió información de fuente directa que describió cómo los hombres jóvenes tendían a ir adelante en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Según este testimonio, *“la gente corrió la voz: ‘Por el estadio están disparando, no se acercan’. Pero como nadie puede detener la adrenalina de los muchachos, se fueron por adelante de la marcha”*.¹⁴²⁶

892. Si bien el movimiento de mujeres y feminista no apareció como protagonista durante las protestas, se organizó rápidamente a través de sus redes para apoyar a las personas manifestando. Como reportó el GIEI Nicaragua, *“las mujeres han desarrollado el papel fundamental de soportar la lucha en términos de organización, logística y en la exigencia por justicia”*.¹⁴²⁷ Además, desde el mes de abril de 2018, las mujeres, de todas las edades, asumieron un rol protagónico en la reivindicación del derecho a la justicia para sus hijos, nietos, esposos, hermanos, o familiares muertos. Fueron también en su mayoría mujeres quienes acudieron a las estaciones de policía para obtener información sobre las personas detenidas y las que visitaron a las personas detenidas en los centros de detención.

893. Sus esfuerzos en la búsqueda de los cuerpos de las personas fallecidas, la presentación de las denuncias ante el Ministerio Público por la muerte de sus familiares,¹⁴²⁸ y la realización de actividades destinadas a preservar la memoria de las víctimas, han convertido a estas mujeres en un blanco especial de represión, mediante hostigamientos, vigilancia, amenazas,

¹⁴²³ *Ibid.* Véase también Confidencial Digital, CIDH analizará el fondo del caso impune de la estudiante brasileña Rayneia Lima, 26 de noviembre de 2022, disponible en: <https://www.confidencial.digital/nacion/cidh-analizara-el-fondo-del-caso-impune-de-la-estudiante-brasileña-rayneia-lima/>.

¹⁴²⁴ En su informe del 2021, la CIDH ha reportado más de 2000 personas heridas en Nicaragua desde abril de 2018. CIDH, Informe anual 2021, Capítulo IV.b. Nicaragua, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 64 rev. 1, 26 mayo 2022, párr. 3. El GHREN no ha tenido acceso hasta la fecha a una lista desagregada por sexo y género de las personas heridas, lo que permitiría profundizar ese análisis de género.

¹⁴²⁵ Entrevistas del GHREN AAI031, AAI017, AAI033, AAI045.

¹⁴²⁶ Entrevista del GHREN AAI002.

¹⁴²⁷ *Ibid.*

¹⁴²⁸ Según información brindada al GHREN, CENIDH apoyó a presentar 22 denuncias ante el Ministerio Público por muertes violentas ocurridas durante las protestas. Sin embargo, ninguna de ellas tuvo respuesta o dio lugar a investigaciones. Entrevista del GHREN AAI043.

detenciones ilegales y/o violencia de género. Debido a esto, algunas de ellas se vieron forzadas a exiliarse.¹⁴²⁹

894. Los esfuerzos por conmemorar la memoria de las personas fallecidas han sido constantemente impedidas por la Policía Nacional o personas afines al Gobierno.¹⁴³⁰ Por ejemplo, según información recibida por el GHREN, el 19 de abril de 2021 la Policía amenazó a un grupo de madres de víctimas que participaba en la conmemoración del tercer aniversario de las protestas, y les decomisó varios libros conmemorativos de sus hijos asesinados.¹⁴³¹ Según la información que fue transmitida a la CIDH, al día siguiente, en Estelí, la Policía detuvo violentamente a una integrante de la Asociación de Madres de Abril, junto a su madre y a otras personas. Se preparaban para participar en una misa en memoria de un pariente cercano fallecido en abril de 2018. Por esa razón fueron detenidas y, una vez en la estación de Policía de Estelí, se exigió a las mujeres que se desnudaran y que hicieran sentadillas desnudas frente a oficiales de la Policía, mujeres y hombres, quienes las interrogaron y amenazaron. Fueron liberadas esa misma noche. Este incidente fue precedido de varios actos de hostigamientos y persecución que justificaron que la CIDH otorgará a dichas personas y sus familiares medidas cautelares.¹⁴³²

3. Detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

895. Según la CIDH, desde abril de 2018 al 31 de diciembre de 2022, al menos 2.018 personas fueron privadas arbitrariamente de su libertad.¹⁴³³ Un registro interno de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos ha identificado que más de 300 defensoras de derechos humanos han sido detenidas durante ese periodo de tiempo.¹⁴³⁴ El 9 de febrero de 2023, 33 mujeres previamente detenidas arbitrariamente en estaciones de la Policía y en centros del Sistema Penitenciario Nacional fueron deportadas a Estados Unidos y privadas de su nacionalidad.¹⁴³⁵ La información puesta a disposición del GHREN indica que ocho de ellas se encontraban en la DAJ, tres en la estación del Distrito III de la Policía Nacional de Managua, siete en la SPN La Esperanza, dos permanecían detenidas en régimen de casa por cárcel, y las demás se encontraban en centros penitenciarios fuera de la capital.¹⁴³⁶

896. El GHREN recibió información referente a discriminaciones motivadas por el sexo de las detenidas, así como por su identidad de género u orientación sexual en el Sistema Penitenciario y en la DAJ. En particular, cuatro mujeres transexuales fueron recluidas en centros de detención para hombres.¹⁴³⁷ Una mujer, opositora política e integrante de

¹⁴²⁹ Entrevista del GHREN AAIV044. Véase también CIDH, Resolución 4/2020, Medida cautelar No. 1191-19, Elizabeth Velásquez y su núcleo familiar respecto de Nicaragua, 15 de enero de 2020; Resolución 60/2021, Medida cautelar No. 1191-19, Francis Valdivia y su núcleo familiar respecto de Nicaragua (Ampliación), 7 de agosto de 2021.

¹⁴³⁰ Entrevista del GHREN AAIV044.

¹⁴³¹ Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Nicaragua: Policías rodean a madres de víctimas de abril de 2018, las hostigan y les decomisan libros conmemorativos de sus hijos asesinados, 20 de abril de 2021, disponible en: <https://im-defensoras.org/2021/04/alerta-defensoras-nicaragua-policias-rodean-a-madres-de-victimas-de-abril-de-2018-las-hostigan-y-les-decomisan-libros-conmemorativos-de-sus-hijos-asesinados/>.

¹⁴³² CIDH, Resolución 60/2021, Medida cautelar No. 1191-19, 7 de agosto de 2021. En el 2029, la CIDH otorgó también medidas cautelares a otras integrantes de la Asociación Madres de Abril.

¹⁴³³ Datos proporcionados por la CIDH al GHREN.

¹⁴³⁴ Documento en el archivo del GHREN, AADOC169.

¹⁴³⁵ Entrevista del GHREN AAIV053; documento en archivo del GHREN AADOC166. De esas 33 mujeres, 29 habían sido reconocidas como presas políticas por el Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, Lista mensual de personas presas políticas, diciembre 2022 - enero 2023, disponible en: <https://presasypresopoliticospolicaragua.org/lista-mensual-de-personas-presas-politicos/>. A la fecha de redacción del presente informe, el Mecanismo reconoce a una mujer todavía detenida por motivos políticos en Nicaragua.

¹⁴³⁶ La información correspondiente a ocho mujeres detenidas no es divulgada en ese listado del Mecanismo citado.

¹⁴³⁷ Documento en archivo del GHREN AADOC071. Esas mujeres fueron luego liberadas.

UNAMOS, fue detenida durante toda su reclusión en el pabellón de la DAJ destinado a los hombres, probablemente debido a su orientación sexual.¹⁴³⁸

897. El GHREN pudo identificar que, en los primeros momentos de la aprehensión, durante los interrogatorios y/o durante la detención misma, se utilizaron diferentes formas de violencia sexual (violaciones, torturas sexuales, tocamientos sexuales, desnudez forzada) en contra de mujeres, hombres y personas transexuales, particularmente durante las primeras fases de la represión.¹⁴³⁹ La frecuencia y los métodos empleados muestran un patrón de comportamiento intencional y organizado.

898. Las diferentes formas de violencia sexual utilizadas constituyen una forma de violencia extrema, cuya dimensión expresiva es reforzada por la cultura machista y patriarcal imperante en Nicaragua. La elección de la violencia sexual como método de tortura o de trato cruel, inhumano o degradante no es casual, sino que tiene una dimensión expresiva o instrumental de género. En este sentido, el uso de la violencia sexual es una manifestación de “problemas sistémicos más complejos”¹⁴⁴⁰ de desigualdad de género. Ello muestra una voluntad de ejercer control, poder y dominio sobre el cuerpo y la vida de las víctimas, de desestructurarlas y reducir las a una posición desvalorada y de sumisión.

899. Además de la tortura, se han reportado humillaciones, como el uso de insultos o amenazas basadas en el género durante los arrestos, los interrogatorios y las detenciones. Por ejemplo, las mujeres privadas de libertad fueron objeto de insultos y etiquetadas de “putas”, “malas madres”, “mujeres vagas”, “perras malditas”.¹⁴⁴¹ Este tipo de conductas representa una clara expresión de visiones patriarcales y estereotipadas del rol de las mujeres en la sociedad, y en particular la creencia de que las mujeres no tienen que participar en las manifestaciones o en eventos políticos, sino quedarse en sus casas “a cuidar a sus hijos y a sus familias”.¹⁴⁴²

900. A su vez, durante los interrogatorios, varias mujeres detenidas reportaron el uso de las familias, en particular sus hijos e hijas, como mecanismos de presión y amenaza conectada al sentimiento de maternidad, que en algunos casos y en combinación con otras prácticas y factores alcanzaron el umbral de la tortura psicológica. En este sentido, “Te vamos a quitar a tu hija”; “la vamos a violar” fueron expresiones empleadas durante interrogatorios, según la información recibida por el GHREN.¹⁴⁴³

901. Las personas detenidas también fueron denigradas a causa de su orientación sexual. En el marco de las detenciones, la Policía usó frecuentemente la expresión “cochón” o “cochona” y otras expresiones denigrantes para referirse a personas LGTBI.¹⁴⁴⁴ El GHREN pudo documentar asimismo una saña particular hacia las personas LGBTI mediante distintas formas de violencia sexual y de género.¹⁴⁴⁵

902. Las personas detenidas en el marco de la crisis de derechos humanos fueron sometidas a condiciones discriminatorias. Al igual que los hombres, las mujeres fueron segregadas y, algunas de ellas, fueron sometidas a regímenes severos de detención. En contra de lo dispuesto por las Reglas de Bangkok, que exigen a los Estados tomar en consideración las

¹⁴³⁸ Entrevistas del GHREN AAI026, AAI032, AAI034, AAI048, AAI052.

¹⁴³⁹ Entrevistas del GHREN EEIV004, EEIV006, EEIV015, EEIV024, EEIV035, EEIV045, EEIV047, AAI028, AAI008, AAI010, AAI019, AAI039.

¹⁴⁴⁰ Véase ONU, Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk – Adición: Misión a México, E/CN.4/2006/61/Add.4 (13 de enero de 2006), párr. 7.

¹⁴⁴¹ Documento en el archivo del GHREN AADOC084; entrevistas del GHREN AAI002, AAI010.

¹⁴⁴² Entrevistas del GHREN EEIV010, AAI020, AAI041; documento en el archivo del GHREN AADOC084.

¹⁴⁴³ Documento en archivo del GHREN AADOC084; entrevistas del GHREN, AAI047, AAI048, AAI050.

¹⁴⁴⁴ Dependiendo del contexto, la palabra “cochón” o “cochona” puede tener una connotación injuriosa o despectiva hacia las personas homosexuales o percibidas como tales o, al contrario, se usa de manera afectuosa entre personas de la comunidad LGBTI. Karen Kampwirth, *LGBTQ Politics in Nicaragua: Revolution, Dictatorship, and Social Movements*, Tucson, The University of Arizona Press (2022), p. 6; entrevistas del GHREN AAI008, AAI039.

¹⁴⁴⁵ Entrevistas del GHREN AAI008, AAI039.

necesidades específicas de las mujeres y de las personas LGBTI detenidas –en particular las mujeres transexuales–, así como los retos e impactos específicos que puede implicar su detención, no se prestó ninguna atención a las necesidades específicas de mujeres con hijos/as de corta edad, mujeres embarazadas y mujeres solteras. Por el contrario, la separación de las mujeres detenidas de sus hijos e hijas fue usada como método de castigo. Las demandas de régimen de casa por cárcel para mujeres enfermas o con hijos o hijas de corta edad fueron ignoradas o rechazadas sistemáticamente.¹⁴⁴⁶

903. El patrón de violaciones al que han sido sometidas las mujeres dirigentes políticas detenidas en la DAJ, en especial las perteneciendo a UNAMOS, fue particularmente severo y pareció destinado no sólo a humillar y quebrarlas, sino a acallar voces políticas con características particulares: ser opositoras, mujeres y feministas.¹⁴⁴⁷

904. Una persona, integrante de una organización de víctimas, describió el impacto que tuvo la detención de esas mujeres dirigentes políticas para el país:

*Cuando agarraron a las mujeres de UNAMOS y a [otra dirigente política], se miró un cambio dentro de nuestra lucha. Fue un golpe muy fuerte cuando esas mujeres fueron detenidas. Fue algo que se sintió organizacionalmente en todas las luchas, no tanto porque eran de UNAMOS sino ellas, en sí, como mujeres activistas, como personas [...] Se sintió en la organización; se sintió un vacío. Siempre que teníamos alguna actividad, o que pasaba algo dentro de la organización, esas mujeres daban respuestas a las familias, a las mamás, etc. Cuando las agarraron a ellas, no había una voz, no se sentía ese liderazgo en otras personas porque siempre fueron mujeres que lideraban. Desde junio del 2021, se fue sintiendo una soledad [...]*¹⁴⁴⁸

905. Estas mujeres pasaron toda la duración de su detención, es decir veinte meses, recluidas solas en celdas (una de ellas pasó 14 meses en régimen de aislamiento total), sin la posibilidad de comunicarse con nadie.¹⁴⁴⁹ Las y los custodios de la DAJ vigilaban sus celdas 24 horas al día con la finalidad de asegurarse de que no pudieran hablar entre ellas. Tres de las mujeres estuvieron detenidas permanentemente en celdas oscuras, produciéndoles problemas duraderos de visión. Ninguna tuvo acceso a material de lectura ni de escritura.¹⁴⁵⁰ Durante su primer año en el Nuevo Chipote, fueron sometidas a interrogatorios constantes, varias veces al día. Una de ellas describió los interrogatorios como “el único contacto humano” que tenía.¹⁴⁵¹ Dos de ellas tenían hijos o hijas, y no pudieron tener ningún tipo de comunicación con ellos, ni por vía telefónica, ni a través de cartas, ni se les permitió recibir fotos o dibujos de ellos, durante más de un año.

4. Cierre del espacio cívico y democrático

906. Según testimonios concordantes recabados por el GHREN, los liderazgos feministas, organizaciones y grupos de mujeres –en toda su diversidad– han sido un blanco especial de ataques contra la sociedad civil. Desde los años 90s, el movimiento de mujeres ha adquirido una fuerza política y social autónoma y ha sido, mucho antes de 2018, una voz crítica de la pareja presidencial.¹⁴⁵² Esto ha convertido a las organizaciones de mujeres y sus integrantes

¹⁴⁴⁶ Entrevistas del GHREN EEIV025, EEIV048.

¹⁴⁴⁷ Testimonios confidenciales en archivo del GHREN AADOC034, AADOC035, AADOC036, AADOC037, AADOC038, AADOC039, AADOC040, AADOC041, AADOC042, AADOC043; entrevistas del GHREN EEIV011, AAIV032, AAIV034, AAIV047, AAIV048, AAIV050, AAIV052.

¹⁴⁴⁸ Entrevista del GHREN AAIV044.

¹⁴⁴⁹ Como resultado, una de ellas tuvo afectación a sus cuerdas vocales durante más de seis meses.

¹⁴⁵⁰ Entrevistas del GHREN EEIV025, EEIV011, AAIV032, AAIV034, AAIV047, AAIV048, AAIV050; AAIV052.

¹⁴⁵¹ Documento en el archivo del GHREN AADOC035; entrevistas del GHREN AAIV032, AAIV050.

¹⁴⁵² Entrevistas del GHREN AAIV005, AAIV024, AAIV017. Véase también Karen Kampwirth, *LGBTQ Politics in Nicaragua: Revolution, Dictatorship, and Social Movements*, The University of Arizona Press, 2022, p. 271, citando a Edmundo Jarquín, *Construcción Democrática Revertida y Pervertida*, in *El Régimen de Ortega: ¿Una nueva dictadura familiar en el continente?* 17–64, Edited by Edmundo Jarquín C, Managua: PAVSA.

en un blanco particular de la represión, desde antes del 2018.¹⁴⁵³ Varios factores de índole histórico parecen explicar esa represión particular.

907. Históricamente ligado a la revolución sandinista, el movimiento de mujeres en Nicaragua adquirió una fuerza política y social autónoma del FSLN, y desarrolló bases territoriales amplias, sólidas y activas. A esta evolución se añade el distanciamiento paulatino de las relaciones entre el movimiento de mujeres y el sandinismo, especialmente con el Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo. Varias personas entrevistadas por el GHREN consideran que el caso de Zoilamérica Narváez Murillo constituyó un hito particular en ese proceso de ruptura.¹⁴⁵⁴ Organizaciones de mujeres tomaron la defensa de la hijastra de Daniel Ortega quien denunció haber sido víctima de violencia sexual por parte de su padrastro. La reforma al aborto en el 2006, apoyada por el FSLN marcó otro hito de este distanciamiento. Durante las elecciones presidenciales de 2006, el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) decidió aliarse con el partido Movimiento de Renovación Sandinista (MRS, actualmente UNAMOS).¹⁴⁵⁵

908. Otro factor determinante lo constituyen las bases territoriales amplias y sólidas del movimiento de mujeres. Hasta la cancelación masiva de organizaciones de la sociedad civil en 2021 y 2022, esas representaciones territoriales eran activas y conectadas mediante redes. Como lo subrayó el GIEI Nicaragua, “eso les han permitido trabajar como red consolidada, con capacidad de actuar conjuntamente cuando la coyuntura lo necesita, convirtiéndose en un actor político tanto en la lucha por los derechos de las mujeres, así como por la defensa de derechos ciudadanos. Por eso, ha encabezado movilizaciones importantes en los últimos años con la capacidad de interpelar al Estado y a la sociedad”.¹⁴⁵⁶ Continuando con esta tradición histórica, desde abril de 2018 las mujeres han participado activamente en los movimientos de protesta y de reivindicación de los derechos humanos y de justicia para las víctimas.

909. Según una activista entrevistada por el GHREN, el movimiento feminista y de mujeres ha sido “visto por el Gobierno como ‘el enemigo’ y sus integrantes como ‘traidoras de la revolución.’”¹⁴⁵⁷ Frente a ello, el Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo arremetieron en contra de ese movimiento de varias formas.

910. Los liderazgos feministas, las defensoras de derechos humanos y las organizaciones de mujeres han sido blancos específicos de la represión, incluyendo a través del arresto y la criminalización de numerosas lideresas y defensoras de derechos humanos. El Registro Mesoamericano de Agresiones a Defensoras de Derechos Humanos ha identificado 123 casos de criminalización de defensoras desde el inicio de la crisis.¹⁴⁵⁸

911. Se han documentado campañas de estigmatización y descrédito a través de redes sociales y medios de comunicación oficialistas¹⁴⁵⁹ en contra de las organizaciones de mujeres al tildarlas de “abortistas”, “terroristas”, “traidoras” o “golpistas”. La Vicepresidenta Rosario Murillo también ha acusado a las feministas de ser intelectuales de la clase alta, sin relación con las mujeres ordinarias, y ha llegado a definir las como “contra” (guerrilla antisandinista).¹⁴⁶⁰ Por ejemplo, el 23 de noviembre de 2018, la Vicepresidenta Rosario Murillo declaró que:

Las mujeres sandinistas, de movimientos sociales, laborales y de juventud, denunciamos la permanente extorsión de estos movimientos autodenominados

¹⁴⁵³ En 2007, nueve defensoras fueron investigadas por el Ministerio Público por apología del delito de aborto y de complicidad en el delito de violación (a raíz de un caso de una niña de 9 años conocido como el “caso Rosita”); en 2009 se acusó a dos organizaciones feministas de estar vinculadas al crimen organizado. Documento en el archivo del GHREN AADOC161.

¹⁴⁵⁴ Entrevistas del GHREN AAIV005, AAIV024, AAIV004, AAIV017, AAIV033.

¹⁴⁵⁵ Entrevista del GHREN AAIV017.

¹⁴⁵⁶ Informe GIEI Nicaragua, p. 331.

¹⁴⁵⁷ Entrevista del GHREN AAIV024.

¹⁴⁵⁸ Documento en el archivo del GHREN AADOC050.

¹⁴⁵⁹ CEJIL e IM-Defensoras, Perseguidas por defender y resistir: Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras, México y Nicaragua (Capítulo Nicaragua), 2022, p. 52.

¹⁴⁶⁰ Dan La Botz, What went wrong? The Nicaraguan Revolution: a Marxist Analysis. Boston: Brill (2016), p. 329.

*feministas, que han buscado, obtenido y siguen obteniendo abundantes e ilegítimos recursos, para atacar y destruir a las mujeres y a las familias nicaragüenses, cuyas verdaderas batallas ignoran, en su egoísmo, vanidad y ceguera interesada.*¹⁴⁶¹

912. La Vicepresidenta Murillo también agregó que:

*Las mujeres sandinistas, de movimientos sociales, laborales y de juventud, denunciarnos a estas llamadas líderes, por su responsabilidad e involucramiento en los crímenes de odio que se cometieron contra mujeres, hombres, jóvenes y familias en nuestra Nicaragua durante el intento fallido de golpe de estado. denunciarnos y exigimos que la justicia establezca responsabilidades y penas para todas y todos los que han participado y todavía pretenden participar en el asedio y el acoso a la paz, el derecho al trabajo, el derecho a la familia y a la vida, derechos inalienables de las mujeres, hombres, juventud y las familias en nuestra Nicaragua.*¹⁴⁶²

913. En otro discurso, la Vicepresidenta declaró:

*Las organizaciones feministas, diferentes [ONGs] que reciben jugosas donaciones del exterior y que en Nicaragua trabajan con niños o mujeres en su desarrollo, deberían reflexionar por sus posiciones y respaldo a ese terrorismo que ataca, no solo la fuente del ingreso de las familias obreras y campesinas, sino también atacan, como el caso de Masaya al hospital público con mujeres embarazadas y niños recién nacidos.*¹⁴⁶³

914. Asociado a ese proceso de estigmatización, las organizaciones de mujeres han denunciado patrones de hostigamientos y vigilancia de las autoridades, en particular por parte de la Policía Nacional y de grupos armados pro-gobierno, hacia defensoras de derechos humanos.¹⁴⁶⁴ Estos actos se acompañan en ocasiones de la toma de fotografía hacia ellas o sus familiares, incluyendo sus hijos e hijas. Lo anterior genera un sentimiento constante de zozobra “*pues ellas y su familia viven con la sensación de que en cualquier momento la presencia policial implicaría una detención*”.¹⁴⁶⁵ El entorno digital constituyó también un canal muy efectivo de hostigamiento.¹⁴⁶⁶

915. El caso de una ingeniera agrónoma, fotógrafa y feminista de Matagalpa, quien fue detenida arbitrariamente en 2018 y liberada en marzo del año siguiente, es representativo de esos hostigamientos. La víctima contó que, inmediatamente después de su regreso a Matagalpa tras su liberación, empezó a ser víctima de acoso y amenazas constantes por parte de personas que ella identifica como “paramilitares”, quienes mantenían vigilada su casa y sus movimientos. Fue también víctima de campañas de odio en las redes sociales, donde se invitaba a las personas a reportarla a las autoridades. El acoso fue de tal magnitud que optó por cambiar de casa. En 2020, su perfil de Facebook fue hackeado y modificado para hacer creer que ella había fallecido. La página decía “en memoria de [nombre de la víctima]”. La víctima lo interpretó como una amenaza. Otras campañas en redes sociales usaron su foto, la circularon, e invitaron a la gente a vigilarla y a dar cualquier información sobre su paradero. Personas la acosaban en las redes sociales por ser lideresa feminista: la insultaban con términos como “cochona” y la amenazaron con violarla. Recibió también mensajes texto amenazantes, diciéndole que sabían a qué hora entraba y salía su hija de la escuela, y

¹⁴⁶¹ El 19 Digital, Compañera Rosario en Multinoticias, 23 de noviembre de 2018, disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:84317-companera-rosario-en-multinoticias-23-de-noviembre-del-2018>

¹⁴⁶² El 19 Digital, Compañera Rosario en Multinoticias, 23 de noviembre de 2018, disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:84317-companera-rosario-en-multinoticias-23-de-noviembre-del-2018>

¹⁴⁶³ El 19 Digital, Nicaragua: Trabajadores se organizan y expulsan golpistas terroristas de sus fábricas, 25 de junio de 2018, disponible en <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:78298-nicaragua-trabajadores-se-organizan-y-expulsan-golpistas-terroristas-de-sus-fabricas>

¹⁴⁶⁴ El Registro Mesoamericano de Agresiones a Defensoras de Derechos Humanos ha identificado que, desde el 2018, se han cometido, al menos 1975 agresiones en contra de defensoras.

¹⁴⁶⁵ Documento en el archivo del GHREN AADOC050.

¹⁴⁶⁶ El Registro Mesoamericano de Agresiones a Defensoras documentó 122 agresiones digitales a defensoras entre 2018 y 2022.

amenazándole con hacer daño a su hija. En la pared de la casa en que vivía su familia apareció una inscripción que decía “plomo”. A raíz de esos hostigamientos, decidió exiliarse.¹⁴⁶⁷

916. La represión contra el movimiento feminista también se ha plasmado en el cierre de organizaciones. Conforme al registro de la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras (IND), 212 organizaciones con trabajo en derechos humanos de las mujeres o con perfil feminista, nacionales y territoriales, fueron canceladas desde el 2018 hasta diciembre de 2022 (véase la Tabla 7).¹⁴⁶⁸ De las nueve primeras organizaciones afectadas en noviembre y diciembre de 2018, cinco eran dirigidas por mujeres.¹⁴⁶⁹ Además, es notable subrayar que la primera organización cancelada el 29 de noviembre de 2018 fue el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), dedicada a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos¹⁴⁷⁰ y dirigida por la feminista Ana Quirós. Adicionalmente, el 95 por ciento de estas cancelaciones de organizaciones de derechos de las mujeres o perfil feminista (202) se produjo en 2022.¹⁴⁷¹

917. Otras organizaciones que lo solicitaron, no pudieron obtener sus certificados de legalidad, debido a que el Departamento de Registro y Control de Asociaciones sin fines de lucro (DRCA) se negó a recibir los informes financieros y/o las actualizaciones de sus juntas directivas.¹⁴⁷² De estas, catorce fueron expropiadas, despojadas o confiscadas de sus bienes (inmuebles, equipos y mobiliario): CISAS, Popol Na, el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), el Instituto de Liderazgo de las Segovia, la Corriente Feminista,¹⁴⁷³ el Colectivo de Mujeres de Matagalpa,¹⁴⁷⁴ la Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka, la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra (MEC), la Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua (FADCANIC), el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) y la Fundación Puntos de Encuentro para la Transformación de la Vida Cotidiana.

Tabla 7

Organizaciones de mujeres canceladas en función de la legislación aplicada

<i>Normativa</i>	<i>Cancelaciones</i>	<i>Confiscaciones/expropiaciones</i>
Ley N° 147		61
Ley N° 1115		68
Ley N° 1127		83
		12
		2
		0

¹⁴⁶⁷ Entrevista del GHREN AAIV010; documentos en el archivo del GHREN AADOC110, AADOC114, AADOC117.

¹⁴⁶⁸ Documento en el archivo de GHREN AADOC158.

¹⁴⁶⁹ CISAS, CENIDH, ILLS, CINCO y Popol Na.

¹⁴⁷⁰ El decreto de cancelación No. 8487 del 3 de diciembre de 2018 fue publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 234.

¹⁴⁷¹ Documento en el archivo del GHREN AADOC050.

¹⁴⁷² Entrevistas del GHREN AAIV027, AAIV012, AAIV045; documento en el archivo de GHREN AADOC157. Véase Expediente Público, Violencia estatal en Nicaragua: la guerra abierta de Ortega-Murillo contra el feminismo, 8 de septiembre de 2020, disponible en: <https://www.expedientepublico.org/violencia-estatal-en-nicaragua-la-guerra-abierta-de-ortega-murillo-contr-el-feminismo/>.

¹⁴⁷³ Documento en el archivo del GHREN, AADOC074. Véase también Artículo 66, Policía de Nicaragua se toma instalaciones de la Corriente Feminista, 8 de julio del 2022, disponible en: <https://www.articulo66.com/2022/07/08/confiscacion-la-corriente-feminista-ong-canceladas-nicaragua/>. Su directora fue impedida de regresar a Nicaragua el 1 de julio de 2022, cuando estaba a punto de tomar un avión de regreso al país.

¹⁴⁷⁴ Véase Confidencial, Policía Nacional asalta edificio del Colectivo de Mujeres de Matagalpa, 1 de septiembre de 2022, disponible en: <https://www.confidencial.digital/nacion/policia-nacional-asalta-edificio-del-colectivo-de-mujeres-de-matagalpa/>. El Colectivo de Mujeres de Matagalpa presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia el 27 de octubre de 2021, invocando la inconstitucionalidad del decreto ordenando la cancelación de su personería jurídica. Dicha Corte lo rechazó por ser “notoriamente improcedente” mediante auto del 25 de enero de 2022. Documentos en el archivo del GHREN AAIV167, AAIV168; entrevista del GHREN AAIV045.

<i>Normativa</i>	<i>Cancelaciones</i>	<i>Confiscaciones/expropiaciones</i>
Total	212	14

918. Hay casos que son representativos del hostigamiento particular y continúo al que fueron sometidas las defensoras de derechos humanos y las feministas.

919. Por ejemplo, el 18 de abril de 2018, durante las primeras manifestaciones, una integrante de la Articulación Feminista de Nicaragua y del Consejo Político de la UNAB fue golpeada por integrantes de grupos armados pro-gobierno, mientras protegía a una mujer a quien estos intentaron arrebatar su teléfono móvil. Entre mayo y noviembre de 2018, las oficinas de CISAS, la organización sin fines de lucro que ella dirigía, así como su casa, fueron objeto de vigilancia por hombres vestidos de civil. El 23 de noviembre de 2018, la feminista participó en una conferencia de prensa en Managua con representantes de organizaciones de mujeres, denunciando que el rechazo por la Policía Nacional de un permiso para organizar una manifestación para el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.¹⁴⁷⁵ Al día siguiente, la defensora recibió una citación para acudir a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). Cuando se presentó allá, empleados de esa agencia estatal le notificaron que le había sido retirada la nacionalidad nicaragüense.¹⁴⁷⁶ Fue esposada y trasladada al Chipote, donde le leyeron otra resolución de expulsión y prohibición de ingresar al país durante cinco años. La defensora fue deportada a Costa Rica ese mismo día.¹⁴⁷⁷ CISAS fue la primera organización cancelada por la Asamblea Nacional en 2018.¹⁴⁷⁸ Sus bienes fueron confiscados.¹⁴⁷⁹ La activista integra la lista de las 94 personas que fueron despojadas de su nacionalidad nicaragüense en febrero del 2023, aunque esa medida ya se había aplicado en su contra cuatro años antes.

920. Por su parte, las organizaciones de personas LGBTI y sus integrantes han sido objeto de violencia, discriminaciones y persecución desde el 2018. En 2019, la Mesa Nacional LGBTI publicó un informe denunciando las campañas de desprestigio que redundan en hostigamientos y amenazas en contra de líderes y personas LGBTI desde abril de 2018 al 31 de enero de 2019.¹⁴⁸⁰

5. El impacto de la represión sobre las mujeres y su entorno

921. Las organizaciones de mujeres, asociadas en diferentes redes territoriales, han jugado un rol fundamental en la atención y protección de las mujeres víctimas de violencia, o en la promoción de la salud, en particular de los derechos sexuales y reproductivos. Fuentes consultadas explicaron que algunos de los servicios prestados habían sido coordinados, años atrás, con las instituciones del Estado, como la Policía Nacional, el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio Público o el Ministerio de la Salud, y que se referían mutuamente los

¹⁴⁷⁵ Véase <https://www.frontlinedefenders.org/es/case/deportation-ana-quiros>

¹⁴⁷⁶ Fue naturalizada nicaragüense a finales de los años 1990.

¹⁴⁷⁷ Entrevista del GHREN, CCIV044.

¹⁴⁷⁸ Según la información recibida por el GHREN, se reprochaba a CISAS y sus integrantes de “desnaturalizar el objetivo de la personalidad jurídica” y usarla como “un esquema organizativo para gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para alterar el orden público y realizar actos desestabilizadores del país”. Decreto de cancelación de la personalidad jurídica de Centro de Información y Servicio de Asesoría en Salud, CISAS, Decreto A.N. No.8487 aprobado el 29 de noviembre de 2018, publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 234 del 3 de diciembre de 2018; entrevista del GHREN, CCIV044. Véase Onda Local, Asamblea Nacional cancela a personería jurídica a CISAS, 29 de noviembre de 2018, disponible en línea en <https://ondalocalni.com/noticias/538-asamblea-nacional-cancela-personalidad-juridica-a-cisas/>

¹⁴⁷⁹ Sus instalaciones fueron ocupadas de facto el 13 de diciembre de 2018 por la Policía Nacional. Las instalaciones de CISAS, después de ser ocupadas por la Policía Nacional, pasaron a ser usadas por el Ministerio de Salud. Entrevista del GHREN, CCIV044; fotografía en el archivo del GHREN, CCDOC301; véase también La Prensa, “Régimen inaugura un centro de adicción en las instalaciones del Cisas”, 5 de marzo de 2021, disponible en <https://www.laprensani.com/2021/03/05/nacionales/2793101-dictadura-inaugura-un-centro-de-adiccion-en-las-instalaciones-del-cisas>.

¹⁴⁸⁰ Documento en el archivo del GHREN AADOC071.

casos de atención.¹⁴⁸¹ La cancelación de muchas de esas organizaciones por el Estado de Nicaragua impide que puedan seguir con sus actividades, lo que impacta necesariamente la vida y la seguridad de las mujeres y sus familiares.

922. Según las normas del derecho internacional de los derechos humanos, el Estado de Nicaragua tiene un deber de debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia contra la mujer.¹⁴⁸² Este deber ha sido subrayado como una obligación reforzada tratándose de violencia contra las mujeres por la jurisprudencia de la Corte IDH.¹⁴⁸³ Mediante la cancelación masiva de organizaciones dedicadas a trabajar en la atención y protección de las mujeres, el Estado ha contribuido a incrementar la condición de vulnerabilidad de ese grupo poblacional frente a posibles hechos de violencia, incluidos los perpetrados por terceros.

923. Por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil, y especialmente las organizaciones de mujeres, ya no pueden acompañar a las mujeres víctimas de violencia a interponer denuncias ante el sistema de justicia, por ser consideradas “opositoras al régimen”. Fuentes reportaron que la Policía disuade a las mujeres de acudir a las organizaciones de mujeres¹⁴⁸⁴ argumentando que “las ONGs ya están canceladas, [...] ya no existen, [...] ya no hay que hacerles caso”.¹⁴⁸⁵ “Defender los derechos humanos es estar totalmente en contra del régimen”, reflexiona una defensora.¹⁴⁸⁶

924. El contexto de polarización y de desconfianza imperante en el país contribuyen a disuadir a las mujeres de presentar denuncias:

*No hay opción para las mujeres, no pueden hacer denuncia puesto que saben que no va a proceder. Les pasaba antes; sin embargo, ahora va a depender quien es su agresor y su posición política. No hay condiciones dadas a nivel institucional para la defensa, para la denuncia.*¹⁴⁸⁷

925. Según varias fuentes fidedignas, el impacto del cierre de esas entidades es notable para las mujeres y se vería reflejado en el aumento de los actos de violencia contra las mujeres. La información oficial disponible sobre la prevalencia de las diferentes formas de violencia en contra de las mujeres es actualmente limitada.¹⁴⁸⁸ Sin embargo, aunque parciales, las cifras del Instituto de Medicina Legal, actualizadas a agosto de 2022, muestran un aumento de la peritación médico legal por violencia sexual entre enero y agosto de 2022 en comparación con el mismo periodo en 2021 –467 en 2022 frente a 417 en 2021-. De las peritaciones realizadas, 419 lo fueron a mujeres –la mayoría entre 0 y 38 años- y 48 a hombres (41 de los cuales a niños de 0 a 12 años).¹⁴⁸⁹

¹⁴⁸¹ Entrevistas del GHREN AAIV012, AAIV040, AAIV045. Sin embargo, desde antes de 2018, se reporta que las instituciones del Estado empezaron a prohibir la colaboración con las organizaciones de mujeres. Azahalea Solís, “La Ley 779 tiene una larga historia de lucha y su reforma envía a la sociedad un mensaje muy negativo”, Envío número 380, noviembre de 2013.

¹⁴⁸² Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 20 de diciembre de 1993, art. 4 c); Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém do Pará”, 9 de junio de 1994, art. 7 b).

¹⁴⁸³ Véase, entre otros casos, Corte IDH, Caso *González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México*, Sentencia, 16 de noviembre de 2009, párr. 282; Caso *Veliz Franco y otros vs. Guatemala*, Sentencia, 19 de mayo de 2014, párr. 139; Caso *Vicky Hernández vs. Honduras*, Sentencia, 26 de marzo de 2021, párrs. 98 y sig. La Corte IDH ha subrayado que “en virtud de las obligaciones específicas de la Convención de Belém do Pará, los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres; contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias”, Corte IDH, *Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México*, Sentencia, 28 de noviembre de 2018, párr. 180.

¹⁴⁸⁴ Entrevistas del GHREN AAIV012, AAIV045.

¹⁴⁸⁵ Entrevista del GHREN AAIV012.

¹⁴⁸⁶ *Ibid.*

¹⁴⁸⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸⁸ Sólo el IML publica cifras en su página web, actualizada a agosto de 2022.

¹⁴⁸⁹ IML, Departamento de Estadísticas, Boletín Estadístico, agosto 2022, Año 15, Vol. 168, p. 5, disponible en: https://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/iml/pdf/boletin_agosto_2022.pdf

926. La incidencia de violencia dentro de la familia es reportada como en reducción (de 780 a 737 casos entre 2021 y 2022), lo que podría explicarse por la desconfianza de las mujeres para denunciar hechos de violencia. En cuanto a las muertes violentas de mujeres, el mismo Instituto sólo notifica la práctica de peritaciones tanatológicas sobre mujeres, sin precisar en qué marco se realizan.¹⁴⁹⁰ La organización Católicas por el Derecho a Decidir, por su parte, ha reportado un aumento constante de los femicidios entre 2018 y 2021 -de 61 a 71- con un fuerte aumento de los femicidios frustrados.¹⁴⁹¹ En 2022, la organización reportó 57 casos de femicidios ocurridos en Nicaragua y 220 femicidios frustrados.¹⁴⁹²

927. El GHREN fue informado por varias fuentes de la preocupación frente a las diferentes olas de liberación de reos decretadas por el Gobierno, ya que, en algunos casos, se trataría presuntamente de hombres condenados por casos de violencia o abusos hacia las mujeres. Su liberación representa no sólo un peligro para las mujeres que denunciaron su violencia, sino también para las defensoras que atendieron y acompañaron a las víctimas durante el proceso.¹⁴⁹³

928. A raíz de la represión, de las amenazas que han recibido o por miedo a las represalias, algunas defensoras u opositoras han tenido que optar por esconderse, exiliarse o no salir de su residencia. Estas estrategias de protección, además de impactar sobre su vida, afectan de manera especial la vida de sus hijos y parientes cercanos, tomando en cuenta el rol de cuidado que asumen las mujeres dentro de las familias nicaragüenses.

929. La expulsión de Nicaragua de 222 personas detenidas en febrero de 2023 tuvo como consecuencia la separación de muchas familias. El Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua reportó que 72 de las 222 personas expulsadas son madres o padres de niñas y niños menores de edad, muchos de los cuales siguen residiendo en Nicaragua.¹⁴⁹⁴ La privación de la nacionalidad nicaragüense a 316 personas, residentes en Nicaragua y en el extranjero, así como la eliminación de sus datos del Registro Civil son medidas con consecuencias significativas, *de jure* y *de facto*, para la reunificación familiar. Del mismo modo, la confiscación de bienes y congelación de los activos de las 316 personas declaradas traidoras a la patria sitúan a estas y a sus familias en situaciones de elevada vulnerabilidad.

930. La represión en contra de defensoras y lideresas tiene también un impacto colectivo y comunitario en las comunidades donde las defensoras trabajan, tanto por tener un carácter ejemplificador como desarticulador. Tiene consecuencias en particular sobre la participación políticas de las mujeres y su tejido social. “No sabemos dónde acudir, ya no tenemos referentes”, son expresiones escuchadas por defensoras de derechos humanos.¹⁴⁹⁵

¹⁴⁹⁰ *Ibid.*

¹⁴⁹¹ Elvira Cuadra Lira, Quebrar el cuerpo, quebrar el alma: la reconfiguración de las violencias hacia las mujeres en Nicaragua 2018-2022, Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, 2022, p. 32. Contrario a las instituciones oficiales, las cifras de Católicas por el Derecho a Decidir se rigen por la definición inicial del tipo penal de femicidio de la Ley No. 779 de 2012 (la cual no incluye las muertes violentas de mujeres trans). Esto explica en parte la discordancia de las cifras. Por ejemplo, en 2020, la policía reportó 11 casos de femicidios mientras la organización no gubernamental contabilizaba 69. <https://www.confidencial.digital/nacion/ley-779-lleva-tres-reformas-y-cada-una-la-aleja-mas-de-combatir-violencia-machista/>

¹⁴⁹² Véase <https://www.articulo66.com/2023/01/17/nicaragua-cerro-el-2022-con-casi-70-femicidios-reporta-organizacion-feminista/> y <https://www.confidencial.digital/nacion/ultimo-femicida-de-2022-tenia-ocho-dias-liberado-por-ortega-y-murillo/>.

¹⁴⁹³ Entrevistas del GHREN AAIV004, AAIV012, AAIV033. Según información de prensa, el último femicidio ocurrido en el 2022 fue a manos de un hombre que había sido liberado ocho días previamente tras recibir el beneficio de “convivencia familiar” el 23 de diciembre de 2022. Véase <https://www.confidencial.digital/nacion/ultimo-femicida-de-2022-tenia-ocho-dias-liberado-por-ortega-y-murillo/>

¹⁴⁹⁴ <https://twitter.com/MPresasPresosNi/status/1625261446442496002>.

¹⁴⁹⁵ Entrevista del GHREN AAIV045.

IV. Crímenes de lesa humanidad

931. El GHREN tiene motivos razonables para creer que desde abril de 2018 y hasta el momento de cierre de este informe, en la República de Nicaragua existe un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una parte de la población nicaragüense, implementado a través de diversos medios y métodos prohibidos o inhumanos que se han ido desarrollando, implementando y complementado a lo largo del tiempo. Este ataque, lejos de haber cesado, continúa perpetuándose. El GHREN también tiene motivos razonables para creer que las violaciones, abusos y crímenes documentados en este informe fueron cometidos intencionalmente como parte de este ataque, y que los autores directos e indirectos tuvieron conocimiento del ataque y de que sus actos formaron parte de éste.

932. Lo anterior corresponde a los elementos que constituyen el marco de la prohibición internacional y del tipo internacional penal de crímenes de lesa humanidad. Entre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua, se encuentran: el asesinato, la encarcelación, la tortura, incluida la violencia sexual, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la deportación. El GHREN tiene motivos razonables para creer que los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos en el marco de una política discriminatoria, instrumentada de manera intencional desde las más altas esferas del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, contra parte de la población de Nicaragua, por motivos políticos, constituyendo *prima facie*, el crimen de persecución de lesa humanidad.

A. Naturaleza de la norma

933. La prohibición internacional de crímenes de lesa humanidad tiene el estatus de una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto, imperativa de derecho internacional general (*jus cogens*).¹⁴⁹⁶ Como norma de esta naturaleza, refleja y protege valores fundamentales de la comunidad internacional, es jerárquicamente superior a otras normas de derecho internacional, y es universalmente aplicable.¹⁴⁹⁷ No admite acuerdo en contrario,¹⁴⁹⁸ es imprescriptible¹⁴⁹⁹ y no puede invocarse circunstancia alguna que

¹⁴⁹⁶ TPIY, *Prosecutor v. Zoran Kupreškić et al.*, causa núm. IT-95-16-T, Judgement, 14 de enero de 2000 (*Kupreškić*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 520. Véase también CPI, Sala de Apelaciones, *Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir*, causa núm. ICC-02/05-01/09-397-Anx1, Judgement in the Jordan Referral re Al-Bashir Appeal, 6 de mayo 2019, Joint Concurring Opinion of Judges Eboe-Osuji, Morrison, Hofmański and Bossa, párrs. 207, 429. A nivel regional, véase *Almonacid-Arellano et al. v. Chile*, sentencia, párr. 99; *Herzog et al. v. Brasil*, Sentencia (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), 15 de marzo de 2018, Serie C núm. 353 (*Herzog et al. v. Brasil*, Sentencia), párr. 221. Véase también A/74/10, comentario núm. 5 al proyecto de preámbulo de la CDI, párr. 45. La Asamblea General de la ONU ha tomado nota del proyecto de artículos por medio de la resolución 74/186 (18 de diciembre de 2019), A/RES/74/186, párr. 2(a). La CDI ya había afirmado anteriormente que entre las normas imperativas de derecho internacional general que son claramente aceptadas y reconocidas, se encuentra la prohibición de crímenes de lesa humanidad, en su comentario núm. 5 al proyecto del artículo 26 de CDI, Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º período de sesiones (23 de abril a 1 de junio y 2 de julio a 10 de agosto de 2001), A/56/10, Suplemento núm. 10, párr. 77.

¹⁴⁹⁷ Conclusiones núm. 2 y 23, Anexo(c) del Proyecto de conclusiones de la CDI, Proyecto de conclusiones sobre las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*), 73er período de sesiones (18 de abril a 3 de junio y 4 de julio a 5 de agosto de 2022), A/77/10, Suplemento núm. 10, párr. 44. El proyecto de conclusiones representa en su estado actual una recomendación de la CDI.

¹⁴⁹⁸ A/77/10, conclusión núm. 3; Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 23 de mayo de 1969, 1155 UNTS 331 (entró en vigor el 27 de enero de 1980), artículo 53 *in fine*.

¹⁴⁹⁹ Nicaragua accedió el 3 de septiembre de 1986 a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, 754 UNTS 73 (entró en vigor el 11 de noviembre de 1970), de acuerdo al Decreto núm. 189, Adhesión a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, aprobado el 8 de mayo de 1986, publicado en La Gaceta, Diario Oficial núm. 92 del 9 de mayo de 1986. La Convención fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial Núm. 159 del 29 de julio de 1986. Según el artículo IV de la Convención, los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena no se aplique a crímenes de lesa

excluya su ilicitud.¹⁵⁰⁰ Además, está por encima de la legislación interna,¹⁵⁰¹ y es aplicable independientemente de la condición oficial de la conducta (inmunidad *ratione materiae*).¹⁵⁰²

934. Los crímenes de lesa humanidad son violaciones manifiestas de las normas fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.¹⁵⁰³ Son actos graves que causan daño a los seres humanos al atentar contra lo que les resulta lo más esencial: su vida, la libertad, el bienestar físico, la salud y/o la dignidad.¹⁵⁰⁴ Son actos que por su extensión y gravedad sobrepasan los límites tolerables para la comunidad internacional, la cual se ve obligada a exigir su castigo.¹⁵⁰⁵ Son actos que trascienden al individuo porque cuando atacan al individuo, se ataca y se niega a la humanidad.¹⁵⁰⁶ En este sentido, es el concepto de la humanidad como víctima lo que caracteriza esencialmente a crímenes de lesa humanidad.¹⁵⁰⁷

935. Son actos universalmente reconocidos como criminales y considerados de interés internacional ya que se vulnera bienes jurídicos protegidos que interesan a la comunidad internacional,¹⁵⁰⁸ porque no son actos aislados o aleatorios de individuos, sino que son el resultado de un ataque deliberado a una población civil.¹⁵⁰⁹ Su prevención se promueve poniendo fin a la impunidad de los autores de esos crímenes.¹⁵¹⁰

936. El tipo internacional penal de crímenes de lesa humanidad se refiere, por excelencia, al riesgo de basar la organización política de una sociedad en un monopolio de poder territorial. Este riesgo se materializa en la medida que el monopolio de poder transforma al control administrativo y territorial para atentar contra las normas fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos que protegen a las personas sometidas a su control y

humanidad. La jurisprudencia regional del sistema Interamericano y nacional en América Latina, coinciden en considerar a los crímenes de lesa humanidad imprescriptibles bajo el derecho internacional. Véase A/74/10, párr. 6 del proyecto de artículo 6; comentario núm. 35 in fine al párr. 6 del proyecto de artículo 6. Véase también Corte IDH, *Almonacid-Arellano et al. v. Chile*, sentencia (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), 26 de septiembre de 2006, Serie C núm. 154 (*Almonacid-Arellano et al. v. Chile*, sentencia), párr. 153. Véase también, CtEDH, *Aslakhanova et al. v. Russia*, aplicaciones núms. 2944/06 y 8300/07, 50184/07, 332/08, 42509/10, Judgement, 18 de diciembre de 2012 (*Aslakhanova et al. v. Russia*, sentencia), párr. 237.

¹⁵⁰⁰ A/77/10, conclusión núm. 18.

¹⁵⁰⁰ *Almonacid-Arellano et al. v. Chile*, sentencia, párr. 153. Véase también, *Aslakhanova et al. v. Russia*, sentencia, párr. 237.

¹⁵⁰¹ Véase *Furundžija*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 155.

¹⁵⁰² CIJ, Causa Referente a la Orden de Detención del 11 de abril de 2000 (*La República Democrática del Congo c. Bélgica*), Fallo, 14 de febrero 2002, CIJ, Informes 2002, 3–34, p. 25, párr. 61. Véase también el proyecto de artículo 7(1)(b) y el comentario núm. 20 correspondiente de la CDI, Proyecto de artículos sobre inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado, 73er período de sesiones (18 de abril a 3 de junio y 4 de julio a 5 de agosto de 2022), A/77/10, Suplemento No. 10, párr. 68. El proyecto de artículos representa en su estado actual un primer borrador. Además, no existe inmunidad del Jefe de Estado en funciones conforme al derecho internacional consuetudinario frente a un tribunal internacional, según Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL), *Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor*, causa núm. SCSL-2003-01-I, Decision on immunity from jurisdiction, 31 de mayo de 2004, párr. 53; *Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir*, causa núm. ICC-02/05-01/09-397-Anx1, Judgement in the Jordan Referral re Al-Bashir Appeal, 6 de mayo 2019, párr. 114, incluyendo inmunidad *ratione personae*, según Joint Concurring Opinion of Judges Eboe-Osuji, Morrison, Hofmański and Bossa, párr. 66.

¹⁵⁰³ Comisión de Expertos sobre la ex Yugoslavia, Informe provisional de la comisión de expertos establecida en virtud de la resolución 780 (1992) del Consejo de Seguridad, S/25274, anexo I, párr. 49; Comisión de Expertos Independientes sobre Rwanda, Informe preliminar de la comisión de expertos independientes establecida de conformidad con la resolución 935 (1994) del Consejo de Seguridad, S/1994/1125, anexo, párr. 118.

¹⁵⁰⁴ TPIY, *Prosecutor v. Dražen Erdemović*, causa núm. IT-96-22-T, Sentencing Judgement, 29 de noviembre de 1996 (*Erdemović*, Sentencia de Condena), párr. 28.

¹⁵⁰⁵ *Erdemović*, Sentencia de Condena, párr. 28

¹⁵⁰⁶ *Ibid.*

¹⁵⁰⁷ *Ibid.*

¹⁵⁰⁸ Véase Capítulo I.B.2.

¹⁵⁰⁹ *Tadić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 653.

¹⁵¹⁰ Véase A/74/10, párr. 6 del preámbulo y comentario no. 7 al preámbulo.

a sus recursos coercitivos.¹⁵¹¹ En cuanto al monopolio de poder del Estado, esta transformación consiste en la perversión de los poderes que constituyen la *raison d'être* del Estado, lo que ha sido descrito en la jurisprudencia internacional como “política gubernamental criminal”,¹⁵¹² por el difunto Juez Cassese como “criminalidad de sistema”,¹⁵¹³ y por el difunto Juez Cançado Trindade, como “crímenes del Estado”.¹⁵¹⁴

937. Es precisamente en virtud de este riesgo de perversión de poderes, que el Estado y sus agentes se convierten en responsables ante la comunidad internacional.¹⁵¹⁵ En esta medida, la prohibición internacional de crímenes de lesa humanidad representa una derogación de la soberanía nacional.¹⁵¹⁶ Los crímenes de lesa humanidad no son simplemente delitos, sino, según la Comisión de Crímenes de Guerra de la ONU, requieren la intervención de Estados distintos al Estado en cuyo territorio se cometieron los crímenes, o cuyos ciudadanos hayan sido víctimas de los mismos,¹⁵¹⁷ y constituyen una norma de jurisdicción internacional penal que permite interferir en la soberanía de los Estados.¹⁵¹⁸ Se trata del resultado singular de una transgresión de una norma de *jus cogens*, que limita la soberanía del Estado frente a la persona humana.¹⁵¹⁹ Es una categoría de “último recurso” necesaria para manifestar públicamente la censura por parte de la comunidad internacional.¹⁵²⁰ No requiere el vínculo de ciudadanía con el Estado criminal.

B. Tipo internacional penal

938. Los crímenes de lesa humanidad constituyen cualquiera de una lista de actos prohibidos, cuando se cometen contra una población civil, como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra ésta, y con conocimiento del ataque. Estos son los elementos esenciales y contextuales que distinguen a los crímenes de lesa humanidad de crímenes domésticos y permiten situar actos individuales al contexto general de un poder arbitrario y violento. Únicamente este contexto general evidente transforma el acto en un crimen de lesa humanidad como tal.¹⁵²¹

939. El concepto de crímenes de lesa humanidad, tal como fue formulado en la Carta de Londres,¹⁵²² establece la responsabilidad internacional penal de individuos asociados a un

¹⁵¹¹ Véase Richard Vernon, *What is a crime against humanity?* 10 J. Pol. Phil. 231–249 (2002), p. 243.

¹⁵¹² *Kupreškić* Sentencia de Primera Instancia, párr. 553.

¹⁵¹³ *TPY, Prosecutor v. Duško Tadić*, causa núm. IT-94-1-A and IT-94-1-Abis, Judgement in sentencing appeals, 26 de enero de 2000, Separate opinion of Judge Cassese, párr. 14.

¹⁵¹⁴ Corte IDH, *Goiburú et al. v. Paraguay*, sentencia (fondo, reparaciones y costas), 22 de septiembre de 2006, Serie C núm. 153, Voto razonado del Juez A.A. Cançado Trindade, párrs. 6, 42 y s.

¹⁵¹⁵ Christian Tomuschat, *The Legacy of Nuremberg*, 4 J. Int. Crim. Justice 830–844 (2006), p. 840.

¹⁵¹⁶ *Ibid.*, p. 838.

¹⁵¹⁷ Véase United Nations War Crimes Commission (UNWCC), *History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of the Laws of War*, HM Stationary Office, London 1948, p. 179.

¹⁵¹⁸ *Ibid.*, p. 193.

¹⁵¹⁹ *De jure* condendo, véase United Nations War Crimes Commission (UNWCC), *War Crimes News Digest* No. XVIII, Supp., 1 de octubre de 1946, p. 4, presentado ante el IMT con el número F. 775: Eugène Aronéanu, *Le crime contre l'humanité*, 8 NRDIP 369–418 (1946), p. 418.

¹⁵²⁰ *Salas con Jurisdicción Exclusiva sobre Delitos Criminales Graves con Sede en el Tribunal de Distrito de Dili en Timor Oriental (Salas UNTAET)*, *Prosecutor v. Inacio Oliveira et al.*, causa núm. 12/2002, Judgement, 23 de febrero de 2004, p. 11.

¹⁵²¹ *Oberster Gerichtshof für die Britische Zone in Strafsachen (OGH StS)*, *Caso Weller*, Sentencia del 10 de octubre de 1949, en: *Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes für die Britische Zone in Strafsachen*, Vol. 2 1949/50 (OGH StS 2), de Gruyter, Berlin & Hamburg 1950, párrs. 149–153, p. 151.

¹⁵²² *Charter of the International Military Tribunal (Estatuto del IMT)*, *Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis*, 8 de agosto de 1945, 82 UNTS 279 (entró en vigor el 8 de agosto de 1945), artículo 6(c); UNWCC, *History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of the Laws of War*, HM Stationary Office, London 1948, p. 193. Asimismo, basado en la definición de crímenes de lesa humanidad en el artículo 2(1)(c) del “Control Council Law No. 10”, véase *US Military Tribunal, Nuremberg, United States v. Josef Altstoetter et al.*, *Opinion and Judgment*, 4 de diciembre de 1947, en: *Case 3, U.S. v. Altstötter (“The Justice Case”)*, *Trials of War Criminals Before the Nuernberg Military Tribunals Under Control Council Law no. 10*, Vol. 3, U.S. Government Print. Office, Washington DC 1951, 954–1177, pp. 973 y 979.

aparato estatal por cometer crímenes internacionales contra “una población civil”, lo que incluye sus propios ciudadanos.¹⁵²³ La protección que surge del derecho internacional no depende de la nacionalidad de la víctima, porque es la propia humanidad de la víctima la que exige y justifica la criminalización de dichos actos en virtud del derecho internacional.¹⁵²⁴ De ahí el tipo internacional penal de crímenes de lesa humanidad.

940. Tras la formulación de la Carta de Londres, han existido varias definiciones del tipo penal en instrumentos internacionales.¹⁵²⁵ Si bien en la actualidad el status de derecho internacional consuetudinario de la prohibición internacional de crímenes de lesa humanidad es evidente,¹⁵²⁶ incluso fuera de un conflicto armado,¹⁵²⁷ el de los elementos del tipo internacional penal no lo es.¹⁵²⁸

941. Para la definición de los elementos del tipo internacional, el GHREN se ha basado en las fuentes de derecho internacional firmemente establecidas y, dentro de este marco, en las decisiones judiciales.¹⁵²⁹ En cuanto a la definición de crímenes de lesa humanidad contenida en el artículo 7 del Estatuto de Roma, en vista del artículo 10 del Estatuto,¹⁵³⁰ el Grupo considera que ésta no limita el alcance del significado del concepto de crímenes de lesa humanidad en el Derecho Internacional Penal Consuetudinario.¹⁵³¹ La Sala de Primera Instancia II de la CPI ha señalado, basada en el artículo 31(3)(c) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,¹⁵³² que la metodología de interpretación del artículo 7 “requiere que se haga referencia a la jurisprudencia de los Tribunales (Penales Internacionales) *ad hoc* (de la ONU) y otros tribunales en la materia”, cuando dicha jurisprudencia identifique una norma de Derecho Internacional Consuetudinario, para

¹⁵²³ *Tadić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 635. La versión española del original en inglés del Estatuto del TPIY omite la traducción del término “any”; compare el Estatuto del TPIY, art. 5. Algo similar sucede con las versiones españolas de los otros Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales.

¹⁵²⁴ Véase el razonamiento en TPIY, *Prosecutor v. Dražen Erdemović*, causa núm. IT-96-22-A, Judgement, 7 de octubre de 1997, Joint separate opinion of Judge McDonald and Judge Vorah (appendix), párr. 21.

¹⁵²⁵ En consonancia con la CDI, debe entenderse que el sentido de la expresión “instrumento internacional” es más amplio que el de un simple acuerdo internacional jurídicamente vinculante, pero limitado a instrumentos elaborados por Estados u organizaciones internacionales, como la ONU. Véase A/74/10, comentario no. 44 al proyecto de artículo 2 de CDI. Respecto a los elementos de contexto de los crímenes de lesa humanidad en los instrumentos y la jurisprudencia internacional, véase A/74/10, comentarios nos. 2–36.

¹⁵²⁶ *Tadić*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 4, 623. Así lo demuestra su inclusión en todos los estatutos y otros instrumentos del Derecho Internacional Penal y su amplia aplicación por los tribunales internacionales.

¹⁵²⁷ TPIY, *Prosecutor v. Duško Tadić*, causa núm. IT-94-1-AR72, Decision on the defence motion for interlocutory appeal on jurisdiction, 2 de octubre de 1995 (*Tadić*, Apelación Interlocutoria), párrs. 140 y 141; Salas Extraordinarias en las Cortes de Camboya (SECC), *Prosecutor v. Kaing Guek Eav alias Duch*, causa núm. 001/18-07-2007/ECCC/TC, Judgement, 26 de julio de 2010 (*Duch*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 292; véase también Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), *Korbely v. Hungary*, ECtHR Grand Chamber (no. 9174/02), Judgement, 19 de septiembre de 2008 (*Korbely v. Hungary*, Sentencia), párr. 82.

¹⁵²⁸ Véase A/74/10, ejemplos en los comentarios nos. 37–46 al proyecto de artículo 2.

¹⁵²⁹ Véase Capítulo I.E. En cuanto a la base de los Tribunales Penales de la ONU, véase *Kupreškić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 540.

¹⁵³⁰ Estatuto de Roma, art. 10: “Nada de lo dispuesto en la presente parte se interpretará en el sentido de que limite o menoscabe de alguna manera las normas existentes o en desarrollo del derecho internacional para fines distintos del presente Estatuto”.

¹⁵³¹ No está claro, en qué medida se trataría de un “denominador común mínimo”, como afirma William A. Schabas, *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, 2a edición Oxford University Press, Oxford 2016, p. 153. Tampoco está claro, si representa *in toto* una cristalización del derecho internacional consuetudinario, como opina la Corte IDH, *Almonacid-Arellano et al. v. Chile*, sentencia, párr. 99; *Herzog et al. v. Brasil*, Sentencia, párr. 223. Véase Antonio Cassese, *Cassese’s International Criminal Law*, 3a edición Oxford University Press, Oxford 2013, p. 105.

¹⁵³² Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 31(3)(c): “Regla general de interpretación: Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta... toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes”.

fundamentar sus decisiones.¹⁵³³ Estos Tribunales Penales Internacionales se han basado, a su vez, en precedentes en la jurisprudencia internacional como evidencia del derecho vigente en materia de crímenes de lesa humanidad.¹⁵³⁴

C. Ataque generalizado o sistemático contra una población civil

942. Únicamente el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil transforma un acto prohibido en un crimen de lesa humanidad como tal.¹⁵³⁵ Su injusto internacional consiste en la conexión funcional entre los actos prohibidos (asesinato; deportación; encarcelación; tortura; persecución por motivos raciales, religiosos, o políticos) y este contexto.¹⁵³⁶

1. Colectividad victimizada (“población civil”)

943. De modo similar al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el cual comprende violaciones perpetradas por un Estado contra integrantes de su propia población, la penalización de la transgresión de la prohibición internacional de crímenes de lesa humanidad contra “una población civil” (i.e. especialmente, contra integrantes de su propia población) se centra en el individuo como sujeto activo de dichas violaciones.¹⁵³⁷ Ambas ramas del derecho internacional tienen en común que son condicionadas por un contexto de una disparidad de poder; en el caso de los crímenes de lesa humanidad, entre una colectividad dotada –en el lugar y durante el tiempo que sucedan los hechos– de poder equivalente al control territorial de la organización de un Estado¹⁵³⁸ y una colectividad victimizada (“población civil”) por la primera.¹⁵³⁹

944. El elemento de “población civil” se materializa en la medida que personas son victimizadas no por sus características individuales sino por compartir atributos con una

¹⁵³³ CPI, Sala de Primera Instancia II, *Prosecutor v. Germain Katanga*, causa núm. ICC-01/04-01/07-3436-tENG, Judgement pursuant to article 74 of the Statute, 7 de marzo de 2014, párr. 47. Para el estatus de “Tribunal Penal Internacional” del TESL, véase TESL, *Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor*, causa núm. SCSL-2003-01-T, Judgement, 18 de mayo de 2012 (*Taylor*, sentencia de primera instancia), párrs. 37–42, en particular, párrs. 38 y 42; y de las SECC, véase la causa *Prosecutor v. Kaing Guek Eav alias Duch*, causa núm. 001/18-07-2007-ECCC-OCIJ (PTC01), Decision on Appeal against Provisional Detention Order of Kaing Guek Eav alias “DUCH”, 3 de diciembre de 2007, párr. 20. De acuerdo a esta jurisprudencia, las Salas UNTAET comparten un estatus equivalente, dado que UNTAET se creó en virtud de la Resolución 1272 (1999) del Consejo de Seguridad. Un estatus similar, además, lo tiene una sala especial en el Tribunal de Bosnia y Herzegovina (la “Sala de Crímenes de Guerra”, SCGBH), particularmente, debido a su rol de recibir las causas relativas a inculcados de rango medio o inferior trasladadas a ésta por el TPIY; véase resolución 1503 (2003) del Consejo de Seguridad, S/RES/1503 (2003), preámbulo, párr. 11.

¹⁵³⁴ *Kupreškić*, Sentencia de Primera Instancia; se trata de una práctica en los términos del párrafo 1 de la conclusión 13 de la CDI, Proyecto de conclusiones sobre la identificación del Derecho Internacional Consuetudinario, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 70o período de sesiones (30 de abril a 1 de junio y 2 de julio a 10 de agosto de 2018), A/73/10, Suplemento núm. 10, párr. 65–66. La Asamblea General de la ONU ha tomado nota del proyecto de artículos por medio de la resolución 73/265 (22 de diciembre de 2018), A/RES/73/265, párr. 2(b).

¹⁵³⁵ Oberster Gerichtshof für die Britische Zone in Strafsachen (OGH StS), Caso Weller, Sentencia del 10 de octubre de 1949, en: *Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes für die Britische Zone in Strafsachen*, Vol. 2 1949/50 (OGH StS 2), de Gruyter, Berlin & Hamburg 1950, 149–153, p. 151. Para un resumen del caso ante el Tribunal Supremo alemán en la Zona de Ocupación Británica en inglés, véase Antonio Cassese, *Cassese’s International Criminal Law*, 3a edición Oxford University Press, Oxford 2013, p. 100, nota 41.

¹⁵³⁶ Véase BT-Dr. 14/8524 (13 de marzo de 2002), § 7 párr. 1 (traducción al español de Alicia Gil Gil, disponible en: https://www.department-ambos.uni-goettingen.de/data/documents/Forschung/Projekte/Translations/VStGB/VStGB_span.pdf; inglés de Brian Duffet, disponible en: https://www.department-ambos.uni-goettingen.de/data/documents/Forschung/Projekte/Translations/VStGB/VStGB_engl.pdf).

¹⁵³⁷ William A. Schabas, *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, 2a edición Oxford University Press, Oxford 2016, pp. 148 y s.

¹⁵³⁸ Véase *Tadić*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 654 y s.

¹⁵³⁹ *Ibid.*, párr. 644. Véase también *Duch*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 302.

colectividad victimizada.¹⁵⁴⁰ Esta condición debe ser interpretada de manera amplia, y puede, en particular, incluir a aquellas personas que son identificadas como parte de la colectividad victimizada debido a sus afiliaciones o simpatías por ésta.¹⁵⁴¹

945. En la jurisprudencia internacional se han considerado las siguientes características para identificar a la población civil: “civiles que se oponen o se consideran contrarios al partido en el poder”,¹⁵⁴² incluyendo a “manifestantes contra el tercer mandato del Presidente [...] y presuntos manifestantes, miembros de los partidos políticos de la oposición, miembros de la sociedad civil, periodistas”, escritoras y escritores,¹⁵⁴³ entre otros,¹⁵⁴⁴ o simplemente “enemigos del régimen”,¹⁵⁴⁵ incluyendo “al final de un régimen, todos los individuos que no apoyan al régimen”.¹⁵⁴⁶ Este enfoque está en consonancia con la jurisprudencia regional del Sistema Interamericano.¹⁵⁴⁷ En términos cuantitativos, dado que el concepto de “población civil” se refiere al objeto de la victimización y no al número de víctimas propiamente dicho, basta con que se victimice a un número significativo de personas para constituir una colectividad victimizada, lo que excluye casos de unas pocas personas, seleccionadas al azar.¹⁵⁴⁸

¹⁵⁴⁰ *Ibid.* Véase, para el uso del término “población civil” (“any civilian population”) en la definición de crímenes de lesa humanidad, Estatuto del TPIY, artículo 5; Estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda, S/RES/955 (1994), Anexo, artículo 3 (Estatuto del TPIR); Regulation No. 2000/11 on the Organization of Courts in East Timor, UNTAET/REG/2000/11, Official Gazette of East Timor, UNTAET/GAZ/2000/Add.1, sección 10.3, Regulation No. 2000/15 on the Establishment of Panels With Exclusive Jurisdiction Over Serious Criminal Offences, UNTAET/REG/2000/15, Official Gazette of East Timor UNTAET/GAZ/2000/Add. 3, sección 5 (Estatuto de las Salas UNTAET); Statute of the Special Court for Sierra Leone, 2178 UNTS 145, artículo 2 (Estatuto del TESL); Agreement between the United Nations and the Royal Government of Cambodia Concerning the Prosecution Under Cambodian Law of Crimes Committed During the Period of Democratic Kampuchea, 2329 UNTS 117, artículo 9, en conexión con el Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers (Ley de Salas Extraordinarias), Reach Kram No. NS/RKM/0801/12, artículo 5 (Estatuto del SECC). Véase también, Estatuto de Roma, art. 7; Agreement on the Establishment of the Extraordinary African Chambers within the Senegalese Judicial System Between the Government of the Republic of Senegal and the African Union and the Statute of the Chambers, en 52 ILM 1028, artículo 6 (Estatuto de las Salas Africanas Extraordinarias en el Sistema Judicial Senegalés, SAE). Véase también A/74/10, proyecto de artículo 2.

¹⁵⁴¹ TPIY, *Prosecutor v. Miroslav Kvočka et al.*, causa núm. IT-98-30/1-T, Judgement, 2 de noviembre de 2001 (*Kvočka*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 195; TPIY, *Prosecutor v. Naletilić, alias “Tuta” & Martinović, alias “Štela”*, Judgement, causa núm. IT-98-34-T, 31 de marzo de 2003 (*Tuta & Štela*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 636.

¹⁵⁴² CPI, Sala de Cuestiones Preliminares III, Situation in the Republic of Burundi, registro núm. ICC-01/17-9-Red, Public Redacted Version of “Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Burundi”, ICC-01/17-X-9-US-Exp, 25 October 2017, 9 de noviembre de 2017 (*Burundi*, Decision sobre Investigación), párr. 40.

¹⁵⁴³ *Ibid.* Véase también CPI, Sala de Cuestiones Preliminares I, Situation in the Libyan Arab Jamahiriya, registro núm. ICC-01/11-01/11-1, Decision on the “Prosecutor’s Application Pursuant to Article 58 as to Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi, Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi”, 27 de junio de 2011 (*Libyan Arab Jamahiriya*, Decision on Article 58 Application), párrs. 42–65.

¹⁵⁴⁴ Véase, en particular, la jurisprudencia internacional que incluye a personas que, si bien no comparten características religiosas o étnicas con una población victimizada, son consideradas víctimas de crímenes de lesa humanidad por ser atacadas debido a su oposición política y/o percepción de ser opositores a la colectividad atacante, en *Kvočka*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 195; TPIY, *Tuta & Štela*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 636.

¹⁵⁴⁵ *Duch*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 322.

¹⁵⁴⁶ *Ibid.*, párr. 388.

¹⁵⁴⁷ *Almonacid-Arellano et al. v. Chile*, sentencia, párrs. 82(4)–82(6).

¹⁵⁴⁸ TPIY, *Prosecutor v. Dragoljub Kunarac et al.*, causa núm. IT-96-23 & IT-23/1-A, Judgement, 12 de junio de 2002 (*Kunarac*, Sentencia de Apelación), párr. 90; TPIY, *Tuta & Štela*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 235; *Prosecutor v. Tihomir Blaškić*, causa núm. IT-95-14-A, Judgement, 29 de julio de 2004 (*Blaškić*, Sentencia de Apelación), párr. 105; *Prosecutor v. Milan Martić*, causa núm. IT-95-11-T, Judgement, 12 de junio de 2007, párr. 49; *Prosecutor v. Radovan Karadžić*, causa núm. IT-95-5/18-T, Public Redacted Version of Judgement Issued on 24 March 2016, 24 de marzo de 2016 (*Karadžić*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 475; TPIR, *Prosecutor v. Ignace Bagilishema*, causa núm. ICTR-

946. El ataque concebido por el Presidente Daniel Ortega, la Vicepresidenta Rosario Murillo y agentes, funcionarios y funcionarias de diversas agencias y estructuras de su Gobierno, fue dirigido contra un grupo heterogéneo de personas de todas las edades y pertenecientes a todos los estratos sociales y profesionales de Nicaragua que fue evolucionando y ampliándose con el paso del tiempo. El común denominador a este sector de la población, es ser opositoras al Gobierno, o percibidas como críticas del, o adversarias al, mismo.

947. En una primera etapa, el ataque se dirigió hacia las personas manifestantes y, en especial, hacia quienes habían asumido un rol de liderazgo. Con el transcurso del tiempo, el grupo incluyó un sector más amplio de voces críticas, incluyendo personas defensoras de derechos humanos, estudiantes, feministas, miembros de organizaciones sociales, periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación independientes, miembros de partidos políticos y de la Iglesia Católica, los liderazgos políticos de oposición más importantes en Nicaragua, entre otras personas con posiciones de liderazgo o prominencia en la sociedad civil. Todas estas personas han sido percibidas por la administración Ortega–Murillo como una amenaza a su control del Estado. En febrero de 2023, el Gobierno declaró a más de 300 de estas personas “traidoras a la patria”, deportó a 222 de ellos y les retiró su nacionalidad.

948. Durante las protestas de 2018, el Gobierno Ortega–Murillo desarrolló estratégicamente una política discriminatoria a través de un discurso de construcción del “enemigo”, responsabilizando a las personas opositoras o percibidas como tales por los hechos de violencia. Estas personas fueron señaladas públicamente por el Presidente Daniel Ortega, la Vicepresidenta Rosario Murillo y funcionarios y funcionarias de su Gobierno como grupos de “terroristas” y “criminales” armados, operando de manera coordinada o respondiendo a un plan preexistente de “intento de golpe de Estado” deliberado contra el Gobierno. El Gobierno justificó el ataque contra la población civil con base en estas alegaciones.

949. El GHREN analizó información en el contexto de algunas de las manifestaciones y tranques ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, que indican la presencia de personas que respondieron con violencia a los actos de represión de la Policía Nacional y los grupos armados pro-gobierno, incluyendo a través del uso de piedras, morteros de fabricación artesanal y, en algunos casos, armas de fuego. El GHREN también tiene conocimiento de la muerte de 22 elementos de la Policía Nacional en el contexto de las manifestaciones.

950. A pesar de esto, el GHREN no encuentra ningún tipo de justificación fáctica o legal, a partir de la información disponible y analizada, que pudiera desnaturalizar la condición de población civil del grupo objeto del ataque o que permita inferir la legalidad del ataque contra parte de la población en Nicaragua. El GHREN concluye, con motivos razonables para creer, que la presencia de sujetos armados entre la población civil durante los actos de protesta, incluyendo manifestaciones, tranques y barricadas, no desnaturaliza la condición mayoritaria civil del grupo atacado. Tampoco justifica el ataque que dirigió el Gobierno contra parte de la población, ni las violaciones, abusos y crímenes cometidos contra la misma.

951. Los integrantes de la población civil de Nicaragua son sujetos protegidos de acuerdo con el derecho internacional y receptado en el derecho interno nicaragüense. El Grupo considera que, a pesar de la calificación de enemigos por parte del Gobierno, estas personas pertenecen a la población civil, y que los crímenes y las violaciones y abusos de derechos humanos identificados por el GHREN, que se dirigieron contra estas personas, están absolutamente prohibidos.

95-1A-T, Judgement, 7 de junio de 2001 (*Bagilishema*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 80; TESL, *Prosecutor v. Hassan Sesay et al.*, causa núm. SCSL-04-15-A, Judgement, 26 de octubre de 2009, párr. 719; *Duch*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 303. Véase también Tribunal Federal de Justicia de Alemania, BGH, 20.12.2018 – 3 StR 236/17, NJW 2019, 1818, 1826, núm. 164.

2. “Ataque”

952. Este tipo de victimización corresponde a un concepto de “ataque”¹⁵⁴⁹ que es distinto e independiente del concepto de un “conflicto armado”,¹⁵⁵⁰ dado que la penalización internacional de crímenes de lesa humanidad conforme al derecho internacional consuetudinario abarca también violaciones fuera de un conflicto armado.¹⁵⁵¹ El término “ataque” se ha interpretado en la jurisprudencia internacional en el sentido de una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos,¹⁵⁵² requiriendo un elemento de cohesión organizacional y apoyo entre las distintas conductas.¹⁵⁵³ No se trata de la mera acumulación de actos inconexos, aleatorios o aislados, sino que debe existir un esfuerzo delictivo colectivo dirigido en última instancia contra una población civil como objetivo principal y común.¹⁵⁵⁴

¹⁵⁴⁹ Si bien, al igual de la definición en el Estatuto del IMT, la palabra “ataque” no aparece literalmente en la definición de crímenes de lesa humanidad del Estatuto del TPIY (distinto al caso de los demás Estatutos referidos con anterioridad), *Tadić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 645 ha interpretado el artículo 5 de su Estatuto en este sentido.

¹⁵⁵⁰ *Tadić*, Sentencia de Apelación, párr. 251; TPIY, *Prosecutor v. Milorad Krnojelac*, causa núm. IT-97-25-T, Judgement, 15 de marzo de 2002, párr. 54 (*Krnojelac*, Sentencia de Primera Instancia); *Prosecutor v. Mitar Vasiljević*, causa núm. IT-98-32-T, Judgment, 29 de noviembre de 2002 (*Vasiljević*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 30; *Prosecutor v. Fatmir Limaj et al.*, causa núm. IT-03-66-T, Judgement, 30 de noviembre de 2005 (*Limaj et al.*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 182; TPIR, *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, causa núm. ICTR-96-4-T, Judgement, 2 de septiembre de 1998 (*Akayesu*, Sentencia de Primera Instancia) párr. 565; *Prosecutor v. Laurent Semanza*, causa núm. ICTR-97-20-T, Judgement, 15 de mayo de 2003 (*Semanza*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 443; TESL, *Prosecutor v. Alex Tamba Brima et al.*, causa núm. SCSL-04-16-T, Judgement, 20 de junio de 2007 (*Brima et al.*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 214; TESL, *Taylor*, sentencia de primera instancia, párr. 506; SECC, *Duch*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 178; *Prosecutor v. Nuon Chea and Khieu Samphan*, causa núm. 002/19-09-2007/ECCC/TC, Judgement, 7 de agosto de 2014 (*Nuon & Khieu*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 178; SAE, Sala del Jurado (“Chambre d’Assises”), *Ministère Public v. Hissein Habré*, Jugement, 30 de mayo de 2016 (*Habré*, Sentencia), disponible en línea <<http://www.legal-tools.org/doc/98c00a/>>, párr. 1357. En aras de exhaustividad, debe mencionarse, además, que incluso en el caso de que se trate de un ataque en el contexto de un conflicto armado (lo que no es el caso en el contexto de Nicaragua, en el tiempo bajo investigación), el concepto de “ataque” no es idéntico al de “conflicto armado”, según *Tadić*, Sentencia de Apelación, párr. 251; TPIY, *Krnojelac*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 54; *Kunarac*, Sentencia de Apelación, párr. 85; *Vasiljević*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 30; *Karadžić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 473.

¹⁵⁵¹ Véase *Tadić*, Apelación Interlocutoria, párrs. 140 y 141; *Duch*, Sentencia de Primera Instancia párr. 292. Véase también Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), *Korbely v. Hungary*, Sentencia, párr. 82.

¹⁵⁵² *Krnojelac*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 4; *Kunarac*, Sentencia de Apelación, párr. 89; *Vasiljević*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 29; *Tuta & Štela*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 233; *Prosecutor v. Radoslav Brđanin*, causa núm. IT-99-36-T, Judgement, 1 de septiembre de 2004 (*Brđanin* Sentencia de Primera Instancia), párr. 131; *Prosecutor v. Vidoje Blagojević & Dragan Jokić*, causa núm. IT-02-60-T, Judgement, 17 de enero de 2005 (*Blagojević & Jokić*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 543; *Limaj et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 182; *Prosecutor v. Momčilo Perišić*, causa núm. IT-04-81-T, Judgement, 6 de septiembre de 2011, párr. 82; TPIR, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al.*, causa núm. ICTR-99-52-A, Judgement, 28 de noviembre de 2007 (*Nahimana et al.*, Sentencia de Apelación), párr. 918; *Prosecutor v. Ephrem Setako*, causa núm. ICTR-04-81-T, Judgement and Sentence, 25 de febrero de 2010, párr. 476; *Prosecutor v. Yussuf Munyakazi*, causa núm. ICTR-97-36A-T, Judgement and Sentence, 5 de julio de 2010, párr. 503; *Prosecutor v. Théoneste Bagosora et al.*, causa núm. ICTR-98-41-T, Judgement and Sentence, 18 de diciembre de 2008, párr. 2165; Salas UNTAET, *Prosecutor v. Joni Marques et al.*, causa núm. 09/2000, Judgement, 11 de diciembre de 2001 (*Marques et al.*, Sentencia), párr. 636; TESL, *Prosecutor v. Moinina Fofana and Allieu Kondewa*, causa núm. SCSL-04-14-T, Judgement, 2 de agosto de 2007 (*Fofana & Kondewa*, Sentencia), párr. 111; *Prosecutor v. Alex Tamba Brima et al.*, causa núm. SCSL-04-16-T, Decision on Motion for Judgement of Acquittal Pursuant to Rule 98, 31 de marzo de 2006, párr. 42. Véase también SAE, *Habré*, Sentencia, párrs. 1356–1357; Estatuto de Roma, art. 7(2)(a).

¹⁵⁵³ *Limaj et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 212–213.

¹⁵⁵⁴ *Ibid.*; *Tadić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 653; *Kunarac*, Sentencia de Apelación, párrs. 91 y 92; *Vasiljević*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 33; *Stakić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 624.

Actos aislados pueden constituir graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pero no constituyen crímenes de lesa humanidad.

953. La existencia de un plan o una política de Estado no es un elemento del tipo de crímenes de lesa humanidad conforme al Derecho Internacional Penal Consuetudinario.¹⁵⁵⁵ Sin embargo, cuando el Estado que atenta contra una colectividad de personas sometidas a su control está asociado a lo que en la jurisprudencia internacional ha sido caracterizado como “estructura de poder autoritaria”,¹⁵⁵⁶ es este hecho el que puede convertir a los actos en crímenes de lesa humanidad, ya sea por estar dentro de un plan o una política de Estado o por ser parte de la ejecución de los mismos.¹⁵⁵⁷ Lo anterior también puede considerarse como indicio de la existencia de un ataque generalizado o sistemático.¹⁵⁵⁸ Así, la existencia de un ataque es más evidente cuando una línea de conducta es lanzada con base en una masiva acción del Estado.¹⁵⁵⁹

954. El elemento de “ataque” no está limitado a la violencia física, sino que puede incluir cualquier maltrato de una colectividad,¹⁵⁶⁰ incluyendo ejercer presión sobre ella para que actúe de una manera determinada.¹⁵⁶¹ En todo caso, en consonancia con la jurisprudencia internacional, para que este patrón califique como “ataque contra una población civil”, el tipo de violencia convencional y/o maltratos deben alcanzar tal escala o tal gravedad, que este patrón de hechos no puede responder a un objetivo legítimo, sino que solo se pueden entender los hechos como una línea de conducta que atenta contra las personas por ser integrantes de

¹⁵⁵⁵ *Kunarac*, Sentencia de Apelación, párrs. 98 y 101; *Limaj et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 184; *Blaškić*, Sentencia de Apelación, párrs. 100 y 120; *Prosecutor v. Dario Kordić & Mario Čerkez*, causa núm. IT-95-14/2-A, Judgement, 17 de diciembre de 2004 (*Kordić & Čerkez*, Sentencia de Apelación), párr. 98; *Semanza*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 329–332; *Prosecutor v. Silvestre Gacumbitsi*, causa núm. ICTR-2001-64-A, Judgement, 7 de julio de 2006 (*Gacumbitsi*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 84; *Nahimana et al.*, Sentencia de Apelación, párr. 922; *Brima et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 215; *Fofana & Kondewa*, Sentencia, párr. 113; *Prosecutor v. Hassan Sesay et al.*, causa núm. SCSL-04-15-T, Judgement, 2 de marzo de 2009 (*Sesay et al.*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 79; *Taylor*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 511

¹⁵⁵⁶ *Ibid.*, refiriéndose a TPIY, *Prosecutor v. Dragan Nikolić*, causa núm. IT-94-2-R61, Review of indictment pursuant of the rules of procedure and evidence, Decision, 20 de octubre de 1995, párr. 27.

¹⁵⁵⁷ *Tadić*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 626 y 644; *Akayesu*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 580; *Prosecutor v. Georges Rutaganda*, causa núm. ICTR-96-3-T, Judgment, 6 de diciembre de 1999 (*Rutaganda*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 69; *Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana*, ICTR-95-1, Judgement, 21 de mayo de 1999 (*Kayishema & Ruzindana*, Sentencia de Primera Instancia), párrs. 124–125, 581; *Marques et al.*, Sentencia, párr. 639.

¹⁵⁵⁸ *Kunarac*, Sentencia de Apelación, párrs. 98 y 101; *Limaj et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 184; *Blaškić*, Sentencia de Apelación, párrs. 100 y 120; *Kordić & Čerkez*, Sentencia de Apelación, párr. 98; *Semanza*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 329–332; *Gacumbitsi*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 84; *Nahimana et al.*, Sentencia de Apelación, párr. 922; *Brima et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 215; *Fofana & Kondewa*, Sentencia, párr. 113; *Sesay et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 79; *Taylor*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 511.

¹⁵⁵⁹ *Limaj et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 194.

¹⁵⁶⁰ *Nahimana et al.*, Sentencia de Apelación, párr. 918; *Fofana & Kondewa*, Sentencia, párr. 111; *Brima et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 214; *Duch*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 299; *Chea & Samphan*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 178; SAE, *Habré*, Sentencia, párr. 1357. En aras de exhaustividad, debe mencionarse, además, que el concepto de “ataque” tampoco se limita al uso de la fuerza armada, según TPIY, *Kunarac*, Sentencia de Apelación, párr. 86; *Limaj et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 182; *Kordić & Čerkez*, Sentencia de Apelación, párr. 666; Véase también CPI, Elementos de los Crímenes, artículo 7, introducción, párr. 3, en Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la CPI, Primer período de sesiones, Nueva York, 3 a 10 de septiembre de 2002, Documentos Oficiales, ICC-ASP/1/3, 9 de septiembre de 2002 (Elementos de los Crímenes), Introducción al artículo 7, 112–160, p. 120.

¹⁵⁶¹ *Akayesu*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 581; *Rutaganda*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 69; *Prosecutor v. Alfred Musema*, causa núm. ICTR-96-13-T, Judgement, 27 de enero de 2000, párr. 205; *Semanza*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 205; *Brima et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 42.

esta población, y que viola las normas fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que protegen a estas personas.¹⁵⁶²

955. El GHREN tiene motivos razonables para creer que, en Nicaragua, a partir de abril de 2018 y hasta la fecha de redacción de este informe, parte de la población nicaragüense ha sido objeto de un ataque generalizado y sistemático instrumentalizado a través de una campaña discriminatoria, que comprende la comisión de violaciones y abusos a los derechos humanos y delitos internacionales. El GHREN ha llegado a esta conclusión luego de considerar, entre otros indicios, los medios y métodos empleados durante el ataque, los perfiles de las víctimas, el carácter discriminatorio del ataque, y la naturaleza de las violaciones, abusos y crímenes cometidos durante el ataque.

956. El conjunto de información recolectada y analizada por el GHREN demuestra, *prima facie*, la existencia de un ataque orquestado por el Presidente Daniel Ortega, la Vicepresidenta Rosario Murillo, y agentes, funcionarios y funcionarias de diversas agencias y estructuras de su Gobierno, contra la población civil nicaragüense, a través de diferentes medios y métodos instrumentados desde el 18 de abril de 2018. El ataque fue instrumentalizado desde las más altas esferas del Gobierno con el fin de consolidar un control absoluto e ilegal sobre la población civil, y de suprimir todo tipo de conducta que el Gobierno considere contraria o interprete como un intento de golpe o conspiración para generar un cambio en el *statu quo* del poder gobernante o que de cualquier modo lo desafíe.

957. El GHREN documentó cómo, a partir del 18 de abril de 2018, el andamiaje de la estructura del Estado fue puesto en marcha para implementar un ataque contra un sector de la población nicaragüense, a través de una serie de medidas y actos con el fin de reprimir toda forma de protesta o de actividades consideradas “disidentes”.

958. El ataque comenzó mediante operativos con violencia por parte de la Policía Nacional y grupos armados pro-gobierno, para reprimir las manifestaciones masivas que iniciaron en Nicaragua en abril de 2018. El GHREN documentó acciones armadas dirigidas contra la población civil, encabezadas por elementos de la Policía Nacional y grupos armados pro-gobierno, que tomaron diversas formas, en algunos casos actuando de manera conjunta y coordinada. Estas acciones resultaron en la comisión de ejecuciones extrajudiciales; la mayoría de las víctimas fueron personas manifestantes.

959. El Grupo constató el uso consistente de armas de fuego por agentes de la Policía Nacional y grupos armados pro-gobierno, para reprimir las protestas desde el 19 de abril de 2018. Estas armas incluyeron armas restringidas y de alto alcance, incluyendo fusiles de guerra de francotiradores tipo Dragunov. El Grupo también documentó la presencia de sujetos armados posicionados en tejados de casas y edificios, que identificaron como “francotiradores”. Esto denota la intención de emplear tácticas de combate y producir la muerte de manifestantes.

960. Los efectivos de la Policía Nacional y de grupos pro-gobierno fueron desplegados de manera metódica y organizada a las zonas donde se desarrollaban las protestas, portando equipos de comunicación y diversos tipos de armas restringidas. Varios de los efectivos iban enmascarados y los miembros de grupos pro-gobierno portaban vestimenta civil de un color que les permitía identificarse y diferenciarse entre ellos durante los operativos armados que lideraban en coordinación con la Policía Nacional. La mayoría de los operativos contra tranques y barricadas se produjeron de madrugada o durante la noche y, en algunos casos, fueron precedidos por cortes de electricidad y servicios de telefonía. Esto obstaculizó la capacidad de reacción y comunicación de las personas manifestantes.

¹⁵⁶² Coincidiendo de esta manera con la *ratio legis* de crímenes de lesa humanidad, según *Tadić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 653, de que “la razón por la que los crímenes contra la humanidad conmueven tanto la conciencia de la humanidad y justifican la intervención de la comunidad internacional es porque no son actos aislados y aleatorios de individuos, sino que son el resultado de un intento deliberado de atacar a una población civil” (cursiva nuestra). Véase también la conclusión del estudio amplio del Derecho Internacional Penal Consuetudinario en la materia, Robert Dubler & Matthew Kalyk, *Crimes against Humanity in the 21st Century, Law, Practice and Threats to International Peace and Security*, Brill Nijhoff, Leiden & Boston (2018) (Dubler & Kalyk), p. 652.

961. Las características de los operativos armados llevados a cabo por la Policía Nacional y los grupos armados pro-gobierno, manifiesta *prima facie*, disciplina en su accionar, coordinación, cooperación, y existencia necesaria de un plan de acción previo acordado, todo lo cual indica que las acciones se llevaron a cabo bajo instrucciones o bajo la dirección o control efectivo de actores e instituciones del Gobierno de Nicaragua, o con el consentimiento o la aquiescencia de estos. También indica profesionalismo, disciplina y educación previa en los grupos armados pro-gobierno que participaron en los operativos contra las protestas.

962. Desde el inicio de las protestas en 2018, las autoridades nicaragüenses instrumentalizaron el derecho penal y el sistema de justicia para perseguir a personas opositoras o percibidas como tales y suprimir toda crítica u oposición. Así, el sistema de justicia se convirtió en un engranaje estructurado y organizado para detener, de manera concertada y sistemática, a personas opositoras, reales o percibidas, y acusarlas, enjuiciarlas y ejecutar las sentencias en su contra, basadas en procesos con evidencia producida *ad hoc* o normativa interpretada y/o diseñada por la Asamblea Nacional para estos fines.

963. Durante las primeras semanas de las protestas, se registraron detenciones masivas de personas manifestantes, liberadas sin cargos entre 24 y 48 horas después. A partir de junio de 2018, el ataque a través de la criminalización se extendió a personas que asumieron un rol de liderazgo durante las manifestaciones. Entre julio de 2019 y abril de 2021, el ataque se dio mediante nuevas detenciones de personas opositoras, reales o percibidas, así como de recapturas de personas previamente encarceladas por su participación en las manifestaciones, y que habían sido excarceladas tras la adopción de la Ley de Amnistía. Durante este periodo, el Grupo identificó un fenómeno de “puerta giratoria”, por el que las autoridades detenían y liberaban a un número similar de personas, permitiendo mantener una estabilidad en las cifras de personas detenidas.

964. Entre mayo y noviembre de 2021, las autoridades hicieron uso del derecho penal para dirigir el ataque contra personas vinculadas a las elecciones presidenciales, incluyendo la precandidata y los seis precandidatos que habían anunciado su disposición a participar en las elecciones, así como muchos de los principales liderazgos políticos de oposición, personas activas en la organización de movimientos y partidos políticos, periodistas, y académicos. A partir de agosto de 2022, el ataque, a través de la instrumentalización del derecho penal se extendió a otros perfiles de voces críticas o percibidas como tales, incluyendo líderes religiosos e integrantes de la Iglesia Católica, familiares de personas opositoras o percibidas como tales, y familiares de víctimas de violaciones y abusos a los derechos humanos que habían reclamado justicia.

965. En el marco de la instrumentalización del ataque a través del sistema de justicia, el GHREN documentó el uso generalizado, entre abril de 2018 y a la fecha del cierre de este informe, de prácticas de tortura física y psicológica y otros tratos o penas crueles, inhumanos, o degradantes, incluyendo violencia sexual y violencia de género, en el contexto de las capturas, interrogatorios, detención en custodia policial y privación de libertad en las cárceles de Sistema Penitenciario Nacional de personas opositoras, reales o percibidas. Asimismo, el Grupo documentó la instrumentalización de un “*entorno de tortura*” –es decir, la exposición a una variedad de situaciones y a una combinación de métodos deliberadamente diseñados para infligir dolor y sufrimientos mentales y físicos– con respecto a las personas detenidas a partir de mayo de 2021.

966. Desde abril de 2018, el Gobierno de Nicaragua también instauró un marco de propaganda, desinformación, victimización, fomento del odio e incitación a la violencia, a través del cual se instrumentó el ataque contra la población civil que inicialmente manifestaba de forma pacífica su descontento y oposición contra Daniel Ortega y Rosario Murillo, y las políticas y actos de su Gobierno. La campaña discriminatoria se construyó e implementó de manera metódica, disciplinada y meticulosamente coordinada, a través de actos públicos y de medios de comunicación oficiales, así como de redes sociales y medios oficialistas. El GHREN concluyó que ésta fue operada y coordinada desde diversas dependencias del Gobierno y difundida en todo el territorio nicaragüense, a partir de un discurso nacionalista,

cargado intencionalmente de desinformación, y discriminatorio contra todos aquellos que manifestaron una postura contraria al Gobierno.¹⁵⁶³

967. Durante las protestas de 2018, la campaña persecutoria articulada para justificar el ataque contra la población civil consistió en implantar en la población nicaragüense y en la comunidad internacional, de manera intencional, la idea de que el Gobierno estaba sufriendo un ataque por parte de la oposición, con el apoyo de Estados Unidos, con la intención de derrocar al Presidente Daniel Ortega y a la Vicepresidenta Rosario Murillo. De acuerdo con el Presidente Ortega, estos “conspiradores” aprovecharon el descontento de la población en abril de 2018 para atacar al Gobierno de manera violenta.¹⁵⁶⁴ El GHREN pudo identificar que, desde abril de 2018 y a medida que las protestas continuaron y la amplitud del reclamo pacífico tomó dimensiones a nivel nacional, el Gobierno de Ortega–Murillo, recurrió a gestar un discurso público de construcción de un enemigo común que trascendiera a su Gobierno, consciente que su apoyo por parte de grupos sociales tradicionalmente afines al Gobierno se erosionaba.

968. Como parte del ataque a la población civil implementado a través de la campaña de desinformación, el Grupo documentó que, en varios casos, las autoridades, incluyendo el propio Presidente Daniel Ortega, afirmaron que personas fallecidas durante las protestas de 2018 eran simpatizantes del partido de Gobierno y que habían sido asesinadas por las personas manifestantes. Esta información fue posteriormente desmentida por testigos y familiares de las víctimas, quienes explicaron que las personas fallecidas no eran simpatizantes del Gobierno ni integrantes de grupos armados pro-gobierno, sino que estaban participando en las manifestaciones.

969. La campaña discriminatoria de desinformación ha continuado hasta la fecha de redacción de este informe. En octubre de 2021, Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, anunció que había eliminado 1.300 cuentas falsas en Nicaragua, así como 140 páginas y 24 grupos que, según la compañía, eran parte de una “granja de troles” vinculada al Gobierno y al FSLN. Según el informe, las cuentas anuladas habrían formado parte de una red que implementaba campañas de desinformación a favor del Gobierno de Nicaragua que habrían sido operadas principalmente por empleados de TELCOR, trabajando desde la sede del servicio postal en Managua, mientras que grupos más pequeños de cuentas falsas se habrían manejado desde otras instituciones gubernamentales, incluida la CSJ y el INSS.¹⁵⁶⁵

970. Además de la campaña discriminatoria, el ataque incluyó otros actos discriminatorios y/o violentos ocurridos en el contexto del cierre masivo de los espacios cívicos y públicos, incluyendo: intimidaciones, amenazas, vigilancias y agresiones contra personas opositoras o percibidas como tales por agentes de Policía e integrantes de grupos pro-gobierno y de estructuras locales afines al FSLN; la cancelación masiva de personería jurídica de asociaciones civiles y fundaciones asociadas a la población civil cimbrada en el ataque; la prohibición de funcionamiento de las sedes de los partidos políticos opositores y la remoción de opositores al Gobierno de cargos públicos a los cuales habían accedido por medio del voto popular de la ciudadanía; el cierre de medios de comunicación masiva -prensa, radio, y televisión- independientes en el país.

971. Los patrones de violaciones a las libertades y derechos de las personas opositoras, reales o percibidas, se agudizaron en febrero de 2023 con la privación de la nacionalidad nicaragüense a 316 personas. El 9 de febrero, el Gobierno de Nicaragua expulsó a 222 personas presas por motivos políticos, que volaron hacia Estados Unidos en virtud de una

¹⁵⁶³ Véase, Telesur TV.net, Ortega: Las reglas las pone la Constitución, no los golpistas, 7 julio 2018, disponible en: <https://www.telesurTV.net/news/daniel-ortega-caminata-paz-nicaragua-discurso-20180707-0034.html>; Twitter, teleSUR TV difundiendo mensaje del Presidente Ortega, 7 julio 2018, disponible en: <https://twitter.com/teleSURtv/status/1015740266425266176/photo/1>.

¹⁵⁶⁴ Véase, Entrevista del periodista Marc Perelman al presidente Daniel Ortega en France24 en Español, 11 de septiembre de 2018 (03:58- 06:14), disponible en: <https://www.france24.com/es/20180911-entrevista-daniel-ortega-crisis-nicaragua-trump>; el 19 Digital, “Rosario en Multinoticias” (20 de abril de 2020), disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:76084-rosario-en-multinoticias-edicion-especial-19-de-abril-del-2018>.

¹⁵⁶⁵ Meta, Informe de Comportamiento Inauténtico Coordinado (octubre 2021), disponible en: https://about.fb.com/ltam/wp-content/uploads/sites/14/2021/11/Copia-de-CIB-October_2021.pdf.

orden de “deportación” expedida por el Tribunal de Apelaciones de Managua, declarándolas “traidoras a la patria”. Paralelamente, la Asamblea Nacional adoptó de manera urgente una reforma constitucional y legislación específica para privar de su nacionalidad a las personas declaradas “traidoras a la patria”. El 15 de febrero de 2023, el mismo tribunal declaró a otras 94 personas, residentes en Nicaragua y en el exterior, “traidoras a la patria” y resolvió imponer la pérdida de la nacionalidad y ordenar el decomiso de su patrimonio a favor del Estado. El decomiso se ejecutó de manera inmediata.

3. “Sistemático o generalizado”

972. Los hechos forman una línea de conducta contra personas por ser integrantes de una población civil, cuando se producen de forma sistemática o generalizada.¹⁵⁶⁶ El ataque es “sistemático”, cuando los hechos se producen de una manera organizada, y es improbable de que ocurran al azar, formando patrones de conducta que se repiten de manera no accidental y similares en forma regular.¹⁵⁶⁷ Los hechos forman un ataque “generalizado” contra una población civil cuando se trata de una acción masiva, frecuente, a gran escala, llevada a cabo colectivamente con considerable rigor y dirigida a múltiples víctimas.¹⁵⁶⁸

973. Aunque las dos características son elementos alternativos del tipo penal,¹⁵⁶⁹ en la práctica los criterios de “generalizado” y “sistemático” suelen resultar complejos de diferenciar,¹⁵⁷⁰ ya que un ataque generalizado dirigido a un gran número de víctimas generalmente se basa en algún tipo de organización.¹⁵⁷¹ Un ataque generalizado puede consistir tanto en el efecto acumulativo de una serie de actos como en el efecto puntual de un evento en sí mismo de extraordinaria magnitud,¹⁵⁷² siendo el criterio cuantitativo no objetivamente definible como lo demuestra el hecho de que ni los instrumentos internacionales ni la jurisprudencia internacional y nacional han establecido umbrales precisos a partir de los cuales se considera que se ha producido un crimen contra la humanidad.¹⁵⁷³

¹⁵⁶⁶ *Tadić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 644.

¹⁵⁶⁷ *Ibid.*, párr. 648; *Kunarac*, Sentencia de Apelación, párr. 94; *Kordić & Čerkez*, Sentencia de Apelación, párrs. 94 y 666; *Blaškić*, Sentencia de Apelación, párr. 101; *Akayesu*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 580; *Nahimana et al.*, Sentencia de Apelación, párr. 920; *Duch*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 300. TESL, *Brima et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 215; *Taylor*, sentencia de primera instancia, párr. 511; SAE, *Habré*, Sentencia, párrs. 1360 y siguientes.

¹⁵⁶⁸ *Ibid.*

¹⁵⁶⁹ *Tadić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 646; *Tadić*, Sentencia de Apelación, párr. 248; *Kunarac*, Sentencia de Apelación, párrs. 93 y 97; *Akayesu*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 579; *Nahimana et al.*, Sentencia de Apelación, párr. 920, señalando que la palabra “et” en la versión francesa del TPIR Estatuto se debía a un error de traducción; *Duch*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 300; *Brima et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 215.

¹⁵⁷⁰ TPIY, *Prosecutor v. Goran Jelisić*, causa núm. IT-95-10-T, Judgement, 14 de diciembre de 1999 (*Jelisić*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 53.

¹⁵⁷¹ TPIY, *Prosecutor v. Tihomir Blaškić*, causa núm. IT-95-14-T, Judgement, 3 de marzo de 2000 (*Blaškić*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 207.

¹⁵⁷² *Tadić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 648; *Blaškić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 206; *Prosecutor v. Dario Kordić and Mario Čerkez*, causa núm. IT-95-14/2-T, Judgement, 26 de febrero de 2001 (*Kordić & Čerkez*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 179; *Bagilishema*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 77; *Duch*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 300.

¹⁵⁷³ *Blaškić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 207. A modo de ejemplo, en el caso CPI, Sala de Primera Instancia II, *Prosecutor v. Germain Katanga*, causa núm. ICC-01/04-01/07: ICC-01/04-01/07-3436-tENG, Judgement pursuant to article 74 of the Statute, 7 de marzo de 2014 (*Katanga*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 869, un número de al menos 30 víctimas fatales identificadas, además de 3 víctimas de violaciones/esclavitud sexual, han sido considerados suficientes para satisfacer el requisito de “comisión múltiple”, o en efecto, los requisitos “generalizado o sistemático”, en los términos del Estatuto de Roma, art. 7(1)(a) y 7(2)(a), para establecer el elemento del contexto en la condena por asesinato como crimen de lesa humanidad. Dubler & Kalyk (p. 616) han argumentado en base a un estudio amplio del DIPIC, que el estado actual del derecho internacional consuetudinario sugiere que se requiere un estallido de violencia extrema que por lo general implica del orden de al menos 100 muertes, y aun así puede depender de las circunstancias, tales como el nivel de organización o presencia del Estado y la forma en que las víctimas han sido atacadas. Según los mismos, pequeños ataques pueden

974. El carácter generalizado y sistemático del ataque son conceptos relativos que deben evaluarse en relación con lo que se considera la población atacada,¹⁵⁷⁴ y tomando en cuenta que el ataque puede tener varios componentes.¹⁵⁷⁵ La evaluación debe llevarse a cabo caso por caso,¹⁵⁷⁶ siendo el caso por excelencia cuando la línea de conducta tenga su origen en el poder del Estado.¹⁵⁷⁷

975. Factores que pueden tenerse en cuenta para determinar si un ataque es “generalizado o sistemático” son, entre otros:¹⁵⁷⁸

- circunstancias históricas generales y el contexto político global en el que se enmarcan los actos delictivos;¹⁵⁷⁹
- posibles patrones delictivos que puedan determinarse;¹⁵⁸⁰
- existencia y repetición de pautas de actos violentos;¹⁵⁸¹
- medios y métodos o *modus operandi* utilizado;¹⁵⁸²
- repetición y multiplicación de actos discriminatorios dirigidos contra determinados miembros de la población;¹⁵⁸³
- adopción de leyes y medidas discriminatorias contra grupos identificables de personas;¹⁵⁸⁴
- selectividad de la criminalidad, victimizando categorías específicas de individuos;¹⁵⁸⁵
- identidad y afiliación de las víctimas;¹⁵⁸⁶
- número y característica de los incidentes y número de las víctimas;¹⁵⁸⁷
- alcance de los actos dirigidos contra miembros de la población afectada;¹⁵⁸⁸
- duración y alcance geográfico del ataque, pudiendo alcanzar el territorio entero de un país¹⁵⁸⁹ pero no necesariamente;
- carácter planificado y organizado del ataque;¹⁵⁹⁰

alcanzar el umbral cuando existe una política clara que tenga su origen en el poder del Estado para atacar a la población. *Ibid.*

¹⁵⁷⁴ TPIY, *Prosecutor v. Dragoljub Kunarac et al.*, causa núm. IT-96-23-T & IT-23/1-T, Judgement, 22 de febrero 2001 (*Kunarac*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 430; *Kunarac*, Sentencia de Apelación, párr. 95.

¹⁵⁷⁵ TPIY, *Prosecutor v. Vujadin Popović et al.*, causa núm. IT-05-88-T, Judgement, 10 de junio de 2010 (*Popović et al.*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 760, nota 2780.

¹⁵⁷⁶ *Karadžić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 477.

¹⁵⁷⁷ UNWCC, *History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of the Laws of War*, p. 179 (“particularly if it was authoritative”); *Tadić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 648.

¹⁵⁷⁸ Véase, además, el análisis de los factores relevantes desarrollados en la jurisprudencia internacional por el Juez Mettraux, Juez Guénaél Mettraux, *International crimes, Law and practice. Volume II, Crimes against humanity*, Oxford University Press, Oxford 2020, pp. 228–232 y 277–285.

¹⁵⁷⁹ *Blaškić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 204.

¹⁵⁸⁰ *Kunarac*, Sentencia de Apelación, párrs. 95.

¹⁵⁸¹ *Kunarac*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 570 y ss.

¹⁵⁸² *Kupreškić*, Sentencia de primera instancia, párr. 761.

¹⁵⁸³ *Kunarac*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 571–573.

¹⁵⁸⁴ TPIY, *Prosecutor v. Momčilo Krajišnik*, causa núm. IT-00-39-T, Judgement, 27 de septiembre de 2006 (*Krajišnik*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 708.

¹⁵⁸⁵ *Limaj et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 227.

¹⁵⁸⁶ CPI, Sala de Cuestiones Preliminares II, *Situation in the Republic of Kenya*, registro núm. ICC-01/09-19-Corr, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, 31 de marzo de 2010, párr. 108.

¹⁵⁸⁷ *Kunarac*, Sentencia de Apelación, párr. 95.

¹⁵⁸⁸ *Kunarac*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 574–575.

¹⁵⁸⁹ TPIR, *Prosecutor v. Augustin Ngirabatware*, causa núm. ICTR-99-54-T, Judgement and Sentence, 20 de diciembre 2012, párr. 1374.

¹⁵⁹⁰ *Kunarac*, Sentencia de Apelación, párrs. 95 y 101.

- operaciones militares, policiales o de grupos paraestatales, coordinadas y repetidas temporal y geográficamente que conduzcan al mismo resultado;¹⁵⁹¹
- identidad de los perpetradores y circunstancias en los cuales se cometieron los actos;¹⁵⁹²
- objetivo detrás de la línea de conducta;¹⁵⁹³
- coincidencia entre los hechos violentos y una agenda política que subyace a los hechos;¹⁵⁹⁴
- existencia de un objetivo político, de un plan en virtud del cual se perpetra el ataque, o de una ideología, en el sentido amplio del término, esto es, destruir, perseguir o debilitar a una comunidad;¹⁵⁹⁵
 - existencia de un plan o política que sustente el ataque,¹⁵⁹⁶ manifestada, en particular, en los escritos y discursos de dirigentes políticos, y en la propaganda de los medios de comunicación;¹⁵⁹⁷
 - presencia de autoridades políticas y/o militares de alto nivel en la definición y el desarrollo del plan metódico;¹⁵⁹⁸
 - existencia de propaganda violenta, discursos de odio o llamamientos a la violencia dirigidos a la población en cuestión;¹⁵⁹⁹
 - represión violenta de la disidencia política;¹⁶⁰⁰
 - complicidad y participación de las autoridades en la realización de los hechos;¹⁶⁰¹
 - recursos movilizados en el ataque,¹⁶⁰² incluyendo la participación de un Estado u organización en el aporte de dichos recursos;¹⁶⁰³
 - no llevar a los responsables ante la justicia¹⁶⁰⁴ ni impedir o disuadir la comisión de nuevos delitos.¹⁶⁰⁵

976. En cuanto a la duración del ataque, se considera que éste perdura mientras se pueda demostrar que los actos que lo componen forman parte del ataque dirigido contra la población civil, en lugar de dirigirse contra miembros específicos de dicha población, siendo una línea de conducta con patrones que perduren por varios años indicativa para la sistematicidad del ataque.¹⁶⁰⁶ Hechos ocurridos antes del inicio del ataque podrían ser relevantes para establecer

¹⁵⁹¹ *Blaškić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 204; para una ilustración más allá del aspecto militar, véase CPI, Sala de Cuestiones Preliminares I, *Prosecutor v. Laurent Koudou Gbagbo*, causa núm. ICC-02/11-01/11-656-Red, Decision on the confirmation of charges against Laurent Gbagbo, 12 de junio de 2014 (*Gbagbo*, Decisión de Confirmación de Cargos) párrs. 78 y ss, 223.

¹⁵⁹² *Gbagbo*, Sentencia de Confirmación de Cargos, párr. 212.

¹⁵⁹³ *Kupreškić* Sentencia de Primera Instancia, párr. 726.

¹⁵⁹⁴ Ilustrativo, TPIY, *Prosecutor v. Dragomir Milošević*, causa núm. IT-98-29/1-T, Judgement, 12 de diciembre de 2007, párr. 927 in fine.

¹⁵⁹⁵ *Blaškić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 203.

¹⁵⁹⁶ *Kunarac*, Sentencia de Apelación, párr. 98.

¹⁵⁹⁷ *Jelisić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 53.

¹⁵⁹⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹⁹ *Kunarac*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 572.

¹⁶⁰⁰ *Gbagbo*, Sentencia de Confirmación de Cargos, párr. 211.

¹⁶⁰¹ TPIY, *Kunarac*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 576.

¹⁶⁰² *Kunarac*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 430.

¹⁶⁰³ *Nahimana et al.*, Sentencia de Apelación, párr. 922.

¹⁶⁰⁴ Véase *Gbagbo*, Sentencia de Confirmación de Cargos, párrs. 182–192, 223; OGH StS, Caso Weller, Sentencia del 21 de diciembre de 1948, OGH StS 1, 205–207, p. 207.

¹⁶⁰⁵ En el mismo sentido, el planteamiento de la Fiscalía en CPI, *Bangladesh/Myanmar*, Decision conforme al Artículo 15, párr. 90.

¹⁶⁰⁶ CPI, Sala de Cuestiones Preliminares I, *Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir*, causa núm. ICC-02/05-01/09-3, Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 4 de marzo de 2009, párr. 85.

tanto el contexto en el cual se produce el ataque, como las circunstancias generales que condujeron o proporcionaron el marco para el ataque.¹⁶⁰⁷

977. A pesar de que el ataque contra la población civil ha adoptado muchas formas a lo largo del tiempo, el GHREN ha documentado en el presente informe un *continuum* de violencia coordinada desde abril de 2018 y hasta la fecha de redacción de este informe, y en todo el territorio de Nicaragua, con un epicentro en la ciudad de Managua. El GHREN ha podido documentar de manera directa que diversos actores del Gobierno y miembros de grupos pro-gobierno –actuando por instrucciones o bajo la dirección o control efectivo de actores e instituciones del Gobierno de Nicaragua, o con el consentimiento o la aquiescencia de estos–, cometieron ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos, violencia sexual y persecución política en al menos 11 departamentos del país, causando un gran número de víctimas. Esto demuestra, *prima facie*, el carácter sistemático y generalizado del ataque.

978. El carácter sistemático y generalizado del ataque también ha quedado demostrado a través de la evolución y ampliación del perfil de las víctimas objeto de crímenes, violaciones y abusos documentados por el GHREN, empezando por las personas manifestantes de 2018, entre otras y concluyendo, a la fecha de redacción de este informe, con las 94 personas, residentes en Nicaragua y en el exterior, que fueron declaradas “traidoras a la patria” y a quienes el Gobierno resolvió imponerles la pérdida de su nacionalidad nicaragüense.

979. El GHREN concluyó que los crímenes, violaciones y abusos que se han cometido desde abril de 2018 no son un fenómeno aislado, sino una herramienta de la agenda política del Gobierno Ortega–Murillo, que ha tenido el objetivo político de destruir y perseguir a las personas opositoras en Nicaragua, reales o percibidas. Antecede a esta agenda el desmantelamiento de la separación de poderes, la concentración del poder en las figuras del Presidente y Vicepresidenta de la República, y la confusión entre el Estado y sus instituciones y el partido de Gobierno.

980. En este sentido, el Gobierno se valió de toda la estructura del Estado para instrumentalizar su ataque contra un sector de la población nicaragüense, de manera articulada y coordinada. Desde abril de 2018, se puso en marcha una campaña discriminatoria de desinformación y propaganda política instigando al desarrollo y divulgación general de un mensaje violento comunicacional, a través del cual el Gobierno intentó justificar su accionar criminal e implantar en la sociedad nicaragüense la noción de urgencia que se estaba viviendo, respecto a un supuesto ataque foráneo contra la propia existencia del Estado de Nicaragua.¹⁶⁰⁸ Ese supuesto ataque, estaba siendo llevado a cabo mediante la colaboración de parte de la población civil en Nicaragua que había salido a protestar a las calles. De este modo, Daniel Ortega, Rosario Murillo y su Gobierno etiquetaron a todos aquellos que se manifestaban en su contra como “enemigos” o “terroristas” o “golpistas”.

981. So pretexto del ataque en su contra, el Gobierno Ortega–Murillo generó una suerte de auto golpe de Estado, que le permitió lanzar su campaña persecutoria y terminar de desarticular los mecanismos de control y balance propios de una democracia, con el fin de centralizar de manera ilegítima y criminal su poder, para así poder eliminar de forma efectiva a la oposición y a todo tipo de manifestación de la población civil que cuestionara su plan de acción o narrativa.

982. La propagación del discurso descrito, de manera reiterada en el tiempo, y amplificadas a través de medios y redes sociales, ha contribuido a generar un clima de desinformación y

¹⁶⁰⁷ Véase SCGBH, *Prosecutor v. Mladen Blagojević*, causa núm. X-KR/06/236, Verdict, 6 de noviembre 2008, señalando que “al evaluar la naturaleza del ataque contra el enclave de Srebrenica, el Tribunal tuvo en cuenta [...] los acontecimientos en el territorio del propio enclave antes de la toma de Srebrenica” (p. 40).

¹⁶⁰⁸ El GHREN no encontró evidencia alguna de que hubiera un plan preconcebido, planificación o usurpación del poder por parte de las personas y grupos que participaron en las manifestaciones masivas de 2018. Véase Euronews en español, “Oscar Valero responde a vuestras preguntas sobre la entrevista a Daniel Ortega”, 31 de julio 2018, minuto 10:55, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=saErUvujQA8>; DW Español, “Entrevista exclusiva con Daniel Ortega”, min. 2:30 (9 de septiembre de 2018), disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=U8zxb6Lh7qs>.

de hostilidad hacia las voces críticas al Gobierno, propicio para la comisión de otras violaciones y abusos en su contra. Teniendo en cuenta el contexto general de represión de toda oposición o crítica, y de impunidad frente al ataque por parte del Gobierno y del sector de la población alineado con el Gobierno contra la población no alineada, el GHREN considera que el discurso descrito constituye incitación a la violencia.

983. En cuanto a los medios y métodos utilizados en el ataque, es decir, el *modus operandi* del ataque, el GHREN recuerda que durante las protestas del 2018, elementos de la Policía Nacional y grupos armados pro-gobierno, siguiendo órdenes de, o en coordinación con, la jerarquía del Gobierno de Ortega–Murillo, recurrieron de manera coordinada al uso metódico de ejecuciones extrajudiciales, detenciones y arrestos arbitrarios, y actos de tortura y maltrato físico, incluidas las violaciones, contra las personas manifestantes. Asimismo, a lo largo del territorio nacional se denegó de manera estructurada la atención médica a los heridos, en implementación a una orden directa del Ministerio de Salud.

984. A medida que los actos de protestas iban en aumento en todo el territorio de Nicaragua, el Gobierno fue incrementando el uso desproporcionado de la fuerza contra las personas opositoras o percibidas como tales. De esta manera armó y permitió de manera expresa y/o tácita la participación de grupos armados pro-gobierno, en forma conjunta con la Policía Nacional y/o separada, en el ataque dirigido contra la población civil. El GHREN ha constatado que la mayoría de los integrantes de esos grupos armados pro-gobierno operaban de manera coordinada y articulada con tácticas de combate, que usualmente corresponden al ejército o fuerzas especiales de la policía. Estos grupos contaban con una gran capacidad de medios logísticos para sus desplazamientos y, además, se encontraban compartiendo espacios con efectivos de la Policía Nacional, en donde era evidente la utilización de armas y de métodos de retención de personas de la población, sin que la Policía hiciera nada en su contra.

985. En todos los incidentes analizado, el Grupo identificó que, tanto la Policía Nacional como los grupos armados pro-gobierno, utilizaron de manera regular y metódica, en varios departamentos de Nicaragua, armas de fuego. El Grupo identificó el uso de armas restringidas –como es el caso de los fusiles de guerra de francotiradores tipo Dragunov– por la Policía Nacional, lo cual está prohibido en estas circunstancias. Asimismo, pudo confirmar el uso de estas armas por grupos armados pro-gobierno que actuaban en presencia de la policía o con su aquiescencia y/o en forma coordinada y conjunta.

986. A la par de los actos de violencia en contra de la población civil que resultaron en lesiones y asesinatos, las autoridades de Nicaragua utilizaron las detenciones arbitrarias como un método más del ataque. El GHREN documentó la práctica generalizada de violaciones a las garantías judiciales para atacar a personas opositoras al Gobierno o consideradas como tales, incluyendo la denegación de información fehaciente a familiares sobre el paradero de las personas detenidas; el uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva; falta de igualdad ante los tribunales, incluyendo la falta de igualdad de medios procesales y violaciones del derecho a una defensa eficaz por un abogado o abogada de elección de la persona acusada; procesos bajo cargos infundados; y la aplicación de penas de prisión largas y severas, entre otras.

987. El Gobierno también se valió de condiciones carcelarias y prácticas penitenciarias discriminatorias deliberadamente infringidas para quebrantar, castigar, y disuadir cualquier expresión crítica hacia el Gobierno, así como de la aplicación de actos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en los centros de detención a lo largo del país. El Grupo pudo documentar de manera más precisa la existencia de estas prácticas y condiciones en El Chipote, El Nuevo Chipote, La Modelo y La Esperanza, pero tiene información que indica que las mismas se replicaron en otros centros de detención.

988. Desde julio de 2018, el Gobierno también se valió del apoyo de la Asamblea Nacional para desarrollar todo un andamiaje legal orientado a la restricción y criminalización del ejercicio de las libertades fundamentales, que incluyó la adopción de la Ley Contra el Lavado de Activos, la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos, la Ley de Soberanía, la Ley de Organizaciones Sin Fines de Lucro, y la Ley de reformas electorales. Estas leyes fueron adoptadas a pesar de las denuncias y preocupaciones expuestas públicamente y en forma conjunta por miembros de la comunidad internacional, incluyendo Relatores de la ONU.

989. El GHREN documentó el uso de estas leyes como un instrumento del ataque, a través de la aplicación sistemática de las mismas para cancelar la personería jurídica de partidos políticos y organizaciones sin fines de lucro, cerrar medios de comunicación, confiscar arbitrariamente bienes, y perseguir, a través de la instrumentalización del derecho penal, a personas opositoras, reales o percibidas. En este sentido, el Grupo comprobó la inclusión generalizada de medidas de cumplimiento administrativo burocráticas y onerosas para hacer imposible el funcionamiento de partidos políticos opositores y organizaciones sin fines de lucro. La implementación sistemática de estos métodos persecutorios obligó a los representantes de muchas asociaciones civiles y fundaciones a cerrar sus oficinas, cesar operaciones y, en muchos casos, salir del país. Dada a situación en Nicaragua, y de haber permanecido en el país, estas personas podrían haberse visto en la situación de no poder trabajar, ser segregadas de la participación de la vida pública, vigiladas, amenazadas y correr el riesgo de ser detenidos arbitrariamente, sujetas a malos tratos, y ser condenadas penalmente por la criminalización de actos ligados a la política o promoción y defensa de los derechos humanos.

990. Otras instituciones del Gobierno también fueron utilizadas para la implementación del ataque. Por ejemplo, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), procedió al cierre arbitrario de medios de comunicación independientes, así como a la suspensión de las transmisiones de varios canales de televisión. El GHREN recibió información que su antiguo director transmitió mensajes intimidatorios de autocensura a las personas responsables de algunos de los de comunicación más importantes del país.

991. La coordinación entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la implementación del ataque contra la población civil fue evidente en febrero de 2023 con la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense a 316 personas, de manera discriminatoria y en violación de las garantías de debido proceso. En virtud de una orden de deportación expedida por el Tribunal de Apelaciones de Managua, declarando “traidoras a la patria” a 222 personas que habían sido arbitrariamente detenidas por ser opositoras, reales o percibidas, el Gobierno de Nicaragua las deportó hacia Estados Unidos. Paralelamente, la Asamblea Nacional adoptó por la vía del trámite de urgencia una reforma constitucional y legislación específica para privar de su nacionalidad a las personas declaradas “traidoras a la patria”. El Presidente Daniel Ortega describió la salida de las personas como un “destierro” mientras que el presidente de la Asamblea Nacional confirmó que las diferentes instituciones y poderes del Estado trabajaron sincronizadamente bajo una misma orden para deportar y privar a las personas de su nacionalidad. Unos días más tarde, el Tribunal de Apelaciones de Managua declaró a otras 94 personas, residentes en Nicaragua y en el exterior, “traidoras a la patria” y resolvió imponer la pérdida de la nacionalidad y ordenar el decomiso de su patrimonio a favor del Estado. Tal y como ha quedado documentado en este informe, dicha orden fue emitida sin la celebración de ningún proceso que permitiese a las personas ejercer su derecho de defensa.

D. Actos prohibidos

992. No existe consenso sobre la lista de los crímenes -y sus elementos- que pueden constituir crímenes de lesa humanidad en el Derecho Internacional Consuetudinario.¹⁶⁰⁹ En todo caso, resulta evidente que entre los crímenes que pueden alcanzar esta categoría, se encuentran: el asesinato; deportación; la encarcelación; la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo actos de violencia sexual y basada en género; y la persecución por motivos políticos, entre otros.¹⁶¹⁰

¹⁶⁰⁹ Véase A/74/10, ejemplos en los comentarios nos. 37–46 al proyecto del artículo 2. El artículo 2 no es concebido como proyecto de una codificación de una norma establecida del Derecho Internacional Consuetudinario en la materia, ya que la CDI no establece si la lista de delitos que figura en el artículo 2, y que refleja en gran medida el artículo 7 del Estatuto de Roma, tiene realmente los fundamentos necesarios en la práctica y *opinio juris*.

¹⁶¹⁰ Véase Estatuto del TPIY, art. 5(a),(d),(e),(f),(h); Estatuto del TPIR, art. 3(a),(d),(e),(f),(h); Estatuto de UNTAET Panels, sección 5.1(a),(d),(e),(f),(h); Estatuto del TESL, artículo 2(a),(d),(e),(f),(h); Ley de

1. Asesinato

993. El hecho de asesinar o causar la muerte de una persona en el contexto de un ataque generalizado y/o sistemático dirigido contra la población civil constituye el crimen de lesa humanidad de asesinato. Este delito también incluye las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y/o arbitrarias, tal y como han sido interpretadas en el derecho internacional penal; es decir, “las ejecuciones ilícitas y deliberadas realizadas por orden de un Gobierno o con su complicidad o aquiescencia.”¹⁶¹¹

994. Según el Derecho Internacional Consuetudinario en materia penal, para calificar una conducta de asesinato como crimen de lesa humanidad, se requiere establecer (i) que la víctima está muerta; (ii) que la muerte fue causada por una acción u omisión de la persona acusada, o de una persona o personas por cuyas acciones u omisiones la persona acusada tiene responsabilidad penal; y (iii) que el acto o la omisión fue realizado por la persona acusada, o una persona o personas por cuyos actos u omisiones tiene responsabilidad penal, con la intención de matar o de infligir daños corporales graves o lesiones graves, con conocimiento razonable que tal acto u omisión era probable que causara la muerte.¹⁶¹²

a) Muerte de las víctimas

995. Tal y como se desarrolló en la sección III.A del presente informe, ante la falta de datos oficiales confiables, organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han desarrollado sus propios registros y listados de personas fallecidas en el marco de la crisis de derechos humanos que se desencadenó en 2018 en Nicaragua. De acuerdo con los registros de CEJIL y de la CIDH, entre 342 y 350 personas, respectivamente, fallecieron en Nicaragua en el periodo comprendido del 18 de abril al 1 de octubre de 2018. De acuerdo con CEJIL, 281 de las 342 muertes documentadas, estarían vinculadas al contexto de la protesta social.

996. El GHREN investigó 40 muertes en el contexto de protestas, concluyendo que en todos los casos se cometieron ejecuciones extrajudiciales. En 36 de estos casos, agentes de la Policía Nacional e integrantes de grupos pro-gobierno actuaron de manera conjunta y coordinada. En cuatro casos no se pudo establecer la participación directa de elementos de la Policía Nacional; sin embargo, los grupos armados pro-gobierno actuaron con total impunidad.

997. El Grupo tiene motivos razonables para creer que las víctimas de cada uno de los casos investigados en el presente informe pertenecían a la población civil de Nicaragua. Las víctimas fueron personas de todas las edades –aunque en su gran mayoría menores de 35 años–, pertenecientes a todos los sectores de la sociedad nicaragüense y vinculadas a las protestas sociales multitudinarias de 2018 que se llevaron a cabo en casi todos los departamentos del país. Muchas de las víctimas fueron ejecutadas mientras participaban en manifestaciones o en tranques y barricadas; algunas se encontraban en las inmediaciones del escenario de protesta, pero no estaban participando en la misma; y otras fueron asesinadas mientras intentaban escapar de la Policía Nacional y/o de los grupos armados pro-gobierno.

b) Intención de los perpetradores

998. El GHREN tiene motivos para creer que la muerte de las víctimas de cada uno de los casos investigados se produjo como consecuencia de los actos de la Policía Nacional y/o de grupos armados pro-gobierno. El Grupo también tiene motivos razonables para creer que los autores materiales de cada uno de esos casos utilizaron fuerza letal de manera arbitraria, deliberada y sistemática, con la intención de matar a las víctimas o, al menos, de infligir intencionadamente daños o lesiones corporales graves, con el conocimiento razonable de que éstos podrían ocasionar la muerte.

Salas Extraordinarias, art. 5. Véase también, aunque más restringido que el Derecho Internacional Penal Consuetudinario, particularmente en cuanto al crimen de persecución, Estatuto de Roma, art. 7(1)(a),(d),(e),(f),(h); A/74/10, proyecto de artículo 2(1)(a),(d),(e),(f),(h).

¹⁶¹¹ *Kayishema & Ruzindana*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 140.

¹⁶¹² *Brđanin*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 381.

999. Para llegar a estas conclusiones, el Grupo tuvo en cuenta las circunstancias y la forma en la que las víctimas murieron. El GHREN pudo constatar, de acuerdo con los registros elaborados por diversas fuentes, que entre un 70 y un 80 por ciento de las muertes en el contexto de las manifestaciones de 2018 en diferentes localidades de Nicaragua, se produjeron por lesiones causadas por impactos de bala. De las 40 ejecuciones investigadas por el GHREN, 39 víctimas fallecieron como resultado de heridas causadas por armas de fuego; todas ellas presentaron impactos de bala en zonas vitales.

1000. La información recabada por el GHREN a través de varias fuentes primarias y secundarias confirma que, en el ejercicio de la represión de la protesta, las armas de fuego fueron apuntadas directamente contra las personas manifestantes. Cuando se analizan las zonas impactadas por los proyectiles de arma de fuego en los cuerpos de las personas manifestantes, se puede observar en la mayoría de los casos, un patrón en cuanto a las zonas impactadas que indicarían, *prima facie*, la intención de causar, al menos lesiones mortales de las víctimas. El número elevado de víctimas que sufrieron impactos en zonas vitales pone en evidencia que el objetivo de los actos de represión por parte de los elementos de la Policía Nacional y/o de grupos armados pro-gobierno, no fue detener o herir a las personas manifestantes, sino matarlas.

1001. Lo anterior ha quedado también documentado a través del análisis realizado por el GHREN sobre el tipo de armamento utilizado por la Policía Nacional y los grupos armados pro-gobierno durante los operativos de represión a las manifestaciones. Este incluyó armamento de guerra reglamentario como fusiles de asalto, fusiles M16, fusiles de francotirador Dragunov y ametralladoras PKM, que son armas de gran precisión y alcance, no permitido en entornos de manejo de protesta.

1002. En GHREN pudo demostrar la participación de elementos pertenecientes al destacamento TAPIR, a la Brigada Especial Antidisturbios y al Grupo de Intervención Rápida (GIR), todos ellos parte de la DOEP de la Policía Nacional, en operaciones que resultaron en la comisión de ejecuciones extrajudiciales. Estas unidades cuentan con armamento de largo alcance con efectivos entrenados para intervenir en crisis y en contextos de crimen organizado, terrorismo y lucha contra el narcotráfico, incluyendo francotiradores.

1003. La participación en los operativos de sujetos armados situados en una posición privilegiada de altura, incluyendo la probable participación de elementos con entrenamiento específico para francotiradores, denota una intención de emplear técnicas de combate, en lugar de otras técnicas de control de multitudes o tácticas policiales apropiadas para desescalar las situaciones de violencia. A su vez, el uso de estas técnicas indica una intencionalidad de producir la muerte de las personas manifestantes, ya que su entrenamiento está dirigido a abatir al blanco.

1004. Los operativos de la Policía Nacional y de los grupos armados pro-gobierno, ya sea de manera conjunta o separada, se realizaron de manera articulada y con el mismo *modus operandi*, uso de armamento prohibido y características en el despliegue de efectivos y desarrollo de los mismos. Conforme transcurrieron las semanas, los operativos adquirieron un mayor grado de sofisticación, mediante tácticas de combate que usualmente corresponden al ejército o fuerzas especiales de la policía, realizadas de manera coordinada, y requiriendo un significativo grado de planificación. La mayoría de los operativos de represión se produjeron en horarios vespertinos o en la madrugada, y en la oscuridad, limitando la capacidad de reacción de las personas manifestantes.

1005. El GHREN ha concluido con motivos razonables para creer que los crímenes documentados en el presente informe, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales en el marco de la protesta social, se cometieron en cumplimiento de un plan impulsado por el Presidente Daniel Ortega y los miembros de su círculo íntimo con el objetivo de conservar el poder presidencial a cualquier costo, incluso mediante el uso de la violencia contra la población, de cuyos ataques tuvo conocimiento en tiempo real.

1006. La presencia de unidades especiales nacionales de la Policía Nacional en todo el territorio, la magnitud de la movilización de efectivos policiales, la continuidad de las acciones policiales en el tiempo, la intervención y articulación de una variedad de fuerzas policiales durante la represión de las protestas, y el alto nivel de coordinación con grupos

armados pro-gobierno, demuestran la toma de decisiones e impartición de órdenes desde el más alto nivel de la estructura policial y del Estado.

1007. El GHREN tiene motivos razonables para creer que los actos u omisiones de las máximas autoridades del Estado nicaragüense en relación con la represión de la protesta social, incluyendo del Presidente Daniel Ortega, de los altos mandos de la Jefatura Nacional de la Policía Nacional, de los directivos de la DOEP y de las diferentes delegaciones departamentales de la Policía Nacional, de autoridades de diversas alcaldías y del FSLN, así como de funcionarios y funcionarias del Ministerio de Salud, se llevaron a cabo con la intención de que las personas manifestantes murieran o, al menos, de que se les infligieran intencionadamente daños o lesiones corporales graves, con el conocimiento razonable de que éstos podrían ocasionar la muerte

c) *Conclusión*

1008. El Grupo ha concluido con motivos razonables para creer, desde abril de 2018 y a la fecha de redacción de este informe, existe un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una parte de la población nicaragüense. El Grupo tiene motivos razonables para creer que las ejecuciones extrajudiciales mencionadas anteriormente forman parte de este ataque generalizado y sistemático. Para llegar a esta conclusión, el Grupo consideró las circunstancias de las ejecuciones que se correlacionan con el alcance del ataque generalizado y sistemático, incluyendo los lugares, el período de tiempo y la identidad de las víctimas. El Grupo también consideró la magnitud y la naturaleza sistemática del ataque contra la población civil nicaragüense. Por lo tanto, el Grupo tiene motivos razonables para creer que estas ejecuciones extrajudiciales constituyen el crimen de asesinato como crimen de lesa humanidad.

2. Deportación

1009. El tipo penal de deportación tiene como finalidad proteger el derecho y la aspiración de las personas a vivir en sus comunidades y hogares sin interferencias externas,¹⁶¹³ lo que incluye el derecho a no ser privado de su propiedad al ser desplazado por la fuerza a otro lugar.¹⁶¹⁴ La conducta puede consistir en una acción o en una omisión culpable.¹⁶¹⁵ A diferencia del “traslado forzoso”, cuyo estatus en Derecho Internacional Consuetudinario no está claro¹⁶¹⁶ y que puede llevarse a cabo enteramente dentro de las fronteras de un solo Estado, la deportación se efectúa, por definición, cruzando una frontera.¹⁶¹⁷ Según el Derecho Internacional Consuetudinario, para calificar una conducta de deportación de la población como crimen de lesa humanidad, se requiere (i) establecer el desplazamiento por la fuerza de individuos, (ii) que los individuos se encontraban legalmente en el territorio del que son desplazados, (iii) siendo el desplazamiento sin fundamento en el derecho internacional, (iv) con la intención de desplazar por la fuerza a la población.¹⁶¹⁸

¹⁶¹³ TPIY, *Prosecutor v. Milorad Krnojelac*, causa núm. IT-97-25-A, Judgement, 17 de septiembre de 2003 (*Krnojelac*, Sentencia de Apelación), párr. 218.

¹⁶¹⁴ TPIY, *Prosecutor v. Slobodan Milošević*, causa núm. IT-02-54-T, Decision on Motion for Judgement of Acquittal, 16 de junio de 2004, párr. 69.

¹⁶¹⁵ Véase TPIY, *Prosecutor v. Jadranko Prlić et al.*, causa núm. IT-04-74-A, Judgement, 29 de noviembre de 2017 (*Prlić et al.*, Sentencia de Apelación), párr. 2222.

¹⁶¹⁶ Dubler & Kalyk, pp. 814 y s.

¹⁶¹⁷ *Krstić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 531; *Krnojelac*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 474; TPIY, *Prosecutor v. Milomir Stakić*, causa núm. IT-97-24-A, Judgement, 22 de marzo de 2006 (*Stakić*, Sentencia de Apelación), párrs. 278, 300, 302, 317; TPIY, *Prosecutor v. Momčilo Krajišnik*, causa núm. IT-00-39-A, Judgement, 14 de marzo de 2009 (*Krajišnik*, Sentencia de Apelación), párr. 304; TPIY, *Prosecutor v. Jadranko Prlić et al.*, causa núm. IT-04-74-T, Judgement, 29 de mayo de 2013 (*Prlić et al.*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 47.

¹⁶¹⁸ *Blaškić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 234; *Krnojelac*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 474; *Stakić*, Sentencia de Apelación, párr. 278; *Krajišnik*, Sentencia de Apelación, párr. 304 y 726.

a) *Desplazamiento por la fuerza de individuos*

1010. Debe haber un desplazamiento “por la fuerza”.¹⁶¹⁹ En cuanto al Estatuto de Roma, se exige que la deportación¹⁶²⁰ se produzca mediante “expulsión u otros actos coercitivos” en consonancia con la jurisprudencia del TPIY.¹⁶²¹ Estos términos no se limitan a la fuerza física,¹⁶²² sino incluyen la amenaza con el ejercicio de la fuerza o coerción, la detención, la coacción, la opresión psicológica o el abuso de poder.¹⁶²³ Incluyen, además, la privación de derechos fundamentales.¹⁶²⁴

1011. El desplazamiento tiene que ser involuntario por naturaleza, de manera que los individuos no tengan una verdadera opción salvo la de desplazarse.¹⁶²⁵ Se trata de un elemento de “conducta abierta”; el autor puede cometer una variedad de conductas distintas que pueden equivaler a una expulsión u otras formas de coerción.¹⁶²⁶

1012. Para establecer el elemento, se tiene que probar que uno o más actos realizados produjeron el desplazamiento de la víctima por la fuerza.¹⁶²⁷ Un factor particularmente relevante es la vulnerabilidad de la víctima.¹⁶²⁸ Desde su perspectiva, la conducta debe ser la causa principal y directa de su desplazamiento; no basta con que las acciones tengan apenas alguna relación con su desplazamiento.¹⁶²⁹ Un entorno coercitivo por sí solo no es suficiente. Debe haber al menos un aprovechamiento de ese entorno coercitivo,¹⁶³⁰ cuando no una contribución individual al mismo.¹⁶³¹ Cuando la víctima dé su consentimiento o solicite su desplazamiento, es necesario determinar si dicho consentimiento es real, en el sentido de que sea emitido voluntariamente y sea el resultado de la libre voluntad de la persona, evaluada a la luz de las circunstancias presentes.¹⁶³² La falta de consentimiento genuino puede inferirse de un entorno coercitivo o intimidatorio.¹⁶³³

¹⁶¹⁹ *Krnojelac*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 475, reconfirmado en la sentencia de apelación, *Krnojelac*, Sentencia de Apelación, párr. 233.

¹⁶²⁰ Según los Elementos de los Crímenes de la CPI, los elementos “deportado o trasladado por la fuerza” son intercambiables con “desplazado por la fuerza”. CPI, Elementos de los Crímenes, p. 121, nota 12, artículo 7(1)(d), elemento núm. 1.

¹⁶²¹ Estatuto de Roma, art. 7(2)(d). Véase, TPIY, *Krstić*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 528, 530; *Krnojelac*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 475; *Stakić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 682; *Stakić*, Sentencia de Apelación, párr. 279; *Brđanin* Sentencia de Primera Instancia, párr. 543; *Prosecutor v. Zdravko Tolimir*, causa núm. T-05-88/2-T, Judgement, 12 de diciembre 2012 (*Tolimir*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 795; *Prosecutor v. Ratko Mladić*, causa num. IT-09-92-T, Judgement, 22 de noviembre de 2017 (*Mladić*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 3119.

¹⁶²² *Krnojelac*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 475; TPIY, *Tuta & Štela*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 519; *Stakić*, Sentencia de Apelación, párr. 281; *Krajišnik*, Sentencia de Apelación, párr. 319.

¹⁶²³ *Stakić*, Sentencia de Apelación, párr. 279; *Karadžić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 489, *Prlić et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 50–51; *Mladić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 3119. Esto está en consonancia con los elementos del tipo del crimen de lesa humanidad de deportación o traslado forzoso de población, definidos en los Elementos de los Crímenes, p. 121, nota 13, artículo 7(1)(d), elemento núm. 1.

¹⁶²⁴ CPI, Sala de Cuestiones Preliminares I, Request under regulation 46(3) of the Regulations of the Court, Decision on the “Prosecution’s Request for a Ruling on Jurisdiction under Article 19(3) of the Statute”, causa núm. ICC-RoC46(3)-01/18-37, 6 de septiembre de 2018, párr. 61.

¹⁶²⁵ *Stakić*, Sentencia de Apelación, párr. 279; TPIY, *Krnojelac*, Sentencia de Apelación, párr. 233.

¹⁶²⁶ CPI, Sala de Cuestiones Preliminares II, *Prosecutor v. William Samoei Ruto et al.*, causa núm. ICC-01/09-01/11-373, Decision on the Confirmation of Charges Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, 23 de enero de 2012, párr. 244.

¹⁶²⁷ *Ibid.*, párr. 245.

¹⁶²⁸ *Blagojević & Jokić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 596; *Tolimir*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 795.

¹⁶²⁹ Véase TPIY, *Prosecutor v. Ante Gotovina et al.*, causa núm. T-06-90-T, Judgement, 15 de abril de 2011 (*Gotovina et al.*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 1754.

¹⁶³⁰ *Stakić*, Sentencia de Apelación, párr. 281; *Krajišnik*, Sentencia de Apelación, párr. 319.

¹⁶³¹ *Krstić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 147; *Prosecutor v. Blagoje Simić et al.*, causa núm. IT-95-9-T, Judgement, 17 de octubre de 2003 (*Simić et al.*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 126, señalando actos calculados para aterrorizar a la población y hacerla huir.

¹⁶³² *Krnojelac*, Sentencia de Apelación, párr. 233.

¹⁶³³ Véase *Stakić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 707.

1013. En cuanto a la escala de víctimas del desplazamiento por la fuerza, no se requiere que se haya victimizado múltiples o un número mínimo de personas.¹⁶³⁴ Este razonamiento coincide con los Elementos de los Crímenes del tipo de crímenes de lesa humanidad de deportación de población que define el desplazamiento por la fuerza de “una o más personas”.¹⁶³⁵

1014. El verdadero sentido de la congruencia entre la jurisprudencia del TPIY y los Elementos de los Crímenes en no fijar un número mínimo de personas desplazadas se encuentra en la razón de la penalización internacional de crímenes de lesa humanidad, el cual consiste en la conexión funcional entre la comisión del acto individual prohibido y el ataque generalizado o sistemático contra una población civil.¹⁶³⁶

1015. El ataque contra la población civil de Nicaragua cobró un nuevo impulso, al tiempo de cierre de este informe, con la expulsión de 222 miembros de la población civil considerados enemigos del Gobierno de Nicaragua. En este sentido, el GHREN señala que a principios de febrero de 2023, se registraron 222 excarcelaciones e inmediatamente se procedió a la expulsión de las personas excarceladas, entre ellas, líderes y lideresas políticas, sociales, estudiantes, antiguos miembros de Gobierno que ya no cuentan con la simpatía del Presidente Ortega y la Vicepresidenta Murillo y otras y otros integrantes de la población civil de Nicaragua.¹⁶³⁷

1016. En el caso de las personas expulsadas, estas fueron forzadas firmar un documento donde confirmaban que salían del país voluntariamente. El GHREN resalta que esta práctica ha sido considerada por la jurisprudencia internacional como ilegal y sin ningún efecto jurídico o validez para justificar los actos ilícitos cometidos contra las víctimas.¹⁶³⁸ La firma de las víctimas para ser deportadas, fue obtenida bajo coerción, viciando cualquier consentimiento, ya que la negativa a firmar dicho documento implicaba la continuidad de la detención prolongada en condiciones inhumanas y degradantes, que en algunos casos constituyeron tortura. Para aquellas personas que se resistieran a ser deportadas forzosamente, existía la amenaza real de seguir sufriendo la persecución criminal. Dicha amenaza se materializó en el caso del Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien tras haberse negado a abordar el avión con rumbo a los Estados Unidos, fue

¹⁶³⁴ *Krajišnik*, Sentencia de Apelación, párr. 309. Véase *Stakić*, Sentencia de Apelación, párrs. 681, 685.

¹⁶³⁵ CPI, Elementos de los Crímenes, p. 121, artículo 7(1)(d), elemento núm. 1. Comentaristas de la materia han indicado que esta definición responde a la necesidad de asegurar la responsabilidad penal de individuos de un nivel inferior en la cadena de mando (por autoría) que estarían realizando el desplazamiento de uno o pocos individuos. Carsten Stahn en: K. Ambos, *Rome Statute of the International Criminal Court, Article-by-Article Commentary*, 4a edición, Beck et al., München et al. (2022), Art. 7 nm. 229.

¹⁶³⁶ Por ello, el incremento del injusto del desplazamiento forzado, como crimen de lesa humanidad, comparado a un injusto penal que permanece a nivel nacional, esencialmente, no resulta del número de víctimas, sino de la conexión funcional entre el acto individual del crimen de lesa humanidad de desplazamiento forzado y el hecho global de crímenes de lesa humanidad (como elemento de contexto). Gerhard Werle & Florian Jeßberger en: *MüKo-StGB VIII*, 4a edición 2022, § 7 nm. 64.

¹⁶³⁷ Véase, Confidencial, Medardo Mairena: “Ortega quiere mantenerse en el poder sin importar cuál sea el costo”, 13 de febrero de 2023, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=YEgGTgCv28>; Véase, ACNUDH en Twitter, 15 de febrero de 2023 (Alarma la información que estamos recibiendo sobre la decisión arbitraria del Estado de declarar “traidoras a la patria” a 94 personas sin siquiera un juicio, de despojarlas de su nacionalidad y patrimonio, y declararlas prófugas de la justicia), disponible en: <https://twitter.com/ACNUDH/status/1626032706134982656>; Véase CIDH, Comunicado de Prensa, La CIDH y la ACNUDH condenan la escalada de violaciones de derechos humanos en Nicaragua, 17 de febrero de 2023; La CIDH y la ACNUDH condenan la escalada de violaciones de derechos humanos en Nicaragua, 17 de febrero de 2023, disponible en: <https://reliefweb.int/report/nicaragua/la-cidh-y-la-ACNUDH-condenan-la-escalada-de-violaciones-de-derechos-humanos-en-nicaragua>; Vatican News, Francisco reza por obispo encarcelado en Nicaragua. El Pontífice oró y manifestó su cariño por Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión, acusado de traición a la Patria, así como por los ciudadanos nicaragüenses recientemente deportados por el gobierno local a Estados Unidos, disponible en: <https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2023-02/papa-francisco-reza-por-mons-rolando-alvarez-encarcelado-nicarag.html>.

¹⁶³⁸ TPIY, *Prosecutor v. Radovan Karadžić*, Case No. IT-95-5/18-T, Public Redacted Version of Judgement Issued on 24 March 2016 – Volume I of IV (TC), 24 March 2016, Párr. 489.

inmediatamente condenado a 26 años de prisión por traición a la patria y trasladado a una prisión, donde permanece detenido arbitrariamente.¹⁶³⁹ Por esta razón, la firma o consentimiento de las víctimas no puede servir como defensa para eximir o aligerar la responsabilidad penal criminal individual de los perpetradores o la responsabilidad que le corresponda al Estado de Nicaragua por la comisión de estos delitos de naturaleza internacional.¹⁶⁴⁰

b) *Los individuos se encontraban legalmente en el área de la que son desplazados*

1017. Según el TPIY, el término “legalmente” se refiere a las personas que, en virtud de la legislación nacional de un Estado, están presentes en su territorio, ya sea como ciudadanos o residentes.¹⁶⁴¹ Sin embargo, en última instancia, según la Sala de Cuestiones Preliminares III de la CPI, la presencia legal de una persona debe evaluarse en base al derecho internacional,¹⁶⁴² por lo que un Estado no puede legislar para crear una apariencia de ilegalidad en lo que de todos modos constituiría una presencia lícita según el derecho internacional. Además, coincide la Sala de Cuestiones Preliminares III con el TPIY,¹⁶⁴³ en que la presencia legal de una persona no debe ser equiparada con el concepto de la residencia legal.

1018. Los miembros de la población civil nicaragüense, víctimas de este último ataque persecutorio instrumentado mediante la expulsión a Estados Unidos, eran sujetos protegidos bajo el derecho internacional, y legalmente presentes en territorio nicaragüense al momento de su expulsión.¹⁶⁴⁴ Las víctimas de deportación fueron privadas arbitrariamente de su nacionalidad, de manera discriminatoria y en violación de las garantías del debido proceso, dejando a la mayoría de ellas en situación de apatridia.¹⁶⁴⁵ Sin embargo, el GHREN enfatiza que no existe ningún fundamento jurídico que permita al Estado de Nicaragua justificar la denegación de otros derechos, incluyendo el derecho a permanecer en el propio país, utilizando para ello la apatridia resultante de una privación arbitraria de la nacionalidad.

1019. La privación arbitraria de la nacionalidad no permite justificar la expulsión de las personas afectadas. En virtud del artículo 13 de la Declaración Universal y del artículo 12, párr. 4 del ICCPR, se reconoce el derecho de todas las personas a entrar y salir de su propio país. Una de las principales facetas de este derecho es el derecho que se desprende del mismo a permanecer en el propio país. Dicha noción es más amplia que el concepto formal de nacionalidad, ya que se entiende que el país cuya nacionalidad es retirada continúa siendo el “propio país”.¹⁶⁴⁶ Se considera que la persona retiene un lazo especial con el propio país, que impide considerar a la persona como una persona extranjera. El derecho a permanecer en el

¹⁶³⁹ *Ibíd*; véase CNN en Español, “En las escaleras del avión nos dimos cuenta”, dice Miguel Mendoza sobre su destierro de Nicaragua, 11 de febrero de 2023, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=JrJ_rcKvfiE; France 24 Español, 222 prisioneros nicaragüenses fueron deportados a Estados Unidos por el Gobierno de Daniel Ortega, 9 de febrero de 2023, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=A0Y5m0P85j4>. Véase también, Vatican News, Francisco reza por obispo encarcelado en Nicaragua. El Pontífice oró y manifestó su cariño por Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión, acusado de traición a la Patria, así como por los ciudadanos nicaragüenses recientemente deportados por el gobierno local a Estados Unidos.

¹⁶⁴⁰ Por ejemplo, la declaración de apatridia, vulnera instrumentos internacionales y priva de derechos naturales a la población, generando daños irreparables para ellos y sus generaciones.

¹⁶⁴¹ TPIY, *Prosecutor v. Vlastimir Đorđević*, causa núm. IT-05-87/1-T, Public Judgement with Confidential Annex, 23 de febrero de 2011, párr. 1616.

¹⁶⁴² CPI, *Bangladesh/Myanmar*, Decision conforme al Artículo 15, párr. 99.

¹⁶⁴³ *Popović et. al.*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 900; *Tolimir*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 797.

¹⁶⁴⁴ *Karadžić*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 489–491.

¹⁶⁴⁵ El art. 15 de la Declaración Universal reconoce el derecho fundamental de todas las personas a una nacionalidad, y a no ser privado arbitrariamente de la misma. La Asamblea General en su resolución 50/152 y el Consejo de Derechos Humanos en sus resoluciones 7/10, 10/13, 13/2, 20/5 y 26/14 han reafirmado el carácter fundamental del derecho a una nacionalidad, así como la prohibición de la privación arbitraria de la nacionalidad. El principio de no discriminación es un principio rector del derecho internacional de los derechos humanos y se aplica a la interpretación y el ejercicio efectivo del derecho a una nacionalidad

¹⁶⁴⁶ Véase CCPR/C/21/REv.1/Add.9, párr. 20.

propio país implica la prohibición de los traslados forzosos de población o expulsiones masivas a otros países, tal y como se produjo el 9 de febrero con la expulsión de las 222 personas opositoras, reales o percibidas, excarceladas.¹⁶⁴⁷

1020. El GHREN señala que el hecho de que el Gobierno Ortega–Murillo y otros se refieran despectivamente a las víctimas de deportación como “apátridas”, “sin patria”, “no ser nicaragüenses desde hace mucho tiempo”, “enemigos”, “traidoras” o “terroristas”, no cambia en absoluto el hecho que en todo momento las víctimas eran sujetos protegidos bajo el derecho internacional, de nacionalidad nicaragüense. Lo anterior también queda acreditado por los pasaportes expedidos por la autoridad nicaragüense y que les fueron entregados al momento de la ejecución de la deportación.¹⁶⁴⁸

c) *Desplazamiento sin fundamento en el derecho internacional*

1021. El hecho de que el desplazamiento contra la voluntad sea permisible bajo el derecho internacional requiere una evaluación de los hechos caso por caso.¹⁶⁴⁹ Según el derecho internacional, la deportación de nacionales de un Estado, así como la expulsión arbitraria o colectiva de extranjeros está generalmente prohibida.¹⁶⁵⁰ Desplazamientos realizados contra la voluntad de forma discriminatoria jamás pueden ser permisibles bajo el derecho internacional debido a la prohibición general de discriminación.¹⁶⁵¹ Sólo serán lícitos en vista de las situaciones más graves y como último recurso.¹⁶⁵²

1022. Aparte de los objetivos excepcionalmente permitidos bajo el Derecho Internacional Humanitario, en tiempos de paz, el desplazamiento contra la voluntad puede ser excepcionalmente permitido por razones del bienestar público.¹⁶⁵³ Cuando un Estado invoca la seguridad nacional u otra base aparentemente legítima, se debe evaluar la buena fe, legitimidad y fundamentación del caso de cara a la finalidad real de la medida y no sólo de la afirmada.¹⁶⁵⁴

1023. La resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua que ordenó la deportación justifica la misma en función del objetivo de “proteger la paz, la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral pública, los derechos y libertades de terceros”.¹⁶⁵⁵ Aunque algunas de dichas causales podrían justificar en ciertos casos muy restringidos restricción del derecho a permanecer en el país, el Estado no razonó ni probó de qué manera específica la permanencia de las personas en el país supone un riesgo para la paz, la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral pública, y los derechos y libertades de terceros. Dicha decisión por tanto es violatoria del derecho a permanecer en el propio país, al no haber sido razonable ni razonada, ni ajustada a los principios de legalidad, proporcionalidad y no discriminación.¹⁶⁵⁶

1024. La jurisprudencia internacional establece que, en algunos casos, y bajo requerimientos muy estrictos, el derecho internacional provee el desplazamiento forzado de una persona por razones humanitarias. Sin embargo, esta excepción no aplica a las autoridades cuando ellas

¹⁶⁴⁷ *Ibid.*, párr. 19.

¹⁶⁴⁸ *Ibid.*; también véase, Confidencial, Daniel Ortega lanza su más virulento discurso de odio contra los presos políticos, 9 noviembre 2021, disponible en: <<https://youtu.be/wWNZgMb5g1I>>; Véase, Voz de América, Rosario Murillo será candidata a la vicepresidencia de Nicaragua pese a sanción de la Unión Europea, 3 de agosto 2021 (00:44–01:00), disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=t0Ut-BI_Rk>

¹⁶⁴⁹ *Nuon & Khieu*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 451.

¹⁶⁵⁰ CPI, *Bangladesh/Myanmar*, Decision conforme al Artículo 15, párr. 98.

¹⁶⁵¹ TPIY, *Prosecutor v. Vlastimir Đorđević*, causa núm. IT-05-87/1-A, Judgement, 27 de enero de 2014 (*Đorđević*, Sentencia de Apelación), párr. 734.

¹⁶⁵² *Simić et al.*, Sentencia de Primera Instancia, parr. 125 (nota al pie omitida).

¹⁶⁵³ Véase el comentario núm. 13 al artículo 18 de la CDI, Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, 71er período de sesiones (6 de mayo a 26 de julio de 1996), A/51/10, Suplemento núm. 10, párr. 50. Para casos de legislación nacional, véase los ejemplos de Inglaterra, Canadá y Australia en Dubler & Kalyk, p. 825, nota 444. Para el caso de Alemania, véase Gerhard Werle & Florian Jeßberger en: *MüKo-StGB VIII*, 4a edición 2022, § 7 nm. 69.

¹⁶⁵⁴ Dubler & Kalyk, p. 825, citando el caso *Nuon & Khieu*.

¹⁶⁵⁵ Resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua de 8 de febrero de 2023.

¹⁶⁵⁶ CCPR/C/21/REv.1/Add.9, párr 21.

mismas son las responsables de instalar la situación humanitaria que obliga al desplazamiento forzado. En el caso de Nicaragua, en efecto, el Presidente Daniel Ortega y miembros de su círculo íntimo son responsables de crear una situación humanitaria previa a la deportación, a través de las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, los actos de torturas, y la persecución política, así como mediante condiciones de vida bajo amenazas constantes de retaliación.

1025. El hecho que organismos internacionales, o por ejemplo un tercer Estado, o cualquier otra organización internacional llegue a un acuerdo con el gobierno de Nicaragua para facilitar la protección y transporte a un lugar seguro de los desplazados forzosamente, no quita la naturaleza ilegal del acto ni la responsabilidad exclusiva de la deportación, del Estado que la generó.¹⁶⁵⁷ En este caso es Nicaragua y el gobierno encabezado por Ortega–Murillo el responsable exclusivo de crear esta situación humanitaria y de la deportación de Nicaragua de más de 220 ciudadanos nicaragüenses.

d) *Intención de los perpetradores*

1026. El elemento subjetivo requerido para la deportación consiste en la intención de desplazar por la fuerza a la población cruzando una frontera.¹⁶⁵⁸ Si se realizan con la intención discriminatoria necesaria, estos actos también pueden considerarse persecución.¹⁶⁵⁹

1027. El GHREN ha identificado indicios que señalan, *prima facie*, la existencia de un acuerdo o plan de deportaciones. Entre éstas se encuentran las declaraciones públicas realizadas en enero de 2022 por el Presidente Ortega, y asentidas por la Vicepresidenta Murillo, autoridades de diferentes poderes del Estado de Nicaragua, de las fuerzas de seguridad y del Ejército, en donde anunciaba su deseo de deportar a la oposición política nicaragüense que se hallaba en ese momento detenida arbitrariamente desde 2021. El GHREN también resalta las declaraciones más recientes del Presidente Daniel Ortega y asentida por otros altos representantes de su Gobierno respecto a las expulsiones de febrero de 2023, y los desarrollos legislativos en torno a la remoción de la nacionalidad de los deportados y las decisiones judiciales anunciadas públicamente, *inaudita parte*, sin respetar garantía judicial alguna, al tiempo que se expulsaba a los más de 220 ciudadanos nicaragüenses.¹⁶⁶⁰

1028. Mediante un anuncio presidencial y público, y en presencia de altas autoridades de su Gobierno, el Presidente Daniel Ortega no solo confirmaba la expulsión de más de 200 personas de la población civil las cuales se encontraban hasta ese momento detenidas arbitrariamente, violando todo tipo de garantía judicial, sino que confirmó la coordinación entre los poderes del Estado, así como la intervención de varias instituciones para lograr el traslado y la expulsión final. El Presidente Ortega se refirió a las víctimas de la población

¹⁶⁵⁷ *Prlić et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 52–54.

¹⁶⁵⁸ MRITP, *Prosecutor v. Radovan Karadžić*, causa núm. MICT-13-55-A, Judgement, 20 de marzo de 2019, párr. 684.

¹⁶⁵⁹ *Karadžić*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 515–516.

¹⁶⁶⁰ Véase, DW, Nicaragua: Ortega celebra con marchas el destierro de Opositores, El régimen sandinista organizó marchas de apoyo tras su decisión de expulsar a Estados Unidos de 222 “presos políticos”, disponible en: <https://www.dw.com/es/nicaragua-ortega-celebra-con-marchas-el-destierro-de-opositores/a-64677495>; France 24, 222 prisioneros nicaragüenses fueron deportados a Estados Unidos por el Gobierno de Daniel Ortega, disponible en: <https://www.france24.com/es/video/20230209-222-prisioneros-nicarag%C3%BCenses-fueron-deportados-a-estados-unidos-por-el-gobierno-de-daniel-ortega>. Véase también, BBC News Mundo, Editorial, 9 Febrero de 2023, Nicaragua libera a 222 opositores presos, los deporta a EE.UU. y les quita la nacionalidad, disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-64587463>; Departamento de Estado de los Estados Unidos, Oficina del Portavoz, Declaración del Portavoz, Ned Price, Sobre la decisión de Nicaragua de quitar la ciudadanía a 94 opositores políticos, 16 de febrero de 2023, copia de cortesía en español disponible en: <https://www.state.gov/translations/spanish/sobre-la-decision-de-nicaragua-de-quitar-la-ciudadania-a-94-opositores-politicos/>. Versión Original de la Declaración de Prensa, del Secretario del Departamento de Estado, Antony J. Blinken, 16 febrero de 2023, disponible en: <https://www.state.gov/nicaraguas-move-to-strip-citizenship-from-94-political-opponents/>; Confidencial, Despojan de nacionalidad nicaragüense a presos políticos desterrados, disponible en: <https://www.confidencial.digital/politica/asamblea-despoja-de-nacionalidad-nicaraguense-a-presos-politicos-desterrados/>

civil expulsada como “terroristas” que, de acuerdo con Ortega, debían haber sido llevadas a Estados Unidos desde el 2018.¹⁶⁶¹

1029. Por su parte, la Vicepresidenta Rosario Murillo envió un saludo a la familia de las víctimas, calificando la expulsión como un acto sorprendente de generosidad y magnanimidad y definiendo de correcta a la decisión de buscar la paz y “sacarse de encima esos demonios” que tenían las manos manchadas de sangre por ser terroristas y por haber pretendido destruir a Nicaragua.¹⁶⁶²

1030. Gustavo Porras, caracterizó la expulsión como un ejemplo de proceso exitoso, coordinado por las más altas autoridades de los poderes del Estado nicaragüense a partir de la decisión de expulsar a 222 sujetos protegidos de la población civil. Porras lideró esta parte del ataque contra la población civil, y elogió la sincronización exhibida por las distintas instituciones y Poderes del Estado. De acuerdo con Porras, dichas acciones se planificaron e implementaron bajo el mando único del Presidente Daniel Ortega.¹⁶⁶³

1031. De acuerdo con la información a la que pudo acceder y analizar el GHREN, tras la detención de Monseñor Rolando Álvarez el 19 de agosto 2022, éste fue acusado del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. El 8 de febrero de 2023, Monseñor Álvarez fue transportado al aeropuerto de Managua para ser deportado junto con el resto de las víctimas, pero se negó a subirse al avión. El Presidente Daniel Ortega, señaló que “...luego vamos a hablar del personaje Álvarez. Bueno cuando, cuando él está pues haciendo la fila ya llega pues a la grada del avión a la entrada ya para que pase entonces empieza a decir que él no se va que no se va que primero tendría que [...] reunirse con los obispos y exige una reunión con los obispos una cosa absurda si lo que hay es una decisión del Estado nicaragüense que no la puede cuestionar él como nicaragüense no la puede cuestionar”.¹⁶⁶⁴

1032. Tras la negativa del Obispo a subir al avión, fue trasladado a El Nuevo Chipote. El juicio en contra de Monseñor Álvarez se llevó a cabo el 10 de febrero de 2023, dos días después de que se negara a ser deportado de Nicaragua y 18 días antes de la fecha inicialmente programada para el mismo. El Monseñor Álvarez fue condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel, por traición a la patria, menoscabo y propagación de noticias falsas y, según las declaraciones del Presidente Ortega, fue trasladado a la unidad penitenciaria conocida como La Modelo.¹⁶⁶⁵

e) *Conclusión*

1033. Sobre esta base, el GHREN tiene motivos razonables para creer que las personas opositoras o percibidas como tales fueron expulsadas sin justificación legal alguna y que los autores tenían la intención de expulsarlas a estas personas de Nicaragua. El GHREN tiene motivos razonables para creer que esto constituyó una violación del derecho fundamental de las víctimas a permanecer en su propio país y que, por consiguiente, hubo una expulsión ilegal de esta parte de la población de Nicaragua.

1034. El Grupo ha concluido con motivos razonables para creer que, desde abril de 2018 y a la fecha de redacción de este informe, existe un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una parte de la población nicaragüense. El Grupo tiene motivos razonables para creer

¹⁶⁶¹ Véase, El País, Directo: Daniel Ortega habla de la liberación de más de 200 presos políticos en Nicaragua, 9 de febrero 2023, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=fNREcDBIDFQ>. En esta alocución, Ortega se refirió a las pruebas que tenía de la conspiración contra Nicaragua, y que fue organizada por la antigua Embajadora de los EEUU en Nicaragua y sus colegas europeos. Véase también las denuncias públicas de la Embajadora Gogu respecto a los crímenes cometidos en Nicaragua, Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, Palabras de la Embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, del 29 de octubre de 2018, disponible en: <https://ni.usembassy.gov/es/amcham-reflexiones-de-la-embajadora-laura-dogu/>

¹⁶⁶² *Ibid.*

¹⁶⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁶⁴ *Ibid.* (min. 40:04 a 41:05).

¹⁶⁶⁵ *Ibid.* Véase también El País, El Régimen de Ortega Condena a más de 26 años de Cárcel al Obispo Rolando Alvarez, 10 de febrero de 2023, disponible en: <https://elpais.com/internacional/2023-02-10/el-regimen-de-ortega-condena-a-mas-de-26-anos-de-carcel-al-obispo-rolando-alvarez.html>

que las expulsiones de personas opositoras o percibidas como tales forman parte de este ataque generalizado y sistemático. El GHREN, llegó a sus conclusiones considerando la identidad de las víctimas, así como la secuencia y coordinación y participación de diferentes poderes del Estado en la operación de la deportación, lo cual se correlaciona con la naturaleza sistemática y generalizada del ataque contra la población civil nicaragüense.

1035. En este sentido el GHREN identificó *prima facie* y de acuerdo a la información a la que ha tenido acceso hasta el momento, las siguientes etapas: a) el traslado para la expulsión de estos miembros de la población civil que se encontraban detenidos arbitrariamente en varios lugares de detención del país, bajo la custodia de las autoridades y funcionarios del Servicio Penitenciario Nacional y de la Policía Nacional; b) el transporte de estos miembros de la población civil bajo custodia de la Policía Nacional en condiciones de incomunicación hasta el aeropuerto de Managua, que se encontraba bajo el control efectivo del Ejército de Nicaragua; c) la expulsión de los miembros de la población civil del país, bajo amenaza real de sufrir graves consecuencias a su integridad física o psíquica en caso de oponer resistencia; d) la reforma constitucional impulsada el 9 de febrero de 2023 por el trámite de urgencia en la Asamblea Nacional para aprobar la Ley 1145 especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense;¹⁶⁶⁶ e) la declaración de retirada de nacionalidad el día 10 de febrero de 2023, día de entrada en vigor de la ley especial;¹⁶⁶⁷ y f) la eliminación de la constancia de nacimiento en los Registros Civiles.

1036. Por lo tanto, el Grupo tiene motivos razonables para creer que las expulsiones documentadas constituyen el crimen de deportación como crimen de lesa humanidad.

3. Encarcelación

1037. El derecho internacional penal reconoce como crimen de lesa humanidad, a la encarcelación u otra privación grave de la libertad física, es decir, la privación ilegal y/o arbitraria de libertad de la persona sin las debidas garantías procesales, cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil.¹⁶⁶⁸

1038. Según el Derecho Internacional Consuetudinario en materia penal, para calificar una conducta de encarcelación u otra privación grave de la libertad física como crimen de lesa humanidad, se requiere establecer: (i) la privación de libertad de una persona; (ii) que la privación de libertad es llevada a cabo arbitrariamente, es decir, sin una base legal para ello; y (iii) que la acción u omisión por la que se priva a la persona de su libertad física es realizada por el autor material o por una persona o personas por las que el autor material tiene responsabilidad penal con la intención de privar arbitrariamente a la persona de su libertad física o con el conocimiento razonable de que su acción u omisión puede causar una privación arbitraria de la libertad física.¹⁶⁶⁹

1039. De acuerdo con la jurisprudencia de los Tribunales Penales Internacionales, la privación de libertad de una persona será arbitraria y, por tanto, ilegal, si no puede invocarse ningún fundamento jurídico para justificar la privación de libertad inicial. Si se invoca el derecho nacional como justificación, las disposiciones pertinentes no deben violar el derecho internacional. Además, si existe una base jurídica para la privación de libertad, ésta debe estar

¹⁶⁶⁶ Asamblea Nacional, “Aprueban reforma a la Constitución y ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense”, 9 de febrero de 2023, disponible en: <https://noticias.asamblea.gob.ni/aprueban-reforma-a-la-constitucion-y-ley-especial-que-regula-la-perdida-de-la-nacionalidad-nicaraguense/>

¹⁶⁶⁷ Declaración del Magistrado Presidente de la Sala Penal Uno del tribunal de Apelaciones de Managua, con relación a la pérdida de nacionalidad nicaragüense, disponible en: https://twitter.com/Canal4Ni/status/1624210991725551617?ref_src=twsrc^tfw/twcamp^tweetembed/twterm^1624210991725551617/twgr^b4953ceba72833048a762f57b059aa9999d35041/twcon^s1_&ref_url=https%3A%2F%2Fw.

¹⁶⁶⁸ *Kordić & Čerkez*, Sentencia de Apelación, párrs. 115–116.

¹⁶⁶⁹ *Krnojelac*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 115; *Krajišnik*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 752; *Karadžić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 519.

vigente durante todo el tiempo que dure la privación de libertad; la privación de libertad de una persona se volverá arbitraria tan pronto como la base legal deje de existir.¹⁶⁷⁰

a) *Privación arbitraria de la libertad*

1040. Tal y como se desarrolló en el capítulo III.B del presente informe, el Grupo documentó a profundidad 44 casos de detenciones arbitrarias y procesos arbitrarios contra personas opositoras o percibidas como tales. Dichos casos no son actos aislados o aleatorios, sino parte de una política de Estado con reiteración de conductas, una evolución de la estrategia en el tiempo, y la intervención concertada de múltiples instituciones. En este sentido, de acuerdo con datos proporcionados al GHREN, 2.018 personas fueron detenidas desde abril de 2018 hasta diciembre de 2022, en el marco de la “crisis de derechos humanos”. A la fecha de cierre de este informe, 38 personas que se autoidentificaron como “presas políticas” continúan detenidas.

1041. El GHREN identificó distintas etapas en el uso generalizado y sistemático de la detención arbitraria como resultado de la instrumentalización, por parte del Gobierno Ortega–Murillo, del derecho penal y del sistema de justicia para perseguir a personas de la población civil de Nicaragua, opositoras a su Gobierno o percibidas como tales. La primera etapa de detenciones masivas y violentas ocurridas entre abril y junio de 2018, en el contexto de actos de protesta social, fue seguida, a partir de julio de 2018 y hasta junio de 2019, de la detención selectiva de personas que asumieron un rol de liderazgo o cobraron notoriedad durante los actos de protesta social. Entre julio de 2019 y abril de 2021, el Gobierno negó la existencia de personas presas por motivos políticos; sin embargo, las detenciones arbitrarias en contra de personas opositoras, reales o percibidas continuaron, mediante cargos infundados por delitos comunes de los cuales no eran responsables. Entre mayo y noviembre de 2021, se dio una ola de detenciones vinculadas al contexto de las elecciones presidenciales de noviembre de 2021. Desde agosto de 2022 y hasta la fecha de redacción de este informe, personas con otros perfiles fueron detenidos, incluyendo líderes religiosos e integrantes de la Iglesia Católica, familiares de personas opositoras o percibidas como tales, y familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos que habían reclamado justicia.

1042. En los operativos de detención participaron elementos de la Policía Nacional, en ocasiones en coordinación con integrantes de grupos armados pro-gobierno. El GHREN documentó la detención arbitraria de las personas opositoras o percibidas como tales en centros de detención del Sistema Penitenciario Nacional, en estaciones de la policía en los departamentos del país, y en la Dirección de Auxilio Judicial. El Grupo tiene motivos razonables para creer que las víctimas de cada uno de los casos de detenciones arbitrarias documentados en el presente informe pertenecen a diversos estratos de la población civil nicaragüense y tienen como común denominador el ser opositoras al Gobierno, o percibidas como críticas del, o adversarias al, mismo.

1043. El GHREN consideró las circunstancias en las que las personas opositoras, o percibidas como tales fueron arrestadas, en muchos casos sometidas a régimen de incomunicación, así como el prolongado período de detención. El carácter arbitrario de las detenciones contra estas personas quedó demostrado por los patrones documentados por el GHREN, los cuales incluyen: (i) la detención de las personas bajo acusaciones penales infundadas, desproporcionadas, basadas en leyes violatorias de los derechos humanos y/o en pruebas falsas; (ii) la ejecución de detenciones sin la presentación de orden de detención ni sin que se les informara a las personas detenidas sobre los motivos de ésta; (iii) la presentación de las personas ante una autoridad judicial varios días, incluso semanas, después de su detención; (iv) del incumplimiento de órdenes de amparo para acciones de exhibición; (v) el uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva, imponiéndola de manera generalizada sin tener en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, los criterios de proporcionalidad y finalidad del proceso, y sin la debida consideración de medidas alternativas; (vi) la violación sistemática de los derechos al debido proceso de las personas

¹⁶⁷⁰ Véase, *Prosecutor v. Mičo Stanišić & Stojan Župljanin*, causa núm. IT-08-91-T, Judgement, 27 de marzo de 2013 (*Stanišić & Župljanin*, Sentencia de Primera Instancia), párr. 79; *Gotovina et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 1816; *Krajišnik*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 753; *Krnjelac*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 114.

opositoras o percibidas como tales, incluyendo la falta de igualdad ante los tribunales y la falta de igualdad de medios procesales; (vii) la violación sistemática del derecho a una debida defensa; y (viii) la falta de revisión de las detenciones.

1044. El carácter arbitrario de las detenciones también quedó documentado a partir de las detenciones en masa de cientos de personas opositoras, o percibidas como tales en el contexto de las manifestaciones, así como por la excarcelación de personas opositoras o percibidas como tales, a raíz de la adopción de la Ley de Amnistía en 2019, seguida de nuevas detenciones y recapturas por su participación en las manifestaciones en 2018. Previo a su recaptura, el GHREN documentó cómo estas personas fueron víctimas de actos de intimidación, amenazas, y vigilancia por elementos de la Policía Nacional y por civiles motorizados. Asimismo, el Grupo documentó la adopción o modificación de legislación que permitió al sistema de justicia instrumentalizar el derecho penal como herramienta de ataque en contra de las personas opositoras o percibidas como tales.

b) *Intención de los perpetradores*

1045. El GHREN ha concluido con motivos razonables para creer que desde abril de 2018 y hasta la fecha de redacción del presente informe, las autoridades de Nicaragua utilizaron las detenciones arbitrarias como herramienta para atacar a personas opositoras al Gobierno o consideradas como tales, y que dichas detenciones arbitrarias no fueron actos aislados o aleatorios, sino parte de una política de Estado implementada a través de la intervención metódica de diferentes instituciones públicas en distintos niveles, reiteración de las conductas, y evolución de dichas prácticas criminales en todo el periodo analizado por el GHREN y objeto de este informe.

1046. El GHREN tiene motivos para creer que las detenciones arbitrarias documentadas en el presente informe se produjeron como consecuencia de los actos u omisiones de actores pertenecientes a varias instituciones del Estado, incluyendo, principalmente: la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

1047. El conjunto de información analizado por el GHREN demuestra la articulación de las fuerzas policiales con grupos armados pro-gobierno en los operativos de detención que se realizaron de manera ilícita, incluso sin órdenes de detención ni de allanamiento, de algunos de las personas opositoras, reales o percibidas.

1048. A su vez, el Ministerio Público también dentro de esta actuación conjunta, jugó un papel fundamental y su aporte fue necesario para en la tramitación, presentación y convalidación de diligencias realizadas por la Policía Nacional, que en muchos casos no cumplían con los requisitos mínimos de legalidad. En la mayoría de los casos se procedió a acusar a las personas detenidas por delitos graves, haciendo uso arbitrario y flagrantemente desproporcionado del derecho penal, instrumentalizando la causa e incumpliendo el principio de legalidad e incluso los principios de tipicidad y de favorabilidad en múltiples casos investigados.

1049. La Rama Judicial y en particular los jueces y juezas en su función de garantes del proceso no ejercieron ni cumplieron con la garantía de ser imparciales; por el contrario, participaron en la negación de los derechos, en la obstrucción deliberada y sistemática de los procesos judiciales y violando flagrantemente garantías mínimas procesales. El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que las y los funcionarios que participaron en cada uno de los casos de detención arbitraria documentados, actuaron con la intención de privar arbitrariamente a las víctimas de su libertad.

1050. El GHREN tiene motivos razonables para creer que los actos u omisiones de las máximas autoridades del Estado nicaragüense en relación con las detenciones arbitrarias, incluyendo del Presidente Daniel Ortega, de los altos mandos de la Policía Nacional, de los directivos de la DOEP, la DAJ y las diferentes delegaciones departamentales de la Policía Nacional, así como de funcionarios y funcionarias de alto rango del Poder Judicial y del Ministerio Público, se llevaron a cabo con la intención de detener de manera arbitraria a las personas opositoras o percibidas como tales.

c) *Conclusión*

1051. Sobre esta base, el GHREN tiene motivos razonables para creer que las personas opositoras o percibidas como tales fueron privadas de su libertad sin base legal y que los autores materiales o la persona o personas por las que los autores materiales tienen responsabilidad penal tenían la intención de privar arbitrariamente a estas personas de su libertad. El GHREN tiene motivos razonables para creer que esto constituyó una denegación o violación de un derecho fundamental y que hubo detención arbitraria de estas personas.

1052. El Grupo ha concluido con motivos razonables para creer que, desde abril de 2018 y a la fecha de redacción de este informe, existe un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una parte de la población nicaragüense. El Grupo tiene motivos razonables para creer que las detenciones arbitrarias de personas opositoras o percibidas como tales forman parte de este ataque generalizado y sistemático. El Grupo llegó a sus conclusiones considerando la identidad de las víctimas, así como la extensión de las detenciones tanto en el espacio como en el tiempo, lo cual se correlaciona con la naturaleza sistemática y generalizada del ataque contra la población civil nicaragüense. Por lo tanto, el Grupo tiene motivos razonables para creer que las detenciones arbitrarias documentadas constituyen el crimen de encarcelación como crimen de lesa humanidad.

4. **Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes**

1053. La prohibición contra la tortura está plasmada en instrumentos internacionales, es parte del Derecho Internacional Consuetudinario, incluyendo en materia penal, y constituye una norma de *ius cogens*. La tortura es un delito definido internacionalmente, incluso cuando se comete fuera de un contexto generalizado o sistemático.¹⁶⁷¹

1054. El Código Penal de Nicaragua prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.¹⁶⁷² En el caso de la tortura, la considera como un crimen de lesa humanidad que a su vez es un delito contra el orden internacional, y la describe como el acto de “causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o psíquicos, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control [...]”¹⁶⁷³

1055. La tortura califica como crimen de lesa humanidad cuando se comete como parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil.¹⁶⁷⁴ Según el Derecho Internacional Consuetudinario en materia penal, para calificar una conducta de tortura como crimen de lesa humanidad, se requiere establecer, además de los elementos contextuales: (i) la imposición, por acción u omisión, de dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales; (ii) la intención con respecto a la acción u omisión; y (iii) que la acción u omisión tenga por objeto obtener información o una confesión, o castigar, intimidar o coaccionar a la víctima o a un tercero, o discriminar, por cualquier motivo, a la víctima o a un tercero.¹⁶⁷⁵

1056. Los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, si ocurrieran en el marco de un ataque sistemático y/o generalizado contra la población civil, también constituyen crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con el Derecho Internacional Penal Consuetudinario, el grado requerido en la determinación de estos crímenes es el mismo que se requiere para probar un cargo de “causar intencionalmente grandes sufrimientos o lesiones graves al cuerpo o la salud”, pero inferior al de la tortura.¹⁶⁷⁶ En este sentido, la forma, gravedad y duración de la

¹⁶⁷¹ Véase la Convención contra la Tortura, arts. 4 y 7. Véase también, Conjunto actualizado de principios para la protección y promoción de los derechos humanos, Derechos mediante la lucha contra la impunidad, E/CN.4/2005/102/Add.1, p. 6; *Čelebići*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 452–459; *Furundžija*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 137–146, y 153–157; *Prosecutor v. Anto Furundžija*, causa núm. IT-95-17/1-A, Judgement, 21 de julio de 2000, párr. 111.

¹⁶⁷² Código Penal, artículo 4.

¹⁶⁷³ Código Penal, artículo 486.

¹⁶⁷⁴ TPIY, *Prosecutor v. Haradinaj et al.*, causa núm. IT-04-84-A, Judgement, 19 de julio de 2010, párr. 290; *Kunarac*, Sentencia de Apelación, párr. 142 (haciendo referencia a la definición de tortura adoptada por la Sala de Primera Instancia en la causa *Kunarac*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 497).

¹⁶⁷⁵ *Kunarac*, Sentencia de Apelación, párrs. 142, 144–148.

¹⁶⁷⁶ TPIY, *Tuta & Štela*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 246; *Kvočka*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 161.

violencia, la intensidad, y la duración del sufrimiento físico o psíquico infligido a la víctima, servirán de base para evaluar si se cometieron estos tratos.¹⁶⁷⁷

a) *Imposición, por acción u omisión, de dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales*

1057. No existe una enumeración exhaustiva de todos los actos u omisiones que pueden llegar a constituir tortura. Las alegaciones de tortura deben examinarse caso por caso, con el fin de determinar si, a la luz de los actos cometidos y de su contexto, se infligieron dolores o sufrimientos físicos o psicológicos graves. Los actos que infligen dolor físico pueden constituir tortura incluso cuando no causan dolor del tipo que acompaña a las lesiones graves.¹⁶⁷⁸

1058. La jurisprudencia de los Tribunales Penales Internacionales ha señalado como ejemplos no exhaustivos de formas/actos de maltrato que constituyen tortura los siguientes: agresiones sexuales; violaciones; ser exhibido desnudo en circunstancias humillantes; palizas; la extracción de uñas, dientes, etc.; quemaduras; descargas eléctricas; suspensión; asfixia; la exposición a exceso de luz o ruido; denegación prolongada de descanso o sueño; denegación prolongada de alimentos; denegación prolongada de higiene suficiente; denegación prolongada de asistencia médica; aislamiento total y estar recluso en régimen de incomunicación; privación sensorial; la constante incertidumbre en términos de espacio y tiempo; amenazas de torturar o matar a familiares; abandono total; ejecuciones simuladas; entre otros.¹⁶⁷⁹

1059. El uso de la violencia sexual, en contra de cualquier persona, está prohibido por el Derecho Internacional Penal Consuetudinario y puede constituir, dependiendo del contexto en que se cometan los hechos, crímenes de lesa humanidad.¹⁶⁸⁰ En algunos casos, delitos de violencia sexual han sido judicializados como delitos autónomos,¹⁶⁸¹ en otros casos han sido subsumidos bajo tipos penales más genéricos, como los tipos penales de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes¹⁶⁸² y de persecución.¹⁶⁸³

1060. No existe una definición consensuada en el derecho internacional de los conceptos de “violencia sexual” o de “violación”. Sin embargo, los Tribunales Penales Internacionales han concluido que la violencia sexual, que incluye la violación, es cualquier acto de naturaleza sexual cometido en circunstancias que sean coercitivas. Por su parte, la violación ha sido descrita como una forma de agresión cuyos elementos centrales no pueden recogerse en una descripción mecánica de objetos y partes del cuerpo. Así “la violación” ha sido definida como una invasión física de naturaleza sexual, cometida sobre una persona en circunstancias

¹⁶⁷⁷ *Blagojević & Jokić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 586; *Krnjelac*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 131. Véase *Blaškić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 243.

¹⁶⁷⁸ Véase TPIY, *Prosecutor v. Tuta & Štela*, causa núm. IT-98-34-A, Appeals Judgement, 3 de mayo de 2006, párr. 299; *Brđanin*, Sentencia de Apelación, párr. 251.

¹⁶⁷⁹ En este sentido, la jurisprudencia de los Tribunales Penales Internacionales toma los ejemplos, actos reconocidos como tortura por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte IDH, y el Relator Especial sobre la Tortura de Derechos Humanos. Véase, *Kunarac*, Sentencia de Apelación, párrs. 142–148 (aclarando la sentencia de apelaciones del Caso *Furundžija*, párr. 111 y la sentencia de primera instancia del Caso *Čelebići*, párr. 494); *Limaj et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 234–240; *Čelebići*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 461–469.

¹⁶⁸⁰ *Kvočka*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 327. Véase, *Brđanin* Sentencia de Primera Instancia, párrs. 144–145 y 149. Asimismo, la violación como acto de tortura puede configurar un crimen de lesa humanidad, si se dan los elementos contextuales correspondientes a los mismos. En este sentido véase, *Furundžija*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 163, 171 (condenado por la desnudez y humillación, además de actos de violación); *Tadić*, Sentencia de Primera Instancia (sosteniendo que los actos de agresión sexual masculina, incluidas la mutilación, la felación y la agresión al pudor, constituían trato inhumano, trato cruel como crímenes de guerra y actos inhumanos como crímenes de lesa humanidad).

¹⁶⁸¹ Véase, por ejemplo: *Kunarac*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 515–543; CPI, *Fiscal vs. Ntaganda*, causa núm. ICC-01/04-02-06, Judgement, 8 de julio de 2019, párrs. 966–986; *Sesay et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 152–163.

¹⁶⁸² Véase, por ejemplo: *Furundžija*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 163–164; *Čelebići* Sentencia de Primera Instancia, párrs. 495–496.

¹⁶⁸³ Véase, por ejemplo: *Fiscal vs. Dorđević*, causa núm. IT-05-87/1-A, Judgement, 27 de enero de 2014, párrs. 886–901; *Karadžić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 511–513.

coercitivas.¹⁶⁸⁴ Por su parte, la Corte IDH considera que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno.¹⁶⁸⁵

1061. Los Tribunales Penales Internacionales han reconocido que actos de violencia sexual pueden configurar el delito de tortura, en particular cuando ocurren en contextos de detención, intimidación, degradación, humillación y discriminación, castigo, control o destrucción de una persona.¹⁶⁸⁶ No sólo la violación, sino también otras formas de violencia sexual¹⁶⁸⁷ pueden causar sufrimientos severos físicos y mentales: por ej. tocamientos sexuales o amenaza de violación contra mujeres detenidas;¹⁶⁸⁸ o golpes severos a los genitales de un detenido.¹⁶⁸⁹

1062. La Corte IDH estableció que es “inherente a la violación sexual el sufrimiento severo de la víctima, aun cuando no exista evidencia de lesiones o enfermedades físicas. [...] Las mujeres víctimas de violación sexual también experimentan severos daños y secuelas psicológicas y aun sociales”.¹⁶⁹⁰

1063. En el capítulo III.B de este informe, el GHREN concluyó con motivos razonables para creer que, desde abril de 2018, agentes de la Policía Nacional y del Sistema Penitenciario Nacional cometieron actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en contra de personas opositoras al Gobierno o consideradas como tales. En algunos de estos actos, hubo participación de actores no estatales, en particular civiles pertenecientes a grupos armados pro-gobierno, quienes actuaron conjuntamente con actores del Estado, o con el conocimiento y/o la aquiescencia de los mismos. Los actos de tortura, y los tratos inhumanos, crueles o degradantes analizados permanecen en la impunidad. Las autoridades judiciales y del Ministerio Público obstruyeron de manera deliberada y sistemática los procesos de rendición de cuentas.

1064. En el marco de las protestas del 2018, el GHREN documentó el uso de tortura -físicas, sexuales y psicológicas- en el marco de interrogatorios prolongados y bajo la custodia policial con la doble finalidad de castigar y humillar a aquellos que participaban en las protestas y de obtener información. El GHREN pudo documentar los siguientes actos de tortura empleados: golpes y palizas; diferentes formas de violencia sexual (violación, amenaza de violación, tortura sexual, y desnudez forzada); aplicación de descargas eléctricas, incluyendo en los genitales; quemaduras con ácido y cigarrillos; asfixia; ahogamiento simulado (submarino); lesiones penetrantes con arma punzocortante; arrancamiento de uñas; y posturas de tensión. También tuvo información sobre el uso de humillaciones y amenazas, incluyendo amenazas de muerte tanto en su contra como en contra de sus familias, e insultos basados en el género de la persona detenida.

1065. El GHREN concluyó que miembros de la Policía Nacional y del Sistema Penitenciario Nacional y, en algunos casos, integrantes de grupos armados pro-gobierno, perpetraron actos

¹⁶⁸⁴ *Akayesu*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 241; *Čelebići* Sentencia de Primera Instancia, párrs. 478–479.

¹⁶⁸⁵ Véase, *inter alia*, Corte IDH, *Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú*, sentencia, 25 de noviembre de 2006, párr. 306; *Caso Espinoza González vs. Perú*, sentencia, 20 de noviembre de 2014; *Caso Favela Nova Brasília vs. Brasil*, sentencia, 16 de febrero de 2017, párr. 246.

¹⁶⁸⁶ Véase, párr. 12, *Prosecutor v. Simić*, causa núm. IT-95-9/2, Sentencing Judgement, 17 de octubre de 2002 (en este caso, Simić pateó a cuatro personas en sus genitales y repetidamente le bajó los pantalones a una persona a la que golpeaba y amenazó con cortar su pene. Simić reconoció que la Fiscalía habría demostrado que estos actos infligieron dolores o sufrimientos mentales o físicos severos y que fueron cometidos con el propósito de castigar, intimidar o humillar a las víctimas con intención discriminatoria).

¹⁶⁸⁷ *Kunarac* Sentencia de Apelación, párrs. 150–151; *Čelebići* Sentencia de Primera Instancia, párrs. 495–496; *Semanza*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 485.

¹⁶⁸⁸ *Kvočka* Sentencia de Primera Instancia, párrs. 560–561 (reconociendo que los tocamientos sexuales y las amenazas de violación contra mujeres en detención son formas de tortura, debido a la situación de extrema vulnerabilidad en que se encontraban las víctimas y la posición de autoridad de los perpetradores).

¹⁶⁸⁹ *Brđanin* Sentencia de Primera Instancia, párrs. 498, 500.

¹⁶⁹⁰ Corte IDH, *Fernández Ortega y otros vs. México*, sentencia, 30 de agosto de 2010, párr. 124.

de violencia sexual contra las personas arbitrariamente detenidas y bajo su custodia llegando a constituir en algunos casos actos de tortura. El uso de la violación y otras formas de torturas sexuales (como la aplicación de corrientes eléctricas, o patadas o golpes en los genitales) fue más frecuente entre abril y agosto de 2018 y se produjo generalmente en el marco de interrogatorios y de custodia policial, en estaciones de policía, en la DAJ o en centros clandestinos de detención. Se reportaron casos de violaciones múltiples en las que fueron sometidas personas detenidas durante varios días, especialmente mujeres.

1066. La amenaza de violación también fue utilizada frecuentemente, particularmente contra mujeres, durante aprehensiones e interrogatorios, y se extendió también a familiares de las personas detenidas. Se documentó el uso repetido y constante de la desnudez forzada en muchos lugares de detención, clandestinos y oficiales, incluyendo en los registros, requisas, en las celdas, durante interrogatorios, o en los tribunales. Algunas personas fueron interrogadas y/o fotografiadas desnudas, y/o forzadas a permanecer desnudas durante varios días.

1067. Durante todo el periodo cubierto por el presente informe, las personas detenidas por motivos políticos recluidas, en particular, en La Modelo y La Esperanza, centros pertenecientes al Sistema Penitenciario Nacional, fueron sometidas a tratos discriminatorios y condiciones de detención crueles, inhumanas o degradantes y, en algunos casos, tortura. Entre los malos tratos documentados por el GHREN en estos centros se incluyen las golpizas; amenazas; insultos; prohibición de comunicarse con otras personas detenidas; aislamiento prolongado en celdas de castigo sin motivo; comida inadecuada y en algunos casos en porciones más reducidas que las correspondientes a presos comunes; cortes de agua y luz en las celdas; y la negativa a entregar la paquetería con alimentos e insumos básicos que traían sus familias. El acceso a atención médica era limitado y se brindaba en raras ocasiones o cuando la situación médica de la persona se había agravado.

1068. En el caso de La Modelo, se implementó un régimen de aislamiento prolongado e indefinido en la sección de máxima seguridad, conocida como “La 300”, en celdas oscuras, insalubres, sin ventilación ni suficiente luz natural, y expuestas a humedad, frío y calor extremo. Las celdas de castigo conocidas como “El Infiernillo” eran extremadamente calurosas y contaban con acceso limitado a agua. Las personas detenidas raramente podían salir de sus celdas. En algunos casos documentados, las personas detenidas permanecieron durante dos años bajo un régimen de encarcelamiento por el cual no se les permitía salir de la celda, o ir al patio, o recibir visitas, ni comunicarse con sus familiares por semanas o meses.

1069. A partir de mayo de 2021, la mayoría de los líderes y las lideresas políticos de la oposición y otras figuras de alto perfil en Nicaragua detenidas fueron encarceladas arbitrariamente en El Nuevo Chipote, un recinto policial de la DAJ, inaugurado en 2019. El GHREN documentó que las víctimas sufrieron prácticas ilegales de aislamiento prolongado e indefinido; régimen de incomunicación; irritación sensorial; amenazas; insultos y la creación de un “entorno de tortura”, esto es, la generación de una variedad de situaciones y combinación de métodos deliberadamente diseñados para infligir dolor y sufrimientos mentales y físicos (interrogatorios incesantes y a cualquier hora; acceso limitado a luz natural; restricciones alimentarias; privación del sueño; restricciones al régimen de visitas y de acceso a su defensa; prohibición de realizar cualquier actividad de recreo, y de acceso a material de lectura, escritura, televisión o radio, correspondencia o llamadas de familiares). Las personas detenidas no pudieron ver a sus hijos o hijas durante más de un año. El Grupo concluyó que, en algunos casos, dichos tratos alcanzaron el umbral de la tortura, debido a su combinación, carácter prolongado, la presencia de otros factores estresantes o vulnerabilidades y los graves daños psicológicos y físicos que provocaron sobre las víctimas.

1070. El GHREN recibió información sobre una variedad de actos de violencia física y psicológica en contra de las y los familiares, tales como tratos humillantes o degradantes durante las requisas por parte de las autoridades policiales y penitenciarias; ocultamiento o tergiversación de la información sobre el destino o el paradero de las víctimas; negativa a proporcionar información sobre la situación de salud de las personas detenidas; y amenazas de represalias contra sus familiares detenidos si denunciaban las condiciones carcelarias. Algunas formas de violencia sexual, como los tocamientos y la desnudez forzada durante registros, en ocasiones con insultos sexistas, también fueron dirigidas contra familiares y abogadas de las personas detenidas.

b) *Intención de los perpetradores*

1071. En el ámbito del Derecho Internacional Penal, el tipo penal de la tortura refleja la definición de la Convención Contra la Tortura (CAT) aunque tiene algunas diferencias. El artículo 1 de la CAT exige que la tortura se cometa “con el consentimiento o la aquiescencia de un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales”. Esto constituye una costumbre de derecho internacional en lo que se refiere a los Estados y su conducta, considerando que éstos violan los derechos humanos. Sin embargo, fuera del marco de la CAT, y en el contexto del Derecho Internacional Penal, la jurisprudencia no requiere que el autor del delito de tortura sea un funcionario público, o que la tortura haya sido cometida en presencia de un funcionario público.¹⁶⁹¹

1072. De acuerdo con la investigación realizada por el GHREN y desarrollada anteriormente en este acápite, los agentes de la Policía Nacional, incluyendo miembros de la DOEP, miembros de grupos armados pro-gobierno actuando en forma conjunta con la Policía o con su aprobación tácita y/o aquiescencia, y el personal del Sistema Penitenciario Nacional, han sido identificados como los principales perpetradores de los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que tuvieron lugar tanto en el momento de aprehensión de las víctimas, como durante las detenciones arbitrarias en las estaciones de policía en distintos departamentos del país, las instalaciones de la DAJ (El Chipote y El Nuevo Chipote) y en centros de detención del Sistema Penitenciario nacional (incluyendo La Modelo y La Esperanza).

1073. En varios de los casos documentados, los actos de tortura se cometieron en estaciones de policía y especialmente en la DAJ, ante la presencia de altos rangos de la Policía Nacional, quienes incitaban o permitían estas conductas. Los grupos pro-gobierno también detuvieron a personas opositoras, reales o percibidas, en lugares de detención secretos, y las sometieron a torturas con el conocimiento y aquiescencia de las autoridades. Tras periodos que oscilaron entre horas y días, entregaron a las personas a la Policía con signos visibles de violencia.

1074. El Grupo también documentó cómo funcionarios y funcionarias a cargo de El Nuevo Chipote permitieron la instauración de un clima generalizado de inseguridad, donde las autoridades ejercieron el control arbitrariamente, cambiando las normas constantemente, aplicando castigos y restringiendo los derechos de las personas detenidas a voluntad, y sometieron a las personas detenidas a una inseguridad constante frente a su situación.

1075. El GHREN tiene motivos razonables para creer que los actos u omisiones de altos mandos de la Policía Nacional, incluyendo los directivos de la DOEP, la DAJ y las diferentes delegaciones departamentales de la Policía Nacional, así como de funcionarios y funcionarias de alto rango del Sistema Penitenciario Nacional, fueron actos deliberados y se llevaron a cabo con la intención de imponer a las personas opositoras o percibidas como tales, dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales. La ausencia de investigación sobre esos actos, aunque hayan sido denunciados ante los tribunales, denota también actos intencionales del Ministerio Público y del Poder Judicial destinados a obstaculizar la rendición de cuenta de los perpetradores de esos actos.

c) *Objetivo de la acción u omisión*

1076. El GHREN pudo documentar que, en las primeras oleadas de detenciones a partir de abril de 2018, los actos de tortura y malos tratos tuvieron un componente de castigo por infligirse en contra de personas consideradas como opositoras al Gobierno. Sin embargo, también existió la intención de extraer información sobre otras personas participantes en manifestaciones, tranques, barricadas y demás expresiones de protesta, así como sobre la organización de la protesta, y fuentes de financiamiento de éstas.

1077. En las etapas posteriores, se observó el uso mayoritariamente de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como castigo hacia las personas por ser consideradas opositoras y/o enemigas del Gobierno. Por ejemplo, los líderes estudiantiles o sociales que participaron en forma prominente en las protestas y los antiguos funcionarios del gobierno y miembros del FSLN sufrieron actos de tortura más graves.

¹⁶⁹¹ Véase *Brđanin* Sentencia de Primera Instancia, párr. 482; *Brđanin*, Sentencia de Apelación, párr. 246.

1078. Asimismo, el GHREN documentó un trato particularmente severo contra mujeres dirigentes políticas de UNAMOS, quienes fueron recluidas en celdas separadas durante la totalidad de su detención, esto es, durante 20 meses, con la prohibición de comunicar con cualquier persona, generalmente en condición de penumbra permanente. Una de ellas fue detenida en condición de aislamiento durante más de 13 meses. Ese trato parece destinado no sólo a humillar y quebrar liderazgos de oposición sino a callar voces políticas con características particulares: ser opositoras, mujeres y feministas, calidades asociadas a diferentes tipos de traición al FSLN.

1079. El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que las y los funcionarios que participaron en cada uno de los casos de tortura documentados, actuaron con el propósito de obtener información, castigar, intimidar o coaccionar a las víctimas, o de discriminarlas por ser opositoras al Gobierno, reales o percibidas.

d) *Conclusión*

1080. Sobre esta base, el GHREN tiene motivos razonables para creer que personas opositoras o percibidas como tales fueron sometidas a la imposición de dolores o sufrimientos físicos o mentales graves, mediante acciones y omisiones, y que los autores tenían la intención de cometer dichos actos u omisiones con el objeto de obtener información o una confesión, o castigar, humillar, intimidar o coaccionar a la víctima. El GHREN tiene motivos razonables para creer que estos actos y omisiones constituyen actos de tortura, incluyendo violencia sexual y basada en el género, o de actos crueles, inhumanos y degradantes.

1081. El Grupo ha concluido con motivos razonables para creer que, desde abril de 2018 y a la fecha de redacción de este informe, existe un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una parte de la población nicaragüense. El Grupo tiene motivos razonables para creer que los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes infligidos en contra de personas opositoras o percibidas como tales forman parte de este ataque generalizado y sistemático. Por lo tanto, el Grupo tiene motivos razonables para creer que los actos documentados constituyen el crimen de tortura o trato cruel, inhumano y degradante como crimen de lesa humanidad.

5. Persecución

1082. La persecución como crimen de lesa humanidad es una forma extrema de discriminación, la cual ha sido calificada en la jurisprudencia internacional como “uno de los más atroces de todos los crímenes de lesa humanidad” porque “tiene su base en la negación del principio de igualdad de los seres humanos”.¹⁶⁹² Su penalización internacional tiene como finalidad proteger individuos contra la discriminación con base en su pertenencia a grupos étnicos, religiosos y políticos.¹⁶⁹³ Si bien el tipo penal pertenece al mismo *genus* que el crimen de genocidio, ya que ambas abarcan el ataque a personas que pertenecen a un grupo específico,¹⁶⁹⁴ a diferencia del genocidio, el tipo penal de persecución no protege a grupos específicos como tales, sino a las personas en su capacidad individual, a pesar de que se les ataca por su relación con un grupo.¹⁶⁹⁵

1083. El tipo penal de persecución como crimen de lesa humanidad ha sido incluido en la lista de actos prohibidos que constituyen crímenes de lesa humanidad en todos los instrumentos pertinentes de derecho internacional a partir de la Carta de Londres, y forma parte del Derecho Internacional Consuetudinario.¹⁶⁹⁶ Según el Derecho Internacional Consuetudinario, para calificar una conducta de persecución como crimen de lesa humanidad, se requiere establecer que la conducta discrimina de hecho (*i*) y priva o infringe

¹⁶⁹² *Kupreškić* Sentencia de primera instancia, párr. 751.

¹⁶⁹³ SECC, *Prosecutor v. Kaing Guek Eav alias Duch*, causa núm. 001/18-07-2007-ECCC/SC, Judgement, 3 de febrero de 2012 (*Duch*, Sentencia de Apelación), párr. 265; *Prosecutor v. Nuon Chea and Khieu Samphân*, causa núm. 002/19-09-2007-ECCC/SC, Appeal Judgement, 26 de noviembre de 2016 (*Nuon & Khieu*, Sentencia de Apelación), párr. 668.

¹⁶⁹⁴ *Tolimir*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 849.

¹⁶⁹⁵ Véase *Jelisić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 79, respecto al elemento subjetivo de la intención de destruir al grupo como tal.

¹⁶⁹⁶ *Duch*, Sentencia de Apelación, párr. 225.

derechos fundamentales establecidos en el derecho internacional (ii), por razones fundadas en motivos raciales, religiosos, o políticos (iii), y de forma deliberada con la intención de discriminar (iv).¹⁶⁹⁷

a) *Discriminación de hecho*

1084. La conducta debe tener consecuencias discriminatorias,¹⁶⁹⁸ esto es, debe tener un efecto discriminatorio,¹⁶⁹⁹ no bastando la mera intención de discriminar.¹⁷⁰⁰ De acuerdo con la jurisprudencia internacional, esta consecuencia se materializa en la medida que las víctimas son discriminadas de hecho, por lo que son o quiénes son, con base en lo que el autor percibe como características de las víctimas en relación a los rasgos que le atribuye a un grupo.¹⁷⁰¹ En otras palabras, el autor no se dirige en primera instancia contra el individuo, sino contra la pertenencia a un grupo específico.¹⁷⁰²

1085. Se ha determinado que el grupo del cual la pertenencia de la víctima se percibe debe ser “suficientemente discernible”.¹⁷⁰³ Esto es, que la identidad del grupo pueda ser apreciada desde la perspectiva del autor. A la hora de evaluar si un grupo es identificable, se puede adoptar un enfoque mixto, teniendo en cuenta tanto criterios objetivos como subjetivos.¹⁷⁰⁴ Podrán considerarse tanto la percepción del grupo por parte del autor como la percepción y autoidentificación de las víctimas como pertenecientes al mismo grupo.¹⁷⁰⁵ En particular, no es necesario que todos los miembros del grupo sufran el mismo nivel de discriminación.¹⁷⁰⁶ Asimismo, es irrelevante que la conducta también afecte a personas ajenas al grupo, siempre que tenga consecuencias discriminatorias en miembros del grupo.¹⁷⁰⁷

1086. El grupo puede ser caracterizado en términos positivos o negativos e incluir afiliados, simpatizantes y sospechosos,¹⁷⁰⁸ y familiares cercanos.¹⁷⁰⁹ Puede incluir diversas categorías de personas, como funcionarios y activistas, personas de determinadas opiniones,

¹⁶⁹⁷ *Tadić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 715; *Kupreškić* Sentencia de primera instancia, párr. 621; *Kordić & Čerkez*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 189; TPIY, *Krnjelac*, Sentencia de Apelación, párr. 185; *Prosecutor v. Mitar Vasiljević*, causa núm. IT-98-32-A, Judgement, 25 de febrero de 2004 (*Vasiljević*, Sentencia de Apelación), párr. 113; *Vasiljević*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 131; *Kordić & Čerkez*, Sentencia de Apelación, párr. 101; *Stakić*, Sentencia de Apelación, párrs. 327–328; *Prosecutor v. Miroslav Kvočka et al.*, causa núm. IT-98-30/1-A, Judgement, 28 de febrero de 2005 (*Kvočka*, Sentencia de Apelación), párr. 320; *Nahimana et al.*, Sentencia de Apelación, párr. 985; *Prosecutor v. Théoneste Bagosora*, causa núm. ICTR-98-41-T, Judgement, 18 de diciembre de 2008, párrs. 2208–2209; *Duch*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 376–379; *Duch*, Sentencia de Apelación, párr. 226; *Nuon & Khieu*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 427; *Prosecutor v. Khieu Samphân*, causa núm. 002/19-09-2007/SC: F76, Appeal Judgement, 23 de diciembre de 2022 (*Khieu*, Sentencia de Apelación), párr. 868; SCGBH, *Prosecutor v. Ratko Bundalo et al.*, causa núm. X-KRŽ-07/419, Second Instance Verdict, 28 de enero de 2011, traducción disponible en: <<https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/979/Bundalo-et-al/>>, párrs. 294–296.

¹⁶⁹⁸ *Vasiljević*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 245; *Stakić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 733; *Duch*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 377; *Duch*, Sentencia de Apelación, párr. 276; *Nuon & Khieu*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 428.

¹⁶⁹⁹ *Tadić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 715.

¹⁷⁰⁰ *Duch*, Sentencia de Apelación, párr. 228; *Stakić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 733.

¹⁷⁰¹ *Krnjelac*, Sentencia de Apelación, párr. 185; *Duch*, Sentencia de Apelación, párr. 274–275.

¹⁷⁰² *Blaškić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 235.

¹⁷⁰³ *Krnjelac*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 432; *Nuon & Khieu*, Sentencia de Apelación, párrs. 667–668.

¹⁷⁰⁴ CPI, *Bangladesh/Myanmar*, Decision conforme al Artículo 15, párr. 102.

¹⁷⁰⁵ *Ibid.*, párrs. 103, 109.

¹⁷⁰⁶ *Nuon & Khieu*, Sentencia de Apelación, párr. 684.

¹⁷⁰⁷ *Marques et al.*, Sentencia, párr. 771.

¹⁷⁰⁸ Véanse los ejemplos en *Duch*, Sentencia de Apelación, párr. 272 y la referencia en *Khieu*, Sentencia de Apelación, párr. 914; TPIY, *Tadić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 652; *Jelisić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 71; *Blaškić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 236; *Kvočka*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 195 y *Kvočka*, Sentencia de Apelación, párr. 363.

¹⁷⁰⁹ *Duch*, Sentencia de Apelación, párr. 273 y la referencia en *Khieu*, Sentencia de Apelación, párr. 915.

convicciones y creencias, personas de determinada etnia o nacionalidad, o personas que representan a determinados estratos sociales.¹⁷¹⁰

b) *Privar o infringir derechos fundamentales establecidos en el derecho internacional*

1087. De todos los actos prohibidos que constituyen crímenes de lesa humanidad, de acuerdo al Juez Meron,¹⁷¹¹ el crimen de persecución es el que mejor encarna violaciones de derechos humanos, y es, en este sentido, una especie de “delito general” (*umbrella crime*).¹⁷¹² El crimen de lesa humanidad de persecución no requiere que se lesione físicamente a las víctimas,¹⁷¹³ como tampoco que la conducta sea de por sí “criminal”.¹⁷¹⁴ La jurisprudencia internacional diferencia entre dos categorías de violaciones. La primera incluye aquellas conductas cuya relevancia en el Derecho Internacional Penal deriva del hecho de que de por sí ya cumplan con los elementos de otros actos prohibidos que constituyen crímenes de lesa humanidad.¹⁷¹⁵ La segunda incluye conductas que no constituyen otro acto prohibido de crímenes de lesa humanidad,¹⁷¹⁶ sino realizan la privación de un espectro amplio de derechos políticos, sociales y económicos.¹⁷¹⁷

1088. No toda afectación de derechos humanos se considera idónea a efectos de calificar una conducta de persecución, sino sólo las privaciones graves de derechos fundamentales;¹⁷¹⁸ esto es, una denegación grave o flagrante de un derecho fundamental, que alcance el mismo nivel de gravedad que los demás actos prohibidos que constituyen crímenes de lesa humanidad.¹⁷¹⁹ Esta definición es ampliamente similar a la definición de persecución del Estatuto de Roma.¹⁷²⁰ Al determinar si los actos concretos llenan este umbral de gravedad, hay que evaluar si llenan el umbral por sí solos, o en conjunto con otros actos por su efecto acumulativo.¹⁷²¹ De hecho, los actos no deben considerarse aisladamente.¹⁷²² Un acto que no parece ser comparable a los demás actos prohibidos puede alcanzar el nivel de gravedad requerido para constituir crímenes de lesa humanidad si tiene, o es probable que tuviera, un efecto similar al de los demás actos debido al contexto en el que se lleva a cabo.¹⁷²³ En todo caso, las causas en la jurisprudencia internacional que tratan del delito de persecución se enmarcan generalmente en un patrón más amplio de actos prohibidos que constituyen crímenes de lesa humanidad.¹⁷²⁴

1089. La jurisprudencia internacional ha sostenido que la identificación de un listado de derechos fundamentales cuya violación podría ser considerada como crimen de lesa humanidad de persecución, no serviría a los intereses de la justicia porque la inclusión

¹⁷¹⁰ *Ibid.*, párr. 272.

¹⁷¹¹ Theodor Meron, *International law in the age of human rights*, 301 RdC (2003), p. 120.

¹⁷¹² TPIY, *Prosecutor v. Zoran Kupreškić et al.*, causa núm. IT-95-16-A, Judgement, 23 de octubre de 2001, párr. 98, 105; *Prosecutor v. Predrag Banović*, causa núm. IT-02-65/1-S, Sentencing Judgement, 28 de octubre de 2003, párr. 38; *Popović et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 965; *Dorđević*, Sentencia de Apelación, párr. 1756; *Stanišić & Župljanin*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 67.

¹⁷¹³ *Tadić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 707.

¹⁷¹⁴ *Kvočka*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 186.

¹⁷¹⁵ *Kupreškić*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 593–615, 617.

¹⁷¹⁶ *Tadić*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 703–710.

¹⁷¹⁷ *Ibid.*, párr. 710 específicamente refiriéndose a la política Nazi de despojar a los judíos de sus derechos políticos, y separarlos de la vida social, económica y cultural mediante la adopción de leyes; *Kupreškić* Sentencia de Primera Instancia, párr. 615(c).

¹⁷¹⁸ *Blaškić*, Sentencia de Apelación, párrs. 138 y s.; *Kupreškić* Sentencia de Primera Instancia, párr. 618; *Prosecutor v. Vujadin Popović et al.*, causa núm. IT-05-88-A, Judgement, 30 de enero de 2015, párrs. 761 y s.; *Prlić et al.*, Sentencia de Apelación, párr. 422.

¹⁷¹⁹ *Kupreškić* Sentencia de primera instancia, párr. 621.

¹⁷²⁰ *Karadžić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 1621.

¹⁷²¹ *Duch*, Sentencia de Apelación, párr. 257–259.

¹⁷²² *Kupreškić* Sentencia de Primera Instancia, párr. 615(e).

¹⁷²³ *Tolimír*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 848 (nota al pie omitida).

¹⁷²⁴ *Kupreškić* Sentencia de Primera Instancia, párr. 615(d). Ver también las materias en las causas de la jurisprudencia internacional citadas a lo largo de este apartado II.A. y, en particular, *Duch*, Sentencia de Apelación, párr. 256. Eso hace que el umbral de gravedad no resulta, en la práctica, muy restrictivo, como coincide Darryl Robinson, *Defining “Crimes Against Humanity” at the Rome Conference*, 93 AM. J. INT’L L. 43–57 (1999), p. 55.

explícita de determinados derechos fundamentales podría interpretarse como la exclusión implícita de otros.¹⁷²⁵ En lugar de ello, se ha optado por un análisis caso por caso. Entre los derechos que se han reconocido en los casos internacionales, están el derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona, el derecho a no ser sometido a tortura o a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a no ser arrestado, detenido o exiliado arbitrariamente,¹⁷²⁶ el derecho al debido proceso,¹⁷²⁷ y a la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación. En la jurisprudencia de la CPI, entre los derechos que se han reconocido está, además de los anteriores, el derecho a la educación,¹⁷²⁸ y el derecho a la propiedad privada.¹⁷²⁹

1090. Entre las conductas que se han considerado en la jurisprudencia internacional como forma de persecución política, están: el asesinato,¹⁷³⁰ la encarcelación, la detención arbitraria y reclusión,¹⁷³¹ la desaparición forzada,¹⁷³² la creación o perpetuación de condiciones de vida inhumanas, en particular durante la detención o el encarcelamiento,¹⁷³³ la tortura y otros tratos crueles o penas o inhumanos que impliquen daños o lesiones físicas o mentales,¹⁷³⁴ incluyendo la violencia sexual,¹⁷³⁵ los discursos de odio¹⁷³⁶ incluyendo la aprobación de directrices de prensa para su publicación,¹⁷³⁷ la deportación y saqueo de la propiedad,¹⁷³⁸ incluyendo prestar deliberadamente asesoramiento jurídico erróneo sobre la ilegalidad de la deportación,¹⁷³⁹ el exilio forzoso,¹⁷⁴⁰ la privación del derecho a la ciudadanía,¹⁷⁴¹ la confiscación¹⁷⁴² y apropiación ilegal¹⁷⁴³ de propiedad privada, y la utilización de un sistema jurídico para aplicar una política discriminatoria.¹⁷⁴⁴ También se ha considerado “la

¹⁷²⁵ *Kupreškić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 623, refiriéndose al principio “*expressio unius est exclusio alterius*”.

¹⁷²⁶ *Blaškić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 220.

¹⁷²⁷ *Brđanin*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 1044–1045. Véase también TMN, *US v. Ernst von Weizsäcker et al.*, Opinion and Judgement, 11 de abril de 1949, en: Case No. 12, U.S. v. von Weizsäcker et al. (“The Ministries Case”), Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals Under Control Council Law no. 10, Vol. 14, Washington DC 1952, 308–870, p. 604.

¹⁷²⁸ CPI, *Bangladesh/Myanmar*, Decision conforme al Artículo 15, párr. 101.

¹⁷²⁹ CPI, *Burundi*, Decision sobre Investigación, párr. 132.

¹⁷³⁰ *Blaškić*, Sentencia de Apelación, párr. 143; TPIR, *Prosecutor v. Pauline Nyiramasuhuko et al.*, causa núm. ICTR-98-42-T, Judgement and Sentence, 24 de junio de 2011, párrs. 6099, 6101, 6103, 6106, 6108.

¹⁷³¹ *Gotovina et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 1814–1824

¹⁷³² *Ibid.*, párrs. 1831–1839.

¹⁷³³ *Karadžić*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 496–500, 514 y 2507–2511.

¹⁷³⁴ *Ibid.* párrs. 503–504, 2485–2499.

¹⁷³⁵ Véase *Čelebići*, Sentencia de Primera Instancia; *Kvočka*, Sentencia de Primera Instancia.

¹⁷³⁶ *Nahimana et al.*, Sentencia de Apelación, párrs. 983–988; *Prosecutor v. Simon Bikindi*, causa núm. ICTR-01-72-T, Judgement, 2 de diciembre de 2008, párr. 393.

¹⁷³⁷ The Ministries Case, pp. 575–576.

¹⁷³⁸ *Kvočka*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 186.

¹⁷³⁹ The Ministries Case, Order and Memorandum of the Tribunal and Separate Memorandum of Presiding Judge Christianson, 12 de diciembre de 1949, 950–959, pp. 958–959.

¹⁷⁴⁰ The Ministries Case, p. 471.

¹⁷⁴¹ The Ministries Case, p. 471; TMI, *The United States of America, the French Republic, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the Union of Soviet Socialist Republics v. Hermann Wilhelm Göring et al.*, Judgment, 1 de octubre de 1946 (“The Göring Case”), en: Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal, Vol. I (Nuremberg 14 November 1945-1 October 1946), International Military Tribunal, Nuremberg 1947, 171–341, p. 248. Véase también ONU, A Study of Statelessness E/1112; E/1112/Add.1, Part II, Section I, Chapter I, III, refiriéndose “a las medidas de privación de nacionalidad aplicadas por los gobiernos nazi y fascista contra sus nacionales judíos y opositores al régimen que formaban parte del conjunto de medidas de persecución racial, religiosa o política”.

¹⁷⁴² The Göring Case, p. 282; The Justice Case, pp. 1063–1064; U.S. v. Oswald Pohl et al., Opinion and Judgement, 3 de noviembre de 1947, en: Case No. 4, U.S. v. Pohl et al. (“The Pohl Case”), Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals Under Control Council Law no. 10, Vol. 5, U.S. Government Print. Office, Washington DC 1950, 958–1163, p. 977–978. Véase también, TPIY, *Kupreškić* Sentencia de primera instancia, párr. 612; *Blaškić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 227; *Krajišnik*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 824 y 827.

¹⁷⁴³ *Krajišnik*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 771 y 772.

¹⁷⁴⁴ TPIY, *Kupreškić* Sentencia de primera instancia, párr. 612, refiriéndose a The Justice Case.

participación en un sistema de crueldad e injusticia organizado a escala nacional por el gobierno en violación de las leyes de [...] la humanidad, y perpetrado en nombre de la ley por la autoridad del Ministerio de Justicia, y a través de la instrumentalidad de los tribunales”,¹⁷⁴⁵ incluyendo por medio de la “aplicación abusiva del concepto de alta traición”,¹⁷⁴⁶ “contribuyeron en gran medida a la ‘solución final’ del problema”.¹⁷⁴⁷

1091. La CPI ha calificado como persecución el arresto de manifestantes antigubernamentales;¹⁷⁴⁸ su liberación condicionada a cambio de firmar una declaración por la cual la persona liberada se compromete a no protestar contra el gobierno;¹⁷⁴⁹ la tortura de manifestantes contra el gobierno detenidos;¹⁷⁵⁰ el secuestro y posterior tortura de familiares de presuntos disidentes;¹⁷⁵¹ disparos contra manifestantes causando lesiones y muerte;¹⁷⁵² la negación de la atención médica a manifestantes heridos;¹⁷⁵³ el acoso y amenazas contra periodistas independientes, el cierre de sus oficinas, su exilio y a la destrucción de sus equipos; así como a la suspensión o revocación de licencias de organizaciones de la sociedad civil, el congelamiento de las cuentas bancarias de sus ejecutivos, y a la emisión de “órdenes de detención internacional” contra periodistas y líderes de organizaciones de la sociedad civil.¹⁷⁵⁴

c) *Por razones fundadas en motivos políticos*

1092. La persecución fundada en motivos políticos, esto es, la persecución política, se presenta cuando la persona autora actúa discriminando a la víctima por su ideología u opiniones políticas.¹⁷⁵⁵ Si bien la persecución política puede estar presente cuando las víctimas forman parte de un grupo político o tienen opiniones políticas específicas, también incluye a personas que no tienen convicciones u opiniones políticas comunes, e incluso ninguna convicción u opinión relevante en el caso concreto, sino simplemente son percibidas como opositores potenciales o como obstáculos para la realización de la agenda política del autor.¹⁷⁵⁶ Esto está en consonancia con la jurisprudencia que concibe la discriminación de hecho de la víctima con lo que el autor percibe como grupo específico de la víctima.

1093. En otras palabras, la persecución política puede dirigirse a grupos agregados sin identidad ni agenda en común.¹⁷⁵⁷ En particular, puede producirse cuando se ataca a individuos porque el autor los considera enemigos políticos;¹⁷⁵⁸ esto es, cuando son considerados por el autor como una amenaza o peligro político.¹⁷⁵⁹ No es necesario que estén organizados y constituidos en una entidad política homogénea.¹⁷⁶⁰ Siempre que todos los miembros del grupo sean percibidos como enemigos políticos, no importa si, por lo demás, las víctimas corresponden a diferentes categorías o si éstas son exhaustivas, ya que es la designación de enemigo político de parte del autor lo que lleva a su persecución.¹⁷⁶¹

d) *Intención discriminatoria*

1094. Si bien los crímenes de lesa humanidad, de hecho, suelen cometerse por motivos discriminatorios,¹⁷⁶² a diferencia de todos los demás actos prohibidos que pueden constituir

¹⁷⁴⁵ The Justice Case, p. 985.

¹⁷⁴⁶ *Ibid.*, p. 1028.

¹⁷⁴⁷ *Ibid.*, p. 1081.

¹⁷⁴⁸ *Libyan Arab Jamahiriya*, Decision on Article 58 Application, párrs. 43–44.

¹⁷⁴⁹ *Ibid.*, párr. 45.

¹⁷⁵⁰ *Ibid.*, párr. 46.

¹⁷⁵¹ *Ibid.*, párr. 47.

¹⁷⁵² *Ibid.*, párrs. 49–62.

¹⁷⁵³ *Ibid.*, párr. 63.

¹⁷⁵⁴ CPI, *Burundi*, Decision sobre Investigación, párr. 135.

¹⁷⁵⁵ *Akayesu*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 583.

¹⁷⁵⁶ *Nuon & Khieu*, Sentencia de Apelación, párr. 669.

¹⁷⁵⁷ *Ibid.*, párr. 678.

¹⁷⁵⁸ *Khieu*, Sentencia de Apelación, párr. 917.

¹⁷⁵⁹ *Ibid.*, párr. 919.

¹⁷⁶⁰ *Ibid.*

¹⁷⁶¹ *Ibid.*, párr. 917.

¹⁷⁶² *Tadić*, Sentencia de Apelación, párr. 297.

crímenes de lesa humanidad, y cuyo *actus reus* puede ser idéntico al de persecución,¹⁷⁶³ solo la persecución requiere una intención discriminatoria adicional.¹⁷⁶⁴ Es la intención específica de excluir a un ser humano de la sociedad por motivos discriminatorios,¹⁷⁶⁵ y de causarle daño por su pertenencia a un grupo específico, antes que los medios empleados para conseguirlo,¹⁷⁶⁶ lo que reviste a la conducta su carácter singular y su gravedad, en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Esta es la condición que convierte una conducta discriminatoria en un crimen de derecho internacional,¹⁷⁶⁷ incluso en casos que, fuera de su nexo con un ataque contra una población civil, ni siquiera podrían ser consideradas “criminales” ni parecer atentar directamente contra los derechos más fundamentales del ser humano.¹⁷⁶⁸

1095. La presencia de la intención discriminatoria no debe deducirse directamente del carácter discriminatorio general de un ataque contra una población civil,¹⁷⁶⁹ sino de las circunstancias que concurren en el caso concreto, particularmente, al evaluar el caso como un conjunto de actos.¹⁷⁷⁰ El hecho de que tales circunstancias puedan constituir también elementos probatorios para determinar el acto discriminatorio en sí, no excluye que se tomen en consideración dichas circunstancias, así como otros factores, para determinar la intención discriminatoria en virtud de la cual se cometió el acto discriminatorio.¹⁷⁷¹

1096. Entre las circunstancias que han sido consideradas por los tribunales internacionales para inferir la intención discriminatoria, se incluyen:

- el carácter sistemático de los actos contra el grupo y la actitud general de la persona agresora demostrada por su conducta;¹⁷⁷²
- la existencia de políticas discriminatorias en cuya ejecución haya participado la persona agresora;¹⁷⁷³
- la selectividad en la forma en que se actúa contra las víctimas, en particular, la manera como se implementan las detenciones y encarcelamientos, al dirigir determinadas formas de trato específico contra un grupo personas;¹⁷⁷⁴
- las declaraciones de funcionarios del Estado y de los medios de comunicación dirigidas contra miembros del grupo afectado;¹⁷⁷⁵
- la existencia de medidas y procedimientos sistemáticos organizados y aprobados por el Gobierno contra miembros del grupo afectado;¹⁷⁷⁶
- el rango, la posición y la función de la persona agresora y, en consecuencia, su relación con los actos o políticas subyacentes.¹⁷⁷⁷

¹⁷⁶³ *Kupreškić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 607.

¹⁷⁶⁴ *Tadić*, Sentencia de Apelación, párr. 305; TPIR, *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, causa núm. ICTR-96-4-A, Judgement, 1 de junio de 2001 (*Akayesu*, Sentencia de Apelación), párr. 466.

¹⁷⁶⁵ *Kupreškić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 621.

¹⁷⁶⁶ *Blaškić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 235.

¹⁷⁶⁷ *Ibid.*; *Kvočka*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 186.

¹⁷⁶⁸ *Ibid.*

¹⁷⁶⁹ TPIY, *Kvočka*, Sentencia de Apelación, párr. 460; *Kordić & Čerkez*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 715; *Tolimir*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 850; *Dorđević*, Sentencia de Apelación, párrs. 876 y 886; *Karadžić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 500.

¹⁷⁷⁰ *Krnojelac*, Sentencia de Apelación, párr. 201–202.

¹⁷⁷¹ *Ibid.*, párr. 185.

¹⁷⁷² *Ibid.*, párr. 184.

¹⁷⁷³ *Duch*, Sentencia de Apelación, párr. 240.

¹⁷⁷⁴ *Dorđević*, Sentencia de Apelación, párrs. 876 y 886; *Krnojelac*, Sentencia de Apelación, párrs. 184 y 186.

¹⁷⁷⁵ *Karadžić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 2515.

¹⁷⁷⁶ The Justice Case, pp. 1080–1081.

¹⁷⁷⁷ SCGBH, *Prosecutor v. Krsto Savić and Milka Mučibabić*, causa núm. X-KR-07/400, Verdict, 24 de marzo de 2009, párr. 171, refiriéndose que había sido con base en la posición (de Savić) en las estructuras de poder de la República Serbia de Bosnia y Herzegovina y el número y la duración de los crímenes contra la humanidad, (que la Sala) llegó a la conclusión sobre la existencia de intención

e) *Análisis*

1097. El GHREN tiene motivos razonables para creer que los crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelación, tortura, incluyendo violación y otros actos de violencia sexual de gravedad comparable, y deportación documentados en este informe, fueron cometidos en el marco de una campaña discriminatoria por motivos políticos, instrumentada desde las más altas esferas del Gobierno Ortega–Murillo, contra parte de la población civil de Nicaragua, y constituyen, *prima facie*, el crimen de lesa humanidad de persecución.

1098. El GHREN ha concluido con motivos razonables para creer cómo, a partir del 18 de abril de 2018, el Gobierno de Nicaragua implementó una política de Estado discriminatoria hacia un sector de la población que ha sido percibido por la administración Ortega–Murillo como una amenaza a su autoridad y a la hegemonía en el poder del Estado, con el fin de suprimir toda crítica o acto de oposición. Las estrategias represivas por parte del Gobierno se fueron sofisticando con el transcurso del tiempo, y fueron dirigidas a un grupo heterogéneo de la población civil nicaragüense, con el común denominador de haber expresado críticas o haber adoptado posturas diferentes a la línea del Gobierno y/o haberse involucrado en actividades políticas o de oposición. Este grupo fue aumentando a lo largo de esta campaña persecutoria.

1099. Entre los indicios analizados por el GHREN para determinar la existencia del grupo discriminado y objeto de ataques persecutorios por parte del Presidente Daniel Ortega y altos funcionarios de su Gobierno, se encuentran, entre otros: (i) las declaraciones, entrevistas y testimonios por la pareja presidencial y otros funcionarios de su Gobierno identificado al grupo perseguido; (ii) las campañas discriminatorias de desinformación articuladas en los medios de comunicación y redes sociales oficiales u oficialistas; (iii) la aplicación abusiva y discriminatoria de nuevas leyes y modificaciones a leyes existentes; (iv) la toma de decisiones administrativas y judiciales sin sustento legal y/o que reflejan actos violatorios a garantías fundamentales del debido proceso y a un juicio justo.

1100. El análisis de este conjunto de información permitió al GHREN identificar como grupo discriminado, a parte de la población de Nicaragua considerada como opositora y que el Gobierno, dejando de manifiesto su intención discriminatoria, ha señalado como “criminales”, “enemigos”, “terroristas”, “golpistas”, “traidores/as a la patria”, “abortistas” entre otros términos discriminatorios.¹⁷⁷⁸ Esto está en concordancia con la jurisprudencia de los Tribunales Penales Internacionales que establece que es el sujeto activo de los crímenes persecutorios quien define al grupo de víctimas, mientras que las víctimas objeto de los actos prohibidos y crímenes discriminatorios no tienen ninguna influencia en la definición de su estatus.

1101. Si el sujeto activo define a una determinada persona como perteneciente al grupo objeto de los crímenes discriminatorios, esta definición se vuelve “discriminatoria de hecho” para la víctima, ya que no puede ser refutada, incluso si tal clasificación puede ser incorrecta desde un punto de vista objetivo. En tales casos, se da una discriminación objetiva, ya que las víctimas son discriminadas de hecho por lo que son o hacen sobre la base de la percepción del sujeto activo del crimen persecutorio.¹⁷⁷⁹

1102. El GHREN identificó la existencia de indicios que identifican la intención discriminatoria en la comisión de los crímenes de lesa humanidad documentados en el

discriminatoria más allá de toda duda razonable”. Traducción al inglés en MICT, *Augustin Ngirabatware v Prosecutor*, causa núm. MICT-12-29-A, Annex B: List of Authorities (Continuos) to Dr. Ngirabatware’s Brief in Reply to Prosecution Respondent’s Brief filed on 13 August: Disclosure of Full Judgement of First Instance (24 March 2009) and Full Judgement of Second Instance (12 April 2010) in the Matter of the *Prosecutor vs. Krsto Savic and Milka Mucibabic*, 6 de septiembre de 2013.

¹⁷⁷⁸ Véase, por ejemplo, entrevista de Marc Perelman al presidente Daniel Ortega en France24 en Español, 11 de septiembre de 2018 (03:58-06:14), disponible en: < <https://www.france24.com/es/20180911-entrevista-daniel-ortega-tesis-nicaragua-trump>>; El 19 Digital, “Mismo invasor, mismos vendepatrias” (6 de octubre de 2019), disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:95035--mismo-invasor-mismos-vendepatrias>; Policía Nacional de la República de Nicaragua, Nota de prensa No. 115 (28 de septiembre de 2018), disponible en: <https://www.policia.gob.ni/?p=23327>.

¹⁷⁷⁹ *Tuta & Štela*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 636 y notas al pie de pág. núms.1571-1572.

presente informe que, a su vez, son parte de la herramienta criminal persecutoria utilizada contra de la población civil atacada en Nicaragua.

i) Asesinatos

1103. El Grupo ha concluido con motivos razonables para creer que, desde abril de 2018 y a la fecha de redacción de este informe, existe un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una parte de la población nicaragüense, y que los asesinatos documentados en este informe forman parte de este ataque generalizado y sistemático. El Grupo también concluyó que estos asesinatos constituyen el crimen de asesinato como crimen de lesa humanidad.

1104. Desde el inicio de la protesta social, el Presidente Daniel Ortega, la Vicepresidenta Rosario Murillo y miembros de su Gobierno, han hecho declaraciones públicas considerando a todas aquellas personas que se manifestaron contra el Gobierno como terroristas o golpistas. Esta campaña discriminatoria y de odio desencadenó, desde una posición de liderazgo, un ataque persecutorio que resultó en la comisión de asesinatos contra aquellos que en discursos discriminatorios eran identificados como enemigos del Estado, “desestabilizadores”, “conspiradores”, “terroristas” y “traidores de la patria”.

1105 Reconociendo que durante los actos de represión a la protesta social también fallecieron algunos simpatizantes del FSLN y/o integrantes de grupos armados pro-gobierno y al menos 22 agentes de la Policía Nacional, el GHREN concluyó que la mayoría de las víctimas de los incidentes de asesinatos documentados eran parte de la población civil objeto del ataque persecutorio, o familiares de personas consideradas como opositoras, como en el caso de menores asesinados.

1006. El GHREN también concluyó que la Policía Nacional y los grupos armados pro-gobierno utilizaron fuerza letal dirigida de manera discriminatoria en contra de personas que se manifestaban pacíficamente, así como en contra de manifestantes que llevaron a cabo actos de violencia sobre las cosas o sobre las personas, pero que no suponían amenazas letales.

1007. Por consiguiente, el GHREN tiene motivos razonables para creer que los asesinatos constituyen persecución como crimen de lesa humanidad.

ii) Deportación

1108. El Grupo concluyó con motivos razonables para creer que, desde abril de 2018 y a la fecha de redacción de este informe, existe un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una parte de la población nicaragüense, que la expulsión ilegal de 222 personas opositoras o percibidas como tales forma parte de este ataque generalizado y sistemático, y que los autores tenían la intención de expulsar a estas personas de Nicaragua, sin justificación legal alguna. El Grupo también concluyó que estas expulsiones constituyen el crimen de deportación como crimen de lesa humanidad.

1109. El GHREN concluye que las deportaciones sufridas por parte de la población en Nicaragua son parte del plan criminal del Gobierno Ortega–Murillo para remover cualquier tipo de oposición a su Gobierno y garantizar así su permanencia en el Gobierno. El GHREN ha documentado el contexto de persecución política incluyendo amenazas públicas, detenciones arbitrarias y mensajes incitando a la violencia contra personas opositoras, reales o percibidas –difundidos regularmente por el Presidente Daniel Ortega, la Vicepresidenta Rosario Murillo y otros altos funcionarios en su Gobierno–, en la que se realizaron las deportaciones en Nicaragua. Asimismo, el GHREN considera como parte de este *iter criminis* la información disponible respecto a actos criminales posteriores cometidos, *prima facie*, en Nicaragua, de privación arbitraria de la nacionalidad, seguida de apropiación indebida de bienes y propiedades de la población civil, cuyos legítimos propietarios o propietarias fueron víctimas de estas deportaciones.

1110. El GHREN señala la existencia de información que demuestra la intención de Ortega–Murillo de remover del territorio de Nicaragua toda voz disidente o que cuestionara su legitimidad en el poder o decisiones de Gobierno. Por ejemplo, luego de la elección presidencial de 2021, denunciada por la comunidad internacional, Ortega se refirió públicamente a los candidatos presidenciales opositores que habían sido detenidos arbitrariamente antes de las elecciones, con un mensaje discriminatorio y denigrante ante el

público en general de su país y el mundo, como “[E]sos que están presos ahí, son los hijos de perra de los imperialistas yanquis...se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses, dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria...”.¹⁷⁸⁰ En enero de 2022, el Presidente Daniel Ortega volvió a arremeter contra la oposición política nicaragüense que se hallaba en ese momento detenida de manera arbitraria, anunciando su deseo de deportarla.

1111. El lenguaje utilizado por el Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo en el anuncio que dieron inmediatamente después de la deportación de las 222 víctimas, en presencia de altas autoridades de su Gobierno, incluyendo de las fuerzas de seguridad del Estado, es un indicio más del carácter discriminatorio de la deportación en contra de las personas opositoras o percibidas como tales. De manera similar, el lenguaje utilizado por Gustavo Porras en entrevista del 10 de febrero de 2023 al referirse a las personas deportadas como “terroristas”, “delincuentes”, “traidores a la patria”, denota la intención discriminatoria de la deportación de estas personas.

1112. Por consiguiente, el GHREN tiene motivos razonables para creer que las deportaciones constituyen persecución como crimen de lesa humanidad.

iii) Privación arbitraria de la nacionalidad

1113. La privación arbitraria de la nacionalidad llevada a cabo por motivos discriminatorios, en el contexto de un ataque sistemático y/o generalizado contra la población civil, puede constituir un crimen de persecución. El acto persecutorio debe tener la intención de causar, y dar lugar a una violación del disfrute por parte de una persona de un derecho básico o fundamental, en este caso del derecho a no ser privado arbitrariamente de la nacionalidad.

1114. Los hechos documentados en ese informe denotan la intención discriminatoria con la que el Presidente Daniel Ortega, la Vicepresidenta Rosario Murillo y otros han instrumentalizado agentes y órganos de todos los poderes del Estado para perpetrar los crímenes subyacentes de lesa humanidad, como parte de la política persecutoria para consolidar su hegemonía política y poder absoluto en el Gobierno. La privación arbitraria de la nacionalidad impuesta por el Gobierno de Ortega–Murillo en contra de 222 miembros de la población civil, junto a la deportación y apropiación indebida de los bienes de algunos de estos, forma parte de estos actos criminales persecutorios.

1115. El GHREN concluyó que la privación de la nacionalidad de los 222 nicaragüenses mediante la resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones de Managua el 9 febrero de 2023 fue realizada de manera discriminatoria con la intención de infligirla en contra de personas opositoras al Gobierno, reales o percibidas. El Grupo tiene motivos razonables para creer que los autores de la privación arbitraria de la nacionalidad eligieron a sus víctimas en función de su identidad como personas opositoras o percibidas como tales. Por ejemplo, entre las 222 víctimas de la población civil, se encontraban todos los excandidatos presidenciales detenidos arbitrariamente en 2021, así como otros de los liderazgos de oposición más importantes en Nicaragua.

1116. No le fue suficiente al Gobierno Ortega–Murillo deportar a las víctimas, sino que además las privó arbitrariamente de su nacionalidad, con las graves consecuencias jurídicas que ello conlleva. Queda así aun más de manifiesto la intención discriminatoria de asegurarse de que estas personas no podrían llegar a suponer algún tipo de amenaza futura al poder del Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo. Es decir, no sólo basta con detener arbitrariamente a la población civil, víctima del ataque, sino que debían asegurarse la no participación en la vida nicaragüense y el ejercicio político de sus derechos. De manera que, en el futuro, todos aquellos que sean deportados y señalados como opositores, no puedan ejercer ningún tipo de derecho político, incluyendo el derecho a votar a sus representantes o presentarse como candidatos a elecciones. La intención persecutoria quedó de manifiesto a través de las palabras del presidente de la Asamblea Nacional quien explicó que, debido a la dificultad de despojar de la nacionalidad a los ciudadanos nativos, ya que esto no estaba contemplado en la legislación penal ni en la Constitución Política de Nicaragua, el Gobierno

¹⁷⁸⁰ Véase, Confidencial, Daniel Ortega lanza su más virulento discurso de odio contra los presos políticos, 9 noviembre 2021, disponible en: <<https://youtu.be/wWNZgMb5g1I>>

se encontró con un problema técnico legal, el cual sería solucionado mediante una reforma constitucional para ajustar la normativa a su plan.¹⁷⁸¹

1117. Al cierre de este primer informe, el 15 de febrero de 2023, el presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua, Juez Ernesto Rodríguez Mejía, dio lectura a una resolución que hace eco de resoluciones penales a las que el GHREN no ha tenido acceso, de una sentencia relacionada a otros 94 ciudadanos nicaragüenses a los cuales se les impuso, como “traidores a la patria”, las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública, en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, en iguales términos que a las 222 personas deportadas el 9 de febrero de 2023.¹⁷⁸²

1118. Entre las 94 víctimas de la población civil nicaragüense afectada por esta decisión ilegal se encuentran personas nicaragüenses que ya se habían visto forzadas a huir de Nicaragua, temiendo por sus vidas e integridad física y moral, así como otras personas opositoras, reales o percibidas, que continuaban residiendo en Nicaragua a la fecha de cierre de este informe. El grupo de víctimas comprende a las defensores y defensoras de derechos humanos más conocidas, miembros de partidos y movimientos políticos, académicos y académicas, personas que participaron en las protestas masivas del 2018, y familiares de personas que fueron deportadas el 9 de febrero de 2023. El GHREN identificó que muchas de estas personas habían sido víctimas de hostigamiento, amenazas y detenciones arbitrarias en las diferentes fases del ataque contra la población civil. Entre las 94 víctimas también se encuentran 24 mujeres, algunas de ellas feministas y pertenecientes al movimiento feminista de Nicaragua que fueron perseguidas por su rol de liderazgo como voces críticas del Gobierno.

1119. Por consiguiente, el GHREN tiene motivos razonables para creer que la privación arbitraria de la nacionalidad de estas personas opositoras, reales o percibidas, constituye persecución como crimen de lesa humanidad.

iv) Detenciones Arbitrarias

1120. La detención arbitraria llevada a cabo por motivos discriminatorios, en el contexto de un ataque sistemático y/o generalizado contra la población civil, puede constituir un crimen de persecución. El acto persecutorio debe tener la intención de causar, y dar lugar a una violación del disfrute por parte de una persona de un derecho básico o fundamental, en este caso el derecho a la libertad.

1121. El GHREN ha concluido con motivos razonables para creer que, desde abril de 2018 y a la fecha de redacción de este informe, existe un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una parte de la población nicaragüense, que las detenciones arbitrarias de personas opositoras o percibidas como tales que se han documentado en el presente informe forman parte de este ataque. Por lo tanto, el Grupo concluyó con motivos razonables para creer que las detenciones arbitrarias documentadas constituyen el crimen de encarcelación como crimen de lesa humanidad.

1122. El GHREN tiene motivos razonables para creer que los autores de estos actos de detención arbitraria eligieron a sus víctimas en función de su identidad como personas opositoras o percibidas como tales. Las detenciones arbitrarias se llevaron a cabo deliberadamente con la intención de discriminar sobre la base de la identidad de las víctimas como personas opositoras o percibidas como tales. Lo anterior quedó documentado por el hecho de que las detenciones se dirigieron casi exclusivamente a personas opositoras o percibidas como tales, mientras que los perpetradores eran funcionarios del Gobierno y/o afines al partido de Gobierno. Además, el GHREN también tuvo en cuenta los insultos y amenazas dirigidos a las víctimas sobre la base de su identidad como “traidores o traidoras de la patria”. La información recolectada sobre los discursos públicos discriminatorios del Presidente Ortega en la alocución realizada el 9 de noviembre de 2021, durante asunción de

¹⁷⁸¹ Véase, cparlamentonic, Entrevista Dr. Gustavo con Alberto Mora, 10 de febrero de 2023.

¹⁷⁸² Véase, Twitter, Canal 4 Nicaragua, 15 de febrero 2023, disponible en: <https://twitter.com/Canal4Ni/status/1626025280258117633?ext=HHwWgsC4mZPY5pAtAAAA>.

su último mandato, o al tiempo que justificaba el envío a una prisión común del Obispo de Matagalpa, Monseñor Álvarez por negarse a ser forzosamente deportado, evidencian la intención discriminatoria con respecto a las detenciones arbitrarias.

1123. El GHREN concluyó que los perfiles de las víctimas de detenciones arbitrarias y los métodos empleados para la instrumentalización del derecho penal evolucionaron en el tiempo. Sin embargo, las víctimas en todas las etapas y campañas de detenciones arbitrarias identificadas por el GHREN fueron personas opositoras al Gobierno o consideradas como tales. Esto incluye a algunos aliados e integrantes de su Gobierno que inicialmente eran parte del ataque, pero que, por diversas razones, pasaron a engrosar la lista de aquellas personas consideradas como “traidoras”, “criminales” u opositoras al Gobierno de Ortega–Murillo.

1124. La persecución ha quedado manifestada cuando, luego de la liberación de personas opositoras o percibidas como tales tras la adopción de la Ley de Amnistía, varias de estas personas fueron posteriormente reencarceladas arbitrariamente. El Grupo documentó cómo, un grupo significativo de personas opositoras o percibidas como tales, tras ser liberadas, y por miedo a ser nuevamente encarcelados arbitrariamente y tras sufrir amenazas al respecto, se sintió forzado a tomar la determinación de salir del país. Por el contrario, el Grupo de Expertos no pudo obtener información sobre la encarcelación de aquellos presos comunes que fueron puestos en libertad por el Gobierno de Ortega–Murillo bajo el pretexto de la Ley de Amnistía.

1125. El GHREN señala que efectivamente, la amenaza real de repetición, y la falta de seguridad identificada por las víctimas, fue correcta, a la luz del análisis de la información disponibles y del desarrollo cronológico de la campaña persecutoria y la comisión de los crímenes subyacentes de lesa humanidad, identificados en este informe, ocurridos *a posteriori* de la adopción de la Ley de Amnistía y que han quedado documentados en este informe. No sólo aquellas personas manifestantes liberadas mediante la Ley de Amnistía fueron más tarde detenidas arbitrariamente, sino también las y los estudiantes, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, miembros de la Iglesia Católica y de partidos de oposición, así como líderes de la oposición, por su postura de oposición o por ser considerados opositores y opositoras por el Gobierno.

1126. Entre otros indicios, el discurso público televisado del Presidente Daniel Ortega en el marco de la inauguración de su cuarto mandato presidencial, señala esa intención específicamente discriminatoria. El Presidente Daniel Ortega se refirió a las siete personas precandidatas políticas presidenciales de la oposición que habían sido arbitrariamente detenidas como: “...esos que están presos ahí, son los hijos de perra de los imperialistas yanquis...se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses, dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria...”¹⁷⁸³

1127. El GHREN identificó, asimismo, varios casos de persecución política mediante las detenciones arbitrarias a partir de la adopción de las leyes para restringir y criminalizar el ejercicio de libertades fundamentales analizadas a detalle en este informe.

1128. Por consiguiente, el GHREN tiene motivos razonables para creer que la encarcelación constituye persecución como crimen de lesa humanidad.

v) Torturas y otros Tratos o Penas Cruelles Inhumanos o Degradantes

1129. El uso de tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes llevado a cabo por motivos discriminatorios, en el contexto de un ataque sistemático y/o generalizado contra la población civil, puede constituir un crimen de persecución. El acto persecutorio debe tener la intención de causar, y dar lugar a una violación del disfrute por parte de una persona de un derecho básico o fundamental, en este caso el derecho a la integridad personal.

1130. El GHREN documentó el uso de tortura –físicas, sexuales y psicológicas– y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el marco de interrogatorios prolongados y bajo la custodia policial, o durante la detención de personas arrestadas por motivos políticos. Esas prácticas fueron dirigidas de manera particular en contra de esas personas con la finalidad de

¹⁷⁸³ Véase, Confidencial, Daniel Ortega lanza su más virulento discurso de odio contra los presos políticos, 9 noviembre 2021, disponible en: <<https://youtu.be/wWNZgMb5g1I>>

castigarlas, intimidarlas o extraer información en el marco de sus acciones o ideas políticas y cívicas.

1131. La misma discriminación es hallada cuando se indaga en las condiciones de detención a la que fueron expuestas esas personas, ya sea bajo detención domiciliaria, en estaciones de policía o centros penitenciarios. Si bien las condiciones de detención son precarias para toda la población carcelaria en los centros penitenciarios existentes en Nicaragua, el GHREN tuvo acceso a información que indica tratos claramente discriminatorios hacia las personas opositoras, reales o percibidas como tales, detenidas que, junto con la arbitrariedad de su detención, se enmarcan en una campaña persecutoria. Las personas de la población arbitrariamente detenidas fueron discriminadas en sus condiciones de detención, como se detalla anteriormente en ese informe.

1132. El establecimiento y la perpetuación de condiciones de vida inhumanas infringidas a las personas detenidas arbitrariamente, se ha considerado una subcategoría de tratos crueles y/o trato inhumano, que puede constituir persecución si los hechos alcanzan el mismo grado de gravedad que los demás delitos subyacentes de persecución y si también esas evidencias reflejan los requisitos generales necesarios para constituir la persecución, identificada, *prima facie*, por el GHREN en Nicaragua.¹⁷⁸⁴ La jurisprudencia internacional penal ha señalado en este sentido que, si bien no hay delito de “condiciones de vida inhumanas” reconocido como tal en el derecho internacional aplicable a estos delitos internacionales, las condiciones de vida inhumanas son una descripción fáctica del medio ambiente en el que se encuentran las personas detenidas y el trato que reciben.¹⁷⁸⁵

1133. Por consiguiente, el GHREN tiene motivos razonables para creer que el uso de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes constituye persecución como crimen de lesa humanidad.

E. Participación y conocimiento del ataque

1134. Para que actos prohibidos constituyan crímenes de lesa humanidad, deben formar parte del ataque contra la población civil.¹⁷⁸⁶ Existe un nexo suficiente entre los actos y el ataque, si los actos son objetivamente parte del ataque, en el sentido de que la naturaleza o las consecuencias de los actos tienen el efecto de contribuir al mismo.¹⁷⁸⁷ Se debe considerar la totalidad de las circunstancias que concurren en el caso, incluidas sus características, la naturaleza de sus objetivos y sus consecuencias.¹⁷⁸⁸ Los factores para determinar si un hecho forma parte de un ataque incluyen, en particular, la relación de los actos prohibidos con el ataque o cualquier política subyacente al ataque;¹⁷⁸⁹ las similitudes entre los actos individuales y los demás actos que forman parte del ataque (incluyendo el *modus operandi* y los motivos);¹⁷⁹⁰ la naturaleza de los acontecimientos y circunstancias que rodean los actos individuales;¹⁷⁹¹ la proximidad temporal y geográfica de los actos individuales con el ataque;

¹⁷⁸⁴ Véase este razonamiento aplicado en los casos *Krajišnik*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 755–756; *Krnjelac*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 439–443 y 497–500.

¹⁷⁸⁵ *Čelebići* Sentencia de Primera Instancia, párrs. 554, 556.

¹⁷⁸⁶ *Tadić*, Sentencia de Apelación, párrs. 248 y 255; *Kayishema & Ruzindana*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 135; *Nuon & Khieu*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 315 y 321.

¹⁷⁸⁷ *Tadić*, Sentencia de Apelación, párrs. 251 y 271; *Tuta & Štela*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 234; *Kordić & Čerkez*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 33; *Kunarac*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 418; *Semanza*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 326; *Sesay et al*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 89–90.

¹⁷⁸⁸ *Semanza*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 326.

¹⁷⁸⁹ *Semanza*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 326; *Tadić*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 629–633.

¹⁷⁹⁰ *Brima et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 220; *Taylor*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 512.

¹⁷⁹¹ *Ibid.*

¹⁷⁹² la identidad de los autores y de las víctimas;¹⁷⁹³ y el rol y la función en los hechos del autor.¹⁷⁹⁴

1135. Por lo que respecta al conocimiento, el autor debe saber que existe un ataque generalizado y/o sistemático contra la población civil, esto es, saber del contexto más amplio o general en el cual se realizan sus actos,¹⁷⁹⁵ y que sus actos forman parte de ese ataque,¹⁷⁹⁶ aunque no es necesario que el autor conozca los detalles de dicho ataque.¹⁷⁹⁷ Basta con asumir el riesgo de que la conducta forme parte del mismo.¹⁷⁹⁸ No son necesarias pruebas directas de que se conocía el contexto y el nexo relevantes, sino basta con el argumento circunstancial basado en prueba indirecta,¹⁷⁹⁹ incluida, entre otros, la posición dentro de una jerarquía civil o militar; la pertenencia a un grupo u organización que participe en la comisión de delitos; la magnitud de los actos de violencia; la presencia en el lugar de los hechos; y el grado de repercusión de los delitos en los medios de comunicación.¹⁸⁰⁰

1136. El GHREN nota que los crímenes de lesa humanidad se cometen generalmente en el contexto de un ataque que es de conocimiento general y público; por lo tanto, una persona responsable por la comisión de los mismos no puede negar de manera creíble la falta de conocimiento del ataque. En este sentido, el conocimiento puede probarse extrayendo inferencias de hechos y circunstancias relevantes.¹⁸⁰¹

1137. El GHREN ha concluido que, desde abril de 2018 y hasta la fecha de redacción del presente informe, una variedad de funcionarios, funcionarias y autoridades del Estado, incluyendo integrantes del Poder Judicial, la Asamblea Nacional, el Ministerio Público, el Sistema Penitenciario Nacional, el Ministerio de Gobernación, personal médico y auxiliar de centros de salud públicos, y miembros de la Policía Nacional, siguiendo órdenes emitidas desde la Presidencia y Vicepresidencia de la República, participaron en la comisión de crímenes y graves violaciones y abusos a los derechos humanos.

1138. El GHREN determinó que agentes de la Policía Nacional y grupos armados pro-gobierno cometieron ejecuciones extrajudiciales en el marco de la represión de las protestas. Asimismo, documentó cómo funcionarios y funcionarias de diversas instituciones del Gobierno, incluyendo la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, participaron de manera articulada en la comisión de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso. El GHREN también documentó la participación de agentes del Sistema Penitenciario Nacional y de la Policía Nacional en la comisión de actos de tortura y otros

¹⁷⁹² *Ibid.*

¹⁷⁹³ *Gbagbo*, Sentencia de Confirmación de Cargos, párr. 212.

¹⁷⁹⁴ SCGBH, *Prosecutor v. Miodrag Nikačević*, causa núm. X-KR-08/500, Verdict, 19 de febrero de 2009, traducción disponible en línea <http://www.worldcourts.com/wcsbih/eng/decisions/2009.02.19_Prosecutor_v_Nikacevic.htm>, p. 27.

¹⁷⁹⁵ *Blaškić*, Sentencia de Apelación, párr. 122; *Limaj et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 190; *Semanza*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 332; *Bagilishema*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 84; *Sesay et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 90.

¹⁷⁹⁶ *Tadić*, Sentencia de Apelación, párr. 248; *Kunarac*, Sentencia de Apelación, párr. 102; *Blaškić*, Sentencia de Apelación, párr. 124; *Akayesu*, Sentencia de Apelación, párr. 467; *Semanza*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 332; *Sesay et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 91; *Brima et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 221; *Nuon & Khieu*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 191.

¹⁷⁹⁷ *Kunarac*, Sentencia de Apelación, párr. 102; *Blaškić*, Sentencia de Apelación, párr. 122; *Kordić & Čerkez*, Sentencia de Apelación, párr. 42; *Mladić*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 3029; *Sesay et al.*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 90; *Nuon & Khieu*, Sentencia de Primera Instancia, párr. 191.

¹⁷⁹⁸ TPIY, *Prosecutor v. Nikola Šainović et al.*, causa núm. IT-05-87-A, Judgement, 23 de enero de 2014, párr. 271.

¹⁷⁹⁹ TPIR, *Prosecutor v. Clément Kayishema and Obed Ruzindana*, ICTR-95-1-A, Judgement (Reasons), 1 de junio de 2001, párr. 159.

¹⁸⁰⁰ SCGBH, *Prosecutor v. Mitar Rašević and Savo Todović*, causa núm. X-KR/06/275, Verdict, 28 de febrero de 2008, disponible en: <http://www.worldcourts.com/wcsbih/eng/decisions/2008.02.28_Prosecutor_v_Rasevic.htm>, p. 42.

¹⁸⁰¹ *Vasiljević*, Sentencia de Apelación, párrs. 28 y 20; CPI, Elementos de los Crímenes, Introducción General, p. 3.

tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo actos de violencia sexual y violencia basada en género, en contra de las personas opositoras, reales o percibidas.

1139. El GHREN considera que, dadas las características del ataque contra la población civil, incluyendo la visibilidad de éste, y su extensión tanto en el espacio como en el tiempo, hacen imposible que las personas que participaron en la comisión de crímenes y graves violaciones y abusos no hayan tenido conocimiento del ataque contra la población civil y de que los crímenes, violaciones y abusos formaban parte de dicho ataque.

1140. El GHREN documentó cómo, autoridades nicaragüenses en otros niveles de la jerarquía en varias ocasiones fueron fotografiadas y filmadas durante operativos armados de represión a la protesta. Asimismo, a lo largo del periodo cubierto por este informe, autoridades del Gobierno reconocieron su participación en la comisión de los actos criminales cometidos como parte del ataque y documentados en este informe, o valoraron y justificaron la comisión de los mismos por parte de agentes del Gobierno y grupos armados pro-gobierno, como una acción necesaria en defensa de la libertad y paz del pueblo de Nicaragua.

1141. En este sentido, cabe señalar las declaraciones de las autoridades de la Policía Nacional, del Ministerio de Gobernación, del Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo, así como de miembros del Poder Judicial, entre otros, denotando el conocimiento de funcionarios y funcionarias a todos niveles de la jerarquía de Estado sobre los hechos violentos que resultaron en la comisión de crímenes, violaciones y abusos, y a los cuales el GHREN se ha referido en detalle en otras secciones del presente informe.

1142. El Presidente Daniel Ortega también reconoció públicamente desde el inicio de las protestas de 2018, la muerte de 195 personas incluyendo, policías, miembros del FSLN, grupos paramilitares, y otros miembros de la población civil, a raíz de lo que alegó fue un enfrentamiento armado. En una declaración pública, el Presidente reconoció públicamente los hechos de su Gobierno hasta ese momento, incluyendo las capturas y detenciones de integrantes de la población quienes, según él, estuvieron materialmente participando en “acciones terroristas”.¹⁸⁰²

1143. El GHREN ha concluido que la Policía Nacional participó de manera sistemática en el ataque contra la población civil a lo largo del territorio nicaragüense, demostrando un control efectivo y constante de sus zonas de operaciones. En la mayoría de los incidentes investigados por el GHREN, agentes de Policía actuaron de manera conjunta y coordinada con integrantes de grupos armados pro-gobierno. El Presidente Daniel Ortega alegó públicamente que estos elementos eran miembros de la Policía Nacional y policías voluntarios.

1144. El conjunto de información analizado por el GHREN también demuestra que la Vicepresidenta Rosario Murillo conocía el contexto del ataque persecutorio de su Gobierno a parte de la población. Las múltiples alocuciones públicas de la Vicepresidenta desde abril de 2018, incluyendo en su carácter de Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, evidencian su conocimiento en tiempo real sobre varias de las violaciones, abusos y crímenes cometidos en Nicaragua. Asimismo, la Vicepresidenta ha utilizado su posición para liderar la campaña discriminatoria contra la población civil considerada como oposición, reforzando los mensajes de odio y desinformación, y públicamente apoyando las afirmaciones del Presidente Daniel Ortega como justificación del ataque.¹⁸⁰³

1145. El proceso de deportación llevado a cabo el 9 de febrero de 2023, fue calificado como exitoso por funcionarios del Gobierno de Nicaragua, y manifiesta el empeño, coordinación, colaboración y participación de diversas instituciones y funcionarios públicos del Estado. Esta instrumentalización de las instituciones y funciones del Estado para el ataque contra la

¹⁸⁰² Entrevista a Daniel Ortega en EURONEWS, (01:00–03:13) 30 de julio de 2018, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=NiROR4hYCuA>

¹⁸⁰³ Véase, por ejemplo, Canal 4 Nicaragua, Declaraciones de la vicepresidenta compañera Rosario Murillo, 30 abril 2021, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=UaAu-boA2xk>; Voz de América, Rosario Murillo será candidata a la vicepresidencia de Nicaragua pese a sanción de la Unión Europea, 3 de agosto 2021 (00:44–01:00), disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=t0Ut-_BI_Rk; DW Noticias, vicepresidenta de Nicaragua carga contra periodistas, 26 de junio de 2021, disponible en: <https://www.dw.com/es/vicepresidenta-de-nicaragua-carga-contra-periodistas/a-58053979>

población civil no hubiera podido llevarse a cabo sin el consentimiento previo expreso, la participación y el cabal conocimiento de la operación previamente planificada, por parte de la alta jerarquía del Estado de Nicaragua.

1146. El anuncio público *post facto* de esta operación por parte del Presidente Daniel Ortega, acompañado de la Vicepresidenta Rosario Murillo y otras autoridades de su Gobierno demuestra lo anterior.¹⁸⁰⁴ En este anuncio público, se resalta además el rol activo del ejército en la deportación. El mismo Presidente Ortega, dirigiéndose al Jefe del Ejército nicaragüense, encomia públicamente la labor que ha tenido el arma en la operación de deportación brindando seguridad para asegurar que el procedimiento de deportación se desarrollara sin ningún inconveniente. Del mismo modo, en presencia de la Fiscal General, del Ministro de Gobernación, del Vicepresidente de la CSJ, debido a que, supuestamente, la presidenta de la CSJ se hallaba ocupada trabajando sobre el tema del cual el Presidente estaba anunciado públicamente (es decir, la deportación, la privación de la nacionalidad y la apropiación indebida de bienes de la población civil víctima del ataque), y del Canciller y de la Vice-Canciller de Nicaragua, el Presidente Daniel Ortega confirmó la coordinación entre los poderes del Estado, para lograr esta operación criminal tan exitosa.

1147. Asimismo, el Presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, resaltó públicamente el 10 de febrero de 2023 su rol como como partícipe activo del proceso de deportación, así como el proceso legislativo y judicial por el cual, en un marco de completa ilegalidad y abuso judicial, se condenó a las personas deportadas como “traidores a la patria”, se les deportó forzosamente y se les retiró la nacionalidad.¹⁸⁰⁵

1148. Por lo expuesto anteriormente el GHREN concluye que existe información suficiente que indica *prima facie* la participación de altas autoridades de los distintos poderes del Estado en Nicaragua en la comisión de crímenes de carácter internacional contra parte de la población de Nicaragua y con el conocimiento expreso que sus actos de gobierno, decisiones y órdenes forman parte del ataque perpetrado desde abril de 2018 contra la población civil de Nicaragua considerada opositora y enemiga del gobierno de Ortega–Murillo.

V. Responsabilidad y acceso a la justicia

1149. El GHREN tiene motivos razonables para creer que las violaciones y abusos de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad descritos en el presente informe generan responsabilidad del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y la comisión de hechos internacionalmente ilícitos. En algunos casos, dichos crímenes generan también responsabilidad penal individual, ya sea en virtud del derecho penal de Nicaragua, del Derecho Internacional Penal, o el derecho de terceros Estados.

1150. El GHREN documentó cómo a partir del 18 de abril de 2018, el Gobierno de Nicaragua implementó una política de Estado discriminatoria hacia un sector de la población que ha sido percibido por la administración Ortega–Murillo como una amenaza a su control del Estado.

A. Presidente, Vicepresidenta y principales instituciones del Estado

1151. El GHREN tiene motivos razonables para creer que el Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo movilizaron todo el aparato del Estado, incluyendo a una variedad de instituciones públicas, entidades políticas y actores privados afines al Gobierno para implementar sistemáticamente una serie de medidas y actos con el fin de reprimir toda forma de protesta y actividad considerada “disidente”, y asegurar de esta manera su permanencia en el poder. La implementación de estas medidas y actos resultó en la comisión

¹⁸⁰⁴ Véase, El País, Directo: Daniel Ortega habla de la liberación de más de 200 presos políticos en Nicaragua, 9 de febrero de 2023.

¹⁸⁰⁵ Véase, cparlamentonic, Entrevista Dr. Gustavo con Alberto Mora, 10 de febrero de 2023, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=d3SqOmykfOg>

sistemática de graves violaciones y abusos de los derechos humanos por estas instituciones, entidades, y grupos.

1152. Las violaciones, abusos y crímenes documentados formaron parte de un plan común para reprimir a la población opositora o percibida como tal, con el fin de eliminar toda disidencia. El Presidente, la Vicepresidenta y las altas autoridades del Gobierno compartieron la intención de perpetrar sistemáticamente los mismos, y se valieron de los otros poderes y autoridades del Estado y de grupos armados pro-gobierno para ello.

1. *Daniel Ortega y Rosario Murillo*

1153. El GHREN tiene motivos razonables para creer que, sin las acciones del Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo, las violaciones y abusos sistemáticos a los derechos humanos y los crímenes documentados en el presente informe, no se habrían realizado o se habrían realizado de una manera significativamente diferente.

1154. Daniel Ortega y Rosario Murillo son, respectivamente, Presidente y Vicepresidenta de la República de Nicaragua.¹⁸⁰⁶ Desde antes de abril de 2018, Daniel Ortega y Rosario Murillo instrumentalizaron las estructuras y Poderes del Estado, incluyendo la Asamblea Nacional y las leyes emitidas por ésta, con el fin de asegurar su control sobre una variedad de actores e instituciones del Estado que debían cumplir rigurosamente sus órdenes.

1155. Adicionalmente, el Presidente Daniel Ortega es también la cabeza visible del FSLN. Las estructuras y liderazgos del FSLN -incluyendo las Juventudes Sandinistas, las UVE, los Secretarios Políticos, los alcaldes y los CLS- sirvieron dos propósitos: apoyar al Gobierno conformado por el FSLN e implementar sus decisiones al nivel local e institucional, y establecer mecanismos de vigilancia y control territoriales e institucionales, que están siendo utilizados hasta la fecha de publicación de este informe. Se utilizaron también sistemáticamente estructuras de participación ciudadana, como los CPC y los Gabinetes de la Familia, que fueron controlados por personas afines al FSLN para vigilar y presionar a las y los nicaragüenses en los barrios, comunidades y departamentos. Así, Daniel Ortega y Rosario Murillo lograron que la línea divisoria entre el Estado y el FSLN se diluyera sistemáticamente.

1156. Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron conscientes de las circunstancias de hecho que les permitieron ejercer un control conjunto sobre la comisión de los crímenes. Este control conjunto fue posible debido a la naturaleza organizada y jerárquica de las autoridades del Estado, la fuerte implantación a nivel nacional y territorial de las estructuras de liderazgo del FSLN, y la presencia sistemática de grupos armados pro-gobierno, lo que aseguró el cumplimiento eficaz de las órdenes dadas por el Presidente Daniel Ortega y su círculo cercano.

1157. El GHREN tiene motivos razonables para creer que el Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo se valieron de diversas instituciones del Estado para reprimir sistemáticamente a las personas opositoras o percibidas como tales. Sus órdenes se ejecutaron de manera eficaz y coordinada en todo el territorio nacional por las instituciones públicas que se mencionarán a continuación.

1158. El GHREN también tiene motivos razonables para creer que las instrucciones del Presidente y la Vicepresidenta fueron transmitidas tanto a través de las estructuras oficiales del Estado, como de las estructuras del partido de Gobierno. Así, las y los Secretarios Políticos, miembros de los Comités de Liderazgo Sandinista, y de los sindicatos presentes en las diversas instituciones del Estado, estructurados de manera vertical y con un comportamiento jerárquico, se encargaron de asegurar el cumplimiento de las órdenes de las más altas autoridades del Estado.

¹⁸⁰⁶ El Presidente Daniel Ortega se ha referido recientemente a Rosario Murillo como la “Copresidenta” de la República de Nicaragua. Véase Canal 4 Nicaragua, “Mensaje del Comandante Daniel y Compañera Rosario a las familias nicaragüenses”, 10 de febrero de 2023, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=aacxInTB1DA> (min. 09:45).

1159. El GHREN recibió información que indica que algunas personas se ciñeron a las instrucciones emitidas desde El Carmen¹⁸⁰⁷ por convencimiento y lealtad al Presidente Daniel Ortega y al FSLN, pero otras lo hicieron por miedo a represalias.¹⁸⁰⁸ Así, la pareja presidencial, las altas autoridades y funcionarios del Estado, y otras personas afines al Gobierno participaron en la comisión de crímenes y graves violaciones y abusos a los derechos humanos, como parte de una política discriminatoria de perseguir, silenciar a toda persona y desarticular de manera sistemática a toda organización cívica o política que mantenga posturas diferentes a la del Gobierno, o que sea percibida como crítica o adversaria del mismo.

1160. Como se detalló en el capítulo II, el Presidente Daniel Ortega, ejerce, tal y como se dispone legalmente, el más alto mando de la Policía Nacional, y goza de amplias potestades para ordenar las acciones de las fuerzas de la Policía y el Ejército, así como para designar y destituir a los más altos cargos de estas instituciones. Asimismo, de acuerdo con la Ley de Seguridad Soberana, el Presidente Daniel Ortega encabeza la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Soberana en situaciones que atenten contra la “independencia, soberanía, integridad territorial y autodeterminación nacional” de Nicaragua. La creación de este mecanismo ha permitido al Presidente coordinar las actividades del Ejército, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y sus direcciones subordinadas, la Unidad de Análisis Financiero, la Procuraduría General de la República, y otras instituciones que forman parte de dicho Sistema Nacional.

1161. El control sobre estos entes del Estado propició que, frente al estallido de manifestaciones masivas en abril de 2018, el Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo se valieran sistemáticamente de los altos mandos de las fuerzas de seguridad del Estado y del sistema de secretarios políticos del FSLN para comunicar instrucciones destinadas a reprimir las protestas de manera violenta junto a grupos armados pro-gobierno. La represión no se detuvo en los actos de violencia, sino que se consolidó y continuó durante la totalidad del periodo bajo examen, a través de la sistemática detención arbitraria y enjuiciamiento de personas opositoras o percibidas como tales en procesos en los que no se respetaron las más esenciales garantías procesales y el derecho a un juicio justo. Asimismo, personas opositoras, reales o percibidas, detenidas, fueron sistemáticamente sometidas a actos de tortura y malos tratos.

1162. Durante la represión a la protesta social del 2018, el Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo tuvieron conocimiento actual y permanente de la actuación ilícita y sistemática de la Policía Nacional y de los grupos armados pro-gobierno, así como del uso de armas letales contra las personas manifestantes de parte de ambos actores, pues estos eran hechos notorios transmitidos en tiempo real por los medios y las redes sociales. Las propias declaraciones del Presidente Daniel Ortega y de la Vicepresidenta Rosario Murillo desde el 19 de abril de 2018, demuestran su conocimiento de la situación y de las muertes violentas que se produjeron sistemáticamente a partir de ese día.¹⁸⁰⁹

1163. No solo los medios se hicieron eco de la situación. El 23 de abril de 2018, el Secretario General de la ONU, António Guterres, hizo un llamado para proteger los derechos humanos y la libertad de expresión en Nicaragua.¹⁸¹⁰ El 27 de abril de 2018, Human Rights Watch solicitó al Presidente Daniel Ortega el cese de los ataques contra las personas manifestantes.¹⁸¹¹ Por su parte, la Conferencia Episcopal que había intentado mantener un diálogo con el Gobierno para detener los actos violentos y las detenciones arbitrarias, emitió

¹⁸⁰⁷ La residencia oficial del Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo en Managua se conoce popularmente como “El Carmen”.

¹⁸⁰⁸ Entrevistas del GHREN BBIV001, BBIV005, BBIV006, BBIV012, BBIV013 27, BBIV015 y BBIV031.

¹⁸⁰⁹ Véase por ejemplo, El 19 Digital, Rosario en Multinoticias, disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:76067-rosario-en-multinoticias-19-de-abril-del-2018>; Canal 4 Noticias, Comandante Presidente #DanielOrtega en comunicación con las familias nicaragüenses, 21 de abril de 2018, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=vDQypjKy5dg>.

¹⁸¹⁰ ONU, Press Release, “Secretary-General Expresses Concern over Casualties during Protest in Nicaragua”, 23 de abril de 2018, disponible en: <https://press.un.org/en/2018/sgsm19005.doc.htm>.

¹⁸¹¹ HRW, Nicaragua: Saldo letal en protestas, 27 de abril de 2018, disponible en: <https://www.hrw.org/es/news/2018/04/27/nicaragua-saldo-letal-en-protestas>.

un comunicado el 31 de mayo de 2018 condenando las agresiones acaecidas el día anterior en la marcha del día de las madres.¹⁸¹²

1164. A pesar de esto, se siguieron sucediendo las muertes y las detenciones sistemáticas de personas opositoras o percibidas como tales durante más de cinco meses. El 7 de julio de 2018, el Presidente Daniel Ortega dijo que continuaría luchando contra los golpistas.¹⁸¹³ La continuidad sistemática en el tiempo de estas acciones indica que no solo no se dieron órdenes desde el mando supremo para que cesaran los actos de violencia contra las personas manifestantes, sino que dichos actos fueron instigados desde la Presidencia y Vicepresidencia de la República. El GHREN no recibió ninguna información que permita afirmar que se tomaron medidas para evitar la respuesta ilícita, desproporcionada, violenta y letal de las fuerzas de seguridad contra las personas manifestantes.

1165. Por el contrario, a partir del estallido de la protesta social, el Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo basaron sistemáticamente sus intervenciones y mensajes públicos a las y los nicaragüenses en la exaltación de la defensa de la soberanía de Nicaragua, el patriotismo, la revolución, la independencia y el antimperialismo. En este sentido, son notorios los discursos de odio del Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo en los que calificaron a las personas manifestantes y a toda persona que no apoyara al Gobierno de “minúsculos”, “vándalos”, “vandálicos”, “mareros”, “terroristas”, “plaga”, “golpistas”, “vampiros”, y “diablos”.

1166. El GHREN tiene motivos razonables para creer que además de reprimir de manera violenta los actos de protesta social, el Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo desarrollaron, de manera planificada y sistemática, una serie de medidas legales y ejecutaron planes y políticas para criminalizar a las personas manifestantes y otras opositoras políticas, reales o percibidas, eliminar los partidos políticos de oposición, cerrar y controlar el espacio cívico y acallar las voces críticas. Del conjunto de información analizada por el GHREN se desprende que las más altas autoridades del Estado diseñaron un plan común para retener el poder, apoyándose en su capacidad de controlar los cuatro Poderes del Estado nicaragüense y de reorganizar las instituciones del Estado para instrumentalizarlos para sus fines.

1167. Así, alineados todos los poderes del Estado a los fines de la pareja Ortega–Murillo, se encarcelaron y enjuiciaron sistemáticamente a personas opositoras, reales o percibidas, sobre la base de evidencia falseada y violaciones de las garantías procesales y el debido proceso, entre otras; se cancelaron masivamente las personalidades jurídicas de organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales; se cancelaron de forma sistemática los derechos de emisión de diferentes medios de comunicación críticos con el Gobierno; se cerraron sistemáticamente universidades; y se persiguieron de forma sistemática a miembros de la Iglesia Católica y otras voces críticas, incluyendo artistas, académicos, defensores y defensoras de derechos humanos y estudiantes, entre otras.

1168. El GHREN recibió información que indica que instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial, aportaron de manera fundamental al plan y ejecutaron las órdenes de la Presidencia y la Vicepresidencia, con el objetivo de perseguir a las personas opositoras o percibidas como tales por vía de la instrumentalización del sistema penal y sancionatorio administrativo, y de validar los actos perpetrados por el Gobierno, destruyendo así sistemáticamente la separación de poderes consagrada en la Constitución.¹⁸¹⁴

1169. La fundición de división de poderes y obediencia a la Presidencia quedó también patente en febrero de 2023 cuando, según reconoció el Presidente de la Asamblea

¹⁸¹²

https://twitter.com/CENicaragua/status/1002165413965369344?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwtterm%5E1002165413965369344%7Ctwgr%5Ed1a627d5113dea6f2691065c096ddb8b889c7654%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elcomercio.com%2Factualidad%2Fmundo%2FIglesia-nicaragua-dialogo-gobierno-muertes.html

¹⁸¹³ France 24, “Daniel Ortega: “lucharemos contra los golpistas y no adelantaremos elecciones””, 8 de julio de 2018, disponible en: <https://www.france24.com/es/20180708-nicaragua-ortega-sandinismo-managua-represion>.

¹⁸¹⁴ Entrevistas del GHREN BBIV001, BBIV005, BBIV006, BBIV012, BBIV013, BBIV015 y BBIV031.

Nacional,¹⁸¹⁵ diferentes instituciones del Estado actuaron de manera sincronizada por orden del Presidente Daniel Ortega para declarar a 222 personas presas “traidoras a la patria”, inhabilitarles perpetuamente para el ejercicio de cargos públicos o de libre elección, y dictar y ejecutar con rigurosa inmediatez una orden de expulsión hacia los Estados Unidos de América. Paralelamente, la Asamblea Nacional adoptó en primera legislatura una modificación de la Constitución Política de Nicaragua y se adoptó una nueva norma por la vía de urgencia, destinadas ambas a retirar la nacionalidad a las 222 personas y a otras personas que pudieran ser declaradas “traidoras a la patria”.

1170. A través de estas acciones, el Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo lograron eliminar sistemáticamente del panorama político y cívico nicaragüense a buena parte de la oposición política, a personas defensoras de derechos humanos y a periodistas críticos del Gobierno, entre otras personas. Lo anterior, para perpetuar e imponer su poder en el tiempo.

2. *Poderes del Estado*

a) Poder Judicial

1171. El Grupo de Expertos concluyó que el Poder Judicial, ejecutando las instrucciones directas de la Presidencia, desconociendo la separación de poderes, su independencia e imparcialidad, y funcionando como una estructura jerárquica y vertical que garantiza el cumplimiento de las instrucciones de las altas jerarquías del Estado, fue movilizad sistemáticamente con el fin de llevar a cabo la instrumentalización del derecho penal como herramienta de persecución de las personas opositoras, reales o percibidas.

1172. Los procesos judiciales en contra de las personas opositoras o consideradas como tales estuvieron marcados por sistemáticas dilaciones indebidas deliberadas, así como por el incumplimiento sistemático de las garantías mínimas procesales por parte de las autoridades judiciales. Los jueces y juezas, en su función de garantes del proceso, hicieron sistemáticamente caso omiso de las quejas recibidas por incumplimiento de las garantías constitucionales, así como de los recursos de exhibición personal por detención ilegal, recursos de excepción por falta de jurisdicción o incompetencia, y recursos interpuestos en relación con irregularidades del proceso y de los medios de prueba, suprimiendo a menudo dichos recursos de las actas de audiencia, e intimidando a los abogados y abogadas defensoras para disuadirlos de dar seguimiento a los mismos.

1173. Jueces y juezas también incumplieron de manera generalizada con el debido proceso y la igualdad de partes, al aceptar el conjunto de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y descartar sistemáticamente las pruebas de descargo, alegaciones y objeciones de la defensa, incluyendo en relación con irregularidades flagrantes del proceso y la legalidad de los medios de prueba. En este sentido, el Grupo documentó cómo jueces y juezas aceptaron indiscriminadamente los argumentos del Ministerio Público, admitiendo automáticamente las pruebas documentales y testimoniales presentadas por éste en amplio desconocimiento de aspectos de legalidad que eran evidentes, así como del ejercicio de contradicción. Los tribunales aplicaron la medida de prisión preventiva de manera generalizada y automática, y aceptaron de manera sistemática las solicitudes de detención judicial de las personas, ampliando así los tiempos de investigación y detención sin acusación por un periodo de 90 días. También declararon de forma generalizada la tramitación compleja de los procesos, duplicando así la duración de los procesos judiciales. Lo anterior, no obstante, el hecho de que las acusaciones se basaron en leyes flagrantemente contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos, en cargos notoriamente infundados que no se correspondían con los hechos descritos, o en pruebas falsas.

1174. De acuerdo con información recibida por el GHREN, jueces y juezas del Poder Judicial fueron instruidos e instruidas sobre las acusaciones preparadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional que debían ser confirmadas.¹⁸¹⁶ El Grupo también constató que

¹⁸¹⁵ Canal 4 Nicaragua, “Doctor Gustavo Porras en la Revista En Vivo con Alberto Mora”, 10 de febrero de 2023, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=hXW_HawOHvI.

¹⁸¹⁶ Documento en el archivo del GHREN BBIV194.

algunos de los jueces y juezas que han enjuiciado y condenado a personas opositoras o percibidas como tales desde 2018, han ascendido de categoría profesional de manera irregular.

1175. El GHREN documentó cómo en los casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes investigados, las autoridades judiciales no sólo obstruyeron de manera deliberada y sistemática los procesos de rendición de cuentas, sino que también omitieron sistemáticamente su deber de proteger a las víctimas de dichas violaciones y abusos. Las autoridades judiciales, así como las autoridades del SPN y de la Policía Nacional, entorpecieron o impidieron deliberadamente la ejecución de los recursos de exhibición personal o *habeas corpus* interpuestos a favor de personas opositoras o percibidas como tales, cuyo objetivo es garantizar tanto la legalidad de la detención como el respeto a la prohibición de la tortura y tratos inhumanos. En casos en los que los signos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes fueron evidentes, los abogados y abogadas presentaron quejas que fueron sistemáticamente ignoradas por los juzgados y suprimidas de las actas de las audiencias.

b) Asamblea Nacional

1176. La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua fue instrumental en la represión contra las personas opositoras o percibidas como tales para el Gobierno del Presidente Daniel Ortega y de la Vicepresidenta Rosario Murillo, facilitando la articulación de sus objetivos a través de la actividad legislativa, evidenciando la ausencia de separación de poderes.

1177. Mediante la adopción de la Ley de Amnistía el 8 de junio 2019, se dejaron sin efecto los cargos contra todas las personas involucradas en la comisión de crímenes en el contexto de las protestas sociales de 2018, incluidas las personas vinculadas al Estado e integrantes de grupos armados pro-gobierno que actuaron bajo la dirección o con la aquiescencia del Gobierno. El artículo 1 de dicha Ley establece que “las autoridades competentes no iniciarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad así como la ejecución de sentencias, al momento de entrada en vigencia de la presente Ley”.

1178. La Asamblea Nacional también adoptó progresivamente una serie de leyes restrictivas de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a pesar que estas normas eran contrarias a las obligaciones internacionales de Nicaragua y a las reiteradas advertencias de órganos de tratado y procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y de las preocupaciones expresadas por ACNUDH y la CIDH, entre otros organismos y organizaciones. Se adoptaron precisamente para que sirvieran en crear un andamiaje jurídico que permitiera desarticular y criminalizar cualquier forma de oposición política o activismo y perpetuar el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entre estas leyes se encuentran:

- **La Ley contra el Lavado de Activos** del 16 de julio de 2018 ha contribuido, entre otras cosas, a la merma de los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación, y expresión, al poderse utilizar en contra de las personas que participen en movimientos sociales en los que, inadvertidamente, se causen daños materiales.
- **La Ley de Agentes Extranjeros** del 15 de octubre de 2020 ha sido instrumentalizada ampliamente para justificar la cancelación sistemática de personalidades jurídicas de organizaciones sin fines de lucro tanto nacionales como internacionales financiadas con recursos provenientes del exterior, para restringir sistemáticamente el derecho a la participación en los asuntos públicos, y para mermar de forma sistemática la capacidad operativa de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, al limitarles la obtención de fondos del extranjero.
- **La Ley de Cibercrimitos** del 27 de octubre de 2020, tipifica la propagación de noticias falsas, basándose en términos ambiguos y subjetivos, y ha sido instrumentalizada de manera sistemática, arbitraria y desproporcionada para criminalizar a personas opositoras, reales y percibidas, al tiempo de restringir la libertad de expresión a través del sistema de justicia.
- **La Ley de Soberanía** de 22 de diciembre de 2020 fue instrumental para declarar “traidores a la patria” a las personas opositoras o percibidas como tales y, en ocasiones

a sus familiares, con base en la supuesta comisión de hechos basados en conceptos ambiguos. También fue citada en la resolución de cancelación de la principal coalición política de oposición. Más adelante sirvió de base para la retirada de nacionalidad nicaragüense de 316 personas. Una de las consecuencias primarias de esta ley es que las personas declaradas “traidoras a la patria” no podrán ejercer cargos de elección popular, restringiendo gravemente su derecho a participar en la vida política del país.

- **Ley No. 1070** de 4 de mayo de 2021. Con el objetivo de perpetuar la permanencia en el poder del Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo, se adoptó la ley de reforma electoral que expandió las causas de inhabilitación para la inscripción de candidaturas, incorporando elementos de la Ley de Agentes Extranjeros y de la Ley de Soberanía. Sobre la base de esta normativa se cancelaron las inscripciones de dos de los partidos políticos que hubieran podido concurrir a las elecciones presidenciales de 2021.
- **La Ley No. 1057** de enero de 2021 y **la Ley No. 1060** de febrero de 2021, que limitaron las garantías procesales de las personas detenidas.
- **La Ley No. 1115**, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, adoptada en marzo de 2022 y Ley No. 1127 de reformas y adiciones a la Ley No. 1115, de agosto de 2022. La primera norma establece que el destino del patrimonio de las organizaciones canceladas pasará a ser propiedad del Estado salvo en el caso de la liquidación y disolución voluntarios. La reforma a la misma otorga al Ministerio de Gobernación la facultad de cancelar las personalidades jurídicas de las organizaciones sin fines de lucro.

1179. Del mismo modo, desde 2018 y previo a la adopción de la Ley No. 1127, la Asamblea Nacional, en su calidad de órgano competente para otorgar y cancelar personalidades jurídicas a las organizaciones sin fines de lucro, adoptó numerosos decretos legislativos que cancelaron la personalidad jurídica de más de 3000 organizaciones y asociaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, así como al menos 18 universidades.

1180. El 9 de febrero de 2023, mientras que 222 personas previamente detenidas arbitrariamente por oponerse al Gobierno eran expulsadas hacia los Estados Unidos de América, la Asamblea Nacional reformó el artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, por el que las personas “traidoras a la patria” pierden la cualidad de nicaragüenses. A la par, la Asamblea adoptó la Ley No. 1145, Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense, con el objeto de regular el artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua destinado a aquellas personas que hayan sido sentenciadas en virtud de la Ley de Soberanía. Esta Ley entró en vigor al día siguiente, a pesar de que la reforma constitucional debería ser aprobada en una segunda legislatura de acuerdo con la propia Carta Magna. La Ley fue instrumentalizada para retirar la nacionalidad a las 222 personas expulsadas del país y a otras 94 personas declaradas “traidoras a la patria”. El Presidente de la Asamblea Nacional reconoció en una entrevista en Canal 4 que todas las instituciones del Estado trabajaron en sincronía para hacer efectiva la “deportación” de las 222 personas tras la orden del Presidente Daniel Ortega, y que la Asamblea Nacional ejecutó su función con la adopción de las citadas normas.

c) Consejo Supremo Electoral

1181. El Consejo Supremo Electoral canceló tres partidos políticos durante el periodo que abarca el mandato del GHREN, con base a legislación restrictiva del derecho a la participación, en contravención de los estándares internacionales de derechos humanos, y sin motivar debidamente sus resoluciones. El GHREN analizó las resoluciones de disolución de los tres partidos, y encontró que éstas han sido flagrantemente arbitrarias y poco transparentes.

3. *Otras autoridades públicas*

1182. En el tiempo disponible de su mandato, el GHREN pudo investigar el rol de la Policía Nacional, del Ministerio Público, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Gobernación y del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos. El Grupo considera que debe seguirse la investigación para determinar la actuación, participación e intervención de las

demás autoridades públicas, así como la determinación de las personas individuales que pudieron haber actuado de manera concertada en la ejecución de las violaciones, abusos y crímenes.

a) Policía Nacional

1183. El Grupo tiene motivos razonables para creer que, desde el 18 de abril de 2018, diversas unidades, especialidades y divisiones de la Policía Nacional, bajo el mando del Presidente Daniel Ortega, cometieron ejecuciones extrajudiciales en el contexto de la represión de las protestas masivas protagonizadas por la población civil nicaragüense. El GHREN constató que la Policía Nacional utilizó la fuerza letal de manera arbitraria, deliberada y sistemática. Estos actos resultaron en la muerte de personas opositoras, reales o percibidas. El Grupo tiene motivos razonables para creer que agentes de la Policía Nacional también participaron sistemáticamente en la comisión de cientos de detenciones arbitrarias desde el 2018, y en la comisión de actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

1184. En varios de los casos de represión de las protestas investigados por el Grupo, la Policía Nacional actuó de manera coordinada con grupos armados pro-gobierno, y permitió y/o facilitó la comisión de actos de violencia por parte de estos.

1185. El GHREN pudo establecer la participación sistemática de agentes de una variedad de especialidades y divisiones de la Policía Nacional, incluyendo delegaciones departamentales de la Policía, la Dirección de Seguridad Pública, así como el destacamento de Tácticas y Armas Policiales de Intervención y Rescate (TAPIR); la Brigada Especial Antidisturbios; y el Grupo de Intervención Rápida (GIR), todos ellos parte de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), en la comisión de ejecuciones extrajudiciales, tanto por acción, como por complicidad y/u omisión.¹⁸¹⁷ El Grupo también documentó la coordinación de las diferentes delegaciones departamentales de la Policía con la DOEP, virtualmente en todo el territorio nacional.¹⁸¹⁸

1186. La Policía Nacional también jugó un papel esencial en las detenciones arbitrarias masivas y selectivas de personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales. Las detenciones masivas y sistemáticas realizadas en el contexto de las manifestaciones de 2018 por agentes de la Policía Nacional y por integrantes de grupos armados pro-gobierno fueron particularmente violentas, incluyendo a través de golpes, insultos y amenazas, tanto durante la aprehensión, como en los traslados de las personas detenidas.

1187. Las acciones coordinadas de entidades policiales territoriales y de direcciones y especialidades nacionales durante la represión a las manifestaciones requirió, como mínimo, la coordinación entre la Jefatura Nacional de la Policía, las jefaturas de las unidades especializadas de la DOEP, y las jefaturas de las distintas delegaciones departamentales y regionales.¹⁸¹⁹ En algunos casos se constató la presencia de funcionarios de alto rango de la Policía Nacional durante el desarrollo de los operativos. Éste es, por ejemplo, el caso del Subdirector de la Policía Nacional Comisionado General Ramón Avellán en Masaya.¹⁸²⁰ El Grupo tiene motivos razonables para creer que la presencia de unidades especiales nacionales de la Policía Nacional en todo el territorio de Nicaragua, la magnitud de la movilización de efectivos policiales, la continuidad de las acciones policiales en el tiempo, y la intervención y articulación de una variedad de fuerzas policiales durante la represión de las protestas, demuestran la toma de decisiones e impartición de instrucciones desde el más alto nivel de la estructura policial y del Estado.

¹⁸¹⁷ Tal y como se desarrolló en detalle en el capítulo II del presente informe, la DOEP es una de las especialidades nacionales de la Policía Nacional, y está integrada por unidades especiales con efectivos entrenados para intervenir en crisis y en contextos de crimen organizado, terrorismo y lucha contra el narcotráfico.

¹⁸¹⁸ Fotografía en el archivo del GHREN IIDOC068, IIDOC064, DDDOC373, DDDOC383, IIDOC071, DDDOC381, IIDOC013, IIDOC067, IIDOC073, IIDOC075, DDDOC056, CCDOC088, CCDOC089, CCDOC090 CCDOC091, DDDOC387.

¹⁸¹⁹ Para más información sobre la estructura de la Policía Nacional, consultar el capítulo II del presente informe.

¹⁸²⁰ Fotografías en el archivo del GHREN DDDOC304, DDDOC376.

1188. Además de participar sistemáticamente en las detenciones masivas de 2018, el GHREN pudo documentar la participación sistemática de la Policía Nacional en detenciones arbitrarias y sistemáticas de personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales durante todo el periodo que cubre este informe. En general, estas detenciones fueron realizadas sin presentar orden de detención judicial o policial válida, y se allanaron y registraron los domicilios de las personas sin presentar orden de allanamiento. Muchas de estas detenciones se realizaron con el despliegue de grandes dispositivos policiales y, en varias ocasiones, con violencia en presencia de familiares de la persona arrestada. El GHREN también documentó la participación sistemática de elementos de la Policía Nacional en la manipulación de medios de prueba testimoniales y documentales, órdenes de allanamiento y de detención y fabricación de evidencia.

1189. Tal y como se desarrolló en detalle en el capítulo III.B, a partir de 2021 la mayoría de las personas detenidas por ser consideradas opositoras o críticas del Gobierno, fueron interrogadas, juzgadas y privadas de su libertad tras ser sentenciadas, en las instalaciones de la DAJ (El Nuevo Chipote). En este sentido, las víctimas quedaron sometidas a la jurisdicción de la Policía Nacional y, por ende, a la autoridad civil directa del Presidente de la República. Además, al tratarse de un recinto policial y no de un centro penitenciario propiamente dicho, la DAJ no cumple con las facilidades que requiere un encarcelamiento prolongado. El GHREN documentó los malos tratos infligidos a las víctimas detenidas en las instalaciones de la DAJ, que en muchos casos constituyen actos de tortura.

1190. Agentes de la Policía Nacional, tanto hombres como mujeres, entre ellos, miembros de la DOEP, e integrantes de la DAJ, han sido identificados como los principales perpetradores de los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que tuvieron lugar en el momento de aprehensión de las víctimas, así como en la DAJ y en las estaciones de policía en distintos departamentos del país. En algunos casos, se constató la presencia de funcionarios de alto rango de la Policía Nacional durante el desarrollo de los operativos para detener a las víctimas, así como en las estaciones de policía donde se realizaron largos interrogatorios con aplicación de métodos de tortura. Este es el caso del Comisionado Luis Alberto Pérez Olivás, a cargo de la DAJ en Managua, y del subdirector de la Policía Nacional, General Ramón Avellán en Masaya.¹⁸²¹

1191. La Policía Nacional también fue instrumental en los actos de agresiones, vigilancia, acoso, amenazas, intimidaciones y detenciones de voces críticas y personas opositoras o percibidas como tales, así como en los allanamientos a medios de comunicación independientes. El GHREN recibió información sobre la participación a menudo de agentes de la DAJ y la DOEP, entre otras unidades, en dichas acciones y operativos. Asimismo, el GHREN documentó cómo en varios casos los actos de tortura y malos tratos se cometieron en presencia de altos rangos de la institución policial, quienes los incitaban o permitían.

b) Ministerio Público

1192. El GHREN concluyó que funcionarias y funcionarios del Ministerio Público, junto con otros actores del sistema de justicia y de la Policía Nacional, realizaron acciones concertadas para garantizar y extender sistemáticamente la privación arbitraria de la libertad de las personas opositoras, reales o percibidas, violar sus derechos procesales, fabricar evidencia, y ocultar actos de tortura y desaparición forzada.

1193. La Policía Nacional y el Ministerio Público operaron de manera conjunta para generar sistemáticamente acusaciones fabricando prueba, instruyendo a testigos de cargo y redactando escritos de acusación que no se ajustaban a la realidad.¹⁸²² La Policía Nacional y el Ministerio Público también actuaron en complicidad para no presentar a las personas detenidas ante la autoridad judicial competente dentro de los plazos previstos por ley, prolongando así sistemáticamente su permanencia bajo custodia policial. Estos retrasos sistemáticos ayudaron a que las secuelas físicas de las torturas perpetradas en contra de las personas detenidas desaparecieran o se disimularan, antes de que éstas fueran presentadas ante un juez competente. Asimismo, los retrasos sirvieron para otorgar tiempo adicional a las

¹⁸²¹ Entrevistas del GHREN EEIV004, DDIV022.

¹⁸²² Entrevistas del GHREN BBIV001, BBIV005, BBIV006.

y los agentes del Estado para continuar investigando e interrogando a las personas detenidas.¹⁸²³

1194. El GHREN tiene motivos razonables para creer que las y los funcionarios del Ministerio Público recibieron e implementaron instrucciones directas de la jerarquía del Estado.

c) Ministerio de Salud

1195. El GHREN tiene motivos razonables para creer que altos funcionarios del sistema de salud, incluyendo la Ministra de Salud Sonia Castro González en 2018,¹⁸²⁴ el Secretario General de Salud Carlos Sáenz Torres, y el sindicato de trabajadores de la salud, están vinculados al papel que dicho sistema jugó en el contexto de la represión de las protestas, incluyendo mediante la emisión de órdenes a profesionales y centros de salud públicos de no atender a las personas opositoras o percibidas como tales heridas.

1196. El GHREN tiene motivos razonables para creer que en abril de 2018, la entonces Ministra de Salud ordenó a profesionales y centros de salud públicos que no atendieran a las personas heridas en el contexto de las manifestaciones. En efecto, el GHREN recibió testimonios de personal médico que refirió haber recibido dicha orden de superiores, tanto verbalmente como por escrito.¹⁸²⁵ El GHREN reunió múltiples testimonios que se refirieron a la denegación sistemática de asistencia médica a personas heridas,¹⁸²⁶ y que describieron tratos crueles e inhumanos dispensados por personal médico a personas heridas.¹⁸²⁷

1197. Testimonios recabados por este Grupo y fuentes abiertas afirman que el Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud), Gustavo Porras, quien además es Presidente de la Asamblea Nacional, ejerció un poder significativo dentro del Ministerio e igualmente estuvo vinculado al papel que dicho órgano jugó en el contexto de la represión de las protestas.

d) Ministerio de Gobernación

1198. El Ministerio de Gobernación, dirigido por la Ministra María Amelia Coronel Kinloch, tuvo un papel importante en la infraestructura represiva del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de tres de sus unidades subordinadas.

e) Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional (SPN)

1199. Tal y como se desarrolla en el capítulo II de este informe, el SPN es el encargado de administrar los servicios penitenciarios y garantizar la ejecución de las sentencias penales y las medidas cautelares privativas de libertad en aplicación de políticas penitenciarias que aseguren el estricto apego al respeto de las Reglas Nelson Mandela.

1200. Según la información a la que ha tenido acceso el GHREN, varias de las personas opositoras o percibidas como tales que fueron arbitrariamente detenidas, fueron trasladadas a centros del SPN a lo largo del territorio nacional, donde fueron sistemáticamente sometidas a tratos discriminatorios y a condiciones de detención contrarias a los estándares internacionales, que constituyeron tratos crueles, inhumanos, o degradantes y, en algunos casos, tortura.

1201. El GHREN documentó las condiciones de detención de las personas opositoras, reales o percibidas en el complejo carcelario Jorge Navarro, conocido como “La Modelo” y el Centro Penitenciario Integral de Mujeres “La Esperanza”, ambos pertenecientes al SPN. Las personas detenidas fueron sometidas sistemáticamente a malos tratos y discriminación, como

¹⁸²³ Entrevistas del GHREN EEIV014, EEIV025, EEIV029, EEIV028, EEIV032, EEIV039, BBIV001, BBIV005, BBIV006, BBIV012 y BBIV030.

¹⁸²⁴ Sonia Castro ha sido sancionada por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, y el Reino Unido, por su vinculación con la represión de las protestas.

¹⁸²⁵ Entrevistas del GHREN IIV003, DDIV017, IIDOC004.

¹⁸²⁶ Entrevistas del GHREN IIV001, IIV002, IIV003, DDIV017, DDIV018, DDIV10, DDIV024, DDIV014.

¹⁸²⁷ Entrevistas del GHREN IIV003, IIV002, DDIV007, DDIV014.

castigo por su opción política, real o percibida, incluyendo golpizas; amenazas; insultos; prohibición de comunicarse con otras personas detenidas; aislamiento en celdas de castigo; comida inadecuada y en algunos casos en porciones más reducidas que las correspondientes a presos comunes; y cortes de agua y luz en las celdas. El acceso a atención médica fue muy limitado, y se brindó en raras ocasiones o cuando la situación médica de la persona se había agravado.

1202. Varias víctimas detenidas en La Modelo fueron sometidas a un régimen de aislamiento prolongado e indefinido en la sección de máxima seguridad, conocida como “La 300” y en celdas de castigo conocidas como “El Infernillo,” en condiciones aún más precarias. Algunos detenidos permanecieron en dicho régimen por más de dos años. El GHREN recibió información de distintas fuentes sobre la crueldad del funcionario encargado de La 300, tanto en el trato hacia los detenidos como a los familiares de los detenidos.¹⁸²⁸

f) Departamento General de Migración y Extranjería (DGME)

1203. El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha limitado el derecho a circular libremente de las personas opositoras o percibidas como tales, así como de sus familiares e incluso de trabajadores y trabajadoras de instituciones del Estado. Según información recibida por el GHREN,¹⁸²⁹ el Gobierno restringió sistemáticamente, a través del DGME, tanto el derecho de salir como el de volver a ingresar dentro del territorio nicaragüense a nacionales opositores o percibidos como tales en el exterior, tanto a través de prohibiciones expresas a funcionarios, retiradas de pasaportes en puntos fronterizos y la no renovación de los títulos de viajes expirados, motivando la salida del país por puntos ciegos. El DGME también participó en la retirada arbitraria de la nacionalidad y expulsión sumaria de personas nicaragüenses binacionales. Estas violaciones precisan ser investigadas en mayor profundidad.

g) Dirección General de Control y Registro (DGCR)

1204. El Ministerio de Gobernación tuvo un papel central en las cancelaciones sistemáticas de organizaciones sin fines de lucro. Éstas se realizaron por la Asamblea Nacional, a instancia de su Departamento de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro hasta mayo de 2022, cuando éste se transformó en dirección, pasando a llamarse DGCR. Tanto el Departamento como la Dirección General estuvieron encabezados por la Directora Franya Urey Blandón. A partir de agosto de 2022, el Ministerio de Gobernación tiene la potestad para cancelar organizaciones por Acuerdo Ministerial. El Ministerio de Gobernación, y en particular el Departamento de Registro y Control y su sucesora la DGCR, dificultaron o impidieron sistemáticamente a las organizaciones presentar la información y requisitos exigidos en virtud de la legislación vigente, forzándolas al incumplimiento de sus obligaciones legales.

h) Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR)

1205. El GHREN recuerda que TELCOR es un ente descentralizado, bajo la rectoría sectorial directa de la Presidencia. Desde el inicio de la protesta social en abril de 2018, TELCOR jugó un rol instrumental en la censura sistemática de periodistas, interrupción de retransmisiones, y cierre sistemático de medios de comunicación independientes, como parte de la estrategia del Gobierno para silenciar a todas las voces críticas.

1206. El GHREN recibió información de varias fuentes indicando que desde la dirección de TELCOR se transmitieron mensajes intimidatorios a las personas responsables de al menos dos canales de televisión, amenazándoles con que se tendrían que “atener a las consecuencias” en caso de dar cobertura mediática a las manifestaciones públicas en contra del Gobierno, y sugiriendo que se ocuparan de otros temas. Asimismo, el entonces director del ente regulador, pidió al director de un canal televisivo eliminar de su programación dos programas particularmente críticos del Gobierno.

¹⁸²⁸ Entrevistas del GHREN EEIV005, EEIV016, EEIV017, EEIV023.

¹⁸²⁹ Entrevistas del GHREN BBIV004, BBIV012, BBIV014.

1207. A lo largo del periodo de investigación abarcado por el GHREN, TELCOR ejecutó sistemáticamente los cierres de decenas de medios de comunicación locales y nacionales independientes.

1207. De acuerdo con el conglomerado de redes sociales Meta, empleados de TELCOR habrían coordinado y operado una red de más de 1.300 cuentas falsas en redes sociales que implementaron campañas de desinformación a favor del Gobierno.

4. Grupos armados pro-gobierno

1209. El Grupo tiene motivos razonables para creer que desde el 18 de abril de 2018, grupos armados pro-gobierno, actuando con el acuerdo, aquiescencia, y/o consentimiento de altos mandos de la Policía Nacional y de la jerarquía del Estado, participaron sistemáticamente en la represión de las protestas masivas en contra del Gobierno, utilizando para ello fuerza letal de manera deliberada y sistemática, lo que resultó en la muerte de personas manifestantes. El Grupo tiene motivos razonables para creer que integrantes de grupos armados pro-gobierno también participaron sistemáticamente en las detenciones violentas y arbitrarias de personas opositoras, reales o percibidas, así como en la comisión de actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

1210. El GHREN identificó un patrón de abusos al derecho a la vida e integridad física por parte de grupos armados pro-gobierno, desde el mismo día 18 de abril de 2018. En la mayoría de los casos investigados por el GHREN, se identificó la acción conjunta de la Policía Nacional y los grupos armados pro-gobierno, con el objetivo de suprimir las protestas.

1211. Es notorio el uso de armas de diverso calibre por parte de los integrantes de grupos armados pro-gobierno, a pesar de que, según la Constitución Política de Nicaragua, tan solo la Policía Nacional y el Ejército son cuerpos armados. Esta circunstancia caracterizó las operaciones conjuntas realizadas por la Policía Nacional y los grupos armados pro-gobierno como ilícitas. El GHREN tiene motivos razonables para creer que el Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo conocían la naturaleza de los grupos armados pro-gobierno y explotaron su lealtad a través de personas respetadas en el ámbito del sandinismo histórico, con el fin de cometer actos de violencia contra personas opositoras o percibidas como opositoras por el Gobierno.¹⁸³⁰ El GHREN considera necesario investigar más profundamente el vínculo entre los grupos armados pro-gobierno y el Gobierno.

1212. El GHREN también documentó la detención sistemática de personas opositoras, reales o percibidas, por grupos armados pro-gobierno en lugares de detención secretos, donde fueron sometidas a torturas con el conocimiento y aquiescencia de las autoridades. Tras periodos que oscilaron entre horas y días, las víctimas fueron entregadas a la Policía por los grupos armados pro-gobierno con signos visibles de violencia. Asimismo, integrantes de grupos armados pro-gobierno participaron sistemáticamente en actos de vigilancia, acoso e intimidación a personas opositoras o percibidas como tales, actuando con total impunidad. Los CPC, así como las estructuras departamentales, locales e institucionales del partido de Gobierno, incluyendo las UVE y los CLS, jugaron un rol esencial en la vigilancia de las personas opositoras o percibidas como tales.

1213. Como se describió en el capítulo II, los grupos armados pro-gobierno están integrados por grupos de simpatizantes sandinistas, incluyendo: las Juventudes Sandinistas; jóvenes en riesgo de exclusión social; trabajadoras y trabajadores de instituciones del Estado; excombatientes del Ejército Popular Sandinista; y antiguos miembros del Ejército, de la Policía y de la seguridad del Estado. De acuerdo con una variedad de fuentes consultadas por el GHREN, los grupos armados pro-gobierno actuaron siguiendo instrucciones de las autoridades del Estado a nivel nacional y local, y/o de los líderes territoriales del partido de Gobierno.

1214. El GHREN recibió información específica, sobre la participación, particularmente notoria y sistemática, de algunas alcaldías, como por ejemplo las de Estelí, Masaya, Jinotepe, Tipitapa (Managua), y Jinotega, en el reclutamiento, movilización y coordinación de dichos grupos. Del mismo modo, se ha reportado la intervención sistemática

¹⁸³⁰ Entrevistas del GHREN BBIV001, BBIV024 y BBIV031.

en el reclutamiento y coordinación de integrantes de grupos armados pro-gobierno de exmilitares y policías retirados y de cargos locales y nacionales del FSLN, a través del uso de las estructuras del gobierno local.¹⁸³¹ También se ha reportado la participación sistemática en la represión de manifestaciones de personas empleadas por una gran variedad de instituciones del Estado, incluyendo alcaldías, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, el INSS, la Dirección General de Ingresos (DGI), el Ministerio de Educación, y la Empresa *Nicaragüense* de Acueductos y Alcantarillados (ENCAL), entre otros.¹⁸³²

B. Responsabilidad del Estado

1215. El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que el Estado de Nicaragua ha violado sus obligaciones internacionales. Los actos y conductas de todos los poderes del Estado, así como de otras autoridades públicas, tanto a nivel nacional, regional o local, descritos en el presente informe, constituyen violaciones graves de estas obligaciones, y más específicamente, violaciones sistemáticas y flagrantes de la prohibición internacional de crímenes de lesa humanidad, como norma imperativa de derecho internacional general (*ius cogens*), y de la prohibición internacional de la tortura, la cual es de la misma naturaleza jurídica.¹⁸³³

1216. Asimismo, el GHREN ha concluido con motivos razonables para creer que, en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos y delitos, el sistema de justicia nicaragüense ha jugado un rol destacado en la represión del Estado contra las personas opositoras o percibidas como tales. Por consiguiente, el GHREN tiene motivos razonables para creer que el Estado de Nicaragua ha violado su obligación de garantizar recursos accesibles y eficaces a las víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos. El GHREN también tiene motivos razonables para creer que el Estado de Nicaragua ha incumplido su obligación de investigar las violaciones, abusos y crímenes cometidos y documentados en el presente informe, así como de sancionar a las y los responsables de estos.

1217. En consecuencia, el Estado de Nicaragua, ha realizado y sigue realizando graves violaciones de las prohibiciones internacionales de crímenes de lesa humanidad y de la tortura. Cualquier Estado tiene derecho a invocar la responsabilidad del Estado de Nicaragua por estas violaciones. Esto, a su vez, tiene como consecuencia que los Estados deben cooperar para poner fin, por medios lícitos, a las violaciones graves en este sentido, así como no reconocer como lícita una situación creada por tales violaciones, ni prestar ayuda o asistencia para mantener esa situación.¹⁸³⁴

1218. Lo anterior, por las siguientes razones:

- Las conductas de todos los poderes del Estado, así como de otras autoridades públicas, tanto a nivel nacional, regional o local, se consideran hechos atribuibles al Estado.¹⁸³⁵ El Estado también puede ser sujeto de responsabilidad internacional por la conducta ilícita de personas o grupos no estatales cuando estos actúan por instrucciones o bajo

¹⁸³¹ El GHREN recibió información específica sobre la participación del liderazgo del FSLN en Carazo, Matagalpa y Masaya.

¹⁸³² Entrevistas del GHREN DDI024, DDI017, DDI032, DDI034; fotografía en el archivo del GHREN CCDOC088.

¹⁸³³ *Furundžija*, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 153–154; Corte IDH, *Caso Goiburú y otros v. Paraguay*, Sentencia (Fondo, Reparaciones y Costas), 22 de septiembre de 2006, Serie C núm. 353, párr. 128; TEDH, *Al-Adsani v. the United Kingdom*, Application no. 35763/97, Judgment, 21 de noviembre de 2001, Grand Chamber, European Court of Human Rights, Reports of Judgments and Decisions 2001-XI, párr. 30.

¹⁸³⁴ Artículo 41(1) del proyecto de CDI, Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos; Conclusión 19(1) del proyecto de CDI, Proyecto de conclusiones sobre las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*), 73er período de sesiones (18 de abril a 3 de junio y 4 de julio a 5 de agosto de 2022), A/77/10, Suplemento núm. 10, párr. 43.

¹⁸³⁵ Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 31, La índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13 (2004), párr. 4. Véase el artículo 4 de la CDI, Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º período de sesiones (23 de abril a 1 de junio y 2 de julio a 10 de agosto de 2001), A/56/10, Suplemento núm. 10, párr. 77.

la dirección o control efectivo del Estado, o con el consentimiento o la aquiescencia del mismo.¹⁸³⁶

- Los Estados son los principales titulares de las obligaciones internacionales adquiridas en materia de derechos humanos. Por un lado, el Estado de Nicaragua, debe cumplir con las obligaciones internacionalmente adquiridas y del Derecho Internacional Consuetudinario, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos; por el otro, debe cumplir con las obligaciones correspondientes de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. En particular, el Estado de Nicaragua tiene la responsabilidad de prevenir,¹⁸³⁷ proteger su población contra crímenes de lesa humanidad,¹⁸³⁸ y no realizar crímenes de lesa humanidad.¹⁸³⁹
- Especialmente, las prohibiciones internacionales de crímenes de lesa humanidad y de la tortura son vigentes tanto en tiempos de paz como en un conflicto armado. En este contexto, el GHREN señala que las autoridades de Nicaragua, desde abril 2018, alegan haber sufrido un ataque armado por parte de opositores con el fin de derrocar el gobierno. Sin entrar en la validez y/o valoración de dicha aseveración, el GHREN señala que aún si se considerara la existencia de un conflicto armado, la prohibición internacional de crímenes de lesa humanidad y de la tortura habría permanecido como obligación internacional del Estado de Nicaragua.

1219. El GHREN señala que la misma Constitución Política de Nicaragua reconoce expresamente los derechos humanos correspondientes a sus obligaciones internacionales en la materia.¹⁸⁴⁰ Las actuaciones y declaraciones públicas y fundamentos vertidos por sus agentes en la argumentación del caso Nicaragua contra los Estados Unidos de América ante la CIJ y el fallo dictado, son prueba de la aceptación de parte de Nicaragua de las consideraciones elementales de humanidad, como parte de sus obligaciones internacionales como Estado, y de su naturaleza jurídica, así como de la responsabilidad que le genera al Estado la violación de estas obligaciones, incluyendo por grupos “paramilitares”.¹⁸⁴¹

1220 El Estado de Nicaragua también tiene la obligación de garantizar que las personas dispongan de recursos accesibles y efectivos cuando se produzcan violaciones y abusos de los derechos humanos, y de investigar y enjuiciar los mismos de forma exhaustiva.¹⁸⁴² Para que las investigaciones del Estado sean eficaces, deben realizarse con rapidez y a fondo por órganos y/o funcionarios o funcionarias imparciales e independientes, así como estar abiertas al escrutinio público.¹⁸⁴³ Como parte del deber de proporcionar recursos efectivos, el Estado de Nicaragua también está obligado a garantizar la reparación de los daños sufridos, defender el derecho inalienable de las víctimas a conocer la verdad

¹⁸³⁶ CDI, Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, artículos 5 y 8. Véase CIJ, *Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)*, Judgment, 26 de febrero de 2007, 43–240, pp. 205, 207–208, párrs. 392, 397, 399–401.

¹⁸³⁷ Véase artículo 4 y los comentarios con las referencias jurisprudenciales al proyecto de CDI, Proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de crímenes de lesa humanidad, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 71er período de sesiones (29 de abril a 7 de junio y 8 de julio a 9 de agosto de 2019), A/74/10, Suplemento núm. 10, párr. 45.

¹⁸³⁸ Consejo de Seguridad, Resolución 2250 (2015), S/RES/2250 (2015), párr. 8; Resolución 2171 (2014), S/RES/2171(2014), preámbulo párr. 7; Resolución 2117(2013), S/RES/2117(2013), preámbulo párr. 16.

¹⁸³⁹ Véase, *mutatis mutandis* con la obligación convencional de la prevención del genocidio, el razonamiento lógico en CIJ, *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro*, pp. 113–114, párr. 166–167.

¹⁸⁴⁰ Véase Constitución Política de Nicaragua, artículo 46.

¹⁸⁴¹ Véase CIJ, *Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, 26 de junio de 1986, ICJ Reports 1986, 14–150, pp. 62–63, párrs 109–111.

¹⁸⁴² Véase ICCPR, artículo 2; CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, párr. 15; UNGA, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, A/RES/60/147 (21 de marzo de 2006), párr. 9.

¹⁸⁴³ CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, párr. 15.

sobre las violaciones y abusos, y adoptar otras medidas necesarias para evitar que se repitan las violaciones y abusos.¹⁸⁴⁴

1221. La falta de investigación y de enjuiciamiento de los autores de graves violaciones y abusos de los derechos humanos puede en sí misma dar lugar a una violación separada de las obligaciones internacionales del Estado. En este sentido, Nicaragua tiene la obligación principal de garantizar la rendición de cuentas por los crímenes y las graves violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en su territorio y documentados por el GHREN en el presente informe, en particular, cuando suman crímenes de lesa humanidad.¹⁸⁴⁵

1222. Los actos posteriores registrados por el GHREN, y que son de notorio y público conocimiento, manifiestan la negativa del Estado de Nicaragua de cumplir con sus obligaciones de no dejar impunes las violaciones, abusos y crímenes documentados a lo largo del presente informe, entre otros, (i) la falta de cooperación de Nicaragua con mecanismos multilaterales universales y regionales de derechos humanos; (ii) el desacato judicial permanente en la que se encuentra Nicaragua ante la Corte IDH; (iii) la falta de investigación, enjuiciamiento, y condena de aquellos responsables por crímenes de lesa humanidad de persecución política y sus crímenes subyacentes; y (iv) la falta de garantías de no repetición de estos delitos internacionales.

C. Responsabilidad penal individual

1223. La responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua como resultado de los crímenes de lesa humanidad ocurridos, es sin perjuicio de la responsabilidad penal individual por estos crímenes. Las violaciones y los crímenes documentados en el presente informe dan lugar a responsabilidad penal individual, ya sea bajo el derecho internacional penal, o de conformidad con los tipos penales en la legislación nicaragüense. Se puede incurrir en responsabilidad penal individual a través de varios modos de participación, incluyendo la comisión, la planificación, la emisión de órdenes, la instigación, la complicidad y la responsabilidad del superior o del mando.

1224. El GHREN tiene motivos razonables para creer que funcionarios y autoridades de todos los poderes del Estado y a todos los niveles participaron en un patrón de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos de personas opositoras o percibidas como tales, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, actos de tortura, incluyendo actos de violencia sexual, otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho de todas las personas a permanecer en su propio país, entre otros. Estas violaciones se produjeron desde el 18 de abril y hasta la fecha de redacción del presente informe.

1225. Tal y como se ha establecido en el capítulo III.X de este informe, las violaciones y abusos documentados por el GHREN corresponden a conductas que pueden calificarse jurídicamente como crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluyendo violencia sexual, otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, deportación, y persecución por motivos políticos.

1226. El GHREN recuerda que sus conclusiones se basan en el estándar de prueba de “motivos razonables para creer”. En este sentido, a pesar de que el GHREN tiene el mandato de emprender investigaciones exhaustivas e independientes de todos los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos perpetrados en Nicaragua desde abril de 2018 y, de ser posible, de identificar a los responsables de estos, dicho mandato no es de carácter judicial. Cualquier determinación con respecto a la responsabilidad penal individual por las violaciones, abusos y crímenes documentados en el presente informe, debe ser realizada por

¹⁸⁴⁴ ICCPR, artículo 2.3. Véase UNGA, A/RES/60/147, párrs 15-23. Véase también ICRC, Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules (2005), regla 150; Consejo Económico y Social, E/CN.4/2005/102Add.1, principios 31-38.

¹⁸⁴⁵ Véase CPI, Sala de Apelaciones, *Prosecutor v. Germain Katanga*, causa núm. ICC-01/04-01/07 OA 8, Judgement, 25 de septiembre de 2009, párr. 85.

las autoridades competentes, sobre la base de procedimientos que aseguren el derecho a la defensa y todas las garantías del debido proceso.

1227. El GHREN tiene motivos razonables para creer que el Presidente Daniel Ortega, la Vicepresidenta Rosario Murillo, agentes, funcionarios y funcionarias de diversas agencias y estructuras de su Gobierno, y actores no estatales han realizado desde abril de 2018 y siguen realizando a la fecha de redacción de este informe, graves y sistemáticas violaciones y abusos de los derechos humanos, y crímenes de lesa humanidad.

1228. El GHREN no ha realizado determinaciones en cuanto a la responsabilidad penal individual -tanto en jurisdicciones internacionales como en la jurisdicción nacional- en que pueden incurrir funcionarias, funcionarios, exfuncionarias y exfuncionarios de las distintas agencias e instituciones del Estado mencionadas a lo largo de este Capítulo de su informe. Sin embargo, el GHREN ha registrado los nombres de varias personas que han sido identificadas por las víctimas y testigos como responsables directos de las violaciones, abusos y crímenes documentados. El Grupo también ha podido identificar a individuos cuyas contribuciones dentro del engranaje del Estado, podría generar su eventual responsabilidad penal individual tanto a nivel internacional como nacional.

1229. El GHREN ha almacenado en su base de datos la lista con el nombre de todas estas personas. Sin embargo, la eventual responsabilidad penal individual de estos individuos, por los crímenes cometidos a través de actos o de omisiones, debe ser realizada a través de las autoridades competentes y en una investigación adicional.

D. Acceso a la justicia en terceros países

1230. El acceso a la justicia por parte de las víctimas es un derecho indeclinable, obligatorio y hace parte de las garantías de derecho internacional. Ante la impunidad de los hechos en Nicaragua, y más allá de la jurisdicción de Estados vinculados por la nacionalidad de las víctimas, iniciativas de terceros países para promover el acceso a la justicia por parte de las víctimas y la rendición de cuentas por las violaciones, abusos y crímenes de derechos humanos en Nicaragua cobran especial relevancia. Como se ha señalado, los crímenes de lesa humanidad son delitos contra el orden internacional y facultan la intervención de Estados distintos al Estado en cuyo territorio se cometieron los crímenes, o cuyos ciudadanos hayan sido víctimas de los mismos, constituyendo una norma de jurisdicción que permite interferir en la soberanía del Estado de los hechos. No requiere el vínculo de ciudadanía.

1231. Nicaragua reconoce expresamente la gravedad de los delitos contra el orden internacional en su ordenamiento jurídico interno,¹⁸⁴⁶ y el principio de universalidad de su jurisdicción penal.¹⁸⁴⁷ El Gobierno de Nicaragua es plenamente consciente que está obligado a acatar dichas normas y garantizar la no impunidad de dichos delitos y la no repetición de los mismos, reconociendo en el mismo Código Penal la supremacía del derecho internacional respecto a la no aplicación de amnistía o indultos en materia de delitos contra el orden internacional.¹⁸⁴⁸

1232. El principio de universalidad considera, de forma general, y si bien con la necesidad de precisión y concreción en el caso concreto,¹⁸⁴⁹ como criterio de atribución de la

¹⁸⁴⁶ Código Penal, Título XXII, delitos contra el orden internacional, arts. 484–488.

¹⁸⁴⁷ Código Penal, art. 16 (d): “Las leyes penales nicaragüenses serán también aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido fuera del territorio nacional algunos de los siguientes delitos [...] (d) Delitos contra el orden internacional”.

¹⁸⁴⁸ Véase Código Penal, art. 130, Extinción. “La responsabilidad penal se extingue por: [...] c) El indulto, cuyo efecto se limita a la extinción total o parcial de la pena, será determinado en cada caso por la Asamblea Nacional. Se excluye de este beneficio a los sentenciados por delitos contra el orden internacional; d) La amnistía, la cual extingue por completo las penas principales y accesorias y todos sus efectos. Se excluye de este beneficio a los sentenciados por delitos contra el orden internacional [...]”

¹⁸⁴⁹ Christian Tomuschat, *Universal Criminal Jurisdiction in Troubled Waters*, en F. Jeßberger et al. (eds.), *Strafrecht und Systemunrecht, Festschrift für Gerhard Werle zum 70. Geburtstag*, Tübingen, Mohr Siebeck 2022, 511–522, p. 522. Para una visión general de las cuestiones controvertidas, véase “The

jurisdicción penal extraterritorial, la comisión de crímenes de lesa humanidad. No requiere para su ejercicio jurisdiccional un vínculo entre el crimen de lesa humanidad cometido y el Estado que ejerce la jurisdicción penal universal. El principio de universalidad fundamenta la jurisdicción nacional y la declara competente para conocer de crímenes, independientemente del lugar en que se hayan cometido y de la nacionalidad del posible responsable del crimen o de la víctima.¹⁸⁵⁰ En la práctica, especialmente desde los juicios de Núremberg después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados han invocado cada vez más el principio de la jurisdicción penal universal en su lucha contra la impunidad por crímenes internacionales atroces, lo que incluye crímenes de lesa humanidad.¹⁸⁵¹

1233. Aquellos Estados de la comunidad internacional que han reconocido este principio en su ordenamiento interno, y su aplicación para el ejercicio de su jurisdicción penal extraterritorial respecto a los crímenes de lesa humanidad, cuentan con la herramienta necesaria para no dejar impunes estos delitos atroces. El GHREN señala como un ejemplo del ejercicio del principio de jurisdicción penal universal, a la decisión tomada por las autoridades judiciales argentinas de considerar el ejercicio de su jurisdicción penal extraterritorial en base a este criterio universal reconocido en su ordenamiento interno respecto a los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua que investiga el GHREN.¹⁸⁵²

VI. Recomendaciones

1234. **El GHREN tiene motivos razonables para creer que el Presidente Daniel Ortega, la Vicepresidenta Rosario Murillo, agentes, funcionarios y funcionarias de diversas agencias, estructuras del Gobierno, y actores no estatales han realizado, y siguen realizando a la fecha de redacción de este informe, graves y sistemáticas violaciones y abusos de los derechos humanos en contra de un sector de la población nicaragüense, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos, o degradantes, privación arbitraria de la nacionalidad, y violaciones al derecho a permanecer en el propio país, así como al derecho a participar en los asuntos públicos y a las libertades de expresión, opinión, asociación, reunión, conciencia y religión.**

1235. **El GHREN concluyó que dichas violaciones y abusos, como actos prohibidos, constituyen un ataque sistemático y generalizado contra una población civil, a través de una política discriminatoria que comprende la comisión de violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional, y que, además de haber resultado en la destrucción del espacio cívico y democrático en Nicaragua, verificados en todos sus elementos, permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad.**

A. Recomendaciones a la República de Nicaragua:

1236. **El Grupo de Expertos exhorta a las autoridades de la República Nicaragua a:**

- a) **Liberar de manera inmediata a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad.**

scope and application of the principle of universal jurisdiction, Informal Working Paper prepared by the Chairperson for discussion in the Working Group” (4 de noviembre de 2016), disponible en: <https://www.un.org/en/ga/sixth/75/universal_jurisdiction/wg_uj_informal_wp.pdf>.

¹⁸⁵⁰ Véase Jan-Michael Simon, *Jurisdicción universal: La perspectiva del derecho internacional público*, Anuario de derecho constitucional latinoamericano, 2001, 283–318.

¹⁸⁵¹ Véase CDI, *La jurisdicción penal universal*, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 70o período de sesiones (30 de abril a 1 de junio y 2 de julio a 10 de agosto de 2018), A/73/10, Suplemento núm. 10, A/73/10, Anexo, párr. 3.

¹⁸⁵² La investigación de la causa tramita ante el Juez Federal Ariel Lijo (Juzgado Criminal y Correccional Federal Núm. 4, Secretaría Núm. 8 CFP 2981/2022) desde el 5 de octubre de 2022.

- b) Cesar de manera inmediata la persecución por razones fundadas en motivos políticos, incluyendo a través de la criminalización y detenciones arbitrarias, la privación arbitraria de nacionalidad y la deportación forzada.
- c) Empezar investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de las violaciones, abusos y crímenes documentados para que se responsabilice a las personas que participaron en su comisión, incluyendo las personas que ostentan un mayor nivel de responsabilidad
- d) Garantizar la reparación integral, la reparación y no repetición, y el derecho de las víctimas a conocer la verdad.
- e) Implementar medidas legislativas y de política pública para garantizar los principios democráticos y separación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial.
- f) Cooperar con la ACNUDH, los órganos de tratados, y cualquier otro ente establecido por el Consejo de Derechos Humanos.
- g) Implementar las recomendaciones de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, así como de los mecanismos de tratados, en particular del Comité de Derechos Humanos en CCPR/C/NIC/CO/4 (30 de noviembre de 2022) y del Comité contra la Tortura en CAT/C/NIC/CO/2 (7 de diciembre de 2022).

B. Recomendaciones a la comunidad internacional

1237. El Grupo de Expertos exhorta a la comunidad internacional a:

- a) Tomar medidas para proteger y garantizar los derechos de las personas en situación de apatridia como resultado de privaciones arbitrarias de la nacionalidad nicaragüense, así como de las personas que han tenido que abandonar Nicaragua debido a las violaciones descritas en el presente informe.
- b) Iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones, abusos y crímenes documentados, de conformidad con su legislación interna.
- c) Ampliar las sanciones a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes en el derecho internacional.
- d) En la negociación de proyectos de cooperación al desarrollo e inversión en Nicaragua, los Gobiernos y organismos multilaterales deberían incluir garantías de derechos humanos y priorizar las acciones orientadas a mejorar la situación en Nicaragua.

Anexos

Anexo 1: Línea legislativa en materia de seguridad y defensa

<i>Nombre</i>	<i>Instrumento legal</i>	<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>
Estatuto Fundamental de la República de Nicaragua	Ley del Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua ¹⁸⁵³	22 de agosto de 1979	Disuelve la Guardia Nacional, la Oficina de Seguridad Nacional y el Servicio de Inteligencia Militar. El Ejército Nacional estará conformado por los combatientes del FSLN y aquellos miembros de la Guardia Nacional que participaron en la lucha.
Creación del Ejército Popular Sandinista	Decreto Ejecutivo No. 53 ¹⁸⁵⁴	18 de septiembre de 1979	Crea el Ejército Popular Sandinista (EPS) como única fuerza armada de la República.
Nombramientos de Comandantes del Ejército Popular Sandinista	Decreto Ejecutivo No. 54 ¹⁸⁵⁵	18 de septiembre de 1979	Nombra a los principales comandantes del EPS e inicia un proceso de conformación de las estructuras militares en todo el país, integradas por las fuerzas guerrilleras.
Creación de las Milicias Populares Sandinistas	Decreto Ley No. 313 ¹⁸⁵⁶	21 de febrero de 1980	Crea las Milicias Populares Sandinistas como una organización nacional de participación voluntaria, bajo la dirección del Ministerio de Defensa.
Ley Creadora de los Grados de Honor, Cargo y Grados Militares	Decreto Ley No. 429 ¹⁸⁵⁷	7 de junio de 1980	Crea los Grados de Honor, Cargos y Grados Militares.
Ley de Movilización de las Milicias Populares Sandinistas	Decreto Ley No. 555 ¹⁸⁵⁸	22 de octubre de 1980	Establece las condiciones para la movilización de las Milicias Populares Sandinistas.
Ley de Funciones Jurisdiccionales de la Policía Sandinista	Decreto Ley No. 599 ¹⁸⁵⁹	3 de noviembre de 1980	Crea la Policía Sandinista como cuerpo militar dependiente del Ministerio del Interior.
Ley de Organización de la Auditoría Militar y Procedimiento Penal Militar	Decreto Ley No. 591 ¹⁸⁶⁰	18 de diciembre de 1980	Crea la Auditoría Militar como el órgano a cargo de la justicia militar y desarrolla el procedimiento penal militar.
Ley Provisional de los Delitos Militares	Decreto Ley No. 600 ¹⁸⁶¹	23 de diciembre de 1980	Establece los delitos y principios de la responsabilidad penal militar.
Ley sobre el Mantenimiento del Orden y Seguridad Pública	Ley No. 1074 ¹⁸⁶²	17 de julio de 1982	Reforma y reordena el Decreto No. 5 del 20 de julio de 1979 “Ley sobre el Mantenimiento del Orden y la Seguridad Pública”, el cual tipifica los delitos contra la seguridad pública y las penas correspondientes.

¹⁸⁵³ Estatuto Fundamental de 1979. La Gaceta, Diario Oficial N° 1 del 22 de agosto de 1979.

¹⁸⁵⁴ Decreto Ejecutivo No. 53 de 1979. La Gaceta, Diario Oficial N° 12 del 18 de septiembre de 1979.

¹⁸⁵⁵ Decreto Ejecutivo No. 54 de 1979. La Gaceta, Diario Oficial N° 12 del 18 de septiembre de 1979

¹⁸⁵⁶ Decreto No. 313 de 1980. La Gaceta, Diario Oficial N° 44 del 21 de febrero de 1980.

¹⁸⁵⁷ Decreto Ley No. 429 de 1980. La Gaceta, Diario Oficial N° 128 del 7 de junio de 1980.

¹⁸⁵⁸ Decreto Ley No. 555 de 1980. La Gaceta, Diario Oficial N° 243 del 22 de octubre de 1980.

¹⁸⁵⁹ Decreto Ley No. 599 de 1980. La Gaceta Diario Oficial N° 253 de 3 de noviembre de 1980.

¹⁸⁶⁰ Decreto Ley No. 591 de 1980. La Gaceta, Diario Oficial N° 292 del 18 de diciembre de 1980

¹⁸⁶¹ Decreto Ley No. 600 de 1980. La Gaceta, Diario Oficial N° 296 del 23 de diciembre de 1980.

¹⁸⁶² Decreto Ley No. 1074 de 1982. La Gaceta, Diario Oficial N° 167 de 17 de julio de 1982.

<i>Nombre</i>	<i>Instrumento legal</i>	<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>
Ley del Servicio Militar Patriótico	Ley No. 1327 ¹⁸⁶³	6 de octubre de 1983	Regula el ejercicio del deber patriótico de todos los ciudadanos nicaragüenses de prestar Servicio Militar.
Ley de Reforma a la Ley Creadora de los Grados de Honor, Cargos y Grados Militares	Ley No. 19 ¹⁸⁶⁴	23 de julio de 1986	Reforma los Arts. 3 y 4 de la Ley Creadora de los Grados de Honor, Cargos y Grados Militares y establece los grados militares de acuerdo con la estructura y desarrollo propio del EPS y del Ministerio del Interior.
Reglamento a la Ley Creadora de los Grados de Honor, Cargos y Grados Militares	Decreto Ejecutivo No. 214 ¹⁸⁶⁵	8 de septiembre de 1986	Reglamenta las condiciones para la concesión de grados militares a los miembros del EPS y del Ministerio del Interior; reglamenta también las categorías de oficiales, uso de grados militares y órganos facultados para otorgarlos.
Título V de la Constitución – la Defensa Nacional	Constitución Política ¹⁸⁶⁶	2 de enero de 1987	Establece que el EPS “es el brazo armado del pueblo y heredero directo del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional”, sin hacer mención explícita a la Policía.
Ley de Funciones de la Policía Sandinista	Ley No. 65 ¹⁸⁶⁷	26 de diciembre de 1989	Establece las funciones de la Policía Sandinista, como órgano del Ministerio del Interior.
Reforma a la Ley Creadora de los Grados de Honor, Cargo y Grados Militares	Ley No. 74 ¹⁸⁶⁸	22 de febrero de 1990	Reforma el Artículo 4 del Decreto No. 429 facultando al Consejo Militar el otorgamiento de Grados de oficiales superiores. Determina que el Comandante en Jefe del EPS está facultado para dictar las directivas, órdenes y demás disposiciones necesarias para regular el otorgamiento de los demás grados militares.
Ley de Organización Militar del Ejército Popular Sandinista	Ley No. 75 ¹⁸⁶⁹	23 de febrero de 1990	Establece las funciones y la estructura de la institución militar, así como las disposiciones relacionadas con el ejercicio de la defensa nacional.

¹⁸⁶³ Decreto Ley N°. 1327 de 1983. Disponible en:

[http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/\(\\$All\)/4316A8EDC3B3CC37062570D50076E915?OpenDocument](http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/4316A8EDC3B3CC37062570D50076E915?OpenDocument)

¹⁸⁶⁴ Ley No. 19 de 1986. Disponible en:

<http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92aaca87dac762406257265005d21f7/3d2a6ca702b0d0bf062570a1005781e9?OpenDocument>

¹⁸⁶⁵ Decreto Ejecutivo No. 214 de 1986. Disponible en:

<http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/fb58ab753ee0cb613062570a10057a645?OpenDocument>

¹⁸⁶⁶ Constitución Política de la República de Nicaragua de 1987. Disponible en:

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=2966

¹⁸⁶⁷ Ley No. 65 de 1989. Disponible en:

<http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/0/752DBF59A1F72D9D062570A10058331F?OpenDocument>

¹⁸⁶⁸ Ley No. 74 de 1990. Disponible en:

<http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/d0c69e2c91d9955906256a400077164a/9f6272abd5a15792062570a100577c9d?OpenDocument>

¹⁸⁶⁹ Ley No. 75 de 1989. Disponible en:

<http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/3133c0d121ea3897062568a1005e0f89/1fabe626463b2a62062570a100577d2e?OpenDocument>

<i>Nombre</i>	<i>Instrumento legal</i>	<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>
Reforma al Reglamento a la Ley Creadora de los Grados de Honor, Cargo y Grados Militares	Decreto Ejecutivo No. 491 ¹⁸⁷⁰	27 de febrero de 1990	Confiere al Consejo Militar y al Comandante del Ejército Popular Sandinista, la facultad para otorgar y/o privar de los ascensos a los oficiales superiores para los Primeros Oficiales, Oficiales Subalternos y Clases respectivamente y para que presten servicio en los Ministerios o Entes del Estado, conservando su Grado y condición de Militar en Servicio Activo.
Acuerdos de Toncontín		23 de marzo de 1990	Acuerdo suscrito en Honduras entre el Gobierno de Nicaragua y Representantes de la Resistencia Nicaragüense (RN).
Acuerdo de Transición	Protocolo para la Transferencia del Mando Presidencial del Gobierno de la República de Nicaragua	27 de marzo de 1990	Protocolo de Transición entre los gobiernos saliente y entrante, para promover la despartidización de la Policía y su profesionalización.
Acuerdo de Managua		18 de abril de 1990	Sobre el proceso de desmovilización de la Resistencia Nicaragüense.
Creación y organización del Instituto de Previsión Social del EPS	Decreto No. 521 ¹⁸⁷¹	23 de abril de 1990	Crea el Instituto de Previsión Social del Ejército Popular Sandinista.
Plan de Lucha contra la Delincuencia	Plan ¹⁸⁷²	1990-1991	Plan para controlar las acciones de los miembros de la Resistencia Nicaragüense en zonas rurales.
Reforma a la Ley Creadora de los Grados de Honor, Cargos y Grados Militares	Decreto Ley No. 1-91 ¹⁸⁷³	8 de febrero de 1991	Faculta al Presidente, en su carácter de Jefe Supremo del Ejército a otorgar los Grados Militares de General del Ejército, Teniente General, Mayor General y General de Brigada, a propuesta del Consejo Militar.
Reforma a la Ley de Organización Militar del Ejército Popular Sandinista	Decreto Ley No. 2-91 ¹⁸⁷⁴	8 de febrero de 1991	Determina que el EPS es el único cuerpo militar armado reconocido legalmente en el territorio nicaragüense y está subordinado a la Constitución Política, bajo la autoridad del Presidente de la República. Remueve la posibilidad de que sus miembros en servicio activo puedan desempeñar cargos directivos en ningún partido político o ejercer cargos públicos de carácter civil.

¹⁸⁷⁰ Decreto Ejecutivo No. 491 de 1990. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/3133c0d121ea3897062568a1005e0f89/8600760b498a8c6b062570a10057b6ab?OpenDocument>.

¹⁸⁷¹ Decreto No. 521 de 1990. Disponible en: [http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/\(\\$All\)/7B526B31427542B1062570A10057B60C?OpenDocument](http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/7B526B31427542B1062570A10057B60C?OpenDocument).

¹⁸⁷² Ejército de Nicaragua 30 años de vida institucional: (1979-2009), p. 80. Disponible en: <https://www.ejercito.mil.ni/contenido/relaciones-publicas/publicaciones/docs/memoria-1979-2009.pdf>.

¹⁸⁷³ Decreto Ley No. 1 de 1991. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/d0c69e2c91d9955906256a400077164a/f5ade05ce8900575062570a100578486>.

¹⁸⁷⁴ Decreto Ley No. 2 de 1991. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/d0c69e2c91d9955906256a400077164a/68f848d4d3278dcb062570a100578491?OpenDocument>.

<i>Nombre</i>	<i>Instrumento legal</i>	<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>
Ley de Funciones de la Policía Nacional en Materia de Auxilio Judicial	Ley No. 144 ¹⁸⁷⁵	25 de marzo de 1992	Establece que, en la investigación del delito, la Policía Nacional ejecutará las órdenes e instrucciones que reciba de las autoridades judiciales.
Ley Orgánica de la Policía	Decreto Ejecutivo No. 45 ¹⁸⁷⁶	7 de septiembre de 1992	Define el mando de la Jefatura Suprema de la Policía, que corresponde al Presidente a través del Ministro o Viceministro de Gobernación.
Código de Organización Jurisdiccional y Previsión Social Militar	Ley No. 181 ¹⁸⁷⁷	2 de septiembre de 1994	Establece que el Ejército es el único cuerpo militar armado reconocido legalmente en el territorio nicaragüense.
Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua	Ley No. 192 ¹⁸⁷⁸	4 de julio de 1995	Reforma los artículos del 92-97 de la Constitución en cuanto a la definición, responsabilidades y mando del Ejército y de la Policía Nacional.
Reglamento Estatutario del Instituto de Previsión Social Militar	Decreto Ejecutivo No. 55 ¹⁸⁷⁹	11 de diciembre de 1995	Establece que el Sistema de Previsión Social Militar comprende la seguridad social y el mejoramiento económico de los oficiales, clases y soldados del Ejército, y de sus familiares.
Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica	Tratado ¹⁸⁸⁰	15 de diciembre de 1995	Acuerdo firmado entre los Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá con el fin de promover un nuevo modelo de seguridad regional.
Ley de la Policía Nacional	Ley No. 228 ¹⁸⁸¹	28 de agosto de 1996	Regula la visión, misión, y funciones de la Policía Nacional, crea la Jefatura Nacional y disminuye el número de efectivos.
Reglamento de la Ley de la Policía Nacional	Decreto No. 26 ¹⁸⁸²	6 de octubre de 1996	Aprueba el Reglamento de la Policía Nacional.

¹⁸⁷⁵ Ley No. 144 de 1992. Disponible en: [http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/\(\\$All\)/EBF8669C11B7A154062570A100577C13?OpenDocument](http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/EBF8669C11B7A154062570A100577C13?OpenDocument).

¹⁸⁷⁶ Ley No. 45 de 1992. Disponible en: <https://legislacion.asamblea.gob.ni/indice.nsf/c3639d8c1d72577006256fe800533609/70d06356a765458d06257045006233bd?OpenDocument>.

¹⁸⁷⁷ Ley No. 181 de 1994. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92aaca87dac762406257265005d21f7/7ef0d84d63d78f5c0625803d005874de?OpenDocument>.

¹⁸⁷⁸ Ley No. 192 de 1995. Disponible en: [http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/\(\\$All\)/927804DC295D0AE5062573080056DA6D?OpenDocument](http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/927804DC295D0AE5062573080056DA6D?OpenDocument).

¹⁸⁷⁹ Decreto Ejecutivo No. 55 de 1995. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92aaca87dac762406257265005d21f7/84ab55d284d8dbc80625718c004c0421?OpenDocument>.

¹⁸⁸⁰ https://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDHSeguridad/12_2010/4b294167-d00a-4804-8336-0a6739d1e0a6.pdf.

¹⁸⁸¹ Ley No. 228 de 1996. Disponible en: <https://policehumanrightsresources.org/content/uploads/2016/10/Ley-de-la-Policia-Nacional-Nicaragua.pdf?x19059>.

¹⁸⁸² Decreto No. 26 de 1996. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/7601426cd51db3df0625755f007c70be?OpenDocument>.

<i>Nombre</i>	<i>Instrumento legal</i>	<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>
Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo	Ley No. 290 ¹⁸⁸³	3 de junio de 1998	Regula las relaciones de los cuerpos armados y las instituciones civiles de la administración.
Reformas al Reglamento Estatutario del Instituto de Previsión Social Militar	Decreto Ejecutivo No. 21 ¹⁸⁸⁴	3 de abril de 1998	Establece las autoridades militares que conforman la Junta Directiva del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) y el mecanismo para llenar eventuales vacantes de sus miembros
Normativa interna militar	Norma Técnica ¹⁸⁸⁵	15 de diciembre de 2009	Actualiza el Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar (Código Militar). Actualiza los niveles de mando del Ejército (Jefatura Suprema, Alto Mando, Mando Superior, Mando de Unidades y Otros Órganos) a fin de asegurar el cumplimiento de las misiones constitucionales del Ejército.
Política Integral Policía-Comunidad y Derechos Humanos	Política ¹⁸⁸⁶	febrero de 2002	Establece lineamientos para el fortalecimiento de la relación de la Policía Nacional con las comunidades
Creación de la Comisión Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana	Decreto No. 83 ¹⁸⁸⁷	3 de agosto de 2004	Crea la Comisión Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Reformas e Incorporaciones al Reglamento de la Ley No. 290 Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo	Decreto No. 84 ¹⁸⁸⁸	3 de agosto de 2004	Incorpora regulaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, tendientes a mejorar la Administración Pública y su funcionamiento por Direcciones (Superior, Generales y Específicas).
Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales	Ley No. 510 ¹⁸⁸⁹	25 de febrero del 2005	Regula la compra, venta y destrucción de armas propiedad del Ejército Nacional, la Policía Nacional y el Sistema Penitenciario.

¹⁸⁸³ Ley No. 290 de 1998. Disponible en: http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic5_nic_resp_ane_2.pdf.

¹⁸⁸⁴ Decreto Ejecutivo No. 21 de 1998. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/Indice.nsf/353128c118c7a240062576dc00538447/7264ad45c2afac040625702300574f36?OpenDocument>.

¹⁸⁸⁵ Normativa interna militar, aprobada el 15 de diciembre de 2009. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92aeea87dac762406257265005d21f7/543080c6a0c5d0e306257a4f005eb137?OpenDocument>.

¹⁸⁸⁶ Política Integral Policía-Comunidad y Derechos Humanos, febrero de 2002. Disponible en: www.policia.gob.ni/cedoc/sector/prewenc/PolitIntegral_PolComun.pdf.

¹⁸⁸⁷ Decreto No. 83 de 2004. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92aeea87dac762406257265005d21f7/c90d3d8ec03524ab062573d700651360?OpenDocument>.

¹⁸⁸⁸ Decreto No. 84 de 2004. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/d0c69e2c91d9955906256a400077164a/10f90d952b9b122e062570a40076254c?OpenDocument>.

¹⁸⁸⁹ Ley No. 510 de 2005. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/4c9d05860ddef1c50625725e0051e506/6947580f016026cd062570a60064a6d4?OpenDocument>.

<i>Nombre</i>	<i>Instrumento legal</i>	<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>
Relacionados y sus Reformas.			
Ley Orgánica de Tribunales Militares	Ley No. 523 ¹⁸⁹⁰	5 de abril de 2005	Establece la organización y las competencias de los tribunales militares.
Política de Defensa	Ministerio de Defensa, Ejército de Nicaragua ¹⁸⁹¹	1 de mayo de 2005	Primer Libro de la Defensa Nacional de Nicaragua, que presenta la política y la estrategia del Estado de Nicaragua incluyendo los lineamientos generales de la defensa nacional, escenarios, economía y fuerzas de defensa.
Ley de Adición a la Ley No. 523 “Ley Orgánica de Tribunales Militares”	Ley No. 567 ¹⁸⁹²	19 de diciembre de 2005	Establece la administración y ejercicio de la potestad jurisdiccional de los tribunales militares.
Código Penal Militar	Ley No. 566 ¹⁸⁹³	5 de enero de 2006	Regula principios legales aplicables (incluyendo el principio de universalidad) y legisla sobre jurisdicción penal militar, delitos, faltas militares y responsabilidad Penal
Reformas y adiciones al Decreto No. 71 de 1998.	Decreto Ejecutivo No. 25 ¹⁸⁹⁴	12 de mayo de 2006	Crea la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana bajo la dependencia del Ministerio de Gobernación.
Reglamento Especial de Jubilación por Años de Servicio de la Policía Nacional	Decreto Ejecutivo No. 47 ¹⁸⁹⁵	16 de agosto del 2006	Establece las normas reglamentarias de carácter especial del “Programa de Jubilación de la Policía Nacional por Años de Servicio” y garantiza los derechos de los sujetos al programa.
Reforma al Decreto 26-96, Reglamento de la Ley 228, Ley de la Policía Nacional	Decreto No. 65 ¹⁸⁹⁶	6 de octubre del 2006	Amplía los beneficios de los policías retirados.

¹⁸⁹⁰ Ley No. 523 de 2005. Disponible en:

https://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/spenal/pdf/2005_ley02.pdf.

¹⁸⁹¹ Ministerio de Defensa, “Nicaragua. Libro de la Defensa Nacional”, 1 de mayo de 2005, Ira. ed. - Managua: Impresión Comercial La Prensa, ISBN: 99924-902-0-9. Disponible en:

<https://www.resdal.org/Archivo/nica-libro-blanco.html>.

¹⁸⁹² Ley No. 567 de 2005. Disponible en:

<http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/bbe90a5bb646d50906257265005d21f8/5960fbdc85cd91a062570f8006f8353?OpenDocument>.

¹⁸⁹³ Ley No. 566 de 2005. Disponible en:

[http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/\(\\$All\)/9DDA1F7C3867326B0625754C00741374?OpenDocument](http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/9DDA1F7C3867326B0625754C00741374?OpenDocument)

¹⁸⁹⁴ Decreto Ejecutivo No. 25 de 2006. Disponible en:

<http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/54b86d7cf4a7b77d0625755f007a11a8?OpenDocument>.

¹⁸⁹⁵ Decreto Ejecutivo. No. 47 de 2006. Disponible en:

<http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92a87dac762406257265005d21f7/8b8a503ebcf9cbd10625755f007bf4f2?OpenDocument>.

¹⁸⁹⁶ Decreto No. 65 de 2006. Disponible en:

<http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92a87dac762406257265005d21f7/7601426cd51db3df0625755f007c70be?OpenDocument>.

<i>Nombre</i>	<i>Instrumento legal</i>	<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>
Ley de Reforma a la Ley No. 228, Ley de la Policía Nacional	Ley No. 589 ¹⁸⁹⁷	15 de noviembre de 2006	Establece el Programa de Afiliación Voluntaria (PAV), para conservar y mejorar los derechos de la Seguridad Social y las futuras pensiones de las personas que hayan servido en el Ministerio de Gobernación o de cualquiera de sus órganos.
Ley de Reforma y Adición a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo	Ley No. 612 ¹⁸⁹⁸	29 de enero de 2007	Modifica la organización interna del Poder Ejecutivo, determinando que este lo ejerce el Presidente, quien es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe Supremo del Ejército. Crea, Secretarías, Ministerios, entes descentralizados y determina sus competencias. Establece además, que la Policía Nacional está sometida a la autoridad civil ejercida por el Presidente a través del Ministerio de Gobernación, conforme lo establecido por la Constitución y la ley de la materia
Créase la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana bajo la Dependencia de la Policía Nacional	Decreto Ejecutivo No. 15 ¹⁸⁹⁹	5 de febrero del 2007	Establece que la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que antes dependía del Ministerio de Gobernación, ahora quedará bajo la dependencia de la Policía Nacional
Código de Procedimiento Penal Militar de la República de Nicaragua	Ley No. 617 ¹⁹⁰⁰	29 de agosto de 2007	Establece la competencia de los tribunales militares y su procedimiento que debe ajustarse conforme a los derechos y garantías consagrados en la Constitución, en el propio Código y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua.
Reforma a la Comisión Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana	Decreto Ejecutivo No. 110 ¹⁹⁰¹	23 de noviembre del 2007	Actualiza el funcionamiento de la Comisión Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, determina su misión y modifica su nombre y lo denomina “Consejo”, reflejando las distintas autoridades, instituciones y organizaciones que lo integran, incluyendo el Presidente de la República y diversos órganos, Ministerios y entidades descentralizadas del Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República, representantes de la Iglesia y de la Sociedad Civil. El Consejo promueve la participación de la

¹⁸⁹⁷ Ley No. 589 de 2006. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/SILEG/Gacetas.nsf/5eea6480fc3d3d90062576e300504635/197026bdd3bd254306257d7200516899?OpenDocument>.

¹⁸⁹⁸ Ley No. 612 de 2007. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/SILEG/Gacetas.nsf/5eea6480fc3d3d90062576e300504635/608c442ccfac598d06257d6d006d6beb?OpenDocument>.

¹⁸⁹⁹ Decreto Ejecutivo No. 15 de 2007. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92aeea87dac762406257265005d21f7/94dcb072e67ed0b1062572a0006ec107?OpenDocument>.

¹⁹⁰⁰ Ley No. 617 de 2007. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/079be1fbf0d5f50a0625803d0056818d?OpenDocument>.

¹⁹⁰¹ Decreto Ejecutivo No. 110 de 2007. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92aeea87dac762406257265005d21f7/c90d3d8ec03524ab062573d700651360?OpenDocument>.

<i>Nombre</i>	<i>Instrumento legal</i>	<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>
			ciudadanía en los Comités de Prevención Social del Delito que organiza la Policía.
Decreto que Regula los Procedimientos de Jubilación Ordinaria y Pensionamiento para los Miembros de la Policía Nacional.	Decreto Ejecutivo No. 94 ¹⁹⁰²	30 de diciembre del 2009	Regula los Procedimientos para hacer efectivos los derechos y ejercicio a una Jubilación Ordinaria y Pensiones para los Miembros de la Policía Nacional.
Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.	Ley No. 735 ¹⁹⁰³	20 de octubre de 2010	Coordina las políticas, planes y acciones de lucha en contra de estas actividades ilícitas por medio de los órganos encargados de preservar el orden interno, la seguridad ciudadana y la soberanía nacional.
Ley de Seguridad Democrática de la República de Nicaragua	Ley No. 750 ¹⁹⁰⁴	23 de diciembre del 2010	Tiene como objeto preservar y mantener la Seguridad Nacional, frente a cualquier riesgo, amenaza o conflicto armado internacional, regulando la actividad del Estado, la sociedad, las instituciones y autoridades encargadas; estableciéndoles sus ámbitos, principios, fines, organización, competencias, mecanismos de dirección, control y coordinación respetando los Derechos Humanos y las normas de Derecho Internacional Humanitario. Las disposiciones de esta Ley son parte integrante de la Política de Seguridad y Defensa Nacional
Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional	Decreto No. 51 ¹⁹⁰⁵	21 de diciembre del 2012	Es el instrumento con que la Policía Nacional, garantiza el orden jerárquico, el cumplimiento de las leyes y disciplina de sus miembros
Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua	Ley No. 854 ¹⁹⁰⁶	10 de febrero de 2014	El título V de la Constitución Política pasó a llamarse “ <i>Defensa y seguridad nacional. Seguridad ciudadana</i> ” y reforma los artículos 92, 93, 95 y 97 en relación con el Ejército y la Policía de Nicaragua.

¹⁹⁰² Decreto Ejecutivo No. 94 de 2009. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/dd083c05cf2ba97b062576c60053238f?OpenDocument>.

¹⁹⁰³ Ley No. 735 de 2010. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/7350ba83a74d6b10062577f400790cdf?OpenDocument>.

¹⁹⁰⁴ Ley No. 750 de 2010. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/Indice.nsf/353128c118c7a240062576dc00538447/37178bb4beaea40f06257822005fe655?OpenDocument>.

¹⁹⁰⁵ Decreto Ejecutivo No. 51 de 2012. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92a87dac762406257265005d21f7/aa3b3a683bef05c306257afc006f8e32?OpenDocument>.

¹⁹⁰⁶ Ley No. 854 de 2014. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92a87dac762406257265005d21f7/a0c959ffe15fdf4906257c7e0059f947?OpenDocument>.

<i>Nombre</i>	<i>Instrumento legal</i>	<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>
Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional	Ley No. 872 ¹⁹⁰⁷	7 de julio de 2014	Subordina la Policía Nacional al control directo de la Presidencia. Otorga la potestad al Presidente de retirar o mantener en el cargo al Primer Comisionado y convocar a oficiales en retiro a reincorporarse y aumenta el tiempo de servicio policial hasta 40 años.
Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 181, “Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar”	Ley No. 855 ¹⁹⁰⁸	11 de febrero de 2014	Determina que el Ejército es el único cuerpo militar armado de Nicaragua. Es indivisible y tiene carácter nacional, patriótico, partidista, apolítico, profesional, obediente y no deliberante. El Ejército ejerce su misión en estricto apego a la Constitución y a las leyes, incluyendo a los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y otros instrumentos de Derecho Internacional Público ratificados y aprobados por Nicaragua.
Ley de Reforma a la Ley No. 290 “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”	Ley No. 864 ¹⁹⁰⁹	15 de mayo de 2014	Retira al Ministerio de Gobernación de la cadena de mando y coordinación de la Policía. Al Ministerio de Defensa le corresponde dirigir la elaboración de políticas y estrategias para la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial”.
Ley de Seguridad Soberana	Ley No. 919 ¹⁹¹⁰	18 de diciembre de 2015	El objeto de la ley es preservar y mantener la Seguridad Nacional y asegurar la plena vigencia y respeto de los derechos, garantías y libertades fundamentales de los nicaragüenses, frente a los riesgos y amenazas, internacionales e internas a la seguridad humana, democrática, estado de derecho, y/o de crimen organizado y narcotráfico o conflicto armado internacional. Establece que la Asamblea Nacional integrará una Comisión Especial de Seguridad Democrática Nacional.
Ley de la Defensa Nacional de la República de Nicaragua	Ley No. 748 ¹⁹¹¹	1 de junio de 2020	Determina que la Defensa Nacional se prepara y realiza bajo la dirección del Presidente como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe Supremo del Ejército. El Presidente tiene la facultad en Consejo de Ministros de decretar el estado de emergencia o de alerta, conforme a lo establecido en la Constitución, en la Ley de Emergencia de

¹⁹⁰⁷ Ley No. 872 de 2014. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92aaca87dac762406257265005d21f7/0f03308df36e772206257d0800829eb4?OpenDocument>.

¹⁹⁰⁸ Ley No. 855 de 2014. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92aaca87dac762406257265005d21f7/a89bab2de4154e4306257c83007ba9e7?OpenDocument>.

¹⁹⁰⁹ Ley No. 864 de 2014. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/SILEG/Gacetan.nsf/5eea6480fc3d3d90062576e300504635/f3ae2eb377e0b12e06257cdf005d9e9a?OpenDocument>.

¹⁹¹⁰ Ley No. 919 de 2015. <http://legislacion.asamblea.gob.ni/Indice.nsf/353128c118c7a240062576dc00538447/37178bb4beaea40f06257822005fe655?OpenDocument>.

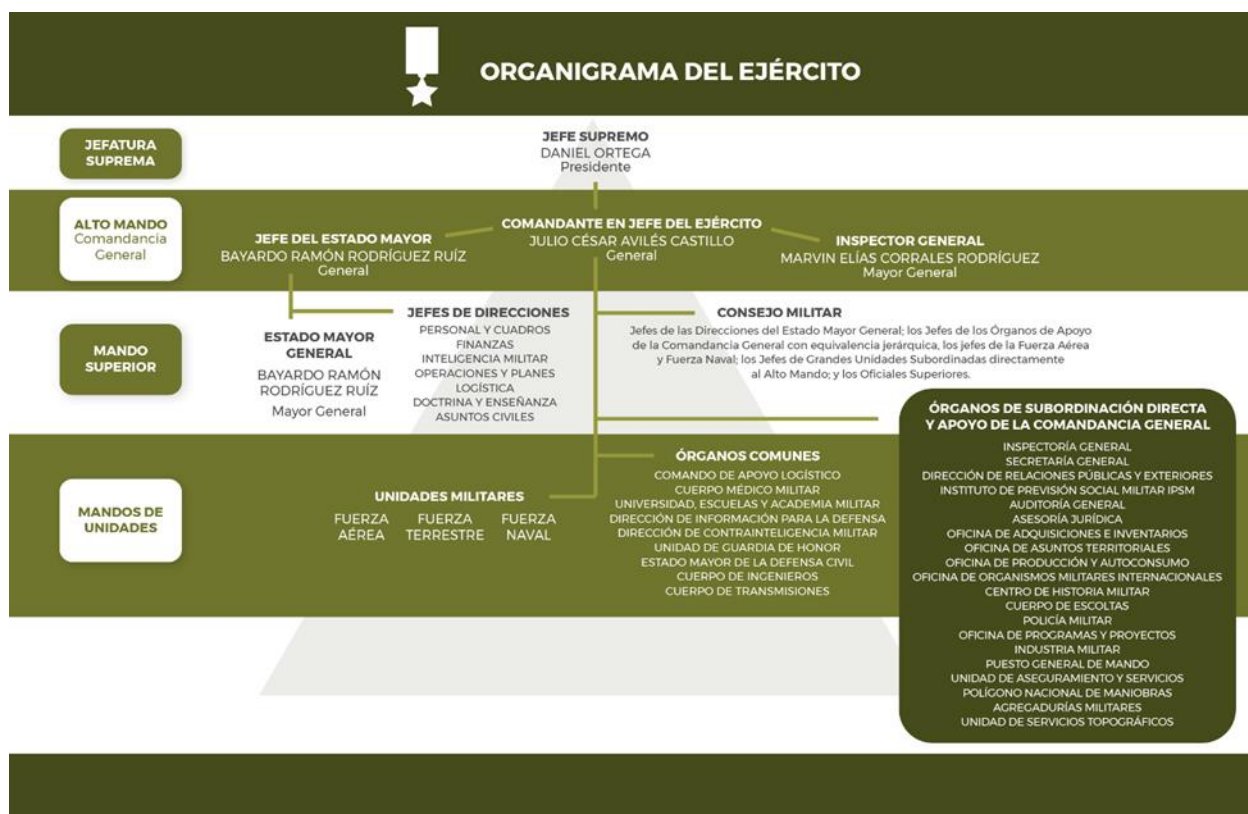
¹⁹¹¹ Ley No. 748 de 2019. Disponible en: [http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/\(\\$All\)/935DB7C5198A2B3F0625860F00798AE7?OpenDocument](http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/935DB7C5198A2B3F0625860F00798AE7?OpenDocument)

<i>Nombre</i>	<i>Instrumento legal</i>	<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>
			1988 y en la Ley de Desastres Naturales y Antropogénicos.
Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia Seguridad y Defensa Nacional	Ley No. 1009 ¹⁹¹²	1 de junio de 2020	Consolida las legislaciones vigentes en materia de seguridad y defensa nacional.
Reglamento Estatutario del Instituto de Previsión Social Militar	Decreto Presidencial No. 12 ¹⁹¹³	2 de junio de 2020	El Instituto tiene a su cargo la ejecución y administración de la Previsión Social Militar del Estado.

¹⁹¹² Ley No. 1009 de 2019. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/86d7ccc4703088e6062585b6005c1c8c?OpenDocument>.

¹⁹¹³ Decreto Presidencial No. 12 de 2020. Disponible en: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92aaca87dac762406257265005d21f7/3fe66aed663d7ebb0625857c0079d886?OpenDocument>.

Anexo 2: Organigrama del Ejército de Nicaragua



Anexo 3: Organigrama de la Policía Nacional de Nicaragua

